



TESIS DOCTORAL

La designación de los magistrados del Tribunal Constitucional en España. Una perspectiva orgánica y empírica

Autor:

José Antonio Estrada Marún

Directora:

Dra. D^a. Ascensión Elvira Perales

Co-Director:

Dr. D. Gianluca Famiglietti

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO

Getafe, mayo de 2014

TESIS DOCTORAL

La designación de los magistrados del Tribunal Constitucional en España. Una perspectiva orgánica y empírica

Autor: José Antonio Estrada Marún

Directora: Ascensión Elvira Perales

Co-director: Gianluca Famglietti

Firma del Tribunal Calificador:

Firma

Presidente: (Nombre y apellidos)

Vocal: (Nombre y apellidos)

Secretario: (Nombre y apellidos)

Calificación:

Getafe, de de

ÍNDICE

ABREVIATURAS	11
INTRODUCCIÓN.....	13
a) Relevancia del tema.....	13
b) Objeto y delimitación del trabajo	15
c) Contenido, metodología y finalidades	17
INTRODUZIONE	23
a) Rilevanza del tema.....	23
b) Oggetto e scopo del lavoro	24
c) Contenuti, metodologia e obiettivi	26
CAPÍTULO I	31
HACIA UNA CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE DESIGNACIÓN DE LOS JUECES CONSTITUCIONALES	31
1.1.- Clasificaciones formuladas por la doctrina	31
1.2.- Clasificación de los modelos desde la forma de articulación del acto selectivo	35
1.2.1.- Modelos de acto compuesto	36
1.2.1.1.- Propuesta del ejecutivo y designación o consentimiento del legislativo.....	39
a) Presidente de la República y Cámara alta.....	40
b) Presidente de la República y Cámara baja.....	46
c) Presidente de la República y Asamblea unicameral.....	48
1.2.1.2.- Propuesta del judicial y designación por el legislativo	51
1.2.1.3.- Propuesta de una corporación y designación por el legislativo	53
1.2.1.4.- Propuesta de varios órganos y designación por el legislativo	57
1.2.1.5.- Propuesta del legislativo y designación por el ejecutivo	59
1.2.1.6.- Otros modelos	61
a) Preselección parlamentaria y designación por el cuerpo electoral: el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia	61
b) Propuesta y designación “a tres bandas”: la Corte Constitucional de Serbia	64
1.2.2.- Modelos de designación directa	67
1.2.2.1.- Parlamentario	69
1.2.2.2.- Parlamentario y designación por el Tribunal Constitucional	72
1.2.2.3.- Modelo de designación a cargo de una corporación	74
1.2.2.4.- Designación directa distribuida entre varios órganos	76
1.2.3.- Modelo mixto (algunos ejemplos).....	81
1.2.3.1.- El Consejo Constitucional de Francia	82
1.2.3.2.- El Tribunal Constitucional de Chile	85
1.2.3.3.- El Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina	87

CAPÍTULO II	91
LA DESIGNACIÓN DEL JUEZ CONSTITUCIONAL: DOS CASOS DE REFERENCIA.....	91
2.1.- Alemania	91
2.1.1.- La composición del Tribunal Constitucional Federal	93
2.1.2.- La selección de los magistrados constitucionales	97
2.1.2.1.- Las listas preparatorias del Ministerio Federal de Justicia	97
2.1.2.2.- La designación por el <i>Bundestag</i>	98
2.1.2.3.- La designación por el <i>Bundesrat</i>	104
2.2.- Italia	107
2.2.1.- La composición de la Corte Constitucional	109
2.2.2.- La selección de los jueces constitucionales	117
2.2.2.1.- La designación por el Presidente de la República	117
2.2.2.2.- La designación por las supremas magistraturas	119
a) La asamblea preelectoral en la Corte Suprema de Casación	126
2.2.2.3.- La designación por el Parlamento	129
CAPÍTULO III	137
EL MODELO DE COMPOSICIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL	137
3.1.- La normativa general de las designaciones de magistrados	140
3.2.- La composición del Tribunal Constitucional	143
3.2.1.- Los doce magistrados	143
3.2.2.- Número par y voto de calidad del Presidente del TC	145
3.2.3.- Carencia de suplentes y miembros natos	148
3.2.4.- Cualificaciones personales de acceso al cargo	150
3.3.- La temporalidad de los cargos y renovación del TC	159
3.3.1.- Período de nueve años de cargo	159
3.3.2.- Renovación por terceras partes cada tres años	160
3.3.3.- La prohibición de reelección inmediata y su excepción	166
3.4.- Los órganos competentes de la designación	170
3.4.1.- El Consejo General del Poder Judicial	170
3.4.2.- El Gobierno	176
3.4.3.- El Congreso de los Diputados y el Senado	179
3.5.- Otras disposiciones del procedimiento selectivo	184
3.5.1.- La notificación del Presidente del TC para instar el procedimiento	184
3.5.2.- La verificación del cumplimiento de requisitos por el TC	185
3.5.3.- La formalización del acto selectivo	188
CAPÍTULO IV	191
LAS DESIGNACIONES DE MAGISTRADOS CONSTITUCIONALES POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y EL GOBIERNO	191
4.1.- El Consejo General del Poder Judicial	191
4.1.1.- La designación inaugural	191
4.1.1.1.- La reglas del procedimiento selectivo en la LOCGPJ	191
4.1.1.2.- La designación de Escudero del Corral y Fernández Viagas	192
4.1.1.3.- La sustitución de Fernández Viagas por Pera Verdaguer	193

4.1.2.- La primera renovación (1986)	194
4.1.2.1.- Las normas del procedimiento selectivo en la LOPJ	194
4.1.2.2.- Las reglas de votación	195
4.1.2.3.- La designación de De la Vega Benayas y Díaz Eimil	199
4.1.3.- La segunda renovación (1995)	201
4.1.3.1.- Designación de Ruiz Vadillo y Delgado Barrio	201
4.1.3.2.- La sustitución de Delgado Barrio por García Manzano	205
4.1.3.3.- La sustitución de Ruiz Vadillo por Cachón Villar	208
4.1.4.- La tercera renovación (2004)	210
4.1.4.1.- Designación de Sala Sánchez y Rodríguez Arribas	210
4.1.5.- La cuarta renovación (2013)	213
4.1.5.1.- Designación de Xiol Ríos y Martínez-Vares	213
4.2.- El Gobierno	216
4.2.1.- Las (escasas) reglas del procedimiento selectivo	216
4.2.2.- Las designaciones efectuadas por el Gobierno	217
4.2.1.1.- La designación inaugural: Arozamena Sierra y Gómez-Ferrer Morant	217
4.2.1.2.- Primera renovación: Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (1986)	219
4.2.1.3.- Segunda renovación: Jiménez de Parga y Vives Antón (1995)	220
4.2.1.4.- Tercera renovación: Aragón Reyes y Pérez Tremps (2004)	222
4.2.1.5.- Cuarta renovación: González-Trevijano y López López (2013)	223
4.3.- La práctica y algunos problemas en las designaciones del CGPJ y del Gobierno	226
4.3.1.- La dimensión corporativa en las designaciones del CGPJ	226
4.3.2.- La “toma de decisión”: la negociación entre progresistas y conservadores en el CGPJ	229
4.3.3.- La adjudicada politización de las designaciones del CGPJ	234
4.3.4.- Las designaciones del Gobierno como “prima” de la mayoría parlamentaria	238
CAPÍTULO V	243
LAS DESIGNACIONES DE MAGISTRADOS CONSTITUCIONALES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS	243
5.1.- La designación inaugural	243
5.1.1.- Las reglas del procedimiento en la Resolución de Presidencia de 1980	243
5.1.2.- Designación de Rubio Llorente, Tomás y Valiente, Díez de León, y Menéndez	247
5.1.3.- Sustitución de Aurelio Menéndez por Truyol y Serra	253
5.2.- La primera renovación (1983)	256
5.2.1.- La normativa prevista en el Reglamento del Congreso de 1982	256
5.2.2.- La reelección de Truyol y Serra, Rubio Llorente, Tomás y Valiente, y Díez de Velasco	259
5.2.3.- Sustitución de Díez de Velasco por Leguina Villa	262
5.2.4.- Sustitución de Truyol y Serra, por Gabaldón López	265
5.3.- La segunda renovación (1992)	267
5.3.1.- Designación de Cruz Villalón, González Campos, Viver Pi-Sunyer, y de Mendizábal Allende	267
5.4.- La tercera renovación (2001)	275
5.4.1.- La normativa procedimental de la Resolución de Presidencia de 2000	275
5.4.1.1.- La creación de la Comisión Consultiva de Nombramientos	278
5.4.1.2.- La introducción de la comparecencia parlamentaria de los candidatos	281
5.4.2.- Designación de García-Calvo, Delgado Barrio, Gay Montalvo y Pérez Vera	285

5.5.- La cuarta renovación (2010, efectuada en 2012)	290
5.5.1.- El contexto procedimental: referencia a las reglas introducidas a la LOTC (LO 6/2007, de 25 de mayo y LO 8/2010, de 4 de noviembre)	290
5.5.2.- La falta de cobertura de la plaza vacante de Roberto García-Calvo	291
5.5.3.- Designación de González Rivas, Ollero Tassara, Roca Trías, Valdés dal Re.....	292

CAPÍTULO VI..... 299

LAS DESIGNACIONES DE MAGISTRADOS CONSTITUCIONALES EN EL SENADO 299

6.1.- La designación inaugural	299
6.1.1.- El procedimiento selectivo en las Normas de Presidencia de 1980.....	299
6.1.2.- La designación de Díez-Picazo, Begué Cantón, García-Pelayo y Latorre Segura...	303
6.1.3.- El procedimiento selectivo en el Reglamento del Senado de 1982	306
6.1.4.- Sustitución de García-Pelayo por García-Mon.....	308
6.2.- La primera renovación (1989)	312
6.2.1.- Designación de Gimeno Sendra, de los Mozos, Rodríguez Bereijo y García-Mon ..	312
6.2.2.- Sustitución de De los Mozos por Gabaldón López	316
6.3.- La segunda renovación (1998)	319
6.3.1.- Designación de Casas Baamonde, Martín de Hijas, Garrido Falla y Jiménez Sánchez	319
6.3.2.- Las reglas procedimentales previstas en la reforma al Reglamento del Senado de 2000	323
6.3.3.- Sustitución de Garrido Falla por Rodríguez-Zapata Pérez	326
6.4.- La tercera renovación (2007, efectuada en 2010)	328
6.4.1.- Las modificaciones procedimentales introducidas en la LO 6/2007, de 24 de mayo	329
6.4.2.- Las reglas procedimentales previstas en la reforma del Reglamento del Senado de 2007	333
6.4.3.- Designación de Asúa Batarrita, Ortega Álvarez, Pérez de los Cobos Orihuel y Hernando Santiago	336
6.4.3.1.- La puesta en marcha del procedimiento	337
6.4.3.2.- El Informe y las aclaraciones de la Mesa del Senado	341
6.4.3.3.- La reanudación del procedimiento: la Mesa inadmite dos candidaturas	346
6.4.3.4.- El trámite en la Comisión de Nombramientos.....	352
6.4.3.5.- La designación de los magistrados por el Pleno.....	356

CAPÍTULO VII..... 361

LA PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA EN LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS CONSTITUCIONALES 361

7.1.- Algunos modelos de participación territorial en la designación de magistrados constitucionales	362
7.2.- La participación autonómica en la composición del TC: una añeja y dificultosa aspiración	368
7.2.1.- La STC 49/2008, de 9 de abril.....	378
7.2.2.- La STC 101/2008, de 24 de julio	385
7.2.3.- El procedimiento selectivo adoptado en la normativa parlamentaria autonómica	389
7.3.- La “pretendida” participación autonómica en el procedimiento selectivo de magistrados en el Senado	400
7.4.- Consideraciones previas en torno a una propuesta	408
7.4.1.- El influjo autonómico por el funcionamiento de un Senado “territorial”. Un matiz.....	408

7.4.2.- La participación autonómica como designación de “sus representantes”	412
7.4.3.- La propuesta: la experiencia profesional autonómica como requisito concurrente para designar a dos magistrados de nómina senatorial	415
CAPÍTULO VIII.....	421
EL PROBLEMA DEL INCUMPLIMIENTO PARLAMENTARIO EN LOS PLAZOS DE RENOVACIÓN	421
8.1.- El contexto: la “politización” de las designaciones.....	425
8.2.- La frecuencia y magnitud de los retrasos en las designaciones.....	428
8.3.- La causa del incumplimiento de los plazos	436
8.4.- El desfase de las renovaciones parciales y la “solución” adoptada por la LO 8/2010, de 4 de noviembre	438
8.5.- El incumplimiento de los plazos de renovación en Alemania e Italia	442
8.5.1.- Alemania	442
8.5.2.- Italia	445
8.6.- Construyendo una propuesta de solución	452
8.6.1.- La <i>prorogatio</i> y la vacancia del cargo	452
8.6.2.- Plazo predeterminado para el nombramiento	457
8.6.3.- Facultad de propuesta al TC	460
8.6.4.- La cooptación por el TC.....	462
8.6.5.- La propuesta: el traslado de la facultad de selección de magistrados al Pleno del TC, como medida para desbloquear la designación de las Cámaras.....	464
8.6.6.- Algunas críticas	468
CONCLUSIONES.....	473
CONCLUSIONI	483
1.- BIBLIOGRAFÍA	491
2.- DOCUMENTACIÓN	516
2.1.- España	516
a) Congreso de los Diputados	516
b) Senado.....	519
c) Parlamentos autonómicos	523
d) Tribunal Constitucional	527
e) Consejo General del Poder Judicial	528
f) Otras instituciones	529
2.2.- Documentación de otros países	530
2.3.- Otra documentación	533
3.- DISPOSICIONES NORMATIVAS.....	535
3.1.- España	535
3.2.- Otros países	542

4.- TRIBUNAS DE PERIÓDICO	551
5.- NOTAS PERIODÍSTICAS.....	552
6.- PORTALES DE INTERNET DE SALAS, CORTES, TRIBUNALES CONSTITUCIONALES Y ÓRGANOS SIMILARES	561
7.- OTRAS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS	563

ABREVIATURAS

AIJC	Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional
AP	Alianza Popular
APM	Asociación Profesional de la Magistratura
art./arts.	artículo/artículos
ATC	Auto de Tribunal Constitucional
BNG	Bloque Nacionalista Galego
BOCG	Boletín Oficial de las Cortes Generales
BOE	Boletín Oficial del Estado
C	Constitución
CA Courts Act.	Ley de la Jurisdicción (Estonia)
CADH	Convención Americana de Derechos Humanos
CC	Corte Costituzionale
CC. AA.	Comunidades Autónomas
CDS	Centro Democrático y Social (partido político)
CDU/CSU	Unión Demócrata Cristiana/Unión Social Cristiana
CE	Constitución Española de 1978
CEC	Centro de Estudios Constitucionales
CEPC	Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
CI	Constitución italiana de 1948
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CiU	Partido Político <i>Convergència i Unió</i>
coord./coords	coordinador/coordinadores
Codir	Codirector
CP	Constitución portuguesa de 1976
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
D./D ^a .	Don/Doña
DT	Disposición transitoria
EAC	Estatuto de Autonomía de Cataluña
EAJ/PNV	Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco
ed.	editor/edición/editorial
eds. lits.	editores literarios
EE. UU.	Estados Unidos de América
ERC	Esquerra Republicana de Catalunya
FDP	Partido Democrático Libre (Alemania)
FJ	Fundamento jurídico
IIDPC	Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional
IJ	Instituto de Investigaciones Jurídicas
IMDPC	Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional
IU	Izquierda Unida
JpD	Asociación Profesional “Jueces para la Democracia”
LCC	Ley de Corte Constitucional
LF	Ley Fundamental de Bonn
LG	Ley del Gobierno
LO	Ley Orgánica

LOAPA	Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico
LOCJPJ	Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial
LOTG	Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
LOTGC	Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales
LTC	Ley del Tribunal Constitucional
LTCF	Ley del Tribunal Constitucional Federal alemán.
núm.	número
pág./págs.	página/páginas
PNV	Partido Nacionalista Vasco
PRC	Partido Regionalista de Cantabria
R	Reglamento
RCD	Reglamento del Congreso de los Diputados
ROPTC	Reglamento de organización y personal del TC
RS	Reglamento del Senado
RTVE	Corporación de Radio y Televisión Española
SPD	Partido Socialdemócrata (Alemania)
ss.	siguientes
SM	Su Majestad
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
t.	tomo
TC	Tribunal Constitucional
TCF	Tribunal Constitucional Federal de Alemania
TCP	Tribunal Constitucional de Portugal
TGC	Tribunal de Garantías Constitucionales (II Rep. española)
trad.	traducción
TS	Tribunal Supremo
UCD	Partido Unión de Centro Democrático
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNED	Universidad Nacional de Educación a Distancia
UPyD	Partido Unión Progreso y Democracia
vol./vols.	volumen/volúmenes
VP	Voto particular
VV. AA.	Varios autores

“Las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace”

D. Francisco Tomás y Valiente
Discurso de despedida pronunciado en el Tribunal
Constitucional, el 8 de julio de 1992.

INTRODUCCIÓN

a) Relevancia del tema

Los tribunales constitucionales, aportación europea a la cultura jurídica, nacidos en especial tiempo de crisis, con el propósito de garantizar los principios democráticos y liberales contenidos en la Constitución frente a los excesos de los nacientes regímenes autoritarios, y una vez agotados éstos, reafirmados para evitar su repetición, han tomado ya carta de naturaleza y difícilmente puede ahora concebirse un sistema jurídico –al menos occidental– donde no se prevea un órgano del género.

Se trata de un órgano de tal relevancia que los atributos fundamentales de la composición, función y posición institucional del órgano suelen estar comprendidos directamente en los textos constitucionales. Esta característica cobra un especial significado pues con ello la confección de la institución se corresponde con uno de los criterios que la doctrina generalmente ha formulado para identificar a los denominados “órganos constitucionales del Estado”¹.

Ello implica que son órganos que gozan de un ámbito de independencia, autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. Tienen con respecto al resto de órganos constitucionales una posición de paridad, aunque ello no excluye la existencia entre ellos de controles recíprocos.

¹ En cuanto a la categorización del TC como órgano constitucional del Estado véase, GARCÍA-PELAYO, Manuel: “El ‘status’ del Tribunal Constitucional”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 1, 1981, pág. 13.

La relevancia del Tribunal Constitucional como órgano constitucional del Estado se destaca además por el concreto contenido de las atribuciones que le reserva la Constitución y su Ley Orgánica (LOTG). El Tribunal se convierte en la institución que además de tutelar en última instancia los derechos fundamentales y controlar la regularidad de la distribución de competencias entre los órganos y entidades territoriales del Estado, vela por la adecuación a la Constitución de las normas con rango de ley, lo que le hace competente para conocer y fijar doctrina sobre buena parte de los conflictos políticos que se generan entre las mayorías y las minorías parlamentarias, y entre el centro y las entidades descentralizadas, regularmente sobre los temas más sensibles de una sociedad.

La doctrina del Tribunal vendrá marcada ciertamente por las peculiaridades de la interpretación constitucional, proyectada como se sabe, sobre textos más breves, llenos de principios generales, indefiniciones y fórmulas políticas, cuya interpretación impone mayores márgenes de apreciación que los planteados para los textos legales, y que además cobran mayor relevancia por cuanto resultan la clave de bóveda de un sistema jurídico.

Los partidos políticos son conscientes de ese contexto y tienen presente que en determinado momento tendrán que llevar a cabo sus funciones de acuerdo a los dictados contenidos en las resoluciones del Tribunal Constitucional, por lo que resulta consecuente que busquen la manera de ejercer determinada influencia sobre ese órgano a través de la participación que ostentan en la designación de sus miembros.

Este especial interés político no puede llevar sin embargo a confeccionar la designación como un acto partidista, que es por lo general parcial y cambiante, sino que atendiendo a los delicados cometidos institucionales del Tribunal, el acto de designación se convierte en cambio en una decisión estratégica y relevante porque adquiere “sentido de Estado”. Esta perspectiva ciertamente no ha sido la base orientadora de todas las designaciones de magistrados del Tribunal Constitucional y por ello no es de extrañar que esta falencia sea una de las principales cuestiones problemáticas de la materia.

Pese a la importancia que supone el acto selectivo para la constitución y funcionamiento del Tribunal Constitucional, no se puede afirmar todavía que los estudios en la materia sean suficientes, aunque bien es cierto que

últimamente y a raíz sobre todo de los problemas que se han suscitado en las pasadas renovaciones de magistrados por el Senado y el Congreso, el asunto ha tenido más atención por parte de la doctrina iuspublicista española.

b) Objeto y delimitación del trabajo

En esta investigación se pretende responder a la pregunta de ¿quién y cómo se designa al magistrado constitucional en España? Ciertamente en el trabajo se tratarán otros tribunales constitucionales, pero el caso español es el que se estudiará con mayor profundidad. Pese a que la atención estará puesta sobre designación de magistrados en el modelo español, el análisis de otras experiencias de justicia constitucional reflejará que los problemas abordados son padecidos de forma más o menos general en la conformación de todos los órganos especializados de la jurisdicción constitucional.

No estudiaremos antecedentes en la designación de miembros de órganos históricos o formulaciones teóricas de órganos que de alguna manera podrían considerarse antecedentes de los modernos tribunales constitucionales, aunque el tema sea ciertamente de gran interés².

No proyectaremos el trabajo para dilucidar un modelo ideal de designación de magistrados ni nos centraremos en determinar el perfil deseable para la magistratura constitucional, aunque no se deja de reconocer que son aspectos de mucha entidad para nuestro tema. Sin embargo, ocuparse de ellos aquí, desbordaría las pretensiones más modestas de esta investigación, puesto que tales elementos requieren reflexiones más específicas sobre el funcionamiento de la justicia constitucional, el Estado de Derecho y la democracia.

No nos plantearemos el “formidable problema” que ya Cappelletti comentara de la legitimidad democrática en el origen y en el funcionamiento del Tribunal Constitucional³, un debate, por cierto, muy interesante y prolijo en la

² Por ejemplo recuérdese el *Jury Constitutionnelle* propuesto por Sieyès, en los debates constituyentes posteriores a la revolución francesa, o el Tribunal Constitucional para Austria formulado por Jellinek en 1885. Véanse al respecto, SIEYÈS, Emmanuel: *Escritos y discursos de la Revolución*, Madrid, CEPC, 2007; JELLINEK, Georg: *Una Corte constitucional per l'Austria*, Torino, G. Giappichelli, 2013. Desde el punto de vista del procedimiento parlamentario de designación de altos cargos públicos, véase GARCÍA COSTA, Francisco Manuel: “La elección de magistraturas por los parlamentos”, en *Anales de Derecho*, núm. 26, 2008, págs. 13-50.

³ CAPPELLETTI, Mauro: “El ‘formidable problema’ del control judicial y la contribución del análisis comparado”, en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 13, 1980, págs. 61-103. Ver también,

doctrina estadounidense de la “*counter-majoritarian difficulty*” y más en general desde la perspectiva de la democracia deliberativa⁴. Se partirá del modelo normativo en la regulación positiva y su funcionamiento en la práctica.

Este trabajo no se centrará en el estudio general del estatuto jurídico de los magistrados constitucionales, sino en el análisis de uno de sus aspectos como lo es su designación. Ciertamente otras trazas del estatuto se abordarán de alguna manera por estar muy relacionadas con la elección, por ejemplo los requisitos de acceso, la duración del cargo, la renovación, pero hay otras que definitivamente se descartarán como por ejemplo las incompatibilidades, la inamovilidad, la remuneración, el régimen de responsabilidades, el cese y las medidas posteriores a la finalización del cargo.

La investigación está proyectada hasta el momento en que se concreta el acto de designación, incluyendo sus formalidades, pero no se encarga del magistrado una vez en funciones. Por lo tanto, no se acometerá la tarea de comprobar si los postulados jurídicos del magistrado han coincidido con los expuestos en las comparecencias parlamentarias o con las intenciones que motivaron al grupo político que lo designó. No habrá pues ejercicios de valoración sobre la independencia de los magistrados respecto del grupo político que los propuso, esto es el fenómeno del seguidismo, para lo cual ya comienzan a aparecer trabajos académicos para mostrar un panorama más completo de esta relación⁵.

RUBIO LLORENTE, Francisco: “Del Tribunal de Garantías al Tribunal Constitucional”, en *Revista de Derecho Político*, núm. 16, 1983, pág. 30.

⁴ La expresión de la “dificultad contra-mayoritaria” suele ser adjudicada a Alexander Bickel, en su multitudinaria obra *The least dangerous branch: the Supreme Court at the bar of politics*, 2ª ed., New Haven, Yale University Press, 1986. Una exposición sobre este debate en FRIEDMAN, Barry: “The birth of an academic obsession: the history of the countermajoritarian difficulty, part five”, en *Yale Law Journal*, núm. 112, 2002, págs. 153-259.

⁵ Como bien lo afirma Manuel PULIDO QUECEDO, faltan más “estudios sociológicos sobre el perfil y obra de los jueces constitucionales”. En efecto, sería interesante verificar si las posiciones en las sentencias de las que fueron ponentes o si en los votos particulares, existe alguna coincidencia con los postulados del grupo político que lo designó o bien, si se conjugan con la calificación pública de “progresista”, “conservador”, “neutral”, “autonomista”, etcétera, que suele hacerse de los magistrados constitucionales. PULIDO QUECEDO, Manuel: “Sede vacante”, en *Aranzadi del Tribunal Constitucional*, núm. 5, 2008, pág. 9, nota 1. Algunos estudios que han abordado el tema, AGUIAR DE LUQUE, Luis: “Balance estadístico de cinco años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 50, 1986, págs. 253-274; DEL CASTILLO VERA, Pilar: “Notas para el estudio del comportamiento judicial. El caso del Tribunal Constitucional”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 20, 1987, págs. 177-191; GAROUPA, Nuno; GÓMEZ-POMAR, Fernando; GREMBI, Verónica: “Judging under political pressure: an empirical analysis of constitutional review voting in the spanish Constitutional

Finalmente cabe mencionar que algunos de los países aquí explorados tienen una estructura estatal descentralizada. En estos países se tiene instituido un Tribunal Constitucional Federal o una Corte Suprema Constitucional, pero además cuentan con tribunales constitucionales en las entidades integrantes del Estado. Entre ellos, el caso quizá más difundido sea el de Alemania, donde incluso algunos de estos tribunales precedieron al Federal, pero también hay experiencias parecidas de tribunales constitucionales locales en México o en Rusia. La composición y designación de estos tribunales encierra por sí mismo un gran interés, no solamente para efectos de comparación, sino porque los trabajos que se han ocupado de la materia, reflejan modificaciones importantes a los modelos de designación y la existencia de un paralelismo en muchos de los problemas que se padecen (aunque quizá más acusados en los locales)⁶. En este trabajo, sin embargo, nos centraremos en los tribunales constitucionales estatales, como una estrategia de limitación del objeto de estudio.

c) Contenido, metodología y finalidades

El estudio se compone de ocho capítulos donde se abordan los temas progresivamente desde una perspectiva general hasta una más específica. Se comienza con una clasificación general de los modelos de designación para después abordar dos significativos referentes constitucionales, enseguida se detalla el modelo español repasando el historial de designaciones de los magistrados, y por último se estudian con mayor detenimiento dos de sus principales problemas.

Court", en *The Journal of Law, Economics, and Organization*, vol. 29, núm. 3, 2013, págs. 513-534.

⁶ Véase para el caso alemán a GONZÁLEZ BEILFUSS, Markus: "Los tribunales constitucionales de los länder alemanes", en *Autonomies: Revista Catalana de Derecho Público*, núm. 21, 1996, especialmente las págs. 230-233; más recientes, LUTHER, Jörg: "El estatus jurídico del juez constitucional en la experiencia alemana", en FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa. Libro en homenaje al doctor Jorge Carpizo*, México, IIJ, UNAM, 2012, págs. 659-688; POLI, Maria Daniela: *Bundesverfassungsgericht e Landesverfassungsgerichte: un modello "policentrico" di giustizia costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2012. Para el caso de México: ASTUDILLO REYES, César: "La justicia constitucional local en México. Presupuestos, sistemas y problemas", en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 115, 2006, págs. 9-56; y para el caso de España, que en cierta medida se observa una tendencia en la materia mediante los Consejos de Garantías Estatutarias, véase el monográfico dedicado a "Els guardians de l'autonomia" en la *Revista Catalana de Dret Públic*, núm. 39, 2009.

En el primer capítulo se plantea una clasificación de los modelos de designación de magistrados constitucionales. El esquema, en efecto, no se aparta demasiado de algunas categorías que ya han sido formuladas por la doctrina, no obstante el que aquí se presenta contiene algunas novedades. Evidentemente, tampoco pretende ser exhaustivo, pues se han quedado en el tintero bastantes experiencias constitucionales.

La finalidad de la clasificación es dar una visión de conjunto de los modelos de designación de magistrados constitucionales en la que se puedan reconocer un elevado número de experiencias constitucionales. No se trata desde luego de una clasificación de proyecciones “mundiales”, como a veces han sido denominados algunos trabajos. Nuestro propósito por el contrario es modesto, estudiando los tribunales constitucionales en países que podríamos convenir en denominarles como “occidentales”, con lo discutible y poco clara que pueda resultar esa calificación.

En ese sentido, se han estudiado la mayoría de países centroeuropeos donde precisamente se idearon y pusieron en marcha los primeros tribunales de este tipo y donde se encuentran también los más consolidados. Asimismo se han abordado los países de la Europa del Este, ahí donde en los términos de Favoreu ha tenido lugar una de las “oleadas” de creación de este tipo de tribunales entre finales de la década de los años ochenta y durante los noventa, comprendiendo en ese periodo a algunas repúblicas de la antigua Unión Soviética (incluyendo a la Federación Rusa) y a las repúblicas que se desintegraron de la ex Yugoslavia, considerando además a las escindidas en este siglo. Del otro lado del Atlántico, se ha estudiado a la mayoría de países del contexto Iberoamericano y también a los Estados Unidos de América.

La suma abarca un total de 49 países, y como es natural, nos movemos en los resbaladizos terrenos de la diversidad política-constitucional que se presenta en este heterogéneo grupo de Estados. El criterio común sin embargo, ha sido el de proyectar el estudio sobre los órganos estatales que tengan a su cargo el control constitucional en una última instancia. En este sentido, lo general es que se trate de tribunales constitucionales, pero también se abordarán Tribunales o Cortes Supremas que tienen esta competencia - aunque no solo-, bien que a través de una Sala especializada, bien como competencia del Pleno.

Debe considerarse por otro lado que algunos de los países a que nos referiremos tienen una democracia poco asentada e incluso en algunos casos se duda de la misma. Este dato, ciertamente no se ha ignorado en el estudio e incluso en algunos casos se realizan puntualizaciones al respecto, pero en general, los datos se han cogido desde el punto de vista orgánico y desde el derecho positivo, sin entrar a dilucidar estos aspectos más problemáticos.

En el capítulo dos se dejarán las perspectivas generales y pasaremos al estudio más concreto de los modelos de composición y designación de los tribunales constitucionales de Alemania y de Italia. La decisión de abordar con más detalle estas dos experiencias descansa en el hecho de haber sido dos de las fuentes de inspiración más influyentes del constituyente español, pero además han sido modelos que han suministrado pautas generales a los tribunales que se han creado posteriormente.

Se trata además de dos de los más experimentados y consolidados tribunales constitucionales de Europa, cuya actuación, jurisprudencia y doctrina, es habitual referencia entre la doctrina iuspublicista. Aunque los modelos serán estudiados en este segundo capítulo, no dejarán de hacerse alusiones a éstos a lo largo del trabajo.

En el tercer capítulo se analiza a fondo el modelo de composición y designación de los magistrados del Tribunal Constitucional español. Para este apartado se dedica el estudio de la normativa general que disciplina la materia, dejando para subsiguientes capítulos la normativa específica, que propiamente regula más detalladamente los procedimientos selectivos en cada uno de los órganos competentes de designar magistrados.

La normativa general que se distingue en el tercer capítulo nos define las características de la composición del Tribunal (número de integrantes, requisitos personales de los candidatos), la temporalidad de los cargos (duración, renovación y reelección), los órganos encargados de designar a los magistrados, y otras disposiciones del procedimiento selectivo, relacionadas con la activación y formalización de las designaciones.

En los capítulos cuarto, quinto y sexto se presenta el historial de designaciones de los magistrados del Tribunal Constitucional desde su constitución hasta el 2013. En el primero de ellos se ha agrupado al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno, por así haberlo hecho también el

régimen de renovaciones del Tribunal. En los siguientes se presentarán las designaciones del Congreso de los Diputados y del Senado, respectivamente.

Todas las designaciones se han colocado por orden cronológico, estructurando los apartados de acuerdo a cada turno de renovación grupal. En cada turno se acompaña y analiza la normativa específica que en cada momento rigió la renovación, y además se incluyen las sustituciones individuales que correspondieron al propio grupo de magistrados renovados. La intención de esta estructuración es presentar la designación de acuerdo al contexto de cada momento y observar la evolución que se ha operado en las normas electivas.

Es necesario mencionar que buena parte de la información sobre las vicisitudes que determinan las designaciones de los magistrados no se encuentra en documentación oficial o pública, sino en los medios de comunicación social. Bien sea por la reserva a que están obligados algunos órganos proponentes, bien por las propias características de la negociación política, que como se sabe, son relaciones más veladas, cautas y rodeadas de oportunidad. En cualquier caso, la línea general es apoyarnos preferentemente en la documentación oficial que se ha tenido disponible, en las referencias formuladas por la doctrina y cuando no se ha tenido más remedio que acudir al material periodístico, se intenta contrastar y relacionarlo lo más posible con otros medios de comunicación.

Todo este material empírico no hará más que poner de manifiesto las prácticas y los problemas más frecuentes del modelo de designación. En este terreno, los capítulos siete y ocho estarán destinados a destacar algunas de ellas, sometiendo a discusión dos propuestas para atender a unas dificultades concretas: favorecer la participación autonómica en la designación de magistrados, y tratar de evitar la politización y el incumplimiento de los plazos de renovación.

Los problemas evidentemente no son todos los que se padecen, pero en cualquier caso los tratados son de los más apremiantes. Las propuestas que se van a plantear, ciertamente no son todas las posibles. En algunos casos se ofrecerá de una forma panorámica el abanico de opciones que se han llegado a esbozar, pero dicha referencia no tendrá vocación exhaustiva y tampoco se pretenderá opinar y debatir sobre todas las alternativas presentadas.

En general, la finalidad del trabajo será triple. En un primer término mostrará cómo se designan los magistrados constitucionales en España, en un segundo estadio, pondrá de manifiesto la relevancia y la gran cantidad de problemas que un tema como este plantea. Finalmente en un tercer término se quiere someter a discusión unas propuestas para matizar algunos de los problemas detectados. No es por supuesto una tarea terminada. La aspiración es que esta investigación motive otras más, que vengan a desarrollar bastantes puntos que han quedado solamente anotados.

INTRODUZIONE

a) Rilevanza del tema

Le Corti costituzionali, contributo europeo alla cultura giuridica, nate in particolari periodi di crisi, allo scopo di garantire i principi democratici e liberali contenuti nella Costituzione contro gli arbitrii dei nascenti regimi autoritari, una volta caduti questi ultimi, nuovamente previste onde evitare la ripetizione di quegli eccessi, hanno ormai assunto un generale riconoscimento che ora è difficile immaginare un sistema giuridico (almeno occidentale) in cui non si trovi un organo del genere.

Si tratta di organo di tale importanza che le fondamentali caratteristiche della composizione, le funzioni e la posizione istituzionale sono di solito previsti direttamente nei testi costituzionali. Questa caratteristica ha un significato particolare, poiché risponde ad uno dei criteri che la dottrina ha generalmente formulato per identificare i cosiddetti "organi costituzionali dello Stato"⁷.

Ciò implica che tali organi godono di un elevato livello di indipendenza, autonomia organica, funzionale e di bilancio; hanno rispetto agli altri organi costituzionali una posizione di parità, anche se questo non esclude l'esistenza di controlli reciproci.

La rilevanza della Corte Costituzionale come organo costituzionale dello Stato è anche sottolineata dal contenuto specifico delle attribuzioni previste dalla Costituzione e dalla sua legge organica (LOTG). In questo senso, la Corte diventa l'istituzione che tutela in ultima istanza i diritti fondamentali, controlla anche la regolarità del riparto delle competenze tra gli organi centrali dello Stato e le periferie territoriali, garantisce la conformità alla Costituzione delle norme con forza di legge, fissa la giurisprudenza costituzionale che risolve gran parte dei conflitti politici che emergono tra la maggioranza e le minoranze parlamentari e tra enti centrali e periferici, finendo con l'incidere sulle questioni

⁷ GARCÍA-PELAYO, Manuel: "El 'status' del Tribunal Constitucional", in *Revista Española de Derecho Constitucional*, n. 1/1981, p. 13.

più delicate di una società. È proprio per questo che può dirsi che la Corte Costituzionale sia una sorta di “chiave di volta” del sistema giuridico.

La giurisprudenza della Corte sarà certamente segnata dalle peculiarità della interpretazione costituzionale, proiettata come è noto su testi più brevi, ricchi di principi generali, formule politiche la cui interpretazione impone maggiori margini di apprezzamento.

I partiti politici sono consapevoli di siffatto contesto e sono consapevoli di dover svolgere i loro compiti secondo i dettami contenuti nelle decisioni della Corte Costituzionale; sono quindi costantemente alla ricerca di modi per esercitare una certa influenza sull'organo attraverso la partecipazione nella nomina dei suoi membri.

Questo speciale interesse politico non può in ogni caso condurre a rendere la elezione dei giudici costituzionali come un atto “di parte”, ma tenendo conto dei delicati compiti della Corte, quell'atto diventa una decisione strategica e rilevante perché riveste un "senso di Stato". Questa prospettiva non è certo stata la guida per tutte le nomine di giudici della Corte Costituzionale e non è quindi sorprendente che questa lacuna sia una delle principali aree problematiche della materia.

Nonostante l'importanza che coinvolge l'atto di selezione per la composizione e il funzionamento della Corte Costituzionale, non può ancora dirsi che gli studi in questo campo siano sufficienti, anche se è vero che ultimamente – soprattutto a causa dei problemi sorti in occasione dei passati rinnovi dei giudici da parte del Senato e del Congresso – la questione ha ricevuto maggiore attenzione da parte della dottrina giuspubblicistica spagnola.

b) Oggetto e scopo del lavoro

La ricerca si propone di indagare le i soggetti competenti e le modalità con cui sono nominati i giudici costituzionali in Spagna. Il lavoro si concentrerà anche sulla nomina dei giudici nelle altre Corti costituzionali, ma l'attenzione sarà focalizzata sul modello spagnolo.

L'analisi non affronterà le vicende legate alla nomina dei membri degli organi storici o le formulazioni teoriche di organi che in qualche modo

potrebbero essere considerati precursori delle corti costituzionali moderne, anche se l'argomento è certamente di grande interesse⁸.

Non si intende qui proporre un modello ideale di nomina dei giudici, né ci si concentrerà sulla determinazione del profilo auspicabile per la magistratura costituzionale, anche questi peraltro aspetti di grande interesse per il nostro argomento. Tuttavia, tentare uno studio di questi problemi di certo valicherebbe le pretese di questa ricerca, dal momento che tali elementi richiederebbero riflessioni più specifiche sul funzionamento della giustizia costituzionale, lo Stato di diritto e la democrazia.

Non abbiamo il proposito di studiare il “formidabile problema” di cui Cappelletti parlava a proposito della legittimazione democratica sull'origine e sul funzionamento della Corte Costituzionale⁹; un dibattito questo, tra l'altro, che molto ha interessato la dottrina americana della “*counter-majoritarian difficulty*”, più in generale dal punto di vista della democrazia deliberativa¹⁰. Inizieremo lo studio concentrandoci sul modello normativo nella legislazione positiva e sul suo funzionamento nella pratica.

Questa ricerca non si concentrerà sullo studio generale dello status giuridico dei giudici costituzionali, ma sull'analisi di un aspetto qual è quello della loro designazione. Dicerò altre tracce del loro statuto saranno percorse in qualche tratto, dal momento che sono strettamente legate al momento delle elezioni, per esempio i requisiti di accesso, la durata del mandato, il rinnovamento, ma altre saranno con altrettanta sicurezza scartate, come ad esempio il profilo della incompatibilità, la retribuzione, il regime di responsabilità, e la cessazione dalla carica.

⁸ In questo senso può ricordarsi il *Jury Constitutionnelle* proposto da Sieyès, e la Corte Costituzionale in Austria nel 1885 da parte Jellinek. Vedi su questo punto SIEYÈS, Emmanuel: *Escritos y discursos de la Revolución*, Madrid, CEPC, 2007; JELLINEK, Georg: *Una Corte costituzionale per l'Austria*, Torino, Giappichelli, 2013. Dal punto di vista della procedura parlamentare per la nomina di alti funzionari pubblici, v. GARCÍA COSTA, Francisco Manuel: “La elección de magistraturas por los preparlamentos”, in *Anales de Derecho*, n. 26/2008, pp. 13-50.

⁹ CAPPELLETTI, Mauro: “El ‘formidable problema’ del control judicial y la contribución del análisis comparado”, in *Revista de Estudios Políticos*, n. 13/1980, pp. 61-103. Vedi anche RUBIO LLORENTE, Francisco: “Del Tribunal de Garantías al Tribunal Constitucional”, in *Revista de Derecho Político*, n. 16/1983, pág. 30.

¹⁰ L'espressione “*counter-majoritarian difficulty*” di solito è attribuita a BICKEL, Alexander: *The least dangerous branch: the Supreme Court at the bar of politics*, 2ª ed., New Haven, Yale University Press, 1986. Su questo v. FRIEDMAN, Barry: “The birth of an academic obsession: the history of the countermajoritarian difficulty, part five”, in *Yale Law Journal*, n. 112/2002, pp. 153-259.

La ricerca si proietta fino all'atto specifico della nomina, comprese le sue modalità, ma non fa riferimento al giudice una volta in carica. Pertanto, non si parlerà della verifica del fatto se i criteri giuridici del giudice hanno coinciso o meno con quelli indicati nelle audizioni parlamentari o le intenzioni che hanno motivato il gruppo politico a procedere a quella nomina. Non verrà valutato il grado di indipendenza del giudice rispetto al gruppo politico che lo ha nominato, un tema che certamente sta iniziando ad animare il dibattito accademico¹¹.

Infine va rilevato come alcuni degli ordinamenti indagati presentino una struttura statale decentrata. Questi Paesi hanno una Corte costituzionale federale o una Suprema Corte Costituzionale, ma anche corti costituzionali nelle entità statali periferiche. Tra questi forse quello più noto è il caso della Germania, ma troviamo esempi di corti costituzionali locali in Messico e Russia. La composizione e la designazione dei giudici di questi tribunali racchiude in sé un grande interesse non solo per fini comparatistici, ma anche perché i lavori che hanno affrontato la questione propongono modifiche significative al modello di designazione e l'esistenza di un parallelismo tra gli aspetti di sofferenza (anche se forse più accentuati nelle corti locali)¹². In questo lavoro, però, ci concentreremo sulle corti costituzionali statali come strategia per limitare l'oggetto di studio.

c) Contenuti, metodologia e obiettivi

¹¹ PULIDO QUECEDO, Manuel: "Sede vacante", in *Aranzadi del Tribunal Constitucional*, n. 5/2008, p. 9, nota 1; AGUIAR DE LUQUE, Luis: "Balance estadístico de cinco años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional", in *Revista de Estudios Políticos*, n. 50/1986, pp. 253-274; DEL CASTILLO VERA, Pilar: "Notas para el estudio del comportamiento judicial. El caso del Tribunal Constitucional", in *Revista Española de Derecho Constitucional*, n. 20/1987, pp. 177-191; GAROUPA, Nuno; GÓMEZ-POMAR, Fernando; GREMBI, Verónica: "Judging under political pressure: an empirical analysis of constitutional review voting in the spanish Constitutional Court", in *The Journal of Law, Economics, and Organization*, vol. 29, n. 3/2013, pp. 513-534.

¹² Per il caso tedesco vedi GONZÁLEZ BEILFUSS, Markus: "Los tribunales constitucionales de los länder alemanes", in *Autonomies: Revista Catalana de Derecho Público*, n. 21/1996, pp. 230-233; più di recente, LUTHER, Jörg: "El estatus jurídico del juez constitucional en la experiencia alemana", in FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa*. México, IJ, UNAM, 2012, pp. 659-688; POLI, Maria Daniela: *Bundesverfassungsgericht e Landesverfassungsgerichte: un modello "policentrico" di giustizia costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2012. Nel caso del Messico: ASTUDILLO REYES, César: "La justicia constitucional local en México. Presupuestos, sistemas y problemas", in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, n. 115/2006, pp. 9-56; per quanto riguarda la Spagna, con riguardo alle Commissioni di garanzie statutarie, si veda il numero speciale dedicato a "Els guardians de l'autonomia" della *Revista Catalana de Dret Públic*, n. 39/2009.

Lo studio si compone di otto capitoli in cui gli argomenti vengono affrontati muovendo progressivamente da una visione d'insieme verso una più specifica. Si comincia con una classificazione generale dei modelli di scelta del giudice costituzionale, per poi analizzare due grandi esperienze costituzionali di riferimento; si passa quindi alla analisi dettagliata del modello spagnolo in base alla storia di tutte le elezioni dei giudici costituzionali, ed infine si affrontano più in dettaglio due dei principali problemi che si sono presentati.

Nel primo capitolo si propone una classificazione dei modelli di nomina dei giudici costituzionali. La classificazione proposta non si discosta troppo da alcune categorie che sono già state individuate dalla dottrina, ma con alcuni elementi di novità. Non si può certo pretendere però di essere esaustivi, dal momento che molte esperienze costituzionali sono state lasciate fuori.

Lo scopo della classificazione è quello di offrire una panoramica dei modelli di nomina dei giudici costituzionali in cui possono riconoscersi un gran numero di esperienze costituzionali. Questo non vuole essere un lavoro dalle proiezioni "globali", verso cui talvolta alcuni studi hanno teso (o preteso di tendere). Il nostro obiettivo è invece più modesto, concentrando la nostra attenzione sulle corti costituzionali dei Paesi "occidentali" (considerando la discutibile e poco chiara accezione che tale aggettivazione riveste).

In questo senso abbiamo analizzato la maggior parte degli ordinamenti dell'Europa centrale, nei quali furono concepiti i primi Tribunali di questo tipo e dove oggi queste Corti vantano la tradizione maggiormente consolidata. Sono poi affrontati gli ordinamenti dell'Europa orientale, dove -secondo le parole di Luis Favoreu- si è verificata una "onda" di creazione di tali tribunali tra la fine degli anni ottanta e gli anni novanta, comprendente in quel periodo alcune repubbliche della ex Unione Sovietica (compresa la Federazione Russa), le repubbliche della ex Jugoslavia, fino alle più recenti scissioni. Dall'altra parte dell'Atlantico lo studio si è concentrato su molti ordinamenti dei Paesi del contesto latino-americano ed anche su quello degli Stati Uniti d'America.

In totale 49 Paesi. Naturalmente si tratta di un gruppo eterogeneo di Stati, ma l'approccio comune, tuttavia, è stato quello di proiettare lo studio sulle istituzioni dello Stato responsabili in ultima istanza del controllo costituzionale. In questo senso, si tratta in genere di corti costituzionali, ma anche di tribunali o

corti supreme che hanno anche questa attribuzione -ma non solo-, sia attraverso una sezione specializzata oppure in camera di consiglio.

Deve essere considerato, inoltre, che alcuni degli ordinamenti studiati non posseggono un livello ottimale di democrazia. Questo elemento è stato certamente preso in considerazione criticamente, ma nel complesso i dati sono stati ricavati dal punto di vista organizzativo e dal diritto positivo.

Nel secondo capitolo si abbandonano prospettive generali per concentrarsi su due modelli concreti di composizione e nomina dei giudici costituzionale, quello tedesco e quello italiano. La decisione di affrontare più in dettaglio queste due esperienze sta nel fatto che costituiscono due delle fonti più influenti d'ispirazione per i costituenti spagnoli, ma sono stati anche i modelli che hanno fornito orientamenti generali alle Corti create successivamente.

Nel terzo capitolo si affronta in modo approfondito il modello spagnolo di composizione e nomina dei giudici della Tribunale Costituzionale. In questa parte ci si dedica allo studio delle regole generali che disciplinano la materia, lasciando per i capitoli successivi regolamentazioni specifiche che disciplinano rigorosamente e più in dettaglio le procedure selettive in ciascuno degli organismi competenti alla nomina dei giudici.

La normativa generale analizzata nel terzo capitolo definisce le caratteristiche della composizione della Corte (numero dei componenti, requisiti personali dei candidati), le questioni legate al "tempo" del mandato (durata, rinnovo e rielezione), gli organi responsabili della nomina, e le altre disposizioni del processo selettivo vincolate alla formalizzazione della carica.

Nel quarto, quinto e sesto capitolo vengono ripercorse tutte le nomine di giudici dalla fondazione del Tribunale Costituzionale fino al 2013. Nel primo di questi capitoli sono state raggruppate le designazioni del Consejo General del Poder Judicial e del Governo, compreso il tema del rinnovamento. Nei due capitoli seguenti sono rispettivamente collocate le nomine del Congresso dei Deputati e del Senato.

Tutte le elezioni trovano collocazione cronologica e ogni tornata è accompagnata dalle normative specifiche in vigore al momento. Lo scopo di questa strutturazione è quello di presentare la designazione in base al contesto del momento e di osservare l'evoluzione che ha avuto luogo nelle regole di elezione.

Va ricordato che la gran parte delle informazioni sugli eventi che hanno condotto alle nomine dei giudici non è reperita in documenti ufficiali o pubblici, ma dai media: e questo sia per la riservatezza a cui sono tenuti alcuni degli organismi proponenti, sia per le caratteristiche del negoziato politico che, come è noto, si caratterizza per relazioni prudenti, velate e dettate dal momento. In ogni caso, la linea generale è quella di sostenere questo lavoro preferibilmente con la documentazione disponibile e con i riferimenti dottrinali. Quando non si aveva altra scelta che ricorrere al materiale di stampa, quello si è sempre confrontato e posto in relazione con altri mezzi.

Tutto questo materiale servirà a mettere in evidenza i principali problemi pratici del modello spagnolo. In questa linea, i capitoli sette e otto verranno utilizzati per sottoporre al dibattito due proposte per affrontare alcune sfide specifiche: favorire la partecipazione regionale alla nomina dei giudici, e cercare di evitare la politicizzazione e il ritardo parlamentare nella elezione dei giudici costituzionali. Questi problemi ovviamente non esauriscono il quadro delle criticità ma sono senz'altro alcuni dei più importanti.

In generale, lo scopo del lavoro è triplice. In via di prima approssimazione si vedrà come i giudici costituzionali in Spagna sono designati; si proverà a mettere quindi in evidenza l'importanza e i tanti problemi che un tema come questo produce. Infine, l'obiettivo è quello di presentare proposte per la discussione onde provare a risolvere alcuni dei problemi individuati. Naturalmente non può considerarsi un'attività completata; la aspirazione è che questa ricerca ne motivi altre, che vengano a sviluppare molti punti qui stati soltanto accennati.

CAPÍTULO I

Hacia una clasificación de los modelos de designación de los jueces constitucionales

La justicia constitucional ha tenido un éxito muy importante en el mundo y progresivamente se van sumando más países a la modalidad de protección de la Constitución mediante el establecimiento de un órgano especializado en la materia. La forma de designar a los integrantes de este tipo de órganos, se ha ido confeccionando bajo la inspiración de al menos dos o tres modelos de referencia, aunque bien es cierto que cada constituyente elabora en su momento un modelo diverso, articulado con las particularidades propias de cada Estado, dando como resultado global una rica variedad de procedimientos selectivos.

Dada la gran variedad de diseños que hoy en día se pueden encontrar, no resulta sencillo hacer una clasificación lo más general posible de modelos de designación de magistrados de los tribunales constitucionales. Conviene, sin embargo, sumar una aportación a los esfuerzos que se han dado en esta materia para organizar un sistema clasificatorio que permita mostrar cierta panorámica de los modelos. Este trabajo se añadirá a dicho propósito planteando una propuesta de clasificación que podría resultar útil. Pero antes, es menester hacer alguna referencia así sea muy general, a otros criterios clasificatorios que se han formulado.

1.1.- Clasificaciones formuladas por la doctrina

Uno de los rasgos comunes de las clasificaciones que se han planteado por la escasa doctrina que se ha ocupado de la materia, es que éstas son regularmente diseñadas al hilo del estudio de un país concreto, lo que

multiplica sin duda los enfoques. Por otro lado, los criterios clasificatorios pueden estar apoyados en diversas variables, arrojando con ello una amplia gama de clasificaciones no siempre homogéneas. Repárese además, en que algunas clasificaciones no constituyen el objeto principal del trabajo, sino que se encuentran en el marco de un estudio más amplio.

(i) La clasificación que resulta más reconocida, es la que distingue las formas de designación de magistrados entre un modelo de “elección” y otro de “nominación” o “nombramiento directo”, considerando además una tercera rama que combina, en proporciones variables, las dos anteriores¹³.

En esta clasificación se define a los modelos de “nombramiento” como aquéllos que no tienen un procedimiento electivo, sino que el poder de designación queda en manos de un órgano determinado, por ejemplo el Presidente del Estado o de otra institución. Incluyen en este modelo los supuestos donde el órgano efectúa el nombramiento entre los candidatos que la propia institución genera o bien de entre las candidaturas que le son presentadas por otros órganos.

Por otro lado, esta clasificación entiende el modelo de “elección” como aquél en donde la designación es resultado de un procedimiento donde se somete la candidatura a la votación del Parlamento, siendo elegida generalmente con mayorías calificadas. Se incluye igualmente en esta rama, las modalidades donde las candidaturas son generadas por el propio órgano o bien cuando vienen desde “fuera”. Finalmente en esta clasificación, se observa una tercera modalidad la cual combina los modelos de nombramiento con los electivos, denominándole como modelo “híbrido” o “mixto”.

¹³ En esta clasificación se inscriben, ROUSSEAU, Dominique: *La justicia constitucional en europa*, Madrid, CEPC, 2002, págs. 33-36; KARAKAMISHEVA-JOVANOVSKA, Tanja: “Different Models for Protection of Constitutionality, Legality and Independence of Constitutional Court of the Republic of Macedonia”, en 2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice, *Separation of Powers and Independence of Constitutional Courts and Equivalent Bodies*, Council of Europe, Venice Commission, Rio de Janeiro, Brazil, January 2011, págs. 5-7; MARJAN MAVČIČ, Arne: *La justicia constitucional en Eslovenia*, México, Porrúa, 2011, pág. 50; VENICE COMMISSION: *Rapport révisé sur la composition des Cours constitutionnelles* (CDL-JU(1997)010fin), Strasbourg, 1997. Sobre esta última, cabe señalar que parte de un estudio hecho hace diecisiete años y con un elevado número de países nórdicos y del *common law*. La fecha de realización es relevante porque se han producido importantes cambios constitucionales que han repercutido en los sistemas electivos, que no responden más a los reportados en 1997. A este punto, se antoja completamente necesario actualizar este documento y hacer un nuevo estudio en la materia.

La clasificación que se ha descrito resulta bastante útil para efectuar una primera aproximación a los sistemas selectivos de magistrados. Como se puede ver, la clasificación está basada en uno de los elementos esenciales del procedimiento selectivo que se corresponden con la parte final de la serie de actividades que se llevan a cabo para adoptar la decisión formalmente, esto es, la elección o el nombramiento. En cambio, la clasificación que en este trabajo se va a proponer, está planteada en unos términos más generales, que atienden a la forma de articulación del acto selectivo. Se trata de acentuar y describir la manera en que convergen las voluntades estatales en la relación que se guarda entre la propuesta del candidato y la designación final del juez (acto compuesto) o bien, entre la configuración de un acto selectivo a cargo de un órgano que no requiere de la colaboración sustantiva de otro para cobrar existencia (designación directa).

La clasificación que aquí se va a proponer consigue además mencionar el iter del procedimiento selectivo, con sus fases preparatorias o de instrucción. Asimismo, mostrará el abanico de órganos estatales o corporaciones especiales que participen en los procedimientos y en general, ofrecerá una visión panorámica de los modelos adoptados por la experiencia comparada, entre los cuales suelen presentarse modelos más complejos. En definitiva, puede decirse que mientras la clasificación de los modelos de “elección y nombramiento”, miran predominantemente a la fase conclusiva del acto selectivo, los modelos de “acto compuesto y designación directa” que más abajo desarrollaremos, observarán el procedimiento completo.

(ii) Otros autores han efectuado una clasificación en la cual distinguen cinco modelos de designación de jueces. Como los propios autores se encargan de advertir, la exposición de los modelos atiende únicamente a las experiencias constitucionales de Europa central y oriental, por lo que reconocen que hay otros modelos que pudieran no encontrar acomodo en esta clasificación¹⁴. En el primer modelo observan un sistema de designación exclusiva por parte del poder legislativo, “sin la participación o mediación -salvo la pura formalidad del nombramiento- de ningún otro órgano constitucional”, es

¹⁴ FLORES JUBERÍAS, Carlos; TORRES PÉREZ, Mercedes: “Los tribunales constitucionales y su papel en la protección de los derechos fundamentales en las nuevas democracias de la Europa central y oriental”, en *Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, núm. 5, 2001, págs. 101-103.

decir, se trata del modelo que en este trabajo se denominará como el “modelo parlamentario de designación directa”. El segundo, es el que reserva la decisión final de la elección al legislativo, pero distribuye el derecho de proponer candidatos a varias instituciones.

El tercer modelo que reconoce esta clasificación es el que requiere del consenso –sea cual sea su forma- entre el legislativo y el jefe del Estado. Al cuarto modelo lo denominan de “elección mixta”, en el cual una parte de los magistrados son designados por el legislativo y otra por el ejecutivo. El quinto sistema lo reconocen como aquél en donde además de la participación de los poderes anteriores, también participa el poder judicial o el órgano supremo de gobierno de la judicatura.

Los cinco modelos que se acaban de referir, se corresponden efectivamente con bastantes formas de designación del juez constitucional en la experiencia comparada, pero como ya lo advertían quienes los formularon, hay otros modelos que no están comprendidos. Esta clasificación parece poner el peso específico de la clasificación en la variedad de instituciones que participan en el procedimiento. Para comprobar lo anterior, véase que el modelo primero, se distingue por la participación del legislativo, el cuarto por la del legislativo y el ejecutivo; y el quinto con los anteriores más el judicial. Bajo este criterio, los modelos de designación aumentarán en la medida que lo hagan las combinaciones de órganos, lo que puede llegar a conseguir más que una clasificación sistemática de la designación de magistrados, una larga descripción de las modalidades de participación orgánica en los procedimientos selectivos.

Pauta distinta siguen los modelos segundo y tercero. En estos rápidamente puede distinguirse que la clasificación atiende al modo en cómo se integra el acto selectivo, así el segundo modelo alude al sistema del consenso y el tercero a la designación final de un órgano, dentro de las propuestas presentadas por otros.

(iii) Hay otro sector de la doctrina que ha sistematizado las formas de designación del juez constitucional atendiendo al tipo de órgano que participa en el acto final de designación. En este sentido, ubica igualmente cinco modelos: 1) designación por el Presidente de la República; 2) designación por el Monarca; 3) designación por el legislativo en su conjunto; 4) designación por

las Cámaras legislativas; y 5) designación mixta, en la que concurren el legislativo, el ejecutivo y el judicial¹⁵.

La clasificación toma como base el tipo de órgano que participa en el procedimiento selectivo, corriendo el riesgo que ya se apuntaba, de poder constituirse en una clasificación con multiplicidad de modelos, susceptible de crear más categorías en tanto la diversidad de órganos o mecanismos de elección se hagan presentes. En esta línea, vendrían a sumarse más modelos, para incluir por ejemplo, el sistema de designación por voto popular adoptado hace unos años en Bolivia, o los modelos confeccionados recientemente a cargo de una corporación en la República Dominicana con el Consejo Nacional de la Magistratura, o en Ecuador con la “Comisión Calificadora”, entre otras.

Por otro lado, algunos de los órganos a los que se atribuye la designación, en realidad no son los que tienen la sustantividad de la elección, sino que participan de un modo formal en la misma. Quizá el caso más significativo, sea el modelo de designación donde se alude al Monarca (España o Bélgica, por ejemplo), y en algunos casos, el de la designación del Presidente de la República (Austria o Kosovo).

1.2.- Clasificación de los modelos desde la forma de articulación del acto selectivo

Una vez que se han referido algunas de las clasificaciones realizadas a los modelos selectivos de magistrados, procede ahora abordar la que en este trabajo se viene anunciando. Lo primero que hay que decir, es que el criterio de elaboración de la misma descansa específicamente en el modo en que se confecciona el acto selectivo. Desde este punto de vista, es posible distinguir principalmente tres modalidades.

La primera, es aquella donde para la confección del acto selectivo, se requiere de la participación, consenso o cooperación de al menos dos órganos diversos. El ejemplo más representativo de este tipo de modelos, podría ser el de la elección de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, en la cual se requiere la propuesta del Presidente de la República

¹⁵ RIVERA SANTIVÁÑEZ, José Antonio: “Sistemas de nombramiento del juez constitucional”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MOLINA SUÁREZ, César de Jesús (coords.): *El juez constitucional en el siglo XXI*, t. II, México, UNAM, IJ, SCJN, 2009, págs.131-134.

junto con la audiencia y el consentimiento del Senado. En tanto que la formación del acto selectivo requiere más de una voluntad orgánica (Presidente y Senado), bien podrían denominarse este tipo de modelos como de “acto compuesto”, aunque otro sector de la doctrina también los ha denominado como “modelo de colaboración”¹⁶ o “sistema dual”¹⁷.

La segunda modalidad que se podría distinguir, es aquella donde la confección del acto selectivo queda en manos de un solo órgano, y por tanto, no se necesita de la participación de una voluntad orgánica externa. La forma en que se designa en Alemania a los magistrados del Tribunal Constitucional Federal nos puede ilustrar este tipo de modelos, pues el *Bundestag* tiene el poder de designar a ocho magistrados y no necesita de la participación de otro órgano, y el *Bundesrat* hace lo propio con otros ocho magistrados. En la medida que un solo órgano tiene la potestad de confeccionar el acto selectivo, podrían identificarse estas designaciones, con el título de modelos de “designación directa”.

La tercera modalidad vendría como consecuencia de distinguir las dos anteriores. En esta posición, se podrían adscribir las formas de designación que combinen la designación directa con el acto compuesto, y en esa medida, podría dársele a esta tercera vertiente de designaciones el nombre de modelos “mixtos”. Un ejemplo de este tipo de modelos puede ser la conformación del Tribunal Constitucional de Chile, donde ocho de sus componentes son designados directamente (tres por el Presidente de la República, tres por la Corte Suprema de Justicia y dos por el Senado) y dos mediante un acto compuesto integrado con la propuesta de la Cámara de Diputados y la designación del Senado.

1.2.1.- Modelos de acto compuesto

Como ya se ha avanzado, este tipo de modelos de designación del magistrado constitucional no pueden llevarse a cabo sin el concurso de voluntad de los distintos órganos facultados para ello. Es decir, que para

¹⁶ KELEMEN, Katalin: “Appointment of Constitutional Judges in a Comparative Perspective - with a proposal for a new model for Hungary”, en *Acta Juridica Hungarica*, vol. 54, núm. 1, 2013, págs. 13 y ss.

¹⁷ Así, BUSTILLOS, Julio: *El juez constitucional en el mundo. Perfil, carrera judicial, nombramiento, remuneración, desempeño y costos*, México, Porrúa, IMDPC, 2011, págs. 243-245.

confeccionar el acto de selección, se requiere de la participación sustantiva de varias voluntades “externas”, generalmente extraídas de diversos poderes del Estado, de ahí que se pueda apreciar cierta idea de acuerdo, consenso o cooperación entre los órganos participantes.

Se trata en general, de un modelo que, aludiendo a la clasificación de los actos en el ámbito del Derecho Administrativo, bien podríamos denominar como de “acto compuesto”, debido a que para su formación se requiere la concurrencia de órganos diferentes, cada uno con autoridad y facultades propias. Cada órgano asiste con una capacidad de participación de tipo “sustantivo” a la creación del acto de designación, por tanto en este supuesto no quedarían comprendidos otro tipo de concurrencias orgánicas que comportan la mera formalización del acto. Un ejemplo de lo anterior, podría ser la comunicación a otros órganos para el nombramiento o la publicación del mismo en los Boletines Oficiales.

Tampoco se estaría en presencia de una relación entre los denominados *interna corporis* de un órgano estatal, sino de órganos externos y diferenciados residenciados en otro punto del esquema estatal. Los órganos participantes, están dotados de competencia para coparticipar en la fabricación del acto de forma sustantiva y no meramente debida, formal o a manera de “sugerencia”.

Generalmente el procedimiento selectivo comporta una primera fase de propuesta y una segunda fase de “consentimiento”, como el modelo estadounidense (Presidente-Senado); o bien, como recientemente se introdujo en el Senado español, la designación se opera –en principio- sobre el abanico de candidaturas que fueron presentadas por los Parlamentos autonómicos al Senado. En cualquier caso, tanto la primera como la segunda fase, quedan a cargo de órganos diversos.

Los órganos, en ocasiones, podrán desplegar recíprocos contrapesos, dando lugar al rechazo, bloqueo o veto de las candidaturas, si bien, algunas veces llegan a preverse medidas para superarlos. Esta articulación dual de la conformación del acto selectivo hace pensar que como mínimo, se necesite de la participación de dos entidades, sin embargo no debe descartarse la posibilidad de que intervengan una mayor cantidad de órganos. Por ejemplo, más adelante se verá el caso de Venezuela, donde participan tres órganos.

El establecimiento de los órganos y la calibración de las relaciones entre éstos ha sido una tarea efectuada por cada constituyente. Las circunstancias políticas de cada experiencia constitucional han ido creando diversas modalidades de selección de magistrados que igualmente, para efectos de nuestra clasificación, guardan entre ellos la idea del acto compuesto.

Luego en el funcionamiento de estos modelos también se pueden observar otras diferencias. Por ejemplo uno de los órganos intervinientes puede ejercer mayor influjo sobre el otro, o bien aunque se impute la “voluntad” al órgano completo, en realidad el peso de la decisión recae en una formación interna o en un número reducido de personas, como pueden ser los líderes de los principales partidos políticos o el titular del ejecutivo.

Entre los modelos de acto compuesto, el panorama comparado ofrece una diversidad orgánica considerable y sobre todo una serie amplia de combinaciones. Entre todo ese universo de relaciones, un rasgo significativo es que la gran mayoría cuenta con la participación del poder legislativo, ya sea a través de una de sus cámaras, las dos, o sus presidencias.

Casi la totalidad de las veces le corresponde al poder legislativo operar la segunda y conclusiva fase de designación, consentimiento o consenso, aunque no faltan experiencias, ciertamente muy escasas, en que le corresponde únicamente la etapa de propuesta (Eslovaquia), hacer una preselección de las candidaturas (Bolivia), o como en Serbia, que en la elección de una tercera parte de los magistrados del Tribunal actúa como órgano “proponente” y en otro tercio actúa como órgano “designante”.

Cuando al poder legislativo le corresponde culminar el acto de selección, la designación puede tomar como base exclusivamente las propuestas que le presente el poder judicial, el poder ejecutivo, una corporación especial, o bien, las propuestas pueden ser presentadas por varios órganos. De todas estas opciones, la menos frecuente es la primera, esto es, la proposición de candidaturas a cargo del poder judicial.

Esta variedad de combinaciones, quedará más clara si se observa el siguiente cuadro, el cual será desarrollado en los siguientes apartados, en que se explicará con mayor detalle los modelos de designación de acto compuesto.

Cuadro 1.- Clasificación de los modelos de designación de acto compuesto

	Propone	Designa, concurre, consiente	Variedades
1.2.1.1	Ejecutivo	Legislativo	a) Pdte. de la Rep. propone a la Cámara alta: EE. UU., México, Argentina, Brasil, Chequia, Rusia. b) Pdte. de la Rep. propone a la Cámara baja: Eslovenia. c) Pdte. de la Rep. propone a la Asamblea unicameral: Albania, Montenegro, Panamá.
1.2.1.2	Judicial	Legislativo	-Pdte. de TS, con opinión del Pleno del TS y del Consejo de Administración de los Tribunales, propone a la Asamblea unicameral: Estonia.
1.2.1.3	Corporación	Legislativo	-Consejo Nacional de la Judicatura propone a la Asamblea unicameral (Asamblea Legislativa): El Salvador. -Junta Nominadora propone a la Asamblea unicameral (Congreso Nacional): Honduras. -Comité de Postulaciones Judiciales y Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, luego de procedimiento consecutivo de selección entre éstos, proponen a la Asamblea unicameral (Asamblea Nacional): Venezuela.
1.2.1.4	Varios órganos	Legislativo	-Parlamentarios; Pdte. de la Rep., en consulta con asociaciones, proponen a la Asamblea Nacional: Nicaragua. -Consejo de Estado, Presidente de la República y Corte Suprema, proponen al Senado: Colombia. -Grupos mínimos de 10 parlamentarios, Consejo de Ministros, Suprema Corte, proponen al Parlamento: Letonia. -Pdte. de la Rep., Consejo Judicial Republicano y Comisión parlamentaria, proponen al Parlamento: Macedonia.
1.2.1.5	Legislativo	Ejecutivo	-Consejo Nacional (Asamblea unicameral) propone al Pdte. de la Rep.: Eslovaquia.
1.2.1.6	Otros modelos	Otros modelos	-Preselección parlamentaria y se designa por voto popular: Bolivia. - Propuesta y designación a tres bandas: Pdte. de la Rep. a Asamblea; Asamblea a Pdte. de la Rep; Consejo Judicial y Fiscal proponen a Corte Suprema: Serbia (Ver cuadro 2).

1.2.1.1.- Propuesta del ejecutivo y designación o consentimiento del legislativo

En este modelo, la propuesta se deposita en el titular del poder ejecutivo, concretamente en el Presidente de la República, de la Nación o de la Federación, según la denominación de que se trate, y la segunda parte de “consentimiento” o designación queda a cargo del poder legislativo. En cuanto

a este último, puede tratarse de una Asamblea unicameral, o en sistemas bicamerales, alguna de las dos, siendo en estos casos más adoptada la opción del Senado o la Cámara alta.

a) Presidente de la República y Cámara alta

En esta modalidad interviene el titular del poder ejecutivo y de las dos Cámaras del poder legislativo, se deja la conclusiva fase de designación o consentimiento al Senado. En este terreno, se encuentra el caso que con seguridad puede considerarse el antecedente más significativo de este tipo de modelos de designación de jueces, esto es, la experiencia de Estados Unidos de América en donde la selección se articula entre la propuesta del ejecutivo y el consentimiento senatorial. La solera del procedimiento y su funcionamiento hasta nuestros días lo han convertido en un punto de referencia e incluso ha sido objeto de inspiración en varios países, como por ejemplo en México, Brasil o Argentina, aunque en este último, es quizá donde se haya seguido de forma más fiel.

Es verdad que originariamente, tanto en el modelo estadounidense como en algunos casos marcados por su influencia, se está en un supuesto de conformación de un órgano cúspide de la jurisdicción ordinaria como lo es el Tribunal Supremo y no de un moderno tribunal constitucional. Sin embargo, cabe mencionar que de algún modo estos tribunales supremos o tribunal federal en el caso de Brasil, han evolucionado hacia un funcionamiento muy parecido al de los tribunales constitucionales, razón por la cual los hemos incluido aquí.

El paso del tiempo y el examen de la experiencia comparada, además, han mostrado que este modelo de conformación es “exportable” sin mayores problemas. De ahí que ahora pueda encontrarse este sistema selectivo aplicado propiamente en tribunales constitucionales, como son los casos de la República Checa y la Federación Rusa.

El modelo estadounidense, *grosso modo* puede decirse que consiste en la designación de los jueces del Tribunal Supremo por el Presidente de la

República con la audiencia y el consentimiento del Senado¹⁸. El consentimiento senatorial se traduce en una medida de control parlamentario sobre el Gobierno y así ha funcionado en la práctica, pues el Comité Judicial del Senado lleva a cabo un vigoroso examen de la candidatura. En esta fase se investiga al candidato, solicitando información al Departamento de Justicia, a la Oficina Federal de Investigación (FBI), a la asociación profesional de los abogados (ABA), en ocasiones se requiere la consulta y la aprobación a los senadores del Estado de donde proviene el candidato, y sobre todo, el elemento más visible es la celebración de comparecencias públicas en sede parlamentaria, en las que los senadores pueden interpelar y debatir con el candidato propuesto con márgenes de tiempo muy amplios, pudiendo llegar al rechazo de la propuesta presidencial¹⁹.

Otros países han seguido las grandes trazas de este modelo, pero siguiendo su propio camino. En México, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son designados por el Presidente de la República con el acuerdo favorable de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, pero la diferencia es que el Presidente no formula una proposición única y directa sino que presenta una terna de candidatos por cada plaza a cubrir. Por su parte, el Senado, aunque realiza una comparecencia pública de los candidatos, esta no tiene parangón con la efectuada por el Senado estadounidense en cuanto a los exigentes niveles de control, interpelación y escrutinio público de los candidatos.

El Senado tiene el improrrogable plazo de treinta días para designar, pero también puede rechazar la terna, y el Presidente debe formular otra. El veto senatorial, sin embargo, no es absoluto, pues si el Senado vuelve a

¹⁸ Es también el modelo de designación de los jueces federales del país. Véase al respecto, SERRA CRISTÓBAL, Rosario: *La selección de jueces en Estados Unidos*, Navarra, Civitas Thomson Reuters, 2011.

¹⁹ Las designaciones de magistrados del Tribunal Supremo de EE. UU. despiertan mucho interés en ese país, de modo que el número de estudios que hay en la materia es verdaderamente elevado. A título meramente orientativo, TRIBE, Laurence H.: *God save this honourable Court. How the choice of Supreme Court Justices shapes our history*, New York, A Mentor Book, 1985; FREUND, Paul A.; ACKERMAN, Bruce A.; CARTER, Stephen; MONAGHAN, Henry Paul; TOTENBERG, Nina: "Essays on the Supreme Court appointment process", en *Harvard Law Review*, vol. 101, núm. 6, 1988, págs. 1146-1230; STRAUSS, David A.; SUNSTEIN, Cass R.: "The Senate, the Constitution, and the confirmation Process", en *The Yale Law Journal*, vol. 101, 1991-1992, págs. 1491-1524; PERRY, Barbara. A.: *A "Representative" Supreme Court? The impact of race, religion, and gender on appointments*, New York, Greenwood Press, 1991.

desestimar una segunda terna o si en cualquier caso no resolviese dentro de treinta días, ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de la terna elija el Presidente (96 CPEUM)²⁰.

En Argentina igualmente los jueces de la Corte Suprema son designados por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado. La reforma constitucional de 1994, a fin de dar más transparencia y consenso político al procedimiento, estableció que ese acuerdo debía prestarse en sesión pública y con el apoyo favorable de dos tercios de los miembros presentes (99.4 C)²¹.

Una peculiaridad que conviene resaltar del modelo selectivo argentino es el Decreto 222/03²², por medio del cual el Presidente racionaliza su propia facultad de propuesta introduciendo un procedimiento de difusión y consulta pública de la candidatura, y además contiene unos criterios para confeccionarla, los cuales tienen relación “con las diversidades de género,

²⁰ Estudios recientes sobre el caso mexicano en, ASTUDILLO, César: “El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en México”, en BOGDANDY, Armin von; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MORALES ANTONIAZZI, Mariela (coords.): *La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un lus constitutionale commune en América Latina?*, México, IIJ, UNAM, Max-Planck-Institut, IIDPC, 2010, t. I, págs. 345-385; MAYER-SERRA, Carlos Elizondo; MAGALONI, Ana Laura: “La forma es fondo: cómo se nombran y deciden los ministros de la Suprema Corte de Justicia”, en *Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, núm. 23, 2010, págs. 27-60.

²¹ Desde esa reforma constitucional no ha habido otras que hayan modificado el modelo selectivo hasta ahora. Durante 2013 se llevaron a cabo varias reformas judiciales en Argentina, pero ninguna de ellas incidió en la materia, pero por su relevancia bien podría referirse la que pretendía introducir el sistema de designación de los miembros del Consejo de la Magistratura mediante voto popular. El 18 de junio de 2013, por mayoría, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinó, entre otras cosas, la inconstitucionalidad de dicha reforma, porque no había en la Constitución una habilitación para que los poderes públicos introdujeran ese sistema electivo en la integración del Consejo, por lo que ningún poder puede arrogarse mayores facultades que las que le hayan conferido expresamente. Además, consideró la incompatibilidad de dicho sistema selectivo, debido a que los integrantes del Consejo lo hacen en nombre y por mandato de los estamentos judiciales, y el voto popular los convertiría en representantes del cuerpo electoral. El fallo está disponible en la siguiente base de datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: www.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verAnalisisDocumental&id=702685.

²² Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, núm. 30.175, viernes 20 de junio de 2003, pág. 2. Puede obtenerse en www.boletinoficial.gov.ar. Un estudio acerca de dicho Decreto, en ALONSO, Diego Andrés: “¿El nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue siendo un acto institucional? A propósito del dictado del Decreto PEN 222/03 y sus derivaciones respecto al control del procedimiento de designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en *El Derecho Administrativo* (Buenos Aires), 2 de octubre de 2006, disponible en www.ebullo.com.ar/pdf/330/330_esp.pdf?PHPSESSID=92e49efce440d4d0cf6ace68b43795bc; CLÉRICO, Laura; CARDINAUX, Nancy: “La redefinición de los roles de los actores en el nuevo proceso de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia”, en *Direito público e integracao. Revista Jurídica* (Sergipe, Brasil), núm. 3, 2010/1, disponible en www.jfse.jus.br/revista2011/03.html.

especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal” (art. 3).

Dicho Decreto contempla que, para la publicación de la candidatura, se deberá incluir la hoja de vida del candidato, declaración jurada de su patrimonio y la indicación de las asociaciones civiles o comerciales, estudios de abogados que haya integrado en los últimos ocho años y la nómina de clientes durante el mismo periodo (arts. 4 y 5).

El Decreto sin duda, resulta un antecedente encomiable en la delicada tarea de transparentar y racionalizar este tipo de facultades electivas a cargo del Presidente, y sobre todo en regímenes presidencialistas, donde esta figura cuenta con poderes importantes. El problema señalado por la doctrina del país, sin embargo, es que en la práctica no siempre se ha cumplido o no ha conseguido los mejores resultados²³.

Por otro lado, convive el control del Senado, el cual, mediante la Comisión de Acuerdos, somete la candidatura a un escrutinio ciudadano y celebra una intensa audiencia pública en sede parlamentaria, en la que se pueden presentar preguntas y observaciones por cualquier ciudadano²⁴. El Senado puede desechar la propuesta presidencial, sin que se prevea algún límite a la facultad de veto y ello, según ha señalado la doctrina, fuerza un equilibrio de actuación y negociación entre los poderes²⁵.

²³ En 2005 el Presidente Néstor Kirchner no procedió a cubrir dos plazas que habían quedado vacantes, pese a que el artículo 4 del Decreto 222/03 le fijaba un plazo de treinta días para hacerlo. Además, Néstor Pedro Sagües señala que tampoco ha respetado la diversidad geográfica y no ha asumido las críticas que se han formulado a los candidatos. El sistema ha auspiciado “un verdadero campeonato de búsqueda readhesiones, nacionales y extranjeras, para favorecer una postulación”. Véase “El estatuto del juez constitucional en Argentina”, en FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa. Libro en homenaje al doctor Jorge Carpizo*, México, IIJ, UNAM, 2012, pág. 231; más consideraciones críticas a esta y otras fases del procedimiento en, BERCHOLC, Jorge O.: “Aportes para una selección coherente y congruente de los jueces de un Tribunal Constitucional: el caso de la Corte Suprema de Argentina y sus recientes modificaciones”, en *Revista Aragonesa de Administración Pública*, núm. 30, 2007, págs. 479-538.

²⁴ El Reglamento del Senado de la Nación contiene reglas específicas sobre la designación de los jueces de la Corte Suprema, que son de aplicación a la selección de todos los jueces federales (arts. 22 y ss.).

²⁵ Al respecto puede verse un estudio en LLANOS, Mariana; FIGUEROA SCHIBBER, Constanza: “Prestando acuerdo: El Senado frente a los nombramientos del Poder Judicial en la Argentina democrática (1983-2006)”, en *Working papers of German Institute of Global and Area Studies* (GIGA), núm. 54, Hamburgo, 2007, disponible en www.giga-hamburg.de/workingpapers. De igual forma, conviene observar los informes que realiza en cada designación de jueces la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), disponibles en su portal de Internet: www.adc.org.ar.

En Brasil los once ministros del Supremo Tribunal Federal son electos por un acto compuesto entre la propuesta del Presidente de la República y el acuerdo del Senado por mayoría absoluta y previa audiencia pública de los candidatos (52, 84 y 101 C). Este modelo selectivo está dispuesto desde la primera Constitución republicana de 1891 y permanece hasta ahora inalterado²⁶.

En este procedimiento, sin embargo, no ha llegado producirse un ejercicio efectivo de control recíproco de poderes debido a que las propuestas presidenciales en la práctica no encuentran resistencia significativa en el Senado. El procedimiento además ha sido criticado recientemente por cierta politización debido a que un mismo Presidente de la República designó a siete de los once ministros²⁷. De ahí que la doctrina llegue a formular diversas propuestas para incentivar el control de las nominaciones presidenciales, tales como elevar la mayoría senatorial exigida para el acuerdo o dejar la designación de un número de ministros al Congreso o al poder judicial, como sucede en muchos países europeos²⁸.

En Europa hay por lo menos dos antecedentes de este modelo en los tribunales constitucionales de la República Checa y la Federación Rusa. En el primero, el Presidente de la República designa a los quince jueces constitucionales con el consentimiento del Senado (84.2 C), el cual tiene sesenta días para prestarlo, de no hacerlo en ese plazo se entenderá como otorgado a favor de la propuesta que le hayan presentado (§ 6.2 LTC). No hay

²⁶ Véase ALFONSO DA SILVA, Virgílio: "Supremo Tribunal Federal (Brasil)", en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.): *Crónica de Tribunales Constitucionales en Iberoamérica*, Buenos Aires, Marcial Pons, UNAM, 2009, pág. 88.

²⁷ Se trató del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que nombró a dos abogados: Carlos Britto y Eros Grau; un magistrado estatal: Cesar Peluso; a un juez de segundo grado estatal: Enrique Lewandowski; a un miembro del Ministerio Público Federal: Joaquim Barbosa. Además cubrió las plazas que dejaron vacantes por jubilación los ministros Nelson Jobim y Sepúlveda Pertence. Véase FIGUEIREDO, Marcelo: "La magistratura y el Supremo Tribunal Federal en el sistema constitucional brasileño", en FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa*, IIJ, UNAM, 2012, pág. 310; AILTON GARCIA, José: "Supremo Tribunal Federal brasileiro: análise da forma de escolha de seus ministros", en *Revista de Direito Constitucional e Internacional*, vol. 61, año 15, 2007, págs. 123-136.

²⁸ Véase TAVARES FILHO, Newton: *Democratização do processo de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal*, Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa, 2006, págs. 19-20.

criterios formales para elaborar las propuestas, de modo que han quedado al arbitrio del Presidente de turno²⁹.

En el Senado, las propuestas se delegan en dos Comisiones para su estudio (la Comisión Constitucional y la Comisión de Ciencia, Educación, Cultura y Derechos Humanos), y cada una celebra una comparecencia pública con el candidato, y finalmente se pasa al Pleno para su votación. Se tiene por prestado el consentimiento cuando los candidatos obtienen la mayoría de votos emitidos en secreto, no siendo éste un acto automático, puesto que el Senado ha llegado a rechazar en varias ocasiones las propuestas presidenciales³⁰.

En Rusia, por otro lado, la Constitución de 1993 fijó el actual sistema de designación de los magistrados, depositando la facultad de propuesta en el Presidente de la Federación y la elección en el Consejo de la Federación (128.2 C)³¹. No obstante, la Ley que disciplina al Tribunal de forma más reciente ha facultado a diversos órganos para que presenten candidaturas al Presidente de la Federación. Se entiende, en cualquier caso, que éste es quien tiene la última palabra para determinar la propuesta final que será sometida al Consejo.

La lista de órganos que pueden presentar esta suerte de “sugerencias” es relativamente larga. Comprende a los miembros de las dos Cámaras parlamentarias (el Consejo de la Federación y la Duma), los órganos legislativos de las diversas entidades que integran la Federación, los órganos judiciales supremos y los departamentos jurídicos federales, todas las

²⁹ El primer Presidente de la República Checa, Václav Havel (1993-2003) solía consultar a las asociaciones profesionales e instituciones educativas, mientras que el Presidente Václav Klaus (2003-2013) no lo ha hecho así. Véase KÜHN, Zdenek; KYSELA, Jan: “Nomination of constitutional justices in post-communist countries: trial, error, conflict in the Czech Republic”, en *European Constitutional Law Review*, vol. 2, Issue 2, 2006, pág. 200.

³⁰ *Idem*, pág. 198.

³¹ Un estudio que muestra las vicisitudes iniciales y actuales del Tribunal Constitucional ruso en BAUDOIN, Marie-Elisabeth: “La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie vue par un juriste français”, en *Cahiers du Conseil constitutionnel*, núm. 28 (Dossier: Russie), 2010. Una panorámica general del modelo ruso en LESAGE, Michel: “Présentation de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie”, en *Cahiers du Conseil constitutionnel*, núm. 1 (Dossier: Russie), 1996. Ambos disponibles en el portal de Internet del Consejo Constitucional francés: www.conseil-constitutionnel.fr. Véase además, FEDE, Fabio: “Federazione di Russia”, en *La giurisdizione costituzionale nelle repubbliche europee della ex Unione Sovietica*, Cedam, 2001, págs. 143-194.

asociaciones rusas de Derecho, de investigación jurídica e instituciones educativas³².

La propia Ley del Tribunal Constitucional, en su artículo noveno, dispone además que el Consejo debe “examinar la cuestión de la designación del juez”, a más tardar catorce días después de la recepción de la nominación del Presidente. La designación del juez debe hacerse de forma individual y mediante voto secreto, considerándose electo cuando haya obtenido la mayoría de votos del número total de miembros del Consejo de la Federación. Ello equivale a más de 83 votos puesto que el Consejo está integrado por 166 miembros, esto es, dos representantes por cada una de las 83 entidades territoriales del Estado ruso³³ (concretamente, uno es elegido por el órgano legislativo y otro por el ejecutivo de cada sujeto federal).

Anterior a la Constitución de 1993, el Tribunal se integraba con quince jueces constitucionales que se mantenían en el cargo hasta la edad de jubilación de los 65 años. Sin embargo, ahora la conformación se ha elevado a los diecinueve miembros y se nombran para un periodo único de doce años. En la actualidad conviven todavía jueces elegidos con ambos sistemas, debido a que los designados en el régimen anterior se mantendrán en el cargo hasta la jubilación atendiendo a la normativa de transición, mientras que los elegidos bajo las nuevas disposiciones cumplen sólo un periodo doce años³⁴.

b) Presidente de la República y Cámara baja

Esta variante es muy parecida a la anterior. Por un lado, el poder de proposición parte igualmente del titular del poder ejecutivo, pero en este caso, de las dos Cámaras del poder legislativo, se opta ya no por el Senado, sino por la Cámara de representación popular para depositar el poder final de

³² Se trata del artículo 9 de la Ley Constitucional Federal del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa.

³³ Los sujetos federales tienen diversa autonomía. Consisten en 21 repúblicas, 46 *óblast* o provincias, 9 *krais* o territorios, 1 *óblast* autónomo (el Óblast Autónomo Hebreo), 4 distritos autónomos y 2 ciudades federales (Moscú y San Petersburgo). Estos números podrían cambiar en un momento dado, pues se han planteado algunos referendos para unir varios sujetos federales, como ya ha sucedido entre los años de 2005 y 2007.

³⁴ La normativa transitoria en la materia se encuentra en el numeral 5º de las disposiciones finales y transitorias de la Constitución rusa de 12 de diciembre de 1993, que en lo que interesa establece que “Tras la entrada en vigor de la Constitución, los jueces de todos los tribunales de la Federación de Rusia conservarán sus atribuciones hasta la expiración del plazo por el que fueron elegidos. Los cargos vacantes serán cubiertos según el procedimiento previsto por la presente Constitución”.

designación o para completar el acto selectivo. Ciertamente de los casos estudiados, esta opción no ha sido la más seguida, pues de momento se tiene referencia sólo de la Corte Constitucional de Eslovenia³⁵.

En efecto, el Parlamento de Eslovenia se compone por un lado, de la Cámara alta, denominada Consejo Nacional y definida constitucionalmente como el cuerpo de representación de los intereses sociales, económicos, profesionales y locales del país (96 C), y por otro lado, por la Cámara de representación popular llamada la Asamblea Nacional (80-95 C).

Es esta última Cámara la que tiene a su cargo la tarea de designar a los magistrados constitucionales entre las nóminas presentadas por el Presidente de la República. Lo debe hacer a través de una votación secreta y con el respaldo de la mayoría de los diputados. El Consejo Nacional del país, esto es su Cámara alta, no participa en la designación (163 C).

El procedimiento instaurado es relativamente reciente pues se remonta a la Constitución de 23 de diciembre de 1991 con la cual el país consigue la independencia de la República de Yugoslavia. En general, ha habido dos rondas de renovación, considerando que se eligen para un periodo de nueve años, siendo la primera en 1998 y la segunda entre 2007 y 2008, si bien, han existido múltiples renovaciones personales anticipadas³⁶.

La Ley de la Corte Constitucional³⁷ (LCC) precisa con cierto detalle el procedimiento selectivo, en el cual, *grosso modo* el Presidente debe publicar en la Gaceta Oficial una convocatoria, de la cual extraerá las propuestas que llevará a la Asamblea, aunque puede incluir otras que no hayan concurrido a la misma. En cualquier caso, deberá acompañar la aceptación por escrito del candidato y una exposición de motivos de la candidatura, requisito sin duda muy llamativo, pues no se suelen encontrar obligaciones expresas de

³⁵ Una breve monografía de la materia en castellano, aunque con escueta referencia a la designación de jueces constitucionales en MARJAN MAVČIČ, Arne: *La justicia constitucional en Eslovenia*, México, Porrúa, IMDPC, 2011.

³⁶ Según la información ofrecida en el portal de Internet de la Corte Constitucional de Eslovenia www.us-rs.si/en/about-the-court/judges-3616/judges/, la mayoría de los primeros jueces constitucionales venían designados con anterioridad a la Constitución de 1991, por lo que en la transición pasaron a la nueva Corte Constitucional para desempeñar el periodo de cargo que les restaba.

³⁷ Ley de la Corte Constitucional (texto consolidado con las reformas de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Eslovenia, núm. 64/07).

fundamentar las decisiones en materia de designación de jueces constitucionales (12.2 LCC).

El Presidente puede presentar propuestas hasta por tres veces en que la Asamblea le rechace las candidaturas, existiendo en la votación parlamentaria el mecanismo de la “segunda vuelta” para los casos en que no se consiga la mayoría necesaria o no se elijan todas las plazas vacantes (11-14 LCC). La Asamblea elige a los jueces por votación secreta y por mayoría de todos los diputados (14 LCC).

c) Presidente de la República y Asamblea unicameral

En esta combinación se dejan atrás las experiencias constitucionales bicamerales, de modo que la etapa de designación descansa en la única Cámara del poder legislativo y la etapa de propuesta sigue estando a cargo del Presidente de la República. La dinámica electiva, por tanto, no será muy distinta de las anteriores, al contar con la convergencia de participación entre el Presidente y el órgano parlamentario. Aquí podemos encontrar los casos de Albania, el más reciente de Montenegro y el de Panamá, éste último si bien con alguna observación que se hará notar.

Comenzando por Albania, debe decirse que ha sido a partir de la Constitución de 1998 que se ha incorporado a esta modalidad de procedimiento selectivo, pues desde el establecimiento de la Corte Constitucional (*Gjykata Kushtetuese*) en 1992, esta había adoptado el modelo de elección directa, destinando cinco plazas a la designación de la Asamblea y las restantes cuatro al Presidente de la República. La Constitución de 1998 y la Ley de Organización y Funcionamiento de la Corte Constitucional de 2000³⁸ (LCC), determinaron ahora que los nueve miembros de la Corte serían “designados por el Presidente de la República con el consentimiento de la Asamblea” (125.1 C, 7 LCC). Este procedimiento se puso en marcha en 2001³⁹

³⁸ Ley núm. 8577, de 10 de febrero de 2000, sobre la “Organización y Funcionamiento de la Corte Constitucional de la República de Albania”. Esta Ley fue realizada con el apoyo de la Comisión de Venecia. Véase al respecto el apartado histórico de la página web de la Corte Constitucional albanesa, www.gjk.gov.al.

³⁹ La disposición transitoria de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Corte Constitucional albanesa de 2000, estableció en su artículo 82 que “el cargo de los jueces de la Corte Constitucional designados en 1992 termina en 2001”. A partir de este año se aplicó el nuevo procedimiento selectivo previsto en la Constitución de 1998.

y según ha reportado la Comisión Europea, no se ha dejado de padecer la indeseable politización de los nombramientos⁴⁰.

El consentimiento de la Asamblea ha sido recientemente detallado en el Reglamento parlamentario, determinando que sea la “Comisión de Asuntos Jurídicos, Administración Pública y Derechos Humanos” la que revise y elabore un informe de las propuestas presidenciales (punto 6), teniendo la posibilidad de organizar audiencias públicas con los candidatos (punto 7). El informe será rendido a la Asamblea plenaria para que tome la decisión, en votación nominal, por mayoría de votos, siempre que se cuente con la presencia de más de la mitad de los miembros del Parlamento⁴¹.

Por su parte en Montenegro, el establecimiento de la Corte Constitucional se remonta al año de 1963 (entrando en funciones un año después), época en la que formaba parte de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, manteniéndose posteriormente en la República Federal de Yugoslavia (1992-2003), luego en la Unión Estatal de Serbia y Montenegro (2003-2006) y finalmente hasta la Constitución de 2007, por la que se instituyó en un Estado independiente.

La Constitución montenegrina de 2007 tiene la peculiaridad que en el apartado regulatorio de la Corte Constitucional (arts. 149-154), no establece directamente los órganos que participan en la designación de los magistrados, limitándose en la materia a establecer que se compondrá de siete jueces nombrados para un periodo de nueve años y otras disposiciones sobre los requisitos de elegibilidad y sobre la designación de la Presidencia (153 C). Sin embargo, deberá acudir a diversos apartados de la propia Constitución para integrar el procedimiento selectivo y observar que los jueces constitucionales son designados con el voto de la mayoría del número total de diputados del Parlamento unicameral⁴² (82.13, 91 C), de entre las propuestas que presenta el Presidente de la República de Montenegro (95.5 C).

⁴⁰ Véase al respecto el documento elaborado por la Comisión Europea, (SEC (2011) 1205 final), denominado “Albania 2011 progress report”, Bruselas, 2011, págs. 7, 11 y 51, disponible en http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/al_rapport_2011_en.pdf.

⁴¹ Arts. 55, 60 y 111 del Reglamento de la Asamblea, de acuerdo a las reformas operadas en 2008 y 2010. La mayoría de votos que se exige, constituye la regla general, al no prever la Constitución una mayoría calificada (78.1 C).

⁴² La designación parlamentaria por esa mayoría simple fue objeto de reiteradas observaciones críticas por parte de la Comisión de Venecia. Véase al efecto la opinión 392/2006, a la Constitución de Montenegro (CDL-AD(2007)047), con base en los comentarios de Anthony

Se podría esperar que la Ley de la propia Corte Constitucional⁴³ detallara en mayor medida el modelo selectivo de los jueces constitucionales, sin embargo, la misma se limita a establecer en su artículo sexto que el “Presidente y los jueces de la Corte Constitucional serán elegidos y destituidos en la forma y bajo las condiciones prescritas por la Constitución”. Los riesgos que supone la escasa regulación del procedimiento selectivo para el fortalecimiento institucional de la Corte, han sido alertados en diversas opiniones elaboradas por la Comisión de Venecia desde que la Ley se encontraba en fase de proyecto, sin embargo no han sido atendidas.

Hasta ahora las modalidades que se han referido han optado por depositar la etapa de propuesta al titular del poder ejecutivo, pero se tiene la experiencia de Panamá, en donde formalmente la primera fase no recae únicamente en el Presidente de la República, sino que además se requiere el acuerdo de un órgano colegiado como es el Gobierno, en donde el Presidente hace parte. En este caso, la facultad propositiva descansa en el “Presidente con el acuerdo del Gobierno”, pero en la práctica la sustantividad del acto se concentra solamente en el Presidente y por ello el caso panameño es colocado en este punto de la clasificación.

Según el orden jurídico de Panamá, los nueve Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene competencias en materia de jurisdicción constitucional, son designados “mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, con sujeción a la aprobación del Órgano Legislativo, para un periodo de diez años” (200.2, 203 C). Dicho acuerdo del Consejo de Gabinete, debe venir con la aprobación del Presidente de la República (200.2 C). El Consejo de Gabinete es la reunión del Presidente de la República, con los vicepresidentes y

Bradley, Asbjørn Eide, Guido Neppi Modona y Kaarlo Tuori, adoptada en la 73ª sesión plenaria, 14-15 de diciembre de 2007, Estrasburgo, 2007, págs. 17-18; y la opinión 479/2008, al borrador de la Ley de la Corte Constitucional de Montenegro (CDL-AD(2008)030), con base en los comentarios de Aivars Endzins, Christoph Grabenwarter, Harry Gstöhl y Jasna Omejec, adoptada en la 76ª sesión plenaria, 17-18 de octubre de 2008, Estrasburgo, 2008, pág. 5, sin que haya sido adoptada la recomendación de exigir una mayoría calificada para garantizar la independencia de la Corte. Más recientemente, la Comisión ha reiterado la necesidad de que la designación parlamentaria de magistrados se realice con una mayoría calificada atendiendo a los estándares europeos: opinión 626/2011, al borrador de las enmiendas a la Constitución de Montenegro, así como a las de la Ley de Cortes, Ley de la oficina del Procurador y Ley del Consejo Judicial (CDL-AD(2011)010), con base en los comentarios de James Hamilton, Guido Neppi Modona y Kaarlo Tuori, adoptada en la 87ª sesión plenaria, 17-18 de junio de 2011, Estrasburgo, 2011, pág. 8.

⁴³ Ley de la Corte Constitucional de Montenegro, publicada en la Gaceta Oficial de Montenegro, núm. 64/2008, de 27 de octubre de 2008.

Ministros de Estado (199 C), y el Órgano Legislativo está constituido por la Asamblea Nacional (146 C).

Recientemente, mediante una Resolución de Gabinete se disciplinó el procedimiento de propuesta, creando al efecto una Comisión especial “de Credenciales”, integrada por autoridades universitarias, profesionales, de gobierno y un representante de la sociedad civil⁴⁴, la cual tenía a su cargo la recepción y depuración de las candidaturas que hayan atendido a la convocatoria, presentando al Consejo un informe (acreditación) de las mismas⁴⁵. Esa Resolución, que en cierta medida racionalizaba la facultad propositiva del Consejo de Gabinete, ha sido dejada sin efectos mediante otra, aduciendo razones de “inmediatez en garantizar el carácter expedito e ininterrumpido en el funcionamiento de la administración de justicia”⁴⁶.

La suspensión de dicha Resolución, la necesidad del consentimiento presidencial y el enorme influjo que éste suele proyectar en la práctica sobre las decisiones del Consejo de Gabinete, convierte en los hechos este modelo en uno de propuesta netamente presidencial. El preponderante papel del Presidente de la República, encuentra franca correspondencia con el papel institucional que la Constitución le ha conferido en el sistema político panameño, estructurado tendencialmente en un sistema presidencial.

Finalmente el acto de designación se completa con la intervención de la Asamblea Nacional, a la cual le compete “aprobar o improbar los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema Justicia” (161.4 C), requiriéndose para ello la mayoría absoluta de votos, según el Reglamento parlamentario (art. 212).

1.2.1.2.- Propuesta del judicial y designación por el legislativo

Un modelo singular, lo plantea sin duda la experiencia estonia, debido a que la formulación de todas las propuestas de candidatos a jueces recae en la

⁴⁴ Se trataba específicamente de la organización denominada “Alianza Ciudadana Pro Justicia” (www.alianzaprojusticia.org.pa), que entre otras actividades, suelen observar los procedimientos de designación de altos cargos públicos en el país.

⁴⁵ Resolución de Gabinete, núm. 121, de 18 de septiembre de 2009, modificada por la Resolución de Gabinete, núm. 133, de 13 de octubre de 2009, mediante la cual eleva el plazo de diez a veintiún días para que la Comisión de Credenciales reciba las candidaturas.

⁴⁶ Resolución de Gabinete, núm. 67, de 19 de abril de 2011.

cabeza del máximo órgano jurisdiccional del país, esto es, en el Presidente del Tribunal Supremo, seña que no es habitual en la experiencia comparada.

Estonia, por otro lado, es quizá de momento, la única que en Europa ha adoptado en su jurisdicción constitucional el modelo de una Sala especializada en la materia dentro de su Tribunal Supremo. El número de miembros que componen al Tribunal Supremo no se encuentra en la Constitución, sino en la Ley de la Jurisdicción⁴⁷ (*Courts Act*, en adelante CA), que establece la cantidad de diecinueve jueces (25.3 CA). El Presidente del Tribunal Supremo no es elegido por el propio colegio del Tribunal, sino por el Parlamento a propuesta del Presidente de la República, para un periodo único de nueve años (65.7 y 150 C, 27 CA).

Todos los jueces son designados por el Parlamento (*Riigifogu*), a partir de las propuestas presentadas por nada menos que el propio Presidente del Tribunal Supremo (150 C, 27.2.2 CA). Los jueces son designados hasta la jubilación para el Tribunal en general⁴⁸, y luego internamente el Pleno establece la integración de las Salas, entre ellas la Sala de Revisión Constitucional.

Actualmente la Sala Civil está integrada por siete jueces, la Sala Penal por seis, la Sala Administrativa por cinco jueces⁴⁹, y con el Presidente, suman los diecinueve integrantes que debe tener del Tribunal (25.3 CA). La Sala de Revisión Constitucional por su parte, debe integrarse de nueve personas, esto es, del Presidente del Tribunal Supremo y ocho miembros más designados por el Pleno de entre los jueces del resto de Salas (28, 29 CA). Esto es, la Sala Constitucional es un tipo de formación especial dentro del Tribunal, y no una Sala independiente del resto. La Sala Constitucional cuenta además con un mecanismo de renovación escalonado por medio del cual se integran a la misma dos jueces de las otras Salas cada año⁵⁰.

⁴⁷ Courts Act, de 19 de junio de 2002.

⁴⁸ La edad de jubilación es a los 68 años, según el art. 99.2 de la CA.

⁴⁹ Véase *The Supreme Court of Estonia. Ius est ars boni et acqui*, Tartu, 2011, págs. 10-12.

⁵⁰ De acuerdo al artículo 29 del Reglamento interno del Tribunal Supremo, cada año el Pleno, con la propuesta del Presidente designa a dos nuevos miembros para la Sala Constitucional, tomando en cuenta la posición del resto de Salas y su cardinal representación en la Sala Constitucional. Los dos miembros designados vienen a sustituir al par de jueces que más tiempo lleven desempeñando funciones en dicha Sala, de modo que los jueces pueden estar como mucho, cuatro años en la Sala Constitucional y luego pasarán a la que originalmente pertenecieron. La información es recogida en, SUPREME COURT OF ESTONIA: "Separation of Powers and Independence of Constitutional Courts and Equivalent Bodies", en *2nd Congress of*

Las propuestas de designación de jueces que lleva a cabo el Presidente del Tribunal Supremo, se articulan sobre la base de un concurso público para cubrir la vacante⁵¹. Antes de proponer los candidatos al Parlamento unicameral, el Presidente debe considerar la opinión del Pleno del Tribunal Supremo (55.4 CA) y el Pleno del Consejo de Administración de los Tribunales (41.3.1 CA). El Parlamento deberá designar entre las propuestas presentadas a quien habrá de ser juez, al que obtenga la mayoría simple en una votación secreta, siempre que se encuentren presentes más de la mitad de los miembros del Parlamento⁵².

1.2.1.3.- Propuesta de una corporación y designación por el legislativo

En este apartado se ha agrupado a las experiencias constitucionales en donde su modelo selectivo de magistrados se caracteriza porque la primera etapa de proposición de candidaturas para la magistratura constitucional, no descansa en principio en alguno de los habituales poderes del Estado, sino que se confeccionan en exclusiva a través de órganos de muy diversa índole que en este trabajo hemos generalizado bajo la denominación de “corporaciones”, que en algunos casos pueden ser especiales o *ad hoc*. Por otro lado, la segunda y definitiva etapa de designación queda a cargo del poder legislativo.

Entre las corporaciones que se aluden, quizá el único elemento que guarden en común sea la facultad que tienen de proponer las candidaturas de magistrado, pues ni por su forma de designación, composición, estatuto y funcionamiento, tales instituciones llegan a asemejarse.

(i) En uno de los casos, se trata del órgano encargado de la administración, capacitación y evaluación del poder judicial, al estilo de los conocidos “Consejos de Judicatura”, o “Consejos Generales del Poder Judicial”, como sucede en el caso del “Consejo Nacional de la Judicatura” en El Salvador. Se trata pues, de un órgano estatal permanente que entre el abanico de sus funciones ordinarias se encuentra la de elaborar una lista de candidatos a la magistratura constitucional y presentarla a la Asamblea Legislativa para

the World Conference on Constitutional Justice, Council of Europe, Venice Commission, Rio de Janeiro, Brazil, 2011, pág. 5.

⁵¹ Idem, pág. 10.

⁵² Riigikogu Rules of Procedure and Internal Rules Act, § 76, 78 y 79.

que con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros designe a los jueces⁵³.

El Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador se integra y renueva en la línea que lo vienen haciendo los consejos judiciales de similar naturaleza, es decir, a través de procedimientos selectivos con intervención de los órganos políticos con cierta participación del gremio judicial. En el caso, se trata de un acto compuesto integrado por la designación parlamentaria y la presentación de ternas a cargo de instituciones profesionales, docentes, judiciales y fiscales, de entre miembros de su seno, seleccionados mediante asambleas convocadas especialmente para ello⁵⁴.

(ii) En otros países, la corporación que participa en la designación de los magistrados constitucionales podríamos considerarla especial, porque no es un órgano permanente, sino que está exclusivamente integrado para elaborar y presentar las candidaturas, disolviéndose una vez terminada la misión. Así sucede por ejemplo, con la “Junta Nominadora” en Honduras.

La Junta Nominadora está compuesta por siete integrantes. Uno es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y los otros seis son representantes elegidos por cada una de las siguientes entidades: la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, el Consejo Hondureño de la

⁵³ De esta manera se eligen a todos los magistrados de la Corte Suprema, incluyendo a los cinco miembros propietarios y cinco suplentes de la Sala de lo Constitucional (186.3, 131.19 C). Desde la designación parlamentaria se determina a qué Sala pertenecerá el magistrado, de modo que no es el Pleno de la Corte la que distribuye las Salas, como sí sucede en otras partes. La lista de aspirantes que presenta el Consejo, contendrá un número de miembros correspondiente al triple de los magistrados propietarios y suplentes a elegir. De ellos, la mitad se incorporará a propuesta de entidades representativas de abogados resultante del acto electoral que organicen al efecto y la otra mitad a propuesta del propio Consejo. Todos deberán estar inscritos previamente en el registro especial “de abogados elegibles”, esto es, un registro público donde figuran los nombres de los profesionales del Derecho que han acreditado ante el Consejo la posesión de los requisitos para optar por el cargo de magistrado. Véanse los arts. 49-51, 53, y 56-58, de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura. Más detalles del procedimiento selectivo en ALVERGUE, Pablo Mauricio: “El estatus del juez constitucional en El Salvador”, en FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa*, México, IIJ, UNAM, 2012, págs. 459-473; NÚÑEZ RIVERO, Cayetano; MONTESINOS GIRALT, Manuel: “La Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador: concepto y composición”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 14, 2004, págs. 359-374.

⁵⁴ De forma concreta, la composición del Consejo se articula en razón de “tres abogados de la República, propuestos por el gremio de abogados”; un abogado docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador; un abogado docente de las universidades privadas del país, debidamente autorizadas; un abogado propuesto por el Ministerio Público; y un miembro electo por los Magistrados de Cámaras de segunda instancia, Jueces de primera instancia y Jueces de Paz. Véanse los arts. 131.19, 187.3 de la C y 9, 10, 12, 13 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura.

Empresa Privada, los Claustros de Profesores de las Escuelas de Ciencias Jurídicas, las organizaciones de la Sociedad Civil y las Confederaciones de Trabajadores. Estas organizaciones son convocadas por el Presidente del Congreso Nacional para que cada una designe al representante que integrará la Junta y que llevará a ésta las propuestas de magistrados del gremio, que junto con las autoproposiciones que se presenten, confeccionarán la lista que se llevará al Congreso⁵⁵.

La Junta se define como “un órgano colegiado y deliberante, dotado de absoluta independencia y autonomía en sus decisiones”. Finalmente cabe mencionar, que en el supuesto (poco probable) de que la Junta no llegase a formular propuestas, las normas estipulan que el Congreso puede proceder por su cuenta a la elección de los magistrados⁵⁶.

(iii) Mención aparte por su complejidad merece el caso venezolano, en el cual conviven en la etapa de elaboración de candidaturas dos corporaciones singulares, una permanente, aunque de renovación bianual, como lo es el “Comité de Postulaciones Judiciales”, y otra convocada *ad hoc*, el “Comité de Evaluación de Postulaciones” del “Poder Ciudadano”, este último, una rama más en que la Constitución venezolana ha dividido el poder público.

La Asamblea de este país, debe efectuar su elección de entre las propuestas que le presentan los dos mencionados comités, luego de un procedimiento consecutivo de preselección entre éstos. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone que la elección parlamentaria precisa del voto de las dos terceras partes de sus miembros, y de no lograrse bastará la mayoría simple en la cuarta convocatoria de la Asamblea plenaria (arts. 8 y 38).

El “Comité de Postulaciones Judiciales” es un órgano que por disposición constitucional se define como “asesor del Poder Judicial”, integrado

⁵⁵ Los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, incluidos ahí los cinco que componen la Sala Constitucional, son elegidos por el Congreso Nacional de entre las propuestas presentadas por la Junta Nominadora. Una vez elegidos los magistrados, la Presidencia de la Corte en Pleno designa a las personas que integrarán todas las Salas. El Congreso efectúa las designaciones con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, y en caso de no conseguirse, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente a los que faltasen, tantas veces sea necesario, hasta lograr la mayoría exigida. Véanse los arts. 311-312 de la Constitución; 2, 9, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Junta Nominadora para la elección de candidatos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

⁵⁶ Véase respectivamente, el art. 1.2 de Ley Orgánica de la Junta Nominadora para la elección de candidatos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el art. 312 de la Constitución.

por “representantes de los diferentes sectores de la sociedad” (270 C), aunque luego la Ley del Tribunal ha fijado que de sus once miembros cinco sean diputados y que el resto provenga de los sectores sociales, estableciendo para todos su designación a cargo de la Asamblea con el voto de la mayoría simple (art. 65).

Ello sin duda, ha sido una opción que ha recibido objeciones de inconstitucionalidad por la doctrina y ha sido advertida de los riesgos que supone para la independencia judicial por parte de instituciones internacionales⁵⁷. Ello es así, puesto que se ha creado una corporación vinculada en demasía a la mayoría simple que domine la Asamblea Nacional, mientras que la Constitución la había configurado como un órgano de cierta representatividad ciudadana⁵⁸.

El “Comité de Evaluación de Postulaciones” del Poder Ciudadano, según la ley que lo disciplina⁵⁹, dispone que se integrará por un número no mayor de veinticinco miembros, “representantes de diversos sectores de la sociedad”, los cuales serán convocados por el Consejo Moral Republicano⁶⁰, para seleccionarlos mediante procedimiento público. La Ley sin embargo, no previó

⁵⁷ Véase, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: *Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela*, doc. 4 (OEA/Ser.L/V/II.118), 24 de octubre de 2003; HUMAN RIGHTS WATCH: *Manipulando el Estado de Derecho. Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela*, junio de 2004, vol. 16, núm. 3 (B).

⁵⁸ La ley en general ha sido muy criticada y existen muchas razones para ello. Primeramente su tramitación parlamentaria fue polémica debido a que no fue aprobada con la mayoría necesaria para modificar las leyes orgánicas (203 C). Además fue impugnada de inconstitucional por la forma de integración del Comité de Postulaciones Judiciales, por haber previsto la posibilidad de designar a los magistrados por mayoría simple, y por la manera tan amplia en que estableció los supuestos de remoción de los magistrados (creando la peculiar figura de la “anulación del acto administrativo de designación de los magistrados, por mayoría simple de la Asamblea). Véase además, CASAL H., Jesús M.: “Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Venezuela)”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.): *Crónica de Tribunales Constitucionales en Iberoamérica*, Buenos Aires, Marcial Pons, UNAM, 2009, págs. 507-508; CORAO AYALA, Carlos: “Estatuto del juez constitucional en Venezuela”, en FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa*, México, IIJ, UNAM, 2012, págs. 633 y 634; BREWER-CARÍAS, Allan R.: “El rol del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, en el marco de la ausencia de separación de poderes, producto del régimen autoritario”, en *Segundo Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional* (15 de marzo de 2011), pág. 18; y del mismo autor, “La participación ciudadana en la designación de los titulares de los órganos no electos de los poderes públicos en Venezuela y sus vicisitudes políticas”, en *III Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo sobre participación ciudadana y administración* (Homenaje al Rector José Luis Meilán), La Coruña, Pazo de Mariñán, 6-9 de octubre de 2004, ambos disponibles en www.brewercarias.com.

⁵⁹ Ley Orgánica del Poder Ciudadano (Gaceta Oficial 37310, de 25/10/2001), art. 23.

⁶⁰ Es la entidad que ejerce las facultades del Poder Ciudadano. Es un órgano integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal y el Contralor General de la República (273 C).

mayores detalles del procedimiento selectivo, sino que lo remitió a la normativa interna del Consejo Moral Republicano, que tampoco ha contemplado nada al respecto⁶¹. En el momento que se ha requerido integrar el Comité, el Consejo Moral Republicano, sin mediar el preceptivo procedimiento público, lo ha conformado en su mayoría por diputados y funcionarios del gobierno, y así han participado en la elaboración de postulaciones para la designación de cargos públicos⁶².

1.2.1.4.- Propuesta de varios órganos y designación por el legislativo

Otra de las modalidades que se pueden encontrar es aquella donde la facultad para proponer magistrados se encuentra distribuida entre varios órganos, los cuales, deben presentar sus propuestas al poder legislativo para que este lleve a cabo el acto final de designación.

La variedad de órganos proponentes que ofrece el panorama comparado es sin duda, muy significativa. Entre ellos, se pueden hallar especialmente titulares de poderes del Estado, como lo es el Presidente de la República, o los parlamentarios como sucede en Nicaragua; también suelen encontrarse habilitados para efectuar propuestas a quienes encabezan los órganos del poder público, por ejemplo a los Presidentes del Parlamento o del Tribunal Supremo, como acontece en Lituania⁶³; en otras ocasiones sólo se hacen referencias globales al órgano, por ejemplo se alude a la “Corte Suprema”, al “Consejo de Ministros”, “Consejo de Estado”, “Consejo del Poder Judicial”, entre otros.

La intención que subyace en este tipo de modelos es múltiple. Por un lado, se busca que la facultad de propuesta sea extraída de diversos ámbitos del poder público, en especial, de cada uno de los tres clásicos poderes del Estado. Por otro lado, se favorece que la candidatura pueda venir confeccionada tanto por elementos técnico-profesionales como con

⁶¹ Véanse las “Normas que contiene la estructura organizativa y funcional del Consejo Moral Republicano”, emitidas por el Consejo Moral Republicano mediante Resolución núm. CMR-2003-006, de 23 de mayo de 2003 (publicada en la Gaceta Oficial núm. 37719, de 26/06/2003).

⁶² En 2007 participaron en la recepción y evaluación de las postulaciones para los cargos de Fiscal General de la República, Defensor del Pueblo y Contralor General de la República. Véase BREWER-CARÍAS, Allan R.: “Sobre el nombramiento irregular por la Asamblea Nacional de los titulares de los órganos del Poder ciudadano en 2007”, en *Revista de Derecho Público*, núm. 113 (Caracas), 2008, págs. 85-88.

⁶³ Además del Presidente de la República.

determinado respaldo y visión política: el primero, derivado del influjo que podrían imprimir en la confección de la candidatura los tribunales supremos, sus presidentes o los consejos judiciales o de Estado y el segundo, con el que podrían derivar las designaciones del titular del ejecutivo, el consejo de ministros o los parlamentarios.

Finalmente, el modelo se inserta en la intención general por evitar monopolios en el poder de designación, intentando hacer más equilibrada dicha facultad, en un marco general de inserción de pesos y contrapesos entre los órganos estatales.

Esas son las líneas generalmente marcadas por los países que han adoptado esta modalidad selectiva de sus magistrados constitucionales, aunque como se verá, ningún modelo se ha estructurado exactamente igual. Por ejemplo, en Nicaragua las listas de propuestas para cada cargo son presentadas a la Asamblea Nacional por los propios componentes del poder legislativo y por el Presidente de la República, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes, aunque también se prevé la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia les presente candidaturas de la carrera judicial a los órganos proponentes⁶⁴. Si no hubiere listas presentadas por el Presidente de la República, bastarán las propuestas formuladas por los diputados de la Asamblea Nacional (138.7 C)⁶⁵.

En Colombia el Senado de la República debe designar por mayoría simple a los nueve Magistrados de la Corte Constitucional para un periodo individual de ocho años, de entre las ternas que le presenten, tres el Consejo de Estado, tres el Presidente de la República y tres la Corte Suprema⁶⁶; en

⁶⁴ Véase el art. 3, párrafo 3º de la Ley de Carrera Judicial.

⁶⁵ La Asamblea Nacional elegirá a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el 60% de los diputados miembros (138.7 C). Una vez que la Asamblea Nacional ha publicado la convocatoria correspondiente, el procedimiento parlamentario es llevado a cabo a través de una "Comisión Especial de carácter constitucional", la cual recibe las propuestas, abre procesos de consultas y audiencias para los candidatos, dictamina y presenta el informe de recomendación al Pleno. Véanse los arts. 77.6, 128-130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Algunos estudios sobre la justicia constitucional nicaragüense en, CUAREZMA TERÁN, Sergio; MORENO CASTILLO, María Asunción: "La justicia constitucional en Nicaragua", en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 1, 1997, págs. 255-274; PÉREZ TREMPES, Pablo: "La justicia constitucional en Nicaragua", en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 106, 1999, págs. 9-27; ESCOBAR FORNOS, Iván: "El estatuto jurídico del juez constitucional en Nicaragua", en FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa*, México, IIJ, UNAM, 2012, págs. 529-547.

⁶⁶ Véase el art. 239 de la Constitución y el art. 44 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Una panorámica sobre la composición de la Corte Constitucional de Colombia en

Letonia debe designar el Parlamento (*Saeima*) dentro de las propuestas que le presentan un grupo de no menos de diez parlamentarios (para tres plazas), el Consejo de Ministros (para dos) y el Pleno de la Suprema Corte (para dos)⁶⁷.

En Macedonia, el Parlamento debe designar de entre las candidaturas presentadas por el Presidente de la República para dos plazas, el Consejo Judicial Republicano para dos plazas (68, 84, 105 C) y las cinco plazas restantes, a falta de previsiones especiales en la Constitución y de acuerdo a las Reglas de Procedimiento de la Asamblea, su proposición ha quedado a cargo de una Comisión parlamentaria⁶⁸.

Todas las proposiciones se presentan al Parlamento macedonio para su designación, con la peculiaridad de que la votación para elegir a tres de las nueve magistraturas, debe contener además de la mayoría del voto del total del número de representantes, el apoyo de “la mayoría del total del número de votos de los representantes de las comunidades que no son mayoría” en la población del país⁶⁹.

1.2.1.5.- Propuesta del legislativo y designación por el ejecutivo

Hasta ahora, las formas de designación de magistrados constitucionales que se vienen exponiendo se habían caracterizado por que el acto final de selección correspondía efectuarlo al poder legislativo. El repaso de otras experiencias constitucionales, sin embargo muestra un caso donde el poder de

ORTIZ GUTIÉRREZ, Julio César: “El estatuto del juez constitucional de Colombia. El régimen jurídico de la Corte Constitucional y de sus magistrados”, en FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa*, México, IIJ, UNAM, 2012, págs. 363-407.

⁶⁷ Véase más información en el portal de Internet de la Corte Constitucional de Letonia (*Satversmes tiesa*), en www.satv.tiesa.gov.lv.

⁶⁸ Se trata del “Committee on Election and Appointment Affairs”. Véase, SPIROVSKI, Igor: “The independence of the Constitutional Court of the Republic of Macedonia: Guarantees and Challenges”, en 2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice, *Separation of Powers and Independence of Constitutional Courts and Equivalent Bodies*, Council of Europe, Venice Commission, Rio de Janeiro, Brazil, 2011, pág. 2.

⁶⁹ Según la enmienda XV de la Constitución de Macedonia, que dio nuevo contenido a su artículo 109.2. Por otro lado, cabe mencionar que hasta el momento (mayo 2014), Macedonia no dispone de una ley que discipline específicamente al Tribunal Constitucional, situación que ha sido señalada críticamente por la doctrina. Véase KARAKAMISHEVA-JOVANOVSKA, Tanja: “Different Models for Protection of Constitutionality, Legality and Independence of Constitutional Court of the Republic of Macedonia”, en 2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice, *Separation of Powers and Independence of Constitutional Courts and Equivalent Bodies*, Council of Europe, Venice Commission, Rio de Janeiro, Brazil, 2011, págs. 4-5.

designación recae en el poder ejecutivo, mientras que la iniciativa para formular las candidaturas reposa en el poder legislativo.

El caso del género nos lo ofrece Eslovaquia. La justicia constitucional eslovaca, con unos antecedentes que se remontan a la primera época de los tribunales constitucionales cuando pertenecía a Checoslovaquia en 1920, luego de independizarse, previó en su Constitución de 1992 un Tribunal Constitucional (*Ústavný súd*) que, en la reforma constitucional de 2001 fue reconfigurada su integración en trece magistrados nombrados para un periodo único de doce años (antes eran diez para periodos de siete años)⁷⁰.

El procedimiento selectivo coloca la facultad de articular las candidaturas en el Consejo Nacional (*Národná Rada*), única Cámara del poder legislativo, quien en número doble a las plazas a cubrir debe presentar las propuestas al Presidente de la República para que éste proceda a la designación de forma discrecional. El poder legislativo se allega las propuestas, no por medio de una convocatoria pública, sino a través de una serie de instituciones que la ley habilita, a saber, todos los parlamentarios, el abogado general (fiscal), instituciones académicas, el gobierno, colegios de abogados, el Presidente del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia (§ 11 LTC).

En sede parlamentaria, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legales (*Ústavnoprávny výbor*) y la Presidencia de la Cámara son los encargados de instruir el procedimiento. La Comisión se ocupa de revisar que los candidatos cumplan con los requisitos de acceso, los entrevista y finalmente emite un dictamen en el que recomienda o no al Pleno la proposición de candidaturas. El Pleno seleccionará aquéllas candidaturas que hayan obtenido la mayoría de votos, siempre que dentro de ésta se encuentre más de la mitad de los miembros presentes en la votación secreta⁷¹.

Las propuestas aprobadas se presentan al Presidente de la República para que designe libremente. Sin embargo, la facultad selectiva del Presidente

⁷⁰ Véanse los arts. 102.1 s), 134, 135 y 156 de la Constitución de la República Eslovaca; los arts. 2 y 7 de la Act 38/1993 on the Organisation of the Constitutional Court of the Slovak Republic, on the Proceedings before the Constitutional Court and the status of its Judges (LTC).

⁷¹ El procedimiento parlamentario está regulado por los artículos 2 n), 115 y 116 de las Reglas de Procedimiento del Consejo Nacional de la República Eslovaca (Resolución 350/1996), además hay un Reglamento Electoral sobre elección de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional (Resolución 1737/2006), el cual está vigente desde el 1º de septiembre de 2006. Los documentos pueden ser obtenidos en la sección de "Biblioteca electrónica" en el portal de Internet del Parlamento eslovaco: www.nrsr.sk.

no termina ahí, sino que además incursiona en otros terrenos que son claramente discutibles en tanto que podrían poner en riesgo la autonomía del Tribunal, ya que le corresponde designar al Presidente y al Vicepresidente de la institución, pudiendo asimismo proceder a su remoción atendiendo a unas causas tasadas previstas constitucionalmente (art. 138.2).

Visto el acto selectivo desde una perspectiva más general, se tendrá un acto compuesto integrado por la articulación de propuestas del poder legislativo (aunque con colaboración de otras entidades) y la designación a cargo del ejecutivo. Los partidos políticos mayoritarios son ciertamente los principales actores en la primera etapa, pero el acto final de designación lo tiene sustantivamente el Presidente de la República⁷².

1.2.1.6.- Otros modelos

a) Preselección parlamentaria y designación por el cuerpo electoral: el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Acudir al cuerpo electoral para la elección de los jueces constitucionales no es una práctica extendida en los diversos países para conformar los órganos de la justicia constitucional, aunque existe claro, alguna excepción nada desdeñable. Se trata de Bolivia, un país que su reciente Constitución de 2009 ha configurado un sistema constitucional con bastantes peculiaridades, entre las cuales ha insertado el sufragio popular como método de designación de las magistraturas supremas, incluyendo a los jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional, previo a una etapa de preselección de candidaturas a cargo del poder legislativo.

Esta novedosa designación de jueces constitucionales mediante voto popular, ha motivado la colocación del modelo boliviano en un apartado especial entre la clasificación de los modelos de acto compuesto. Sigue no

⁷² El 16 de febrero de 2007 el Presidente de la República Ivan Gašparovič procedió a la designación de nueve magistrados constitucionales. La designación presidencial se llevó a cabo no sin polémica alguna, al no haber elegido entre las dieciocho personas que con dificultades el Parlamento había conseguido consensuar en el transcurso de cinco meses, a quien se desempeñaba como un influyente Ministro de Justicia (Štefan Harabin). La prensa recogió algunas declaraciones del Presidente en las que explicaba que se había basado en la experiencia, sin abundar mayores detalles, todo lo cual buena cuenta da del grado de sustantividad con la que el Presidente ejerce la designación. Véase, www.sme.sk/c/3143655/prezident-nevybral-do-ustavneho-sudu-harabina-ani-safarika.html. El anuncio de las designaciones y el nombramiento pueden verse en la siguiente página oficial de Internet de la Presidencia de la República, www.prezident.sk/?constitutional-court-of-the-slovak-republic.

obstante, incluido en esta modalidad en la medida que para conseguir el acto selectivo se requiere de la concurrencia o participación de dos autoridades diferentes, a saber, el órgano parlamentario y el cuerpo electoral.

El modelo boliviano es muy reciente. En efecto, la Constitución de 2009, reformuló el Tribunal Constitucional que venía funcionando en el país, desde que fuera introducido en la reforma constitucional de 1994. Desde esta época, el modelo selectivo de magistrados era de designación directa a cargo exclusivamente del Parlamento, esto es, la designación de los cinco magistrados titulares (y cinco suplentes) era realizada por el Congreso Nacional con dos tercios de los votos de los miembros presentes en la sesión, de entre las nóminas presentadas por una Comisión parlamentaria⁷³.

El modelo actual introdujo que los siete Magistrados titulares (y siete suplentes) del ahora denominado “Tribunal Constitucional Plurinacional” serían aquéllos que reciban el mayor número de votos en una elección popular organizada al efecto, previo un procedimiento de preselección llevado a cabo por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, se trata de un procedimiento efectuado en dos fases, una de preselección y otra de elección popular, las cuales se encuentran disciplinadas por un conjunto muy amplio de disposiciones⁷⁴.

El procedimiento general de designación de magistrados comienza con la emisión de la convocatoria que realiza el Tribunal Supremo Electoral, al ser el órgano competente en el territorio nacional para organizar los procesos electorales. Esta misma convocatoria debe fijar la fecha en que se llevará a cabo la elección, y una vez publicada abre el camino para las dos etapas siguientes del procedimiento. En la primera, la Asamblea Legislativa

⁷³ La lista de nominación era elaborada mediante concurso público de méritos y exámenes, en las cuales podían proponer candidaturas el Ministerio de Justicia, universidades públicas, privadas y colegios de abogados. Véanse los arts. 119 de la Constitución de 1967; 8, 14 y 15 de la Ley núm. 1836, de 1 de abril de 1998, del Tribunal Constitucional.

⁷⁴ El régimen normativo de las dos fases del procedimiento, además de la Constitución Política del Estado y la Ley núm. 27, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional, es el siguiente: Ley núm. 18, de 16 de junio de 2010, del Órgano Electoral Plurinacional; Ley núm. 26, de 30 de junio de 2010, del Régimen Electoral; Ley núm. 125, de 27 de mayo de 2011, que modificó la Ley del Régimen Electoral; Reglamento interno de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (Resolución núm. 04/2011, de 6 de mayo de 2011, de la Asamblea Legislativa Plurinacional); Reglamento de elecciones de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (Resolución núm. 151 /2011, de 15 de julio del Tribunal Supremo Electoral).

Plurinacional debe efectuar otra convocatoria pública a efecto de recibir las postulaciones, depurarlas y hacer una preselección de las candidaturas con el voto de dos tercios de los miembros presentes.

La presentación de candidaturas pueden hacerla las organizaciones sociales, las “naciones o pueblos indígena originario campesinos” o por autopropuesta. Este procedimiento es instruido por una Comisión parlamentaria⁷⁵, la cual recibirá la postulación de candidatos, verificará el cumplimiento de los requisitos, resolverá las impugnaciones que puedan generarse, evaluará las candidaturas, entrevistará a los candidatos, y finalmente presentará un informe al Pleno para su preselección.

En la segunda etapa, el procedimiento vuelve al Tribunal Supremo Electoral para la organización, campaña y votación de las candidaturas preseleccionadas por la Asamblea. Se encuentra establecida una rotunda prohibición a los candidatos para realizar campaña electoral, puesto que es el Órgano Electoral el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos⁷⁶.

Este modelo se puso por primera vez en marcha entre los meses de mayo y octubre de 2011⁷⁷, sin que los resultados hayan sido satisfactorios⁷⁸. La

⁷⁵ La “Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral”, según el artículo 2.II del Reglamento parlamentario de preselección de candidatos.

⁷⁶ Al respecto, el Tribunal Supremo Electoral ha emitido el “Reglamento del régimen especial de propaganda para el proceso de elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (Resolución núm. 127/2011, de 30 de junio)”, en el cual detalla la forma en que se dará difusión a las candidaturas, las directrices que deberán observar los medios de comunicación en la campaña de información, su monitoreo, las sanciones y el procedimiento de inhabilitación de candidaturas.

⁷⁷ El Tribunal Supremo Electoral publicó la convocatoria el 13 de mayo de 2011 (Resolución núm. 79/2011, de 13 de mayo), fijando como fecha para la emisión de los sufragios el domingo 16 de octubre del mismo año. En un principio, la elección había sido programada para el 5 de diciembre de 2010, según lo disponía la Ley núm. 3, de 13 de febrero de 2010, de necesidad de transición a los nuevos entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; sin embargo, no podía procederse a la elección de las autoridades judiciales si antes no se encontraban renovados los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales Departamentales. Al respecto, las disposiciones transitorias de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional dispusieron que las vocalías debían designarse en un plazo máximo de cincuenta y cinco días a partir del 16 de junio de 2010, fecha de su promulgación. Sin embargo, no fue así, debido al retraso en la designación de los vocales electorales en algunos departamentos (tomaron posesión hasta el 4/12/2010). Todo ello trastocó el régimen transitorio previsto, incluida la fecha de elección que se había programado, lo cual fue subsanado por la Ley núm. 40, de 1 septiembre de 2010, de adecuación de plazos para la conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta Ley ya no fijó fecha para la celebración de los comicios judiciales, sino que dispuso la obligación de efectuar la convocatoria respectiva, una vez que se conformaran los órganos electorales.

⁷⁸ Véanse al respecto, los informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el de la organización civil “Red de Participación y Justicia”. El informe de esta última se constriñe al

designación se llevó a cabo junto con otras autoridades judiciales, con lo cual implicó llamar a la ciudadanía para que designara a un total de 118 cargos judiciales⁷⁹. La jornada dio como resultado un mayor número de votos nulos sobre los válidos (44.03% a 42.1%) y además hubo un 13.87% de votos en blanco.

Entre los tres candidatos más votados se observa un respaldo equivalente al 5.26%, 3.54% y 2.43 % del padrón de electores, y entre los cuatro restantes que obtuvieron la plaza, lo hicieron con una media del 1.84% del padrón⁸⁰. Estas cantidades tan reducidas han planteado cierta merma al adjudicado “respaldo popular” que se predica de las designaciones. Por otro lado, el hecho de que se hayan registrado más votos nulos que los válidos, en alguna medida proyecta un menoscabo a la legitimidad de la elección.

b) Propuesta y designación “a tres bandas”: la Corte Constitucional de Serbia

El modelo de integración de la Corte Constitucional de la República de Serbia (*Ustavni sud*) fue establecido en la Constitución de 2006, tras la disolución de la unión que mantenía con Montenegro. Este modelo, se ha planteado en unos términos muy originales, no solamente desde el punto de vista del resto de modelos de designación de magistrados constitucionales que se han visto, sino de la propia experiencia constitucional del país, desde que contara con un órgano constitucional de este tipo en 1963, cuando formaba parte de Yugoslavia.

El modelo general de Serbia, consiste en los que aquí hemos denominado como de “acto compuesto”, sin embargo este tiene la peculiaridad

procedimiento preselectivo de la Asamblea y el de la OEA abarca todo el procedimiento, si bien de forma más general: *Veeduría ciudadana al proceso de postulación y preselección de magistrados. Bolivia 2011*, Red de Participación y Justicia, julio, 2011; *Informe de la Misión de Observación Electoral sobre elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia [celebradas el] 16 de octubre de 2011*, OEA, Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Observaciones electorales, serie Américas, núm. 74.

⁷⁹ Véase la Memoria anual 2011 del Órgano Electoral Plurinacional, pág. 18. Un elemento anecdótico de la elección es que la gran cantidad de candidatos hizo necesario confeccionar una boleta electoral de un tamaño enorme, que complicó su gestión, ocasionando en la jornada electoral largas filas en las mesas de votación.

⁸⁰ Las cifras son calculadas con base en los datos consignados en el Acta de cómputo nacional de la elección de autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, págs. 26-27, disponible en la dirección electrónica del Tribunal Supremo Electoral: www.oep.org.bo.

de que cada tercio de magistrados son designados mediante la propuesta y designación de distintas autoridades, de ahí que para efectos didácticos le hemos calificado como de “tres bandas”.

En efecto, el art. 172 de la Constitución establece que de los quince jueces de la Corte Constitucional, cinco son designados por la Asamblea Nacional (250 miembros) entre las diez propuestas presentadas por el Presidente de la República; otros cinco jueces son designados por el Presidente de la República de entre las diez candidaturas que le son presentadas por la Asamblea Nacional; y finalmente los cinco jueces restantes son designados por el Pleno de la Corte Suprema de Casación de entre las diez propuestas que le son presentadas por la sesión general que se realice entre el “Consejo Superior del Poder Judicial” (*High Judicial Council*) y el “Consejo Fiscal del Estado” (*State Prosecutor Council*).

Cuadro 2.- Esquema del modelo selectivo de la Corte Constitucional serbia

Designa 5 jueces	Asamblea	Presidente	Corte Suprema
Propone 10 candidatos	↑	↑	↑
	Presidente	Asamblea	Consejo Judicial y Fiscal

Como se puede ver, el modelo combina la distribución de la facultad selectiva de jueces siguiendo un criterio de participación de los tres poderes del Estado, pero matizado con el poder de propuesta de otros órganos. El peculiar modelo se ha confeccionado de un modo que tanto el Presidente de la República como la Asamblea Nacional, tienen en un determinado momento las dos calidades, tanto de órgano proponente como de órgano selectivo. En una tercera banda estará la participación del ámbito judicial, con la designación del Pleno de la Corte Suprema de Casación, y la propuesta del órgano de gobierno del poder judicial y el fiscal.

La estructura del modelo, se ha llegado a calificar de “equilibrada”⁸¹, sin embargo, en cuanto a la forma de designar a los magistrados no deja de resultar un tanto arriesgado no haber contemplado una mayoría calificada para acordar las designaciones.

En efecto, no es la Constitución ni la Ley de la Corte Constitucional la que establece las mayorías necesarias para designar a los magistrados o proponer las candidaturas. Sino que al no establecer nada, corren el régimen general que prevé el Reglamento parlamentario para la adopción de decisiones, como lo es la mayoría de votos, tal y como se contempla para la elección del Presidente de la Asamblea o los secretarios de la misma (arts. 13 y 19). En cuanto a la mayoría necesaria para adoptar la designación del magistrado en el grupo que le corresponde a la Corte Suprema de Casación, el artículo 18 de su Reglamento establece que será mediante votación secreta por mayoría de votos de los jueces presentes en la sesión general.

En la Asamblea Nacional es el “Comité de asuntos constitucionales y legislativos” el encargado de instruir y preparar el procedimiento hasta la designación del Pleno. En el Pleno, según el Reglamento parlamentario⁸², está prevista la apertura de un debate en los supuestos de participación de la Asamblea en la designación de los jueces constitucionales, esto es, cuando debe proponer candidaturas y cuando debe elegir jueces constitucionales. La votación será secreta, aunque puede acordarse que sea abierta (art. 200).

El Reglamento parlamentario también prevé algunas normas para la designación de magistrados, cuando la proposición de las candidaturas está a cargo del Presidente de la República. En este caso, éste debe entregar al Presidente de la Asamblea Nacional la lista de candidatos a juez constitucional. La lista debe venir por escrito, con una motivación, y también debe estar acompañada de los escritos de aceptación de la candidatura por parte de los nominados. Se dispone además, que al menos dos de los candidatos propuestos, deben ser de los territorios de las provincias autónomas de Serbia (art. 263). Aquí habrá de notarse que el Reglamento parlamentario exige dos

⁸¹ Así en, VENICE COMMISSION: Opinion 405/2006, on the Constitution of Serbia (CDL-AD(2007)004), adopted by the Commission at its 70 plenary session, Venice, 17-18 march 2007, on the basis of comments by Grabenwarter, C.; Jowell, J.; Sushocka, H.; Tuori, K.; Velaers, J.; Strasbourg, 2007, pág. 18.

⁸² Rules of procedure of the National Assembly of the Republic of Serbia.

miembros de tal extracción, cuando la Constitución obliga a que al menos uno lo sea.

1.2.2.- Modelos de designación directa

En la segunda modalidad que se podría distinguir, se encuentra la que en este trabajo se ha denominado como de “designación directa”, esto es, un modelo que ya no supedita el acto selectivo a la confluencia de voluntad o consenso entre poderes distintos, sino que directamente deposita en el ámbito de un mismo órgano esa tarea. En otras palabras, visto el acto selectivo de forma individual, el mismo se planea y ejecuta desde la sede de un solo poder u organización, sin que para ello se requiera sustantivamente el acuerdo de otro.

En el modelo de designación directa, existe una subclasificación muy frecuentada en las experiencias constitucionales, en las que el acto selectivo se “reparte” o se distribuye entre varios órganos. Es decir, cada uno de ellos, tiene a cargo la confección de la candidatura y designación de un número determinado de magistrados. Subyace, si se permite la expresión, una idea de “separación” del poder, donde la facultad de designación se entrega “en raciones” a diversas autoridades estatales, aunque hay casos también de participación de organizaciones sociales.

Conviene aclarar desde ahora, que en el modelo de “designación directa” el peso específico de la designación recae en un determinado órgano, sin embargo, hay bastantes casos donde normativamente se prevé la remisión de la propuesta a otro órgano, sin embargo este no tiene sustantividad en la designación, sino que se dedica a completar la tramitación formal del procedimiento. Regularmente se trata de actos debidos para efectos de nombramiento, jura del cargo o proclamación de la designación. Pero en estos casos, por más que la letra de la ley pueda indicar cierta concurrencia de voluntad de otro órgano en el procedimiento selectivo, en los hechos lo cierto es que se trata de una formalidad para perfeccionar jurídicamente el acto y no hay, por tanto, una fuerza política o tradición para oponerse a la opción que se ha tomado. Dicho esto, procede ahora atender a la variedad de modelos que arroja la experiencia comparada.

Si se toma en cuenta la cantidad de órganos en que se encuentra depositado el poder de designación, podremos encontrarnos la participación de un solo órgano, como sucede en los casos donde todas las designaciones recaen en órganos del poder legislativo o en otros casos detectados donde han preferido dejarlo en manos de otro tipo de órganos o corporaciones singulares⁸³. En este sentido, estos modelos podrían identificárseles como un modelo de tipo “parlamentario” o uno de designación a cargo de una “corporación”, según el caso.

Por otro lado, se encuentran aquéllos países que han introducido en sus procedimientos selectivos otros órganos para designar a los magistrados, además de los parlamentarios, por ejemplo se verá el caso de Portugal donde la Asamblea designa a diez jueces y luego estos proceden a la cooptación de los tres restantes, es decir, participa el órgano parlamentario y el propio Tribunal Constitucional portugués. En general, se observarán aquí más combinaciones de órganos de diversa índole, entre los cuales suelen estar los órganos vértice de los tres clásicos poderes estatales con alguna u otra modalidad que se mencionará en su momento.

Este modelo de “designación directa” es el que ha cundido esencialmente en los tribunales constitucionales europeos más consolidados. Por ejemplo en Alemania, Bélgica y Portugal (con la peculiaridad que ya se mencionó) han optado por un procedimiento de tipo parlamentario, y por otro lado, en Austria, Italia, Francia, España, se han decantado por la distribución de cargos entre varios órganos. Un esquema puede darnos una buena panorámica de todo lo anterior:

Cuadro 3.- Clasificación de los modelos de designación directa

	Designa	Variedades
1.2.2.1	Parlamento	<ul style="list-style-type: none"> -Cada una de las Cámaras designa una cantidad de magistrados: Alemania, Bélgica. - La Asamblea General (dos Cámaras reunidas) designa a todos: Uruguay. - De las dos Cámaras, sólo participa una en la designación de todos los magistrados: Polonia (la Cámara baja). - Parlamento unicameral designa a todos (si bien una Comisión

⁸³ También se les ha aludido como modelos de actores “especiales”. Véase BUSTILLOS, Julio: *El juez constitucional en el mundo. Perfil, carrera judicial, nombramiento, remuneración, desempeño y costos*, México, Porrúa, IMDPC, 2011, págs. 243-246.

		puede preparar el procedimiento): Hungría, Croacia, Perú, Costa Rica. - La sustantividad del acto reside en la Asamblea, aunque formalmente se diga que elige el Pdte. de la Rep., de entre las propuestas de ésta: Kosovo
1.2.2.2	Parlamento y TC	-La Asamblea de la República designa a 10 magistrados; luego los 10 designan a los 3 restantes: Portugal.
1.2.2.3	Corporación	-Designa el Consejo Nacional de la Magistratura: República Dominicana. -Designa la Comisión Calificadora: Ecuador.
1.2.2.4	Varios órganos	-Inspirados en la designación por parte de los tres clásicos poderes: Italia, España, Georgia, Bulgaria, Ucrania, Moldavia. -No inspirados en la tripartición del poder (designa el ejecutivo y el legislativo): Austria, Rumania, Armenia, Bielorrusia, Andorra. - Caso Guatemala: Además de los tres poderes, participan corporaciones profesionales y universitarias.

1.2.2.1.- Parlamentario

Este modelo se caracteriza porque el procedimiento selectivo de los jueces constitucionales se realiza en sede parlamentaria, tomando ciertas variantes en función a la estructura del poder legislativo. Desde este punto de vista, las modalidades que pueden encontrarse son al menos cuatro.

Una es cuando el poder legislativo se estructura en dos Cámaras y cada una de ellas, de forma separada y paritaria, designa un número de magistrados (Alemania, Bélgica). Otra modalidad es cuando las dos Cámaras en forma conjunta proceden a la designación de los magistrados (Uruguay), y una variante más, es cuando participa una de las dos Cámaras, como es el caso de Polonia, donde solo el *Sejm*, esto es la Cámara de representación popular, tiene un papel como órgano selector de todos los magistrados. Finalmente, la cuarta variedad es cuando estamos en presencia de Parlamentos unicamerales (Hungría, Croacia, Perú, Costa Rica).

Con independencia de las diferencias estructurales del poder legislativo mencionadas, se puede observar una suerte de procedimiento parlamentario de designación muy general, el cual se ha venido realizando de forma parecida al modo en que regularmente se organizan los Parlamentos para llevar a cabo sus funciones. Esto es, a través de la interacción de los órganos de Gobierno de las Cámaras, la preparación del trabajo en la respectiva Comisión, y sobre todo, del impulso de los Grupos parlamentarios para conseguir la votación en el Pleno.

A partir del modelo general de designación parlamentaria descrito, vendrán una serie de modalidades y matizaciones introducidas por cada país. Sin ánimo de ser exhaustivos, se pueden referir algunas variantes del procedimiento selectivo si se distingue del mismo tres fases.

La primera parte de la forma en que las propuestas de magistrados son llevadas a la sede legislativa. En este punto, ya se puede distinguir entre aquéllos que encargan esa tarea a los integrantes de una Comisión parlamentaria específica (de nombramientos, de asuntos constitucionales, etcétera) o bien, a otro tipo de órganos parlamentarios o formaciones *ad hoc*. Ejemplos de estas últimas serían el grupo informal de trabajo que se designa al efecto en el Consejo Federal alemán, a los Grupos parlamentarios o a un grupo mínimo de legisladores que respalden la propuesta al estilo portugués o polaco, o los casos donde habilitan a los propios componentes de la Asamblea (los parlamentarios), a su Presidente o permiten la autopropuesta (Bélgica).

La Comisión, conviene tenerlo en cuenta, prácticamente en la mayoría de las veces se constituye en un mero canal de formalización de las propuestas, puesto que el peso específico para articular las decisiones suele descansar en el acuerdo entre los dos o tres líderes o portavoces de los partidos políticos con mayor representación e incluso puede suceder que los “negociadores” ni siquiera formen parte del órgano legislativo.

Los órganos postulantes pueden a su vez obtener las candidaturas mediante convocatoria pública (Bélgica, Croacia, Costa Rica, Uruguay o Perú⁸⁴) o bien a través de ejercicios más discretos de propuesta y negociación política (Hungría, Polonia, Portugal, Alemania, etcétera). En principio, cuando se opta por la convocatoria, esta misma desarrolla las bases de un procedimiento que se despliega en fases de revisión documental, publicación de preseleccionados, impugnaciones, valoración de méritos, consultas, comparecencias de los candidatos, y finalmente se fijan los nombres que serán propuestos al Pleno.

Cuando por el contrario el procedimiento no es por convocatoria pública, la forma de determinar las candidaturas queda a la voluntad dominante de los

⁸⁴ En Perú además el Parlamento puede allegarse candidaturas a través de una suerte de “invitación institucional”, que es formulada directamente por el propio Congreso.

grupos políticos, si bien con pleno conocimiento de las técnicas y tanteos habituales de negociación política entre los partidos.

En una segunda fase del procedimiento parlamentario, puede decirse que se desarrolla una etapa de instrucción de las candidaturas. En este estadio, suele desplegarse una actividad tendiente a revisar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la magistratura constitucional por parte de los candidatos. De igual forma, las candidaturas suelen ser enviadas a una determinada Comisión parlamentaria a efectos de estudio y valoración de las mismas. En esta etapa suelen efectuarse las comparecencias de los candidatos ante la propia Comisión (Hungría, Bélgica, en un par de ocasiones), aunque no necesariamente llevadas a cabo bajo una reglamentación específica y no siempre han tenido un carácter público.

La tercera fase constituye la designación de las candidaturas en el Pleno, una vez que se han conseguido las mayorías exigidas. Una peculiaridad que suele presentarse en esta etapa, es que las candidaturas suelen votarse sin mayor problema y sin debate. Ello es así, porque las candidaturas que ya llegan a este estadio y que vienen aprobadas por las Comisiones, regularmente ya están respaldadas por los partidos políticos con un acuerdo previo.

A juzgar por la información que se puede tener sobre este tipo de negociaciones políticas, que son por definición reservadas, se observa que en éstas, los miembros de los órganos postulantes, como auténticos portavoces de sus partidos políticos, irán presentando los nombres de los candidatos de su preferencia, intentando convencer o transigir con los del resto, y se tomarán las decisiones, con una importante determinación a la fuerza numérica de la bancada parlamentaria. Es, para decirlo, con la expresión más común, la “*lottizzazione*” o el reparto de las plazas en cuotas, con base en el “juego” habitual de la mayoría y minoría políticas.

Una de las experiencias estudiadas tiene la peculiaridad de que la votación final no llega al Pleno, sino que la decisión es tomada por la Comisión parlamentaria. Es el caso de Alemania, donde la designación del magistrado la efectúa directamente la propia Comisión del *Bundestag*.

No puede terminarse este apartado sin antes considerar aquí un caso que debe examinarse con cuidado. Se trata del modelo de designación del Tribunal Constitucional del territorio en disputa de Kosovo, el cual establece

que los jueces serán designados “por el Presidente de la República entre las propuestas presentadas por la Asamblea” (114.2 C).

En principio, esa redacción apunta hacia una designación de acto compuesto entre la voluntad del Presidente y la propuesta del legislativo (todo en coordinación y acuerdo con el Representante Civil Internacional⁸⁵). Sin embargo, la práctica efectuada en los procedimientos selectivos de 2009 y 2012, ha dejado ver que la sustantividad del acto reside en la Asamblea unicameral. Por otro lado, considérese que el Presidente es elegido por la propia Asamblea, y éste se constituye en el Jefe del Estado, mientras que el Gobierno descansa en el Primer Ministro (83, 92.1 C).

Es prematuro todavía dilucidar si esto se convertirá en una práctica consolidada, pero hasta a que ello no cambie y a la luz de esa escasa experiencia, se colocará en estos momentos el modelo kosovar dentro de este apartado de designación directa a cargo del Parlamento.

En efecto, en la primera ocasión la Asamblea mandó la lista de seis personas que habían de elegirse (2009) y en la segunda sólo mandó a una persona que había conseguido la mayoría calificada (2012) y en ambos casos, el Presidente se ha constreñido a nombrar a los candidatos sin mediar veto o resistencia alguna. Tampoco se ha visto por parte del ejecutivo una predominante incidencia en la toma de decisión o algún procedimiento público de valoración de las candidaturas que entrara en interacción o equilibrio con la designación parlamentaria⁸⁶.

1.2.2.2.- Parlamentario y designación por el Tribunal Constitucional

⁸⁵ El Representante Civil Internacional es la figura creada en el Acuerdo sobre el Estatuto de Kosovo para, en términos generales, supervisar el cumplimiento del mismo. Además de que se le han asignado funciones interpretativas del mismo y muchas otras funciones ejecutivas y de coordinación del desarrollo de las instituciones kosovares. Véase UNITED NATIONS, SECURITY COUNCIL: “Letter dated 26 March 2007 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council: addendum: Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement” (S/2007/168/Add.1), 26 March 2007, anexo IX, arts. 2 y 3.

⁸⁶ La designación parlamentaria de los Magistrados Enver Hasani, Iliriana Islami, Gjyljeta Mushkolaj, Kadri Kryeziu, Ivan Çukallovic y Altay Suroy se encuentra en ASAMBLEA DE LA REPÚBLICA DE KOSOVO: Acta de sesión plenaria P-69, Legislatura III, 15 de mayo de 2009; la designación de Arta Rama-Hajrizi puede verse en, ASAMBLEA DE LA REPÚBLICA DE KOSOVO: Acta de sesión plenaria P-62, Legislatura IV, 31 de mayo de 2012. El anuncio presidencial de nominación y juramento puede verse en la página web de la Presidencia de la República, en los siguientes enlaces, para la de 2009 a cargo del Presidente Fatmir Sejdiu, en www.president-ksgov.net/?page=2,6,398 y para la de 2012 a cargo de la Presidenta Atifete Jahjaga, en www.president-ksgov.net/?page=2,6,2406.

Otro de los modelos singulares de la experiencia comparada lo encontramos sin duda en Portugal. La peculiaridad del sistema descansa en el hecho de que, además de la participación netamente parlamentaria en la designación de la mayoría de los jueces (diez de trece), otro de los órganos que participan directamente en la selección de los mismos es el propio Tribunal Constitucional. Esto quiere decir, que estamos en presencia de un fenómeno de elección de cargos mediante la cooptación puntual de tres magistrados.

Es así como el régimen normativo del Tribunal Constitucional portugués plantea un órgano integrado por trece jueces nombrados para un periodo único de nueve años. La *Assembleia da República*, parlamento unicameral luso, se encarga de designar diez jueces y luego estos funcionando en Pleno cooptan a los tres restantes. Si coincidieran al mismo tiempo vacantes en las plazas de selección parlamentaria y de cooptación, serán cubiertas en primer lugar las de selección parlamentaria⁸⁷.

El Parlamento realiza la votación con el voto favorable de dos tercios de los diputados presentes, siempre que ésta sea superior a la mayoría absoluta de los diputados en funciones. El procedimiento lo instruye la Presidencia del Parlamento y las propuestas de magistrados son presentadas mediante listas cerradas, formuladas por un mínimo de 25 y un máximo de 50 diputados, no pudiendo los parlamentarios suscribir más de una lista de candidaturas⁸⁸.

El colegio de diez magistrados constitucionales de selección parlamentaria tiene diez días para cooptar a los tres magistrados que completan la integración del Tribunal. El procedimiento comienza con la redacción de la lista de posibles candidatos. En este momento, los jueces constitucionales, previa discusión, deberán escribir en una papeleta el nombre del candidato que pretenden proponer para juez constitucional y lo depositarán en una urna, luego del escrutinio secreto, el Presidente de la reunión formulará una relación nominal con los propuestos. La lista deberá contener los nombres en número igual o superior al de las vacantes a cubrir y las cuotas reservadas a los jueces de los restantes tribunales o a los juristas (18 LTC).

⁸⁷ Arts. 222 y 224 de la Constitución; arts. 12 y 17 de la Ley sobre la Organización, Funcionamiento y Procedimiento del Tribunal Constitucional (LTC).

⁸⁸ Artículo 163 h, de la Constitución portuguesa; 14.1 y 16.4 de la LTC.

Elaborada la relación nominal de los candidatos propuestos, se procederá a distribuir entre los jueces constitucionales cooptantes una papeleta de voto. Se considera designado aquel que obtenga un mínimo de siete votos en la misma elección y que acepte el cargo. Si después de cinco rondas de votación no se hubiesen recabado estos siete sufragios para cada uno de los propuestos para cubrir todas las vacantes, se deberá repetir el procedimiento anterior (19 LTC), es decir, vendrá redactada una nueva lista de posibles candidatos para el resto de vacantes sin cubrir y así desbloquear el procedimiento.

1.2.2.3.- Modelo de designación a cargo de una corporación

Como ya se ha mencionado, bajo esta denominación se hace referencia a una serie de órganos que no se incardinan en el vértice de los tradicionales poderes del Estado, sino que son de diversa naturaleza y cuyo cometido en común es el de designar a los magistrados constitucionales. Entre los modelos de acto compuesto se mencionó a aquéllos que dieron la facultad de propuesta a este tipo de instituciones, dejando el acto selectivo final al poder legislativo (apartado 1.2.1.3).

En esta ocasión, dentro de los modelos de designación directa estudiados, nos hemos encontrado dos ejemplos donde la selección queda exclusivamente en manos de una corporación con ciertas peculiaridades. En un caso se trata del Consejo Nacional de la Magistratura en la República Dominicana y en otro caso se trata de la “Comisión Calificadora” en Ecuador.

Los dos modelos aludidos han sido recientemente ideados y puestos en marcha. En Ecuador fue resultado de la nueva configuración que le dio la Constitución de 2008 al tribunal constitucional que venía funcionando y la primera designación bajo este nuevo método se efectuó entre finales de 2011 y principios de 2012⁸⁹. En la República Dominicana la Constitución de 2010

⁸⁹ Las disposiciones que norman el procedimiento se encuentran en la Constitución de 2008 (última enmienda en mayo de 2011), en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Para la primera designación, véanse además los artículos 25 párrafo tercero y 27 del Régimen transitorio de la Constitución de 2008; las disposiciones transitorias tercera, sexta, décimo sexta de la LOGJCC y la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Véase también el Reglamento para el proceso de conformación de la Comisión Calificadora que seleccionará y designará a las y los miembros de la Primera Corte Constitucional (Resolución núm. 02-149-

previó por vez primera un Tribunal Constitucional y el 21 de diciembre de 2011 fueron designados los primeros integrantes⁹⁰.

Las dos instituciones aludidas no guardan semejanza orgánica alguna. Por un lado, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) resulta más cercano a un órgano político pues está formado directamente por titulares de los poderes públicos (Presidente de la República, del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Suprema Corte de Justicia, entre otros⁹¹). Por otra parte, la “Comisión Calificadora” intenta apegarse más a un órgano neutral y técnico, ya que no está integrada por los titulares de los poderes estatales, sino por personas designadas por éstos, debiendo además cumplir con los mismos requisitos establecidos para los jueces de la Corte Constitucional⁹².

CPCCS-2011), el cual, al mes de ser aprobado fue reformado para modificar el artículo 13 letra d; el Reglamento para la calificación y designación de Juezas y Jueces que integrarán la Primera Corte Constitucional (Resolución núm. 01-183-2012-CPCCS). Existe bastante información del procedimiento selectivo de la primera Corte Constitucional en la página electrónica oficial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): www.participacionycontrolsocial.gob.ec/web/guest.

⁹⁰ El régimen normativo de la designación de magistrados en ese país se compone de la Constitución de 2010; la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, promulgada el día 13 de junio de 2011, pero fue pronto modificada por la Ley núm. 145-11 promulgada el 4 de julio de 2011; la Ley núm. 132-11, de 31 de mayo de 2011, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, reformada al poco tiempo por Ley núm. 138-11, del 21 de junio de 2011, Orgánica del CNM (LOCNM); el Reglamento del CNM, núm. CNM-1-11, de 11 de agosto de 2011, para la aplicación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, núm. 138-11. Las Actas de las sesiones del CNM correspondientes a la celebración del primer procedimiento selectivo pueden obtenerse en, www.suprema.gov.do/portada/proceso_eleccionario_cnm.aspx.

⁹¹ Está conformado por ocho integrantes, de los cuales cinco miembros son natos y tres electivos. Los miembros natos son los Presidentes del Senado, de la República, de la Cámara de Diputados, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Procurador General de la República. Los tres electivos son un juez de la SCJ, un senador y un diputado, elegidos por su correspondiente Cámara u órgano de extracción. Tratándose de los dos miembros electivos de procedencia parlamentaria, la designación deberá recaer entre quienes ostenten la representación de la segunda mayoría y que no pertenezcan al grupo político del Presidente de la Cámara. El órgano es encabezado por el Presidente de la República y en su defecto, lo cubrirá el Vicepresidente de la República. Fungirá como secretario del CNM el juez elegido por la SCJ, sustituyéndole en sus ausencias el nombrado *ad hoc* por el Presidente, de entre los miembros presentes (178 C; 2, 4 y 5.1 LOCNM).

⁹² Esta Comisión se integra de seis miembros, de los cuales dos son designados por el Presidente de la República, dos por la Asamblea Nacional y dos por la denominada función de “Transparencia y Control Social” (434 C), que es una nueva rama del poder estatal introducida por la Constitución de 2008. Para ser miembro de la Comisión se tiene que cumplir con los requisitos para ser juez constitucional, es decir, se requiere la nacionalidad ecuatoriana, encontrarse en ejercicio de sus derechos políticos, tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país, haber ejercido con probidad notoria en un mínimo de diez años la profesión de abogado, la judicatura o docencia jurídica universitaria, demostrar probidad y ética, no haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de un partido o movimiento político (433 C, 172 LOGJCC). No establece por tanto, una edad mínima, la nacionalidad de origen, algún título académico de maestría o doctorado, pues basta la licenciatura; se entiende por otro lado, que se permite la afiliación partidista pues sólo prohíbe

Ambas instituciones deben realizar un procedimiento selectivo de magistrados que consiste básicamente en la recepción de candidaturas, las cuales son sometidas a procesos de evaluación y depuración con ciertos elementos de publicidad y participación ciudadana (convocatoria, tacha de candidaturas, comparecencias). La diferencia es que en Ecuador el procedimiento está planteado en términos de un “concurso de oposición” donde resultan elegidos los mejor calificados y en Dominicana es un procedimiento electivo a discreción del órgano, si bien con una etapa previa de consulta pública y evaluación de candidaturas, en las que resulta designado el que recabe mayor número de sufragios de los miembros del Consejo⁹³.

Finalmente, conviene mencionar que el CNM es un órgano permanente que tiene también entre sus funciones, la designación de los jueces del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia, a la cual evalúa el desempeño de sus jueces (179 C, 3 LOCNM). La Comisión Calificadora en cambio, se conforma para los únicos efectos de llevar a cabo el concurso referido para seleccionar a los jueces constitucionales (434 C, 179 LOGJCC).

1.2.2.4.- Designación directa distribuida entre varios órganos

Este tipo de modelo selectivo es uno de los más frecuentes en las experiencias de justicia constitucional, incluso es una de las modalidades de conformación que en su momento Kelsen aconsejó⁹⁴. De ahí que precisamente el Tribunal Constitucional austriaco sea de los que han adoptado este modelo, pero también en esta línea muy pronto se sumó la Corte italiana, luego el TC español, y también está el caso más modesto del TC de Andorra.

las funciones directivas. Véanse además otras inhabilidades e incompatibilidades que son introducidas respectivamente en los arts. 173 y 174 de la LOGJCC.

⁹³ El CNM puede someter las candidaturas a vistas públicas, consultas e investigaciones. En efecto, tendrá la facultad de indagar todas las circunstancias que considere oportunas para recabar la opinión de ciudadanos, instituciones y organizaciones cívicas. Puede encomendar a sus miembros a realizar investigaciones en torno a las candidaturas, siendo estas respaldadas en un informe a rendir en una sesión del Consejo (18, 19 LOCNM).

⁹⁴ Entre otras cosas, Kelsen pensaba que los modos de reclutamiento de los magistrados debían de estar repartidos entre diversos órganos, que su número no debía ser demasiado elevado para poder cumplir una misión de interpretación jurídica, que debía reservarse a lugar para los “juristas de profesión” y “especialistas inminentes”, y que debían excluirse a miembros del Parlamento y del Gobierno, porque son a los que tienen que controlar. KELSEN, Hans: “La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle)”, en *Revue de Droit Public et de la Science Politique en France et à l'Étranger*, t. XLV, 1928, págs. 226-227.

El modelo ha sido adoptado también en buena parte de las repúblicas que se desincorporaron de la Unión Soviética, como Moldavia, Bielorrusia, Georgia, Armenia y Ucrania, y en países de la Europa del Este como por ejemplo Rumania y Bulgaria. En Latinoamérica el modelo sólo ha sido seguido en Guatemala, aunque como se verá, con notables peculiaridades.

El modelo consiste en la atribución a diversos órganos estatales para que procedan a la designación de un número determinado de magistrados sin la necesidad de que se vean constreñidos a la voluntad, consenso o colaboración de otro. Cada órgano facultado tiene el poder de llevar al tribunal constitucional a los miembros cuyos procedimientos internos arrojen. El poder de configuración de la candidatura y el poder de designación de la misma reposa en un mismo órgano, pero no es el único que puede hacerlo porque otras entidades se encuentran habilitadas. En este sentido, en la medida que varios órganos tienen repartida la facultad de cubrir un número específico de plazas, puede tener sentido que el modelo sea calificado como de “designación directa distribuida entre varios órganos”.

La modalidad de distribución del poder de designación parece encontrar su inspiración en el deseo de dotar al Tribunal Constitucional, además de un principio de imparcialidad y legitimidad con la exigencia de amplias mayorías para su designación, de una mixta visión institucional derivada de la designación directa de órganos de diversa índole, por ejemplo si participan los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales. Se trataría al menos, de una señal estructural, que permitiría suponer el ingreso al Tribunal de la confluencia de diversas “sensibilidades” y experiencias profesionales que cada órgano selector imprimiría.

Dado que siempre los procedimientos selectivos están conectados de alguna manera con la participación de los órganos representativos, la distribución de la facultad de nombramiento, vendría a otorgar a otras ramas del poder público, como puede ser el judicial, un espacio de participación en la confección del Tribunal, rompiendo monopolios del legislativo, dando voz a poderes con una lógica diversa, modelando el Tribunal como un órgano *supra partes*, dándole un aspecto más alejado de las lógicas de mayoría y minoría parlamentaria, esto es, como dice Zagrebelsky, un órgano cuya función no pertenece “a la política”, aunque concorra al sistema estatal con un importante

poder político; un órgano esencial para nuestro modo de entender la democracia, pero que al mismo tiempo no proviene de la democracia⁹⁵.

La gran mayoría de los países que han adoptado este modelo, ha distribuido el poder de selección de los magistrados constitucionales en varios órganos estatales siguiendo un criterio de participación de los tres clásicos poderes del Estado. Esta mayoría, da la pauta para hacer una subclasificación de estos modelos, y distinguir por tanto entre aquéllos que han seguido un modelo inspirado en la tripartición de poderes, y los que no. Quienes se han decantado por esta última variedad, han modelado sus sistemas de designación de magistrados con órganos de los poderes ejecutivo y legislativo, excluyendo generalmente al poder judicial.

Una tercera subclasificación que puede destacarse es aquella donde además de incluir en su modelo selectivo a órganos de los tres clásicos poderes estatales, han introducido otro tipo de corporaciones, no necesariamente de la estructura orgánica del Estado. Este es el caso de Guatemala, que más adelante se detallará.

Comenzando por la mención de los modelos inspirados en la tripartición clásica del poder, como ya se decía, son los que constituyen la mayoría. Muchos lo han hecho de forma equitativa, esto es, que del número total de magistrados, los tres órganos participan en la designación de un tercio de las plazas. El ejemplo más cercano es el de Italia, en el cual, de los quince jueces, cinco son designados por la sesión conjunta de las Cámaras parlamentarias, cinco por las supremas magistraturas y cinco por el Presidente de la República (135 C). Una dinámica semejante se ha aplicado en Georgia, Bulgaria, Ucrania y Moldavia, aunque los órganos selectores no son exactamente los mismos⁹⁶.

⁹⁵ ZAGREBELSKY, Gustavo: *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, Torino, Giulio Einaudi, 2005, pág. 3.

⁹⁶ En Georgia designa tres el Presidente, tres el Parlamento y tres la Corte Suprema (art. 88.2 de la Constitución de Georgia y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional); en Bulgaria designa cuatro la Asamblea Nacional (unicameral), cuatro el Presidente, y cuatro la reunión general de los tribunales de justicia constituido por el Consejo Supremo de Casación y el Tribunal Administrativo Supremo (147 de la Constitución de Bulgaria y 4 de la Ley del Tribunal Constitucional); en Ucrania designa seis el Presidente, seis el Parlamento (unicameral) y seis el Congreso de Jueces de Ucrania (art. 148 de la Constitución de Ucrania y 5 de la Ley del Tribunal Constitucional); en la República de Moldavia designa dos el Parlamento (unicameral), dos el Gobierno y dos el Consejo Superior de la Magistratura (art. 136 de la Constitución de Moldavia, y 5.2 de la Ley del Tribunal Constitucional).

El caso de España en este sentido es particular, dado que la distribución de la facultad de nombramiento no ha sido simétrica, dejando la designación de dos miembros al Gobierno, ocho a las Cortes (cuatro al Senado, cuatro al Congreso) y dos al Consejo General del Poder Judicial, el cual, sin ser un órgano representativo del poder judicial, sí que a través de su participación se conecta en la práctica cierto influjo del poder judicial en las designaciones. No se escapa por otro lado, que según la fórmula constitucional, los jueces son “nombrados por el Rey” (159 CE), sin embargo esta remisión se constriñe a efectos de formalidad del acto, pero en ello se abundará más adelante.

Otros tribunales no están inspirados en la participación tripartita de poderes, sino que la facultad selectiva de los magistrados se ve distribuida únicamente entre el poder ejecutivo y el legislativo. Este modelo puede verse en Rumania, donde el Presidente designa a tres magistrados, y el Parlamento designa a seis (tres el Senado, tres la Cámara de Diputados). De igual forma, en Armenia, el Presidente designa cuatro plazas y la Asamblea Nacional cinco, si bien, estas últimas a propuesta del Presidente de la propia Cámara. En Andorra, por su parte, dos plazas son designadas por el Parlamento y dos por los copríncipes⁹⁷.

Otro caso en la misma línea lo ofrece Austria, donde ocho jueces titulares y tres suplentes son designados por el Gobierno Federal, y seis jueces titulares y tres suplentes por el poder legislativo (tres titulares y dos suplentes el Consejo Nacional y tres titulares y un suplente el Consejo Federal). No resulta desconocido que según el contenido literal del Texto Constitucional, el Presidente de la República, órgano elegido directamente por el pueblo, tiene a su cargo la etapa final de designación (el Gobierno Federal le propone ocho y el legislativo seis)⁹⁸, sin embargo la sustantividad de todas las designaciones descansa en los órganos proponentes.

Ello ha sido así, porque en la práctica el Presidente se ha limitado a nombrar sin problemas a los candidatos que le han propuesto. Incluso, recuérdese que las propuestas provenientes de las Cámaras, anteriormente

⁹⁷ Véanse los artículos 142.3 de la Constitución de Rumania y 5.2 de la Ley de Organización y Operación del Tribunal Constitucional; artículos 55.10 y 83.1 de la Constitución de Armenia y 3.2 de la Ley del Tribunal Constitucional; artículo 43 de la Constitución del Principado de Andorra y 10 de la Ley Cualificada del Tribunal Constitucional.

⁹⁸ Artículo 147 del Texto Constitucional austriaco.

debían configurarse mediante una terna y el Presidente se limitaba a elegir al primero de la lista⁹⁹. Cuando esta práctica decayó, una reforma constitucional en 1994 restableció el poder de designación que de hecho tenían las Cámaras, eliminando el requisito de la terna para dejar en su lugar la propuesta directa al Presidente¹⁰⁰. En resumen, en la medida que la sustantividad de la designación reposa en las Cámaras y en el Gobierno, este modelo se incluye aquí.

El caso de Bielorrusia también puede inscribirse en esta clasificación. En efecto, seis de los doce magistrados son designados por el Presidente de la República y los seis restantes son elegidos por la Cámara de representación territorial, esto es el “Consejo de la República” de la Asamblea Nacional (91, 116 C). Estas últimas designaciones, tienen la peculiaridad de que la normativa de desarrollo ha dado la posibilidad al Presidente de la Corte Constitucional para que presente las candidaturas¹⁰¹. El poder de designación, sin embargo, lo mantiene el órgano parlamentario, pues la práctica ha mostrado que las propuestas formuladas por el Presidente de la Corte Constitucional no resultan obligatorias y excluyentes de otras que pudiera considerar libremente el órgano parlamentario¹⁰².

Un caso peculiar que ya se adelantaba es el de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. En esta experiencia, además de contemplar en su sistema de designación a los tres poderes, incluye a otro tipo de corporaciones, a saber, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y la Asamblea del Colegio de Abogados. Este tipo de designación directa a cargo de órganos no estatales no es una traza habitual en los modelos selectivos de magistrados constitucionales.

⁹⁹ FAVOREU, Louis; MASTOR, Wanda: *Les cours constitutionnelles*, París, Dalloz, 2011, pág. 35.

¹⁰⁰ LUTHER, Jörg: “La composizione dei tribunali costituzionali e le autonomie territoriali: esperienze straniere”, en ANZON, A.; AZZARITI, G.; LUCIANI, M. (a cura di): *La composizione della Corte Costituzionale. Situazione italiana ed esperienze straniere. Atti del Seminario di Roma del 14 marzo 2003*, Torino, G. Giappichelli, Quaderni della Rivista di Diritto Costituzionale, núm. 3, 2004, pág. 78.

¹⁰¹ Véase el art. 21, segundo párrafo, del “Code of the Republic of Belarus on Judicial System and Status of Judges, of June 29, 2006” (texto consolidado a 2009). Esta misma normativa además ha fijado la mayoría parlamentaria necesaria para efectuar las designaciones (art. 21), consistente en la mayoría de votos de la composición total del Consejo de la República, esto es, 33 votos, puesto que se integra actualmente de 64 miembros.

¹⁰² MIKLASHEVICH, Petr. P.: “Constitutional justice: functions and relationship with the other public authorities”, en *National report prepared for the XVth Congress by The Constitutional Court of the Republic of Belarus, 23-25 May 2011*, Bucharest, Romania, pág. 2. Disponible en el portal de internet de la Conference European Constitutional Courts: www.confeuconstco.org.

Dejando atrás la distinción general sobre si los órganos designantes provienen o no de los tres clásicos poderes, procede ahora fijar la atención sobre el órgano concreto que procede a la designación y observar las variedades que se presentan.

Tratándose del poder legislativo, la designación puede recaer en las Cámaras parlamentarias funcionando de manera conjunta (Italia) o separada (España). En cuanto al poder ejecutivo, en términos generales y sin distinguir entre modelos presidencialistas o parlamentarios, puede observarse que la mayoría de veces el órgano designante es el Presidente de la República (Georgia, Italia, Rumania, Bulgaria, Ucrania, Armenia, Bielorrusia, Guatemala), y en una menor medida el Gobierno (España, Austria, Moldavia).

No puede olvidarse el peculiar caso de Andorra, en donde dos de las cuatro plazas de magistrado constitucional las proveen los copríncipes. Se trata de un caso poco habitual, no tanto porque el acto de designación esté a cargo de los titulares de la Jefatura del Estado como de que se trate de autoridades extranjeras: el copríncipe francés que recae en el Presidente de la República de Francia y el copríncipe eclesiástico que recae en el Obispo de La Seu d'Urgell, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, España (43 C)¹⁰³.

Por su parte, la vinculación de los órganos selectores de magistrados con el poder judicial es la que ha sido de más diversa configuración. Por ejemplo, están los casos en que se deposita al Pleno de la Corte Suprema de Justicia (Georgia, Guatemala), al Consejo Superior de la Magistratura (Moldavia) o al Consejo General del Poder Judicial (España), a las “magistraturas superiores” (en Italia, refiriendo a la Corte de Casación, Tribunal de Cuentas y Consejo de Estado), o a otras formaciones judiciales, como en el caso de Bulgaria en el que se habilita a la reunión conjunta de los jueces de la Corte de Casación y del Tribunal Supremo Administrativo; o el caso de Ucrania donde se faculta a un congreso de todos los jueces del país.

1.2.3.- Modelo mixto (algunos ejemplos)

¹⁰³ Una panorámica sobre el Tribunal Constitucional de Andorra la ofrece un ex Magistrado del mismo, el Profesor francés LUCHAIRE, François: “Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre”, en *Cahiers du Conseil constitutionnel*, núm. 8 (Dossier: Principautés européennes), juillet 2000.

Partiendo de los dos modelos mencionados, se pueden encontrar en la experiencia comparada otras formas de designación de los magistrados constitucionales que tienen como característica la combinación de los modelos anteriores, esto es, que una parte de los magistrados se nombran a través de designación directa y otra mediante designación de actos compuestos, de modo que podríamos identificarlos como un modelo mixto.

Los países detectados con este modelo mixto vienen no sólo de regiones muy dispersas sino de tradiciones jurídicas y políticas que no parecen guardar alguna relación, de modo que no se observa entre los modelos el seguimiento de una línea de influencia, sino la creación original de los modelos de acuerdo a circunstancias propias.

En efecto, el primer país que se abordará en esta lista de ejemplos y que desde luego no pretende ser exhaustiva es Francia. Este país, de forma reciente se ha incorporado a este modelo mixto al haber sometido a cierto control parlamentario la designación de los miembros del Consejo Constitucional; enseguida se mencionará el modelo chileno, en el que una parte de los ministros del Tribunal Constitucional y los suplentes vienen elegidos mediante acto compuesto, mientras que el resto se constituye por designación directa distribuida en otros órganos estatales.

Finalmente está el caso de una de las repúblicas formadas con la desintegración de Yugoslavia, como lo es Bosnia-Herzegovina, con un modelo mixto entre designación parlamentaria directa y la participación del Presidente de una Corte Internacional en consulta con el Presidente de la República.

1.2.3.1.- El Consejo Constitucional de Francia

Comenzando con el repaso de los modelos mixtos, considérese que el Consejo Constitucional francés, en los términos originarios de la Constitución de 1958, guardaba un modelo selectivo de tipo directo, distribuyendo equitativamente el poder designación de los nueve miembros, entre el Presidente de la Asamblea, el Presidente del Senado y el Presidente de la República.

Se trataba sin duda, de un modelo peculiar, resultado del enfoque inicial dado a la institución. Sobre ello, la doctrina suele generalmente pronunciarse en torno a la idea de que no se pretendió imitar ningún modelo preestablecido

de Tribunal Constitucional como los creados en aquella época en Europa, sino que se había pensado en la configuración de un órgano político para garantizar que las Cámaras no se extendieran en los poderes que le habían diseñado los fundadores de la Vª República. El órgano, en resumen, se había ideado para conseguir un “parlamentarismo racionalizado” que impidiera volver a un régimen de Asamblea¹⁰⁴.

El modelo, sin embargo, progresivamente se ha ido acercando a la concepción actual de los tribunales constitucionales. En esta línea, el régimen de designación de sus integrantes también se ha visto recientemente modificado a través de la reforma constitucional de 2008¹⁰⁵. En efecto, dentro de la serie de intenciones de esta reforma para “modernizar las instituciones de la Vª República”, estaba la de implementar en mayor medida el control parlamentario sobre algunas actividades de los poderes del Estado, en particular, en materia de nombramientos a cargo del Presidente de la República, con la intención de evitar designaciones arbitrarias y la racionalización de las mismas.

En el marco de ese propósito, se introdujo la participación de Comisiones parlamentarias en el procedimiento de designación de los miembros del Consejo Constitucional a cargo de todos los órganos proponentes, modificando consecuentemente el modelo selectivo (13, 56 C).

Así, a las designaciones del Presidente del Senado se incluyó la necesidad de que los nombramientos fueran sometidos a dictamen de una Comisión permanente de la propia Cámara, y lo mismo se previó para las designaciones del Presidente de la Asamblea Nacional. Tratándose de las designaciones del Presidente de la República, la modificación consistió en la sujeción de sus nombramientos al respaldo de la Comisión competente tanto del Senado como de la Asamblea.

¹⁰⁴ BON, Pierre: “Le Conseil Constitutionnel français et le modèle des Cours Constitutionnelles européennes”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 32, 1991, pág. 51. En el mismo sentido, quien fuera Presidente del Consejo Constitucional (1986-1995) BADINTER, Robert: “Une longue marche: Du Conseil à la Cour constitutionnelle”, en *Cahiers du Conseil constitutionnel*, núm. 25 (Dossier: 50ème anniversaire), août 2009. Un estudio más general de la institución en ROUSSILLON, Henry: *Le Conseil constitutionnel*, 6ª ed., París, Dalloz, 2008, págs. 9-23.

¹⁰⁵ Realizada a través de la Loi constitutionnelle n. 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V République. Un estudio de la misma, en el monográfico sobre la reforma constitucional francesa de *Cuadernos de Derecho Público* (núm. 34-35), coordinado por AGUIAR DE LUQUE, LUIS.

Como se puede ver, el modelo quedó estructurado de forma mixta, pues por un lado las designaciones del Presidente del Senado y de la Asamblea, podrían considerarse de designación directa, al incardinarse la participación de la Comisión parlamentaria dentro del propio seno funcional de la institución. En cambio las designaciones del Presidente de la República, quedaron estructuradas de una forma compuesta al sujetarlas a la aprobación de órganos externos, como lo son las Comisiones parlamentarias, órganos residenciados en el poder legislativo.

Cuestión diversa es la relativa a analizar la incidencia que puede tener ese novedoso control parlamentario sobre las decisiones de los órganos proponentes, un tema sin duda importante, pero que escapa del propósito de este trabajo. En cualquier caso, y al margen de estar a la espera de que este sistema se consolide, se puede observar que el control parlamentario introducido constitucionalmente es de muy poca intensidad, aunque ciertamente abre novedosamente la posibilidad de formular un veto.

En efecto, el artículo 56 de la Constitución solamente prevé que las designaciones del Presidente del Senado y de la Asamblea serán sometidas “únicamente al dictamen de la Comisión permanente competente de la Cámara correspondiente”, mientras que para las designaciones presidenciales se establece que no podrán proceder “cuando la suma de los votos negativos en cada comisión represente al menos tres quintos de los votos emitidos en el seno de las dos comisiones” (13 C). Esto es, basta con el apoyo de dos quintos o un 40% de los votos de cada Comisión para que se aprueben. Una situación, sin duda, criticada desde los trabajos parlamentarios de la reforma constitucional y legal, sugiriendo en su lugar una mayoría calificada.

La reforma constitucional ha motivado la creación de varias leyes de desarrollo. Entre las que afectan al nuevo procedimiento selectivo se introdujo una ley orgánica para determinar los cargos o funciones públicas cuya designación presidencial pasaría por el control parlamentario, incluyendo aquí a los miembros del Consejo Constitucional¹⁰⁶, y otra ley ordinaria para establecer el nombre de las concretas Comisiones parlamentarias que controlarían los diversos nombramientos presidenciales, así como algunas características del

¹⁰⁶ Véase la Loi organique n. 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

procedimiento, tales como la necesidad de comparecencia pública del candidato, el plazo para llevarla a cabo, el escrutinio simultáneo de las designaciones del Presidente de la República en las dos Comisiones, entre otras¹⁰⁷. Las dos leyes fueron recurridas ante el Consejo Constitucional, pero ambas fueron declaradas constitucionales¹⁰⁸.

1.2.3.2.- El Tribunal Constitucional de Chile

En la experiencia latinoamericana puede observarse una manifestación del modelo mixto en la integración de los diez miembros del Tribunal Constitucional de Chile, el cual implementa la designación directa para ocho de sus componentes y con la modalidad de acto compuesto para los dos restantes.

En efecto, por un lado, la designación directa viene efectuada por el Presidente de la República que selecciona tres magistrados (o como los denominan en el país “ministros”), la Corte Suprema de Justicia que designa otros tres y el Senado que selecciona dos (92 a, b y c, de la Constitución). Por otro lado, la designación mediante acto compuesto, está diseñada para seleccionar dos plazas: el acto se integra con la propuesta de la Cámara de Diputados y la designación del Senado (92 b, C)¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Se trata de la Loi n. 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Esta ley especificó como Comisión competente permanente de la Asamblea Nacional a la de “Législation et de L'administration Générale de la République” (entre 68 y 73 miembros) y para el Senado la de “*Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale*” (integrada por 50 miembros).

¹⁰⁸ Las dos leyes fueron recurridas por el Primer Ministro. Los recursos fueron desestimados por el Consejo Constitucional mediante las Decisiones núm. 2010-609 DC y 2010-610 DC, ambas de 12 de julio de 2010, declarando la constitucionalidad de las leyes al haberse limitado a desarrollar debidamente el contenido del artículo 13 de la Constitución. Un comentario de éstas en VERPEAUX, Michel; SPONCHIADO, Lucie: “Le contrôle des nominations présidentielles devant le Conseil constitutionnel. Deux décisions a minima pour une réforme importante”, en *Semaine juridique*, núm. 35, 2010, págs. 1549-1552.

¹⁰⁹ Este es el modelo adoptado en la reforma constitucional de 2005 (Ley de Reforma Constitucional núm. 20.050). Anteriormente, el modelo chileno tenía dos peculiaridades. En primer lugar, contemplaba la designación directa de dos plazas de magistrado a cargo de un órgano del que no se tiene precedente que haya sido utilizado en el panorama comparado, como lo es el Consejo de Seguridad Nacional, esto es, un órgano asesor del Presidente de la República en materia de seguridad nacional integrado por los Presidentes de los poderes estatales y los Comandantes de las fuerzas armadas (106 C). Un órgano, en definitiva, asesor y no deliberante, donde el Presidente ciertamente ejerce un influjo predominante. En segundo término, las tandas de designaciones de la Corte Suprema de Justicia, debían hacerse de entre los propios Magistrados integrantes de la Corte, conservando éstos la calidad y funciones jurisdiccionales contemporáneamente en los dos tribunales. Un estudio sobre la práctica seguida en este modelo en NÚÑEZ, Manuel Antonio: “Sobre la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional chileno”, en *Revista Chilena de Derecho*, núm. especial, 1998, págs.

La selección de estas dos plazas se considera en este trabajo de tipo compuesto, debido a que, pese a tratarse de órganos residenciados en el mismo poder legislativo, lo cierto es que se trata de Cámaras diversas, que responden tanto en su composición como en su función, a objetivos distintos (52 C).

En el modelo selectivo de magistrados chileno conviene considerar un elemento ciertamente poco habitual. Se trata de la introducción por vía legal, de un sistema de designación de dos plazas de Ministro suplente. Estos cargos son designados cada tres años mediante un acto compuesto integrado con la propuesta del Presidente de la República y la aprobación del Senado, de entre la lista de siete personas que presenta el propio Tribunal Constitucional¹¹⁰.

Todas las participaciones de los órganos parlamentarios necesitan el respaldo de las dos terceras partes de sus integrantes¹¹¹, y todas las intervenciones, tanto del Tribunal Constitucional para la propuesta de suplentes como la de la Corte Suprema de Justicia para la designación de tres jueces constitucionales, se realizan previo “concurso público de antecedentes”. La Corte Suprema designa en una votación secreta en una sesión especialmente celebrada al efecto, con el respaldo de la “mayoría absoluta de los miembros que asistan a la sesión”, mientras que en una votación pública el Tribunal Constitucional elige a los siete candidatos para las plazas de suplente que tengan mayor número de votos del colegio¹¹².

211-215. Con la reforma constitucional, se eliminó la participación del Consejo Nacional de Seguridad y se determinó la función de la magistratura constitucional con carácter exclusivo. Una útil compilación de los trabajos parlamentarios que llevaron a realizar esta trascendente reforma constitucional, pueden encontrarse en la siguiente página de Internet del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca (Chile): www.cecococh.cl/htm/materiales/docus.htm.

¹¹⁰ Véase el art. 18 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (Ley 17.997). La opción de introducir a los ministros suplentes mediante ley, ha sido criticada por la doctrina, debido a que estiman que debieron preverse desde la Constitución, y que fueran nombrados por los órganos ya contemplados por la Constitución para el resto de ministros. El reenvío que hace la Constitución a la Ley Orgánica para el desarrollo de las disposiciones del TC, no abarcaría la modificación del modelo de composición y designación de magistrados. Véase ALCALÁ NOGUEIRA, Humberto: “El estatuto de los jueces constitucionales en Chile”, en FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa*, México, IIJ, UNAM, 2012, pág. 33. Publicado también en el *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 14, 2010, págs. 279-322.

¹¹¹ En la Cámara de Diputados son 80 votos puesto que se integra de 120 miembros (47 C) y en el Senado son 26 votos, dado que actualmente el Senado se compone de 38 miembros.

¹¹² El concurso público de antecedentes y el procedimiento de designación de la Corte Suprema de Justicia se encuentra regulado por el Auto Acordado de 24 de marzo de 2006. Por otro lado, conviene tener presente que según el art. 93, del Código Orgánico de Tribunales, la

1.2.3.3.- El Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina

Otro ejemplo de los modelos mixtos detectados se encuentra en la República de Bosnia-Herzegovina. Su Tribunal Constitucional cuenta con un modelo de composición muy especial, que ha sido resultado del complicado proceso de pacificación y estructuración del país, luego de los “Acuerdos de Dayton” que prefiguraron la Constitución de 1995¹¹³. El modelo de composición, se corresponde con las técnicas de conformación de las instituciones en Estados multinacionales o multiétnicos, generalmente polarizados, en las cuales se establecen ciertas cuotas de cada “parte en disputa”, como solución intermedia para conseguir integrar los órganos estatales con cierta regularidad.

Se trata de un remedio que ya ha sido utilizado en otras experiencias constitucionales con mayor o menor éxito, en las que la plaza queda reservada para determinada extracción cultural o lingüística (como sucede en Bélgica), o para diversas etnias o naciones como en su momento se ensayó en 1960 en el ahora inexistente Tribunal Constitucional de Chipre, o bien, considerando en ocasiones cierta presencia internacional como en el Tribunal Constitucional del territorio en disputa de Kosovo.

En el caso de Bosnia-Herzegovina, los anteriores elementos han tenido cabida tanto formal como informalmente¹¹⁴. En el plano formal, conviene advertir que el modelo no se ha estructurado con la participación del poder legislativo del país, sino con el de las dos entidades que lo conforman¹¹⁵, a

Corte Suprema de Justicia se integra de veintidós miembros. El régimen que regula la proposición de magistrados a cargo del Tribunal Constitucional se encuentra en el art. 18 de la Ley Orgánica Constitucional del TC y en el Auto Acordado del Tribunal Constitucional “que regula la postulación y la formación de nóminas de suplentes de Ministro del Tribunal Constitucional”, de 4 de noviembre de 2009.

¹¹³ La Constitución, es en realidad el cuarto anexo del Acuerdo de Paz de Dayton, alcanzado en Dayton, Ohio, EE. UU. el 21 de noviembre de 1995 y formalmente firmado en París el 14 de diciembre 1995, constituyendo el final de la guerra de la Independencia de Bosnia.

¹¹⁴ Un estudio del modelo de esta Corte en MAZIAU, Nicolas: “Présentation de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine”, en *Cahiers du Conseil constitutionnel*, núm. 11 (Dossier: Bosnie-Herzégovine), décembre 2001; FAVOREU, Louis: “La Corte Constitucional de Bosnia-Herzegovina y el modelo europeo de justicia constitucional”, en VEGA GÓMEZ, Juan; CORZO SOSA, Edgar: *Tribunales y justicia constitucional*, Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, IIJ, 2002, págs. 193-199.

¹¹⁵ Bosnia-Herzegovina se ha constituido en un Estado federal, con un órgano parlamentario bicameral consistente en la “Cámara de los Pueblos” y en la “Cámara de representantes” (4 C).

saber, la Cámara baja de la Federación de Bosnia y Herzegovina (98 integrantes) que designa directamente cuatro magistrados y la Asamblea Nacional de la República de Srpska (83 integrantes), que designa directamente dos jueces constitucionales (6.1 a, C).

El elemento mixto del modelo de composición viene de la forma de designación de tres jueces constitucionales, los cuales surgen de un acto compuesto integrado con las propuestas del Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en consulta con la Presidencia del país, la cual conviene aclarar, está conformada por tres miembros elegidos por su correspondiente territorio: un Bosniaco, un Croata y un Serbio (5 C). Los tres jueces referidos, no pueden ser nacionales de Bosnia-Herzegovina ni de otro Estado vecino (6.1b, C)¹¹⁶.

Sobre estos tres jueces internacionales, sin embargo, también se proyecta otra disposición orgánica muy peculiar, aunque del todo comprensible para la consolidación del país, como lo es la disposición constitucional que deja abierta la posibilidad para que a partir de la segunda renovación de estos magistrados, el Parlamento pueda dictar una ley para proveer un método distinto de selección (6.1 d, C). De modo que la presencia internacional del modelo selectivo, podría en su caso mantenerse o cambiar y en consecuencia, colocar este modelo en otro punto de la clasificación que hemos planteado en este trabajo.

Finalmente, desde el plano informal, el funcionamiento del modelo ha adoptado los principios de conformación multiétnica que ya mencionábamos, de modo que las seis designaciones directas a cargo de los órganos parlamentarios se han caracterizado por recaer en dos jueces croatas, dos

El país, a su vez, se compone de dos entidades: una Federación y una República (1.3 C). Además cuenta con un distrito autónomo. La primera se denomina "Federación de Bosnia-Herzegovina" y cuenta también con un Parlamento bicameral; la segunda se denomina República de Srpska y su Parlamento es unicameral; la tercera finalmente es el Distrito autónomo de Brcko, que ha sido llevado a la Constitución general del país en la reforma de 2009 (4.4 C).

¹¹⁶ Los primeros jueces internacionales fueron nombrados en octubre de 1996 por el Presidente del TEDH, el señor Rolv Ryssdal. Los jueces seleccionados fueron Hans Danelius, Presidente del Consejo Legislativo de Suecia, ex Juez de la Corte Suprema, y antiguo miembro de la Comisión Europea de Derechos Humanos; Joseph Marko, Profesor de la Universidad de Graz, Austria; y Louis Favoreu, Profesor de la Universidad Aix-Marsella, Francia. En cuanto al procedimiento de selección de los candidatos a cargo del Presidente del TEDH, se tiene registro que este solicitó a algunos gobiernos nacionales que procedieran a realizar propuestas de candidaturas. Véase FAVOREU, Louis: "La Corte Constitucional de Bosnia-Herzegovina...", op. cit., pág. 196.

jueces bosnios (distinguidos también por su religión, esto es musulmanes) y dos jueces serbios, designados por los parlamentarios de las fuerzas políticas representantes de cada comunidad, también llamados “pueblos constituyentes”¹¹⁷.

¹¹⁷ Los primeros seis jueces nacionales fueron, por parte de la comunidad croata Mirko Zovko y Zvonko Miljko; por la comunidad bosnio-musulmana Ismet Dautbasic y Kasim Begic; y por la comunidad serbia Marko Arsovic y Vitomir Popovic. Véase FAVOREU, Louis: “La Corte Constitucional de Bosnia-Herzegovina...”, op. cit., pág. 195.

CAPÍTULO II

La designación del juez constitucional: dos casos de referencia

2.1.- Alemania

El establecimiento de un Tribunal Constitucional Federal (*Bundesverfassungsgericht*) representa una de las principales innovaciones de la Ley Fundamental de Bonn, ya que es la materialización del propósito de los constituyentes alemanes de 1949, de no repetir una experiencia similar al nacional-socialismo que, entre otras cosas, demostró la incapacidad del legislador para proteger los derechos fundamentales¹¹⁸. Se adoptó un modelo kelseniano de tribunal constitucional reservando para la Ley Fundamental (*Grundgesetz*) muy pocas de sus características, concretamente se trató del artículo 94, que estableció los órganos encargados de proponer a los magistrados constitucionales y limitadas previsiones al régimen de incompatibilidades. El mismo precepto transfirió la determinación del resto de características al legislador ordinario.

El desarrollo legislativo del Tribunal Constitucional Federal (TCF), se vio materializado en la Ley del Tribunal Constitucional Federal de 12 de marzo de 1951 (LTCF), en la que se procedió a la determinación del número de integrantes del Tribunal, la duración del periodo de cargo, el proceso de selección de los magistrados, su estatuto jurídico y demás aspectos de la organización y las competencias. Luego de promulgada la LTCF, el Tribunal entró en funcionamiento el 7 de septiembre de ese mismo año.

El Tribunal en sus inicios fue ubicado bajo la autoridad del Ministerio Federal de Justicia en cuanto que pertenecía al poder judicial. Esta situación

¹¹⁸ FAVOREU, Louis: *Los tribunales constitucionales*, Barcelona, Ariel, 1994, pág. 63.

provocó una reacción enérgica en los primeros jueces constitucionales, quienes desde un principio emprendieron la tarea de defender la autonomía del Tribunal a través de la resolución de los procesos constitucionales que se les planteaban. Las discusiones en este sentido se prolongaron hasta el punto de que el Tribunal aprobara el famoso Informe del ponente Gerhard Leibholz acerca de la cuestión del “estatus” el 21 de marzo de 1952, en el que se reclamaba, entre otras cosas, acabar con toda sujeción al Ministerio de Justicia, lo que en 1953 fue acogido por el *Bundestag*, quien puso término a dicha dependencia, aunque la plena autonomía no se consumó hasta 1975, cuando el Pleno del Tribunal aprobó su propio Reglamento interno¹¹⁹.

Abordar el Tribunal Constitucional en Alemania tiene además una peculiaridad debido a la estructura federal del Estado y en particular, al significado de la autonomía constitucional de los Estados miembros, que encuentra su expresión en la existencia de distintos órganos de justicia constitucional: por un lado, el *Bundesverfassungsgericht* de carácter federal y por el otro, los *Länderversfassungsgerichte* instituidos en los *Länder*, muchos de ellos creados algunos años antes que el federal¹²⁰.

¹¹⁹ El informe está traducido al castellano en LEIBHOLZ, Gerhard: “El estatuto del Tribunal Constitucional Federal en Alemania”, en FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa*, México, IIJ, UNAM, 2012, págs. 687-724. El texto también fue publicado en el *Jahrbuch des öffentlichen Rechts*, núm. 6, 1957, págs. 120 y ss. Según lo detalla Brage Camazano, el informe causó reacciones airadas por parte del Gobierno y especialmente del Ministro de Justicia Thomas Dehler en contra de su viejo compañero de partido Hermann Höpker Aschoff, Presidente del Tribunal Constitucional. En sede política, los socialdemócratas y el *Bundesrat* se alinearon generalmente con las propuestas de los jueces constitucionales, mientras que la coalición gobernante y mayoritaria en el *Bundestag*, se oponía. Más allá de la contienda, lo cierto es que el prestigio creciente del Tribunal, su labor jurisprudencial y su rol integrador hicieron que el *Bundestag* en 1953 pusiese término a la dependencia del Tribunal con el Ministerio de Justicia y que en 1960 todas las exigencias del informe fueran ya asumidas. BRAGE CAMAZANO, Joaquín: “Estudio introductorio. El Tribunal Constitucional federal y la jurisdicción constitucional en Alemania, con particular referencia al pensamiento de Peter Häberle y Konrad Hesse”, en HESSE, Konrad; HÄBERLE, Peter: *Estudios sobre la jurisdicción constitucional, con especial referencia al Tribunal Constitucional alemán* (J. Brage Camazano, trad.), México, Porrúa, IMDPC, pág. 4.

¹²⁰ Entre los órganos de justicia constitucional establecidos antes del Tribunal Constitucional Federal se encuentran, en la zona de ocupación estadounidense, el Baden-Württemberg, Hessen, Bayern y Bremen, todos de 1946; en la zona de ocupación francesa está el Rheinland-Pfalz, Saarland y los ahora fusionados Baden y Württemberg-Hohenzollern, de 1947. Luego de la entrada en vigor de la Constitución de 1949 y el nacimiento de la República Federal Alemana, Berlín Oeste y los Länder de ocupación británica Schleswig-Holstein en 1949, Nordrhein-Westfalen en 1950 y Niedersachsen en 1951. Véase COSULICH, Matteo: “Giustizia costituzionale e Stato federale: L’organizzazione del Bundesverfassungsgericht e dei Landesverfassungsgerichte in Germania”, en COSTANZO, Pasquale (coord.): *L’organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale*: atti del Convegno, Imperia, 12-13 maggio 1995, Torino, G. Giappichelli, 1996, págs. 493-494.

Con el desarrollo constitucional de Alemania y con la creación de nuevos tribunales constitucionales en las entidades federativas, se ha detectado cómo los elementos estructurales de estos últimos se han acercado más al modelo federal que a los órganos locales preexistentes, lo que ha impulsado cierta uniformidad en la disciplina¹²¹. De los tribunales constitucionales que operan en Alemania, en este trabajo sólo se abordará al Tribunal Constitucional Federal.

2.1.1.- La composición del Tribunal Constitucional Federal

El artículo 94 de la Ley Fundamental de Bonn (LF) establece que el Tribunal Constitucional Federal debe componerse de magistrados federales y de otros miembros, los cuales serán elegidos por mitades por las Cámaras parlamentarias. Es la Ley del Tribunal Constitucional Federal la que detalla la integración actual del Tribunal en dieciséis miembros, de los cuales ocho son designados por el *Bundestag* (Dieta Federal) y ocho por el *Bundesrat* (Consejo Federal)¹²². Todos son designados para un periodo de doce años contados de manera individual a partir del día en que se efectúa el nombramiento, sin posibilidad de reelección inmediata ni sucesiva (4.2 LTCF) y tampoco pueden desempeñar el cargo más allá del mes en que cumplan la edad de retiro de 68 años (4.3 LTCF).

Deberán ser elegidos, como máximo, tres meses antes de la expiración de su predecesor, pero si llegada la finalización del periodo de cargo no se encontrase designado éste aún, el cesante continuará en el ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento del nuevo magistrado (4.4 LTCF). Este régimen de *prorogatio* es operativo incluso en los casos de magistrados constitucionales que hayan dimitido de su cargo.

¹²¹ Los nuevos tribunales constitucionales de las entidades federativas se asemejan más al órgano de justicia constitucional federal que a los preexistentes en aspectos tales como el número de miembros, el método de designación, la selección del Presidente, a los requisitos técnico-jurídicos requeridos para ser magistrado constitucional, la duración del mandato, etcétera. Para un estudio más detallado de dichos aspectos, véase COSULICH, Matteo: “Giustizia costituzionale e Stato federale...”, op. cit., págs. 501- 508; LUTHER, Jörg: “El estatus jurídico del juez constitucional en la experiencia alemana”, en FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa*, México, IIJ, UNAM, 2012, págs. 659-688.

¹²² Se han introducido modificaciones en cuanto al número de magistrados. El TCF fue concebido originalmente con veinticuatro miembros (1951), aunque poco después lo redujo a veinte (1956) y luego a los dieciséis actuales (1963).

En el supuesto de una terminación anticipada del cargo, el nuevo magistrado deberá ser elegido dentro de un mes por el mismo órgano federal que eligió a su predecesor. Si ha expirado el plazo del magistrado y el *Bundestag* se encontrase disuelto, se tendrá el plazo de un mes a partir de la primera reunión del *Bundestag* para proceder a la renovación.

El TCF funciona como Tribunal doble o “de gemelos”, puesto que está organizado en dos Salas de ocho miembros cada una. Las Salas cuentan con un reparto competencial regulado por ley, siendo la primera Sala encargada de los procedimientos constitucionales donde se reclamen derechos fundamentales y la segunda de resolver los conflictos orgánicos (14 LTCF). Cada una de las Salas es, en sí misma, el Tribunal Constitucional a todos los efectos, de ahí que por ejemplo, las sentencias de una, son obligatorias para la otra¹²³. Los magistrados constitucionales son elegidos para una determinada Sala y en principio no pueden cambiar de la una a la otra¹²⁴.

Para proveer de manera más eficaz la resolución de algunos asuntos, cada Sala puede formar en su interior una o varias secciones o cámaras, las cuales no pueden componerse de más de tres jueces constitucionales, y la composición sólo puede permanecer sin cambios por más de tres años (15a, LTCF).

Esta caracterización dual tiene también su reflejo en materia de integración del Tribunal, pues cada una de las Salas debe cumplir con los criterios constitucionales y legales de composición previstos. Así, cada Sala debe tener tres plazas destinadas para jueces federales, y cada Sala debe estar integrada por magistrados seleccionados por mitades entre el *Bundestag* y el *Bundesrat* (5.1 LTCF). Incluso la práctica política pone de manifiesto cierta repartición equitativa en cada una de las Salas entre las dos principales fuerzas políticas, si acaso, con alguna participación puntual de otras fuerzas más

¹²³ Lo que no deja de plantear algunos problemas prácticos de congruencia recíproca entre la doctrina de las Salas, pese a la existencia de un mecanismo para que el Pleno se pronuncie en caso de discrepancia (16 LTCF).

¹²⁴ Aunque existen algunas excepciones, por ejemplo cuando convivan múltiples recusaciones de los magistrados en una Sala que no permitan el *quorum* legal de funcionamiento (seis magistrados). En este caso, se procederá a cubrir las ausencias con miembros de la otra Sala (19 LTCF).

reducidas, en especial cuando son socios minoritarios de la coalición de gobierno¹²⁵.

Las tres plazas destinadas para jueces federales en cada una de las Salas se reparten siguiendo un criterio equitativo entre los dos órganos proponentes. En una el *Bundesrat* cubrirá dos plazas y el *Bundestag* una, pero en la otra será al revés (5.1 LTCF).

Los requisitos exigidos para acceder al cargo de magistrado constitucional, hacen que los miembros del Tribunal se destaquen por su elevada preparación jurídica. Recuérdese en efecto, que tres magistrados de cada Sala deben provenir de alguno de los cinco Tribunales Supremos federales, donde además se exige que hayan desempeñado el cargo (en activo) al menos tres años (2.3 LTCF). Por otro lado, se exige haber cumplido los cuarenta años de edad, ser elegibles como diputados en el *Bundestag* y que posean la idoneidad requerida para ejercer el cargo de juez (3.1 LTCF).

Esta idoneidad se obtiene a través de dos exámenes estatales, el primero se realiza después de los estudios universitarios, y el segundo, después de un periodo de preparación práctica común a todas las profesiones jurídicas¹²⁶. Dentro de la fase constitutiva del TCF y hasta 1951 se exigía además, poseer “conocimientos especiales en el Derecho Público y experiencia de la vida pública”.

Ninguno de los propuestos podrá pertenecer a alguno de los órganos proponentes, al Gobierno Federal o a los órganos correspondientes de un *Länder* y además, no podrán vincular su función judicial con ninguna otra actividad profesional que la de un Profesor de Derecho en una universidad alemana (3.4 LTCF).

El Presidente del TCF y su Vicepresidente, son elegidos alternativamente por el *Bundestag* y el *Bundesrat*, de entre los miembros de las

¹²⁵ Por ejemplo, las distribuciones en cada Sala han quedado en cuatro para UCD y cuatro para el PSD, o tres para cada uno, dejando uno para los Verdes y otra para los Liberales. Véase LÜBBE-WOLF, Gertrude; MELLINGHOFF, Rudolf; GAIER, Reinhard: “Constitutional Justice: functions and relationship with the other public authorities”, en National report prepared for the XVth Congress of the Conference of European Constitutional Courts by The Federal Constitutional Court of Germany, 23-25 may 2011, Bucharest, Romania, págs. 2-3; FROMONT, Michel: “Allemagne Federale”, en *Annuaire International de Justice Constitutionnelle*, vol. IV, 1988, págs. 85-86.

¹²⁶ LUTHER, Jörg: “El estatus jurídico del juez constitucional en la experiencia alemana”, en FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa*, México, IIJ, UNAM, 2012, pág. 665.

distintas Salas (9 LTCF). El objetivo que subyace en este precepto es evitar en el interior del Tribunal, las fricciones que suelen ocasionar este tipo de procesos electorarios. Finalmente debe mencionarse que el nombramiento formal de los magistrados es llevado a cabo por el Presidente de la Federación¹²⁷, ante el cual deben también efectuar un juramento (10, 11 LTCF).

Como se puede observar, en este modelo de composición, la participación de los órganos legislativos federales del Estado es absoluta. Esta selección de origen netamente parlamentaria es entendida en la doctrina germana como la fórmula que permite proporcionar una legitimación política de tipo democrático a los magistrados constitucionales, que a su vez, es sostenida mediante la cadena de legitimación a otros actos intermedios que tienen como origen la voluntad del pueblo, del cual nace todo poder político según lo proclama el artículo 20.2 de la Ley Fundamental¹²⁸.

Es verdad que la elección parlamentaria de todos los miembros del TCF coloca a los partidos políticos alemanes como los principales protagonistas del proceso de selección, sin embargo esto no excluye una determinada influencia indirecta de otros poderes en la selección de los magistrados constitucionales.

De esta manera, se puede destacar la influencia del poder judicial al establecerse como requisito ineludible en el electorado pasivo, que al menos tres miembros de cada una de las Salas del Constitucional, se hayan desempeñado como magistrados federales de la jurisdicción ordinaria suprema; por otro lado, se encuentra la influencia que los *Länder* y sus órganos ejecutivos ejercen y canalizan a través del *Bundesrat*.

La confluencia de sensibilidades federales, democráticas y judiciales en este modelo de composición, en general se ha considerado positivo por la doctrina germana, ya que “pone de manifiesto el contenido político especial de la jurisdicción constitucional”¹²⁹. Si bien, no deja de resultar un tema abierto

¹²⁷ Con el refrendo del Ministro Federal de Justicia, de conformidad con el artículo 58 de la LF.

¹²⁸ Véase, por ejemplo, GECK, Karl: “Nombramiento y ‘status’ de los Magistrados del Tribunal Constitucional Federal de Alemania”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 22, 1988, pág. 179; LUTHER, Jörg: “Problema di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia costituzionale in Germania”, en COSTANZO, Pasquale (coord.): *L'organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale*: atti del Convegno, Imperia, 12-13 maggio 1995, Torino, G. Giappichelli, 1996, pág. 478.

¹²⁹ SCHLAICH, Klaus: “El Tribunal Constitucional Federal Alemán”, en FAVOREU, Louis; LUCHAIRE, François; et al.: *Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales*, Madrid, CEC,

para su reforma, debido a la politización que suele caracterizar a las designaciones de magistrados en la práctica¹³⁰.

2.1.2.- La selección de los magistrados constitucionales

2.1.2.1.- Las listas preparatorias del Ministerio Federal de Justicia

La selección de los magistrados del Tribunal Constitucional Federal alemán es llevada a cabo por las dos ramas del Parlamento Federal: el *Bundesrat* y el *Bundestag*. De forma previa al momento de selección de los magistrados constitucionales, existe un procedimiento preparatorio en el que primeramente el Ministerio Federal de Justicia deberá elaborar dos listas en las que consignará los nombres de las personas que cumplan los requisitos para ser magistrado constitucional y que se consideren idóneas para el cargo (8 LTCF).

En una lista se asentarán los nombres de los jueces federales y en otra, los nombres que hayan resultado propuestos por un Grupo parlamentario del *Bundestag* o bien, por el Gobierno Federal o alguno regional. Estas listas son actualizadas constantemente y deben presentarse a los Presidentes de los órganos proponentes a más tardar una semana antes de la selección de los nuevos magistrados.

Los órganos proponentes no están obligados a elegir a las personas que les presenten en esas listas, y ello se ha demostrado desde la primera elección, razón por la cual éstas “no han jugado papel importante en la mayor

1984, pág. 145. Coinciden entre otros, GECK, Karl: “Nombramiento y ‘status’ de los Magistrados...”, op. cit., pág. 179; WEBER, Albrecht: “La jurisdicción constitucional de la República Federal de Alemania”, en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 7, 2003, pág. 497.

¹³⁰ Es por ello que han estado presentes propuestas de modificación al modelo de designación del Tribunal. Por ejemplo, Klaus Stern ha planteado la inclusión del Jefe del Estado como *pouvoir neutre*, para designar directamente algún magistrado o proponer una terna. STERN, Klaus: *Jurisdicción constitucional y legislador*, Madrid, Dykinson, 2009, págs. 69-70. Este mismo autor también propone que otros órganos puedan presentar candidaturas, por ejemplo un órgano de consulta formado por magistrados constitucionales locales, magistrados federales, facultades de derecho y la abogacía. De igual forma, sugiere introducir la obligación de que el órgano designante motive la decisión y uniformar lo más posible los procedimientos selectivos de las dos Cámaras. Véase la referencia que hace de ello LUTHER, Jörg: “La composizione dei tribunali costituzionali e le autonomie territoriali: esperienze straniere”, en ANZON, A.; AZZARITI, G.; LUCIANI, M. (a cura di): *La composizione della Corte Costituzionale. Situazione italiana ed esperienze straniere. Atti del Seminario di Roma del 14 marzo 2003*, Torino, G. Giappichelli, Quaderni della Rivista di Diritto Costituzionale, núm. 3, 2004, pág. 83, nota 34.

parte de las elecciones”¹³¹. Si bien, no se descarta que pudieran asumir un significado político que, finalmente consintieran una participación indirecta del Ejecutivo en la designación de los magistrados constitucionales¹³².

2.1.2.2.- La designación por el *Bundestag*

Con respecto al *Bundestag*, el artículo 94.1 de la LF, prevé la facultad para que nombre la mitad (ocho) de los magistrados constitucionales del TCF. Dicha facultad se entiende –según su literalidad- depositada al órgano en general y por tanto, de la competencia del Pleno, sin embargo, la LTCF prevé que sean designados de forma indirecta (art. 6.1), de modo que la elección es llevada a cabo por una pequeña Comisión electoral de doce legisladores de la misma Cámara. Este procedimiento indirecto previsto desde la versión originaria de la ley ha sido respaldado por el TCF en varias ocasiones, e incluso recientemente ha reiterado su constitucionalidad¹³³. Conviene traer a cuento los principales motivos de inconstitucionalidad que se han planteado y los criterios fijados por el Tribunal para entender de mejor manera la estructura de la Comisión.

En primer término, considérese que la elección indirecta suele ser objetada por incumplir el precepto constitucional que deposita la designación de la mitad de magistrados al *Bundestag* (620 integrantes), y no a una Comisión (12 integrantes). Situación que plantea además una deficiencia a la legitimidad democrática que debería imprimir dicho procedimiento. Sin embargo, el TCF ha subrayado que la LF no ha prescrito un procedimiento específico de designación de jueces, sino que ha dejado detallar dicho procedimiento a la Ley, lo que implica que la votación del magistrado no ha quedado depositada necesariamente al Pleno del *Bundestag*.

El TCF confirma además la anterior determinación, por el hecho de que el legislador no haya aclarado este punto en las diversas modificaciones que se

¹³¹ GECK, Karl: “Nombramiento y ‘status’ de los Magistrados...”, op. cit., pág. 179.

¹³² ROMANO, Barbara: “L’organizzazione e il funzionamento del Bundesverfassungsgericht”, en COSTANZO, Pasquale (coord.): L’organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale: atti del Convegno, Imperia, 12-13 maggio 1995, Torino, G. Giappichelli, 1996, pág. 720.

¹³³ Véanse *BVerfGE* 40, 356, de 3 de diciembre de 1975; 65, 152, de 11 de octubre de 1983 y recientemente con la sentencia (Beschluss) 2 BvC 2/10, de 19 de junio de 2012. Una breve alusión a esta última en SIMÓN YARZA, Fernando: “La democracia parlamentaria y el Tribunal de Karlsruhe: la crisis de la Eurozona, el sistema electoral y el nombramiento de jueces constitucionales”, en *Revista General de Derecho Constitucional*, núm. 15, 2012, págs. 1-37.

han realizado a la Ley Fundamental, máxime cuando las críticas formuladas al procedimiento selectivo siempre han estado presentes. El Tribunal, por otra parte, recuerda que esta ha sido su posición desde que en otras ocasiones tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la materia¹³⁴.

En segundo término, suele objetarse también que la Comisión vulnera las funciones representativas del Pleno del *Bundestag*. En este punto, el TCF niega transgresión alguna, pues la función representativa de la Cámara se predica de la totalidad del órgano, a través de la participación de todos sus miembros, lo cual sucede en el caso, con la participación de los diputados en igualdad de condiciones en la conformación de la Comisión electoral¹³⁵. Una Comisión electoral que está formada respetando el principio de proporcionalidad, reflejando la composición del Pleno, de acuerdo a las propias listas que los Grupos políticos presentan (6.2 LTCF) y que la forma de tomar las decisiones es por medio de una mayoría reforzada de dos tercios de los comisionados (6.5 LTCF).

El TCF reconoce que la formación de la Comisión electoral, es en efecto, una transferencia de poder de decisión que hacen los parlamentarios a los miembros de la Comisión, los cuales la llevan a cabo con la instrucción de respetar el deber de confidencialidad. Sin embargo, el TCF especifica que dicha limitación tiene una razón legítima de suficiente peso, consistente en la protección de otros bienes jurídicos de rango constitucional, como lo es fortalecer la reputación del Tribunal y la confianza en su independencia, además de garantizar su funcionalidad¹³⁶.

No cabe duda de que el Tribunal ha estimado claramente la constitucionalidad de esta modalidad electiva, y las justificaciones que ofrece para ello son muy interesantes, aun cuando en su habitual ejercicio de ponderación sólo las esboce de manera general. La idea que parece subyacer es que la designación a cargo de un grupo más reducido de personas, ofrece mayor protección a otros bienes jurídicos de rango constitucional que inciden sobre el Tribunal, que la otra opción de dejar esa tarea a un órgano más numeroso como es el Pleno. No se trata por supuesto, de cualquier tipo de

¹³⁴ 2 BvC 2/10, de 19 de junio de 2012, II párrafos 10 y 11.

¹³⁵ 2 BvC 2/10, de 19 de junio de 2012, II párrafo 12.

¹³⁶ 2 BvC 2/10, de 19 de junio de 2012, II párrafos 13 y 14.

grupo, sino de una “parte” que guarda con el “todo” una relación de correspondencia o paralelismo.

Los “otros bienes jurídicos tutelados de rango constitucional” que valora el Tribunal, se refieren a la funcionalidad, al prestigio y a la independencia del Tribunal. Los supuestos de afectación de estos tres elementos son múltiples. El Tribunal no los refiere expresamente, pero se trata al menos de la excesiva politización de las designaciones, de la manipulación de los plazos o la falta de designación en tiempo de los magistrados, o la elección de perfiles menos idóneos para el cargo. Parece razonable deducir, que el TCF ha estimado que estos riesgos son más evitables cuando la designación descansa en una Comisión que en el Pleno, bien por su especializada composición, bien por las facilidades orgánicas de su funcionamiento.

Dejando por el momento la perspectiva jurisprudencial, abordemos ahora el resto de características de la Comisión previstas en las disposiciones normativas. Para la conformación de la Comisión electoral (*Wahlausschuß*), cada Grupo parlamentario tiene derecho a presentar una lista de candidatos a compromisarios. Los Grupos parlamentarios se forman como mínimo, con el 5% de los miembros del Parlamento federal, pero también se reconoce la figura de la “fracción” para quienes no consiguen dicha cantidad, de esa manera son reconocidos como “Grupo parlamentario” y pueden gozar de las facultades parlamentarias que están previstas para éstos, como lo es, en el caso, la presentación de listas de compromisarios para la Comisión electoral¹³⁷. También es admisible que se puedan presentar listas respaldadas por varios grupos y fracciones.

Estas listas de compromisarios no son secretas, de modo que son publicadas por los grupos y fracciones en el *Bundestag*¹³⁸. Con buen criterio, las listas de los Grupos parlamentarios mayoritarios suelen contener claramente un número mayor de candidatos, al contrario que las fracciones, que habitualmente colocan en la lista dos o tres nombres, cantidades que, por

¹³⁷ Véase art.10, Rules of procedure of the *Bundestag*.

¹³⁸ Véase al respecto, la nota de 17 de diciembre de 2009, donde se dan a conocer los candidatos propuestos por los partidos políticos para conformar la Comisión electoral de la 17ª Legislatura del *Bundestag*, disponible en www.bundestag.de/presse/hib/2009_12/2009_317/08.html.

otro lado, no rebasarán el número de compromisarios que pudieran obtener, debido al reducido número de votos que reciben.

Los diputados sólo pueden votar una lista pero no personas concretas. Luego de efectuada la votación, de acuerdo con la cantidad de votos obtenida por cada lista, se calcula proporcionalmente el número de compromisarios que serán tomados de cada una hasta conseguir el número de doce integrantes que conformarán la Comisión.

El sistema utilizado para su confección es la regla *d'Hondt*. Esta regla, es una fórmula de distribución proporcional generalmente utilizada en el ámbito del Derecho Electoral en muchos países. A través de esta medida, se consigue la configuración de la Comisión electoral de una manera proporcional y representativa del arco parlamentario, es decir, se consigue que la Comisión tenga un “efecto espejo” o “muestra representativa” que se corresponde con la conformación política del Pleno.

En la 17ª Legislatura (2009-2013), la *Wahlausschuß* quedó conformada con cinco miembros del Grupo parlamentario mayoritario del Gobierno CDU-CSU, luego los Grupos de la oposición consiguieron tres por el SPD, dos el Grupo de FDP y las fracciones de los verdes y la izquierda “*Die Linke*”, uno cada uno. De ellos todos son juristas, cuatro son mujeres y ocho hombres. En la Legislatura anterior (2005-2009), el Grupo CDU/CSU tuvo cinco diputados compromisarios, el SPD consiguió cuatro, las fracciones de la oposición de FDP, la izquierda y Alianza 90/Los Verdes, obtuvieron un delegado cada una¹³⁹.

La elección de los compromisarios se hace al comienzo de la Legislatura y permanece conformada hasta su finalización y no necesita posterior convalidación por parte del *Bundestag*. El mandato de los integrantes de la Comisión Electoral se mantiene igualmente por todo el periodo de la Legislatura, si hubiere alguna baja o imposibilidad de algún miembro, pasará a formar parte de la misma el siguiente de la lista, según fue presentada

¹³⁹ CDU/CSU, es la Unión Demócrata Cristiana (*Christlich Demokratische Union Deutschlands*), junto con la Unión Social Cristiana, una fuerza política que sólo tiene presencia en el estado de Baviera (*Christlich Soziale Union*); SPD es el Partido Socialdemócrata de Alemania (*Sozialdemokratische Partei Deutschlands*); y el FDP es el Partido Democrático Libre (*Freie Demokratische Partei*).

originariamente. Los comisionados no están sometidos a instrucciones de otro órgano del *Bundestag* ni de otra autoridad estatal.

El miembro con mayor edad de la Comisión es el encargado de convocar y presidir todas las reuniones tendentes a la selección de todos los magistrados, sin embargo corresponde al Comité decidir la modalidad de la votación, que regularmente son operadas a mano alzada, pero en ocasiones se han efectuado a través de escrutinio secreto. En el momento en que corresponda proceder a la selección de los magistrados constitucionales, el acuerdo debe venir con el apoyo favorable de dos tercios de los votos, esto es, por lo menos ocho miembros de la Comisión (6.5 LTCF)¹⁴⁰. Las reuniones de ésta son secretas, incluso los compromisarios están obligados a mantener la reserva sobre los contenidos de los debates realizados a su interior para seleccionar a los magistrados (6.4 LTCF).

Como ya se ha dicho, la Comisión es la que materialmente toma la decisión del nombre de la persona que será seleccionada como magistrado constitucional, por tanto, resulta razonable que los partidos políticos muestren mucho interés en el procedimiento de conformación de la Comisión, esforzándose en colocar a personas relevantes del partido y de su más entera confianza.

En la práctica, dado que el procedimiento selectivo llevado a cabo por la Comisión es secreto, lo que cunde en los medios de comunicación es la especulación de los nombres que supuestamente se están consensuando o bien se intentan explicar las negociaciones que llevaron a la designación de los magistrados una vez que han sido anunciadas. Cuando un magistrado deja el Tribunal, resulta sencillo conjeturar a qué Grupo parlamentario se le reconoce el “derecho” de proponer a un nuevo candidato o si “cede” el mismo a alguna minoría o socio de la coalición de gobierno.

Generalmente el resto de fuerzas accede a las proposiciones, con base a una lógica de reparto de las plazas entre los partidos políticos atendiendo a su representación numérica. Las candidaturas formuladas, generalmente recaen en magistrados y otros juristas que se estiman cercanos ideológicamente al partido que los propone, aunque ciertamente, en ocasiones

¹⁴⁰ Hasta 1956 la mayoría en el *Bundestag* era más elevada pues se trataba de tres cuartos, esto es nueve miembros de la Comisión.

los pronósticos han fallado y la designación ha recaído sobre una persona totalmente inesperada.

Si se quiere tener noticia sobre las vicisitudes de la designación desde la sede institucional, tendemos que conformarnos con una suerte de “comunicado de prensa”. En efecto, el Comité electoral no publica un diario de sesiones, pero suele presentar una sencilla nota en el portal de Internet del *Bundestag* donde da a conocer la fecha de la reunión, los nombres de los magistrados sustituidos, el de los designados junto con una breve alusión a su historial profesional. Pero en la misma no se hacen constar mayores datos sobre la deliberación de la candidatura, ni siquiera la cantidad de votos que cada uno obtuvo o el número de escrutinios realizados¹⁴¹.

El procedimiento, como se puede observar, se caracteriza por la manera tan discreta en que se lleva a cabo, y es esta además una de las críticas más señaladas por la doctrina del país¹⁴². Sin embargo, para otros sectores la valoración de este procedimiento es más positiva, pues las designaciones han recaído en su mayoría en magistrados que han realizado una labor muy significativa en la institución, al punto de que la han consolidado como una de las cortes constitucionales con mayor autoridad reconocida en el mundo, que la han llevado a ser objeto de inspiración de muchas otras más¹⁴³.

Ciertamente hoy nadie duda del gran prestigio que tiene el Tribunal Constitucional Federal alemán, sin embargo, ese mérito no es adjudicable al modelo selectivo, sino a la importante labor jurisprudencial que han realizado los magistrados en poco más de sesenta años de funcionamiento de la institución. Como decía Klaus Schlaich en 1982 (al mostrarse muy crítico con el

¹⁴¹ Véase por ejemplo, la nota del Comité electoral del *Bundestag*, de fecha 11 de noviembre de 2010, donde se informó la designación conjunta de los Magistrados Susanne Baer, Peter Michael Huber y Monika Hermanns, disponible en www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2010/32175816_kw45_wahlausschuss/index.html.

¹⁴² HÄBERLE, Peter: “La jurisdicción constitucional en la fase actual de desarrollo del Estado constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 14, 2004, pág. 171; WEBER, Albrecht: “La jurisdicción constitucional de la República Federal de Alemania”, en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 7, 2003, pág. 499, donde se propone la comparecencia parlamentaria de los candidatos.

¹⁴³ Véase, a título de ejemplo, SMITH, Craig: “An american’s view of the Federal Constitutional Court: Karlsruhe’s justices”, en *German Law Journal*, núm. 2, 2001; KISCHEL, Uwe: “Party, pope, and politics? The election of German Constitutional Court Justices in comparative perspective”, en *International Journal of Constitutional Law*, vol. 11, núm.4, 2013, págs. 962-980.

procedimiento selectivo), “el gran prestigio del TCF ha legitimado hasta el momento la mirada retrospectiva sobre las elecciones precedentes”¹⁴⁴.

En esa línea, Peter Häberle igualmente crítico, estima que el modelo alemán “no es nada ejemplar debido al sistema de proporcionalidad estrictamente seguido de forma tan partidista desde la penumbra”¹⁴⁵. El sistema además -decimos por nuestra parte- tampoco ha conseguido evitar algunos problemas, tales como la falta de designación en tiempo según veremos más adelante, o evitar la percepción de “escasa neutralidad” en las designaciones¹⁴⁶ por haber recaído en personas muy vinculadas a un partido político¹⁴⁷.

2.1.2.3.- La designación por el *Bundesrat*

Según la LF, corresponde al *Bundesrat* elegir a la mitad de magistrados del TCF. El número concreto de plazas a cubrir ha sido detallado por la ley que disciplina al propio Tribunal, la cual ha fijado la cantidad de ocho magistrados. La Ley del TCF, sin embargo, no ofrece muchos detalles del procedimiento, ya que éstos se limitan a la previsión de la mayoría necesaria para acordar la designación de los magistrados, esto es, los dos tercios de los votos del *Bundesrat*, es decir, 46 de 69 votos (7 LTCF). Mayores detalles del procedimiento deberán buscarse, por tanto, en las disposiciones reglamentarias del funcionamiento de la Cámara¹⁴⁸, así como en las prácticas parlamentarias más significativas en la materia.

¹⁴⁴ SCHLAICH, Klaus: “El Tribunal Constitucional Federal Alemán”, en FAVOREU, Louis; LUCHAIRE, François, *et al.*: *Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales*, Madrid, CEC, 1984, págs. 133-232.

¹⁴⁵ HÄBERLE, Peter: “Funciones y significados de los Tribunales Constitucionales en perspectiva comparada -y comentarios a los 60 años del Tribunal Constitucional”, en *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, núm. 17, 2012, págs. 501-528, disponible en www.ugr.es/~redce/REDCE17/articulos/12_HABERLE.htm.

¹⁴⁶ STERN, Klaus: *Jurisdicción constitucional y legislador*, Madrid, Dykinson, 2009, pág. 70.

¹⁴⁷ Las designaciones han estado muy marcadas por la elección de personas fuertemente vinculadas a los principales partidos políticos, ya sea del CDU o del SPD, y en ocasiones del FDP. Para mostrar la magnitud de lo anterior, algunos estudios refieren que entre 1951 y 1983, cuarenta de sesenta jueces designados figuran como miembros de alguno de los mencionados partidos. Véase LANDFRIED, Christine: *Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber*, pág. 21, citado por GECK, Karl: “Nombramiento y ‘status’ de los Magistrados...”, op. cit., pág. 185, nota 15. En el historial hay varios ex Ministros del interior tanto del Gobierno federal (J. Benda, Gebhard Müller) como del regional (Peter Michael Huber y Peter Müller, recientemente). Véase FAVOREU, Louis: *Los tribunales constitucionales*, Barcelona, Ariel, 1994, pág. 65.

¹⁴⁸ Rules of procedure of the *Bundesrat*.

El procedimiento selectivo en la Cámara territorial es de tipo directo porque se votan y eligen los candidatos en el Pleno. En la práctica, sin embargo, se ha venido formando un grupo informal de trabajo que instruye el procedimiento y luego remite las propuestas al Pleno para su votación. De este modo, la designación de magistrados en el *Bundesrat* se ha venido realizando de forma muy parecida al que reglamentariamente se dispone para el ejercicio de sus competencias, esto es, a través de Comisiones parlamentarias donde están representados todos los *Länder* (11.2 R), las cuales se encargan, en términos generales, de organizar y ejecutar todos los actos necesarios para preparar las decisiones del *Bundesrat* (39 R).

En este grupo de trabajo deben estar presentes todos los *Länder*, por lo que cada uno de los dieciséis designa un representante, el cual generalmente recae en el Ministro de Justicia o similar de cada entidad territorial. Las propuestas que finalmente son presentadas al Pleno, son en estricto sentido, meras recomendaciones, de modo que el Pleno las podría rechazar o modificar. Sin embargo en la práctica, las propuestas suelen ser adoptadas sin mayor discusión plenaria. Las propuestas se anuncian y votan a mano alzada en el punto correspondiente de la sesión y en seguida se pasa al siguiente tema del orden del día¹⁴⁹. Por esta razón, tanto las propuestas como los integrantes del grupo de trabajo, han asumido de hecho un peso considerable en el procedimiento selectivo¹⁵⁰.

El procedimiento selectivo, como se puede observar, no deja de tener algunas falencias en materia de transparencia. Ello es así porque a pesar de que las deliberaciones del Pleno son públicas y las votaciones pueden ser a mano alzada o nominales (52.3 LF, 29 R), los actos más determinantes de la elección son llevados a cabo por el grupo informal de trabajo en reuniones privadas. En el Pleno, donde por supuesto se permite la deliberación, esta no se pone en práctica cuando se trata de elegir magistrados. De modo que para entender la toma de decisión, se tiene que acudir otra vez a la información que se tenga al alcance en la prensa, en la información que proporcionen los partidos políticos y a partir de ahí elaborar conjeturas.

¹⁴⁹ Véase por ejemplo, la designación plenaria de Gabriele Britz, en BUNDES RAT: Stenografischer Bericht 878, Sitzung, 17, Dezember 2010, pág. 487.

¹⁵⁰ Así lo sostiene también ROMANO, Barbara: "L'organizzazione e il funzionamento del Bundesverfassungsgericht", *op. cit.*, pág. 718.

En este sentido, se observa que regularmente son los Ministros de Justicia de los *Länder* gobernados por CDU y PSD los que proponen los candidatos y acuerdan el nombramiento, si acaso a veces ceden la oportunidad de presentar una propuesta a su socio de coalición. En los medios de comunicación suelen publicarse los nombres que los partidos proponen (a veces por descuido de los políticos o por filtraciones), la aceptación o rechazo de los mismos, la nueva presentación de candidatos y finalmente cuando se consigue el acuerdo. Luego, se programa la designación en la sesión más próxima del *Bundesrat*, y ahí se formaliza el acuerdo.

A juzgar por lo que queda asentado en los registros estenográficos de dichas sesiones plenarias, en las votaciones se consigue generalmente la unanimidad y no se discute públicamente la candidatura. El procedimiento queda registrado en un par de párrafos y enseguida se pasa al siguiente punto del orden del día¹⁵¹.

Las críticas o los diversos cuestionamientos sobre la designación adoptada, serán reflejadas en los medios de comunicación, bien por las declaraciones críticas que recojan de los grupos políticos minoritarios, bien por los comentarios editoriales de los periodistas. Luego, vendrán las críticas de los Profesores de Derecho en sus publicaciones académicas.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el *Bundesrat* es un órgano que representa a los gobiernos de los estados federados. En efecto, esta Cámara territorial se integra por los representantes que designan y cesan cada uno de los gobiernos regionales, por tanto no son elegidos directamente por el voto ciudadano. La Ley Fundamental establece que cada estado tendrá por lo menos tres votos, los que tengan más de dos millones de habitantes tendrán cuatro votos, los de más de seis millones, cinco y los de más de siete millones, seis (51.2 LF).

Actualmente con esta regla suman 69 votos, por lo tanto, este es el número que se considerará como integración total de la Cámara a efectos de

¹⁵¹ Así puede verse en los registros de las últimas designaciones a cargo del *Bundesrat*, esto es, la de los Magistrados Herbert Landau, Andreas Voßkuhle, Gabriele Britz, y conjuntamente a Sibylle Kessal-Wulf y a Peter Müller. Véanse, respectivamente, BUNDESRAT: Stenografischer Bericht, sitzung 814, 23 september 2005, pág. 321 (D); BUNDESRAT: Stenografischer Bericht, sitzung 843, 25 april 2008, pág. 99; BUNDESRAT: Stenografischer Bericht, sitzung 878, 17 dezember 2010, pág. 487 (B); y BUNDESRAT: Stenografischer Bericht, sitzung 890, 25 november 2011, pág. 526 (B). Disponibles en www.bundesrat.de.

calcular las mayorías necesarias para tomar las decisiones. De este modo, si la mayoría exigida para designar a los magistrados constitucionales federales es de dos tercios, tenemos que se requerirán un mínimo de 46 votos.

Actualmente cuatro *Länder* cuentan con seis votos (Baden-Württemberg, Baviera, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia), el de Hesse tiene cinco votos, siete estados más tienen cuatro¹⁵², y Bremen, Hamburgo, Sarre y Mecklemburgo-Pomeriana Occidental tienen tres cada uno.

Cada *Länder* puede enviar a la Cámara tantos miembros como votos tenga, sin embargo, debe subrayarse que los votos del *Länder* sólo pueden ser emitidos en lista cerrada y sólo por los miembros presentes o sus representantes (51.3 LF). Esta característica del voto en bloque, reduce consecuentemente el colegio elector a dieciséis “voluntades”, pues ese es el número de estados que componen la federación alemana, pero como hemos dicho, no todas concurren con el mismo número de votos. Si a ello agregamos que en todos los *Länder*, la coalición de gobierno suele estar encabezada por la CDU o el SPD, con alguna excepción¹⁵³, tenemos en definitiva que el influjo de la designación recae esencialmente en el acuerdo de esas dos formaciones políticas.

La participación del *Bundesrat* encuentra su justificación en el carácter federal del país y en la serie de competencias a cargo del TCF donde los *Länder* se ven involucrados. Allá donde la forma de organización estatal se encuentre organizada mediante una figura federal o regional, resulta admisible que debe reflejarse dicha característica en la conformación del Tribunal Constitucional.

2.2.- Italia

La Corte Constitucional (CC) está prevista en el artículo 135 de la Constitución italiana (C). Esta Carta Magna entró en vigor el primero de enero de 1948, sin embargo, no fue sino hasta ocho años después, a comienzos de 1956 que la CC comenzó a funcionar, luego de que se consiguiera finalmente

¹⁵² Berlín, Brandeburgo, Renania-Palatinado, Sajonia, Sajonia-Anhalt, Schleswig-Holstein y Turingia.

¹⁵³ En las elecciones de 2011, el partido de los verdes (*Bündnis 90/Die Grünen*), obtuvo una histórica votación que le permitió por primera vez encabezar la coalición de gobierno en un *Länder*. Se trata de Baden-Württemberg, en el que formaron gobierno junto con el SPD.

la laboriosa designación de los primeros quince magistrados. Entre las causas que motivaron ese aplazamiento se encuentra el estallido de la guerra fría, suceso que generó una profunda polarización política entre los partidos italianos que dificultó la colaboración entre éstos para la construcción del Estado democrático y concretamente para el desarrollo de la Constitución¹⁵⁴.

El propósito inicial de los constituyentes italianos para introducir el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes fue el de obstaculizar el resurgimiento de gobiernos tiránicos como el fascista y además instaurar un mecanismo que dirimiera las controversias derivadas de la nueva estructura regional atribuida al Estado¹⁵⁵. Esas competencias no podían depositarse en las magistraturas superiores de la época, por el temor de sobrecargarlos de atribuciones, pero también por la desconfianza que inspiraban muchos de sus integrantes formados en el régimen anterior, de modo que la creación de un órgano *ad hoc* de justicia constitucional vino a imponerse casi “naturalmente”¹⁵⁶.

Sin embargo, como lo reconoce Pizzorusso, en la experiencia práctica, los propósitos iniciales tuvieron sus matices. Por un lado, las controversias entre el Estado y las Regiones no fueron muy acusadas debido principalmente a la retrasada constitución de estas últimas (acontecida en los años setenta) y además por la forma limitada en que se concibió la autonomía regional. Por lo tanto, el mismo autor centraría la principal función de la Corte en “la fuerte valoración de la posición de la Constitución como texto jurídico” y no en las funciones que fueron determinantes en su creación por el constituyente¹⁵⁷.

En la actualidad, el estudio de la Corte Constitucional tiene como peculiaridad que el régimen jurídico que la disciplina está constituido por un complejo y variado cuerpo normativo no siempre armónico en cuanto a las

¹⁵⁴ PIZZORUSSO, Alessandro: “La Justicia Constitucional en Italia”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 4, 2000, pag. 152; FERRARI, Giuseppe: “La travagliata gestazione della Corte costituzionale ed il problema dei termini in Costituzione rigida e della compatibilità fra le cariche di giudice costituzionale e senato revitalizio”, en *Scritti in memoria di Antonino De Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990, pag. 97.

¹⁵⁵ Se trata de la opinión expresada por el constituyente Constantino Mortati, poco tiempo después de la entrada en vigor de la Constitución, recogida por PIZZORUSSO, Alessandro: “La Justicia Constitucional en Italia”, op. cit., pag. 151.

¹⁵⁶ COSTANZO, Pasquale: “L’organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente”, en COSTANZO, Pasquale (coord.): *L’organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale: atti del Convegno, Imperia, 12-13 maggio 1995*, Torino, G. Giappichelli, 1996, pag. 8.

¹⁵⁷ PIZZORUSSO, Alessandro: “La Justicia Constitucional en Italia”, op. cit., pag. 152.

fuentes y las materias que se pretenden regular, que ha sido resultado de una larga trayectoria de 58 años de funcionamiento. En efecto, además de ocho artículos de la Constitución, existen cuatro leyes constitucionales, cuatro leyes ordinarias, ocho reglamentos y unas “normas de integración”¹⁵⁸. Toda esa normativa articulada nos presenta la siguiente forma de composición de la Corte Constitucional.

2.2.1.- La composición de la Corte Constitucional

Las grandes trazas del modelo italiano de composición de la “*Corte Costituzionale*” se encuentran establecidas en el artículo 135 de la C¹⁵⁹. La Corte Constitucional se forma con quince jueces, de los cuales, cinco son designados por el Presidente de la República, un tanto igual por el Parlamento en sesión conjunta y los cinco restantes por las supremas magistraturas ordinaria y administrativa (135.1 C). Los quince jueces constitucionales podrán ser seleccionados, sin límite de edad, entre Profesores “ordinarios” (Catedráticos) de universidad en disciplinas jurídicas, entre abogados con más de veinte años de ejercicio profesional y entre los Magistrados de las jurisdicciones superiores ordinaria y administrativa, cabiendo incluso los jubilados (135.2 C)¹⁶⁰.

Esta forma de composición de la Corte Constitucional, fue el resultado de la integración de dos criterios constantes que prevalecieron desde las primeras fases de los trabajos constituyentes, concretamente en el periodo de

¹⁵⁸ Los artículos constitucionales son del 134 al 137, el 75, 90 y 127; las leyes constitucionales son la 1/1948, 1/1953, 2/1967 y 1/1989; las leyes ordinarias son la 87/1953, 2/1962, 20/1962, 352/1970, 219/1989; hay un Reglamento General y siete particulares, y unas Normas de integración para los procedimientos ante la Corte Constitucional.

¹⁵⁹ Este artículo fue modificado por la *Legge Costituzionale* 22 novembre 1967, n. 2, “*Modificazione dell’art. 135 della Costituzione e disposizione sulla Corte costituzionale*”, en adelante, l. cost. n. 2/1967.

¹⁶⁰ La Constitución además en su artículo 135.6, indica que el cargo de juez constitucional es incompatible con la de miembro del Parlamento, de un Consejo regional y con el ejercicio de la abogacía. Otras leyes ofrecen adicionales incompatibilidades para la función jurisdiccional constitucional, por ejemplo, no pueden tener otro cargo, comisión o actividad pública y privada (7, 8, l. n. 87/1953), hay además previstas garantías de inamovilidad (3, l. cost. n. 1/1948; 7, l. cost. n. 1/1953), inmunidad (3, l. cost. n. 1/1948; 5, l. cost. n. 1/1953; 9, l. n. 87/1953), económicas (6, l. cost. n. 1/1953; 12, l. n. 87/1953) y previsiones para el periodo posterior a la finalización del cargo.

elaboración del Proyecto de Constitución¹⁶¹. Por un lado, el criterio sostenido por la izquierda, inclinado a considerar a la Corte como un órgano político y por ello, a proponer un método de reclutamiento de sus miembros ligado con los órganos representativos, predominantemente con el Parlamento. Por otro lado, se encontraba el criterio defendido por el “centro-derecha”, más perfilado a entender a la Corte como un órgano jurisdiccional, y por tanto, interesados en la designación de los jueces bajo un perfil técnico-jurisdiccional que garantizara al máximo la neutralidad de sus funciones¹⁶². Una vez presentado el Proyecto de Constitución a la Asamblea, vino a sumarse en las discusiones generales la idea de la participación del poder imparcial, *supra partes*, equilibrador y neutro del Presidente de la República¹⁶³.

Con esos tres criterios se prefiguraría el modelo actual, sin embargo, la confección de propuestas y enmiendas serían múltiples y variadas. En efecto, en los debates constituyentes se llegó a formular un modelo de designación directa, reservando unas plazas a las magistraturas y otras a la Cámara de Diputados¹⁶⁴, o repartiéndolas entre más órganos¹⁶⁵; también se planteó un

¹⁶¹ Esto es, en la “*Commissione per la Costituzione*” o también denominada “*Commissione dei Settantacinque*”, encargada de elaborar el proyecto de Constitución, la cual se organizó en tres “*sottocommissioni*”, una para cada sección prevista en la Carta: I) derechos y deberes del ciudadano, II) organización constitucional del Estado y III) relaciones económicas y sociales. Fue en la segunda subcomisión donde se discutió la formación de la Corte Constitucional. Los trabajos parlamentarios del periodo constituyente pueden consultarse en el portal histórico del Parlamento italiano, en la siguiente liga de Internet <http://storia.camera.it/#nav> o bien, en <http://legislature.camera.it/index.asp>.

¹⁶² D’ORAZIO, Giustino: *La genesi della Corte costituzionale, Ideologia, politica, dibattito dottrinale: un saggio di storia delle istituzioni*, Milano, Edizioni di Comunità, 1980, págs. 149-155.

¹⁶³ La introducción del Presidente de la República fue una iniciativa de Constantino Mortati, quien además acentuaba el perfil técnico-jurídico que debía tener la Corte Constitucional, por ello propuso un modelo de designación presidencial, pero con propuesta de varias corporaciones jurídicas. Concretamente el Presidente de la República debía elegir un tercio de los magistrados de una terna presentada por el Consejo Superior de la Magistratura, otro tercio de una terna formada por el Consejo de Estado y la Corte de Cuentas y el tercio restante por una terna formada por el Consejo Superior Forense y por los Profesores de Derecho de universidad. Véase ASSEMBLEA COSTITUENTE: pom, 28 novembre 1947, V, págs. 4242 y ss.

¹⁶⁴ Así la propuesta inicial de Calamandrei, que planteaba para una denominada Suprema Corte Constitucional, la integración en veintiocho miembros para un cargo de cinco años renovable por una vez, la mitad elegidos por la propia magistratura entre magistrados de grado no inferior al de consejero de casación y la otra mitad sería electa por la Cámara de Diputados entre profesores ordinarios en materias jurídicas y abogados con más de veinte años de ejercicio. Véase la propuesta presentada por el diputado Piero Calamandrei, a la II Sottocommissione della Commissione per la Costituzione sul Potere Giudiziario e sulla Suprema Corte Costituzionale (art. 34), disponible en el portal del Parlamento italiano, en http://legislature.camera.it/dati/costituente/lavori/relaz_proposte/II_Sottocommissione/37nc.pdf.

¹⁶⁵ La designación directa del Presidente y Vicepresidente de la Corte a cargo de la Asamblea Nacional, dos miembros titulares y dos suplentes a cargo de cada uno de los siguientes

modelo de exclusiva designación parlamentaria¹⁶⁶; otro donde un órgano efectuaba las designaciones, pero de entre las propuestas enviadas por otras corporaciones¹⁶⁷, entre otros modelos de perfiles más singulares¹⁶⁸.

En los momentos más avanzados de la discusión, finalmente se confeccionó el modelo de designación directa, repartida equitativamente entre la designación del Parlamento en sesión común, por el Presidente de la República, y en un primer momento, por el Consejo Superior de la Magistratura, pero luego se reivindicó a favor de las supremas magistraturas¹⁶⁹.

Esta opción del constituyente ha sido positivamente valorada por la doctrina italiana más autorizada, al entenderla generalmente como un modelo de composición plural y equilibrado de la Corte¹⁷⁰. Ello es así, porque se estima que la participación de órganos vinculados con los tres clásicos poderes del

órganos: la Cámara de Diputados, el Senado, la Corte de Casación y el Consejo de Estado. Se trataba de la propuesta de Giovanni Conti, en ASSEMBLEA COSTITUENTE: 2ª sc., 2ª sez., 13 gennaio 1947, VIII, pág. 2018.

¹⁶⁶ Fue el diputado Leone Giovanni en los trabajos de la segunda subcomisión de la Constitución, donde propuso una Corte compuesta por ocho integrantes, nombrados para un periodo de cargo de diez años, elegidos por la Asamblea en sesión común y con representación regional. La designación debía cumplir ciertas cuotas como medida de equilibrio: tres debían venir entre personas con un rango no menor de consejero de casación, dos entre profesores de derecho, y tres entre personas elegibles como diputados. Véase ASSEMBLEA COSTITUENTE: 2ª sc., 2ª sez., 14 e 15 gennaio 1947, VIII, págs. 2026 y 2036. Luego en el art. 127 del Proyecto de Constitución que presentó la “*Commissione dei Settantacinque*” al Pleno de la Asamblea Constituyente, estableció la exclusiva designación de la Asamblea Nacional, de modo que la Corte estuviera compuesta la mitad por magistrados, un cuarto por abogados y profesores de derecho, y un cuarto por ciudadanos elegibles para el cargo político. Véase, ASSEMBLEA COSTITUENTE: Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana, 31 gennaio 1947, pág. 32, disponible en <http://legislature.camera.it/dati/costituente/lavori/ddl/00nc.pdf>.

¹⁶⁷ Una opción era que el órgano elector fuera el Parlamento y que las propuestas fueran enviadas en número triple presentadas por la magistratura ordinaria y administrativa, del Consejo superior forense y de los profesores ordinarios de Derecho de las universidades. Véase, ASSEMBLEA COSTITUENTE: pom. 28 novembre 1947, V, pág. 4237; y ant. 3 dicembre 1947, V, pág. 4311. Esta figura fue la que venía modelándose en el “Comitato di coordinamento e dall’Adunanza plenaria della Commissione per la Costituzione”. Otra opción, era la planteada por Constantino Mortati, ya referida en notas anteriores.

¹⁶⁸ Por ejemplo, la ideada por Antonio Capua, haciendo que la llegada a la Corte sea un derecho automáticamente adquirido luego de una serie de pruebas en el transcurso de la profesión jurídica. Véase, ASSEMBLEA COSTITUENTE: 7 marzo 1947, I, pág. 255.

¹⁶⁹ Se trató de la enmienda Bozzi-Persoco. Véase ASSEMBLEA COSTITUENTE: ant. 29 novembre 1947, V, pág. 4253. Una enmienda que no fue desarrollada por sus proponentes y que fue aceptada por Meuccio Ruini, sin emitir alguna explicación en la sesión.

¹⁷⁰ Véase PESOLE, Luciana: “La composición pluralista y no representativa de la Corte Constitucional italiana”, en *Revista de Derecho* (Valdivia, Chile), núm. 17, 2004, págs. 185-211; MALFATTI, Elena; PANIZZA, Saulle; ROMBOLI, Roberto: *Giustizia Costituzionale*, Torino, G. Giappichelli, 2003; RUGGERI, Antonio; SPADARO, Antonino: *Lineamenti di Giustizia Costituzionale*, 2ª ed., Torino, G. Giappichelli, 2001, pág. 58.

Estado, transfieren cada uno, un significado particular o una visión institucional propia a todo el conjunto de la Corte¹⁷¹.

La visión y la incorporación de una especial sensibilidad política y de contacto con los órganos representativos vendría garantizada por los cinco componentes de nómina parlamentaria; la visión de una parte del poder judicial vendría con la participación de las supremas magistraturas; cierto contacto con el poder ejecutivo¹⁷², vendría con la participación del Presidente de la República, ejerciendo también una suerte de impronta institucional de neutralidad y representatividad de la unidad estatal en la CC. Sobre todo ello, además se proyecta la inserción en la Corte de personas con un destacado perfil técnico-jurídico, derivado de la exigencia de los requisitos subjetivos de acceso al cargo, esto es, la necesidad de ser elegido entre experimentados abogados, magistrados y profesores de derecho, aportándose con ello pluralidad en experiencias humanas y profesionales.

No hay norma que obligue a los órganos selectores a escoger a los magistrados de entre una determinada profesión jurídica, tampoco están constreñidos a elegir a miembros de su seno o a cubrir alguna cuota profesional, ideológica, territorial o de género. Las supremas magistraturas ciertamente siempre han elegido a magistrados de su seno, pero no están obligadas a ello.

De 1956 a 2010 se han designado un total de 98 jueces constitucionales. De ese número 47 han sido profesores de Derecho (de ellos 16 de Derecho Público y Constitucional), elegidos principalmente por el Presidente de la República y el Parlamento, mientras que 39 han recaído sobre Magistrados, elegidos en su inmensa mayoría por las supremas magistraturas

¹⁷¹ ZAGREBELSKY plantea la participación de cada uno de los tres poderes como una “representación” de las diferentes concepciones de la justicia constitucional, de modo que las supremas magistraturas representan la visión jurídico-judicial, el Parlamento la visión política y el Presidente la visión institucional, política, pero imparcial de la justicia constitucional. En *La giustizia costituzionale*, Padova, Il Mulino, 1988, pág. 95.

¹⁷² Algunos sostienen que de acuerdo a la forma de gobierno italiana, en realidad el Presidente de la República no es el Jefe del poder ejecutivo, como tampoco las supremas magistraturas representan a todo el poder judicial. PIZZORRUSO, Alessandro: “Art. 135”, en BRANCA, Giuseppe (a cura di): *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. Ed. del Foro Italiano, 1981, pág. 147; RUGGERI, Antonio; SPADARO, Antonino: *Lineamenti di Giustizia Costituzionale*, op. cit., pág. 57. En cualquier caso, se puede convenir en que si bien no son los órganos vértice, si guardan una fuerte vinculación o comparten en mayor medida la función ejecutiva o judicial.

y finalmente 12 han sido sobre abogados, designados por el Parlamento y el Presidente¹⁷³.

Siguiendo con las características del modelo de composición de la *Corte Costituzionale*, procede ahora estudiar sus aspectos de temporalidad, tales como la duración del cargo, reelección, renovación y *prorogatio*. El art. 135.3 de la C, establece que los jueces serán elegidos para un periodo de nueve años y no podrán ser reelegidos. El periodo comienza a contar a partir del día en que cada uno de ellos realiza el juramento de observar la Constitución y las leyes a que alude el art. 5 de la l. n. 87/1953¹⁷⁴. Al término de la duración personal del cargo, finaliza el ejercicio de las funciones del juez constitucional y cesa en el puesto (135.4 C). En el caso de una vacante por terminación ordinaria del mandato o cualquier otro motivo, la sustitución del juez constitucional deberá realizarse dentro de un mes, contado a partir de la fecha en que se generó la vacante misma (5.2, l. cost. n. 2/1967).

Si en el momento del cese no se encuentra nombrado el sucesor, el puesto queda vacante pues no existe la figura de la *prorogatio*¹⁷⁵. Inicialmente la Corte, ante el silencio del texto constitucional y como medida de cautela ante la potencial ausencia de los once miembros necesarios para funcionar en caso de retrasos en la designación de los jueces, contempló en su Reglamento general la *prorogatio* (ex art.18); sin embargo, con la posterior publicación de la l. cost. n. 2/1967, que introdujo un cuarto párrafo al artículo 135 constitucional, mediante el cual expresamente prohibió la prórroga de las funciones, produjo que la CC adecuara su Reglamento a la norma constitucional suprimiendo dicha institución.

¹⁷³ Véase ROSSI, Emanuele; VUOTO, Salvatore: "I giudici della Corte costituzionale di nomina delle supreme magistrature", en CIARLO, Pietro; PITRUZZELLA, Giovanni; TARCHI, Rolando (a cura di): *Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale: atti del convegno di Cagliari, 24-25 maggio 1996*, Torino, G. Giappichelli, 1997, págs. 349 y 362; MALFATTI, Elena; PANIZZA, Saulle; ROMBOLI, Roberto: *Giustizia Costituzionale*, 3ª ed., Torino, G. Giappichelli, 2011, pág. 52.

¹⁷⁴ Ley de 11 de marzo de 1953, núm. 87, denominada "*Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale*".

¹⁷⁵ Sin embargo, la prohibición de la *prorogatio* no es aplicable para el juicio de acusación contra el Presidente de la República, en el que todos los jueces —ordinarios y agregados— continúan formando parte del colegio penal hasta la finalización del proceso, aunque sobrevenga la finalización del periodo de cargo. Así lo dispone el art. 10, de las "*Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale*" y el art. 26 de la l. n. 20/1962, "*Norme sui procedimenti e giudizi di accusa*".

En los orígenes de la Corte Constitucional, la C y la I. cost. n. 1/1953, habían dispuesto el periodo de cargo de juez constitucional en doce años¹⁷⁶, sin embargo este precepto también fue objeto de modificación en la referida I. cost. n. 2/1967, que la disminuyó al periodo actualmente vigente de nueve años. Desde los trabajos constituyentes, la fijación de un periodo corto de tiempo se había adoptado con la intención de evitar una Corte “conservadora”, tal y como se concebía al Tribunal Supremo estadounidense donde sus jueces eran nombrados de por vida¹⁷⁷.

Por otro lado, la forma de designación de los magistrados y su renovación fue originalmente prevista bajo un modelo de renovación parcial y periódico de la Corte y además con un prefijado orden sucesivo de designación a cargo de los órganos proponentes (4 I. cost. n. 1/1953; 1 I. n. 87/1953).

La primera regla establecía la renovación de la Corte en un primer grupo de seis jueces y otro segundo de nueve jueces, con una separación electiva entre ellos de tres años, fijando además un sorteo para determinar a los primeros seis jueces (dos de cada órgano proponente) que debían cesar anticipadamente y renovarse para activar la cadencia de designaciones parciales. La segunda regla establecía el orden sucesivo de las designaciones, colocando en primer lugar a los cinco jueces de la magistraturas, luego a los cinco del Parlamento y finalmente a los cinco del Presidente de la República.

Esta última disposición, como se puede ver, estaba pensada para una renovación contemporánea de todos los jueces del Tribunal, y además no casaba bien con la renovación parcial y periódica que se había establecido. Con independencia de lo anterior, el orden sucesivo de las designaciones sigue tendencialmente vigente, en cambio, los sorteos y la regla de la renovación parcial finalmente nunca se aplicaron y fueron derogadas por la I. cost. n. 2/1967, debido a que desde muy pronto, se suscitaron muchas sustituciones individuales de jueces, los cuales fueron nombrados para disfrutar de un nuevo periodo de cargo completo, ocasionando el desfase de los turnos grupales de renovación.

¹⁷⁶ Los constituyentes habían justificado este periodo de cargo, con la intención de “asegurar una estabilidad y continuidad en el trabajo”; además no permitieron la reelección inmediata para favorecer la entrada de nuevas corrientes de la “*coscienza nazionale*” en la Corte. Véase ASSEMBLEA COSTITUENTE: ant. 29 novembre 1947, V, pág. 4255.

¹⁷⁷ ASSEMBLEA COSTITUENTE: 2ª sc. 2ª sez. 14 e 15 gennaio 1947, VIII, págs. 2026 y 2036.

En efecto, en la primera docena de años, e incluso antes de que se constituyera por primera vez la Corte, se produjeron muchas sustituciones individuales de jueces¹⁷⁸, lo que planteó el dilema de si los nuevos debían acceder al cargo por el tiempo que restaba por cubrir al juez anterior o bien, ingresar sin limitación temporal alguna al cargo.

La opción elegida finalmente y elevada a la Constitución (art. 135.3) fue la de que debían acceder sin limitaciones ya que no era pensable imponer algún tipo de restricción temporal a quienes de forma reciente se integraban a la Corte¹⁷⁹. Todo ese historial de vicisitudes en las designaciones ha terminado por modelar finalmente un sistema de renovación individual de los jueces que pervive hasta nuestros días.

En otro tema, conviene mencionar que de forma originaria, el artículo 3 de la l. cost. n. 1/1948¹⁸⁰ había previsto para la Corte la competencia exclusiva para juzgar sobre la “*validità dei titoli di ammissione*” de los miembros que accedan a la Corte. Sin embargo, el mismo fue abrogado por la l. cost. n. 2/1967, la cual introdujo en su artículo 2, la competencia para comprobar “*l’esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione*” de los propios componentes de la Corte, deliberando por mayoría absoluta de sus componentes.

El cambio que se operó fue sin duda sustancial, pues bajo la primera formulación se interpretaba un poder más integral de comprobación, que podía dar lugar al examen tanto de los requisitos de acceso como de la validez y regularidad del procedimiento efectuado por los órganos designantes. Por su parte en la segunda fórmula, la función de la Corte está más constreñida, puesto que se limita, por decirlo así, a realizar un examen *al candidato*, esto es,

¹⁷⁸ Antes de que se constituyera la Corte, fallecieron Giacomo Russo (11/06/1953) y Emanuele Piga (23/08/1955) electos por la Corte de Casación; Augusto Ortona (3/01/1954) electo por la Corte de Cuentas. Una vez elegidos todos los jueces y celebrada la audiencia inaugural de la Corte, falleció el día de la primera audiencia pública Giuseppe Capograssi (23/04/1956) elegido por el Presidente de la República y un mes después Giuseppe Lampis (30/05/1956), elegido por la Corte de Casación. Véase FERRARI, Giuseppe: “La travagliata gestazione della Corte costituzionale ed il problema dei termini in Costituzione rigida e della compatibilità fra le cariche di giudice costituzionale e senatore vitalizio”, en *Scritti in memoria di Antonino De Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990, págs. 94-95 y 102, notas 3, 6, 29 y 30.

¹⁷⁹ Así lo refiere PIZZORUSSO, Alessandro: “La giustizia costituzionale in Italia”, *op. cit.*, pág. 159. Los nuevos jueces, además venían designados por el mismo órgano que había elegido al antecesor.

¹⁸⁰ Adoptada el 9 de febrero de 1948 y titulada “*Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale*”.

determinar si este cumple o no los requisitos de acceso a la magistratura constitucional¹⁸¹.

Los miembros de la Corte eligen entre ellos a quien habrá de ser el Presidente, para un periodo renovable de tres años (135.5 C)¹⁸². Para ello, deberán acordarlo con el respaldo de la mayoría de sus integrantes, pero de no lograr dicha mayoría, se procederá a una nueva votación y de no lograrlo, se procederá a una votación de balotaje entre los candidatos más votados, tras lo cual se proclamará electo quien obtenga más votos. En caso de empate, se preferirá al más antiguo en el cargo y a falta de ello, al de mayor edad (6 l. n. 87/1953).

El *quorum* funcional de la Corte requiere la presencia de al menos once jueces. Se trata de un número que ha sido valorado positivamente por la doctrina, pues ha significado la imposición estructural para mantener en la Corte un colegio mixto, en el sentido de que al menos un juez de cada órgano electivo debe estar presente en el Pleno de la Corte para funcionar (por ejemplo cinco del Parlamento, cinco de las magistraturas, y al menos uno del Presidente de la República, sumando como mínimo once jueces)¹⁸³.

Los jueces no pueden emitir votos particulares en la redacción de la sentencia, de modo que la misma debe aparecer como una única voz institucional. La Corte Constitucional no tiene formaciones internas para resolver determinados asuntos, sino que todas las decisiones deben ser deliberadas en “*Camera di consiglio*”. Las sentencias se aprueban por mayoría absoluta de los votantes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate (16, l. n. 87/1953).

Finalmente, conviene tener en cuenta que la Corte cuenta con una conformación especial para conocer sobre el juicio de acusación contra el Presidente de la República (y en su caso, para decidir su amnistía, indulto o

¹⁸¹ Así lo destaca D’ORAZIO, Giustino: “Elezioni di giudici da parte del Parlamento; Verifica dei titoli da parte della Corte costituzionale”, en *Giurisprudenza Costituzionale*, núm. 13, 1968, pág. 169.

¹⁸² Originalmente el art. 6.4 de la l. n. 87/1953, había establecido la duración del cargo del Presidente en cuatro años, con posibilidad de reelección. La disposición fue reformada con motivo de la l. cost. n. 2/1967. La cantidad de cuatro años tenía sentido pues estaba relacionada con el periodo que inicialmente se preveía del cargo de juez constitucional en doce años. Al reducir el periodo de cargo a nueve, la presidencia se rebajó a tres años para mantener la directriz de fijar la duración de la presidencia en un tercio del periodo general de cargo.

¹⁸³ ZAGREBELSKY, Gustavo: *La giustizia costituzionale*, op. cit., pág. 94.

rehabilitación). En esta composición, denominada por algunos “integrada”, a los quince jueces ordinarios o “togados”, deberán sumarse dieciséis miembros más (denominados “laicos”), todos ellos serán elegidos por sorteo de entre una lista de ciudadanos que posean los requisitos de elegibilidad de los senadores. Esta lista es elaborada por el Parlamento en sesión común cada nueve años mediante elección, por mayoría de dos tercios de los componentes de la Asamblea (135.7 C). El sorteo para elegir de la lista a los jueces “agregados” lo lleva a cabo el Pleno de la CC convocado *ex profeso* y mediante audiencia pública (21, l. n. 20/1962)¹⁸⁴.

2.2.2.- La selección de los jueces constitucionales

2.2.2.1.- La designación por el Presidente de la República

El Presidente de la República es el Jefe del Estado Italiano y representa la unidad nacional. Es designado por el Parlamento en sesión conjunta y con la presencia de delegados de todas las Regiones, para un periodo de cargo de siete años. Entre sus competencias, tiene a su cargo la designación de cinco jueces constitucionales (83, 85, 87 y 135 C).

El acto selectivo es instrumentado a través de un Decreto, el cual debe ser refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros (4, l. n. 87/1953). En realidad, se ha entendido de forma pacífica que se trata de un acto propio del Jefe del Estado, por lo que la necesidad del refrendo sólo es un requisito para la formalización del acto, pero no presupone una injerencia ministerial en la elección de la persona¹⁸⁵. De cualquier forma, esto no significa que el Jefe del Estado pueda elegir arbitrariamente, pues como lo apuntan Ruggeri y Spadaro,

¹⁸⁴ Véase RUGGERI, Antonio; SPADARO, Antonino: *Lineamenti di Giustizia Costituzionale*, op. cit., pág. 61; ROMBOLI, Roberto; PANIZZA, Saulle: “El estatus de los jueces de la Corte Constitucional. Italia”, en FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa*, México, IIJ, UNAM, 2012, pág. 802. La Corte se encarga también de comprobar el cumplimiento de los requisitos de acceso al cargo de los jueces laicos y declara también su finalización cuando los pierdan. La decisión será enviada al Parlamento para efectos de sustitución (2, l. cost. n. 1/1967; 10, l. n. 87/1953, respectivamente).

¹⁸⁵ PIZZORUSSO, Alessandro: “La justicia constitucional en Italia”, op. cit., pág. 158; MALFATTI, Elena; PANIZZA, Saulle; ROMBOLI, Roberto: *Giustizia Costituzionale*, op. cit., pág. 48.

el refrendo podría ser negado por “carencias objetivas de los candidatos”, “graves razones de oportunidad” o para evitar “abusos de poder”¹⁸⁶.

A la designación efectuada por el Presidente le ha sido adjudicada una función orientada a corregir eventuales “desequilibrios” que se puedan presentar en la composición de la Corte. Desequilibrios en materia de mayor o menor presencia de profesiones jurídicas de los jueces, de su extracción institucional, entre el perfil católico o laico del juez, y en especial, entre la relación de las fuerzas políticas mayoritarias y minoritarias¹⁸⁷.

Este rol de equilibrio se ha visto confirmado en las designaciones que el Presidente ha puesto en práctica, pero además se ha sustentado básicamente atendiendo a dos razones: la primera de ellas se ha deducido del ya mencionado orden que dispone el art. 1 de la l. n. 87/1953 para la nominación de los jueces constitucionales, que en primer lugar prevé la designación a cargo de las supremas magistraturas, con la idea de que por esta vía vendrían los jueces “técnicos o de carrera”; posteriormente, contempla al Parlamento, órgano del cual provendrían los jueces con la sensibilidad política, y por último, quizás como fiel de la balanza, refiere al Presidente de la República¹⁸⁸.

La segunda razón vendría apoyada con la naturaleza discrecional con la que el Presidente ejecuta la facultad de nombramiento, en la cual no tiene la obligación de conseguir para sus propuestas la voluntad de otro órgano, sino que cuenta con un margen de actuación interno más amplio. Esta característica permite al Presidente la promoción de individuos ideológicamente no considerados en las designaciones del resto de órganos o bien, la selección de personalidades jurídicas que difícilmente accederían a la Corte a través del resto de órganos proponentes¹⁸⁹.

¹⁸⁶ RUGGERI, Antonio; SPADARO, Antonino: *Lineamenti di Giustizia Costituzionale*, op. cit., pág. 58.

¹⁸⁷ BIN, Roberto; PITRUZZELLA, Giovanni: *Diritto Costituzionale*, 6ª ed., Torino, G. Giappichelli, 2005, pág. 408; MALFATTI, Elena; PANIZZA, Saulle; ROMBOLI, Roberto: *Giustizia Costituzionale*, op. cit., pág. 55.

¹⁸⁸ MALFATTI, Elena; PANIZZA, Saulle; ROMBOLI, Roberto: *Giustizia Costituzionale*, op. cit., pág. 48; PESOLE, Luciana: “La composición pluralista y no representativa...”, op. cit., págs. 185-211; VIZIOLI, Nicola: “L’elezione dei membri della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura da parte del Parlamento in seduta comune”, en *Il rispetto delle regole. Iscritti degli allievi in onore di Alessandro Pizzorusso*, Torino, G. Giappichelli, 2005, pág. 255.

¹⁸⁹ Para una reflexión más amplia sobre la función de equilibrio que pueden desempeñar las designaciones de los jueces constitucionales por el Presidente de la República, véase el

Las designaciones realizadas por el Presidente de la República no suelen generar problemas, incluso han resultado ser de manera habitual, las más prestigiosas e inobjetadas selecciones de jueces constitucionales¹⁹⁰. Si acaso, pudiera representar un elemento crítico, el hecho de que en los años recientes, las selecciones han despertado cierta polémica debido a que los nombramientos recayeron en individuos que habían sido Ministros de Justicia que, en su mandato, habían impulsado textos normativos de relevancia sobre los cuales estaban llamados ahora a juzgar como jueces de la Constitución¹⁹¹.

En el historial selectivo de jueces constitucionales a cargo de la Presidencia de la República, los nombramientos han recaído en todas las categorías profesionales previstas por la normativa, pero sin duda, se ha privilegiado a los profesores universitarios en materias jurídicas. En efecto, de todas las designaciones realizadas por el Presidente de la República hasta noviembre de 1996, veintidós han recaído sobre Profesores, tres Magistrados y tres abogados¹⁹².

2.2.2.2.- La designación por las supremas magistraturas

El artículo 135 de la Constitución establece que de los quince magistrados constitucionales, “un tercio” serán designados por las “supremas magistraturas ordinaria y administrativa”. Esta disposición, que tiene sin duda un marcado carácter general, fue detallada unos años antes de que se pusiera en marcha la designación de los primeros integrantes de la CC, mediante la ya mencionada l. n. 87/1953, denominada “*Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale*”.

trabajo de NICOTRA, Ida Angela: “Spunti in tema di elezione e nomina dei Giudici costituzionali”, en COSTANZO, Pasquale (coord.): *L'organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale: atti del Convegno, Imperia, 12-13 maggio 1995*, Torino, G. Giappichelli, 1996, pág. 118.

¹⁹⁰ RUGGERI, Antonio; SPADARO, Antonino: *Lineamenti di Giustizia Costituzionale*, op. cit., pág. 58.

¹⁹¹ PANIZZA, Saulle: “Composizione, organizzazione e funzionamento della Corte Costituzionale”, en ROMBOLI, Roberto (a cura di): *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1990-1992)*, Torino, G. Giappichelli, 1993, págs.4-8; Malfatti, Elena; PANIZZA, Saulle; ROMBOLI, Roberto: *Giustizia Costituzionale*, op. cit., pág. 55.

¹⁹² Los 22 profesores han sido Capograssi, Perassi, Petrocelli, Sandulli, Mortati, Chiarelli, Crisafulli, Rossi, Volterra, Astuti, Paladin, La Pergola, Andrioli, Ferrari, Conso, Baldassarre, Mengoli, Cheli, Vassalli, Zagrebelsky, Capotosti y Neppi Modona; los tres abogados han sido De Nicola, Ferri y Contri; y finalmente los magistrados han sido Oggioni, Azzariti y Castelli Avolio. Véase ROSSI, Emanuele; VUOTO, Salvatore: “I giudici della Corte costituzionale di nomina delle supreme magistrature”, op. cit., pág. 349, nota 13 y pág. 362, nota 42.

Esta ley especificó en su artículo segundo cuáles serían las “supremas magistraturas” que participarían en la designación de los jueces constitucionales, estableció el número de plazas que a cada una le correspondería designar directamente y además detalló un aspecto muy práctico del acto de designación, como lo es la conformación de los colegios electivos de tales instituciones. En este sentido, a la Corte de Casación se le facultó para la designación de tres de las cinco plazas reservadas a las magistraturas, y de las dos restantes, una quedaría a cargo de la Corte de Cuentas y la otra para el Consejo de Estado.

La ley, no detalló mayores aspectos procedimentales para la puesta en marcha de las designaciones de los jueces a cargo de los colegios electivos, sin embargo buena parte de estos fueron definidos en las reuniones que tuvieron origen en la invitación del Ministro de Gracia y Justicia a los Presidentes de la Corte de Casación, de Cuentas y del Consejo de Estado, unos días antes de la entrada en vigor de la ley en 1953.

En esas reuniones, que se convocaban con el expreso propósito de establecer un “procedimiento común” entre las magistraturas para la elección de los jueces, acordaron la fecha en que cada una celebraría la reunión para elegir a los primeros magistrados, reconociendo a los Presidentes el poder de convocarla mediante propio decreto. Asimismo se estableció que no habría un *quorum* para la validez de la reunión; se fijó también el derecho de participación en la misma, otorgándose únicamente a los magistrados que ejercieran efectivamente la función; la votación sería secreta, exigiéndose la mayoría simple para determinar al ganador del cargo¹⁹³.

Volviendo al contenido de la l. n. 87/1953, se debe mencionar que su artículo dos confeccionó la integración de los colegios electivos de las magistraturas. En este sentido, el de la Corte de Casación, sería encabezado

¹⁹³ El acuerdo es referido y comentado por FERRARI, Giuseppe: “La travagliata gestazione della Corte costituzionale...”, *op. cit.*, págs. 90-94. La primera reunión de los Presidentes de las magistraturas y el Ministro de Gracia y Justicia se celebró el 9 de marzo de 1953; después el 11 del mismo mes, se reunieron solamente los Presidentes y acordaron el documento que contendría las normas de regulación del procedimiento. En este documento se fijó el 19 de marzo de 1953 como fecha para que se reunieran los colegios electivos para designar a los jueces. En esa fecha, efectivamente cada colegio de las magistraturas procedió en una breve sesión a designar y proclamar a los primeros jueces constitucionales. Los jueces quedaron elegidos tempranamente, apenas cuatro días después de la entrada en vigor de la l. n. 87/1953, siendo que la misma había dado el plazo de un mes para ello (pág. 93), aunque luego retrasaron la sustitución de tres jueces que fallecieron al poco tiempo (págs. 95-96).

por su Presidente, e integrado por los presidentes de las secciones, los consejeros, los abogados generales, el procurador general y los procuradores generales sustitutos. Tratándose del colegio electivo del Consejo de Estado, este sería encabezado por su Presidente, los consejeros y los presidentes de sección. Finalmente el colegio de la Corte de Cuentas, estaría integrado por su Presidente, que lo encabezaría, por los presidentes de sección, los consejeros, el procurador general y los viceprocuradores generales de la Corte de Cuentas (2 a, b, c; l. n. 87/1953).

Como se puede observar, la opción tomada por el legislador para dar contenido a la noción de “supremas magistraturas”, consistió en la elección de los órganos nacionales vértice de la jurisdicción ordinaria y administrativa (Casación, Cuentas y Consejo de Estado), y en cada una de estas instituciones, especificó a los titulares de los cargos que integrarían el colegio electivo de magistrados constitucionales. Con ello ha excluido, entre otros, a los presidentes de cortes de apelación o tribunales administrativos y de sus sesiones, que están asentados en las Regiones, no obstante que dichos cargos tengan en la organización judicial italiana el grado de consejero de Corte de Casación. Es decir, que para formar parte del colegio electivo de magistrados, no basta con tener la calificación formal o el grado de los cargos enlistados, sino además, deben ejercer la función en la concreta magistratura suprema. La coincidencia entre grado y función institucional efectiva, también trae como consecuencia la exclusión de quienes se encuentren en excedencia, en retiro, en suspensión o en otros supuestos del género.

La restricción del cuerpo electivo efectuada por la l. n. 87/1953, resultó en su mayoría coincidente con el ya mencionado acuerdo operativo entre las Presidencias de las magistraturas y el Ministro de Gracia, en las primeras “designaciones judiciales”. En cualquier caso, la ley fue objeto de una cuestión de legitimidad constitucional en cuanto al colegio de la Corte de Cuentas, al haber descartado a los “*Referendari e i Primi Referendari*”, figuras de la jurisdicción administrativa que una ley de la época les había atribuido una categoría funcional semejante a la de Consejero, con lo que se estimaba que podrían formar parte del colegio electivo¹⁹⁴, sin embargo la Corte sostuvo la

¹⁹⁴ La cuestión llegó a la CC luego de que un importante número de “Primi Referendari e di Referendari” de la Corte de Cuentas se opusieran al Decreto que convocaba al colegio electivo,

constitucionalidad de la confluencia entre grado y función fijada por la ley, descartando por tanto la participación de los “*Referendari*”.

En efecto, la Corte Constitucional, mediante sentencia de 27 de junio de 1963, número 111¹⁹⁵, declaró la cuestión infundada, argumentando que en la norma impugnada el legislador ordinario no había vulnerado los límites implícitos otorgados por el art. 135.1 constitucional, en cuanto al desarrollo del término de la “supremas magistraturas administrativas”.

La Corte sostiene que el término de “magistratura” previsto en la Constitución no equivale al de “magistrados”, en el sentido de dar por comprendido a todos los que componen de forma ordinaria las jurisdicciones supremas, sino sólo los llamados especialmente a conformar el colegio con la más alta responsabilidad, lo que el legislador, desarrollando la intención del constituyente, ha confiado a los cargos que consideró de grado supremo. La sentencia evidentemente motivó diversas opiniones por parte de la doctrina¹⁹⁶ y provocó otra propuesta en sede legislativa que no tuvo éxito¹⁹⁷.

Por otro lado, la sentencia se ha convertido en punto de referencia para los subsecuentes problemas que se han ocasionado en el tema de la fijación de los colegios electivos. Tal fue el caso de la sentencia del Consejo de Estado de 14 de noviembre de 2003, que declaró la legitimidad de la exclusión del electorado activo de los consejeros de Estado colocados en excedencia (*fuori ruolo*)¹⁹⁸. Esta sentencia puso fin a una cadena de conflictos que se

emitido por el Presidente de la Corte de Cuentas el 15 de febrero de 1963. Los promoventes impulsaban su impugnación con el estatus funcional de “Consejero” de la Corte de Cuentas en que los colocaba el art. 11 de la l. n. 1345/1961 titulada “*Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra e dal tre disposizioni relative alla Corte dei conti*”. La legislación italiana puede consultarse en la siguiente página oficial interinstitucional del Estado italiano: www.normattiva.it/.

¹⁹⁵ La sentencia puede obtenerse en la base de datos de jurisprudencia del portal de Internet de la Corte Constitucional: www.cortecostituzionale.it/.

¹⁹⁶ Entre los más recientes, BUQUICCHIO, Michele: “L’elezione dei giudici costituzionali da parte delle supreme magistrature, tra norma e prassi”, en *Diritto Pubblico*, 1998, págs. 213 y ss.

¹⁹⁷ Se trató de una Propuesta de Ley Constitucional presentada el 9 de julio de 1973 por el Grupo parlamentario socialista. La propuesta planteaba cambiar la denominación de “supremas magistraturas” por la de “magistrados ordinarios y administrativos”, de modo que el colegio electivo se ampliaba a todos los “magistrados” que tenían derecho de voto para la elección del Consejo Superior de la Magistratura. Recogido en *Giurisprudenza Costituzionale*, 1974, núm. 1, págs. 2852 y ss. En el mismo número, nota crítica de D’ORAZIO, Giustino: “Corte Costituzionale. Cronaca (1968-1974)”, págs. 2838-2852.

¹⁹⁸ Sentencia del Consejo de Estado, IV Sala, del 14 de noviembre de 2003, núm. 7279. La sentencia puede obtenerse en el motor de búsqueda de jurisprudencia del portal electrónico de la Revista Federalismi: www.federalismi.it/. Un comentario crítico de la misma en VOLPE, Carmine: “Fuori ruolo, elettorato attivo e Corte costituzionale: il Consiglio di Stato individua una

venían verificando desde 1994, cuando a unos consejeros de Estado en excedencia les fuera rechazada -primero por el órgano de autogobierno del Consejo, después por el Tribunal Administrativo Regional¹⁹⁹- la petición que habían formulado al Presidente del Consejo de Estado para ser incluidos en el colegio electivo.

La coincidencia entre grado y función también se ha proyectado sobre el electorado pasivo, es decir, sobre aquéllos magistrados que pueden ser elegibles para la Corte Constitucional, si acaso con la propia excepción establecida en la Constitución, en cuanto a los magistrados jubilados. Esta es al menos una dimensión entendida por la propia Corte Constitucional, expresada en su momento en el procedimiento de revisión del nombramiento del señor Brunetto Bucciarelli Ducci en 1977, que ha sido posteriormente confirmada por la práctica.

En aquélla ocasión, la Corte consideró indispensable para cumplir el requisito de pertenencia a la suprema magistratura, no solamente el nombramiento formal de magistrado, sino el ejercicio del mismo, situación que no cumplía el designado²⁰⁰. Al final la Corte, no sin polémica alguna, convalidó el nombramiento al valorar que el candidato había ocupado otros altos cargos públicos de caracterizada imparcialidad e independencia, como lo fue la presidencia de la Cámara de Diputados y del Parlamento en sesión común. Una opción, que no sin razón alguna, ameritó la perplejidad de la doctrina, al reconocer lo forzado que resultó dicha interpretación, a fin de “salvar”, por otro

consuetudine ‘di rilievo costituzionale’” (nota a Cons. St. Sez. IV, 14 novembre 2003, n. 7279), en *Il Foro Amministrativo C.D.S.*, vol. III, núm. 2, 2004, págs. 414-434. Hay una versión electrónica del trabajo disponible en www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁹⁹ Sentencia del TAR Lazio, sez. I, núm. 6285 de 2002. Comentada igualmente por VOLPE, Carmine, “Fuori ruolo ed elettorato attivo nell’elezione dei giudici della Corte Costituzionale da parte delle Supreme magistrature: la prima volta del giudice amministrativo (nota a Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 luglio 2002, n. 6285)”, en *Il Foro Amministrativo*, vol. 78, núm. 7-8, 2002, págs. 2470-2493.

²⁰⁰ El 27 de enero de 1977 el Parlamento designó, junto a otros dos magistrados, al señor Brunetto Bucciarelli Ducci. En esa ocasión en el procedimiento de convalidación a cargo de la propia Corte Constitucional (deliberación de 29 de enero de 1977), estimó cierta falencia en la candidatura, al no considerarse cumplida su pertenencia a la categoría de jurisdicción ordinaria superior, debido a que nunca había ejercido funcionalmente el cargo que tenía de Magistrado de Casación. Véase al respecto el comentario crítico de D’ORAZIO, Giustino: “Magistrati della giurisdizione superiore ordinaria ed esercizio di funzioni non giudiziarie”, en *Giurisprudenza Costituzionale*, vol. 22, núm. 8, 1977, págs. 1401-1409.

lado, el acuerdo parlamentario conseguido en la designación de aquél magistrado²⁰¹.

Continuando con el tema general de elección de los jueces constitucionales a cargo de las supremas magistraturas, cabe mencionar que el art. 2 de la l. n. 87/1953, proporciona una regla para emitir la votación al interior del colegio electivo. Concretamente se trata del derecho que cada integrante del colegio tiene para votar por un número doble de candidatos por cada plaza a cubrir, estableciéndose como consecuencia a su incumplimiento, la no contabilización de los nombres que excedan ese número.

Como ya se dijo, en las primeras designaciones y ante el silencio de la normativa, el acuerdo operativo de las magistraturas había previsto la mayoría simple de los colegios electivos para elegir al magistrado constitucional, sin embargo, posteriormente la l. cost. n. 2/1967 vino a regular este elemento fijando para ello una mayoría absoluta para el primer escrutinio y la simple para los siguientes. En efecto, en el caso de que en la primera votación no se obtenga esa mayoría, se procederá en el día sucesivo a una segunda votación entre los candidatos que, en número doble a las vacantes por cubrir, hayan obtenido el mayor número de votos y vencerá el que obtenga la mayoría relativa (*votazione di ballottaggio*). Si hubiese empate, se tiene la opción de proclamar juez constitucional al que tenga mayor edad, o bien, se le somete a una segunda vuelta (4, l. cost. n. 2/1967).

Como ha quedado de manifiesto, la mayoría contemplada para la designación de los jueces por parte de las magistraturas no es muy exigente, si se compara con las establecidas para las designaciones parlamentarias. Esta distinción tiene su base en que la estructuración de los colegios electivos de las magistraturas no descansa en cuerpos de representación política de grupos, pues se trata de supremos órganos jurisdiccionales. En general se viene considerando que la participación de las magistraturas es la que más se encuentra alejada de la lógica política, aunque no debe descartarse la

²⁰¹ Véase ROSSI, Emanuele; VUOTO, Salvatore: "I giudici della Corte costituzionale di nomina delle supreme magistrature", op. cit., págs. 363-364.

formación de corrientes o grupos modelados por las asociaciones judiciales al interior de los colegios, que podrían incidir sobre las designaciones²⁰².

En cualquier caso, conviene anotar que la práctica de las designaciones de las supremas magistraturas ha tenido una dimensión “corporativa”, es decir, en todos los casos han recaído sobre magistrados pertenecientes a la misma jurisdicción que le corresponde elegir. En su mayoría, las elecciones se han decantado por magistrados presidentes de sección, aunque también han llegado a optar por los presidentes del propio cuerpo, abogados y procuradores generales de la casación y a un consejero de la Corte de Cuentas²⁰³.

Se trata en efecto, de una práctica consolidada, puesto que las magistraturas no están constreñidas a elegir a los miembros de su propio seno, sino que el abanico de posibilidades que tienen para designar libremente al juez comprende además las otras dos categorías profesionales del electorado pasivo previsto en el art. 135.2 de la Constitución, como lo es la de profesor universitario de Derecho y de abogado. Mencionado lo anterior, el hecho es que la principal fuente de Magistrados provenientes de la jurisdicción ordinaria en la Corte Constitucional la constituyen las supremas magistraturas, aunque ocasionalmente el Parlamento y el Presidente de la República han designados como jueces a personas con el grado de Magistrado²⁰⁴.

²⁰² Para algunos que han estudiado las designaciones efectuadas por las supremas magistraturas, concluyen que las asociaciones judiciales no han tenido una influencia determinante para perfilar las elecciones. Véase ROSSI, Emanuele; VUOTO, Salvatore: “I giudici della Corte costituzionale di nomina delle supreme magistrature”, op. cit., pág. 366.

²⁰³ Hasta 1996, la Corte Suprema de Casación había designado a diez Presidentes de Sala (Lampis, Gabrieli, Fragali, Verzi, Gionfrida, Maccarone, Greco, Granata, Santosuosso y Ruperto), a tres abogados generales (Battaglini, Saja y Corasaniti) y tres procuradores generales (Manca, Reale y Rossano). El Consejo de Estado, ha designado a un Presidente de la institución (Pescatore) y a cuatro Presidentes de Sala (Papaldo, De Marco, Roehrssen e Chieppa). La Corte de Cuentas ha designado a cuatro Presidentes de Sala (Cosatti, Benedetti, De Stefano e Borsellino) y un consejero (Vari). Los datos, que son hasta 1996, son extraídos de, ROSSI, Emanuele; VUOTO, Salvatore: “I giudici della Corte costituzionale di nomina delle supreme magistrature”, op. cit., pág. 361. En cuanto a la dimensión “corporativa” que han tomado las supremas magistraturas, véase en el mismo sentido a RUGGERI, Antonio; SPADARO, Antonino: *Lineamenti di Giustizia Costituzionale*, op. cit., pág. 61; BIN, Roberto; PITRUZZELLA, Giovanni: *Diritto Costituzionale*, op. cit., pág. 408; MALFATTI, Elena; PANIZZA, Saulle; ROMBOLI, Roberto: *Giustizia Costituzionale*, op. cit., pág. 55, entre otros.

²⁰⁴ El Presidente de la República ha llevado a la Corte Constitucional a un Presidente y a un Presidente Honorario de la Corte de Casación (Oggioni, Azzariti, respectivamente), y a un Presidente de Sala del Consejo de Estado (Castelli Avolio). El Parlamento ha designado para la Corte Constitucional a un Presidente de Sala del Consejo de Estado, aunque en el momento también había ganado el concurso de profesor, por lo que se le enmarca dentro de esta última categoría (se trata del Juez Caianiello, designado el 9 de octubre de 1986). Los datos son

Esta dinámica consolidada ha resultado congruente con la voluntad del constituyente²⁰⁵, quien desde el diseño de los criterios de elección de los jueces constitucionales, pretendió ofrecer una vía de acceso a la Corte que estuviera más distanciada del juego de fuerzas políticas, dejando por tanto un poder de designación directa a las supremas magistraturas²⁰⁶. Por otro lado, la idea, como ya se ha referido, también era dejar un espacio de “conexión” de la CC con el poder judicial, propósito nada desdeñable debido a los cometidos institucionales de tipo jurisdiccional de la Corte.

a) La asamblea preelectoral en la Corte Suprema de Casación

La Corte Suprema de Casación es el tribunal de última instancia en el sistema de jurisdicción ordinaria en materia penal y civil, que está encargado de asegurar “la exacta observancia e interpretación uniforme de la ley, la unidad del derecho objetivo nacional, el respeto de los límites de las diversas jurisdicciones”²⁰⁷. En materia de designación de jueces constitucionales, la Corte de Casación merece una mención aparte, porque desde hace tiempo viene consolidando una práctica tendente a conferir mayores grados de transparencia al procedimiento preparatorio de la elección de los jueces. La práctica consiste en una “asamblea general” especialmente convocada por el Presidente de la Corte de Casación, para que los aspirantes a la magistratura constitucional expongan ante los colegas las razones de su candidatura. No se trata de una asamblea electiva, sino de información y discusión de las candidaturas.

La celebración de una asamblea “preelectoral” de este tipo tuvo sus orígenes en un documento elaborado en 1993 a iniciativa de algunos

hasta noviembre de 1996 y son extraídos de ROSSI, Emanuele; VUOTO, Salvatore: “I giudici della Corte costituzionale di nomina delle supreme magistrature”, *op. cit.*, págs. 361-362.

²⁰⁵ En este sentido, se puede destacar a uno de los principales promotores de la introducción de una impronta jurisdiccional al órgano de justicia constitucional, se trata del constituyente Constantino Mortati. Véase COSTANZO, Pasquale: “L’organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale”, en COSTANZO, Pasquale (coord.): *L’organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale: atti del Convegno, Imperia, 12-13 maggio 1995*, Torino, G. Giappichelli, 1996, pág. 14.

²⁰⁶ NICOTRA, Ida Angela: “Spunti in tema di elezione...”, *op. cit.*, pág. 121.

²⁰⁷ Artículo 65 de la norma que disciplina el ordenamiento judicial, esto es, el Real Decreto de 30 de enero de 1941, número 12, con sucesivas modificaciones. El Real Decreto y en general, un estudio panorámico del sistema judicial italiano puede verse en el portal de Internet del Consejo Superior de la Magistratura, en www.csm.it/documenti%20pdf/SistemaGiudiziarioItaliano.pdf.

Magistrados de la Corte de Casación, presentado al Presidente de ésta, quien lo trasladó al Consejo Superior de la Magistratura para recabar su opinión. En el documento se sugería que el Presidente adoptara una suerte de “reglamento” en el que se detallara esta etapa preparatoria.

La misma debía comenzar con la convocatoria a cargo del Presidente por medio de una carta a los miembros del colegio electivo, citándolos para una asamblea en la que se discutiría abiertamente sobre las candidaturas a la Corte Constitucional, sin que la misma resultase vinculante para orientar el voto del colegio. En la carta podría informarse de las candidaturas presentadas al Presidente, sin menoscabo de que pudieran presentarse otras en el transcurso de la asamblea. Llegada esta, se invitaría a los candidatos por orden alfabético para que en quince minutos expusieran su presentación, permitiendo posteriormente una discusión con intervenciones de cinco minutos. La asamblea debería ser convocada al menos un mes antes de la fecha fijada para la elección.

El Consejo Superior de la Magistratura respondió a la solicitud considerando que de conformidad con las normas constitucionales y legales de composición de la CC, no cabía dentro de las competencias del Presidente de la Corte de Casación la emisión de un acto normativo en la materia. Tampoco era previsible la opción de un “reglamento” o disposición de rango reglamentario, dada la reserva de ley a que somete el artículo 51 de la Constitución el derecho de acceso a los cargos públicos²⁰⁸.

El Consejo además, de alguna manera destaca la importancia de la designación de los jueces constitucionales y la necesidad de una sede o acto institucional en la magistratura para que se lleve a cabo este tipo de reflexión, con lo que parece “avalarse” la idea de la asamblea. En cuanto al momento y demás detalles de la misma, reconoció en el Presidente de la Corte de Casación, en su carácter también de Presidente del colegio electivo, la facultad para determinar a su prudente criterio la modalidad de la convocatoria y el

²⁰⁸ La respuesta del Consejo Superior de la Magistratura fue adoptada en la sesión del 19 de enero de 1994. Del acontecimiento da noticia PANIZZA, Saulle: “La composizione, l’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale”, en ROMBOLI, Roberto (a cura di): *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995)*, Torino, G. Giappichelli, 1996, págs. 6-7.

desarrollo de la misma, de modo que vaya formándose una práctica, pero sin que llegue a asumir carácter vinculante.

La primera asamblea fue convocada por el Presidente de la Corte de Casación Brancaccio en 1993 y sucesivamente por el Presidente Zucconi Galli Fonseca el 17 de marzo de 1999 y octubre de 2001; luego la ha convocado el Presidente Marvulli el 18 de octubre de 2002, de modo que la práctica se ha ido asentando²⁰⁹. La asamblea se ha desarrollado en los términos de la propuesta original y siguiendo las directrices del Consejo Superior de la Magistratura, puesto que no se precedió a la redacción de ninguna disposición de carácter normativo.

La asamblea ha consistido en una primera etapa donde el candidato hace una breve exposición para presentar las razones que lo llevaron a su postulación o bien para aceptar la candidatura propuesta por sus compañeros; en esta suele presentar el contexto de la candidatura, las motivaciones, su oportunidad, una panorámica curricular, su disponibilidad para el cargo y la idoneidad de su perfil con los principios de funcionamiento del juez constitucional y la Corte Constitucional. Enseguida se da paso a una segunda etapa en donde el candidato puede recibir observaciones de los miembros del colegio electivo, manteniendo al efecto un ambiente de respeto y apertura²¹⁰.

Las asambleas preelectorales han tenido hasta el momento un desenvolvimiento considerable. La participación de los candidatos ha sido importante, por ejemplo en la de 1999 participaron ocho aspirantes. En cuanto a la segunda etapa, el colegio se ha limitado a debatir sobre la currícula que expone el candidato con alguna que otra incursión en matices en cuanto a principios constitucionales, pero no se ha llegado a desencuentros amargos o controversias políticas. La asamblea, como ya se ha mencionado, no concluye con una votación, sino que se ha constituido en una sede formal de información de las candidaturas. Tampoco, por tanto, se ha convertido en una suerte de concurso de oposición donde se hayan impuesto adicionales criterios meritorios de elección más allá de los marcados por las disposiciones constitucionales y

²⁰⁹ PANIZZA, Saulle: "La composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale", en ROMBOLI, Roberto (a cura di): *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1999-2001)*, Torino, G. Giappichelli, 2002, págs. 6-7.

²¹⁰ Así lo llegan a calificar MALFATTI, Elena; PANIZZA, Saulle; ROMBOLI, Roberto: *Giustizia Costituzionale*, op. cit., pág. 56.

legales. La designación ha quedado al libre albedrío de los integrantes del colegio, que realizan la elección “*intuitu personae*”.

Para algunos el procedimiento ha tenido relevancia positiva en la discusión abierta de la candidatura, que mina la *praxis* de los “respaldos de corredor” o candidaturas basadas en otros factores, entre los que destacan el conocimiento personal, la proximidad territorial, la asistencia a las mismas oficinas, la afinidad ideológica, entre otras²¹¹. En cambio, otros ven en esa práctica, un potencial riesgo de traslación de los comportamientos políticos típicos de una Asamblea parlamentaria al seno electivo de la asamblea de la Corte de Casación, lo que podría dar a sus designaciones una impronta política, ajena a la *ratio* técnico-judicial con la que el constituyente fijó la participación de la magistratura en la composición de un tercio de la Corte Constitucional²¹². Por otro lado, se cree además que la tendencia a evitar desencuentros políticos entre los debates y mantener una línea en la sesión que lo evite, dará como resultado la escasa utilidad de la asamblea²¹³.

El temor arriba señalado ciertamente tiene algo de virtualidad, sobre todo porque este tipo de audiencias no ha evitado, por denominarlo de alguna forma, la realización de “campañas” entre los “candidatos” en el seno del colegio electivo, por ejemplo con la distribución de cartas donde los interesados declaran al colegio su “disponibilidad” para la candidatura. Sin embargo, el mérito de la asamblea sigue siendo la dotación de mayores dosis de apertura e información al procedimiento, que no ha cundido en el resto de órganos selectores de magistrados.

2.2.2.3.- La designación por el Parlamento

Finalmente, queda por abordar la selección de los cinco jueces constitucionales a cargo del Parlamento. En este caso, los jueces son electos por la sesión conjunta de la Cámara de Diputados y el Senado, con voto

²¹¹ Véase, ROMBOLI, Roberto; PANIZZA, Saulle: “El estatus de los jueces de la Corte Constitucional. Italia”, en FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa*, México, IIJ, UNAM, 2012, pág. 800.

²¹² ALOISIO, Salvatore: “Considerazioni sui giudici costituzionali eletti dalle Supreme Magistrature”, en ANZON, A.; AZZARITI, G.; LUCIANI, M. (a cura di): *La composizione della Corte Costituzionale, situazione italiana ed esperienze straniere*, Atti del Seminario di Roma del 14 marzo 2003, Quaderni della Rivista di Diritto Costituzionale núm. 3, Torino, G. Giappichelli, 2004, págs. 187 y ss.

²¹³ *Idem*, pág. 192.

secreto y por mayoría de dos tercios de los componentes de la Asamblea en las primeras tres votaciones, mientras que en los sucesivos escrutinios la mayoría calificada baja un poco, al exigir los tres quintos de los integrantes de la propia Asamblea (3, l. cost. n. 2/1967)²¹⁴.

Como se puede observar, el poder de designación no se deposita en una determinada Cámara, como sucede en otras experiencias del entorno, sino que recae en la sesión conjunta de las dos Cámaras que componen el Parlamento italiano. Se trata sin duda, de un colegio numerosamente compuesto, al estar integrado por 945 personas, de los cuales 630 son diputados y 315 son senadores (56, 57 C).

Esta “*seduta comune*” de las Cámaras, es una formación especial del Parlamento italiano. Se le considera un colegio “imperfecto”, en la medida que se reúne para llevar a cabo funciones muy específicas ordenadas taxativamente por la Constitución²¹⁵.

Sus competencias se reducen a ciertas funciones en materia de acusación en el juicio contra el Presidente de la República (90, 135 C) y en materia electiva, en especial, la elección del Presidente de la República (83 C), pero también tiene a su cargo la designación de un tercio de los componentes del Consejo Superior de la Magistratura (104.4 C), y como se ha avanzado, también designa a una tercera parte de los jueces de la Corte Constitucional (135.1 C).

No existe propiamente un “procedimiento parlamentario” para la designación de los jueces constitucionales, es decir, no está formalizado un periodo de presentación de candidaturas, de valoración y conclusión de las mismas, sino que la actividad es realizada de manera “oficiosa” por el impulso

²¹⁴ En un principio el art. 3 de la l. n. 87/1953, exigía una votación menos elevada, pues establecía la mayoría de tres quintos de los componentes de la Asamblea en los primeros dos escrutinios, y en los sucesivos se exigía simplemente la mayoría “de los votantes”. Una opción sin duda polémica, puesto que una ley ordinaria dejaba las designaciones en los últimos escrutinios en las manos de la mayoría parlamentaria. La polémica fue superada con la “constitucionalización” de la mayoría calificada a través de la l. cost. n. 2/1967. Esta ley, fijó las mayorías que se mantienen vigentes hasta ahora, esto es, mayoría de dos tercios de los componentes de la Asamblea y de mayoría de tres quintos a partir del cuarto escrutinio.

²¹⁵ Además de que entre otras características, no determina por sí misma el orden del día, no formula su propio Reglamento (sino que ocupa el de la Cámara de Diputados –véase el art. 35.2-), o no se pueden abrir rondas de discusión y posicionamiento por parte de los parlamentarios. Esta categoría de colegio “imperfecto” ha sido matizada por otros autores, por ejemplo, PALADIN, Livio: “Sulla natura del Parlamento in seduta comune”, en *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, vol. 10, núm. 2-3, 1960, págs. 388-418.

que le proporcionen los acuerdos de las fuerzas políticas y su materialización a través de las “palancas” del trabajo parlamentario dado por la Presidencia de la Cámara de Diputados que lo es también de la sesión común, la Presidencia del Senado, o la Conferencia de Presidentes (órgano análogo a la Junta de Portavoces española).

Como consecuencia de ello, tampoco podrá esperarse una declaración formal de aceptación de la candidatura por parte del candidato, aunque podría hacerlo o negarse por otros cauces informales de contacto con las fuerzas políticas. Al no haber una etapa de recepción y formalización de las candidaturas, provoca que el número de las mismas no esté “cerrado”, de modo que continuamente se pueden observar en las votaciones parlamentarias una suerte de “desfile” de personalidades que aparecen de escrutinio en escrutinio, mientras no se consiga la mayoría requerida. Quizá lo recomendable sea que las candidaturas estuvieran definidas para que el esfuerzo de negociación de las fuerzas políticas se concentrara en ellas.

No hay una etapa pública de valoración del currículum del aspirante en el *iter* parlamentario, aunque ciertamente existe un procedimiento de verificación luego de la elección a cargo de la propia Corte Constitucional. Es verdad, por otro lado, que las candidaturas suelen recaer en grandes personalidades jurídicas, por lo que los requisitos de acceso están generalmente cumplidos. Además es de suponer que las fuerzas políticas de hecho realizan una valoración de este tipo antes de presentar la candidatura a la negociación con el resto de fuerzas.

Una prueba para acreditar lo anterior, podría ser el escaso número de veces en que la mencionada facultad de revisión de la Corte Constitucional ha dado como resultado el planteamiento de algún tipo de falencia en la candidatura, excepción hecha de las dudas planteadas en el referido caso de la elección del Magistrado Brunetto Bucciarelli Ducci en 1977.

En cualquier caso, el procedimiento no deja de tener bastantes problemas de transparencia, no solamente de cara a la sociedad, sino entre quien propone la candidatura y los propios parlamentarios electores²¹⁶. En este

²¹⁶ Algunas opiniones en este sentido, expresadas por unos parlamentarios en sesión, son recogidas en BIAGETTI, Francesca: “Il procedimento parlamentare di elezione dei giudici

sentido, conviene mencionar que en el Parlamento italiano se tiene adoptada la práctica de no abrir un debate público sobre las candidaturas cuando las reuniones comunes de las Cámaras tienen una finalidad electiva. Ello en virtud, de la ya mencionada calidad de colegio imperfecto del Parlamento en sesión común, pero también de una suerte de “principio general” que se viene consolidando en su Derecho Parlamentario, inspirado por razones de funcionalidad y oportunidad política, con el fin de evitar que las reuniones del Parlamento se transformen en comicios electorales.

La idea también es evitar una sesión donde se expresen juicios de preferencia sobre los méritos de los candidatos, y se negocien públicamente los acuerdos sobre las personas a elegir. Este criterio, parece traer causa en una de las características funcionales del propio colegio, como lo es la elección del Presidente de la República, en la cual se pretende evitar mayores complicaciones en su procedimiento selectivo. De ahí que no se permitan las declaraciones públicas en la Asamblea, para evitar una concurrencia abierta entre candidatos, que se puedan oponer vínculos y condicionamientos a la elección del Presidente, de manera que la misma aparezca altamente politizada. La defensa y propuesta de candidaturas, podría verse con un significado político que marcaría a los candidatos, del mismo modo que fueron electos.

Esa línea de principio, no se ha constreñido a la designación del Presidente de la República sino al resto de actos de “naturaleza electiva” de la Asamblea parlamentaria. Así se ha entendido desde la primera sesión conjunta dedicada a la elección de jueces constitucionales y continúa manteniéndose hasta ahora. En la práctica, sin embargo, no han faltado reiterados intentos de los parlamentarios para tomar la palabra en la Asamblea, pero los Presidentes no lo han permitido²¹⁷.

costituzionali: spunti problematici”, en *Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati*, Roma, Camera dei Deputati, Ufficio atti e pubblicazioni, 1998, pág. 5.

²¹⁷ En efecto desde la primera designación parlamentaria de jueces constitucionales, no se permitió una discusión en el Parlamento reunido en sesión común; en aquella ocasión se negó la palabra a Paolo Rossi, quien al pedirla, avanzó que quería proponer la suspensión de las votaciones, ante la infructuosa mediación de los Presidentes de las Cámaras para propiciar un acuerdo entre los partidos. El acontecimiento es relatado por FERRARI, Giuseppe: “La travagliata gestazione della Corte costituzionale...”, *op. cit.*, pág. 97. Otros casos se recogen en BIAGETTI, Francesca: “Il procedimento parlamentare di elezione dei giudici costituzionali...”, *op. cit.*, págs. 5-7.

Ahora bien, ya que ha quedado asentado que no suelen abrirse “rondas de debate” en las sesiones conjuntas, lo cierto es que tampoco se llevan a cabo en ninguna otra sede parlamentaria formalizada y pública, esto es, en alguna Cámara, Comisión u órgano de gobierno, al estilo de los “*hearings*” estadounidenses. Consecuentemente, la información sobre la negociación de las candidaturas y de los criterios de designación, tienen que buscarse en sede política, en las declaraciones a la prensa de los parlamentarios y mediante el ejercicio de la conjetura.

Para adoptar el acuerdo de designación se exige el voto de los dos tercios de los componentes de la Asamblea en las primeras tres votaciones, y en los siguientes basta con los tres quintos. En cualquiera de los dos supuestos, la mayoría resulta muy elevada, al tratarse en el primer caso de 635 votos y en el segundo de 572. Las designaciones suelen conseguirse por el segundo *quorum*, luego de muchos escrutinios²¹⁸. Los grupos políticos tan fragmentados en Italia, frecuentemente encuentran dificultades para conseguir ese número de apoyos, por lo que las designaciones no se realizan en el mes fijado por la l. cost. n. 2/1967 para efectuar el nombramiento y ocupan mucho más tiempo, en algunos casos han llegado a tardar cerca de los dos años.

La conducta dilatoria parece cada vez más habitual, al punto que el mes de plazo previsto constitucionalmente para hacer el nombramiento se ha considerado en la práctica como un plazo “ordinario” y “prorrogable”²¹⁹. El plazo ha perdido su prístino sentido de fijar el periodo para ejecutar la designación, a considerarlo como un periodo en el que por lo menos, debía ponerse en marcha el procedimiento y celebrar el primer escrutinio²²⁰. Asimismo los constantes retrasos ya han dado muestras de que podrían ocasionar problemas más graves, relacionados con una crisis institucional o de gobierno: parálisis de la Corte al no contar con el *quorum* de magistrados para

²¹⁸ Para conseguir la designación del abogado Giuseppe Frigo el 21 de octubre de 2008, se necesitaron veintiún escrutinios (once en una legislatura y diez en la siguiente); luego en las designaciones de dos jueces el 24 de abril de 2002, llegaron hasta los veinte escrutinios (cinco en una legislatura y quince en la siguiente). Por el principio de discontinuidad entre las legislaturas, al inicio de cada una, el procedimiento selectivo recomenzó desde el *quorum* de votación inicial de los dos tercios.

²¹⁹ Entre ellos, LUTHER, Jörg: “I giudici costituzionali sono giudici naturali?”, en *Giurisprudenza Costituzionale*, núm. 3, 1991, pág. 2496.

²²⁰ BIAGETTI, Francesca: “Il procedimento parlamentare di elezione dei giudici costituzionali...”, *op. cit.*, pág. 16.

sesionar²²¹; apelación pública apoyada por 506 parlamentarios dirigida a los Presidentes de las Cámaras para convocar al Parlamento hasta proceder a las designaciones necesarias²²²; declaraciones y mensajes directos del Presidente de la República a las Cámaras²²³, llegando a advertir sobre su disolución de proseguir con el retraso²²⁴.

La votación parlamentaria se realiza en secreto (3, l. cost. n. 2/1967), característica por otro lado que se aplica tradicionalmente en Italia cuando en la deliberación se trata de la elección de personas. Con ello se busca eliminar que incidan en la voluntad de los parlamentarios presiones externas de acuerdo a la forma de votación y también para forzar que el acuerdo parlamentario entre los grupos políticos no sea meramente formal o impuesto por disciplina partidaria, dando mayor peso a la función singular del parlamentario.

El sufragio se emite mediante una boleta. En ocasiones, se ha utilizado una papeleta para cada plaza a cubrir y en otras, para agilizar en términos prácticos la votación, en la misma se ha votado por los nominados a las diversas plazas de magistrado en juego, aunque cada una vaya en un número de escrutinio distinto e incluso cuenten para diferentes mayorías²²⁵.

En el plano práctico, el Parlamento se ha caracterizado, al igual que el Presidente de la República, por preferir entre sus designaciones a los profesores universitarios. En efecto, de las designaciones que ha realizado hasta noviembre de 1996, dieciséis han sido profesores, siete abogados y un

²²¹ Suceso recogido en PANIZZA, Saulle: "Composizione, organizzazione e funzionamento della Corte Costituzionale", en ROMBOLI, Roberto (a cura di): *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004)*, Torino, G. Giappichelli, 2005, pág. 3, nota 7; TORRISI, Mimmo: "La Consulta senza numero legale per la prima volta in quarantasei anni", en *Diritto e Giustizia*, núm. 13, 6 aprile 2002.

²²² Se trata del documento titulado "Appello di parlamentari ai presidenti di Camera e Senato su Corte Costituzionale e Commissione di Vigilanza RAI", promovida por el Grupo político radical, en apoyo a la iniciativa de Marco Pannella, apoyada por 506 parlamentarios, disponible en <http://old.radicali.it/view.php?id=130226>.

²²³ El acontecimiento es relatado por PUGIOTTO, Andrea: "Se non così, come? E se non ora, quando?: sulla persistente mancata elezione parlamentare di un giudice costituzionale", en DESANTI, Lucetta; FERRETTI, Paolo; MANFREDINI, Arrigo D. (a cura di): *Il 70 compleanno di Pierpaolo Zamorani: scritti offerti da gli amici e dai colleghi di facoltà*, Milano, Giuffrè, 2009, págs. 339-354.

²²⁴ Una opción que ha encontrado respaldo en la doctrina. Véase por ejemplo, Rossi, Emanuele: "Il Presidente della Repubblica e la mancata elezione dei giudici costituzionali", en *Forum di Quaderni costituzionali*, 20 de noviembre de 2001, en www.forumcostituzionale.it.

²²⁵ Los casos particulares son referidos por BIAGETTI, Francesca: "Il procedimento parlamentare di elezione dei giudici costituzionali...", *op. cit.*, págs. 6-7.

caso especial sobre un magistrado²²⁶. Entre los criterios de elección, vista la práctica puede extraerse el de una cierta preferencia por ex parlamentarios o profesionales vinculados en algún momento a un grupo político²²⁷.

Aunque no se trata de un órgano en particular sino del historial de designaciones del conjunto de órganos facultados para ello, se puede destacar el reducido número de mujeres que han sido designadas en la magistratura constitucional a lo largo del tiempo. En este sentido, considérese que no fue sino hasta 1996 cuando la designación presidencial de Fernanda Contri vino a romper el historial de nombramientos masculinos que se venía practicando en la Corte desde su fundación²²⁸. En cualquier caso, tampoco en las subsiguientes designaciones se ha visto que los cargos recayeran en un mayor número de mujeres. En este sentido, se puede recordar el caso en 2005 de Maria Rita Saulle, y en 2011 el de Marta Cartabia (de nómina presidencial). Hasta el día de hoy no ha habido ninguna mujer que haya desempeñado la Presidencia de la Corte Constitucional.

²²⁶ Los profesores han sido Ambrosini, Bracci, Cassandro, Jaeger, Branca, Bonifacio, Trimarchi, Elia, Gallo, Dell'Andro, Casavola, Caianiello, Guizzi, Mirabelli, Mezzanotte y Onida; los siete abogados han sido Cappi, Rocchetti, Capalozza, Amadei, Malagugini, Reale e Spagnoli; y finalmente el Magistrado se ha tratado del polémico y ya referido caso de Brunetto Bucciarelli Ducci.

²²⁷ Así lo destaca PIZZORRUSO, Alessandro: "Art. 135", en BRANCA, Giuseppe (a cura di): *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1981, pág. 147.

²²⁸ Malfatti, Elena; Panizza, Saulle; Romboli, Roberto: *Giustizia Costituzionale*, op. cit., pág. 57.

CAPÍTULO III

El modelo de composición y designación de los magistrados del Tribunal Constitucional español

La Constitución de 1978 dedica su Título IX al Tribunal Constitucional. Esta Ley Fundamental no se limita simplemente a mencionarlo o a enunciar algunas de sus características, sino que de forma directa, previene su composición, los órganos que intervienen en su designación y algunas notas características del procedimiento de selección de sus miembros, su modelo de renovación, establece su estatuto institucional, el sistema de competencias y remite a una Ley Orgánica demás aspectos para su desarrollo. Es decir, recibe desde la Constitución los atributos fundamentales de su composición, función y posición, por lo que goza de los elementos con los que la doctrina generalmente identifica a los denominados “órganos constitucionales”²²⁹.

El modelo de composición y designación de los magistrados del TC es definido en el artículo 159.1 de la Constitución en los siguientes términos: “El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría: dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder

²²⁹ La categorización del TC como “órgano constitucional” se encuentra en el art. 1º de la LOTC. Este precepto, inspirado en el 1.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal alemán, establece que el TC “como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional”. Véase en este sentido, GARCÍA-PELAYO, Manuel: “El ‘status’ del Tribunal Constitucional”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 1, 1981, pág. 13; TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: “El Tribunal Constitucional español como órgano constitucional del Estado: competencias, riesgos y experiencias”, en *Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional*, Madrid, CEC, 1993, págs. 37-41.

Judicial”. El camino constituyente de este precepto no se vería accidentado por reticencias importantes de los Grupos parlamentarios a la introducción del control de la constitucionalidad de las leyes y del órgano que asumiría tal función, debido principalmente a un cierto convencimiento generalizado sobre la conveniencia de formular cada vez más eficientes sistemas de garantías constitucionales. Sin embargo, como se verá más adelante, el tema específico de la composición del Tribunal Constitucional fue quizás uno de los que provocaron mayor grado de discrepancia.

En línea con el ya citado apartado primero del artículo 159 que prevé la forma de composición del Tribunal Constitucional, se puede subrayar cómo se ha tratado de un modelo de conformación orientado de alguna manera a la participación de los poderes del Estado según la clásica teoría de la tripartición en ejecutivo, judicial y legislativo, pero con la acentuada intervención de éste último. De igual forma, se puede advertir la participación de la Corona aclarando que su intervención sólo perfecciona formalmente el nombramiento de los magistrados constitucionales, sin ejercer injerencia alguna sobre los órganos proponentes.

La doctrina desde los inicios del TC se ha expresado sobre este modelo de composición entendiendo que el “origen de la composición pretende marcar la importancia y la independencia del órgano al ser designados sus miembros por los tres poderes del Estado, aunque con un claro predominio del Legislativo”²³⁰, por su parte, Manuel García-Pelayo lo ha entendido como “el único órgano constitucional en el que intervienen en el proceso de nombramiento de sus miembros todos los restantes órganos constitucionales, lo que, junto a otros significados posibles tiene el de reforzar su dignidad y acentuar su significación integradora”²³¹.

En Italia, como ya se ha mencionado, el modelo de elección de los miembros de la Corte Constitucional es de “designación directa”, distribuida equitativamente entre el Parlamento, el Presidente de la República y las supremas magistraturas (135.1 C); en Alemania, por su parte, el modelo igualmente es de designación directa, pero de tipo parlamentario (94 LF),

²³⁰ PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio: *La Constitución española de 1978. Un estudio de Derecho y Política*, 2ª ed., Valencia, Fernando Torres Editor, 1984, pág. 213.

²³¹ GARCÍA-PELAYO, Manuel: “El ‘status’ del Tribunal Constitucional”, op. cit., pág. 29.

aunque como ya se vio, ha introducido márgenes de influencia para el poder judicial (2.3 LTCF) y para el poder ejecutivo (8 LTCF).

Si se examinan los anteriores modelos de designación de los tribunales constitucionales, los cuales de alguna manera inspiraron al constituyente español de 1978, se verá que el modelo adoptado por éste, aunque no se aleja mucho de los cauces marcados por sus antecesores, sí que presenta variantes importantes. En efecto, la integración del TC español comparte con aquéllos trazas del modelo de designación directa, permitiendo de alguna manera el “influjo” de varios poderes estatales, sin embargo el español tiene la novedad de introducir la participación, no del órgano vértice del poder judicial, sino de su órgano de gobierno (CGPJ) y también al Gobierno, además de prever la formalización de las designaciones a cargo del Rey.

Dejando a un lado estas comparaciones generales y observando el concreto modelo de composición diseñado por el constituyente español, se puede apreciar el preponderante papel que ha dado a las Cámaras parlamentarias, al conferirles la elección de ocho de los doce miembros del TC. Esta circunstancia, no sin cierta razón, ha sido motivo para creer que podría trasladarse una lógica de mayoría-minoría parlamentaria al ámbito del tribunal, y por consiguiente, que su composición pudiera ser un reflejo del Parlamento, de modo que su funcionamiento pudiese estar constantemente expuesto a las influencias políticas del poder legislativo.

Hay quienes piensan que este predominio del legislativo es excesivo, e incluso han llegado a considerar que suponía “tan acusada politización del Tribunal Constitucional que, por muchas que sean las garantías formales de independencia con que se les rodee, resulta difícil considerarle materialmente jurisdiccional”²³². Por otro lado, hay autores, para quienes tampoco parece que esta característica sea un método negativo, ya que se debe valorar “que solo de esa manera se hace posible alcanzar una cierta sintonía de la Nación y la interpretación de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional”²³³ ya que es el legislativo, el órgano del Estado que está en la mejor posición de reflejar más fielmente la voluntad o preferencia de la sociedad.

²³² GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: *Derecho Procesal Constitucional*, Madrid, Civitas, 1980, pág. 88.

²³³ ESPÍN TEMPLADO, Eduardo: “Artículo 16”, en REQUEJO PAGÉS, Juan Luis (coord.): *Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*, Madrid, TC, BOE, 2001, pág. 298.

Ahora bien, la preocupación que se anotaba sobre la probable traslación de la mayoría parlamentaria al seno del TC figuraba ya en el terreno constituyente. En estos trabajos los partidos políticos buscaron la manera de ejercer influencia sobre el futuro órgano motivados por el convencimiento de que en determinado momento, el legislador ordinario estaría sujeto a ejercer sus funciones siguiendo las pautas marcadas por el TC, pero por otro lado, los constituyentes también fueron conscientes de introducir las garantías necesarias para que los magistrados actuaran con la máxima independencia y disfrutaran de un estatuto jurídico reforzado. Tales garantías, como bien lo dice el constituyente Alzaga Villaamil, representan “la otra cara de la moneda de aquella que plantea el origen político de su nombramiento”²³⁴.

Es así que en la Constitución y luego en la LOTC, se han previsto un conjunto de obstáculos o como dice Fernández Segado “frenos frente a la politización”²³⁵. Se trata, de igual forma, de un conjunto de elementos que caracterizan tanto el modelo de composición del Tribunal Constitucional como el de la designación de sus miembros.

Los anteriores elementos se pueden entender desde al menos dos puntos de vista: por un lado, medidas que tienen el propósito de evitar el peligro de la vinculación partidista de los magistrados o el influjo político sobre la institución y por otro lado, notas que constituyen las trazas estructurales del órgano, de entre las cuales se encuentra la forma de designación de sus miembros.

3.1.- La normativa general de las designaciones de magistrados

Una de las primeras notas características del estudio de la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, es que la reglamentación de los procedimientos selectivos en la Constitución es escasa. Lo anterior, sin embargo, no constituye un rasgo extraño. Sino más bien, se coloca en una línea de principio que se ha seguido en el diseño de la Constitución española, similar a la aplicada por sus pares europeos, en donde la Constitución se

²³⁴ ALZAGA VILLAAMIL, Óscar: “Sobre la composición del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 10-1, 2003, pág. 167.

²³⁵ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “Artículo 159”, en ALZAGA VILLAAMIL, Óscar (dir.): *Comentarios a la Constitución española de 1978*, tomo XII, Madrid, Cortes Generales, Edersa, 1999, págs. 94-95.

concentra en el diseño de los aspectos esenciales de la dogmática y de la organización del Estado, dejando para cuestiones de detalle o desarrollo a la normativa infraconstitucional.

En este sentido, la Constitución ha fijado la integración del Tribunal, el sistema de renovación y los órganos encargados de designar a los magistrados, contemplando una disposición de reenvío a una Ley Orgánica para su desarrollo (165 CE). Esta Ley ha sido la LOTC, que en materia de designación de magistrados tampoco ha sido prolija en el desarrollo de la materia, lo cual no sería más que una consecuencia lógica de que una imposición de deberes por parte de la LOTC al Gobierno, al CGPJ o a las Cámaras podría llegar a vulnerar el principio de separación de poderes.

En este contexto, entendemos que resultaría matizable la afirmación que llevó a cabo el TC con motivo del examen de constitucionalidad realizado a una reforma a la LOTC, que introdujo otras fases a los procedimientos selectivos de las Cámaras, al sostener que “únicamente la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y no cualquier otra ley puede desarrollar la institución del Tribunal Constitucional en todos los ámbitos en que quepa tal desarrollo, bien por requerirlo la Constitución, bien porque no esté constitucionalmente impedido” (FJ 16, STC 49/2008).

Como se puede observar, con esta interpretación se abre la posibilidad para que el régimen de la designación de magistrados pueda modificarse mediante la LOTC, aunque se vean involucradas actividades de otros órganos del Estado, como en efecto sucedió con la introducción de las comparecencias de los candidatos en las Cámaras (aunque sus normativas internas ciertamente ya las contemplaban) y con la participación de los Parlamentos autonómicos en el procedimiento selectivo del Senado.

El juicio anterior ha resultado ciertamente polémico, como suelen ser muchas de las cuestiones en materia de interpretación constitucional. En el caso, sin embargo, la cuestión quizá podría atemperarse, si en la frase de la reserva de ley que alude al desarrollo del “estatuto de los magistrados”, se interpretara que ello incluye el desarrollo –ciertamente general- del procedimiento de selección de los magistrados²³⁶. Ello sería al menos una

²³⁶ Incluso en algunos estudios sobre el status del juez constitucional suele hacerse un apartado dedicado a su designación. Véase, por ejemplo, FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO,

interpretación posible, aunque discutible, pero que al menos conseguiría aquietar la cuestión, en tanto que la reforma a la Constitución, que es lo más adecuado, se plantea como una medida complicada y poco habitual en el contexto español.

Problemas de fuentes aparte, y establecido que la CE y la LOTC disponen la normativa general de la designación del magistrado constitucional, procede ahora mencionar que la reglamentación más detallada de los procedimientos selectivos de magistrados descansan en buena medida en las normas de los propios órganos encargados de la designación.

De esta suerte el abanico de instrumentos normativos se extenderá a los Reglamentos parlamentarios, pero además, y como sucede en bastantes experiencias comparadas, las reglas con mayor desarrollo de la materia se desprenderán de los Acuerdos o Resoluciones de los órganos de gobierno o de trabajo de las Cámaras parlamentarias, las normativas o acuerdos del Gobierno o del CGPJ.

Otra fuente muy importante de reglamentación es sin duda la práctica que vaya consolidándose en el órgano proponente, la cual suele estar muy marcada por el comportamiento político habitual o la denominada “lógica de los partidos”. Elementos estos últimos, que fundamentalmente son los que perfilan definitivamente la “toma de decisión” y con los cuales los procedimientos previstos formalmente en las leyes se entienden desde una perspectiva más integral.

Las consideraciones anteriores pueden llegar a conducir a una conclusión muy importante en materia de designación de magistrados constitucionales. A saber, que las reglas procedimentales se caracterizarán por su previsión en normas de rango inferior, sin olvidar el peculiar protagonismo de las prácticas más o menos consolidadas y del comportamiento estratégico o de oportunidad de los partidos políticos.

Habiendo diferenciado la normativa general y la normativa de detalle en materia de designación de magistrados, a continuación se procederá en este capítulo a abordar la primera de ellas, mientras que la segunda se referirá en

los capítulos subsiguientes, en la medida que se vayan estudiando las designaciones de magistrados por cada uno de los órganos de forma concreta.

3.2.- La composición del Tribunal Constitucional

3.2.1.- Los doce magistrados

En el proceso constituyente de 1978, se previó desde el borrador constitucional, en su artículo 130.1, la existencia de un inicialmente denominado “Tribunal de Garantías” que estaría compuesto por once miembros. El Anteproyecto de la Constitución de 1978, en el entonces artículo 150, se reproduciría tal disposición aunque ahora aludiría propiamente a un “Tribunal Constitucional”²³⁷.

Posteriormente en el debate constituyente, el número de miembros de ese Tribunal fue elevado a doce. Dentro de los once miembros iniciales, correspondía proponer dos al Gobierno, dos al CGPJ, cuatro al Congreso y tres al Senado, sin embargo, en las negociaciones constituyentes, siguiendo una lógica de equilibrio entre el número de miembros propuestos por las Cámaras e impulsados por la presión de algunos partidos políticos, optaron por adicionar uno más al Senado, de manera que ahora cada Cámara tendría cuatro magistrados a proponer, lo que aumentó la cifra global de miembros a doce, número que permanece inalterado hasta el día de hoy²³⁸.

En este sentido, el Profesor Alzaga Villaamil²³⁹ -diputado constituyente por UCD- relata que en las reuniones de trabajo de la ponencia del Congreso al Anteproyecto de Constitución, el PSOE, principal partido de oposición, mostraba cierta desconfianza hacia los grupos de magistrados provenientes del Gobierno y del CGPJ, y en cambio mostraba agrado por los que proviniesen exclusivamente de las Cámaras parlamentarias, puesto que la mayoría calificada de tres quintos que se necesitaba en éstas para tomar el acuerdo de selección, en la práctica, precisaría consensuar tales propuestas -según se

²³⁷ Véase el *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 44, 5 de enero de 1978, pág. 696.

²³⁸ La elevación a doce miembros se produjo concretamente en el Informe de la Ponencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso, y así se mantendría inalterado hasta su promulgación. Véase, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Anteproyecto de Constitución”, en *Boletín Oficial de las Cortes*, núm. 82, 17 de abril de 1978, pág. 1608.

²³⁹ ALZAGA VILLAAMIL, Óscar: “Sobre la composición del Tribunal Constitucional”, *op. cit.*, págs. 160-162.

pensaba- entre el centro y la izquierda, por lo que tendría mayores márgenes de injerencia en este tipo de designaciones.

Había que considerar también en esa negociación, la intención de las fuerzas nacionalistas de que algunos magistrados fueran propuestos por las Comunidades Autónomas a través del peso que estas ejercerían en el Senado, teórica Cámara de representación territorial. En cambio los constituyentes gubernamentales de UCD, confiaban en la propuesta de los dos miembros del Gobierno y los dos del CGPJ, el primero porque creía que lo iba a seguir conservando por muchos años más y el segundo por estimar que el Partido Socialista no tendría influjo determinante en el órgano de gobierno de la magistratura y sí en cambio UCD. La fórmula para satisfacer formalmente desde UCD a la izquierda y a los nacionalistas, fue precisamente aumentar a cuatro los miembros a propuesta del Senado, con la convicción de que esta Cámara no sería realmente condicionada por los nacionalistas²⁴⁰.

Es así como finalmente se articuló la cantidad de integrantes del Tribunal Constitucional. El número de doce magistrados generalmente ha sido valorado positivamente por la doctrina. Se ha estimado en este sentido, que es un número que coloca al Tribunal en el límite del nivel de eficacia de las deliberaciones²⁴¹, aunque ha habido opiniones favorables a aumentar ese número a quince, para hacer frente al excesivo número de procesos constitucionales que se promueven ante el Tribunal y al retraso que ha ido experimentando en la resolución de los mismos²⁴². Aunque también hay quien apunta no sin razón, que la mayor “productividad” no deriva necesariamente del

²⁴⁰ *Idem*, pág. 162.

²⁴¹ Así CRUZ VILLALÓN, Pedro: “Debate” del Coloquio Internacional realizado en Madrid los días 13 y 14 de octubre de 1994, cuyas actas fueron publicadas en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel, *et al.*: *La jurisdicción constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994*, Madrid, CEC, 1995, pág. 63.

²⁴² En esta línea, AROZAMENA SIERRA, Jerónimo: “Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional: balance de quince años”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel, *et al.*: *La jurisdicción constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994*, Madrid, CEC, 1995, págs. 45-46. Reconociendo que no es indispensable, pero que en su caso concediendo un cierto aumento a quince siempre que redunde en incrementar el trabajo de las Salas y Secciones, GARCÍA ROCA, Javier: “Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 4, 1999, pág. 23. También sugiere ese aumento, GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José: *El Tribunal Constitucional*, Navarra, Aranzadi, 2000, pág. 71.

número de magistrados, pues las deliberaciones pueden ser más complejas cuando este número aumenta²⁴³.

3.2.2.- Número par y voto de calidad del Presidente del TC

La integración del Tribunal Constitucional como ya se ha visto, ha quedado estructurada en doce miembros. Se trata en efecto, de un número par, lo que suele hacer más problemático el funcionamiento práctico de los órganos colegiados en la formación de las decisiones. El problema sobre todo, se plantea en la articulación de la medida técnica que permita superar los esperables empates que se van a suscitar en las deliberaciones del colegio. En este sentido, el modelo español se ha decantado, por una nota del todo novedosa para su Derecho, como lo es la asignación del voto de calidad o voto dirimente al Presidente del Tribunal Constitucional (90.1 LOTC)²⁴⁴.

Son varias las objeciones que suelen plantearse a esta figura. En primer término estarían aquéllas que advierten sobre el desequilibrio que se puede producir en el trabajo deliberativo en el interior del órgano y en segundo, la complicación que representaría la designación de quien habrá de tener el voto dirimente y su correspondiente desgaste al ejercerlo.

Comenzando por ésta última, podía efectivamente reconocerse la generación de un especial interés político en la designación concreta del magistrado que contará con el voto de calidad. Por ejemplo en aquellos modelos donde el Presidente es designado “desde fuera” por las autoridades políticas, abriendo consecuentemente mayores posibilidades para la politización y complicación en exceso del nombramiento²⁴⁵.

En España ciertamente esta objeción no es de la envergadura que puede predicarse de otras experiencias constitucionales. Ello es así, porque la Presidencia del Tribunal es definida por el propio colegio, lo que resulta más adecuado para su independencia orgánica. Ciertamente los partidos políticos

²⁴³ En este sentido, GABALDÓN LÓPEZ, José; LÓPEZ GUERRA, Luis, RODRÍGUEZ BEREJO, Álvaro: “Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 4, 1999, págs. 18, 26 y 29.

²⁴⁴ Véase al respecto, SANTAOLALLA LÓPEZ, Fernando: “El voto de calidad del Presidente del Tribunal Constitucional”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 85, 2009, págs. 201-211.

²⁴⁵ En este sentido, ALZAGA VILLAAMIL, Óscar: *La Constitución española de 1978. Comentario sistemático*, Ediciones del Foro, Madrid, 1978, pág. 916.

han intentado influir en este punto, pero han tenido poco éxito. El propio Magistrado Aurelio Menéndez, tras renunciar al poco tiempo de haber sido designado, reconoció en una entrevista dada a los medios de comunicación, que el Gobierno le había planteado la Presidencia del TC²⁴⁶. Como se sabe, el Pleno de Magistrados fundadores designó en cambio a Manuel García-Pelayo, mostrando así una seña de independencia que fortaleció la naciente institución.

La objeción en cambio que resulta plenamente aplicable al caso español es el “sobrepeso” de responsabilidad que recae en el Presidente, en la resolución de asuntos de especial relevancia mediante su voto de calidad, y lo que ello le puede generar de desgaste y deslegitimación social frente a las interpretaciones que de su voto hagan, la opinión pública, los medios de comunicación y las fuerzas políticas²⁴⁷. Esto último, un asunto que puede llegar incluso a niveles tan desafortunados, como en los que en su momento llegó a padecer el Presidente Manuel García-Pelayo en el caso “Rumasa” o en el de la “ley del aborto”²⁴⁸.

En cuanto al desequilibrio interno del órgano, parece claro que la deseable posición de igualdad de los magistrados se pierde, cuando en el debate plenario recae sobre el voto de una persona el poder de determinar la decisión del colegio en los casos de empate. Ciertamente el Presidente no decide “solo”, sino que lo hace con otros cinco magistrados, pero el hecho de que vote el último y que incline la balanza, hace muy visible su posición.

Desde otra perspectiva, esta medida viene a colocar en los hechos a un miembro del colegio no como un “*primus inter pares*”, sino en una situación de privilegio. Esta situación, no parece casar demasiado bien en un órgano jurisdiccional, al dar mayor contundencia a la *iurisdictio* de uno de los integrantes sobre los demás, en virtud de una regla técnica de funcionamiento

²⁴⁶ Aurelio Menéndez, declaró: “Se me llamó para asumir esa alta responsabilidad pública, y después de no pocas resistencias por mi parte, terminé dando mi conformidad y aceptando la designación como magistrado”. Véase DE LA CUADRA, Bonifacio: “Aurelio Menéndez: ‘Mi continuación no sería buena para mí ni para el Tribunal’”, en *El País*, 9 de octubre de 1980.

²⁴⁷ Así también lo expresa FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “Artículo 159”, *op. cit.*, pág. 74.

²⁴⁸ Recuérdese que fue la STC 111/1983, de 2 de diciembre, sobre la expropiación de los bancos y sociedades del grupo “Rumasa”. El otro caso fue la STC 53/1985, de 11 de abril, que resolvió el recurso previo de inconstitucionalidad contra el Proyecto de LO de reforma del art. 417 bis del Código Penal, por el que declaraba no punible el aborto en algunos supuestos. Otros asunto polémico decidido con el voto de calidad del Presidente fue la STC 127/1994, de 5 de mayo, que resolvió recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Televisión Privada.

y no por ejemplo, por un ejercicio de convencimiento jurídico generalizado de los miembros de la institución.

En tales condiciones, el voto dirimente o de calidad, solo parece tener un sentido práctico. En efecto, la justificación de esta opción, suele descansar en el hecho de que constituye una mera técnica para superar el problema de la indefinición que supone un empate, sin embargo, esa técnica de destrabe, no puede justificar un uso mecánico de la misma. La medida tendría que aplicarse con mucho más cuidado. Así lo exigen los asuntos del Tribunal, los cuales no pueden dirimirse mediante la regla formal de la mayoría de votos al estilo de las Asambleas de representantes, sino que requieren de la argumentación jurídica, la reflexión y la deliberación entre los magistrados.

Quizá por ello, resulte conveniente contemplarla como la última válvula de escape para solucionar el “*impasse*” luego de varios y obligados ejercicios previos. En este sentido, podría considerarse la designación de un nuevo ponente, la celebración de nuevas rondas de discusión, el aplazamiento de la deliberación a otro periodo de sesiones, fallar el juicio pero sin efectos generales o sin declarar la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados²⁴⁹, entre otras opciones²⁵⁰.

En otras palabras, el voto de calidad debería ser la *ultima ratio* para superar desempates, porque los delicados cometidos constitucionales que tiene el tribunal constitucional merecen la meditada reflexión. La sentencia debe contener una sólida argumentación que pueda en torno a ella recibir el mayor respaldo posible de los titulares supremos de la jurisdicción constitucional. Cuestión, por otro lado, sumamente importante porque en buena medida, en las argumentaciones jurídicas de la sentencia descansa el sustento

²⁴⁹ Esta es la opción adoptada en Alemania, según el art. 15.2 de la LTCF: “en caso de empate no se podrá declarar la existencia de infracción de la Ley Fundamental u otras normas del ordenamiento federal”.

²⁵⁰ Gustavo Zagrebelsky recuerda que en su paso por la Corte Constitucional italiana hubo un asunto cuya resolución planteaba un empate en la votación y se necesitaba el uso del voto de calidad del Presidente para superarla. Sin embargo la propuesta del relator fue retirada y se resolvió de un modo tal que el elemento controvertido quedó sin juzgar, prefiriendo así esperar a que llegara otra oportunidad, donde quizá se pudiera madurar la decisión con mayor tranquilidad. Son los casos que denomina “de conciencia institucional”, en los cuales, las disposiciones que regulan el modo de operar de la Corte “no resuelven”, pues no se trata de la resolución del asunto por la mera suma de votos, sino del consenso institucional que debe venir con ellos. Véase, ZAGREBELSKY, Gustavo: *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, Torino, Giulio Einaudi, 2005, págs. 17-20.

de su misión, legitimidad y reconocimiento social de los tribunales constitucionales.

Todo ello no hace más que desaconsejar la fijación de un número par de miembros en la composición del Tribunal Constitucional²⁵¹. Sin embargo, tampoco deben perderse de vista, dos notas prácticas que matizan el problema. La primera es que los empates no son frecuentes²⁵² y la segunda es que la mera conformación impar no evita por si sola todas las vicisitudes anotadas, debido a que el Tribunal podría en determinadas circunstancias integrarse en un número par. Ello es así, debido a los esperables supuestos de ausencia del algún magistrado, como pueden ser los casos de legítimo impedimento, la recusación o las plazas vacantes por falta de renovación en tiempo.

Quizá por ello, además de colocar el voto de calidad como última medida para la superación de los empates y luego de haber agotado varias prevenciones que lo impidan, convendría ensayar una fórmula más acotada y menos susceptible de manipulación, como puede ser que el voto de calidad se determine por sorteo o fijar una determinada mayoría para estimar los procesos constitucionales²⁵³ o sólo algunos de ellos, como los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad²⁵⁴.

3.2.3.- Carencia de suplentes y miembros natos

²⁵¹ Las situaciones de conflictividad que el número par de magistrados genera son señaladas por buena parte de la doctrina. Véanse por ejemplo, AROZAMENA SIERRA, Jerónimo: "Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional: balance de quince años", en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel, *et al.*: *La jurisdicción constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994*, Madrid, CEC, 1995, pág. 45; GIMENO SENDRA, Vicente: "Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional", en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 4, 1999, pág. 25; ÁLVAREZ CONDE, Enrique; TUR AUSINA, Rosario: *Derecho Constitucional*, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 2013, págs. 699-700.

²⁵² Así lo reconoce Díez-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis: "Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional", en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 4, 1999, pág. 16.

²⁵³ Esta última planteada por LÓPEZ GUERRA, Luis: "Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional", en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 4, 1999, pág. 26.

²⁵⁴ VIVER PI-SUNYER, Carles: "Debate", en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel, *et al.*: *La jurisdicción constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994*, Madrid, CEC, 1995, pág. 63.

El modelo de composición del Tribunal Constitucional español no contempla la institución del magistrado suplente²⁵⁵. La ausencia temporal del magistrado no es cubierta por otra persona y el colegio tiene que seguir funcionando sin la presencia de uno de sus miembros. Por otro lado, si la ausencia del magistrado es definitiva, ello implicará la activación de los procedimientos selectivos de un nuevo magistrado, en los términos que prevé la LOTC (arts. 16.5, 16.4, 23, 123.2, entre otros).

La consideración de los suplentes en el modelo español quizá no debería estar descartada del todo. Las designaciones de magistrados constitucionales, como más adelante se pondrá de manifiesto, han presentado varios problemas, a cuya solución esta figura podría resultar de utilidad. En efecto, la idea de unos magistrados suplentes designados desde el comienzo por los órganos competentes, que lo sean de forma general para el tribunal (y no por cada magistrado), y que estuvieran disponibles para suplir las ausencias temporales, para completar los cargos de los ceses individuales o para cubrir las plazas de los magistrados con el cargo expirado hasta la designación del tercio de renovación, debería considerarse²⁵⁶. Una propuesta que ya se ha planteado al respecto, es que los suplentes podrían designarse de entre el considerable número de magistrados eméritos²⁵⁷.

Una de las particularidades que se pueden encontrar en materia de integración de los tribunales constitucionales son aquéllas experiencias donde los miembros ingresan a la institución de una manera no electiva. A este tipo de integrantes también se les denomina miembros “natos”, esto es, individuos que se integran al colegio del órgano por disposición de la ley, misma que fijará los supuestos de acceso al cargo.

Ciertamente la experiencia comparada muestra que la inclusión de miembros natos en los órganos de justicia constitucional no suele ser

²⁵⁵ Sí lo había recogido el histórico Tribunal de Garantías Constitucionales, en el art. 7 de su Ley Orgánica: “Cada uno de los Vocales electivos, sin excepción, tendrá su correspondiente suplente, que será designado con tal carácter en el mismo acto, por los mismos elementos y con iguales formalidades que sus respectivos titulares. Cuando actúen en substitución de éstos devengarán las dietas que reglamentariamente se fijen”.

²⁵⁶ GIMENO SENDRA ha llegado a plantearlos, en la “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, pág. 88.

²⁵⁷ CRUZ VILLALÓN, Pedro: “Acotaciones al Proyecto de reforma de la justicia constitucional”, en ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, *et al.*: *La reforma de la justicia constitucional*, Navarra, Thomson-Aranzadi, Centro de Estudios Jurídicos, 2006, pág. 70.

implementada. En esta tendencia se inscribe el actual modelo de composición del Tribunal Constitucional español, pero no se hizo lo mismo en el histórico Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República. En efecto el artículo 122 de la Constitución de 1931, previó una de las maneras de articular a los miembros natos, esto es, a través de la inclusión de quienes contasen con la titularidad de determinado cargo, en el caso, se trató del Presidente del Tribunal de Cuentas de la República y el Presidente del Consejo de Estado.

Otra de las modalidades que existen para la instauración de miembros natos es aquella donde se accede al tribunal con motivo de haber finalizado un determinado cargo, al estilo de como se integran los ex Presidentes de Gobierno al Consejo de Estado español²⁵⁸. El caso singular que cuenta con este tipo de miembros en un órgano de justicia constitucional lo encontramos en Francia²⁵⁹.

3.2.4.- Cualificaciones personales de acceso al cargo

Los órganos encargados de designar a los magistrados constitucionales tienen que ceñirse a una serie de disposiciones que deben concurrir en las personas que pretenden promover para el cargo. Quizá por ello pueda afirmarse que en línea de principio, estos órganos no disponen de una libertad absoluta de apreciación. Algunas experiencias constitucionales tendrán más o menos matizada dicha libertad, según el grado de exigencia y detalle que sus modelos impongan. Tratándose del caso español, los requisitos previstos no

²⁵⁸ Art. 8.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

²⁵⁹ Desde los orígenes del Consejo Constitucional francés, en el artículo 56 de la Constitución de 1958, se estableció expresamente que a sus nueve miembros electivos debía sumarse a los ex Presidentes de la República. Tales miembros no solamente acceden al cargo por disposición de la ley, sino que el cargo es vitalicio y pueden ser designados para la Presidencia de la institución (para ello debe designarlo el Presidente de la República). Aunque también conviene decir que no están irremediabilmente obligados a formar parte del Consejo, sino que pueden decidir no ingresar al cargo o retirarse cuando lo estimen oportuno. El número de ex Presidentes de la República en el Consejo resulta reducido por un gran número de causas. En el historial de integraciones, algunos han decidido no formar parte del Consejo, por ejemplo Charles de Gaulle. Otros ex Presidentes no se han integrado por razones de salud (François Mitterrand), o han formado parte del colegio, pero lo han hecho por poco tiempo (Vincent Auriol), por periodos discontinuos para atender compromisos políticos (Valéry Giscard d'Estaing) o con la justicia (Jacques Chirac). Véase FROMONT, Michel: "La Justice Constitutionnelle en France ou l'exception française", en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 8, 2004, pág. 173; BADINTER, Robert: "Une exception française: les anciens présidents au Conseil constitutionnel", en *Mélanges en l'honneur de Louis Favoreu*, París, Dalloz, 2007, págs. 513-522.

resultan excesivamente exigentes, de modo que el abanico del electorado pasivo se vuelve en la práctica muy amplio²⁶⁰.

Las características particulares de los miembros del órgano constitucional constituyen una medida de garantía para la independencia del Tribunal y consisten en la serie de requisitos que a *priori* intentan garantizar la calificación técnica de quienes lo conformarán. A tal efecto, el artículo 159.2 de la CE exige que los miembros del máximo intérprete de la Constitución pertenezcan a unos determinados cuerpos o profesiones jurídicas.

Los magistrados tienen que ser nombrados entre “Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional”. Por su parte, el artículo 18 de la LOTC, prácticamente transcribe la disposición constitucional precisando solamente la ciudadanía española como presupuesto inicial para el acceso al TC y la característica de encontrarse con más de quince años “en activo en la respectiva función”.

(i) La ciudadanía española para el cargo de magistrado constitucional supone la confirmación de la regla prevista en los artículos 13.2 y 23.2 de la CE, relativa a que la titularidad de las funciones públicas se reserva para las personas de nacionalidad española.

(ii) La Constitución fija que todos los magistrados del Tribunal Constitucional deben ser juristas. Esta determinación, vista desde el ámbito del constitucionalismo histórico español, supone un acierto respecto a la Constitución de 1931 y la LOTGC, que exigía solamente la licenciatura en Derecho a los vocales representantes de los Colegios de Abogados y de las Facultades de Derecho, permitiendo con ello, el ingreso al Tribunal de miembros legos.

El art. 159.2 de la CE, al aludir a la calidad de jurista, lo hace de forma genérica, por lo que no establece de forma expresa que deba tener un título acreditativo de licenciado en Derecho, aunque hoy día tal exigencia es lo normal. Sin embargo, el carácter general de la calidad de jurista, no podría

²⁶⁰ Esta idea de amplitud en los requisitos de acceso también subyace en las reflexiones de SÁNCHEZ AGESTA, Luis: *Sistema Político de la Constitución Española de 1978. Ensayo de un sistema*, 5ª ed., Madrid, Edersa, 1989, pág. 443; FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, “Artículo 159”, en ALZAGA VILLAAMIL, Óscar (dir.): *Comentarios a la Constitución española de 1978*, tomo XII, Madrid, Cortes Generales, Edersa, 1999, pág. 132.

descartar otros supuestos quizá poco factibles, en donde el jurista sea licenciado en Ciencias Políticas ejerciendo la docencia universitaria en Derecho Constitucional²⁶¹. Si se conviene en cualquier caso, que el jurista debe serlo mediante un título académico, se entiende que valdría como mínimo la licenciatura, sin exigir algún otro título de posgrado como por ejemplo el doctorado o el máster.

(iii) En cuanto a las profesiones jurídicas, la Constitución alude a los Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados. Nótese que se trata de un elenco bastante amplio que incluye casi todas las carreras jurídicas que potencialmente habilitan para acceder al cargo de magistrado constitucional²⁶². Repárese por otro lado, en que este rasgo abre la posibilidad para que en el Tribunal Constitucional puedan converger juristas con diversas perspectivas y experiencias sobre los diferentes ámbitos del Derecho. Ello ha sido una nota de pluralidad profesional generalmente bien aceptada, aunque no falta polémica en la materia²⁶³.

Tratándose de los Magistrados, adviértase que dicha profesión constituye una de las categorías de la carrera judicial a que hace alusión el art. 299 de la LOPJ, sin embargo, la Constitución no especifica más detalles de dicho cargo, como sí sucede en otros países²⁶⁴. Este silencio constitucional, puede implicar en principio, que basta la categoría de Magistrado sin importar otras modalidades o situaciones que pueden encontrarse en la propia LOPJ. Esto es, que no importaría para efectos de elegibilidad si son o no Magistrados jubilados o eméritos; Magistrados del Tribunal Supremo o Magistrados de otro órgano (299.1 LOPJ), el rango que tengan en el escalafón general de la carrera

²⁶¹ Este caso excepcional, con buen tino lo ofrece FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: "Artículo 159", op. cit., pág. 140.

²⁶² Faltaría, por ejemplo, la de Procurador, aunque quizá esta profesión individualmente considerada sería difícil que correspondiera al perfil que se busca para la magistratura constitucional, en la que se debe contar, entre otras cosas, con reconocido prestigio.

²⁶³ Existe un cierto debate, no siempre escrito y abiertamente publicado, sobre la profesión jurídica técnicamente más idónea para acceder al TC. En ese terreno se ha llegado a mostrar preferencia por la profesión de Magistrado, poniendo en duda la capacidad de los Profesores universitarios para redactar las sentencias. Véase al respecto la nota, de VALIÑO DEL RÍO, Emilio: "Jueces constitucionales, ¿de reconocida competencia?", en *Revista internauta de práctica jurídica*, núm. 15, 2005, disponible en, www.ripj.com/art_jcos/artjuridicos/art15/jueces%20constitucionales.htm.

²⁶⁴ En contraste, recuérdese la experiencia italiana donde se especifica la proveniencia de las jurisdicciones superiores ordinaria y administrativa, cabiendo los jubilados (135.2 C); o bien la experiencia alemana donde deben provenir de las cinco jurisdicciones federales superiores, exigiendo además haber desempeñado el cargo al menos tres años (2.3 LTCF).

judicial (300 LOPJ), o si han o no accedido a la magistratura por el turno de juristas de reconocido prestigio (301.5 LOPJ).

En cuanto a los Fiscales, la Constitución tampoco realiza ninguna distinción, por lo que se entiende que valdría no solamente el Fiscal General, sino también las dos primeras categorías de la carrera fiscal que refiere el art. 34 de su Estatuto²⁶⁵, esto es, el Fiscal de Sala o el Fiscal, sin importar sus jerarquías (Fiscal Jefe, Teniente Fiscal), destinos (fiscalías especializadas, territoriales, órganos de apoyo a la Fiscalía General, otros órganos jurisdiccionales o al Tribunal Constitucional) o si son jubilados.

Quizá podría resultar más discutible la inclusión en el electorado pasivo para la magistratura constitucional, las figuras de Magistrado suplente o Fiscal sustituto. En principio, no podrían ser descartadas por la mera posesión de ese tipo de cargo o por la falta de pertenencia a la carrera judicial o fiscal (298.2 LOPJ y Real Decreto 326/2002²⁶⁶). Las dificultades de su consideración descansarían en el carácter no permanente o periódico en que esos juristas ejercen el cargo, lo que complica la acumulación de años de ejercicio en dicha función. Sin embargo, claramente esa limitación podría superarse si los quince años de ejercicio profesional exigidos vinieran por otro concepto y concurriesen el resto de requisitos constitucionales²⁶⁷. Como se puede ver, la postura que aquí se adopta hace prevalecer las palabras Magistrado y Fiscal en un sentido amplio, según la mención directa e incondicionada que de ellas se hace en la Constitución.

No plantea por otro lado mayor problema, que tratándose de la Magistratura y de la Fiscalía, las categorías de juez²⁶⁸ y abogados-fiscales no están incluidas dentro de dichas profesiones, sin embargo tales categorías podrían caber en el supuesto más amplio de “funcionario público” que prevé la CE. Este último, un cargo ciertamente muy general, y que ha sido criticado porque podría abrir la posibilidad de acceso al TC a cualquier tipo de funcionarios públicos que quizá la mayoría no cuenten con la especialización y

²⁶⁵ Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

²⁶⁶ Real Decreto 326/2002, de 5 de abril, sobre régimen de nombramiento de los miembros sustitutos del Ministerio Fiscal.

²⁶⁷ Por ejemplo, un fiscal sustituto de Tribunal Supremo que antes haya sido quince años abogado y sea jurista de reconocida competencia.

²⁶⁸ Así también, GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José: *El Tribunal Constitucional*, Navarra, Aranzadi, 2000, pág. 76.

experiencia jurídica requerida para la magistratura constitucional, amén de los jueces o fiscales²⁶⁹. En cualquier caso, conviene mencionar que la concurrencia del resto de requisitos como la “reconocida competencia” y los más de quince años de ejercicio profesional puede disipar los mencionados riesgos.

Otra de las profesiones jurídicas que menciona la Constitución es la de los Abogados. Dado que no refiere más detalles, habrá que atenerse a la diversa normativa en la materia, en la cual se regulan los requisitos de acceso a dicha profesión. El título profesional de abogado, *grosso modo* lo obtiene el licenciado en Derecho que se incorpore a un Colegio de Abogados y ejerza la profesión. De forma reciente han entrado en vigor unas disposiciones de acceso a la colegiación, por las que se exige ahora la superación de un Máster (que incluye prácticas profesionales) y una evaluación de aptitud profesional²⁷⁰.

Tratándose de los docentes, basta que sean “Profesores de Universidad”, lo que al menos formalmente tiene múltiples implicaciones. Por ejemplo, que puede elegirse dentro de cualquier centro universitario nacional o extranjero; que no es necesario que se encuentren adscritos a Facultades de Derecho, sino que pueden serlo de otras Facultades; que no se exige una determinada categoría como puede ser la de Catedrático o Profesor Titular²⁷¹, ni tampoco la dedicación a una especialidad jurídica concreta.

Debe tenerse presente que esta nota de apertura obedece también a una deliberada intención de los constituyentes, para despejar la restricción que supondría circunscribir el acceso al Tribunal a una determinada categoría de la estructura docente en España en aquella época. Ello permitió de forma significativa, que Manuel García-Pelayo se pudiera incorporar al TC, pues en

²⁶⁹ En ese sentido, ALZAGA VILLAAMIL, Óscar: *Comentario sistemático a la Constitución española de 1978*, Madrid, Ediciones del Foro, 1978, pág. 919; FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “Artículo 159”, *op. cit.*, pág. 133.

²⁷⁰ Véase la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

²⁷¹ Más problemas plantearían los Profesores del “personal docente e investigador contratado”, específicamente las figuras de Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante, que están previstas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. La de ayudante doctor prácticamente habría que descartarla, y la de asociado, que va unida al ejercicio de otra profesión, habría que pensar que de ser elegido, no sería elegido por esa condición sino por la otra parte de su ejercicio profesional. Respecto a la legislación universitaria, Garrido Falla se ha decantado por considerar solamente a las categorías de Catedráticos y Profesores Titulares. GARRIDO FALLA, Fernando: “Artículo 159”, en GARRIDO FALLA, Fernando, *et al.: Comentarios a la Constitución*, 3ª ed., Madrid, Civitas, 2001, pág. 2656, nota 8.

tal periodo se desempeñaba como Profesor en la Universidad Central de Venezuela. Como se puede ver, esa nota de apertura era muy propia de aquel momento de transición a la democracia y de consensos esenciales entre las fuerzas políticas.

(iv) En cuanto a la experiencia profesional para acceder al cargo, la Constitución hace referencia a la exigencia de contar con más de quince años de “ejercicio profesional”, mientras que la LOTC con buen criterio, ha incluido también el supuesto de tener esos años en “activo en la respectiva función”. Mediante esta expresión, se abarca la trayectoria profesional de aquellos que pertenecen a un cuerpo de funcionarios para quienes propiamente la expresión “ejercicio profesional” no sería la más técnica respecto de su trabajo, ya que ésta se encuentra más ligada al ejercicio de actividades autónomas especialmente de la abogacía.

Los quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función (veinte en el Anteproyecto de Constitución²⁷²), puede resultar una cifra discutible. Por un lado, puede repararse en que quince años no dan como resultado automático la experiencia y el bagaje de conocimientos que se exigen para acceder al cargo de magistrado constitucional, aunque por otro lado, puede considerarse una base mínima temporal que permita presumir la posesión del perfil de conocimientos requeridos²⁷³.

Hay que tener en cuenta que el cómputo de los quince años de “ejercicio profesional” pueden ser en diversas profesiones jurídicas, mientras que en “activo en la respectiva función”, parece exigir, en efecto, una continuidad.

Recientemente con motivo de la exclusión de una candidatura para la magistratura constitucional a cargo del Senado, se perfiló el criterio de que en la carrera judicial los años de trabajo deben ser de “servicio activo”. Se consideró en el caso, que la situación de “servicios especiales” generada por haber sido Vocal del CGPJ y Letrado del mismo, no podía contar para los quince años, porque tales actividades no son asimilables a la labor

²⁷² *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 44, 5 de enero de 1978, pág. 696.

²⁷³ Para FERNÁNDEZ SEGADO, el requisito temporal tiene un sentido y es que este “viene a introducir un elemento de objetivación –todo lo discutible que se quiera, pero objetivo al fin y al cabo– en esa exigencia de reconocida competencia, que es mucho más difícil de objetivar por sí sola”. En “Artículo 159”, *op. cit.*, pág. 149.

jurisdiccional que desempeñan los jueces y magistrados. Se volverá sobre ello más adelante.

(v) Asimismo, los candidatos además de encontrarse entre las categorías profesionales ya señaladas es necesario que posean “reconocida competencia”. Se trata, como puede verse, de un concepto jurídico indeterminado, que pese a su imprecisión, tiende a indicar el grado elevado de cualificación profesional que se persigue, aunque no deja de ser un requisito subjetivo cuya valoración se entiende quedará a cargo en un primer momento de los órganos proponentes y en un segundo, del colegio del Tribunal Constitucional, según los arts. 2 y 10 de la LOTC²⁷⁴.

Este requisito, como suele suceder en buena parte de los conceptos jurídicos indeterminados, ha sido objeto de críticas, relacionadas precisamente por su vaguedad y subjetividad, pero también por su efecto. En este sentido, se ha llegado a decir que pueden “dar cobertura casi a cualquier jurista” que cumpla con los requisitos anteriores²⁷⁵. La afirmación es un tanto excesiva, aunque seguramente la intención no es más que un llamado a la reflexión. En esa línea sin embargo, no han faltado reconocimientos de que efectivamente, tras las primeras renovaciones, “el nivel de exigencia impuesto por los partidos políticos a sus candidatos bajó de modo sensible”²⁷⁶.

Para otros la apreciación de este requisito es una cuestión de “cultura constitucional” que no se puede resolver normativamente²⁷⁷. En cualquier caso, no deja de señalarse desde la doctrina, que este requisito debe aplicarse desde una recta interpretación, como un auténtico reconocimiento que debe hacerse del candidato como una autoridad en Derecho, un “maestro de maestros” o “el mejor de los posibles”. Un reconocimiento que debe venir de parte de la propia

²⁷⁴ En el mismo sentido, ÁLVAREZ CONDE, Enrique; TUR AUSINA, Rosario: *Derecho Constitucional*, op. cit., pág. 702; GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José: *El Tribunal Constitucional*, op. cit., pág. 77.

²⁷⁵ GARCÍA MARTÍNEZ, María Asunción: “El Tribunal Constitucional. De la legitimidad de origen a la legitimidad de ejercicio”, en *Asamblea: Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, núm. 21, 2009, pág. 133.

²⁷⁶ SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso: “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, pág. 44.

²⁷⁷ PÉREZ ROYO, Javier: “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, pág. 56.

comunidad de juristas²⁷⁸. Estas elevadas calificaciones, ciertamente no se pueden predicar de todas las designaciones realizadas en la historia del TC.

Las críticas también se han dirigido a los años de experiencia profesional y a las profesiones jurídicas exigidas para el cargo. Se ha estimado que el mínimo de quince años es corto y que el nivel solicitado de las profesiones no es riguroso. Por ello se estima, con buen tino, que deberían aumentarse los años y exigir los máximos niveles a que se pueda llegar en las profesiones, tomando en cuenta el grado de prestigio y especialización del órgano que se pretende integrar²⁷⁹. Por ejemplo, la fijación de la categoría de Magistrado de Tribunal Supremo, Abogados con muchos más años de ejercicio profesional o la calidad de Catedrático²⁸⁰.

Por otra parte, repárese en que no existe en el modelo de composición del Tribunal una edad mínima para acceder al cargo, lo cual no deja de resultar un elemento deseable, si se considera que el acceso al Tribunal requiere no solamente poseer los suficientes conocimientos jurídicos, sino una madurez profesional, que surge generalmente con el paso de los años²⁸¹.

En este terreno, quizá resulte razonable la idea de configurar un Tribunal que suponga llegar a la cima profesional, de modo “que permitiese a cada uno contemplarlo como un término y no como una importante plataforma para logros futuros, sin duda legítimos pero que nada debieran agregar a lo que

²⁷⁸ En este línea, por ejemplo, FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso: “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, págs. 33 y 53.

²⁷⁹ GABALDÓN LÓPEZ, José: “Artículo 159”, en CASAS BAAMONDE, María Emilia; RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, Miguel (dirs.): *Comentarios a la Constitución Española. XXX aniversario*, Madrid, Fundación Wolters Kluwer, 2008, pág. 2659; también en, “El Tribunal Constitucional. Sobre su independencia”, en *Diario La Ley*, núm. 7317, 11 de enero de 2010 (en línea en el portal Wolters Kluwer).

²⁸⁰ ALZAGA VILLAAMIL, Óscar: *Comentario sistemático a la constitución española de 1978*, op. cit., pág. 920. Hay en esta línea, quienes se han mostrado favorables a que los Catedráticos provengan en mayor cantidad de una determinada disciplina jurídica, en concreto a la del Derecho Constitucional. Véase ARAGÓN REYES, Manuel: “Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 64, 2002, pág. 292.

²⁸¹ GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ sugiere la edad de alrededor de cincuenta años. Véase, *Tribunal Constitucional*, op. cit., pág. 78. Susana GARCÍA COUSO plantea, como en Alemania, la edad mínima de cuarenta años, en “Cómo superar la lógica del estado de partidos en el Tribunal Constitucional: la reforma del artículo 159 CE”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 29, 2012, págs. 434 y 454; Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR plantea la necesidad de una reflexión colectiva sobre este punto: “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, pág. 45.

significa aquél”²⁸². Ello favorecería no solamente la mayor profesionalidad del magistrado, sino también su independencia.

Tampoco existe un sistema formal de cuotas para la asignación de magistrados constitucionales que atienda a las diversas carreras jurídicas que refiere el artículo 159.2 de la CE, ni relacionadas con cuestiones de lengua o ámbito territorial como sí sucede en otras experiencias extranjeras del entorno²⁸³.

No se contempla formalmente una cuota de género, aunque ciertamente la Constitución desde siempre ha establecido que el poder público debe ajustarse al principio de igualdad material (9.2 CE). En cualquier caso, hay que entender también, que a los órganos proponentes les resulta aplicable la LO 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que los insta a “atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que le correspondan” (art. 16)²⁸⁴. La realidad sin embargo, muestra que esa es una cuestión que ha estado muy lejos de cumplirse, lo cual no ha dejado de generar atinados señalamientos que han venido incluso de los propios Presidentes del TC²⁸⁵.

²⁸² GABALDÓN LÓPEZ, José: “Artículo 159”, op. cit., pág. 2660. Por su parte, Asunción GARCÍA MARTÍNEZ también plantea la magistratura constitucional como el colofón de una carrera jurídica, no aumentando el periodo de mandato, sino fijando una edad mínima para acceder al cargo que apunte a ese objetivo. En “El Tribunal Constitucional. De la legitimidad de origen a la legitimidad de ejercicio”, op. cit., pág. 134. En esta misma línea, MARÍN GÁMEZ, José Ángel: *Naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional*, Barcelona, Ariel, 1998, pág. 24.

²⁸³ Por ejemplo en Bélgica, el Tribunal Constitucional (antes Tribunal de Arbitraje) se compone de doce miembros, de los cuales la mitad debe ser de expresión lingüística francesa y el resto forma el grupo lingüístico neerlandés; en Alemania, de los dieciséis integrantes del Tribunal Constitucional Federal seis deben ser jueces federales; en Portugal seis de las trece plazas del Tribunal Constitucional deben ser ocupadas obligatoriamente por jueces de los demás tribunales y las siete restantes quedan reservadas a los “juristas”; en Austria tres miembros titulares y dos suplentes del Tribunal Constitucional deben tener su residencia permanente fuera de la capital Viena, donde tiene el asiento el Tribunal Constitucional.

²⁸⁴ Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En otras experiencias constitucionales se van observando más disposiciones expresas de inclusión de ambos sexos o de cierta cuota femenina, tal es el caso de Bélgica, Ecuador o Bolivia.

²⁸⁵ En el discurso de la novena renovación parcial, la Presidenta calificó de “llamativo” que Adela Asúa Batarrita fuera la cuarta mujer que se desempeña como magistrada, de un total en la época de 49 magistrados que habían servido al Tribunal. Dijo además que ello era un “dato que debería ser motivo de reflexión, especialmente a la luz del pronunciamiento de este Tribunal sobre la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. Véase *TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Memoria 2010*, anexo V. Por su parte, en el discurso del Presidente Pascual Sala Sánchez, con motivo de la XI renovación parcial indicó que ésta se había realizado “sin equilibrar su composición entre hombres y mujeres como exige la sociedad más

Finalmente, conviene mencionar que el modelo español contempla incompatibilidades para el desempeño de la magistratura constitucional, pero no para ser candidato al cargo, como a veces sucede en otros países²⁸⁶. Se ha llegado a plantear en esta línea, que al menos las tres primeras incompatibilidades para el ejercicio del cargo previstas en el art. 159.4 de la CE, deberían operarse como causas de inelegibilidad, esto es, tener mandato representativo, cargos políticos o sindicales, funciones directivas en los partidos políticos (incluyendo la afiliación)²⁸⁷, pero lo cierto es que no se ha emprendido una reforma en la materia.

3.3.- La temporalidad de los cargos y renovación del TC

3.3.1.- Periodo de nueve años de cargo

El párrafo tercero del artículo 159 de la CE ha fijado el periodo de duración del cargo de magistrado constitucional en nueve años (16.3 LOTC). Este periodo, además de que generalmente ha sido valorado de forma positiva por la doctrina²⁸⁸, se ha considerado un acierto técnico respecto al diseñado en el Tribunal de Garantías Constitucionales, en el que se había fijado el periodo corto de cuatro años para los vocales electivos (5 LOTGC).

Desde las primeras reflexiones que se realizaron sobre la creación del TC, se entendió que el periodo hacía a los magistrados “independientes de las coyunturas o contingencias políticas de los portadores de los órganos que intervienen en su nombramiento”²⁸⁹, debido a que el periodo era considerablemente mayor al de la duración de todos los órganos proponentes. Este periodo, expresaba tempranamente el diputado constituyente Gregorio Peces-Barba²⁹⁰, “pretende asegurar la independencia del Tribunal, al alejarle

que mayoritariamente y como me han pedido transmita en este acto, unánimemente los Magistrados”. Véase *TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Memoria 2012*, anexo V.

²⁸⁶ Por ejemplo, en alguna parte se exige la residencia previa en el país (dos años en México, según el art. 95.5 de la CPEUM), no haber ocupado de forma reciente y previa determinados cargos públicos o haber sido condenado por específicos delitos.

²⁸⁷ SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso: “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, pág. 58.

²⁸⁸ Entre ellos, FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “Artículo 159”, op. cit., pág. 108; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio: *La justicia constitucional europea ante el siglo XXI*, Madrid, Tecnos, 2007, pág. 50.

²⁸⁹ GARCÍA-PELAYO, Manuel: “El ‘status’ del Tribunal Constitucional”, op. cit., pág. 29.

²⁹⁰ Ver la temprana opinión en PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio: “La organización del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 22 de agosto de 1980. Luego se recogería en, *La Constitución*

de los tiempos electorales y al prolongarle tan ampliamente en relación con el mandato de las Cortes Generales, del Gobierno e incluso de los miembros del Consejo General del Poder Judicial”²⁹¹.

No ha dejado de estar presente en el debate la idea de configurar el cargo de forma vitalicia²⁹² o por lo menos de aumentar el periodo de cargo en algunos años. El propósito de la misma es favorecer la independencia de los magistrados, configurando una mayor estabilidad laboral, para hacer frente a los delicados cometidos institucionales del Tribunal Constitucional.

No entraremos a estudiar aquí si el cargo vitalicio o un periodo más alargado del cargo pudieran resultar más o menos efectivos para conseguir la independencia judicial, pero sí que se puede avanzar que los periodos de cargo y la independencia judicial, no necesariamente son variables dependientes. Quizá lo mejor sería orientar un modelo como el que ya se mencionaba, mediante el cual el cargo de magistrado constitucional sea el honorífico cierre de una madurada carrera jurídica. Para ello, más que elevar el periodo de cargo o hacerlo vitalicio, debería exigirse una determinada edad para el acceso al tribunal o muchos más años de experiencia profesional que los actualmente vigentes.

3.3.2.- Renovación por terceras partes cada tres años

En materia de renovación de los titulares del Tribunal Constitucional, son dos los rasgos esenciales que dispone la normativa al respecto: por un lado, la renovación en terceras partes, y por otro, la cadencia o periodicidad de las mismas en tres años (159.3 CE; 16.3 LOTC). La renovación de los miembros del Tribunal no corre por tanto de forma sincrónica o de acuerdo a los periodos individuales de cargo, sino que se realiza en parcialidades, concretamente, en tres grupos de cuatro magistrados cada tres años.

española de 1978. Un estudio de Derecho y Política, 2ª ed., Valencia, Fernando Torres Editor, 1984, pág. 215.

²⁹¹ Los diputados y senadores son elegidos para un mandato de cuatro años (68.4 y 69.6 CE). El Gobierno es elegido para un periodo de cuatro años (114.2 CE). Los miembros del CGPJ son seleccionados para un mandato de cinco años (122.3 CE).

²⁹² Un elemento que está presente en el debate y que no le faltan adeptos. Véase, por ejemplo, GABALDÓN LÓPEZ, José: “El Tribunal Constitucional. Sobre su independencia”, en *Diario La Ley*, núm. 7317, 11 de enero de 2010 (disponible en el portal Wolters Kluwer); DÍEZ REVORIO, Francisco Javier: “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, pág. 49.

La concreta configuración de esos grupos quedó establecida en una disposición transitoria de la Constitución. Al parecer este tema no fue abordado en el trámite constituyente en el Congreso de los Diputados, sino que se planteó hasta la fase del Senado, suscitando al respecto varias enmiendas²⁹³.

El precepto finalmente configurado en la DT 9ª de la CE, modeló los grupos de renovación atendiendo a la misma procedencia electiva de los mismos: ubicó en un grupo a los cuatro magistrados de designación senatorial, en otro a los cuatro de designación del Congreso y para efectos de renovación, colocó en un tercer grupo a los magistrados propuestos por el Gobierno y el CGPJ²⁹⁴.

De igual forma, la DT aludida dispuso el mecanismo para poner en marcha el sistema de renovación, estableciendo para ello una de las mejores técnicas objetivas e imparciales para justificar por qué debía cesar y renovarse primero un grupo sobre otro: el sorteo.

Se establecieron para ello dos sorteos. El primero debía celebrarse a los tres años de la primera elección de los magistrados del TC (1983), y el segundo cuando llegasen a los seis años, entre los grupos no afectados por el sorteo anterior (1986). De esta manera, los primeros doce magistrados no verían condicionado el periodo de su cargo desde un principio, sino que estarían sometidos todos por igual al acortamiento de su mandato al resultado de un medio fortuito.

La puesta en marcha de las renovaciones parciales todavía necesitaría de otras precisiones que vinieron igualmente por disposiciones transitorias de la LOTC, que previeron, entre otras cosas, el plazo de constitución del Tribunal una vez efectuados los primeros nombramientos²⁹⁵ y el plazo para la

²⁹³ Un estudio sobre ello en FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: "La problemática de Derecho transitorio de las dos primeras renovaciones parciales del Tribunal Constitucional", en ALZAGA VILLAAMIL, Óscar (dir.): *Comentarios a la Constitución española de 1978*, tomo XII, Madrid, Cortes Generales, Edersa, 1999, págs. 745-767.

²⁹⁴ Disposición transitoria novena de la CE, textualmente dispone que: "A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional, se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159".

²⁹⁵ Disposición transitoria primera de la LOTC, apartado 1: "Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley, el Congreso de los Diputados, el Senado,

realización de los sorteos. Respecto a esta última, la DT 3ª, apartado 1, dispuso que los sorteos deberían llevarse a cabo “dentro del cuarto mes anterior a la fecha en que se cumplen, respectivamente, los tres o los seis años de aquella otra en que se produjo la inicial designación de los Magistrados de Tribunal Constitucional”²⁹⁶.

Ninguna de las disposiciones transitorias fijó el órgano concreto que debía celebrar los referidos sorteos, sin embargo, se entendió que debía quedar en manos del Tribunal debido a que la LOTC faculta al Presidente, a instar a los órganos competentes a que inicien el procedimiento de designación, con una antelación de cuatro meses a que los cargos expiren (17.1 LOTC).

Los sorteos en efecto se llevaron a cabo en el tiempo marcado por la mencionada DT 3.1 de la LOTC, esto es, durante el cuarto mes anterior a la fecha en que se cumplieran los tres o seis años, de aquella donde se produjeron las designaciones iniciales. En el caso, si las designaciones inaugurales fueron publicadas en el BOE el 22 de febrero de 1980 (todas, menos las del CGPJ), el cuarto mes aludido iría del 22 de octubre al 22 de noviembre de 1982 y de 1985, respectivamente. El primer sorteo se llevó a cabo en el Pleno del Tribunal Constitucional el lunes 15 de noviembre de 1982, resultando afectado el grupo de renovación del Congreso²⁹⁷ y el segundo sorteo se celebró el miércoles 30 de octubre de 1985 y en esta ocasión afectó al grupo conformado por el CGPJ y el Gobierno.

el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial elevarán al Rey las propuestas de designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional. Este plazo se interrumpirá para las Cámaras por el tiempo correspondiente a los períodos intercesiones”. Apartado 2: “El Tribunal se constituirá dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación de los últimos nombramientos, si todas las propuestas se elevasen dentro del mismo período de sesiones. En otro caso se constituirá y comenzará a ejercer sus competencias, en los quince días siguientes, al término del período de sesiones dentro del que se hubiesen efectuado los ocho primeros nombramientos, cualquiera que sea la razón que motive la falta de nombramiento de la totalidad de los magistrados previstos en el artículo quinto de esta Ley”.

²⁹⁶ El precepto completo de la DT 3ª de la LOTC, apartado 1, es la siguiente: “Los sorteos a que se refiere la disposición transitoria novena de la Constitución se efectuarán dentro del cuarto mes anterior a la fecha en que se cumplen, respectivamente, los tres o los seis años de aquella otra en que se produjo la inicial designación de los Magistrados de Tribunal Constitucional”. Apartado 2: “No será aplicable la limitación establecida en el artículo 16.2 de esta Ley a los Magistrados del Tribunal que cesaran en sus cargos, en virtud de lo establecido en la disposición transitoria novena de la Constitución, a los tres años de su designación”.

²⁹⁷ Así recogido en la nota titulada, “Próxima renovación del tercio del Tribunal Constitucional elegido por el Congreso”, en *El País*, 17 de noviembre de 1982.

La regla de renovación parcial tiene en el modelo de designación una importancia significativa, sobre todo a raíz de los preceptos introducidos recientemente a la LOTC²⁹⁸, que han “reforzado” la cadencia de renovaciones parciales.

(i) El primer precepto trata de la cobertura de vacantes producidas por causas distintas a la expiración del mandato, es decir, nombramientos que no se hacen de forma grupal y sistemática, sino que son ocasionados por el fallecimiento, renuncia, incapacidad, incompatibilidad sobrevenida, entre otras previstas en el art. 23 de la LOTC. Estas vacantes, según el nuevo párrafo quinto del art. 16 de la LOTC, serán cubiertas “con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designación del Magistrado que hubiese causado vacante y por el tiempo que a éste restase”²⁹⁹.

Curiosamente este precepto estaba contemplado en la LOTC en su fase de proyecto como un tercer apartado al entonces artículo 17. La disposición fue aprobada por el Congreso y el Senado, pero extrañamente desapareció del dictamen que fue votado por el Pleno del Congreso, por lo que no figuró en el texto de la LOTC³⁰⁰.

En cualquier caso, la inserción de “nueva cuenta” de este precepto, no hizo más que recoger la práctica consolidada que en este sentido se venía verificando. En efecto, en todas las sustituciones individuales realizadas hasta 2013, el órgano que originalmente había sido el autor de la designación del magistrado era el que procedía a seleccionar igualmente a su sustituto, quien completaba el periodo de cargo del antecesor³⁰¹.

²⁹⁸ Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica Tribunal Constitucional.

²⁹⁹ Se trata de un precepto inspirado en el art. 12 de la *Ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel*: “Les membres du Conseil constitutionnel désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membre du Conseil constitutionnel s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de trois ans”. La regla, también puede verse en otras experiencias constitucionales, como es el caso de Chile (92 C).

³⁰⁰ Así lo recogen, entre otros, FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “Artículo 159”, *op. cit.*, págs. 108-109; ESPÍN TEMPLADO, Eduardo: “Artículo 17”, en REQUEJO PAGÉS, Juan Luis (coord.): *Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*, Madrid, TC, BOE, 2001, pág. 308.

³⁰¹ Así sucedió en el CGPJ con la sustitución de Plácido Fernández Viagas por Francisco Pera Verdager en 1982, la de Francisco Javier Delgado Barrio por Pablo García Manzano en 1996 y la de Enrique Ruiz Vadillo por Pablo Cachón Villar en 1998. En el mismo sentido, en el Congreso de los Diputados, se recuerda la temprana sustitución de Aurelio Menéndez y Menéndez por Antonio Truyol Serra en 1980, la de Manuel Díez de Velasco por Jesús Leguina Villa en 1986, la de Antonio Truyol Serra por José Gabaldón López en 1990, y en el Senado,

Como se puede observar, el precepto tiene la intención de circunscribir las sustituciones individuales a efecto de que no se vean alteradas las cadencias trienales de renovación. Un nota ciertamente discutible³⁰², y que a mi modo de ver, va en detrimento del dictado constitucional del disfrute de los nueve años del periodo de cargo que debieran tener los nuevos magistrados.

(ii) Un segundo caso introducido igualmente por la reciente reforma a la LOTC (LO 8/2010, de 4 de noviembre) fue una previsión de cara a un problema persistente en la designación de magistrados constitucionales cuando corresponden al Parlamento, como lo es la falta de designación en tiempo de los magistrados. Un problema sin duda grave, que ya se tendrá oportunidad de analizar más adelante, pero que desde ahora se puede decir que el legislador no ha resuelto con la mejor fortuna.

Se trata de otra norma que salvaguarda a ultranza la cadencia trienal de renovaciones, al punto que si la designación de magistrados llegara a retrasarse, “a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación”. Es decir, que sin importar las causas ni la cantidad de tiempo por las que se retrase el órgano proponente, las consecuencias sólo recaerán en quienes menos llevan la responsabilidad del problema, esto es, los magistrados recién elegidos.

Volviendo al análisis del modelo de renovación escalonado, debe decirse que el mismo parece haber tomado inspiración del art. 56 de la Constitución francesa de 1958, según la cual “*Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans*”. Frente a este sistema de renovación escalonado, la experiencia extranjera muestra la otra y mayoritaria forma de renovación de los tribunales constitucionales como lo es aquélla que atiende a la finalización individualizada del cargo, según sucede en Alemania, Italia y muchos otros³⁰³.

está la sustitución de Manuel García-Pelayo por Fernando García Mon González-Reguerual en 1986, la de José Luis de los Mozos y de los Mozos por José Gabaldón López en 1992, y la de Fernando Garrido Falla por Jorge Rodríguez-Zapata Pérez en 2002.

³⁰² Para LÓPEZ GUERRA, esta práctica perjudica la estabilidad del Tribunal, bien forzando a ceses prematuros, bien “al sometimiento del Magistrado a un nuevo proceso de designación por el órgano constitucional que le propuso en primer lugar, o, incluso como ya ha ocurrido, por otro órgano”. Véase LÓPEZ GUERRA, Luis: “Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 4, 1999, pág. 26.

³⁰³ Rusia, Ucrania, Serbia, República Checa, Polonia, Hungría, Portugal, Eslovaquia, Croacia, Bielorrusia, Georgia, Macedonia, Perú, Costa Rica, Bolivia, Honduras, entre otros.

La renovación del Tribunal por parcialidades, aunque no es la opción más frecuentada, tampoco quiere decir que el modelo español se encuentre solo en ese terreno (el de Bulgaria es similar), si bien las variedades que se pueden encontrar son amplias. Por ejemplo, está la renovación de tres magistrados cada tres años (Rumania, Lituania, Albania, Ecuador), dos magistrados cada tres años (Chile), dos magistrados cada dos años (Panamá), uno cada dos años (Andorra), uno cada año (Liechtenstein), entre otras³⁰⁴.

Cuestión distinta es observar cómo se articulan los grupos de renovación, pues mientras en España la base es hacerla por series completas de cada órgano (Congreso; CGPJ y Gobierno; Senado), en Francia los tercios de renovación tienen una proveniencia electiva diversa, esto es, los tres órganos proponentes concurren a la confección de cada terna de renovación proponiendo un candidato cada uno. Con ello, cada órgano proponente limita su participación a la presentación de un solo candidato, complicando en ocasiones que los grupos políticos puedan incluir o negociar con la oposición y las minorías. Con esta perspectiva, desde la doctrina francesa se ha llegado a predicar el acierto del modelo español de prever grupos de renovación para cada órgano proponente, otorgando a las fuerzas políticas mayores márgenes de articulación de las candidaturas³⁰⁵.

En un sentido similar, desde la doctrina italiana, se reconoce al modelo español la ventaja de favorecer cierta regularidad en las designaciones, debido a que los Grupos parlamentarios ven su participación materializada en el mismo ciclo de renovación. Con ello, se evita una práctica muy generalizada en Italia, en el cual la renovación de los jueces es individualizada, y por tanto, cuando una plaza queda vacante, la mantienen así hasta que concurra otra, de modo que las fuerzas políticas puedan repartirse en el acto (y con toda seguridad), un magistrado cada una³⁰⁶.

³⁰⁴ En República Dominicana se renuevan cada tres años, organizando tres grupos de renovación (dos de cuatro integrantes y uno de cinco). En México existe una renovación escalonada que ha sido operada mediante una disposición transitoria de una reforma constitucional en 1994. Se dispuso la terminación del cargo de dos ministros el último día de noviembre de los años 2003, 2006, 2009 y 2012, y tres ministros para noviembre de 2015, echando a andar con ello, la cadencia de renovaciones parciales. Véase el *Diario Oficial de la Federación*, sección primera, de 31 de diciembre de 1994.

³⁰⁵ BON, Pierre: "Le Conseil Constitutionnel français et le modèle des Cours Constitutionnelles européennes", en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 32, 1991, pág. 66.

³⁰⁶ PIZZORUSSO, Alessandro: *La Costituzione. I valori da conservare, le regole da cambiare*, Torino, Einaudi, 1996, págs. 141-142; STAIANO, Sandro: "Intervención en seminario", en

Ya en el terreno doctrinario español, el modelo de renovación escalonada también se ha entendido como una medida para evitar que la composición del TC propenda a irradiar de manera excesiva “la mayoría parlamentaria existente en un momento dado, permitiendo sin embargo un progresivo reflejo de las nuevas mayorías que puedan surgir posteriormente”³⁰⁷ o un “cierto ajuste a los cambios políticos, que no debe faltar en una democracia”³⁰⁸. Se ha valorado como una fórmula correcta³⁰⁹, que evita cambios bruscos en la composición del Tribunal³¹⁰, permitiendo una continuidad en la jurisprudencia³¹¹, un progresivo “*aggiornamento*” del mismo³¹², estableciendo una dinámica de acoplamiento didáctico del íntimo funcionamiento de la institución entre la nueva y anterior promoción de magistrados.

Más recientemente y con motivo de los efectos que se están produciendo por la mala práctica que se ha ido observando en las designaciones parlamentarias de magistrados, la renovación trienal escalonada está siendo objeto de varias críticas. Más adelante se profundizará en la materia.

3.3.3.- La prohibición de reelección inmediata y su excepción

La prohibición de la reelección inmediata de magistrados del TC en España es un rasgo que no se encuentra establecido directamente en la Constitución sino que ha sido abordado expresamente en la LOTC. Pese a que la Constitución no haya recogido nada al respecto, el tema de la reelección de los magistrados estuvo presente en los debates constituyentes. Incluso, se ha

ROMBOLI, Roberto; ROSSI, Emanuele; TARCHI, Rolando: *La Corte costituzionale nei lavori della Commissione bicamerale, Atti del Seminario di Pisa del 26 settembre 1997*, Torino, G. Giappichelli, 1998, pág. 23.

³⁰⁷ ESPÍN TEMPLADO, Eduardo: “Artículo 16”, *op. cit.*, pág. 299.

³⁰⁸ LATORRE SEGURA, Ángel: “El tribunal constitucional (Derecho y Política)”, en *Anuario de la Facultad de Derecho* (Universidad de Alcalá), núm. 1, 1991-1992, pág. 308.

³⁰⁹ LOZANO MIRALLES, Jorge; SACCOMANNO, Albino: *El Tribunal Constitucional. Composición y principios jurídico-organizativos (el aspecto funcional)*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, pág. 191.

³¹⁰ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “Artículo 159”, *op. cit.*, pág. 112.

³¹¹ ÁLVAREZ CONDE, Enrique; TUR AUSINA, Rosario: *Derecho Constitucional*, *op. cit.*, pág. 701.

³¹² ALMAGRO NOSETE, José: *Justicia Constitucional (Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)*, 2ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 1989, pág. 107.

llegado a plantear que el silencio constitucional quizá haya sido una medida para superar el desencuentro de posturas que sobre este punto se tuvieron³¹³.

En efecto, en la fase del Congreso, la enmienda número 697 del Grupo parlamentario comunista proponía la no reelección de los magistrados como medida de imparcialidad para el Tribunal. En el Senado, la enmienda número 963 del senador centrista Luis Angulo Montes plantearía la reelección indefinida al no estimar “razón alguna por la que tuviesen que ser irreelegibles”. Por su parte, la enmienda número 640 de la Agrupación Independiente, se decantaría por impedir la reelección inmediata, debido a la propia función de hermenéutica constitucional, mediante la cual se va adaptando la normativa constitucional “a las exigencias históricas”, lo que difícilmente podría ser satisfecho “por un Tribunal cuyos componentes pudieran perpetuarse en el cargo”. Finalmente la enmienda número 641 suscrita también por la Agrupación Independiente, propugnaba por otra modalidad: la de permitir la reelección por una vez consecutiva.

Al final, se puede decir que hasta la elaboración de la LOTC la opción que se tomó en cuenta fue la planteada en su momento por la aludida enmienda número 640, por la que se prohibía la reelección de forma inmediata. De este modo, el art. 16.4 de la LOTC, establece al efecto que “ningún Magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro periodo inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años”.

Esta opción vendría redactada en los mismos términos desde el Proyecto de LOTC (art. 17.2, inciso segundo), y en su tramitación sería objeto de dos enmiendas que pretendían su eliminación. La número 166 del Grupo de la minoría catalana por considerarla una limitación al texto constitucional, y la enmienda número 216 del Grupo parlamentario de UCD, al entender que la “independencia de los Magistrados se garantiza mejor cuanto más permanente se haga su condición, como demuestra el ejemplo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos”. Las enmiendas no prosperaron y ya no hubo discusión en esta materia en la tramitación posterior de la Ley³¹⁴.

³¹³ Véase FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “Artículo 159”, *op. cit.*, pág. 113; LOZANO MIRALLES, Jorge; SACCOMANNO, Albino: *El Tribunal Constitucional. Composición y principios...*, *op. cit.*, págs. 191-192.

³¹⁴ La Ponencia no aceptaría tales enmiendas y en el Pleno extraordinario del Congreso del día 23 de julio de 1979 dedicado a aprobar el dictamen de la Comisión Constitucional sobre el

La interdicción de la reelección inmediata suscita algunas observaciones. En primer término, considérese que el objeto de esta disposición es reforzar las garantías de independencia del magistrado. Se entiende que ello es así, por las razones que ya se anunciaban para la elevación del periodo de cargo, es decir, como una forma de evitar “la tentación de tratar de agradar con su actuación al órgano que propuso su nombre, con la esperanza de poder renovar en el cargo”³¹⁵. La deferencia que pretende evitarse, resulta predicable no sólo al órgano proponente, sino al grupo político que designó al magistrado o a cualquier otro.

Otra consideración que debe hacerse, es la que ya apuntaba Fernández Segado, en el sentido de señalar que la irrelección inmediata se proyecta sobre el magistrado, es decir, se trata de una prohibición subjetiva, por lo que a efectos de esta materia, resulta irrelevante que la reelección “pudiera provenir de un órgano diferente de aquél que inicialmente propuso al referido Magistrado”³¹⁶.

En el terreno de la irrelección inmediata de magistrados puede suscitarse un problema interpretativo. Como se recordará, la prohibición está contemplada para el periodo inmediato del cese. El dilema en este sentido, es determinar si el “periodo inmediato” se refiere a los primeros tres años en que parcialmente se renueva el TC o si habría que esperar a que pasaran nueve años, que es el periodo ordinario de cargo del magistrado.

En la doctrina se pueden encontrar opiniones en uno y otro sentido, siendo las dos sostenidas con razones muy atendibles. Por ejemplo, para unos el “periodo inmediato” se refiere al mandato del magistrado y no al periodo de renovación parcial. Se sostiene que debe tratarse de un periodo de nueve años, porque de lo contrario, delimitar el periodo no reelegible a tres, pudiera burlar el objetivo que se persigue de evitar las deferencias del magistrado con los órganos selectores³¹⁷.

Proyecto de LOTC no hubo discusión sobre este tema (se aprobó casi por unanimidad, con 276 votos a favor y dos abstenciones). Véase, respectivamente, págs. 129. y 245, en SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, (ed.): *Tribunal Constitucional, Trabajos parlamentarios*, Madrid, Cortes Generales, 1980.

³¹⁵ ESPÍN TEMPLADO, Eduardo: “Artículo 16”, *op. cit.*, pág. 300.

³¹⁶ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “Artículo 159”, *op. cit.*, págs. 117-118.

³¹⁷ LOZANO MIRALLES, Jorge; SACCOMANNO, Albino: *El Tribunal Constitucional. Composición y principios...*, *op. cit.*, págs. 191-192.

¿Y si el magistrado cesante ha permanecido en el cargo, por ejemplo, poco más de tres años cubriendo el periodo de su antecesor, también deberá esperar nueve para aspirar a una reelección? Es aquí donde puede cobrar fuerza la otra postura de vincular el “periodo inmediato” a los trienios de renovación, debido a que representaría una figura más acorde a la “naturaleza personal” que se había dicho de la prohibición inmediata de la reelección. En estos casos, la opción de esperar a los nueve años constitucionalmente previstos para la duración del cargo de magistrado se encontraría en los hechos más cercana a una prohibición dirigida a los órganos proponentes, que según se vio, no es la procedente³¹⁸.

Otra perspectiva que puede abonar a esta postura, es la consideración de que la prohibición de la reelección inmediata del cargo está dirigida para quien tiene en los “momentos electivos” la calidad exclusiva de magistrado cesante. La “inmediatez” de la reelección, sólo puede estar referida en línea de continuidad a la subsiguiente oportunidad de volver a ser elegido en el cargo, siempre que en el momento se trate de un magistrado cuyo cargo está expirando. En otras palabras, si un magistrado ha agotado su periodo ordinario de nueve años, no puede ser reelegido en el momento electoral de su cese porque lo prohíbe la LOTC, pero al siguiente momento, esto es a los tres años después, podrá ser reelegido porque la prohibida inmediatez y continuidad del cargo se habrán perdido.

Tratando ahora el tema de la excepción de la regla de la no reelección inmediata (16.4 LOTC), debe decirse que esta se limita al caso de aquél magistrado que haya ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años. Este supuesto es posible porque los magistrados nombrados para cubrir cargos finalizados por causas distintas a la terminación ordinaria del cargo, se nombran solamente para completar el periodo de mandato que no pudo o no quiso desempeñar el magistrado inicialmente designado. Si dicho periodo no fuese superior a los tres años, el magistrado podría ser reelegido para el periodo inmediato y desempeñar los nueve años de mandato para el que son seleccionados los magistrados constitucionales.

³¹⁸ Así lo sostiene, con razón, FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “Artículo 159”, *op. cit.*, pág. 118. También se decanta por entender el periodo inmediato de irrelección el primer trienio de renovación, GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José: *El Tribunal Constitucional*, *op. cit.*, pág. 79.

En este caso, el magistrado constitucional podría acumular un periodo de cargo de hasta doce años si a los nueve años ordinarios se suman los anteriores tres en los que completó el periodo de su antecesor. Por otro lado, podría suceder también que el magistrado constitucional permaneciera en el cargo sólo por el tiempo que restaba por cubrir al anterior y que éste tiempo fuera ligeramente superior a los tres años, en este caso, no tendría la posibilidad de ser reelecto y su periodo de mandato resultaría muy limitado, al menos podría quedar entre poco más de tres años y los seis.

Los dos supuestos reseñados plantean una potencial desproporción en los periodos de mandato, al permitir a unos el disfrute de doce años y a otros entre cuatro y seis, lo cual no parece respetar aquella aspiración consistente en el tratamiento igualitario de los periodos de mandato de los magistrados constitucionales³¹⁹.

Por otra parte, no debe perderse de vista la delicada situación personal en la que se coloca al magistrado que puede ser reelegido³²⁰. Primero, porque desde el ejercicio del cargo le tocará observar su procedimiento de reelección, y, segundo, porque su labor puede ser en alguna medida objeto de cierto condicionamiento por parte de los grupos políticos que negocian si será o no “confirmado”. Si finalmente la renovación no llega, el ejercicio del cargo sumará poco menos de tres años, lo cual no resulta idóneo ni funcional con el estatuto de la magistratura constitucional. Quizá por ello, se ha llegado a proponer, que en estos supuestos la reelección no sea facultativa del órgano proponente, sino automática³²¹.

3.4.- Los órganos competentes de la designación

3.4.1.- El Consejo General del Poder Judicial

³¹⁹ Situación advertida críticamente por la doctrina. Véase RUBIO LLORENTE, Francisco: “El Tribunal Constitucional”, en *La forma del poder. Estudios sobre la Constitución*, 3ª ed., vol. III, Madrid, CEPC, 2012, págs. 1398-1399.

³²⁰ GABALDÓN LÓPEZ, que estuvo inmerso en un caso del género ha llamado la atención sobre ello. En efecto, al estudiar esta situación, ha expresado que el debate sobre la prórroga del magistrado “tendrá lugar mientras ejerce en el Tribunal, con lo cual su situación personal puede hacerse compleja y, por supuesto, de gran incomodidad personal”, GABALDÓN LÓPEZ, José: “Artículo 159”, *op. cit.*, pág. 2660.

³²¹ CRUZ VILLALÓN, Pedro: “Acotaciones al Proyecto de reforma de la justicia constitucional”, en ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, *et al.*: *La reforma de la justicia constitucional*, Navarra, Thomson-Aranzadi, Centro de Estudios Jurídicos, 2006, pág. 70.

El art. 159.1 de la CE establece que dos magistrados del Tribunal Constitucional serán designados por el Consejo General del Poder Judicial. La opción de introducir al Consejo sería resultado de la intención de los constituyentes de articular un modelo selectivo mediante el cual se consagrara la participación de los tres tradicionales poderes del Estado.

La intervención del poder judicial no tenía desde luego el exclusivo propósito de conseguir un cierto equilibrio institucional entre los órganos llamados a designar a los magistrados, sino que subyacía además la imperiosa necesidad de que este poder se implicara o influyera de alguna manera en el órgano que se estaba formando, debido al carácter jurisdiccional de sus cometidos institucionales.

En este sentido, el marco de referencia que tuvo el constituyente español ofrecía dos modalidades de participación judicial: a través de la designación directa de un número de magistrados a cargo de un órgano del poder judicial (al estilo de los cinco magistrados que designan las supremas magistraturas italianas), o de una forma indirecta, es decir, ya no como órgano elector, sino fijando un número de plazas para magistrados del poder judicial (como las tres plazas en cada una de las dos Salas del TCF alemán).

En esos términos, se puede decir que el constituyente de 1978 de alguna manera se decantó por las dos modalidades. Por un lado, fijó entre las profesiones de acceso a la magistratura constitucional el cargo de Magistrado (aunque por supuesto, que lo incluya no implica obligatoriedad para elegirlos) y por otro, concedió el poder de designación de dos magistrados constitucionales al Consejo General del Poder Judicial, órgano novedosamente creado en la propia Constitución, que lo definía como el “órgano de gobierno” del poder judicial.

Conviene poner de relieve que, a diferencia de otras experiencias constitucionales donde han introducido como órgano elector a los tribunales supremos u órganos vértice del poder judicial, en España se ha tratado solamente del “órgano de gobierno”. Con ello, se quiere puntualizar que no se puede atribuir al Consejo, la idea de “órgano cumbre” de este poder, ni siquiera cierta categoría de “representante” del poder judicial.

Este criterio ha sido sostenido por el TC, quien ha desautorizado a sostener al CGPJ alguna representación procesal del poder judicial. Al

respecto, la STC 45/1986, FJ 5 menciona que “al configurarse constitucionalmente como su ‘órgano de gobierno’, no podría ser, ni siquiera a efectos procesales, ‘representante’ del poder judicial, pues ello estaría en contradicción con el principio constitucional de independencia de Jueces y Magistrados”.

Ahora bien, con respecto al significado que debe atribuirse a la calificación de “órgano de gobierno del poder judicial” que constitucionalmente se le asigna (122.2 CE), el TC ha rechazado que deba entenderse como “autogobierno” del poder judicial, pues tal facultad no se reconoce en la Constitución, ni se deriva lógicamente de su existencia, composición y funciones (STC 108/1986, FJ 8)³²².

Volviendo a la inclusión del CGPJ en el sistema selectivo de magistrados del TC, puede decirse que no parece que en esta confección haya jugado un papel muy relevante el precedente del Tribunal de Garantías Constitucionales, a menos que se haya visto en él, como se ha llegado a decir, “un ejemplo de lo que no debía hacerse”³²³. Y es que como se recordará, el modelo de designación del Tribunal no asignó a ningún órgano del poder judicial el poder de selección de vocales, ni estableció entre el electorado pasivo a los jueces. Incluso, considérese que solo se exigió la licenciatura en

³²² Aclaran de igual forma, la negativa a entenderlo como el “autogobierno”, entre otros, PÉREZ ROYO, Javier: *Curso de Derecho Constitucional*, 9ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2003, pág. 925; TEROL BECERRA, Manuel José: *El Consejo General del Poder Judicial*, Madrid, CEC, 1990, pág. 154.

³²³ En general, la doctrina ha desaconsejado el modelo de composición y designación del TGC. Por mencionar algunos, está LOZANO MIRALLES, Jorge; SACCOMANNO, Albino: *El Tribunal Constitucional. Composición y principios...*, op. cit., pág. 31; PÉREZ ROYO, Javier: *Curso de Derecho Constitucional*, op. cit., pág. 944; VALENCIA MARTÍN, Germán: “Artículo 5”, en REQUEJO PAGÉS, Juan Luis (coord.): *Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*, Madrid, TC, BOE, 2001, págs. 146-147. Con ese modelo, el Tribunal se “convertía en un órgano, tanto por su origen como por su integración, preponderantemente político”. Véase CRUZ VILLALÓN, Pedro: *La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939)*, Madrid, CEPC, 1987, pág. 317; GONZÁLEZ-DELEITO DOMINGO, Nicolás: *Tribunales Constitucionales. Organización y funcionamiento*. Madrid, Tecnos, 1980, pág. 31. Algunos trabajos más especializados que estudian la integración del Tribunal: FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República Española. La problemática de su composición y del Estatuto Jurídico de sus miembros”, en *La Justicia Constitucional: una visión de Derecho Comparado*, tomo III, La Justicia Constitucional en América Latina y en España, Madrid, Dykinson, 2009, págs. 545-610; ESPÍN TEMPLADO, Eduardo: “Crisis de Gobierno y confianza presidencial en la II República”, en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 17, 1980, págs. 104 y ss.; RUIZ LAPEÑA, Rosa María: *El Tribunal de Garantías Constitucionales en la II República española*, Barcelona, Bosch, 1982; RUBIO LLORENTE, Francisco: “Del Tribunal de Garantías al Tribunal Constitucional”, en *Revista de Derecho Político*, núm. 16, 1982-1983, págs. 27-37; BASSOLS COMA, Martín: *El Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República*, Madrid, CEPC, BOE, 2010, págs. 27-28.

Derecho a los vocales profesores designados por las Facultades de Derecho (cuatro) y a los vocales elegidos por los Colegios de Abogados (dos), es decir a seis de veinticinco miembros del Tribunal.

La opción de incluir tanto el electorado activo como pasivo al poder judicial bajo las modalidades apuntadas, ya estaba definida desde el Anteproyecto de Constitución, en su artículo 150.1³²⁴, e incluso no causó problemas su inclusión en los trabajos de la Ponencia redactora del mismo³²⁵, por más que en la posterior publicación del Anteproyecto, el Grupo comunista haya formulado voto particular para mantener como órganos proponentes exclusivamente a las Cámaras³²⁶.

Ocho enmiendas que no serían admitidas se presentaron en el trámite legislativo (cinco en el Congreso y tres en el Senado³²⁷) respecto a la intervención del CGPJ en la designación de magistrados. La mayoría se decantaría no solamente por mantener la presencia del CGPJ sino por elevar el

³²⁴ Art. 150.1: “El Tribunal Constitucional se compone de once miembros nombrados por el Rey, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, tres a propuesta del Senado por idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”. Véase *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 44, 5 de enero de 1978, pág. 696.

³²⁵ Así se puede observar de la lectura del punto tercero de la minuta de la Ponencia de Constitución de la reunión del día 10 de noviembre de 1977, en la cual se asienta lo siguiente: “Se trata a continuación a analizar la materia referente a Garantías Constitucionales, y cada grupo expone el contenido de su documento; se acuerda irlos analizando conjuntamente. Se acuerda igualmente tratar en primer lugar la materia referente a la composición del Tribunal de Garantías y se aprueba un apartado 1º que figura con el número 130 que establece el número de once miembros. Se debate a continuación las condiciones que han de reunir los miembros de dicho Tribunal, y se aprueba un texto sobre la base del apartado 2º del artículo 1º de UCD que figura como apartado 2º de dicho artículo. Se considera a continuación el periodo de mandato de los miembros del Tribunal y se aprueba un apartado 3º, sobre la base del apartado 5º del artículo 1º del texto de UCD. También se aprueba un apartado 4º que se refiere a las incompatibilidades sobre la base del artículo 1º del documento del citado grupo, así como también un artículo 131 que se refiere al nombramiento del Presidente de dicho Tribunal, sobre la base del artículo 2º del documento de UCD”. El texto articulado quedaba como sigue: “Artículo 130.1 Los miembros del Tribunal de Garantías serán nombrados por el Rey. 2. A propuesta del Gobierno. 4. A propuesta del Congreso. 3. A propuesta del Senado. 2. A propuesta del Consejo General del Poder Judicial”. Véanse “Las Actas de la Ponencia Constitucional”, en *Revista de las Cortes Generales*, núm. 2, 1984, págs. 319 y 321.

³²⁶ “Se propone la redacción alternativa siguiente: 1. El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros elegidos por mitad por ambas Cámaras por mayoría de tres quintos de sus miembros”. Véase, *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 44, 5 de enero de 1978, pág. 707.

³²⁷ La lista de enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados al Anteproyecto de Constitución y en el Senado al Proyecto de Constitución, están disponibles en un apartado especial dedicado a la “Elaboración y aprobación de la Constitución Española de 1978”, en el portal de Internet del Congreso de los Diputados, en www.congreso.es/consti/constitucion/elaboracion/.

número de magistrados que podía elegir, aunque había otras que planteaban su eliminación.

Entre las que mantenían al CGPJ, se proponía facultar a este para elegir cuatro, cinco y hasta seis plazas de magistrado, con la justificación común de dotar al Tribunal de mayores dosis de independencia³²⁸. Estas enmiendas además, se moverían en un marco más general que proponía la modificación del modelo de composición y la alteración de los órganos de designación de los magistrados que se venían planteando³²⁹. Por otra parte, entre las tres enmiendas que pretendían la eliminación del CGPJ, en todas se proponía dejar solamente la elección por mitades entre el Congreso y Senado, si bien en un par de ellas, se agregaba a la integración del Tribunal un representante por cada uno de los territorios³³⁰.

La introducción del CGPJ para designar a dos magistrados del TC, como se sabe, se mantendría hasta el Texto Constitucional promulgado y no ha sido modificado hasta el momento, 35 años después.

Observando ahora la estructura que la Constitución daría al CGPJ, repárese en que el artículo 122.3 de la CE, dispuso que estaría integrado “por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años”.

En este mismo terreno de la integración del Consejo, la Constitución previó además que de los veinte miembros, ocho debían ser propuestos y

³²⁸ También, por parte de la Agrupación Independiente del Senado, se llegó a plantear que la mayor intervención del CGPJ podía ser un medio útil para evitar los posibles conflictos entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Véase OLLERO, Carlos: *Derecho y teoría política en el proceso constituyente español*, Madrid, CEC, 1986, págs. 147 y 193.

³²⁹ Enmienda 63 en el Congreso de Gonzalo Fernández de la Mora (AP), que eliminaba al Gobierno pasándole los dos al CGPJ. En el mismo sentido la enmienda 92 en el Senado de los “Progresistas y Socialistas Independientes”, fijando adicionalmente la mayoría de tres quintos para las designaciones del CGPJ. La enmienda 189 en el Senado de Antonio Pedrol Rius elimina a las Cámaras y fija seis al CGPJ, dos a las Universidades, dos a los Colegios de Abogados y dos a las CC. AA. La enmienda 639 en el Senado del Grupo parlamentario “Agrupación Independiente”, deja cinco al CGPJ, cinco a las Cortes en sesión conjunta, y cinco al Rey para que elija de una lista de quince personas, conformada con la propuesta de cinco candidatos del CGPJ, cinco del Gobierno y cinco de las Cortes. La enmienda 576 presentada en el Congreso por el Grupo parlamentario mixto sólo modificaba el nombre del Consejo armonizándolo con el que venía planteando, como lo era el “Consejo General de la Justicia”.

³³⁰ Se trataba de las enmiendas 64, 682 y 697, presentadas en el Congreso por Francisco Letamendia Belzunce del Grupo parlamentario mixto, el Grupo parlamentario vasco y el Grupo parlamentario comunista, respectivamente, que planteaban un TC de doce miembros elegidos por mitad por ambas cámaras. La 64 y 682 incluían por su lado, la inclusión de un miembro más por cada uno de los “territorios autónomos” (enmienda 64) y “regiones españolas” (enmiendas 64 y 682).

elegidos por el Parlamento, correspondiendo cuatro al Congreso de los Diputados y cuatro al Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión (122.3 CE).

En cambio, sobre los restantes doce integrantes, estableció que debían ser elegidos “entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales”, pero no indicó mayores detalles del procedimiento para designarlos, sino que los remitió a una Ley Orgánica. La utilización de esta vía ha merecido que la forma de elección de los vocales de extracción judicial sea modificada en varias ocasiones, siguiendo modelos que han sido más o menos polémicos.

La remisión constitucional a la LO, naturalmente no se limitó al desarrollo de la integración del CGPJ, sino que se trasladó a más aspectos del poder judicial. Concretamente, la Constitución dejó para la LO la tarea de determinar “la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales”, así como el estatuto jurídico, el régimen de incompatibilidades y funciones de los Jueces y Magistrados de carrera, del personal al servicio de la Administración de Justicia y del propio Consejo General del Poder Judicial (122.2 CE).

Sin embargo, luego de la entrada en vigor de la Constitución, se consideró que la elaboración de forma inmediata de la LOPJ que viniera a cumplir con las mencionadas disposiciones constitucionales, constituiría una tarea que por su envergadura e importancia, difícilmente podría realizarse con las necesarias garantías de acierto. Aunado a ello, y dada la necesidad de activar el funcionamiento del TC, para el que el artículo 159.1 de la CE asignaba al CGPJ la designación de dos de sus miembros, se optó por adelantar sólo la regulación del Consejo a través de una LO cuyo articulado se incorporaría posteriormente, “en su contenido y sistemática al texto completo de la futura Ley Orgánica del Poder Judicial”³³¹. Fue así que se aprobó la inicial Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial (LOCGPJ).

³³¹ Disposición final tercera de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial. Los trabajos parlamentarios de la misma están en la edición preparada por SAINZ MORENO, Fernando (ed.): *Consejo General del Poder Judicial: trabajos parlamentarios*, Madrid, Cortes Generales, Servicio de Estudios y Publicaciones, 1980.

Esta ley, siguió las bases constitucionales fijadas para la integración del CGPJ, detallando por ejemplo, la calidad de “vocales” a los miembros del Consejo (art. 7) y como ya se avanzaba párrafos arriba, fijando el procedimiento para designar a los doce vocales de extracción judicial, para la cual se optó por un modelo de elección, mediante el voto directo de los Jueces y Magistrados en servicio activo (arts. 7, 8, 12-21). Cinco años después, llegaría la normativa “definitiva” que derogaría la inicial LOCGPJ, mediante la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial³³².

Dejando hasta aquí esta somera referencia al Consejo, pues rebasa los objetivos de este trabajo un estudio más completo del mismo, se puede decir que, tratándose de la participación del CGPJ en la designación de magistrados constitucionales, generalmente la doctrina se ha expresado de forma positiva, incluso no ha faltado alguna voz que se pronuncie a favor de que todos los magistrados sean designados por esta institución³³³.

3.4.2.- El Gobierno

Otro de los órganos previstos en el art. 159.1 de la CE para designar a los integrantes del Tribunal Constitucional es el Gobierno, a quien se le ha conferido la competencia para designar a dos magistrados. Si se atiende a las experiencias constitucionales sobre las que el constituyente tuvo su marco comparativo, se puede observar que la introducción del Gobierno como tal, no era un rasgo frecuentado.

Ello no hace que la solución adoptada por el modelo español pueda verse como un elemento extraño o disfuncional a los sistemas de designación de magistrados, sino que constituye un rasgo novedoso que lo singulariza del resto. Paradójicamente esta “singularidad” sí que es un rasgo común de los modelos selectivos, puesto que cada legislador constituyente imprime a su respectivo modelo la “marca propia” del contexto político del país, por más que se puedan compartir “directrices maestras”.

³³² Un estudio pormenorizado de la misma, VACAS GARCÍA-ALÓS, Luis; MARTÍN MARTÍN, Gervasio: “Comentarios a la Ley Orgánica del Poder Judicial”, 2 vols., Navarra, Aranzadi, 2008.

³³³ Véase la nota de BELDA CALVO, Pedro Javier: “Designación de los miembros del Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial. Derecho comparado con referencia al actual modelo rumano”, en *Diario La Ley*, núm. 7850, sección tribuna, 3 de mayo de 2012.

En esta línea, puede afirmarse que la intervención de los diversos poderes del Estado en la conformación de los tribunales constitucionales, y en concreto la participación del poder ejecutivo se ha planteado de forma muy diversa y a través de órganos que son difícilmente asimilables de una experiencia a otra. Un buen ejemplo de ello, es la diversa manifestación que se ha impreso para dar cierto cauce de participación a un poder ejecutivo entendido en un sentido más amplio, como puede ser la intervención de los Presidentes de la República, configurados como se sabe de forma diversa en Italia, Francia o Austria.

En este sentido, la opción española se presenta como una modalidad más que da cauce de participación al poder ejecutivo a través del Gobierno. El Gobierno, es el órgano que ejerce “la función ejecutiva y la potestad reglamentaria”, “dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado” (97 CE).

La inclusión del Gobierno entre los órganos designantes de magistrados es una opción original del constituyente de 1978, pues en el precedente histórico del Tribunal de Garantías Constitucionales no estaba previsto el Gobierno como órgano elector. La inclusión del Gobierno no solamente ha sido una idea como ya se decía original, sino que además fue lo suficientemente respaldada desde los primeros trabajos constituyentes, aunque a lo largo de la tramitación ciertamente sería un tema que no pasaría desapercibido.

En efecto, el Gobierno ya estaba contemplado desde el artículo 150.1 del Anteproyecto de Constitución³³⁴, e incluso no surgieron dificultades para su aprobación en la propia Ponencia redactora del mismo³³⁵. Sin embargo, recuérdese que el Grupo comunista formuló un voto particular al Anteproyecto, manteniendo como únicos órganos proponentes a las Cámaras³³⁶, y luego en el resto de la tramitación, considérese que de las ocho enmiendas que afectaban al Gobierno, siete se decantaban por su eliminación y solamente una lo mantenía, aunque reduciéndole el poder de designación a un único magistrado.

³³⁴ *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 44, 5 de enero de 1978, pág. 696.

³³⁵ Véanse “Las Actas de la Ponencia Constitucional”, en *Revista de las Cortes Generales*, núm. 2, 1984, págs. 319 y 321.

³³⁶ *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 44, 5 de enero de 1978, pág. 707.

Entre las enmiendas que pretendían su eliminación se pueden detectar dos órdenes de motivaciones. En unas, parecía subyacer la intención de favorecer un predominante influjo de los territorios, y entre otras, la idea básica es dotar de mayor independencia al TC. Así las cosas, las primeras mantenían a las Cámaras parlamentarias como órganos designantes, habilitando a cada uno de los territorios para que nombrasen a un magistrado “representante”³³⁷. Por su parte, en las segundas, no sólo se excluía al Gobierno sino que se diseñaba completamente otro modelo selectivo, considerando nuevos órganos proponentes, y todo ello con el fin de asegurar la independencia de los miembros del TC.

En cuanto éstas últimas, dos enmiendas excluían al Gobierno y transferían la elección de sus dos plazas al CGPJ, por la “necesidad de asegurar la independencia de los miembros del Tribunal Constitucional”³³⁸ y porque el Gobierno podría ser “episódico y partidista”³³⁹. Otras dos enmiendas también lo descartaban, proponiendo nuevos modelos de designación donde matizaban la intervención de las Cámaras parlamentarias, mostrando mayor confianza por las designaciones del CGPJ y de otros órganos, con la finalidad de “independizarlo en el origen de la designación de los miembros de los poderes sobre los que va a realizarse el arbitraje”³⁴⁰ y para garantizar en “mayor medida el principio de independencia”³⁴¹.

Como se puede ver, la idea que late en este tipo de enmiendas es cierta desconfianza hacia el Gobierno, por el eminente carácter político del órgano, y el riesgo de que pudiera imprimir en sus designaciones tal criterio. Este temor, ciertamente no carece de algunas bases, pues el Gobierno se traduce en la opción del partido que se ha hecho con la mayoría en las elecciones, y que en

³³⁷ Enmienda 64: “El tribunal constitucional estará compuesto de doce miembros, elegidos por mitad por ambas Cámaras por mayoría de tres quintos de sus miembros, y un miembro más por cada uno de los territorios autónomos, el cual tendrá carácter de representante de estos, siendo elegidos estos últimos en la forma que determinara la Ley” (presentada en el Congreso por Francisco Letamendia Belzunce, del Grupo parlamentario mixto). Enmienda 682: 1. El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el Rey y elegidos por mitad por ambas Cámaras por mayoría de tres quintos de sus miembros y de un representante por cada uno de los territorios autónomos y regiones españolas, elegidos en la misma forma que determine la ley” (presentada en el Congreso por el Grupo parlamentario vasco).

³³⁸ Enmienda 92, presentada en el Senado por los “Progresistas y Socialistas Independientes”.

³³⁹ Enmienda 63, presentada en el Congreso de los Diputados por Gonzalo Fernández de la Mora, del Grupo parlamentario de Alianza Popular.

³⁴⁰ Enmienda 189, presentada en el Senado a título personal y con conocimiento del Grupo parlamentario mixto, por Antonio Pedrol Rius.

³⁴¹ Enmienda 639, presentada en el trámite del Senado, por la “Agrupación Independiente”.

el ejercicio de las funciones marcará la muy estratégica dirección política del país (97, 98 CE).

Estas consideraciones planteadas desde la sede constituyente, finalmente no conseguirían modificar la intervención del Gobierno en la designación de dos magistrados, sin embargo este tipo de posturas vuelven a relucir cuando se debaten, en la doctrina y en otras sedes, los peligros de la politización de los nombramientos en el TC.

Y es que como se verá, la designación es directa, se residencia en el propio Gobierno y, por su propio funcionamiento, no necesita la negociación con fuerzas políticas externas. Las designaciones del Gobierno son vistas, pues, como las designaciones del partido mayoritario o, más precisamente, de los dirigentes del mismo.

Conviene mencionar un aspecto de detalle que suele suscitarse frecuentemente en la doctrina acerca del Gobierno, pero que no ha planteado mayores problemas. Sucede que el artículo 159.1 de la CE atribuye literalmente el nombramiento de los dos magistrados al Gobierno, sin esclarecer nada sobre si la propuesta deba ser materialmente ejecutada por el Presidente del Gobierno o el Consejo de Ministros.

El dilema anterior lo podremos superar si consideramos que la Constitución establece expresamente los casos en los que atribuye funciones al Presidente de Gobierno, de modo que al no contemplar en éstos la designación de magistrados, debe entenderse que la facultad se residencia y formaliza en el Consejo de Ministros. De este modo lo ha entendido la doctrina destacando adicionalmente la actuación colegial del Gobierno³⁴², y así también se ha materializado en la práctica.

3.4.3.- El Congreso de los Diputados y el Senado

Como se pudo observar del repaso realizado en el primer capítulo de este trabajo, sobre los modelos de designación de magistrados constitucionales, el poder legislativo es el órgano estatal cuya participación está siempre presente, aunque su intervención pueda ser más o menos equilibrada,

³⁴² FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: "El procedimiento de elección de magistrados constitucionales", *op. cit.*, pág. 181.

según el diseño que cada constituyente articule. En el constitucionalismo español esta directiva no tendría por qué ser diferente.

En el histórico Tribunal de Garantías Constitucionales, el poder legislativo estaba presente entre los diversos órganos que se establecieron para designar a los vocales. Si bien en la época el órgano que acorpaba a este poder era una Asamblea unicameral que recibía el nombre de “Cortes o Congreso de los Diputados”, según el artículo 51 de la CE de 1931. La intervención del Parlamento se encauzaba por dos vías: con la designación directa del Presidente del Tribunal de Garantías (que podía ser o no diputado), que era nombrado por la Asamblea para un periodo de diez años, y la otra vía de intervención parlamentaria era la designación de dos vocales que tenían que ser diputados.

El Senado, por otra parte, ciertamente no estaba contemplado en la Constitución de 1931, aunque en un plano sustantivo, sí que estaba presente la intervención territorial mediante el representante que cada una de las Regiones españolas debían elegir, tuvieran o no su Estatuto de Autonomía.

La intervención del poder legislativo en el modelo de designación de magistrados en el TC también se vería en la CE de 1978. Para empezar, repárese que la consideración del Congreso de los Diputados y del Senado estaba ya modelada desde el Anteproyecto de Constitución, en cuyos trabajos no hubo resistencias por su inclusión y tampoco se formularon votos particulares que pretendieran excluirlos³⁴³.

A juzgar por la tramitación constituyente sobre la participación del Congreso en la conformación del TC, se puede destacar la pacífica introducción del mismo en el sistema de nombramientos aunque haya habido enmiendas que pretendiesen debilitar su participación o alguna que planteó incluso suprimirlo (junto con el Senado) bajo la justificación de despolitizar o independizar al Tribunal; se llegó a propugnar por ejemplo, un sistema de elección “corporativo” dando paso a las universidades u organizaciones profesionales, o bien le era reducido el número de magistrados que podía elegir. Ciertamente, también hubo enmiendas que se perfilaban, por el

³⁴³ Véase, *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 44, 5 de enero de 1978, pág. 696; y “Las Actas de la Ponencia Constitucional”, en *Revista de las Cortes Generales*, núm. 2, 1984, págs. 319 y 321.

contrario, en la potencialización de la intervención del Congreso³⁴⁴. Al final, dichas enmiendas no tuvieron el respaldo preciso y la participación del Congreso de los Diputados quedó en la designación de los cuatro miembros que desde el borrador de la Constitución se había previsto.

En cuanto al Senado tampoco hubo objeciones en cuanto a su intervención, si acaso las enmiendas presentadas buscaban potenciarle su participación pues, como se recordará, originalmente se le había adjudicado la designación de tres magistrados. En esta dirección se orientaban especialmente los Grupos parlamentarios nacionalistas, que estimaban que en el Senado, como Cámara de representación territorial, podrían obtener mayor influencia en la designación de los magistrados, de ahí que incluso se hayan planteado enmiendas que pretendían agregar un miembro más al TC por cada uno de los territorios autónomos³⁴⁵.

Al final, como ya se ha explicado, se elevó a cuatro el número de magistrados de nómina senatorial, igualando con la cantidad de magistrados prevista para el Congreso, y así se mantendría este número inalterado hasta ahora.

La participación del poder legislativo en la confección del Tribunal Constitucional puede tener varias justificaciones. Quizá una de las más importantes sea la legitimidad democrática que le podría imprimir en origen al Tribunal Constitucional, el hecho de que el órgano de representación popular intervenga en su confección. Se trataría incluso de un elemento necesario, según lo constató Cruz Villalón en su estudio sobre la formación de los primeros tribunales de este tipo en Europa³⁴⁶. Sería en todo caso, una legitimidad ciertamente de tipo indirecta, pero “sin eslabones perdidos en la

³⁴⁴ Para potenciar la presencia del Congreso en el sistema de elección de magistrados del TC puede verse, por ejemplo, la número 64 del señor Letamendia Belzunce en el Congreso de los Diputados; con respecto a las que debilitaban la presencia del Congreso puede verse la enmienda 189 presentada en el Senado por el señor Antonio Pedrol Rius, que pretendía que los magistrados fueran seleccionados seis por el CGPJ, dos por las Universidades, dos por los Colegios de Abogados y dos por las Comunidades Autónomas; o bien la enmienda 639 de la Agrupación Independiente, presentada igualmente en la fase del Senado, en la que proponía el aumento a quince el número de miembros del TC nombrados por el rey, cinco a propuesta de las Cortes Generales en reunión conjunta; cinco a propuesta del CGPJ y cinco por designación directa del propio rey entre una lista de quince candidatos, cinco propuestos por las Cortes, cinco por el CGPJ y cinco por el Gobierno.

³⁴⁵ Véase al respecto, la enmienda 682 del Grupo parlamentario vasco presentada en el Congreso de los Diputados.

³⁴⁶ CRUZ VILLALÓN, Pedro: *La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939)*, op. cit., págs. 410-412.

cadena de legitimación del pueblo”³⁴⁷, que vendría de alguna manera a matizar una de las grandes objeciones que suele hacerse a este tipo de tribunales, por cuanto resuelven cuestiones políticas de alto calado estatal³⁴⁸.

La participación del poder legislativo, junto con la del Gobierno y la del CGPJ, vendría a dar a la composición del Tribunal esa definición que aludiera Zagrebelsky para la Corte Italiana de “órgano mixto”, en cuanto a que no proviene de una matriz única³⁴⁹, sería también la “significación integradora” que aludía García-Pelayo³⁵⁰, un “equilibrio institucional” o la idea de un órgano suprapartes, con el fin de habilitarlo de mejor manera para las delicadas funciones que se le han encomendado. Entre ellas, la función arbitral ante los conflictos del resto de poderes verticales y horizontales del Estado, que en las primeras manifestaciones europeas de estos tribunales justificó en las federaciones la inclusión del Senado como órgano designante de magistrados³⁵¹, pero también se encuentra la función de ser juez de la Ley, garante de los derechos fundamentales e intérprete supremo de la Constitución³⁵².

Desde otra perspectiva, la participación de las Cámaras en esta materia, estaría en línea con lo que se ha venido a denominar como la función electoral, de integración o de dirección política del Parlamento. Sería una función que ha ido en progresiva consolidación a partir de la segunda posguerra mundial, y que en un marco más integral, implicaría la asignación al Parlamento de la tarea de designar muchas más autoridades estatales, además de los magistrados del TC.

³⁴⁷ HÄBERLE, Peter: “El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción constitucional autónoma”, en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 9, 2005, pág. 121.

³⁴⁸ En este sentido, FERRERES COMELLA, Víctor: *Una defensa del modelo europeo de control de constitucionalidad*, Madrid, Marcial Pons, 2011, págs. 150, y 153-167.

³⁴⁹ ZAGREBELSKY, Gustavo: *La giustizia costituzionale*, op. cit., pág. 94.

³⁵⁰ GARCÍA-PELAYO, Manuel: “El ‘status’ del Tribunal Constitucional”, op. cit., pág. 29.

³⁵¹ EISENMANN, Charles: *La justice constitutionnelle et la Haute Cour Constitutionnelle d’Autriche (édition de 1928)*, París, Economica, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1986, pág. 177.

³⁵² En este sentido se pronuncia gran parte de la doctrina. A título orientativo véase, FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El Tribunal Constitucional español. Una perspectiva orgánica”, en *La Justicia Constitucional: una visión de Derecho Comparado*, tomo III, *La Justicia Constitucional en América Latina y en España*, Madrid, Dykinson, 2009, pág. 639; GÓMEZ FERNÁNDEZ, Itziar: “Una aproximación al Tribunal Constitucional español desde la teoría de la democracia deliberativa”, en *Revista General de Derecho Constitucional*, núm. 2, 2006, pág. 18.

El objetivo general de este diseño, vendría apoyado por la idea de sustraer del Gobierno el poder de designación de ciertas autoridades u órganos estatales, como una medida para evitar su dependencia o subordinación de éste. Pero también otro de los objetivos que se persigue con la designación parlamentaria es la neutralidad política del órgano o por lo menos, “una composición equilibrada, no monopolizada por el partido en el poder”³⁵³.

Esto último, constituye sin duda un dato relevante en materia de designación de magistrados constitucionales, ya que la intervención de los órganos parlamentarios no puede operarse sino por el acuerdo de las tres quintas partes de los integrantes de cada Cámara (122.3, 159.1 CE). Como se puede ver, es la misma mayoría calificada que se requiere para la reforma constitucional ordinaria del art. 167.1 CE, lo que de alguna manera hace destacar la importancia que se ha dado a esta decisión, identificada por algunos incluso a la altura de la constituyente³⁵⁴.

Lo anterior, como bien dice López Guerra, resulta comprensible si se tiene en cuenta que la jurisdicción constitucional tiene el potencial para transformar el ordenamiento constitucional por vía de la interpretación. En esa medida, puede decirse que la jurisdicción constitucional contiene “un elemento de delegación del poder constituyente”³⁵⁵.

Esta potencialidad o delegación, al igual que la reforma de la Constitución, exige una garantía de que no debe quedar a merced de la mayoría gobernante, que es por definición parcial y transitoria. El objetivo es por el contrario, depositarla por lo menos en la mayoría junto con el principal partido de la oposición, como una medida para condicionar un mayor consenso, quizá para favorecer la elección más idónea del candidato, producto de la “aptitud que le reconocen unos y otros para integrarse en tan relevantes

³⁵³ SANTAOLALLA LÓPEZ, Fernando: “Problemas de las designaciones parlamentarias en nuestro derecho”, en PAJARES MONTOLÍO, Emilio (coord.): *Procedimientos de designación parlamentaria de cargos públicos*, Madrid, CEPC, 2010, pág. 14; igualmente, en *Derecho Parlamentario Español*, Madrid, Dykinson, 2013, págs. 421-438 (Capítulo XV, “Actos de dirección política”). En esta línea además, GARCÍA COSTA, Francisco Manuel: *La función electoral del Parlamento*, Barcelona, Atelier, 2009.

³⁵⁴ PÉREZ ROYO, Javier: *Tribunal Constitucional y división de poderes*, Madrid, Tecnos, 1988, pág. 44; también en “Operación cuasi constituyente”, en *El País*, 22 de noviembre de 2008.

³⁵⁵ LÓPEZ GUERRA, Luis: “La organización y la posición institucional de la justicia constitucional en Europa”, en *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, 2004, pág. 91.

colegios y actuar dentro de ellos con lealtad constitucional y con espíritu constructivo”³⁵⁶.

En la práctica, sin embargo, en la democracia de partidos, la designación de magistrados ha caminado por unos terrenos que ya se observaban claramente en la experiencia comparada³⁵⁷, y que incluso el propio TC en alguna ocasión llegó a referirlos en la resolución de un asunto relacionado con la designación parlamentaria de los vocales de extracción judicial del CGPJ. El TC señaló en aquella ocasión, que con ese modelo “se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos”³⁵⁸. Se volverá sobre este tema, en el último capítulo.

3.5.- Otras disposiciones del procedimiento selectivo

3.5.1.- La notificación del Presidente del TC para instar el procedimiento

La LOTC contiene al menos un par de disposiciones que depositan en el Presidente del Tribunal Constitucional una facultad muy interesante en materia de designación de magistrados. En los dos casos, se trata de preceptos que en cierta medida marcan el punto de apertura de los procedimientos selectivos de magistrados constitucionales en los órganos encargados de su designación.

El art. 17.1 de la LOTC prevé en este sentido, que antes “de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el Presidente del Tribunal solicitará de los Presidentes de los órganos que han de hacer las propuestas para la designación de los nuevos Magistrados, que inicien el

³⁵⁶ LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo María: “Las mayorías reforzadas y la formación de los órganos constitucionales (comentarios sobre la actualidad)”, en *Anuario “Parlamento y Constitución”*, núm. 13, 2010, pág. 132.

³⁵⁷ WEBER, Albrecht: “La jurisdicción constitucional en Europa occidental: una comparación”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 17, 1986, pág. 53.

³⁵⁸ STC 108/1986, de 29 de julio, FJ 13. El apartado citado constituye ciertamente un *obiter dicta* de la sentencia que resolvió el recurso de inconstitucionalidad promovido en 1985 contra la LOPJ, que entre otras cosas, extendió el procedimiento de designación de los vocales del CGPJ que han de ser elegidos entre juristas de reconocida competencia (122.3 CE) a los de procedencia de la carrera judicial, esto es, la designación por las Cámaras, mediante mayoría calificada de tres quintos.

procedimiento para ello”. Por otro lado, el art. 123.2 de la LOTC, faculta al Presidente a decretar que se ha producido una vacante, en los casos de expiración del plazo de nombramiento, por renuncia o fallecimiento.

Como se puede ver, la comunicación está prevista para los supuestos de renovación de magistrados por expiración ordinaria del cargo, que son sobre los que se puede tener este tipo de antelación, pero no abarca los supuestos de terminación anticipada del cargo, previstos en el 123.2 de la LOTC. Para estos últimos casos, no hay disposición expresa que imponga una comunicación presidencial a los órganos designantes, aunque por analogía habrá que entender que ha de hacerlo, a efectos de poner en conocimiento formal dicha situación.

Las dos disposiciones, como se puede ver, resultan útiles para ordenar el procedimiento y garantizar en alguna medida que el sistema de renovación opere en los plazos previstos, evitando dilaciones indebidas y manteniendo la funcionalidad del órgano. Pero inmediatamente hay que precisar, que tales intervenciones del Presidente, salvo quizá el decreto de cese por renuncia que requiere ser aceptada, no constituyen una suerte de *actio* para que los órganos encargados de la designación comiencen los procedimientos selectivos, pues está claro que para éstos la obligación constitucional de designar a los magistrados subsiste con independencia de que el Presidente cumpla o no con sus atribuciones.

Por ello mismo, los cuatro meses previstos constituyen al menos, un plazo mínimo para empezar al procedimiento, pero puede ser antes. Situación distinta hubiera sido, si el precepto fijara con carácter general un plazo máximo de antelación para proceder a la designación de magistrados, según sucede en Alemania, cuyo art. 5.2 de la LTCF prevé para ello tres meses.

Por todo ello, debe tenerse que la comunicación del Presidente se trata de una notificación o advertencia a los órganos proponentes, pero no de un requisito *sine qua non* para accionar el procedimiento.

3.5.2.- La verificación del cumplimiento de requisitos por el TC

La LOTC faculta al Tribunal Constitucional para conocer de “la verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal

Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente Ley”. Lo hace, en el apartado dedicado a mencionar las competencias del TC (2 g, LOTC), y en el que precisa las competencias del Pleno (10 i, LOTC), pero no se encuentra más desarrollo legal o reglamentario al respecto.

La doctrina ha entendido el precepto como una competencia gubernativa reservada al Pleno, que tiene por objeto garantizar la independencia del Tribunal, que le daría cierta facultad de defensa ante un intento de imponer desde fuera una ilegal composición. Parece estar inspirada en un principio de cierta solera en el Derecho Parlamentario, según el cual solamente a las Cámaras les corresponde verificar el mandato o “las credenciales” de sus propios integrantes, como una medida para eludir las interferencias de otros poderes.

La facultad de verificación se ha venido ejerciendo con la reserva habitual con la que se desarrollan las competencias gubernativas, sobre todo en materia de nombramientos de personas. Al parecer, en el historial del ejercicio de esta competencia, el Tribunal lo venía haciendo de “manera muy rápida, como un acto de puro trámite, confiado seguramente en el buen juicio de los órganos proponentes”³⁵⁹. Quizá ello explique su escasa atención no solamente de los medios de comunicación, sino también de la doctrina.

Sin embargo, esta facultad ha cobrado recientemente cierta visibilidad, porque por primera vez la mitad del Tribunal dudó del cumplimiento de los requisitos de acceso al cargo de uno de los candidatos. Sucedió en la sesión plenaria del 11 de junio de 2013, en la verificación de requisitos de la 4ª renovación de magistrados efectuada conjuntamente por el CGPJ y el Gobierno.

A partir de la información que los medios de comunicación consiguieron difundir, se dijo que, de las personas propuestas, sólo había planteado problemas la candidatura del Magistrado Enrique López López, de la que había dudas en el cómputo de los quince años de la experiencia profesional o en

³⁵⁹ RUBIO LLORENTE, Francisco: “El Tribunal Constitucional”, en *La forma del poder. Estudios sobre la Constitución*, 3ª ed., vol. III, Madrid, CEPC, 2012, pág. 1396. Antes publicado en la *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 71, 2004, págs. 11-33.

activo en la respectiva función del candidato, exigidos por los arts. 159.2 de la CE y 18 de la LOTC.

Al momento de proceder a la toma de decisión, los votos en torno a dicha candidatura se fueron dividiendo hasta llegar al punto donde seis magistrados dudaban del cumplimiento de los requisitos de acceso, mientras que cinco se pronunciaban por dar el visto bueno. En este momento, y dado que en las votaciones el Presidente vota en último lugar (10 ROPTC), éste se decantó por el grupo que estimaba el cumplimiento de los requisitos, consiguiendo con ello no solamente el empate de la votación (seis a seis), sino que haciendo valer su voto de calidad (90 LOTC, 11 ROPTC), hizo prevalecer la postura que finalmente aprobó la candidatura cuestionada³⁶⁰.

Al margen de las valoraciones que el caso concreto pudiera suscitar, lo cierto es que esta facultad puede poner al Tribunal en una situación complicada. En efecto, la idea de que el Tribunal pueda contravenir la opción tomada por los órganos proponentes podría colocarlo en una situación de conflicto constitucional.

Algún sector de la doctrina ha entendido que dicho procedimiento debería asimilarse a los supuestos de incompatibilidad sobrevenida que refiere el art. 23 de la LOTC, debiendo decretarse por las tres cuartas partes del Pleno, y quizá contemplando un expediente contradictorio para que sea oído el interesado³⁶¹. La puesta en marcha de este procedimiento, sin embargo, no parece que haya ido en ese sentido, e incluso ha quedado de manifiesto que no se han exigido mayorías calificadas para la votación.

En cualquier caso, lo que sí parece quedar más claro, es que la determinación que acuerde el Pleno no podría ser objeto de revisión judicial. Ni siquiera por la vía prevista por la Ley reguladora de la Jurisdicción

³⁶⁰ Puede verse cómo la prensa recogió este acontecimiento en las siguientes notas: GAREA, Fernando; FABRA, María: “El voto del progresista Sala aupó al conservador López al Constitucional”, en *El País*, 11 de junio de 2013; “El voto de calidad del presidente del TC ‘salva’ la idoneidad de Enrique López”, en *ABC*, 11 de junio de 2013. Los seis magistrados que votaron en contra de la determinación del Tribunal sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la magistratura constitucional de Enrique López y López, estimaban que no contaba con el requisito de tener “más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función” (18 LOTC), pues no le computaban en el mismo los años en que fue vocal y portavoz del CGPJ.

³⁶¹ SANTOLAYA MACHETTI, Pablo: “Artículo 10”, en REQUEJO PAGÉS, Juan Luis (coord.): *Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*, Madrid, TC, BOE, 2001, pág. 238.

Contencioso-administrativa³⁶², al no encontrarse ante un acto o disposición “en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes” del Tribunal Constitucional (art. 1.3 a), puesto que se trata de los titulares de la jurisdicción, del órgano propiamente dicho, y no del personal al servicio de éstos.

3.5.3.- La formalización del acto selectivo

Una vez que el TC ha verificado el cumplimiento de los requisitos de acceso al cargo, lo pone en conocimiento del órgano designante³⁶³, quien debe elevar la propuesta al Rey para su nombramiento, por conducto del Presidente de Gobierno. El Rey efectúa el nombramiento teniendo éste la naturaleza de un acto formal y no sustantivo. Lo hace a través de la figura del Real Decreto, el cual, deberá ser refrendado por el Presidente de Gobierno (64.1 CE), asumiendo por tanto, la responsabilidad del acto del Rey (64.2 CE).

No deja de llamar la atención, que esta disposición hace recaer la responsabilidad del acto selectivo en el Jefe de Gobierno, cuando en los casos de designación del Consejo judicial o del Parlamento, el mismo no ha tenido intervención alguna al efecto. En este tipo de supuestos (refrendo presidencial de actos en cuyo desarrollo primero no ha participado), la doctrina del TC ha entendido que el refrendante se limita con su firma “a responder de la adecuación del acto real al ordenamiento jurídico constitucional, sin haber intervenido en la menor medida en la determinación de su contenido”³⁶⁴.

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que ello no es más que una consecuencia directa de lo establecido expresamente en el art. 64.1 de la CE, según el cual se dispone que los “actos del Rey serán refrendados por el Presidente de Gobierno, y en su caso, por los Ministros competentes”.

Esta configuración del refrendo se corresponde con el papel de la Corona en la moderna monarquía constitucional, donde el Rey no interviene activamente en las decisiones políticas y la transferencia de su responsabilidad se da por el instrumento del refrendo, que en materia de designación de

³⁶² Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

³⁶³ En realidad, el Presidente del Tribunal Constitucional también lo pone en conocimiento de todos los demás órganos competentes para designar a los magistrados constitucionales.

³⁶⁴ SSTC 16/1984, de 6 de febrero; 5/1987, de 27 de enero, y 8/1987, de 29 de enero.

magistrados, como ya se ha dicho recae en el Presidente de Gobierno. Esta dinámica está del todo reconocida, que incluso se ha llegado a constatar la práctica de anteponer el refrendo a la propia firma real³⁶⁵.

El Real Decreto refrendado debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado, constituyendo éste un dato significativo porque es a partir de esta fecha cuando el nombramiento comienza a desplegar sus efectos jurídicos y por tanto, el momento en que debiera comenzar a contar el periodo de cargo, aunque como más adelante se verá, no siempre se ha computado el tiempo de esta manera e incluso actualmente el criterio es tomar como referencia la fecha de la toma efectiva de posesión³⁶⁶.

Publicado el Real Decreto de nombramiento, los magistrados antes de asumir el cargo, deben prestar ante el Rey el juramento o promesa siguiente: “Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución Española, lealtad a la Corona y cumplir mis deberes como Magistrado Constitucional” (21 LOTC). El acto se lleva a cabo en el Palacio de la Zarzuela, en presencia de otras altas autoridades estatales. El juramento o promesa se realiza solemnemente de forma individual, frente a un crucifijo, un ejemplar facsímil de la Constitución editado por las Cortes Generales en 1980 abierto por el artículo 159 del Tribunal Constitucional y una Biblia editada en Valencia en 1791, propiedad de Carlos IV, abierta por el capítulo I del Libro de los Jueces³⁶⁷.

Se trata, por otro lado, de un acto de gran raigambre en los ordenamientos jurídicos para la toma de posesión de los altos cargos del Estado. Como puede verse, la fórmula contiene la figura del “juramento”, más cercana al terreno religioso, y la “promesa”, de naturaleza más aséptica. Las dos están planteadas como una opción, por lo que corresponderá naturalmente al magistrado elegir una u otra según sus convicciones.

En cualquier caso, resulta una manifestación solemne y pública del compromiso que conlleva el cargo, aunque el mismo ya se desprenda de la

³⁶⁵ En este sentido, TORRES MURO, Ignacio: “Refrendo y Monarquía”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 87, 2009, pág. 65.

³⁶⁶ Tal parece que el criterio de computar el plazo en la fecha de publicación del Boletín Oficial del Estado sólo se aplicó en las primeras designaciones y hasta 2001, en donde se pasó al criterio de contar el periodo de cargo a partir de la toma de posesión del mismo.

³⁶⁷ Así detallado en el apartado de “actividades y agenda” del portal de Internet de la Casa de Su Majestad el Rey, en www.casareal.es.

propia Constitución (9.1 CE). Constituye una formalidad que perfecciona el acto, de modo que si alguien se negara a celebrarlo, como bien dice Espín Templado, “habrá de entenderse que renuncia a su cargo”³⁶⁸.

Finalmente se efectúa un acto público de toma de posesión, en presencia de autoridades estatales, en la sede del Tribunal Constitucional en Madrid.

³⁶⁸ ESPÍN TEMPLADO, Eduardo: “Artículo 21”, en REQUEJO PAGÉS, Juan Luis (coord.): *Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*, Madrid, TC, BOE, 2001, pág. 335.

CAPÍTULO IV

Las designaciones de magistrados constitucionales por el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno

4.1.- El Consejo General del Poder Judicial

4.1.1.- La designación inaugural

4.1.1.1.- La reglas del procedimiento selectivo en la LOCGPJ

Las primeras designaciones de magistrados constitucionales a cargo de este órgano, se disciplinaron bajo la normativa inicialmente confeccionada para éste a través de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial (LOCGPJ). En el artículo 31 de esta norma orgánica, se estableció como competencia del Pleno la “propuesta de nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional”. Por otro lado, el art. 41 previó que los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo serían tomados “por mayoría de los miembros presentes”, salvo que la propia ley dispusiese otra cosa.

Esta previsión de carácter general, era la aplicable para las designaciones de los magistrados constitucionales dado que la ley no establecía para éstas ninguna mayoría especial. La designación, era por tanto, acordada por mayoría simple de los miembros presentes, y en el caso de empate, sería resuelto con el voto de calidad previsto para el Presidente del órgano (41 y 29.2 LOCGPJ).

Finalmente, hay que considerar dos importantes disposiciones que resultaban aplicables al procedimiento selectivo de magistrados del TC. Una

era el establecimiento del *quorum* funcional del Pleno, fijado en “un mínimo de catorce de sus miembros, con asistencia del Presidente o de quien legalmente le sustituya” (33 LOCGPJ). La otra norma dispondría que las deliberaciones de los órganos colegiados del Consejo tendrían además “carácter reservado”, por lo que los componentes debían “guardar secreto de las mismas” (41 LOCGPJ).

4.1.1.2.- La designación de Escudero del Corral y Fernández Viagas

Con la normativa mencionada se procedió a la inaugural designación de magistrados del Tribunal Constitucional por parte de la primera conformación del CGPJ (1980-1985), en su sesión del 7 de noviembre de 1980. Los nombramientos recayeron en el ex Presidente del Tribunal Supremo, Ángel Escudero del Corral y en quien apenas un mes y medio antes había sido designado vocal del propio Consejo, Plácido Fernández Viagas³⁶⁹.

Sobre el procedimiento de designación, el propio carácter reservado de las deliberaciones dificultaba el conocimiento y desarrollo del mismo. Sin embargo, la prensa recogía un comunicado hecho público por el portavoz y vocal para la relación con los medios de comunicación social, Gonzalo Casado Herce, según el cual ambas propuestas habían sido adoptadas “por mayoría absoluta y en primera votación”³⁷⁰.

Los medios de comunicación también hicieron alusión a que esta designación era “interpretada en medios jurídicos”, como resultado de “un gran esfuerzo de entendimiento realizado por las dos tendencias, muy marcadas, existentes en el seno del Consejo General del Poder Judicial”, así como de la intención de ambas de “mantener el equilibrio” del Tribunal Constitucional³⁷¹.

Resulta de especial interés reparar en que la alusión a las dos tendencias “muy marcadas” en el CGPJ, una denominada “conservadora” y

³⁶⁹ Plácido Fernández Viagas había sido designado por el Senado como vocal del CGPJ el 25 de septiembre de 1980. Véase: SENADO: “Nueva votación para elegir los cuatro miembros que deben ser propuestos por la Cámara para formar parte del Consejo General del Poder Judicial”, en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 74, I Legislatura, 25 de septiembre de 1980, págs. 3680-3681. Los Reales Decretos de nombramiento de los magistrados son el 2514/1980 y el 2515/1980, ambos de 7 de noviembre, publicados en el BOE de 19 de noviembre de 1980.

³⁷⁰ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El procedimiento de elección de los magistrados constitucionales”, en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, núm. 77, 1991, pág. 182, y la nota titulada “Escudero del Corral y Fernández Viagas, propuestos para el Tribunal Constitucional”, en *El País*, 8 de noviembre de 1980.

³⁷¹ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El procedimiento de elección...”, *op. cit.*, pág. 182.

otra “progresista”, no resultará una circunstancia anecdótica y puntual de aquélla concreta integración del Consejo. A partir de esta primera designación, dicho fenómeno no dejará de presentarse y de caracterizar en buena medida la “lógica” del funcionamiento del órgano, al menos, en lo que a designación de magistrados constitucionales se refiere.

Las dos tendencias entre los vocales quizá puedan inferirse de la trayectoria de los magistrados que resultaron designados. Por un lado, considérese que Plácido Fernández Viagas, además de su paso por la judicatura, había sido anteriormente senador por Sevilla en la legislatura constituyente y en la primera legislatura constitucional por el PSOE, y también se había desempeñado entre 1978 y 1979 como Presidente de la Junta Preautonómica de Andalucía³⁷². En el momento de la designación como magistrado constitucional, se desempeñaba como vocal de extracción no judicial del CGPJ elegido por el Senado, de entre las propuestas presentadas por consenso entre el PSOE y UCD³⁷³.

Por otro lado, Ángel Escudero del Corral había sido Presidente del Tribunal Supremo, Magistrado de la Sala Segunda de lo Criminal, Presidente de la Audiencia Nacional, y también llevaba muchos años ejerciendo la carrera judicial. Si hacemos una comparación entre los dos perfiles, se observará que uno está más vinculado a la actividad política que el otro. Lo más probable es que este tipo de candidaturas tan diferenciadas, provinieran a su vez de cada uno de los dos grupos que la prensa comenzaba a identificar, y que al haber dos plazas a cubrir, estos hayan conseguido el consenso a través del respaldo recíproco de sus candidatos.

4.1.1.3.- La sustitución de Fernández Viagas por Pera Verdaguer

³⁷² Véase la ficha curricular en el página del Senado, www.senado.es, y el siguiente portal especial de la Junta de Andalucía, con motivo del XXV aniversario de la misma, www.juntadeandalucia.es/html/especiales/25AniversarioJdA/AJ-25AInicio/index.html.

³⁷³ En la elección, tanto Fernández Viagas como el resto de candidatos, fueron presentados de forma idéntica en las listas de propuestas que cada uno de los siguientes grupos entregó: el Grupo socialista del Senado, el Grupo “Catalunya, Democracia i Socialisme”, el Grupo Socialista Andaluz y UCD. Véase SENADO: “Elección de cuatro miembros que deben ser propuestos por el Senado para integrarse en el Consejo General del Poder Judicial”, en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 73, I Legislatura, 24 de septiembre de 1980, pág. 3606.

Dos años más tarde, el 9 de diciembre de 1982 fallecía el Magistrado Fernández Viagas. Fue sustituido a finales del mismo mes por el CGPJ, con la selección de quien se desempeñaba como Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Francisco Pera Verdaguer³⁷⁴. Se trataba de un Magistrado proveniente de la carrera judicial identificado como “conservador”, cuyo perfil no se parecía al de su antecesor.

Todo ello hace pensar, que en esta ocasión Pera Verdaguer no fue presentado por el mismo grupo que propuso a Fernández Viagas, sino que el otro grupo se impuso. Si se considera que esta sustitución fue realizada por la misma conformación del Consejo (1980-1985) que había designado a los dos primeros magistrados constitucionales, se convendrá en que uno de los grupos rompió el equilibrio que venía manteniéndose entre las dos tendencias judiciales al interior del Consejo³⁷⁵. Además, repárese en que esta acción pudo realizarse con mayores condiciones de éxito, al no requerirse en la época una mayoría calificada de votos, sino que con la mayoría de los miembros presentes bastaba (cubriendo por supuesto, el *quorum* funcional del Pleno previsto en el art. 33 de la LOCGPJ).

4.1.2.- La primera renovación (1986)

4.1.2.1.- Las normas del procedimiento selectivo en la LOPJ

Luego de estas primeras selecciones, las normas sobre el procedimiento de elección serían objeto de una modificación sustancial con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que derogó la LOCGPJ³⁷⁶. En la nueva LOPJ, las disposiciones normativas relacionadas con el CGPJ fueron ubicadas en el Título II, del Libro II; ahí en el artículo 107.2, se previó entre las competencias del Consejo, la “propuesta por mayoría de tres quintos para el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional cuando así proceda” y

³⁷⁴ El magistrado fue designado en la sesión del CGPJ del 30 de diciembre de 1982. Fue nombrado mediante Real Decreto 59/1983, de 15 de enero, publicado en el BOE el 17 de enero de 1983. La sustitución fue recogida en la prensa en la siguiente nota: “Francisco Pera sustituirá a Fernández Viagas en el Tribunal Constitucional”, en *El País*, 31 de diciembre de 1982.

³⁷⁵ Así lo recogerían algunos medios de comunicación. Véase al respecto, la nota que años después publicó el periodista, DE LA CUADRA, Bonifacio: “El relevo de los conservadores Pera y Escudero pondrá a prueba al Consejo del Poder Judicial”, en *El País*, 31 de octubre de 1985.

³⁷⁶ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

más adelante, en el artículo 127.2 (ahora 127.1 b³⁷⁷), detalló esta facultad como competencia del Pleno.

Como se puede advertir, la nueva legislación reforzó la mayoría inicialmente prevista para acordar la designación de los magistrados constitucionales, de esta manera la mayoría simple requerida se transformó a la cualificada de tres quintos de los miembros del Consejo, es decir, la necesidad del respaldo como mínimo de trece vocales, para que la propuesta de los magistrados constitucionales pueda quedar adoptada.

Es necesario hacer una matización en relación con el número de trece votos entendidos como el equivalente a la mayoría de tres quintos de los componentes del Consejo, ya que este número de votos podría bajar a doce en el supuesto que el cargo del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ recayese en uno de los propios vocales del Consejo, conformando un colegio de veinte personas. Esta posibilidad es factible, dado que el artículo 123.1 de la LOPJ, no establece puntuales limitaciones, sino que dispone generalmente que el Presidente puede ser nombrado “entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia, con más de quince años de antigüedad en su carrera o en el ejercicio de su profesión”.

Volviendo a la normativa aplicable en materia de designación de magistrados constitucionales introducida por la LOPJ de 1985, cabe mencionar finalmente que el carácter reservado de las deliberaciones de los órganos del Consejo y la obligación de guardar secreto de las mismas a los vocales se mantuvo. De este modo, el conocimiento formal de los elementos decisivos y las vicisitudes por las que los vocales atravesarían para conformar las propuestas, quedarían en buena medida fuera del alcance público (137.2 LOPJ).

4.1.2.2.- Las reglas de votación

La primera oportunidad que tuvo el Consejo para renovar la serie de magistrados constitucionales de su competencia, fue en el mes de enero de

³⁷⁷ De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2004, de 28 de diciembre, el contenido del artículo 127.2 LOPJ pasó al ahora vigente artículo 127.1 b. En esta reforma, también se determinó la mayoría de tres quintos del CGPJ para designar a los magistrados y Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y a las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia.

1986, luego de que al grupo de designaciones del CGPJ y del Gobierno les afectara el segundo sorteo de la DT 9ª de la CE que puso en marcha el ritmo de renovaciones parciales en el TC³⁷⁸. En esa ocasión, se pusieron en práctica unas reglas aprobadas por el Pleno del Consejo, que según lo refiere Fernández Segado fueron adoptadas sobre la base de un documento elaborado por el vocal Ignacio de Otto Pardo³⁷⁹.

Conviene detallar el procedimiento referido en tal acuerdo, no solamente porque constituya uno de los pocos materiales que en materia de elección de cargos del CGPJ se ha podido disponer, sino porque en alguna medida, todo parece indicar que la estructura procedimental prevista en el mismo ha sido objeto de inspiración para el resto de reglamentaciones que se confeccionaron.

(i) El acuerdo referido, estructuraba en cinco fases el procedimiento de elección. En una primera etapa, se disponía la presentación de candidaturas en la que todos los vocales a través del sistema de papeleta podían, de modo individualizado, proponer hasta tres candidatos (ordenados alfabéticamente). Podía ser propuesta como candidato cualquier persona que cumpliera con los requisitos constitucionales y legales, lo hubieran solicitado o no (siempre que les conste su consentimiento). Con ello se entiende, que el abanico de candidaturas era amplio y que no se reducía a los Magistrados del poder judicial.

La presentación de candidaturas en esta primera etapa resultaba un requisito indispensable para participar en las restantes fases de votación. De este modo, el procedimiento selectivo quedaba formalizado con estas candidaturas y no podían proponerse otros nombres. Las reglas, disponían a este respecto, la nulidad de las papeletas de votación que contuvieran el nombre de una persona no propuesta en la fase inicial.

(ii) Posteriormente venía una segunda fase de “proclamación y defensa de la candidaturas y periodo de reflexión”. En esta etapa, el Secretario General del Consejo debía leer en la sesión todas las candidaturas, luego debía abrirse

³⁷⁸ El segundo sorteo, como se recordará, se llevó a cabo en el Tribunal Constitucional el 30 de octubre de 1985.

³⁷⁹ El documento se denomina “Reglas para la elección de dos magistrados del Tribunal Constitucional por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial”. Fue aprobado por el Pleno de la segunda legislatura del CGPJ en la sesión del 29 de enero de 1986 (Documento facilitado por el Secretario General del Consejo General del Poder Judicial, D. José Luis Terrero Chacón, tras solicitarlo por escrito).

un debate en el que los vocales podían intervenir a favor y en contra de los candidatos. Era de esperar que en el debate pudieran ponerse de manifiesto los criterios por los que los vocales habían postulado a los candidatos, mostrándose además el nivel de apoyo que los candidatos generaban o alguna objeción a las candidaturas. Ese debate, ciertamente debía arrojar la información que permitiera los primeros tanteos, por lo que se preveía la suspensión de media hora de la sesión para realizar un periodo “de reflexión”, lógicamente para dar espacio a la negociación entre los vocales.

(iii) La tercera fase, podría titularse de “votación y/o selección de finalistas”. Esta venía después del periodo de reflexión, y en ella debía someterse a votación del pleno las dos plazas de magistrado a la vez. Cada vocal podía escribir en su papeleta dos nombres, uno para cada uno de los puestos. Los candidatos que obtenían el apoyo de los tres quintos de los miembros del Consejo resultaban elegidos, pero si no fuese así, se preveían unas reglas para seleccionar a unos finalistas, sobre los que se haría otra votación. Es decir, había unas reglas de balotaje para que en sucesivas votaciones se fuera descartando a los candidatos que menor apoyo recibían, hasta conseguir la elección de los magistrados.

Las reglas para ir definiendo a los finalistas eran ricamente detalladas, por lo que conviene revisarlas en lo particular. Para la determinación de los finalistas que podían pasar a la siguiente votación, había reglas para dos tipos de supuestos, uno cuando ninguno de los candidatos hubiese obtenido la mayoría requerida y otro cuando sólo uno de ellos la hubiese alcanzado, de modo que quedase solo una plaza de magistrado por cubrir. En el primer supuesto, se seleccionarán como finalistas para la siguiente votación los cuatro candidatos que hubieren obtenido el mayor número de votos en la primera votación, estableciendo adicionalmente otras reglas para cuando se produjeran empates en la cifra menor, de modo que rebasaran la cantidad de cuatro, por ejemplo si en la cuarta posición de votos obtenidos se empataran dos o tres personas³⁸⁰.

³⁸⁰ Si en el cuarto lugar se encontrasen empatados dos candidatos, se hará una votación entre estos, para saber cuál de ellos será el cuarto finalista para avanzar a la siguiente votación. Si fueran más de dos los empatados, se les ordenará alfabéticamente y se procederá a una votación entre el primero y segundo de dicho orden, luego el ganador se enfrentará al tercero y el que gane de ellos será el cuarto finalista. Si en cualquiera de estas votaciones hubiere

En el segundo supuesto, es decir, cuando un candidato es el único que obtuvo la mayoría exigida en la primera votación, se seleccionarán como finalistas para la siguiente, a los tres candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos, o los siguientes dos, si es que no hubiera más candidatos. Si hubiere empates se aplicarán las reglas del párrafo anterior. En este caso, recuérdese que los vocales solo podrán poner un nombre en la papeleta.

(iv) Luego viene una cuarta etapa de sucesivas votaciones entre los finalistas hasta conseguir la designación de los dos magistrados. Se parte de los cuatro finalistas obtenidos de la etapa anterior y estos deberán ser sometidos a una segunda votación general. También aquí se tomarán en cuenta dos tipos de supuestos, a saber, cuando ninguno de los finalistas haya obtenido la mayoría exigida o cuando solamente lo haya conseguido uno. En el primer caso, los mismos cuatro candidatos serán sometidos a una tercera votación, y si ninguno obtuviera la mayoría nuevamente se hará una selección de finalistas, determinando en este punto, el número de tres, que serán los que hayan obtenido más votos. Si en una cuarta votación no lo consiguiesen se determinarán dos finalistas para hacer sobre ellos una quinta y hasta una sexta votación.

En el segundo supuesto, esto es, cuando ha resultado en la primera votación un magistrado y por tanto se han proclamado tres finalistas para la segunda votación general, los vocales solo pueden poner un nombre en la papeleta. Si en esta segunda votación general ninguno obtuviera la mayoría requerida, se proclamarán finalistas para la siguiente y ulteriores votaciones los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos.

(v) Finalmente se preveía una quinta fase para los supuestos en que a pesar de las reglas de balotaje mencionadas, no se hubiese obtenido la mayoría calificada exigida legalmente. En la práctica, se trata de un caso en que habrían fracasado las votaciones luego de seis intentos, lo que hace el supuesto poco probable, aunque no imposible dada la polarización que suele percibirse en la integración del Consejo entre el polo “conservador” y el “progresista”, y luego ocasionalmente al interior de cada uno.

nuevos empates, se procederá a una nueva votación, y si de esta resultara un nuevo empate, se aplicará el voto dirimente del Presidente del Consejo (art. 11. Reglas para el caso de empate en la selección de finalistas).

Pues bien, para estos supuestos de profundo desacuerdo, las reglas prevén para ello, nada menos que la repetición del entero procedimiento de selección, pero a partir de la proclamación de todos los primeros candidatos, esto es, no se proponen nuevos nombres. Es como dice Fernández Segado, un “retorno al punto de partida”³⁸¹, pero no un nuevo procedimiento selectivo.

4.1.2.3.- La designación de De la Vega Benayas y Díaz Eimil

Como ya se decía, estas reglas que se han descrito, fueron aprobadas y puestas en marcha en la primera renovación parcial de magistrados constitucionales efectuada por el CGPJ en virtud del segundo sorteo de renovación previsto en la DT 9ª de la CE, el cual afectó además al grupo de designación del Gobierno. La elección fue realizada en la sesión plenaria de la segunda conformación del CGPJ (1985-1990), el 29 de enero de 1986. Sin embargo, a falta de publicidad de las actas de dicha sesión y a la reserva de las deliberaciones, la forma en que se procedió a la votación de las candidaturas ha podido recogerse aquí a partir del trabajo del Profesor Francisco Fernández Segado y a la información disponible en los medios de comunicación, quienes llegaron a reconocer el “sigilo absoluto de los medios oficiales” para proporcionar información de la materia³⁸².

La prensa en aquella época recogió que inicialmente se habían propuesto catorce nombres³⁸³. Una vez comenzada la sesión plenaria del CGPJ para proveer la designación, el propio vocal Cesáreo Rodríguez Aguilera, solicitaría que se retirara su candidatura de modo que los nombres se redujeron a trece.

Luego de una breve fase de defensa de las candidaturas, se efectuó la primera votación, arrojando los siguientes resultados: Carlos de la Vega Benayas, nueve votos; Pascual Sala Sánchez, ocho; Manuel García Miguel, Mariano Fernández Martín-Granizo y Eugenio Díaz Eimil, empatados con cinco

³⁸¹ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El procedimiento de elección de los magistrados constitucionales”, en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, núm. 77, 1991, pág. 187.

³⁸² Véase la nota del periodista VALDECANTOS, Camilo: “El Consejo del Poder Judicial designará el día 15 dos magistrados del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 9 de enero de 1986.

³⁸³ DE LA CUADRA, Bonifacio: “De la Vega y Díaz Eimil, nuevos miembros del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 30 de enero de 1986.

votos; Miguel Ibáñez, cuatro; Adolfo Carretero, tres; Mariano Gómez de Liaño y Luis F. Martínez Ruiz, empatados con un voto; y Cecilio Serena Velloso, Diego Espín, Fernando de Mateo, Rafael Casares, no tuvieron votos³⁸⁴.

Dado que ninguno consiguió la mayoría necesaria para la designación, debían seleccionarse como finalistas a los cuatro que hubiesen obtenido mayor votación. Así, los primeros dos finalistas fueron los candidatos más votados De la Vega Benayas y Sala Sánchez, mientras que los tres que empataron con cinco votos, tuvieron que irse a una votación para depurar a uno, y así completar el número de cuatro finalistas que podían pasar a la siguiente votación. Entre los empatados, las elecciones dieron como resultado la exclusión de Fernández Martín-Granizo.

Tras la primera votación entre finalistas, ningún candidato lograba la mayoría requerida. En la votación, De la Vega Benayas recibiría un apoyo de doce votos; Díaz Eimil, once; García Miguel, diez; y Sala Sánchez, ocho. En este supuesto, las reglas preveían otra votación entre los mismos cuatro finalistas, pero tampoco ninguno obtuvo la mayoría calificada. Los resultados fueron los siguientes: De la Vega Benayas y Díaz Eimil recibían doce votos; Sala Sánchez subía a nueve y García Miguel bajaba a ocho.

Luego de esta segunda votación entre finalistas, sólo podían pasar a la siguiente votación tres candidatos, por lo que se prescindió de la candidatura que había obtenido el menor respaldo, esto es la de García Miguel. Tras esta votación, se produjo finalmente la obtención de la mayoría necesaria por los señores Carlos de la Vega Benayas con quince votos, y Eugenio Díaz Eimil con catorce votos (Sala Sánchez se mantuvo con los nueve votos). Al obtener los tres quintos necesarios, lo que restaba era que fueran propuestos al Rey para que los nombrara magistrados del TC y sustituyeran a Ángel Escudero del Corral y a Francisco Pera Verdaguer, a quienes les finalizaría el cargo veinticuatro días después, esto es el 22 de febrero de 1986³⁸⁵.

Los candidatos designados provenían de una consolidada carrera judicial y eran Magistrados del Tribunal Supremo. Carlos de la Vega Benayas

³⁸⁴ FERNÁNDEZ SEGADO: "El procedimiento de elección...", *op. cit.*, págs. 188 y ss.; además resulta coincidente con lo referido en la siguiente nota de prensa: "El Poder Judicial rechazó a un candidato del Gobierno", en *ABC*, 30 de enero de 1986.

³⁸⁵ Fueron nombrados mediante los Reales Decretos 365/1986 y 366/1986, ambos de 21 de febrero, publicados en el BOE al día siguiente.

era Magistrado de la Sala Civil del TS y había sido presentado sin éxito como candidato para presidir el propio CGPJ, que ahora lo proponía como magistrado del TC. Se decía además, que era uno de los candidatos propuestos por el sector “progresista” para sustituir a Fernández Viagas, pero como ya se vio, finalmente se nombró a Pera Verdaguer³⁸⁶. Por otro lado, Eugenio Díaz Eimil era Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, y anteriormente había sido Magistrado de la Audiencia Nacional y de varias Audiencias Territoriales.

En esta ocasión, quizá del currículum profesional de ambos candidatos no puedan extraerse claros elementos para determinar de qué tendencia podría provenir uno u otro, sin embargo, un vistazo general a la prensa de la época resultará de orientación. En este sentido, se informó que la candidatura de Carlos de la Vega se adjudicaba a los vocales de “tendencia progresista”, mientras que la de Díaz Eimil provenía del otro sector³⁸⁷.

Adscripción de propuestas aparte, lo cierto es que la candidatura de Carlos de la Vega contó en las cuatro votaciones con un respaldo importante (9, 12, 12 y 15, respectivamente), mientras que la de Eugenio Díaz fue reforzándose progresivamente a partir de la exclusión de Martín-Granizo y García Miguel, candidatos con los que había empatado a cinco votos en la primera ronda de votación (luego conseguiría 11, 12 y 14, respectivamente). Ello parece indicar, que el grupo progresista era el que tenía más homogénea la preferencia por sus candidatos, mientras que la del grupo conservador estaba más dividida.

4.1.3.- La segunda renovación (1995)

4.1.3.1.- Designación de Ruiz Vadillo y Delgado Barrio

La segunda renovación parcial de magistrados del TC estuvo a cargo de la tercera formación del CGPJ (1990-1996) y tuvo lugar en la sesión plenaria del 8 de febrero de 1995. Dada la reserva que se impone a los vocales del Consejo sobre el procedimiento selectivo de magistrados, es posible traer a colación algunos datos proporcionados por los medios de comunicación de la

³⁸⁶ DE LA CUADRA, Bonifacio: “El poder judicial elige hoy dos magistrados del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 29 de enero de 1986.

³⁸⁷ *Idem*.

época para figurar una idea del mismo, si bien, debe tenerse en cuenta, las aconsejadas precauciones que el material periodístico plantea en materia de exactitud de la información³⁸⁸.

En cuanto al desarrollo de la sesión, se informó que primeramente se había procedido a la ratificación de unas normas para disciplinar el procedimiento de votación que habían sido aprobadas por la Comisión de Calificación. Estas reglas establecían un diverso tipo de votación para cada una de las dos designaciones. Para la primera plaza, debían someterse a votación todas las candidaturas y si ninguno de los candidatos obtenía la mayoría requerida, la votación debía repetirse solamente entre los dos candidatos más votados hasta que uno lograra la mayoría exigida. Una vez logrado lo anterior, la elección de la segunda plaza pasaría por el mismo procedimiento, sometiendo a votación a todos los candidatos propuestos, excepto al ya designado.

Como se puede ver, estas reglas de votación presentan algunas novedades respecto de las aprobadas en 1986. En primer término en cuanto a la diversa metodología que supone designar las dos plazas de magistrado en votaciones separadas cuando antes era de forma simultánea, y en segundo término, la simplificación de las reglas para la definición de los primeros finalistas, que anteriormente se contemplaban cuatro y ahora solo dos.

En los días previos a la sesión plenaria del Consejo, la prensa había hecho eco de varios nombres de candidatos que iban siendo propuestos por los vocales³⁸⁹. Finalmente en la sesión, se presentarían otros nombres³⁹⁰, con lo que la cifra final de candidaturas ascendería a catorce personas. Para la primera plaza se necesitaron cuatro votaciones, mientras que para la segunda bastó con una.

³⁸⁸ Para los datos de la sesión plenaria del CGPJ se toman como referencia los detalles dados a conocer en la nota de la periodista PERAL, María: "Ruiz Vadillo y Javier Delgado, nuevos magistrados del TC", en *ABC*, 9 de febrero de 1995.

³⁸⁹ La nota periodística daba cuenta de Enrique Ruiz-Vadillo, José Jiménez Villarejo, Pablo García Manzano, Javier Delgado Barrio, José Augusto de Vega, Francisco Soto Nieto, Ramón Trillo, Bartolomé Ríos, José Antonio Martín Pallín y Juan Antonio Xiol Ríos. Aunque los nombres de los últimos dos candidatos, según la nota de prensa, fueron revelados por fuentes próximas a los vocales que los habían propuesto, ya que venían en sobre cerrado, y sería abierto al comienzo de la sesión de pleno. Véase DE LA CUADRA, Bonifacio: "Ruiz-Vadillo es el más firme candidato del Poder Judicial al Constitucional", en *El País*, 5 de febrero de 1995.

³⁹⁰ Fue el caso de Rafael Martínez Emperador, Enrique Bacigalupo, José María Ruiz-Jarabo y Enrique Álvarez-Conde.

En la primera votación Javier Delgado Barrio obtuvo nueve votos, Enrique Ruiz Vadillo, cuatro; Juan Antonio Xiol Ríos, dos; José Jiménez Villarejo, dos, y Pablo García Manzano, dos. Para la segunda votación sólo se someterían los nombres de los dos más votados, lo que arrojó once votos para Delgado Barrio y ocho para Ruiz Vadillo. En la tercera votación, Delgado se mantuvo en los once votos mientras que Ruiz obtuvo siete, registrándose uno en blanco.

Antes de proceder a una cuarta votación, se hizo una pausa a efecto de que los vocales pudieran tener un periodo para ponerse de acuerdo y destrabar la designación. Luego de ello, la cuarta votación arrojó finalmente la mayoría necesaria de trece votos para que fuera designado Ruiz Vadillo, habiendo obtenido Delgado Barrio cinco y registrándose uno en blanco.

Enseguida se pasó a la votación de la segunda plaza, en la cual, en el primer intento Delgado Barrio obtuvo los trece votos requeridos para ser designado magistrado constitucional, mientras que el resto de votos se distribuyó de la siguiente manera: Pablo García Manzano, cuatro votos; Jiménez Villarejo, un voto, y Xiol Ríos, un voto. De esta manera los dos candidatos finalmente consiguieron los trece votos necesarios de un Pleno, que en esa ocasión se compuso de veinte vocales debido a la ausencia de Juan Antonio Xiol, quien, por ser uno de los candidatos propuestos, no estuvo presente en la sesión.

Los dos nuevos magistrados, eran designados puntualmente, pues a quienes iban a sustituir les vencía el periodo de cargo unas semanas después, esto es, el 22 de febrero de 1995. Sin embargo, los Reales Decretos de nombramiento no vendrían sino hasta el 7 de abril, y serían publicados en el BOE al día siguiente, fecha en que realizaron el acto de juramento o promesa ante los reyes y otras autoridades del Estado³⁹¹.

Los dos magistrados constitucionales elegidos tenían una consolidada trayectoria profesional. Por un lado, Enrique Ruiz Vadillo era el Presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo y provenía de la carrera fiscal. Según las opiniones recogidas por la prensa, se le consideraba el candidato “más firme” para ser elegido por el Consejo debido a que no parecía haber

³⁹¹ Véanse los Reales Decretos 530/1995 y 531/1995, de 7 de abril.

fuertes resistencias entre la generalidad de vocales para apoyarlo³⁹². Se informaba además, que era calificado de “moderado”, que no pertenecía a asociación judicial alguna, y que su paso por la Fiscalía lo hacía un fuerte candidato, ya que hasta entonces no había sido nombrado ningún magistrado constitucional de esa extracción profesional³⁹³.

Por otro lado, Francisco Javier Delgado Barrio era Magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, llevaba en la carrera judicial más de tres décadas y había formado parte del primer CGPJ. Los medios de comunicación, informaban asimismo que era miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y que había sido presentado como candidato a la magistratura constitucional fundamentalmente por los vocales propuestos por el PP³⁹⁴.

Atendiendo a la forma en que se llevaron a cabo las votaciones, se puede observar el constante respaldo que guardaba la candidatura de Delgado Barrio. En efecto, en las primeras tres votaciones para determinar la primera plaza, obtuvo respectivamente 9, 11 y 11 votos, con lo que quedaba de manifiesto el apoyo que tenía de un número importante de vocales. En la cuarta votación obtuvo sin embargo, solamente cinco votos, pero en la prensa se explicó que teniendo definidas las dos designaciones, los vocales acordaron aprobar en primer lugar la candidatura de Ruiz Vadillo, por una especie de cortesía protocolaria dada su calidad de Presidente de Sala³⁹⁵. Ello esclarecería el hecho de que en las votaciones para la segunda plaza, la candidatura de Delgado Barrio hubiera obtenido en el primer escrutinio los trece votos sin apenas dificultad.

El constante apoyo profesado a Delgado Barrio, permite conjeturar, en la misma línea resaltada por los medios de comunicación, que era respaldado por

³⁹² Así lo planteaban las notas siguientes: DE LA CUADRA, Bonifacio: “Ruiz-Vadillo es el más firme candidato del Poder Judicial al Constitucional”, en *El País*, 5 de febrero de 1995; “Enrique Ruiz Vadillo, firme candidato para ser elegido hoy magistrado del Tribunal Constitucional”, en *ABC*, 8 de febrero de 1995.

³⁹³ DE LA CUADRA, Bonifacio: “Desacuerdos en el CGPJ para elegir un juez del Constitucional”, en *El País*, 8 de febrero de 1995.

³⁹⁴ Véase la nota del periodista DE LA CUADRA, Bonifacio: “Ruiz-Vadillo y Delgado Barrio, nuevos magistrados del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 9 de febrero de 1995.

³⁹⁵ Un medio de comunicación indicó que el Presidente del CGPJ Pascual Sala Sánchez, “deseaba que la primera designación fuera la de Enrique Ruíz Vadillo, dada su categoría de Presidente de Sala del Supremo”. Véase PERAL, María: “Ruiz Vadillo y Javier Delgado, nuevos magistrados del TC”, en *ABC*, 9 de febrero de 1995.

un grupo determinado de los que pudiera haber al interior del Consejo. Un grupo que sería numeroso, y que podría ser el de aquellos que proyectaran su preferencia por un miembro de la propia APM³⁹⁶. En cambio, la candidatura de Ruiz Vadillo, que en las primeras tres votaciones tuvo 4, 8 y 7 votos, se antojaba como una candidatura respaldada por otro grupo de vocales, aunque menos numeroso y fragmentado (entre los apoyos a García Manzano, Jiménez Villarejo y Xiol Ríos). Se trataba además de un nombre que no generaba rechazos importantes de los vocales del “otro grupo” mayoritario, por lo que podía considerarse una candidatura de consenso.

4.1.3.2.- La sustitución de Delgado Barrio por García Manzano

Tras poco más de un año de haber sido designado magistrado constitucional, Javier Delgado Barrio renunció al cargo debido a que el 24 de julio de 1996 el Pleno del CGPJ lo designó por unanimidad como su Presidente³⁹⁷. Al día siguiente, serían publicados en el BOE los Reales Decretos de cese de la magistratura constitucional y el de nombramiento de Presidente del CGPJ³⁹⁸. En este caso, el CGPJ en su cuarta formación (1996-2001), proveyó la designación de su sustituto al TC, en la sesión del 11 de septiembre de 1996, en la persona de Pablo García Manzano³⁹⁹, esto es, uno de los candidatos que habían tenido cierto respaldo en las designaciones de magistrados efectuadas por el Consejo en 1995.

Para efectuar la elección, el Consejo estableció unas normas para regular la votación. Según estas reglas, en la primera votación cada vocal podía votar por tres candidatos, pasando los cinco más apoyados a la segunda votación. En esta podrían votarse dos de los cinco aspirantes, los cuales una vez definidos, pasarían a una tercera votación, en la cual los vocales sólo

³⁹⁶ La identificación de este “grupo mayoritario” al interior del CGPJ también ha sido reconocida por algunos juristas, véase al respecto ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto: “La renovación del Consejo General del Poder Judicial”, en *Jueces para la Democracia*, núm. 26, julio, 1996, pág. 11.

³⁹⁷ Véanse al respecto las notas de prensa siguientes: YOLDI, José: “Los vocales del Poder Judicial acatan el pacto de los partidos y eligen presidente a Delgado”, en *El País*, 25 de julio de 1996; “Un conservador de autoridad intelectual indiscutida”, en *El País*, 25 de julio de 1996.

³⁹⁸ Véanse respectivamente los Reales Decretos 1839/1996 y 1840/1996, ambos de 24 de julio, publicados en el BOE núm. 179, el 25 de julio de 1996.

³⁹⁹ Recogido en la nota titulada “El Poder Judicial aplaza su decisión sobre el ‘caso Moreiras’”, en *El País*, 12 de septiembre de 1996. Fue nombrado mediante Real Decreto 2064/1996, de 13 de septiembre, publicado en el BOE el 16 de septiembre del mismo de 1996.

podían votar por una persona. Quedaría designado, evidentemente, el candidato que en este escrutinio obtuviera la mayoría requerida.

Como se puede ver, estas reglas suponen otra forma de votación respecto de las aprobadas anteriormente. En este sentido, obsérvese que las primeras dos votaciones solo tienen el propósito de perfilar unos finalistas (cinco primero, dos después), mientras que la votación definitiva para designar al magistrado sustituto es la tercera.

En la sesión, se plantearon hasta quince candidatos, todos los cuales provenían de la carrera judicial, en su mayoría Magistrados del Tribunal Supremo⁴⁰⁰. Una vez efectuada la primera votación, los cinco candidatos más votados fueron Pablo García Manzano con dieciséis votos; Vicente Conde Martín de Hijas, once votos; Ramón Trillo, siete votos; Jiménez Villarejo, seis votos; Jesús Marina, tres votos. En la segunda votación sólo podían votarse dos candidatos y los dos que resultasen más votados pasarían a la tercera votación. Pasaron a ésta última García Manzano y Martín de Hijas, quienes mantuvieron los dieciséis y once votos, respectivamente. El resto de candidatos quedó como sigue: Trillo, cinco votos; Villarejo, cuatro; y Marina, dos.

En la tercera votación, los vocales sólo podían emitir un voto. Aquí se definiría la designación, puesto que Pablo García Manzano obtendría dieciséis votos, mientras que Vicente Conde cuatro, registrándose por otro lado, un voto en blanco.

De este modo, quedaría perfilada la designación de Pablo García Manzano, quien llevaba una larga trayectoria integrado a la carrera judicial, pero en el momento de la elección se desempeñaba como Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS. También entre los años de 1985 y 1990 había sido vocal de extracción judicial de un CGPJ, que estrenaba en el momento el sistema de designación parlamentaria directa de todos sus miembros. Para el cargo de vocal, fue designado por el Congreso de los Diputados (con mayoría de 201 curules del PSOE), dentro de una lista de

⁴⁰⁰ Todos los candidatos eran miembros de la carrera judicial: José Jiménez Villarejo, Ramón Trillo, Rafael Martínez Emperador, Bartolomé Ríos, Jesús Marina, Luis Díaz Valcárcel, Mariano de Oro-Pulido, Mariano Baena, Enrique Cancero, Santiago Martínez-Vares, Pascual Sala, Milagros Calvo, Vicente Conde Martín de Hijas, Pablo García Manzano y Ángel Rodríguez, aunque éste último pidió al Pleno que se retirara su candidatura. Véase la siguiente nota de prensa, de la que además se toma información sobre las votaciones: PERAL, María: "García Manzano, elegido por mayoría del CGPJ nuevo magistrado del Constitucional", en *ABC*, 12 de septiembre de 1996.

candidatos consensuada por el Grupo socialista, popular, minoría catalana y vasco⁴⁰¹.

Como ya se mencionó, García Manzano era uno de los candidatos que en la pasada designación del Consejo no había obtenido los votos necesarios para resultar elegido. Si en la pasada elección una de las plazas había sido otorgada a un magistrado “moderado” o de “consenso” como Ruiz Vadillo y la otra a un magistrado “conservador” como Delgado Barrio, era de esperarse que la sustitución de éste último recayera en alguien de la misma línea ideológica. Sin embargo, en esta ocasión se respaldó con cierta contundencia a Pablo García Manzano (tuvo dieciséis sufragios), una candidatura entendida en la época como más moderada, que había sido acordada mediante consenso.

Este cambio puede entenderse si se repara en que los integrantes del CGPJ no eran los mismos que habían efectuado la renovación anterior de magistrados constitucionales. En efecto, se trataba de una nueva conformación del Consejo, designada por las Cámaras parlamentarias apenas un par de meses antes. Era un Consejo, al que se le ha reconocido una composición equilibrada y plural, de cuyos miembros se ha llegado a decir, que “demostraron ser capaces de ejercer sus funciones con un grado de ecuanimidad y eficacia no alcanzado ni antes ni después”⁴⁰².

Lo anterior puede corroborarse si se atiende a algunos rasgos de la forma en que el mismo Consejo fue confeccionado. El primero es que en la fase de elección parlamentaria, se haría patente que los veinte vocales vendrían de un consenso entre las principales fuerzas políticas⁴⁰³. Un segundo

⁴⁰¹ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Elección para formular propuesta de nombramiento a S.M. el Rey a fin de que designe miembros del Consejo General del Poder Judicial”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 233, II Legislatura, 2 de octubre de 1985, pág. 10602. De la configuración de este Consejo, podía leerse en la prensa que de “los veinte vocales que componen la lista oficial del nuevo Consejo son, aunque afectos a la línea del PSOE en su mayoría (catorce de los veinte), de planteamientos moderados, excepción hecha de algún jurista”. GUNDÍN, J. A.: “El PSOE sacrificó su progresismo en aras del consenso con la oposición”, en *ABC*, 2 de octubre de 1985. Tiempo después, la prensa aludiría a la propuesta de García Manzano al CGPJ, como realizada por el PSOE. DE LA CUADRA, Bonifacio: “El Poder Judicial elige hoy a García Manzano para el Constitucional”, en *El País*, 11 de septiembre de 1996.

⁴⁰² LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo María: “A vueltas con el Consejo General del Poder Judicial”, en *Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas*, núm. 5, 2009, pág. 82.

⁴⁰³ Concretamente por el Grupo parlamentario popular, socialista, vasco, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, *Convergència i Unió* y Coalición Canaria, de las dos Cámaras. Véase SENADO: “Elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial”, en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión del Pleno, núm. 7, VI Legislatura, 23 de julio de 1996, págs. 234-235;

rasgo es que en los medios de comunicación se recogerían las declaraciones de algunos portavoces parlamentarios indicando que las candidaturas se habían definido atendiendo a la cualificación técnica, evitando “extremismos ideológicos”⁴⁰⁴.

Todo ello redundaría en una integración más calibrada de las dos tendencias al interior del Consejo, lo que daría como resultado designaciones de tipo moderado. Así sucedió en esta primera sustitución, pero todo parece indicar que en la siguiente sustitución individual se mantuvo esta prudencial dinámica.

4.1.3.3.- La sustitución de Ruiz Vadillo por Cachón Villar

Esta misma conformación del Consejo (1996-2001) operaba la siguiente sustitución individual que se suscitaba con motivo del fallecimiento del Magistrado Enrique Ruiz Vadillo acaecido el 16 de mayo de 1998. El Consejo procedió a la designación de quien habría de sustituirle cuatro meses después, en la sesión plenaria del 30 de septiembre de 1998⁴⁰⁵. En los acuerdos del Consejo no figura la aprobación de unas normas para llevar a cabo la votación, sin embargo, por la información disponible en los medios de comunicación sobre la forma en que se efectuaron las votaciones, se puede colegir una directriz general. Esta consistiría en el sometimiento de todos los candidatos a una primera ronda de votación donde cada vocal tendría dos votos, tras la cual, pasarían a la segunda los dos candidatos más respaldados y cada vocal tendría solamente un voto.

Todos los candidatos presentados al primer escrutinio provendrían de la carrera judicial, en su mayoría Magistrados del Tribunal Supremo. De esta primera votación, pasarían a la segunda ronda Pablo Cachón que obtuvo dieciséis votos y Jesús Marina que registró nueve. El resto de candidatos quedaría como sigue: Vicente Conde Martín de Hijas, ocho votos; Antonio

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Propuesta de nombramiento de Vocales del Consejo General del Poder Judicial”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 18 (extraordinaria), VI Legislatura, 23 de julio de 1996, págs. 804-805. El BNG y Eusko Alkartasuna no respaldaron la lista, al no ser invitados a la negociación.

⁴⁰⁴ DE LA CUADRA, Bonifacio; Díez, Anabel: “Una lista de 15 hombres y cinco mujeres” y “El PP y el PSOE dicen que en el Poder Judicial pactado prima la calidad sobre la ideología”, en *El País*, ambos de 17 de julio de 1996.

⁴⁰⁵ Véase, CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: *Acuerdos del Pleno*, Madrid, tercer trimestre 1998, pág. 443.

Martín Valverde, dos votos; María Asunción Salvo, uno; y hubo tres votos en blanco⁴⁰⁶. En la segunda votación, Pablo Cachón conseguiría la designación al mantener los dieciséis votos (de los diecinueve posibles, pues dos vocales estaban en comisión en el extranjero), mientras que Jesús Marina no obtendría ninguno, y los tres votos en blanco se repetirían.

Pablo Manuel Cachón Villar se desempeñaba como Magistrado de la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo. Las negociaciones que se llevarían a cabo para efectuar su designación, ciertamente no resultan sencillas de explicar. De ello, buena muestra dan los casi cinco meses que transcurrieron para cubrir la plaza del Magistrado Ruiz Vadillo, un periodo sin duda, largo que no es habitual en las designaciones del Consejo⁴⁰⁷.

En primer término, considérese que el Magistrado Pablo Cachón no pertenecía a ninguna de las dos asociaciones profesionales mayoritarias de Jueces y Magistrados, sino que estaba afiliado a la asociación “Francisco de Vitoria”. Lo anterior, resulta un elemento importante porque, como se ha visto, una variante que ayuda a explicar las designaciones del Consejo tiene relación con la pertenencia del candidato a las asociaciones de jueces más influyentes o la adjudicada cercanía del candidato con los postulados de algún partido político, motivada por la colaboración en alguna función de gobierno o por el respaldo otorgado en la promoción de cargos anteriores.

En ese tiempo, en los medios de comunicación no se dejaba de recoger las “complicadas” negociaciones que tenían los sectores “progresista” y “conservador” del Consejo para perfilar el candidato. Según estas mismas fuentes, la designación obedeció a un pacto entre estos grupos, mediante el cual hubo una suerte de “reparto” en la facultad de designación de cargos.

En la negociación, al parecer la candidatura de Pablo Cachón se presentaba en la última lista que los vocales vinculados al PP habían ofrecido a los vinculados al PSOE, y éstos lo eligieron por estimar que era el menos afín “a la derecha”, y además plantearon como contraprestación a sus votos,

⁴⁰⁶ Para los datos de las votaciones, han servido de base las notas de un par de periodistas, las cuales además, son coincidentes: PERAL, María: “El CGPJ se adelanta a Gobierno y oposición en cubrir las vacantes en el Tribunal Constitucional”, en *ABC*, 1 de octubre de 1998; y LÁZARO MARTÍNEZ, Julio: “El Poder Judicial designa a Pablo Cachón para el Constitucional”, en *El País*, 1 de octubre de 1998.

⁴⁰⁷ El magistrado fue nombrado finalmente mediante el Real Decreto 2166/1998, de 6 de octubre, publicado en el BOE el 8 de octubre del mismo año.

designar al que cubriría la plaza que dejaría Pablo Cachón en el Tribunal Supremo (y la de otro Magistrado del TS que había fallecido).

El grupo de vocales con una adjudicada vinculación al PP aceptaría el planteamiento del PSOE y procederían de esa manera al respaldo del magistrado en la sesión plenaria, lo que explicaría los dieciséis votos que obtuvo Pablo Cachón en las dos votaciones. Al tiempo, se recogería en la prensa el profundo disgusto que ocasionó esta designación en la APM, tanto por la persona designada, como por los vocales vinculados a la asociación que la negociaron. Esta manifestación, podría mostrar en el caso, que el influjo de la APM sobre los vocales de su adjudicado sector no tuvo efecto, y la vehemencia que se imprimió en la crítica, sería indicativo de que esa suerte de actuación “autónoma” no venía siendo habitual: el señalamiento de la APM refería que el “modo de actuar (de los vocales) supone una evidente deslealtad a la asociación”⁴⁰⁸.

4.1.4.- La tercera renovación (2004)

4.1.4.1.- Designación de Sala Sánchez y Rodríguez Arribas

La tercera renovación parcial de magistrados constitucionales estuvo a cargo de la quinta conformación del Consejo (2001-2008), y tuvo lugar en la sesión plenaria del 14 de abril de 2004, en la que se relevó a los Magistrados Pablo García Manzano y Pablo Cachón Villar, quienes habían sido nombrados para cubrir terminaciones anticipadas de cargo, el cual terminaba en los dos casos el 8 de abril de 2004.

El Consejo seleccionó como magistrados constitucionales a Ramón Rodríguez Arribas y a Pascual Sala Sánchez. Según el comunicado hecho público por el propio CGPJ, informó que los dos candidatos habían obtenido diecinueve votos, mientras que el Magistrado del Tribunal Supremo, Cándido

⁴⁰⁸ En efecto, se publicó que José Luis Requero, portavoz de dicha asociación, declaraba no sin cierta dureza, que desconocían cuáles eran “los méritos preferentes de Cachón para ser magistrado del TC, pero, en todo caso, su elección evidencia el grave desequilibrio que existe en este Consejo”. En cuanto a los vocales, la prensa recogió lo siguiente: “junto a unos vocales que saben lo que quieren sin necesidad de desarrollar una especial inteligencia o astucia, hay otros vocales cuya capacidad para enterarse de las cosas y cuyo grado de apercibimiento de las cuestiones de la política judicial ignoramos”. PERAL, María: “El CGPJ se adelanta a Gobierno y oposición en cubrir las vacantes en el Tribunal Constitucional”, en *ABC*, 1 de octubre de 1998.

Conde-Pumpido había recibido sólo uno, “en cada una de las dos votaciones”⁴⁰⁹.

Los dos magistrados designados tenían tras de sí una larga y reconocida carrera judicial. En el momento de la elección, se desempeñaban como Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Ramón Rodríguez Arribas había sido Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura entre los años de 1990-1997, mientras que Pascual Sala Sánchez había sido miembro del Tribunal de Cuentas, y entre 1990 y 1996, fue Presidente del CGPJ y del TS, además de haber pertenecido a la asociación judicial “Jueces para la Democracia” y mucho antes, durante el franquismo a “Justicia Democrática”.

La notable diferencia de perfil entre los dos magistrados hace racionalmente deducir que cada uno de ellos fue propuesto por diverso grupo al interior del Consejo. Si se considera que cada uno de ellos tuvo diecinueve votos, esto es casi la unanimidad del Consejo, se colegirá que los grupos necesariamente llegaron a un acuerdo muy generalizado para apoyar recíprocamente a sus respectivos candidatos.

Ni en los comunicados de prensa del CGPJ ni en la publicación de los de los Acuerdos de la sesión plenaria del mismo, se ofrecen oficialmente más detalles del procedimiento selectivo, tales como las reglas de votación, la presentación de otras candidaturas o los criterios utilizados para la elección⁴¹⁰. Queda por tanto atender al recurso del que venimos acudiendo, esto es, la crónica que se realiza en los medios de comunicación al respecto⁴¹¹.

Como es habitual, la prensa parte de la identificación de dos grupos al interior del Consejo, a saber uno “conservador”, que era el mayoritario y con mayor sentido de integración, y otro “progresista”, menos numeroso y más

⁴⁰⁹ Según el Comunicado 3036 del Consejo General del Poder Judicial en el que daba a conocer la designación de los magistrados constitucionales. Disponible en www.poderjudicial.es. Fueron nombrados mediante los Reales Decretos 1406/2004 y 1407/2004, ambos de 8 de junio, publicados en el BOE al día siguiente.

⁴¹⁰ Véase el Acuerdo del Pleno del CGPJ, del día 14 de abril de 2004, disponible en www.poderjudicial.es.

⁴¹¹ Véanse las notas de DE LA CUADRA, Bonifacio: “La minoría del Poder Judicial lleva a Pascual Sala al Constitucional. El Consejo también elige hoy al candidato conservador Rodríguez Arribas”, en *El País*, 14 de abril de 2004; y MARÍN, Manuel: “El CGPJ propondrá hoy a Rodríguez Arribas y Sala como nuevos magistrados del TC”, en *ABC*, 14 de abril de 2004; DE LA CUADRA, Bonifacio: “Rodríguez Arribas y Pascual Sala, elegidos para el Constitucional”, en *El País*, 15 de abril de 2004.

fraccionado. En este caso, se refirió que el sector conservador sugería varios nombres, pero en general tenía más fuertemente perfilada una candidatura, mientras que el grupo progresista tuvo que realizar una suerte de “elección interna” para determinar el nombre del candidato que “como grupo” llevarían de propuesta a la sesión plenaria del Consejo.

Se refiere al efecto, que los conservadores planteaban el nombre de Juan José González Rivas, pero la propuesta más consolidada era la de Ramón Rodríguez Arribas. En cambio por el sector progresista, la votación “interna” arrojaba como candidato común a Pascual Sala Sánchez, quien obtuvo seis votos, mientras que Cándido Conde-Pumpido Tourón obtuvo dos y Juan Antonio Martín Pallín registró uno.

Según las declaraciones de un vocal del Consejo que fueron reproducidas en los medios de comunicación, uno de los factores por el que el grupo progresista se decantó por Pascual Sala, era por el riesgo que planteaba la vacante que tanto Conde-Pumpido o Martín Pallín dejarían en una Sala del TS tan importante como la Penal, de la cual ambos eran Magistrados, y la posibilidad de que el sector mayoritario las cubriera con personas de su extracto ideológico, inclinando la composición en su favor (recuérdese que en aquél momento, este tipo de nombramientos judiciales se acordaban con la mayoría simple, hasta que meses después la LO 2/2004, exigiera, entre otras cosas, la mayoría calificada). Supuestamente, este sería un factor que había “pesado mucho” en la votación interna.

Los candidatos de cada grupo estaban de esta forma definidos, pero ninguno de ellos, por sí solo conseguía los trece votos necesarios para operar la designación. Según la información facilitada en la prensa, se adjudicaban al grupo conservador once integrantes, resultado de sumar los diez vocales “propuestos por el PP” y el Presidente del CGPJ (Francisco José Hernando Santiago), mientras que al sector progresista se le identificaban diez vocales, incluyéndose ahí los seis vocales propuestos por el PSOE, el propuesto por IU, el propuesto por CiU y dos de consenso entre el PP y PSOE.

El acuerdo entre los dos grupos, explicaría el respaldo ya mencionado de diecinueve votos a los dos magistrados designados, si bien con algún vocal que mantuvo su apoyo a Conde-Pumpido. Cobra también plena relevancia las declaraciones recogidas por la prensa del vocal y portavoz del Consejo Enrique

López López, quien destacó que la elección era “buen ejemplo de pluralismo” y que podría “ser perfectamente seguida por otros órganos llamados a nombrar magistrados del alto tribunal”. Por su parte la APM, mostró su satisfacción por la designación de Rodríguez Arribas, a quien describió como “nuestro compañero y valedor ante todos y durante todo el tiempo”⁴¹².

4.1.5.- La cuarta renovación (2013)

4.1.5.1.- Designación de Xiol Ríos y Martínez-Vares

La finalización del cargo de dos magistrados el 9 de junio de 2013 motivaba la más reciente renovación a cargo de la sexta conformación del CGPJ (2008-2013). En esa fecha, terminaban los cargos de quienes se desempeñaban como Presidente y Vicepresidente del TC, es decir Pascual Sala Sánchez y Ramón Rodríguez Arribas. El 31 de enero del mismo año, el CGPJ daba cuenta de la recepción de la comunicación prevista por el art. 17 de la LOTC, mediante la cual el Presidente del TC instaba al órgano para efectuar la renovación. Luego de dar cuenta de la misma al Pleno, el Presidente del CGPJ declaró la apertura del procedimiento selectivo el 7 de marzo de 2013⁴¹³.

La siguiente fase del procedimiento de la que se facilita información oficial, sería la publicación del orden del día de la sesión plenaria del CGPJ del 16 de mayo de 2013. En esta, se colocaría en el último punto a tratar, la votación de las candidaturas para elegir a los dos magistrados que corresponde al Consejo⁴¹⁴. En la sesión, sin embargo, no se conseguiría la mayoría necesaria, por lo que se acordaría “posponer, para una próxima sesión plenaria, la presentación de candidaturas para la elección de Magistrados del Tribunal Constitucional”⁴¹⁵.

⁴¹² MARÍN, Manuel: “El CGPJ, de forma casi unánime, elige a Arribas y Sala nuevos jueces del TC”, en ABC, 15 de abril de 2004.

⁴¹³ Véase al respecto la Comunicación publicada en el portal de Internet del CGPJ, el 15 de marzo de 2012, disponible en www.poderjudicial.es/cgpi/es/Poder_Judicial/En_Portada/Apertura_del_procedimiento_para_formular_las_candidaturas_que_corresponden_al_CGPJ_en_la_renovacion_del_Tribunal_Constitucional.

⁴¹⁴ CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: Orden del día, sesión plenaria de 16 de mayo de 2013 (publicada en www.poderjudicial.es).

⁴¹⁵ CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: Acuerdos del Pleno, adoptados el 16 de mayo del año 2013, número cuatro (disponible en la página de Internet del poder judicial).

Finalmente se convocaría al Pleno a una sesión extraordinaria el viernes 7 de junio de 2013. Según el comunicado que hizo público el propio CGPJ, serían designados como magistrados para el TC, Juan Antonio Xiol Ríos y Santiago Martínez-Vares García, ambos recibiendo un apoyo de dieciocho votos, mientras que las candidaturas de Cándido Conde-Pumpido Tourón y Ricardo Enríquez Sancho, habían obtenido tres votos cada una⁴¹⁶.

Los magistrados fueron nombrados mediante los Reales Decretos 423 y 424, ambos del 12 de junio de 2013 y fueron publicados en el BOE al día siguiente, fecha en la que además juraron o prometieron el cargo ante el Rey y tomaron posesión del mismo en una ceremonia realizada en la sede del Tribunal Constitucional⁴¹⁷.

Como resulta habitual en las designaciones del Consejo, los dos candidatos elegidos provenían de una larga y consolidada carrera judicial. Santiago Martínez-Vares García era Magistrado emérito en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (se había jubilado en 2012), y entre 1997 y 2001 había sido Presidente de la APM⁴¹⁸. Juan Antonio Xiol Ríos, por su parte, era Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo, pero anteriormente había tenido otros cargos importantes fuera de la carrera judicial tales como Secretario General del Tribunal Constitucional (1982-1985), Director General de Relaciones con la Administración de Justicia en el gobierno socialista (1985-1990), vocal del CGPJ de extracción judicial a propuesta del Senado (1990-1996), miembro de la Junta Electoral Central, Presidente interino del TS (junio-julio de 2012), entre otros.

Como se puede observar, los dos candidatos cubren sobradamente los requisitos para acceder a la magistratura constitucional, sin embargo, los perfiles son muy disímbolos, de modo que al igual que el resto de designaciones que se han estudiado, es factible considerar que la designación de este tipo de perfiles corresponda al influjo de cada uno de los grupos que desde siempre suelen reconocerse al interior del Consejo. De igual modo, el hecho de que hayan sido apoyados con dieciocho de los veintinueve votos

⁴¹⁶ CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: Comunicado de 7 de junio de 2013, por el que informa la designación de Juan Antonio Xiol Ríos y Santiago Martínez-Vares García, como magistrados del Tribunal Constitucional (disponible en www.poderjudicial.es).

⁴¹⁷ FABRA, María: "Los cuatro nuevos magistrados del Constitucional inician su mandato", en *El País*, 13 de junio de 2013.

⁴¹⁸ Según información de la propia APM, disponible en www.magistratura.es.

posibles, muestra un acuerdo importante entre los grupos, que denota el apoyo mutuo que se profesaron a sendas candidaturas.

A falta de información oficial, y como venimos haciéndolo, veamos la crónica de las negociaciones que se realizaron en los medios de comunicación⁴¹⁹. Como primer punto, se comenzó a recoger algunos nombres o “preferencias” que se planteaban para las candidaturas por parte de unos vocales del Consejo, los cuales en su gran mayoría se trataba de Magistrados del Tribunal Supremo. Como ya es habitual, los nombres presentados eran distinguidos según provinieran de los denominados grupos de vocales “conservadores” o bien de los “progresistas”⁴²⁰.

La prensa por otro lado, recogía que había un ambiente de desacuerdo entre un gran número de vocales para perfilar el apoyo por alguno de los candidatos presentados. El problema en esta ocasión, se tornaba más complicado debido a que los grupos al interior del Consejo, se encontraban a su vez subdivididos. Asimismo, la complejidad para conseguir un acuerdo, pasaba también por la falta de definición de las “reglas previas para votar” las candidaturas.

Finalmente, el bloque “conservador” centró los apoyos en Martínez-Vares, mientras que buena parte del sector progresista se decantó por Xiol Ríos. Los grupos se vieron en la necesidad de buscar un acuerdo pues ninguno por sí solo podía conseguir los trece votos necesarios para acordar la

⁴¹⁹ Véanse, entre otras, las siguientes notas de periódico: HERNÁNDEZ, José Antonio: “El Poder Judicial reabre su batalla por el Constitucional”, en *El País*, 11 de marzo de 2013; GAREA, Fernando: “Rajoy tiene listo el vuelco de la mayoría en el Tribunal Constitucional”, en *El País*, 11 de marzo de 2013; “Xiol y Enríquez, favoritos para entrar en el Tribunal Constitucional”, en *ABC*, 17 de abril de 2013; EUROPA PRESS: “No logra el consenso necesario. La falta de acuerdo en el CGPJ obliga a posponer ‘sine die’ la renovación de magistrados del TC”, en *La Vanguardia*, 16 de mayo de 2013; GAREA, Fernando: “El Poder Judicial abre la vía para el giro conservador en el Constitucional”, en *El País*, 16 de mayo de 2013; “La falta de acuerdo en el Poder Judicial aplaza la renovación del Constitucional”, en *El País*, 16 de mayo de 2013; HERNÁNDEZ, José Antonio: “Reuniones, negociaciones y amiguismo”, en *El País*, 7 de junio de 2013; HERNÁNDEZ, José Antonio; GAREA, Fernando: “El Poder Judicial designa a Vares y Xiol para el Tribunal Constitucional”, en *El País*, 7 de junio de 2013.

⁴²⁰ Entre los candidatos adjudicados al sector “progresista” se encontraban, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón (Magistrado de la Sala Penal del TS, y ex Fiscal General del Estado), Juan Carlos Campo (Magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz, vocal del Poder Judicial en el periodo 2001-2008). Por el sector “conservador”, se referían los nombres de Santiago Martínez-Vares García, Jesús Souto Prieto (Magistrado emérito de la Sala Cuarta de los Social del TS); José Manuel López García de la Serrana (Magistrado de la Sala Cuarta de lo Social del TS); y Ricardo Enríquez Sancho (Magistrado Presidente de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS, y Vicepresidente de la APM).

designación. Se decía que cada uno de los sectores contaba al menos con nueve votos, mientras que había tres vocales que no se enmarcaban en ninguna de las “sensibilidades” que se manifestaban al interior del Consejo. Los grupos pasaron por intensas negociaciones y diversas reuniones informales para conseguir un acuerdo, y cuando el mismo fue logrado, según se informó, el Pleno del CGPJ tramitó “en apenas media hora” la designación de los magistrados⁴²¹.

4.2.- El Gobierno

4.2.1.- Las (escasas) reglas del procedimiento selectivo

La CE asignó la competencia al Gobierno para elegir dos magistrados constitucionales, pero nada dispuso sobre el procedimiento para designarlos. Esa misma omisión puede observarse igualmente en la LOTC, y quizá desde el punto de vista del sistema de fuentes, es acertado que así haya sido, pues como ya lo mencionábamos, no sería adecuado que una Ley de desarrollo del Tribunal Constitucional regulara aspectos internos de otro órgano fundamental del Estado como lo es el Gobierno.

En esa tesitura, sería la ley que disciplina a la institución gubernamental el medio más idóneo para regular detalladamente la forma en que este procedimiento selectivo se llevaría a cabo, sin embargo no se encuentra en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (LG), ninguna alusión a esta facultad. Con ello, se puede concluir que la misma será ejecutada mediante los procedimientos generales que realiza el Gobierno para el ejercicio de sus competencias.

De lo anterior se deriva que el Gobierno se convierta en el único órgano proponente sobre el cual no se exige una específica mayoría para acordar la selección del magistrado constitucional. Aunque por otro lado, la naturaleza misma del funcionamiento del Gobierno difícilmente podría enmarcar una exigencia de esta índole, pues las decisiones se entienden adoptadas por el Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno y además por la

⁴²¹ VILLANUEVA, Nati: “El Gobierno nombra a López y González Trevijano para un TC de mayoría conservadora”, en *ABC*, 7 de junio de 2013.

preeminencia que ostenta su Presidente, “quien dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo” (98.2 CE y 2.1 LG).

Esta misma preeminencia “constitucional” y “legal” del Presidente de Gobierno, unida a su liderazgo político, lo convierten en el actor principal del procedimiento, de modo que reposarán en él las poderosas facultades de propuesta, promoción y designación. En cualquier caso, se entiende que en el procedimiento formal, las candidaturas deben atravesar por una fase inicial de verificación del cumplimiento de los requisitos para el cargo, que además serviría para configurar documentalmente el expediente y su tramitación administrativa. Dicho “examen”, podría ser llevado a cabo por la “Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios”, en tanto que es la formación de trabajo encargada de la preparación de todos los asuntos que vayan a someterse a la aprobación del Consejo de Ministros, según lo disponen los párrafos cuarto y quinto del artículo 8 de la LG.

Tras esta fase inicial de preparación de la candidatura, es de esperarse que en el seno de la sesión o sesiones del Consejo de Ministros en las que este tema se trate, pueda abrirse una fase de deliberación, o como mínimo, un espacio para que los miembros del Consejo emitan alguna opinión sobre las candidaturas. Quizá podrían caber observaciones a las mismas, o lo que parece más viable, para poner en común los criterios para respaldarlas.

No obstante, no se tiene constancia oficial de que ello suceda de la forma relatada, debido a que al igual que las sesiones plenarias del CGPJ, las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas (5.3 LG). Por otra parte, de llevar a cabo un procedimiento como el que se ha hecho referencia, lo más seguro es que termine siendo una etapa de formalización de las propuestas realizadas sustancialmente por el Presidente de Gobierno.

4.2.2.- Las designaciones efectuadas por el Gobierno

4.2.1.1.- La designación inaugural: Arozamena Sierra y Gómez-Ferrer Morant

La primera designación a cargo del Gobierno fue acordada formalmente en la reunión del Consejo de Ministros del 25 de enero de 1980. En esa época, el Presidente del Gobierno era Adolfo Suárez con UCD, luego de las elecciones

generales celebradas el 1 de marzo de 1979 en las cuales ese partido había obtenido 168 escaños, mientras que sus más cercanos competidores fueron el PSOE con 121, el Partido Comunista de España con 23, Coalición Democrática con 9 y *Convergencia i Unió* con 8⁴²².

La designación recayó en Jerónimo Arozamena Sierra, quien pertenecía a la carrera judicial, y quien al haberse creado la Audiencia Nacional, se había incorporado como Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Arozamena Sierra había formado parte de la comisión que preparó el Proyecto de la LOTC, y en el momento que fue designado para la magistratura constitucional, se desempeñaba como subsecretario del Ministerio de Trabajo en el Gobierno de Suárez. La otra designación fue la de Rafael Gómez-Ferrer Morant, quien era Letrado del Consejo de Estado y se desempeñaba como Catedrático de Derecho Administrativo en la *Universitat de les Illes Balears*.

Según fue registrado en los medios sociales de comunicación, la designación de los magistrados descansó en el Presidente centrista Adolfo Suárez, si bien en el marco más general de negociación para acordar la designación del resto de magistrados de nómina parlamentaria entre UCD y PSOE⁴²³. Este acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas fue muy característico de la época en que se puso en marcha la Constitución de 1978 y las primeras leyes e instituciones de esta fase democrática del país.

De esta manera, se decía que las plazas de nómina gubernamental y parlamentaria, se habían puesto en un mismo “paquete” de negociación política, entre las cuales, cinco candidatos serían propugnados por el Gobierno, tres por los socialistas y otros dos por consenso (aunque de iniciativa centrista, pero que contaban con amplios respaldos entre las partes negociadoras)⁴²⁴.

⁴²² Datos tomados del apartado de resultados de elecciones generales del portal de Internet de la Junta Electoral Central, en www.juntaelectoralcentral.es.

⁴²³ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El procedimiento de elección de magistrados constitucionales”, *op. cit.*, pág. 181. Véase además la nota del periodista DE LA CUADRA, Bonifacio, “¿Imagen bipartidista?”, en *El País*, 26 de enero de 1980.

⁴²⁴ En este acuerdo, los cinco designados por el Gobierno serían Aurelio Menéndez, Jerónimo Arozamena, Rafael Gómez Ferrer, Gloria Begué y Luis Díez Picazo; los tres designados por el PSOE serían Manuel Díez de Velasco, Ángel Latorre y Francisco Tomás y Valiente; mientras que los consensuados serían Francisco Rubio Llorente y Manuel García-Pelayo. Véase DE LA CUADRA, Bonifacio: “Los diez primeros magistrados constitucionales, fruto del consenso UCD-PSOE”, en *El País*, 12 de julio de 1980.

Entre los cinco candidatos presentados por el Gobierno, estuvieron los dos de su competencia, que fueron precisamente los que se han mencionado⁴²⁵.

4.2.1.2.- Primera renovación: Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (1986)

La primera renovación de magistrados a cargo del Gobierno, vino a causa del segundo sorteo previsto en la DT 9ª de la CE, para activar la cadencia de renovaciones parciales. De esta suerte, el Gobierno se veía obligado a sustituir a los magistrados que habían sido nombrados seis años antes. En esta ocasión, sin embargo, el Gobierno estaría en manos de otro partido político.

El 21 de febrero de 1986 el Consejo de Ministros procedió a la renovación de los magistrados. En esa época, estaba llegando a su fin el primer mandato del Presidente Felipe González, quien había llegado al cargo en las elecciones generales de 28 de octubre de 1982. En estas elecciones como se recordará, el PSOE había obtenido una rotunda victoria, registrando la mayoría absoluta con 202 escaños⁴²⁶ de los 350 que integran el Congreso, mientras que los más cercanos serían AP-PDP con 107, CiU con 12, UCD cayó a 11, y el Partido Nacionalista Vasco con 8⁴²⁷.

Una de las designaciones recaería en Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, quien era Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Había sido además Decano de la Facultad de Derecho y candidato del PSOE para el Senado en 1977, pero no resultó elegido⁴²⁸. La otra plaza sería para Luis María López Guerra, quien era Catedrático de Derecho Político de la Universidad de Extremadura, pero también se había desempeñado como Letrado del Tribunal Constitucional y vocal de la Junta Electoral Central a propuesta de la Mesa del Congreso. Los dos serían nombrados mediante los Reales Decretos 363/1986 y 364/1986, ambos de 21 de febrero⁴²⁹.

⁴²⁵ Los magistrados fueron nombrados mediante los Reales Decretos 301/1980 y 306/1980, ambos de 14 de febrero, publicados en el BOE núm. 46, el 22 de febrero de 1980.

⁴²⁶ De los cuales 177 fueron obtenidos por el PSOE y 25 por el Partido Socialista de Catalunya.

⁴²⁷ Ver resultados en www.juntaelectoralcentral.es.

⁴²⁸ Véase la nota de periódico siguiente: "Las candidaturas andaluzas", en ABC (Sevilla), 10 de mayo de 1977, pág. 9.

⁴²⁹ Publicados en el BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1986.

La selección gubernamental se caracterizaría por el reconocimiento que había tanto de los socialistas como de los “conservadores”, de que las designaciones recaían en personas, según la prensa, “vinculadas” con el Gobierno. En concreto, se destacaban “las buenas relaciones de Miguel Rodríguez-Piñero con Felipe González”, quien había sido su alumno, y de Luis López Guerra, se mencionaba la afinidad que guardaba con el Vicepresidente de Gobierno, y en general, se le consideraba vinculado “al sector constitucionalista del PSOE”⁴³⁰.

Como se puede ver, en esta selección, a diferencia de la designación inaugural, las dos plazas no serían negociadas en un seno más amplio con otros partidos⁴³¹, sino que el Gobierno socialista, con la abrumadora mayoría conseguida, procedió a confeccionar por sí solo las dos candidaturas que le correspondían.

4.2.1.3.- Segunda renovación: Jiménez de Parga y Vives Antón (1995)

La segunda renovación gubernamental de magistrados constitucionales se efectuó durante el cuarto y último periodo de Gobierno de Felipe González. El cargo venía por haber triunfado en las elecciones generales celebradas el 6 de junio de 1993, en las cuales el PSOE, aunque registrando una considerable pérdida de apoyos respecto a las elecciones anteriores, había conseguido 159 escaños⁴³², mientras que el PP había logrado 138, CiU 17 y IU 15⁴³³.

El Consejo de Ministros, acordó en su sesión del 31 de marzo de 1995 designar como magistrado constitucional a Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien era Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, pero antes lo había sido de la Universidad de Barcelona. Se destacaba además su experiencia política, pues había sido

⁴³⁰ DE LA CUADRA, Bonifacio: “García-Mon y Jesús Leguina serán elegidos por el Parlamento magistrados del Tribunal Constitucional. Tomás y Valiente, firme candidato a presidir el alto órgano”, en *El País*, 11 de febrero de 1986; PERAL, María: “Los magistrados designados por el Gobierno monopolizan los cargos del Constitucional”, en *ABC*, 16 de julio de 1992, pág. 23.

⁴³¹ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El procedimiento de elección de magistrados constitucionales”, *op. cit.*, pág. 181.

⁴³² Específicamente, 18 del PSC y 141 del PSOE.

⁴³³ JUNTA ELECTORAL CENTRAL: Acuerdo de 13 de julio de 1993, por el que se ordena la publicación del resumen de los resultados de las elecciones para el Congreso de los Diputados y el Senado convocadas por Real Decreto 534/1993, de 12 de abril, y celebradas el 6 de junio de 1993, según los datos que figuran en las actas de escrutinio general remitidas por cada una de las Juntas Electorales Provinciales (BOE núm. 169, de 16 de julio de 1993).

diputado por Barcelona en las Cortes Constituyentes (1977) en las listas de UCD, y en el primer Gobierno de la democracia fue nombrado Ministro de Trabajo. También entre 1978 y 1981 había sido Embajador de España ante la Organización Internacional del Trabajo. En 1994 había sido propuesto por el PSOE para Defensor del Pueblo, pero no se consiguió.

El otro cargo sería para Tomás Salvador Vives Antón, quien era Catedrático de Derecho Penal, aunque en el momento de la designación se desempeñaba como vocal del CGPJ (a propuesta del PSOE). Había sido Letrado del Tribunal Constitucional, era fiscal en excedencia y también había ejercido cargos universitarios, siendo Vicerrector de la Universidad de Valencia.

La designación gubernamental mereció comentarios de profunda disconformidad por parte de quien fuera el Secretario General del PP, Francisco Álvarez Cascos. Dijo que con estos nombramientos, el único empeño del PSOE era “aferrarse al poder”. En cuanto a la elección de Jiménez de Parga, expresó que éste había “mantenido una actitud de hostilidad permanente y pública hacia el Partido Popular”, y que el nombramiento de Vives Antón tenía “marcado cariz ideológico”⁴³⁴.

En esta ocasión, por primera vez el Gobierno incurrió en un retraso de 37 días en la renovación de los magistrados. En efecto, el cargo de los Magistrados Rodríguez-Piñero y López Guerra finalizaba el 22 de febrero de 1995 y la sustitución vino hasta la sesión del Consejo de Ministros del 31 de marzo de 1995 y la publicación de los Reales Decretos de nombramiento hasta el 8 de abril⁴³⁵. Este retraso fue destacado marcadamente por la prensa, y según los comentarios recogidos en ésta, algunos sugerían que el retraso había sido ocasionado por las dificultades para “poner de acuerdo” al Gobierno, con PSOE, e incluso se develaban ciertos contactos con CiU⁴³⁶. En cualquier

⁴³⁴ DE LA CUADRA, Bonifacio: “El Gobierno nombra a Jiménez de Parga y Vives jueces del Constitucional. Álvarez Cascos arremete contra la elección de ambos magistrados”, en *El País*, 1 de abril de 1995; “Cascos acusa a Felipe González de aferrarse al poder con las designaciones”, en *ABC* (Sevilla), 1 de abril de 1995, pág. 20.

⁴³⁵ Fueron nombrados por los Reales Decretos 528/1995 y 529/1995, ambos de 7 de abril, y publicados en el BOE núm. 84, de 8 de abril de 1995.

⁴³⁶ Véase el comentario editorial de *El País* titulado “Nueva etapa del TC”, en la edición del 4 de abril de 1995; además la nota del periodista DE LA CUADRA, Bonifacio: “El Gobierno piensa en Tomás Vives y Luciano Parejo para renovar el Constitucional, con un mes de retraso”, en *El País*, 21 de marzo de 1995.

caso, se destacaría el perfil “progresista” de los dos magistrados designados y el respaldo socialista a los dos candidatos⁴³⁷.

4.2.1.4.- Tercera renovación: Aragón Reyes y Pérez Tremps (2004)

La tercera renovación de magistrados constitucionales de selección gubernamental fue acordada en la sesión del Consejo de Ministros del 4 de junio de 2004. En esta ocasión, el Gobierno era presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien apenas unos meses antes había ganado las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. En estos comicios, el PSOE había obtenido 164 escaños, mientras que el PP se había quedado con 146, CiU con 10, Esquerra Republicana de Cataluña con 8, el Partido Nacionalista Vasco 7, entre otros⁴³⁸.

Una de las plazas se adjudicó a Manuel Aragón Reyes, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que había sido Decano años antes. La otra fue para Pablo Pérez Tremps, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. De ambos, se reconocería su gran prestigio como Profesores de Derecho, quienes además tenían una vasta obra escrita en la materia.

En cuanto a la articulación de las designaciones, y siguiendo los datos disponibles en los medios de comunicación, se puede entender que no fueron empresa fácil o que al menos no se encontraban tan claramente perfilados los candidatos, pero que en cualquier caso no serían negociados con fuerzas políticas ajenas al PSOE. Un primer dato que podría confirmar lo anterior, sería el hecho de que el Presidente de Gobierno hubiera dado su visto bueno hasta “el último momento”, según se dijo. Es decir, que aceptó finalmente a los

⁴³⁷ Véase, “La renovación del Tribunal Constitucional. El Gobierno se decidió por dos catedráticos progresistas”, en *ABC* (Sevilla), 1 de abril de 1995, pág. 20.

⁴³⁸ JUNTA ELECTORAL CENTRAL: Acuerdos de 25 de marzo y de 22 de abril de 2004, por los que se ordena la publicación del resumen de los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 100/2004, de 19 de enero, y celebradas el 14 de marzo de 2004, conforme a las actas de escrutinio general y de proclamación de electos remitidas por las distintas Juntas Electorales Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla (BOE núm. 109, de 5 de mayo de 2004).

designados tras varios intentos previos, hasta que se consiguió despachar la designación⁴³⁹.

Un segundo dato, sería el periodo ligeramente dilatado que ocupó el Gobierno en designar a los nuevos magistrados, una vez que éste se constituyó. Los magistrados salientes habían terminado su periodo el 8 de abril de 2004 y una semana después se estaba nombrando al nuevo Presidente de Gobierno⁴⁴⁰ (terminaba el periodo de José María Aznar) y el 22 de abril se celebró la sesión conjunta de apertura de la VIII Legislatura. Desde esta constitución y hasta que el 4 de junio se proveyeran las designaciones, pasarían todavía 43 días (sin contar que hasta el 9 de junio se publicaron los Reales Decretos de nombramiento⁴⁴¹), que aún eliminando el tiempo que pudiera ocupar habituarse y “poner en marcha” el Gobierno, no deja de observarse un retraso, aunque ciertamente muy leve, pero que podría ser indicativo de las dificultades de la designación.

Finalmente, en cuanto al perfil de los candidatos, según los medios de comunicación, se les adjudicaba a los dos Catedráticos una “sensibilidad progresista” y un historial profesional altamente cualificado que no se había mostrado especialmente opuesto a las acciones o planteamientos constitucionales del PSOE⁴⁴². Por otro lado, algunas fuerzas políticas nacionalistas observaban la falta de elección de juristas con “sensibilidad autonómica”, mientras que para sectores jurídicos, no dejaba de señalarse el no haber cuidado la perspectiva de género o la incorporación de un penalista o procesalista, habida cuenta de que la mayoría de recursos de amparo plantean aspectos de la materia⁴⁴³.

4.2.1.5.- Cuarta renovación: González-Trevijano y López López (2013)

⁴³⁹ Ver la nota titulada “El Gobierno nombra a los catedráticos Aragón y Pérez Tremps miembros del TC”, en *ABC*, 5 de junio de 2004.

⁴⁴⁰ Real Decreto 552/2004, de 16 de abril, por el que se nombra Presidente del Gobierno a don José Luis Rodríguez Zapatero (BOE núm. 93 de 17 de abril de 2004).

⁴⁴¹ Se trató de los Reales Decretos 1404/2004 y 1405/2004, ambos de 8 de junio, publicados en el BOE núm. 139, de 9 de junio de 2004.

⁴⁴² “El Gobierno nombra a los catedráticos Aragón y Pérez Tremps miembros del TC”, en *ABC*, 5 de junio de 2004.

⁴⁴³ DE LA CUADRA, Bonifacio: “El Gobierno designa a Pérez Tremps y a Aragón para renovar el Constitucional”, en *El País*, 5 de junio de 2004.

La cuarta renovación se llevó a cabo el 7 de junio de 2013, siendo Presidente del Gobierno Mariano Rajoy Brey, quien había llegado al cargo mediante el rotundo éxito que tuvo el Partido Popular en las elecciones de 20 de noviembre de 2011. En efecto, en estas elecciones, el PP obtuvo la mayoría absoluta, consiguiendo 186 escaños⁴⁴⁴, mientras que las fuerzas que le siguieron más de cerca fueron el PSOE con 110⁴⁴⁵, CiU con 16, y 11 de la Izquierda Plural⁴⁴⁶.

En esta renovación, el Gobierno designó para una de las plazas a Pedro José González-Trevijano Sánchez, quien se desempeñaba como Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, de la que era también Catedrático de Derecho Constitucional.

El otro cargo fue para Enrique López López, quien desde mediados de 2008 se desempeñaba como Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Desde 1989 había ingresado a la carrera judicial, ocupando en ese periodo otros cargos en el CGPJ, como Letrado primero, y luego vocal y portavoz (2001-2008).

Según las declaraciones de la Vicepresidenta y portavoz del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, la “filosofía” que había orientado la designación de los magistrados, era tener en cuenta los perfiles por los que se estaba decantando el CGPJ (un civilista y un administrativista), para completar en el grupo de renovación una composición que “abarcara las distintas disciplinas que son importantes en el seno del Tribunal Constitucional: por nuestra parte, un constitucionalista y un procesalista-penalista”⁴⁴⁷.

Esta renovación del Gobierno ha sido generalmente entendida como de gran talante conservador. Así también se le planteó a la portavoz del Gobierno en la conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros, a lo

⁴⁴⁴ Específicamente, 170 del PP, ocho de Coalición PP y Partido Aragonés, seis de la coalición PP y Extremadura Unida, y dos de la coalición PP y Unión del Pueblo Navarro.

⁴⁴⁵ El PSOE tuvo 96 y 14 el PSC.

⁴⁴⁶ JUNTA ELECTORAL CENTRAL: Acuerdo de 7 de diciembre de 2011, por el que se publica el resumen de los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, y celebradas el 20 de noviembre de 2011, conforme a las actas de escrutinio general y de proclamación de electos remitidas por las correspondientes Juntas Electorales Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla (BOE núm. 297, de 10 de diciembre de 2011).

⁴⁴⁷ Véase “Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Defensa y Economía, después de la reunión del Consejo de Ministros”, Madrid, viernes 7 de junio de 2013 (transcripción disponible en www.lamoncloa.gob.es).

que respondió que se habían limitado a “seguir el procedimiento que está previsto en la Ley”. Con ello, lo que puede apreciarse, es que en esta designación el Gobierno no negoció las candidaturas con otra fuerza política, sino que los nombres surgieron del propio grupo político gobernante. Quizá la prueba más palpable de lo anterior haya sido la designación de Enrique López López, candidato persistentemente presentado por el PP en las designaciones senatoriales de 2010, pero como se verá más adelante, la candidatura fue excluida del procedimiento por la Mesa del Senado, al estimar que no cumplía con el requisito de los quince años de ejercicio profesional.

La designación de este candidato causó además bastantes reacciones críticas entre la oposición y algunos operadores jurídicos, quienes observaron en la misma un marcado criterio de elección de tipo ideológico⁴⁴⁸. Este señalamiento se basa en una serie de actividades públicas del designado que lo han mostrado muy cercano al Partido Popular y a sus postulados ideológicos. Entre ellos, su frecuente participación en los seminarios de la “Fundación para el análisis y los estudios sociales” (FAES), un “think-tank” que entre los objetivos que la misma Fundación se plantea, se encuentra el de crear y promover ideas para “nutrir el pensamiento y la acción política del Partido Popular”⁴⁴⁹.

En este mismo terreno se inscriben sus numerosas declaraciones a la prensa o columnas de opinión, donde se ha pronunciado especialmente sobre algunos temas que serán objeto de juicio en el Tribunal Constitucional⁴⁵⁰. La polémica tendría su punto de repercusión al interior del Tribunal Constitucional, donde como ya se recordaba, superó el trámite de verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso con el voto de calidad del Presidente del TC.

Los magistrados finalmente fueron nombrados mediante los Reales Decretos 421/2013 y 422/2013, ambos de 12 de junio⁴⁵¹. Después vinieron los habituales actos de jura y toma de posesión del cargo.

⁴⁴⁸ Véanse, por ejemplo, algunas de las siguientes notas de prensa: GAREA BARAGANO, Fernando: “Enrique López, recompensa al juez vinculado al PP”, en *El País*, 7 de junio de 2013; “El eterno candidato del PP”, en *El Mundo*, 11 de junio de 2013; “El PSOE denuncia el perfil ‘sectario y partidista’ de Enrique López para el TC”, en *ABC*, 7 de junio de 2013.

⁴⁴⁹ Véase la página de Internet de la Fundación: <http://fundacionfaes.org/es>.

⁴⁵⁰ El Magistrado Enrique López López era articulista semanal en el Diario La Razón (www.larazon.es) y tertuliano habitual en otros medios de comunicación, como por ejemplo en el grupo “Intereconomía”.

⁴⁵¹ Reales Decretos publicados en el BOE núm. 141, de 13 de junio de 2013.

4.3.- La práctica y algunos problemas en las designaciones del CGPJ y del Gobierno

4.3.1.- La dimensión corporativa en las designaciones del CGPJ

Lo primero que podría destacarse de la serie de designaciones de magistrados a cargo del CGPJ es la consolidada práctica de nombrar a miembros de extracción del propio poder judicial. Nótese que se ha hecho alusión a una “práctica”, la cual se le ha denominado así debido a que el Consejo no está obligado a designar a miembros de ese poder, sino que tiene a su disposición el abanico de profesiones jurídicas previstas en la Constitución para proveer los nombramientos. De ahí que pueda observarse claramente en las designaciones del Consejo una dimensión corporativa.

Cuadro 4.- Magistrados designados por el CGPJ

Formación CGPJ	Situación	Magistrados designados	Profesión jurídica	Sesión CGPJ	Real Decreto	BOE
Primer Consejo (1980-1985)	Designación Inaugural	Ángel Escudero del Corral Plácido Fernández Viagas	Magdo. TS (Sala Penal) Ex Pdte. TS Vocal CGPJ Ex senador	7/11/80	2514/80, de 7 de noviembre 2515/80, de 7 de noviembre	19/11/80
	Sustitución individual	Fernández Viagas por Francisco Pera Verdaguer	Magdo. TS (Pdte. Sala Cont.Adm.)	30/12/82	59/1983, de 15 de enero	17/1/83
Segundo Consejo (1985-1990)	1ª Renovación	Carlos de la Vega Benayas	Magdo. TS (Sala Civil)	29/1/86	365/1986, de 21 de febrero	22/02/86
		Eugenio Díaz Eimil	Magdo. TS (Cont.Adm.)		366/1986, de 21 de febrero	
Tercer Consejo (1990-1996)	2ª Renovación	Enrique Ruiz Vadillo	Magdo. TS (Pdte. Sala Penal) Carrera fiscal	8/2/95	530/1995, de 7 de abril	8/04/95
		Javier Delgado Barrio	Magdo. TS (Cont.Adm.)		531/1995, de 7 de abril	
Cuarto Consejo	Sustitución individual	Delgado Barrio por Pablo García Manzano	Magdo. TS (Cont.Adm.)	11/9/96	2064/1996 de 13 de sep.	16/9/96

(1996-2001)	Sustitución individual	Ruiz Vadillo por Pablo Cachón Villar	Mago. TS (Sala Social)	30/9/98	2166/1998 de 6 de octubre	8/10/98
Quinto Consejo (2001-2008)	3ª Renovación	Ramón Rodríguez Arribas Pascual Sala Sánchez	Magdo. TS (Cont.Adm.) Magdo.TS (Cont.Adm.) Ex Pdte. TS	14/4/04	1406/2004 de 8 de junio 1407/2004 de 8 de junio	9/6/04
Sexto Consejo (2008-2013)	4ª Renovación	Juan Antonio Xiol Ríos Santiago Martínez-Vares García	Magdo. TS (Pdte. Sala Civil) Magdo. TS Emérito (Cont.Adm.)	7/6/13	423/2013, de 12 de junio 424/2013, de 12 de junio	13/6/13

Como se muestra en el cuadro, los trece magistrados constitucionales que ha designado el CGPJ han recaído en miembros de la carrera judicial. En el momento de la elección, casi todos se desempeñaban como Magistrados del Tribunal Supremo, excepción hecha de Plácido Fernández Viagas, que era vocal del Consejo y venía de ejercer cargos políticos, aunque pertenecía a la carrera judicial.

Cuadro 5.- Distribución de magistrados constitucionales designados por el CGPJ, de acuerdo a la Sala del Tribunal Supremo que provenían

	Contencioso-administrativo	Civil	Penal	Social
1	Francisco Pera Verdaguer	Carlos de la Vega Benayas	Ángel Escudero del Corral	Pablo Cachón Villar
2	Eugenio Díaz Eimil	Juan Antonio Xiol Ríos	Enrique Ruiz Vadillo	
3	Javier Delgado Barrio			
4	Pablo García Manzano			
5	Ramón Rodríguez Arribas			
6	Pascual Sala Sánchez			
7	Santiago Martínez-Vares García			

Entre los doce que eran Magistrados del Tribunal Supremo, en dos ocasiones se ha tratado de ex Presidentes del propio Tribunal (Escudero del Corral y Sala Sánchez). En esta línea, adviértase que el nombramiento de ex Presidentes del TS para el TC es una práctica que parece asentarse con cierta

regularidad por lo menos en los últimos trece años⁴⁵² y además parece ser un criterio electivo de una determinada fuerza política, según lo ha llegado a reconocer uno de sus portavoces⁴⁵³.

En cualquier caso, el mayor número de opciones recayeron sobre la Sala más numerosa del Tribunal, esto es, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de entre la cual se designaron siete magistrados, aunque en la última renovación uno lo era en calidad de emérito (Martínez-Vares). Los cinco restantes se extrajeron entre la Sala Penal y Civil, con dos magistrados cada una y la Sala de lo Social con uno sólo magistrado.

Desde el punto de vista de las formaciones que ha tenido el Consejo, se puede apreciar que prácticamente cada una de las seis “promociones” que han pasado por el mismo, les ha correspondido designar a dos magistrados constitucionales. Si acaso, la primera formación (1980-1985), además de proveer los primeros dos magistrados constituciones de competencia del Consejo, designó además al sustituto de Fernández Viagas. Por su parte, la cuarta formación (1996-2001), no efectuó renovación ordinaria de magistrados, sino que realizó dos sustituciones individuales.

Si la cadencia de renovaciones de magistrados sigue su curso, sin verse alterada por una sustitución individual, la séptima conformación del Consejo (renovada puntualmente el pasado mes de diciembre de 2013⁴⁵⁴) no tendrá a su cargo ninguna designación de magistrados del TC, por lo que sería la primera formación en la historia del Consejo que no designaría magistrados. Lo anterior porque esta séptima promoción estaría funcionando entre 2013 y 2018, y el cargo de nueve años de los magistrados designados por el sexto Consejo finalizaría hasta el año de 2022.

⁴⁵² Recuérdese en este sentido, que el Congreso designó al ex Presidente del TS, Delgado Barrio (2001) y el Senado al ex Presidente Hernando Santiago (2010). En otros tres casos se han decantado por Presidentes de Sala (Pera Verdaguer, Ruiz Vadillo y Xiol Ríos).

⁴⁵³ El portavoz del Grupo parlamentario popular en el Senado, Pío García-Escudero, decía al Magistrado Hernando Santiago en su comparecencia que “yo espero que no se rompa la racha en el futuro de que los ex presidentes del Supremo y del Consejo pasen al Tribunal Constitucional”. SENADO: “Comparecencia de los candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión de Nombramientos, núm. 392, IX Legislatura, 15 de julio de 2010, pág. 13.

⁴⁵⁴ Reales Decretos 930/2013 y 931/2013, ambos de 29 de noviembre, por el que se nombran vocales del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Congreso de los Diputados y Senado, respectivamente (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 2013).

Finalmente conviene destacar que el CGPJ nunca ha designado para la magistratura constitucional a una mujer. Ello no quiere decir que el resto de órganos proponentes se haya caracterizado por haber nombrado un número equilibrado de magistradas, pues no hay que hacer bastante esfuerzo para observar que el número ha sido significativamente reducido (cinco).

Lo que sí está claro es que esta tendencia del CGPJ debe eliminarse, sobre todo, cuando la Constitución ordena que la actuación del poder público debe ajustarse al principio de igualdad material (9.2 CE) y la LO 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los insta a “atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que le correspondan” (art. 16)⁴⁵⁵.

Quizá las designaciones de magistrados constitucionales a cargo del CGPJ, deberían cohonestarse con los pasos que la propia institución ha dado en la materia en el ámbito de la carrera judicial⁴⁵⁶, entre ellos, quizá el más relevante haya sido la creación de la Comisión de Igualdad. A esta, le corresponde “asesorar al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial”, y también la realización de los Informes sobre impacto de género en los Reglamentos, “y mejorar los parámetros de igualdad en la Carrera Judicial” (136.3 bis LOPJ). Las directrices y los esfuerzos que se están observando, deberían materializarse en las designaciones que hagan para la magistratura constitucional.

4.3.2.- La “toma de decisión”: la negociación entre progresistas y conservadores en el CGPJ

Desde la primera normativa del CGPJ se previó que las deliberaciones de sus órganos tendrían “carácter reservado, debiendo sus componentes

⁴⁵⁵ Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007).

⁴⁵⁶ Por ejemplo, con los siguientes acuerdos: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: Acuerdos del Pleno, de 9 de febrero de 2005, de 22 de junio de 2005, de 26 de febrero de 2009, de 27 de enero de 2011 y además, CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, COMISIÓN DE IGUALDAD: “Normas mínimas para evitar la discriminación de la mujer en el lenguaje administrativo del CGPJ”, Acuerdo de 16 de junio de 2009.

guardar secreto de las mismas” (137.2 LOPJ). Como ya se vio, qué duda cabe de que estas disposiciones de reserva vendrían a caracterizar todos los procedimientos selectivos de magistrados a cargo del Consejo⁴⁵⁷.

La información oficial en esta materia se reduce a los breves comunicados de prensa que el propio Consejo o sus portavoces formulan. Es en definitiva, una práctica que ha llevado a convertir o por lo menos, a mostrar este procedimiento como una de las denominadas competencias gubernativas del Pleno⁴⁵⁸.

A falta de información oficial, las vicisitudes del procedimiento han tenido que deducirse y reconstruirse con base en los datos disponibles en los medios de comunicación social. Como se ha visto en la serie de renovaciones que se han estudiado al comienzo de este capítulo, ha sido tal su grado de coincidencia y repetición, que es posible identificar en línea de principio, ciertas tendencias y prácticas consolidadas, que nos pueden dar una idea panorámica sobre la manera en que el CGPJ ha llevado a cabo esta competencia electiva de magistrados del TC.

En este sentido, la primera consideración que puede realizarse para entender el procedimiento selectivo no es de tipo jurídico, sino que se encuentra más cercana a los ámbitos de la sociología política. Tiene que ver con el comportamiento humano cuando se despliega en un contexto grupal y de relaciones de poder, que adquiere mayor complejidad cuando estamos en presencia de estratégicos órganos del Estado dotados con un poder político importante, y que por lo mismo, están sujetos a múltiples presiones e intereses.

Lo anterior, que se predica con carácter general, resulta de aplicación al CGPJ. Una institución integrada por veinte miembros y su Presidente, que es definida como el “órgano de gobierno” del poder judicial, encargada fundamentalmente de la administración, disciplina y formación de la carrera

⁴⁵⁷ De esta suerte, el acceso a la información oficial en la materia resulta muy complicado. No solamente no se publican las actas o no se permite el acceso de los medios de comunicación a las sesiones, situación por otro lado comprensible. Sin embargo, más discutible es que la reserva se extienda a los Acuerdos del Pleno del CGPJ, los cuales, aunque es verdad que se publican regularmente, no reflejan en los mismos mayores datos sobre las designaciones, ni siquiera en los Anexos que se suelen acompañar, han figurado alguna vez las reglas de votación que suelen aprobar antes de las designaciones.

⁴⁵⁸ Ello ha impedido averiguar con cierta objetividad las fases del procedimiento selectivo y los criterios utilizados para la designación de los magistrados, elementos, por otro lado, que podrían publicarse sin excesivos problemas.

judicial. Es además una institución cuyas decisiones son adoptadas por la regla de la mayoría, pero que en algunos casos, como en la designación de magistrados constitucionales, ésta debe ser calificada.

El ejercicio de las competencias del órgano no parte de un ambiente aséptico y neutro, sino de un contexto particular perfilado por las relaciones personales de los integrantes del Consejo. Es una determinada configuración del colegio modelada por las experiencias laborales que se desarrollan en la institución durante el ejercicio del cargo, entre las cuales se conjugan además relaciones de simpatía, ideológicas y de intereses comunes entre los integrantes del mismo. Todo ello, tiende a la habitual formación de grupos y alianzas más o menos estables, que condicionan en buena medida el funcionamiento del órgano.

Según se ha visto del historial selectivo del CGPJ, la formación de grupos al interior del mismo se ha mostrado de forma muy patente. La articulación de los grupos gira en torno a la cercanía ideológica o política entre los vocales. La calificación de un grupo de vocales como “conservadores” y otro como “progresistas” no solamente es una fórmula utilizada por los periodistas y la opinión pública para simplificar esas relaciones, sino que en la inmensa mayoría de ocasiones coincide con la dinámica real con la que se suceden las designaciones.

En este sentido, la vinculación que suele hacerse de un vocal a determinado “sector”, está determinada por la pertenencia a una asociación profesional de Jueces y Magistrados, o bien, por un enlace laboral, de cercanía ideológica, militancia o simpatía con un partido político en algún momento de la vida profesional del vocal, especialmente cuando un partido lo ha propuesto para desempeñar un cargo público. La atribución a determinado grupo también ha estado determinada por el historial de sentencias o votos particulares que el vocal haya emitido en su etapa de juez o magistrado sobre temas muy polémicos. Generalmente el contenido de las resoluciones llega a coincidir con algún postulado identitario del programa electoral de algún partido político, y en esa medida suele generarse la cercanía ideológica con el mismo.

La práctica ha develado que en el sector “conservador” se asimile a los vocales que de alguna manera el PP los ha propuesto para el CGPJ o cualquier otro cargo público. Igualmente se adscribe en este sector a los

integrantes o a quienes hayan pertenecido a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Por otro lado, se adjudica al sector “progresista”, de igual forma, a los vocales promovidos al CGPJ o a otro cargo público por el PSOE, o por IU⁴⁵⁹. Esta diversidad en la vinculación o respaldo partidario múltiple consigue también que muchas veces este sector se muestre más fragmentado que el otro. En el grupo progresista, finalmente suelen incluirse los miembros o aquéllos que hayan formado parte de la asociación judicial “Jueces para la Democracia” (JpD)⁴⁶⁰.

Un tercer sector que podría identificarse sería el de los denominados vocales “neutrales”, “de centro” o “independientes”. A este grupo suelen adjudicarse a los vocales que no están adscritos a ninguna asociación judicial, o si lo están, no pertenecen a las dos mayoritarias. También se suele adscribir a este sector a los vocales que han mostrado cierta independencia respecto de las formaciones internas, los cuales no siguen enteramente una lógica de grupo en las votaciones del Consejo. No es habitual que se les asigne alguna vinculación a un partido político, si acaso a alguno que otro se le ha identificado de “neutral” al haber sido respaldado para llegar al CGPJ por un acuerdo de los principales partidos, sin que claramente se vea una vinculación con uno de ellos.

Este grupo ha sido marcadamente minoritario, por lo que no parece que haya desempeñado un papel estratégico en las negociaciones para determinar a los magistrados constitucionales, pues el acuerdo de los sectores progresistas y conservadores consigue con mucho, el respaldo necesario para ejecutar los nombramientos.

Es fundamental tener presentes estas “formaciones” en el interior del Consejo, porque según se ha visto en la práctica, resultan inmensamente indicativas de la forma en que se generan, negocian y votan las candidaturas para la magistratura constitucional. El “*modus operandi*” del procedimiento selectivo, según la reconstrucción que hemos planteado en este trabajo, se

⁴⁵⁹ E incluso a *CiU*, aunque ideológicamente no habría que situarlos en este sector “progresista”.

⁴⁶⁰ Para Pablo LUCAS MURILLO DE LA CUEVA: “esos alineamientos de los actores políticos y asociativos se han mantenido, en términos generales, en la mayor parte de las cuestiones polémicas que han ido aflorando en relación con el Poder Judicial y la Administración de Justicia e, incluso, con aspectos propios de la vida política democrática”, en “A vueltas con el Consejo General del Poder Judicial”, en *Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas*, núm. 5, 2009, pág. 81.

parte de la identificación del sector “conservador” y “progresista”. Luego cada sector empieza por su cuenta a anunciar varios nombres, que luego al interior del grupo terminan por centrar el respaldo en uno, el cual es presentado ante al otro sector para acordar el apoyo recíproco de sus candidatos.

Esa sería la dinámica negociadora en su más mínima expresión y la que ha parecido primar en la mayoría de renovaciones parciales de magistrados. Pero en ocasiones los grupos han llegado a formular recíprocos vetos, por lo que la negociación se ha complicado. Evidentemente, en las opciones que cada grupo pueda plantear para conseguir el acuerdo, estará presente la fuerza numérica de éstos. A partir de aquí las propuestas para establecer la negociación podrán multiplicarse y recaer en un número de soluciones que escapen al objeto de este trabajo, pero que además muchas de ellas resultan inconfesables o permanecen en el secreto de los negociadores.

En cualquier caso, algunas ocasiones se ha visto que la propuesta del candidato inicial se ve modificada por el segundo en las preferencias del grupo, o en el candidato que resulte “menos progresista” o “menos conservador” de determinado sector. En ocasiones el candidato inicial se ha mantenido a cambio de que el otro grupo designe otros cargos que son competencia del propio Consejo (por ejemplo, en el Tribunal Supremo). En un caso, al parecer el desequilibrio numérico entre un grupo y otro, permitió el pase del candidato plenamente identificado con el sector mayoritario, mientras que el minoritario no tuvo otra opción que apoyar a un candidato más “neutral”, o por lo menos, de apariencia menos afín al grupo.

A juzgar por lo sucedido en la más reciente renovación de magistrados, también debe considerarse cierta manifestación que tuvo un fenómeno de fragmentación de los grupos. En efecto, por lo menos en el interior de un “bando”, se apreciaron algunas divisiones y liderazgos importantes que alteraban cierta “disciplina de grupo”.

Evidentemente, las dificultades anotadas no se limitan a la designación de los magistrados del TC, sino que hay antecedentes importantes en el ejercicio de otras de las competencias esenciales del Consejo. Concretamente, algunos señalamientos críticos se han proyectado sobre la falta de adjudicación de Jueces y Magistrados a las plazas dejando estas desiertas durante algún

tiempo y en general, diversa polémica generada por las designaciones judiciales de altos cargos⁴⁶¹.

4.3.3.- La adjudicada politización de las designaciones del CGPJ

En términos generales, se puede decir que la politización de las designaciones de los magistrados constitucionales a cargo del CGPJ se da cuando éstas son entendidas con base en una lógica de relación partidaria, de la que puede esperarse o al menos parecer, que la actitud del magistrado estará orientada sobre la dirección trazada por el partido político que promovió su nombramiento, ya sea que se trate del Gobierno y de la mayoría que le sostiene en el Parlamento o de otro grupo de la oposición.

Este fenómeno de la politización, viene a colación de la identificación que párrafos arriba se señalaba de los dos grupos al interior del Consejo. Si ya la prensa, pero también el público lector y los operadores jurídicos relacionan a los vocales según el grupo político que los propuso en el Senado o en el Congreso, ya no implica mayor esfuerzo inferir de ahí el tipo de perfil ideológico que adjudicarán a las personas que cada grupo al interior del Consejo llevará al TC, de acuerdo al reparto de cuotas que recíprocamente se confieran.

La operación es sencilla. Digamos que la “politización” del propio CGPJ se transfiere de esta suerte a las designaciones de magistrados, de acuerdo al principio *similes a similibus eliguntur*, es decir, que los semejantes son elegidos por sus semejantes. La identificación de un grupo “conservador” en el interior del Consejo llevará a que el magistrado que se elija para el Tribunal Constitucional sea igualmente calificado de “conservador”, y la misma conjetura se aplicará para el grupo “progresista”. Así, al final lo que se tiene, es que la identificación de esos grupos se traslada a la identificación de los magistrados designados y los criterios para identificar a los grupos del Consejo se reflejan igualmente en los perfiles de las personas elegidas para el TC. En este sentido, si antes se dijo que la calificación de un grupo “conservador” se hacía en la

⁴⁶¹ Sobre la materia, PEDRAZ PENALVA, Ernesto (coord.): “*El gobierno de la justicia. El Consejo General del Poder Judicial*”, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996; NIETO, Alejandro: “*El desgobierno judicial*”, Madrid, Trotta, 2005; DESDENTADO DAROCA, Eva: “Los problemas del control de la discrecionalidad en los nombramientos de altos cargos judiciales por el Consejo General del Poder Judicial: un análisis crítico”, en *Revista Española de Derecho Administrativo*, núm. 139, 2008, págs. 555-574.

medida que estuviera vinculado a la APM o que haya sido propuesto por el PP, lo mismo será de aplicación a los magistrados constitucionales designados.

Lo significativo de las relaciones anteriores, es que un estudio a *posteriori* de las designaciones de magistrados, muestra que la mayoría de las veces aquéllas resultan muy acertadas. Por ejemplo, entre los casos más claros, está la designación de Plácido Fernández Viagas, calificado de “progresista” por haber sido propuesto por los vocales de ese sector, pero además su propio pasado político en el PSOE, lo hacía también “merecedor” del mismo calificativo.

En la segunda renovación parcial (1995), Javier Delgado Barrio se le identificaba como “conservador”, no solamente porque había sido propuesto por los vocales de ese sector, sino porque era miembro de la APM. En cambio, Ruiz Vadillo era reconocido como “moderado”, al haber sido respaldado por los dos sectores del Consejo, pero además porque no pertenecía a asociación judicial alguna.

Dinámica similar se ha observado en las renovaciones tercera (2004) y cuarta (2013). Ramón Rodríguez Arribas y Santiago Martínez-Vares García se les adjudicaba el título de “conservadores”, por haber sido propuestos por los vocales de ese signo, pero además los dos habían sido Presidentes de la APM. Por otro lado, a Pascual Sala Sánchez y a Juan Antonio Xiol Ríos se les identificaba como “progresistas”, y en efecto fueron respaldados por ese grupo de vocales al interior del Consejo, pero además, el primero pertenecía a “Jueces para la Democracia” y el segundo había ocupado por un breve periodo un cargo en un gobierno socialista.

Tomando como base este criterio de identificación ideológica del magistrado constitucional según el grupo de vocales que lo propusieron al cargo, puede organizarse el cuadro siguiente, para apreciar la forma en que se han distribuido las designaciones a lo largo del tiempo:

Cuadro 6.- Distribución ideológica de las designaciones del CGPJ

		Identificado con ideología conservadora	Identificado con ideología progresista	Identificado como moderado o de consenso
1º Consejo (1980-1985)	Designación Inaugural	1	1	
	Sustitución de Fernández Viagas por Pera Verdaguer	1		
2º Consejo (1985-1990)	1ª Renovación	1	1	
3º Consejo (1990-1996)	2ª Renovación	1		1
4º Consejo (1996-2001)	Sustitución de Delgado Barrio por García Manzano			1
	Sustitución de Ruiz Vadillo por Cachón Villar			1
5º Consejo (2001-2008)	3ª Renovación	1	1	
6º Consejo (2008-2013)	4ª Renovación	1	1	
Total		6	4	3

Evidentemente la distribución anterior es una aproximación basada en los datos disponibles del procedimiento selectivo y no reflejan exacta y predestinadamente la ideología del magistrado constitucional elegido. Lo anterior debe entenderse así, pues escapa al objeto de este trabajo estudiar si efectivamente la adjudicación ideológica del magistrado se corresponde con la doctrina emitida en sus sentencias y votos particulares en el ejercicio del cargo.

En cualquier caso, el cuadro muestra la tendencia que se ha mencionado del reparto de plazas entre las dos corrientes del Consejo. Como se puede ver, el sector conservador es el que ha impreso mayor influjo en las designaciones, derivado de lo que ya se decía en apartados anteriores, que este sector se ha mostrado más consolidado y numeroso. Si se atiende únicamente a las renovaciones parciales, se advertirá que el sector conservador siempre ha conseguido promover a un magistrado de su extracción. Si se mira a las designaciones por consenso, debe aclararse que en

la mayoría de éstas, el origen de la propuesta proviene de listas de candidatos del sector conservador, en las cuales el grupo progresista, en el marco de la negociación, se ha decantado por la que estima menos radical.

El sector progresista, por su lado, ha tenido una capacidad negociadora más reducida, debido a que el grupo se ha visto más fragmentado que el otro, y en ocasiones este sector ha sido minoritario. En general, las renovaciones parciales, al haber dos plazas a cubrir, han seguido la lógica del “*do ut des*”, sobre todo, se pueden ver de forma más contundente en las últimas dos renovaciones.

A partir de estas relaciones, como ya se decía, el fenómeno de la politización es un paso que puede darse sin mucha dificultad. La politización se dará, al menos, cuando se vincule a los grupos de vocales o a las asociaciones judiciales a que pertenezcan, con los intereses de un partido político o sus postulados ideológicos. La politización de los nombramientos, implica, por tanto, la apariencia de que los grupos en el Consejo y los magistrados constitucionales por éstos designados guiarán sus cometidos institucionales por las directrices partidarias o, por lo menos, coincidirán en la misma dirección. Como se puede ver, se trata de una suerte de fenómeno de “vasos comunicantes”, donde una vinculación llega a otra, hasta reducirla a la identificación del vocal y del magistrado constitucional con el partido político.

El fenómeno de la politización tiene varias causas, pero entre las principales sin duda alguna, se encuentra la propia forma en que se ha confeccionado el CGPJ y el potente protagonismo de las asociaciones judiciales, verdaderos grupos de poder en el ámbito judicial.

La forma de designación de sus vocales es otro elemento que le está imprimiendo cierto cariz político. No nos vamos a ocupar aquí de ello, pues tendríamos qué hacer de las designaciones de los vocales, prácticamente un estudio empírico como el que hemos hecho aquí de los magistrados constitucionales, pues también intervienen en la designación las Cámaras parlamentarias, aunque con cierta participación de los Jueces y Magistrados, y de sus asociaciones, cuyos procedimientos han variado a lo largo del tiempo⁴⁶², incluso recientemente se introdujo una reforma considerable en la materia⁴⁶³.

⁴⁶² De los veinte vocales, ocho son designados directamente por mayoría calificada de las Cámaras parlamentarias (cuatro cada una), entre abogados y otros juristas, todos ellos de

Con todo, cabe remarcar que el fenómeno de la politización, aunque ciertamente pone sobre los magistrados determinadas “etiquetas” de adscripción política, ello no necesariamente quiere decir que el ejercicio profesional del magistrado coincida con dichas orientaciones. Las designaciones del Consejo no han dejado de caracterizarse por llevar al Tribunal Constitucional magistrados con muchos años de experiencia profesional y prestigio, y también sus designaciones suelen verse más distanciadas de la mayoría política, en comparación con las realizadas por el Gobierno y las Cámaras.

El acceso de experimentados miembros de la carrera judicial al Tribunal Constitucional se ha entendido como un elemento deseable en su composición, porque favorece una pluralidad institucional en su colegio. Desde esta perspectiva resulta positivo el papel desempeñado el CGPJ en la conformación del TC.

4.3.4.- Las designaciones del Gobierno como “prima” de la mayoría parlamentaria

reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión (122.3 CE). Los doce restantes, la Constitución sólo dispuso que serían designados “entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales”, remitiendo a una ley orgánica para su desarrollo. Esta última remisión es donde ha habido grandes cambios a lo largo del tiempo, primero a través de la designación de los propios Jueces y Magistrados mediante un procedimiento electoral, después se transitó a un modelo de designación parlamentaria directa, y finalmente se llegó a un modelo de “acto compuesto” donde las Cámaras habrían de elegir a los vocales de entre las propuestas presentadas por los Jueces y Magistrados, y sus asociaciones. Entre los estudios sobre el tema, SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel: “Constitución y designación del CGPJ”, en PEDRAZ PENALVA, Ernesto (coord.): *El gobierno de la justicia. El Consejo General del Poder Judicial*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996, págs. 181-206.; GARCÍA COSTA, Francisco M.: “Consideraciones sobre el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial”, en *Anales de Derecho*, núm. 26, 2008, págs. 429-444; SÁNCHEZ BARRIOS, M^a Inmaculada: *La elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial español y de sus homólogos europeos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009; ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ, Diego: *El fracaso del autogobierno judicial*, Navarra, Civitas, 2008.

⁴⁶³ Se trata de una reforma sustancial a la LOPJ, que tratándose de las elecciones de los vocales de extracción judicial, limita en buena medida la participación de las asociaciones judiciales para equilibrarla con la participación individual de los Jueces y Magistrados. Además se pretende dotar de mayor formalidad al procedimiento selectivo. Al efecto se ha planteado la introducción de una etapa de presentación de candidaturas, especificando los escritos que deben acompañar a éstas (una memoria justificativa, art. 575 de la LOPJ), una etapa de impugnación y proclamación de candidaturas a cargo de una Junta Electoral (art. 576), y algunos criterios electivos a tomar en cuenta por las Cámaras para proceder a la designación (art. 578). Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 155, de 29 de junio de 2013).

Los acontecimientos reseñados sobre todas las veces que el Gobierno ha designado a magistrados constitucionales se han basado fundamentalmente en lo recogido por los medios escritos de comunicación. A la luz de ello y de la cautela con que dicha información es asimilada en este trabajo, podrían de cualquier forma, extraerse algunos elementos.

Como se puede observar, no es necesario realizar mucho esfuerzo para percatarse de que en el historial de designaciones del Gobierno, la *potestad eligendi* ha residido fundamentalmente en el Presidente de Gobierno. Es verdad que en la designación inaugural el acuerdo se efectuó en un marco más general de negociación con la principal fuerza política de la oposición, pero recuérdese que finalmente los dos magistrados del “cupó” del Gobierno fueron propuestos por éste (Arozamena y Gómez-Ferrer)⁴⁶⁴.

También es cierto que en ocasiones se han develado algunas dificultades para definir a los candidatos o se ha insinuado cierto contacto de alguna fuerza política con la que especialmente suelen conseguir acuerdos (por ejemplo CiU en la segunda renovación, con Jiménez de Parga y Vives Antón⁴⁶⁵), pero en la generalidad de los casos, el Gobierno ha procedido directamente a la designación por el visible influjo del Presidente.

En estos 35 años de experiencia constitucional, el Gobierno ha intervenido cinco veces en las designaciones llevando al Tribunal Constitucional un total de diez magistrados. En las designaciones efectuadas por el Gobierno, no ha habido ningún caso de terminación anticipada del cargo (fallecimiento, renuncia, etcétera).

Entre las designaciones del Gobierno, se puede apreciar cómo éste ha privilegiado el criterio de elegir, de entre las profesiones jurídicas previstas en la CE, la de profesor universitario. En efecto, de las diez selecciones efectuadas hasta el momento, en ocho ocasiones se ha decantado por profesores y solamente dos han recaído en miembros de la carrera judicial, aunque también realizaban o habían llevado a cabo labores docentes (J.

⁴⁶⁴ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El procedimiento de elección de magistrados constitucionales”, *op. cit.*, pág. 181; DE LA CUADRA, Bonifacio: “¿Imagen bipartidista?”, en *El País*, 26 de enero de 1980 y “Los diez primeros magistrados constitucionales, fruto del consenso UCD-PSOE”, en *El País*, 12 de julio de 1980.

⁴⁶⁵ Según la nota periodística de DE LA CUADRA, Bonifacio: “El Gobierno piensa en Tomás Vives y Luciano Parejo para renovar el Constitucional, con un mes de retraso”, en *El País*, 21 de marzo de 1995.

Arozamena Sierra y E. López). Entre los ocho profesores elegidos, todos tenían la categoría de Catedrático, de los cuales cinco lo fueron de Derecho Constitucional, uno de Penal, uno de Administrativo y uno de Laboral.

Cuadro 7.- Magistrados designados por el Gobierno

Pdte. de Gobierno	Elección	Magistrado	Profesión	Elección	Real Decreto	BOE
Adolfo Suárez UCD	Designación Inaugural	Jerónimo Arozamena Sierra	Carrera judicial. Subsecretario Ministerio Trabajo	25/1/80	301/1980, de 14 de febrero	22/2/80
		Rafael Gómez-Ferrer Morant	Catedrático de Derecho Administrativo Letrado Consejo de Estado		306/1980, de 14 de febrero	
Felipe González PSOE	1ª Renovación	Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer	Catedrático Derecho del Trabajo	2/1986	364/1986, de 21 de febrero	22/2/86
		Luis María López Guerra	Catedrático Derecho Constitucional		363/1986, de 21 de febrero	
Felipe González PSOE	2ª Renovación	Manuel Jiménez de Parga y Cabrera	Catedrático de Derecho Constitucional	31/3/95	528/1995, de 7 de abril	8/4/95
		Tomás Salvador Vives Antón	Catedrático de Derecho Penal		529/1995, de 7 de abril	
José Luis Rodríguez Zapatero PSOE	3ª Renovación (se atravesó gob. en funciones)	Manuel Aragón Reyes	Catedrático de Derecho Constitucional	4/6/04	1404/2004 de 8 de junio	9/6/04
		Pablo Pérez Tremps	Catedrático de Derecho Constitucional		1405/2004 de 8 de junio	
Mariano Rajoy Brey PP	4ª Renovación	Pedro José González-Trevijano	Catedrático de Derecho Constitucional	7/6/13	421/2013, de 12 de junio	13/6/13
		Enrique López López	Magistrado Audiencia Nacional		422/2013, de 12 de junio	

Otro aspecto que puede observarse del historial selectivo, es que la cadencia de renovaciones ha recaído en tres de las cinco ocasiones sobre Gobiernos socialistas: dos de Felipe González (II y V Legislaturas) y una de José Luis Rodríguez Zapatero (VIII Legislatura). Las dos restantes se encuentran muy separadas en el tiempo: la designación inaugural en el Gobierno de Adolfo Suárez de UCD (I Legislatura) y la más reciente en el Gobierno de Mariano Rajoy del PP (X Legislatura).

El Gobierno de José María Aznar (VI y VII Legislaturas, 1996-2004) no tuvo oportunidad de designar magistrados por esta vía y quizá tampoco lo tendrán, obviamente si no median otras vicisitudes, los Gobiernos que se lleguen a formar en la Legislatura XI y XII, pues teóricamente en la XIII (2020-2023) vendría la renovación de magistrados más próxima para el Gobierno (junio de 2022).

Desde el punto de vista de la adscripción política del Gobierno, puede verse que todos los gobiernos socialistas se han decantado por Catedráticos de Derecho, mientras que las designaciones del primer gobierno centrista y en el más reciente popular, cada uno ha optado por un miembro de la carrera judicial.

Otra característica evidente es que cada Gobierno ha efectuado las designaciones de magistrados sobre personas cuyo historial y ejercicio profesional no se habían mostrado especialmente hostiles a los posicionamientos del Gobierno en turno⁴⁶⁶. Ello ha permitido mostrar cierta sintonía ideológica entre el Presidente o su grupo político y la persona finalmente designada, razón por la cual, las designaciones del Gobierno se han visto, en palabras de Cruz Villalón, “como una especie de prima reforzada”⁴⁶⁷ al influjo que de por sí ya tiene la mayoría parlamentaria en las designaciones de las Cámaras⁴⁶⁸.

⁴⁶⁶ Para ALZAGA VILLAAMIL, las designaciones del Gobierno ordinariamente son cubiertas con miembros afines a la mayoría gubernamental, normalmente de estimable formación técnico jurídica. ALZAGA VILLAAMIL, Óscar: “Sobre la composición del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 10-1, 2003, pág. 173.

⁴⁶⁷ CRUZ VILLALÓN, PEDRO: “Discurso pronunciado por el Presidente del Tribunal Constitucional, con ocasión de la renovación parcial del Tribunal”, en *Memoria 2001*, Madrid, Tribunal Constitucional, 2002.

⁴⁶⁸ Este influjo del Gobierno sale especialmente a relucir si se contrasta con las opiniones generadas por los grupos políticos de la oposición una vez que se efectúan las designaciones.

CAPÍTULO V

Las designaciones de magistrados constitucionales en el Congreso de los Diputados

5.1.- La designación inaugural

5.1.1.- Las reglas del procedimiento en la Resolución de Presidencia de 1980

Una de las nuevas facultades que parece haberse consolidado a favor del Parlamento moderno son las que tienen relación con la designación de autoridades estatales. En efecto, además de las tradicionales facultades en materia de legislación, presupuesto y control, la designación de altos cargos del Estado se ha venido a sumar como reflejo de las facultades de *“indirizzo politico”* que cada vez más se van reconociendo al Parlamento.

Bien sea por la novedad de este tipo de competencias al Parlamento o por haberse residenciado muy pronto en los núcleos reservados de la negociación y los acuerdos entre los partidos, actos como se sabe, normalmente motivados por la oportunidad política, lo cierto es que las reglas para fijar los procedimientos selectivos de personas generalmente no se encontraban recogidas de forma específica en los reglamentos parlamentarios, sino que se adoptaban del resto de preceptos que disciplinaban las atribuciones generales del Parlamento que resultaban aplicables. Lo anterior, que se ha dicho con carácter general, resulta trasladable a la experiencia selectiva en el caso de España.

Partiendo del periodo en el que se configuraba la Constitución de 1978, el Congreso disciplinó sus facultades elaborando un Reglamento con el carácter de “provisional”⁴⁶⁹. Este Reglamento, aprobado el 13 de octubre de 1977, reguló las competencias esenciales del órgano y quizá por su propia naturaleza transitoria, no era esperable que regulara todas las facultades a detalle. En este terreno, naturalmente tampoco previó un apartado específico que normara el procedimiento selectivo de las autoridades estatales que le correspondía elegir al Congreso, debido a que en la época ni siquiera estaba elaborado el Anteproyecto de la Constitución que contemplaba tales facultades electivas.

Con posterioridad, y una vez promulgada la Constitución, el Congreso se encontró en una situación en la cual debía proceder a la designación de los primeros magistrados para poner en marcha el Tribunal Constitucional en 1980, pero no había normas específicas en la materia. Ante ello, la Presidencia del Congreso, oyendo a la Mesa y a la Junta de Portavoces, procedió a la elaboración de unas normas que habían de fijar el procedimiento de propuesta y elección de “vocales o miembros de órganos o instituciones, exigida por disposiciones constitucionales o legales”⁴⁷⁰.

Estas normas dispusieron para la etapa inicial del procedimiento la consagración de la facultad de propuesta de candidaturas únicamente para los Grupos parlamentarios, los cuales podían proponer a un máximo de cuatro personas por Grupo (norma segunda). Las normas no contuvieron más datos acerca de una de etapa de instrucción del procedimiento, a fin de efectuar alguna valoración o calificación de la candidatura, sino que pasaron directamente a reglar la etapa de votación en el Pleno de la Cámara (norma primera).

No obstante, cabía esperar que la Mesa, el Presidente o la Junta de Portavoces fueran los encargados de examinar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos, dada su calidad de órganos de gobierno de la Cámara, y en esa medida “impulsores” del trabajo parlamentario, junto con los

⁴⁶⁹ Reglamento provisional del Congreso de los Diputados, aprobado el día 13 de octubre de 1977, BOE, núm. 256, 26 de octubre de 1977, págs. 23476-23486.

⁴⁷⁰ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Resolución de la Presidencia, Procedimiento de propuesta y elección por el Congreso de los Diputados de vocales o miembros de órganos o instituciones, exigida por disposiciones constitucionales o legales”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie h, núm. 28-I, I Legislatura, 9 de febrero de 1980, págs. 131-132.

Grupos parlamentarios, que eran los que propiamente formulaban las candidaturas⁴⁷¹.

Lo anterior, en efecto tuvo su manifestación en la primera vez que el Congreso designó a los cuatro magistrados del TC. En esa ocasión, quedó registrado en la sesión plenaria, que los Grupos parlamentarios habían realizado el examen de requisitos de las candidaturas y habían obtenido la aceptación de los candidatos para ser propuestos al procedimiento selectivo⁴⁷². Este tipo de exámenes previos a las candidaturas, se seguirán apreciando en subsiguientes designaciones, bien es verdad que al amparo del posterior Reglamento del Congreso de 1982⁴⁷³.

Por otro lado, en el art. 55 del Reglamento provisional, se disponía que ninguna discusión podría comenzar, “sin que se haya repartido al menos con cuarenta y ocho horas de antelación el informe, dictamen o documentación que haya de servir de base en el debate”. Ciertamente esta disposición hacía alusión a los procedimientos parlamentarios en que se contemplaba una fase “de debate”, lo cual no parecía propio de los actos del Congreso de elección de personas, realizados generalmente de forma más reservada y mediante voto secreto. Sin embargo, de esta disposición pudiera derivarse la necesidad de repartir entre los parlamentarios la documentación de los candidatos “que haya de servir de base” para la elección de autoridades.

A los efectos de la etapa de votación de las candidaturas, venía una regla que era del todo congruente con el art. 77 del Reglamento provisional, mediante el cual se disponía que toda la elección de personas se haría “por papeletas”, de modo que las normas de la Presidencia establecieron que cada

⁴⁷¹ Aunque es verdad que tampoco el Reglamento provisional fue prolífico en la enumeración de las facultades de estos órganos, como luego sí que se estableció con mayor detalle en el Reglamento de 1982. El provisional establecía, en cambio, alusiones generales al carácter de la Mesa como “órgano rector del Congreso”, al Presidente de la Cámara como el encargado de “asegurar la buena marcha de sus trabajos”, o a los Grupos parlamentarios, como necesarios para la “ordenación de los trabajos de la Cámara” (arts. 22, 23 y 27).

⁴⁷² Así lo declaró el Presidente del Congreso en la sesión plenaria de 30 de enero de 1980. Véase CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Formulación de propuestas para el nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 60 (extraordinaria), 30 de enero de 1980, pág. 4094.

⁴⁷³ Por ejemplo, en la designación del Magistrado Jesús Leguina, se hizo constar que la Mesa del Congreso había “calificado por unanimidad” y admitido “a trámite” la única candidatura que había sido presentada (a cargo del Grupo socialista). Véase CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Elección para formular propuesta de nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 270, II Legislatura, 13 de febrero de 1986, pág. 12182.

diputado podía “escribir en la papeleta hasta cuatro nombres” (norma tercera). Las normas, por otro lado, fijaron naturalmente que resultarían elegidos aquéllos cuatro que más votos hubieren obtenido, especificando en la misma el número de 210 sufragios con el que se entendería obtenida la mayoría de tres quintos de los miembros del Congreso exigida por la Constitución (norma cuarta).

Un sector de la doctrina ha visto en estas normas un cierto desatino técnico, al establecer específicamente el número de sufragios, cuando el mismo puede variar si se modifica la composición del Congreso o si este se viera reducido especialmente con algún problema de incorporación plena de diputados⁴⁷⁴. Sin embargo, este punto no causaría mayor problema si se interpreta que la mayoría se establece no sobre el número de diputados de pleno derecho, sino del de miembros del órgano. Cifra esta última fija, y de modificarse, también lo haría el número de sufragios para calcular la mayoría calificada.

Otro punto crítico que también se ha señalado es que los preceptos que han fijado el límite máximo de cuatro candidaturas a los Grupos parlamentarios y el derecho de cada diputado a emitir hasta cuatro votos, están dirigidos a los supuestos de renovación grupal, obviando las sustituciones individuales. Quizá en este último caso, hubiera sido preferible una formulación más general que diera cabida a los dos supuestos, por ejemplo aludiendo a un número de candidatos o a un número de votos “igual al de cargos a cubrir”. Lo anterior, es ciertamente una sugerencia de redacción de normas, aunque también esa podría ser la interpretación aplicable al caso por analogía.

En cualquier caso, seguramente estas opciones fueron previsiblemente descartadas en la época al entender que estas normas de Presidencia igualmente tenían un carácter provisional y que estaban dirigidas a la designación de los primeros cuatro magistrados (y cuatro vocales del CGPJ según el 122.3 de la CE), las cuales ya se encontraban en pleno proceso de

⁴⁷⁴ Así lo señala FERNÁNDEZ SEGADO, quien nos recuerda la circunstancia de que los diputados proclamados vencedores no adquieren de inmediato la condición plena de dicho cargo, sino que tienen que reunir los requisitos previstos en el artículo 20 del RCD, relativos básicamente a la formalización del cargo, al juramento y presentación de declaraciones relativas a la profesión y cargos públicos que desempeñe “a efectos del examen de incompatibilidades”. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El procedimiento de elección de los magistrados constitucionales”, *op. cit.*, pág. 164.

negociación. Se estaba, en consecuencia, reglamentando a corto plazo a la espera de una incorporación probablemente más perfilada en el Reglamento parlamentario definitivo.

Las normas prevén enseguida la manera de proceder cuando los candidatos propuestos no hayan conseguido la mayoría. La solución básicamente consiste en someter las candidaturas a “sucesivas votaciones”, estableciendo adicionalmente reglas de balotaje para ir retirando candidaturas progresivamente “a partir de un número no superior al doble de puestos a cubrir” y en las cuales, lógicamente, los diputados solo podían votar en la papeleta por un “número de candidatos igual que el de puestos a cubrir” (norma quinta).

La intención del mencionado precepto era la de alguna manera “forzar” el acuerdo parlamentario entre los candidatos más respaldados para darle un cauce exitoso a la designación. En el establecimiento de las “sucesivas votaciones”, no se especificaba si las mismas debían llevarse a cabo en la misma sesión o en subsiguientes, sin embargo, la misma disposición facultaba a la Presidencia a “interrumpir por un plazo prudencial el curso de las votaciones” si las “circunstancias” así lo aconsejaban (norma quinta). De esta manera se entendía que a juicio de la Presidencia, la cadencia de votaciones podría ser modificada, para abrir, previsiblemente, “espacios” de negociación entre los diputados.

Finalmente, la última regla se encargaba de resolver los casos de empate “con relevancia a efectos de la propuesta”, disponiendo que serían sometidos a “otra votación entre los que hubieran obtenido igual número de votos” (norma sexta).

5.1.2.- Designación de Rubio Llorente, Tomás y Valiente, Díez de León, y Menéndez

Con las normas de Presidencia ya referidas se procedió a nombrar a los primeros magistrados a cargo del Congreso de los Diputados. El acto se llevó a cabo en una sesión plenaria extraordinaria el día 30 de enero de 1980⁴⁷⁵. En la

⁴⁷⁵ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Formulación de propuestas para el nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 60 (extraordinaria), 30 de enero de 1980, págs. 4091-4117.

sesión, se dio primeramente lectura a dichas normas, tras lo cual el diputado Peces-Barba solicitó al Presidente del Congreso su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. El Presidente Landelino Lavilla Alsina accedió a esa petición, de modo que la publicación de las normas se hizo en el número 28-I del Boletín de las Cortes, el 9 de febrero de 1980, esto es, diez días después de la designación.

Este dato, no deja de resultar llamativo, puesto que desde una ordenada perspectiva procedimental, lo aconsejable era que la publicidad formal de las normas aplicables a la designación de los magistrados se hubiera hecho con algunos días de anticipación para que fueran del general conocimiento de todos los parlamentarios y de la ciudadanía. Las normas, sin embargo, fueron acordadas un día antes de la sesión parlamentaria por la Presidencia y la Junta de Portavoces, de modo que no hubo tiempo para publicarlas con anticipación.

Por otro lado, en cuanto a la difusión de las normas entre todos los diputados, es de suponer que al menos todos los portavoces de los Grupos parlamentarios estuvieron informados, debido a que las normas fueron aprobadas de forma unánime⁴⁷⁶ por el órgano de participación de los propios Grupos, esto es, la Junta de Portavoces. Un órgano, dispuesto para “tratar sobre cuantos asuntos atañan a la ordenación de los trabajos de la Cámara” (27 RCD), el cual está integrado por un representante de todos los Grupos parlamentarios.

Continuando con la sesión parlamentaria de designación de los magistrados, el Presidente informó que la Junta de Portavoces había fijado hasta las cinco de la tarde de ese día, para la formulación de candidaturas (esto es, un plazo de menos de 24 horas).

Enseguida se dio lectura general de los candidatos presentados por los Grupos parlamentarios. A pregunta expresa del diputado Santiago Carrillo, pidió que se especificara qué Grupos parlamentarios habían hecho las propuestas, a lo que se respondió que los proponentes habían sido los Grupos centrista, socialista y el de la minoría catalana. No se informó, sin embargo, los nombres de los candidatos que cada Grupo había presentado, debido a un

⁴⁷⁶ Así lo sostuvo el portavoz del mayoritario Grupo parlamentario centrista, el diputado Antonio Jiménez Blanco, en la sesión plenaria del Congreso del 30 de enero de 1980. Véase *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 60, op. cit., pág. 4097.

acuerdo inicial de la Junta de Portavoces, con la intención de evitar que las mismas pudieran tener sentido “ideológico o político”, o de “tener afección o vinculación respecto de los Grupos proponentes”, por lo que se presentaron los nombres por orden alfabético⁴⁷⁷.

Como bien lo expresa Fernández Segado, la “ingenuidad de esta resolución se aprecia a simple vista”⁴⁷⁸. El ocultamiento formal de la proveniencia de las candidaturas, obviamente no impide saber quién las ha presentado y tampoco elimina la vinculación de éstas con el Grupo proponente. En cualquier caso, recuérdese que estamos en la época del consenso, con el que también se designaron los primeros diez magistrados, de modo que la presentación de candidaturas de esa manera no haya sido más que una consecuencia del mismo.

Volviendo de nuevo a la sesión, finalmente se llegó a la fase de votación. Para recabar las papeletas se fue llamando individualmente y por orden alfabético a los diputados para que fueran depositándolas en la urna. Una vez efectuado el escrutinio, se anunciaron los resultados⁴⁷⁹.

Candidato	Votación
Francisco Rubio Llorente	255
Manuel Díez de Velasco-Vallejo	254
Francisco Tomás y Valiente	250
Aurelio Menéndez y Menéndez	248
Ignacio Gispert y de Jordá	10
En blanco	30

⁴⁷⁷ Así lo declaró el Presidente del Congreso Landelino Lavilla Alsina. Véase CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Formulación de propuestas para el nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 60 (extraordinaria), 30 de enero de 1980, págs. 4094-4095. Esta postura sería mantenida en la sustitución de Aurelio Menéndez. Véase CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Elección de magistrado del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 140, I Legislatura, 18 de diciembre de 1980, pág. 9081; y “Elección de magistrado del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 141, I Legislatura, 29 de diciembre de 1980, pág. 9093.

⁴⁷⁸ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El procedimiento de elección de los magistrados constitucionales”, *op. cit.*, pág. 156.

⁴⁷⁹ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Formulación de propuestas para el nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 60 (extraordinaria), 30 de enero de 1980, pág. 4095.

Como se puede ver, el candidato que obtuvo el mayor número de votos era quien se desempeñaba como Director del Centro de Estudios Constitucionales, y que también en aquella época era Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Rubio Llorente; le siguió de cerca con un voto menos, el Catedrático de Derecho Internacional Público, Manuel Díez de Velasco; luego vendría el Catedrático de Historia del Derecho, Francisco Tomás y Valiente; y por último, el Catedrático de Derecho Mercantil y ex Ministro de Educación y Ciencia, Aurelio Menéndez y Menéndez.

Se registraron además diez votos para el abogado catalán y ex Decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Ignacio Gispert y de Jordá, propuesto y apoyado por el Grupo de la minoría catalana (que tenían nueve diputados) y también había que agregar treinta papeletas en blanco, provenientes de otros Grupos minoritarios como el comunista y el andalucista (con veintitrés y cinco diputados, respectivamente), y cuatro declaradas nulas pues figuraban nombres no sometidos a votación.

Los cuatro magistrados designados lograron un tanto más que la mayoría calificada de 210 sufragios, gracias al acuerdo entre los Grupos parlamentarios de las dos formaciones políticas que más escaños consiguieron en la I Legislatura del Congreso (1979-1982). Como se recordará, se trataba de una Legislatura mayormente integrada con diputados de UCD, concretamente y según los datos arrojados en las elecciones generales de 1º de marzo de 1979, con 168 escaños (de 350 posibles), una cifra muy cercana a la mayoría absoluta (176 escaños), mientras que el Grupo parlamentario socialista tuvo 121 diputados, el Partido Comunista de España 23, Coalición Democrática 9 y *Convergencia i Unió* 8⁴⁸⁰.

Este acuerdo bilateral entre UCD y PSOE, no solamente sería adoptado para cubrir los magistrados a cargo del Congreso, sino que se enmarcaría en un acuerdo más general para designar a los magistrados del Senado y del

⁴⁸⁰ Datos tomados del apartado de resultados de elecciones generales del portal de Internet de la Junta Electoral Central, en www.juntaelectoralcentral.es.

Gobierno. Lo anterior fue reflejado contundentemente en los medios de comunicación y así también ha sido señalado por la doctrina que se ha expresado sobre este procedimiento⁴⁸¹.

En la sesión plenaria, una vez proclamados los candidatos que serían propuestos al Rey para su nombramiento, el portavoz del Grupo comunista, el diputado Jordi Solé Tura, pidió la palabra para explicar que habían votado en blanco porque no estaban de acuerdo con “el método” que se había seguido para seleccionar a los candidatos y que estimaban que una decisión de este tipo “debería ser una decisión unánime de la Cámara”. Aclaró también que no tenían “nada en contra de algunas de las personalidades” elegidas, y que la forma en que se habían dado cuenta de las candidaturas había sido por la prensa.

En una línea parecida de cuestionamiento al procedimiento pero no a los candidatos, también se expresó el diputado Juan Carlos Aguilar Moreno del Grupo parlamentario Andalucista, quien reprochó duramente a los grupos mayoritarios no haber guardado “las formas mínimas democráticas” que deberían caracterizar las actuaciones de la Cámara, “respecto a todos los Grupos”, particularmente en estas materias⁴⁸².

Por otro lado, en la sesión tomaron la palabra los dos Grupos mayoritarios en defensa del procedimiento seguido. Gregorio Peces-Barba por el Grupo socialista expresaría que ningún Grupo había objetado el procedimiento y que nadie había impedido a éstos presentar candidatos que desde luego su Grupo hubiera considerado. Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Centrista, el diputado Antonio Jiménez Blanco, respaldó la línea expresada por Peces-Barba, pero además hizo comentarios en torno a la incompatibilidad de la unanimidad en el marco del pluralismo democrático presente en la Cámara, recordando adicionalmente la operatividad de un

⁴⁸¹ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El procedimiento de elección de los magistrados constitucionales”, *op. cit.*, pág. 161. También, DE LA CUADRA, Bonifacio: “¿Imagen bipartidista?”, en *El País*, 26 de enero de 1980; DE LA CUADRA, Bonifacio: “El acuerdo UCD-PSOE facilitó la elección de los candidatos al Tribunal Constitucional”, en *El País*, 31 de enero de 1980; Editorial de *El País*: “El mal consenso”, en *El País*, 1 de febrero de 1980; Editorial de *El País*: “Los diez candidatos al Tribunal Constitucional, con Suárez”, en *El País*, 5 de febrero de 1980; DE LA CUADRA, Bonifacio: “Los diez primeros magistrados constitucionales, fruto del consenso UCD-PSOE”, en *El País*, 12 de julio de 1980.

⁴⁸² Véase CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Formulación de propuestas para el nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 60 (extraordinaria), 30 de enero de 1980, págs. 4095-4096.

sistema de toma de decisiones mediante mayorías reforzadas, las cuales fueron conseguidas en la votación⁴⁸³.

Como se puede ver, las intervenciones en defensa del procedimiento se plantearon desde una perspectiva muy formal, al extremo que no llegaron a tocar el verdadero punto objetado por los Grupos minoritarios. Ello es así, porque en el fondo, lo que estos Grupos parlamentarios denunciaban era el acuerdo entre las dos grandes formaciones políticas para proponer a los magistrados constitucionales sin consultar al resto de fuerzas políticas minoritarias. Es decir, la objeción era en contra del “procedimiento informal” mediante el cual las candidaturas se acordaron bilateralmente ignorando por completo a las minorías, haciendo valer el poderío de contar sobradamente con la mayoría requerida (sumaban 289 votos entre el Grupo centrista y el socialista); pero la inconformidad no se dirigía fundamentalmente contra el “procedimiento formal”, aunque este también es manifiestamente mejorable.

El posicionamiento de los Grupos minoritarios resulta ciertamente razonable por cuanto hubiese sido preferible que la selección de los primeros magistrados constitucionales viniera con su respaldo, sumando con ello el mayor apoyo posible de cara a las funciones que estaba destinado el naciente órgano a desempeñar, como por ejemplo, la aplicación de la nueva Constitución y la puesta en marcha de las Autonomías. Ciertamente, ese respaldo no podría llevarse a los niveles de unanimidad, como planteó no sin cierto optimismo Solé Tura, porque en un entorno parlamentario de pluralidad democrática, la unanimidad es más bien una lejana aspiración. Si fuera exigida la unanimidad para que el Parlamento procediera a la designación de los magistrados constitucionales, seguramente estos nombramientos se bloquearían constantemente.

De esta forma quedó operada la primera designación de los magistrados a cargo del Congreso. Luego de la etapa parlamentaria, los nombres fueron propuestos al Rey para que efectuara los nombramientos, los cuales fueron acordados mediante Reales Decretos de 14 de febrero, publicados en el BOE el 22 del mismo mes⁴⁸⁴. Los magistrados designados, junto con los cuatro del

⁴⁸³ *Idem*, págs. 4097-4098.

⁴⁸⁴ Fueron designados mediante los Reales Decretos 303, 308, 309 y 310, todos de 14 de febrero de 1980, publicados en el BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1980.

Senado y los dos del Gobierno, comenzaron en el propio mes de febrero sus actividades como Colegio de Magistrados, preparando el inicio de las funciones jurisdiccionales⁴⁸⁵.

No hicieron el juramento o la promesa ante el Rey inmediatamente a que fueron nombrados, sino que el acto se llevó a cabo hasta el 12 de julio de 1980 en el Palacio de la Zarzuela, tras lo cual se celebró el acto solemne de posesión del cargo en el edificio previsto para sede definitiva del Tribunal Constitucional en Madrid⁴⁸⁶. Aquí el Presidente del TC Manuel García-Pelayo pronunció el discurso fundacional⁴⁸⁷ y quedaría constituido el Tribunal.

5.1.3.- Sustitución de Aurelio Menéndez por Truyol y Serra

Las Reglas de Presidencia de 1980 utilizadas para la designación inaugural de los magistrados a cargo del Congreso, serían muy pronto aplicadas de nueva cuenta. Ello sería así, porque un poco antes de completar el primer año de funciones, se presentó la dimisión de Aurelio Menéndez, lo que motivó otro proceso formal de selección en el Congreso.

Según informaron los medios de comunicación, el Magistrado presentó la dimisión, con carácter irrevocable, el 3 de octubre de 1980⁴⁸⁸, la cual fue

⁴⁸⁵ Las actividades comenzaron a partir de una reunión celebrada en el hoy Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el 25 de febrero de 1980, según consta en las actas del Colegio de Magistrados (25/02/1980-17/07/1980). Véase BORRAJO INIESTA, Ignacio: "Renovarse o morir: el ritmo de las renovaciones del Tribunal Constitucional español", en *Revista General de Derecho Constitucional*, núm. 16, 2013, pág. 11, nota 32. Coincido con Ignacio Borrajo, en el interés de que las actas del Colegio de Magistrados sean publicadas próximamente.

⁴⁸⁶ El TC sin embargo, no se trasladó a la sede definitiva sino hasta poco más de un año después. Mientras tanto despachó en la sede provisional del Tribunal Constitucional, que estuvo localizada en el Paseo de la Habana, números 140-142, de Madrid. Véase el Acuerdo de 14 de julio de 1980, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se fija la fecha en que comenzará a ejercer sus competencias (BOE núm. 168, 14 de julio de 1980, pág. 16037.). Se mantuvo ahí desde la constitución del Tribunal, el 12 de julio de 1980, hasta el 16 de septiembre de 1981, que empezó a desarrollar sus actividades jurisdiccionales en el edificio de la calle de Domenico Scarlatti núm. 6 de Madrid.

⁴⁸⁷ Recogido en TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: *Discursos de sus Presidentes (1980-2005): 25 aniversario*, Madrid, 2006, págs. 13-21.

⁴⁸⁸ Los medios de comunicación hicieron eco de dicho acontecimiento, véase la nota siguiente: "Aurelio Menéndez dimite como miembro del Tribunal Constitucional", en *El País*, 8 de octubre de 1980. La prensa también publicó una entrevista a Aurelio Menéndez, en la que explicaba los motivos de su dimisión, consistentes, *grosso modo*, en no haber alcanzado la presidencia del Tribunal, luego que del Gobierno le había invitado a la magistratura para incorporarlo con esa calidad: "Se me llamó para asumir esa alta responsabilidad pública, y después de no pocas resistencias por mi parte, terminé dando mi conformidad y aceptando la designación como magistrado". DE LA CUADRA, Bonifacio: "Aurelio Menéndez: 'Mi continuación no sería buena para mí ni para el Tribunal'", en *El País*, 9 de octubre de 1980.

aceptada cuatro días después por el Presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García-Pelayo (23 LOTC). De acuerdo con las previsiones legales, el Presidente del TC cursó la correspondiente comunicación al Presidente del Congreso de los Diputados, instándole para que iniciase el procedimiento para la selección de un nuevo magistrado (17.1 LOTC)⁴⁸⁹.

Como ya se había mencionado, las normas aprobadas de Presidencia estaban dirigidas a la designación de los magistrados de forma grupal, de modo que la literalidad de las mismas, contemplaba el límite máximo de cuatro candidaturas a los Grupos parlamentarios y de cuatro votos a cada diputado. En la ocasión, solo se trataba de cubrir una plaza, y para esos efectos, las normas fueron interpretadas proporcionalmente para el caso, siguiendo efectivamente el sentido y las directrices marcadas por la normativa original. De este modo, se fijó a los Grupos la posibilidad de presentar solo una propuesta y a los diputados se les indicó el derecho a sufragar por un solo candidato.

Tuvieron que pasar más de dos meses para que la designación se llegara a plantear formalmente en una sesión plenaria del Congreso, lo cual sucedió el 18 de diciembre de 1980. Como en la designación de los primeros cuatro magistrados, en aquella ocasión tampoco la Presidencia mencionó qué candidaturas habían sido presentadas por cada Grupo, sino que se limitó a dar los nombres de los candidatos y los Grupos parlamentarios proponentes⁴⁹⁰.

En tales términos, se indicó que los Grupos proponentes habían sido el socialista, el centrista y la minoría catalana; mientras que los candidatos propuestos habían sido Antonio Truyol y Serra, y Josep María Vilaseca i Marcet. Los medios de comunicación proporcionarían la identificación de los candidatos con los Grupos parlamentarios, recogándose que el acuerdo que seguía prevaleciendo entre UCD y PSOE, conseguía presentar como candidato

⁴⁸⁹ La comunicación del Presidente del Tribunal Constitucional fue recibida el 9 de octubre de 1980, según se hizo constar en el expediente 235/000002, creado por el Congreso de los Diputados para cubrir la vacante dejada por Aurelio Menéndez. El expediente puede consultarse en el apartado de “Iniciativas” y “consulta de expedientes públicos” del portal de Internet del Congreso de los Diputados: www.congreso.es.

⁴⁹⁰ En la sesión, fue el diputado Gregorio Peces-Barba quien pediría a la Presidencia “que se indicase qué grupos parlamentarios han hecho cada propuesta”, a lo cual se le respondió que se aplicaría el acuerdo “de identificar grupos proponentes”, a efectos de que “no quede establecido una especie de criterio de votación al candidato de un grupo u otro”. Véase CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Elección de magistrado del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 140, I Legislatura, 18 de diciembre de 1980, pág. 9081.

al Catedrático de Derecho Internacional Público y de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Truyol y Serra; y por otro lado, se informaba que el Grupo de la minoría catalana había propuesto al abogado José María Vilaseca i Marcet⁴⁹¹.

Llegado el momento de elegir al magistrado (al final de una maratónica sesión), tuvo que suspenderse la votación por falta de *quorum* y colocarse en la última sesión del año, esto es el 29 de diciembre de 1980⁴⁹². En esta sesión, finalmente se llevaría a cabo la designación del magistrado.

Candidato	Votación
Antonio Truyol y Serra	253
José María Vilaseca i Marcet	15

En blanco	12
Nulos	6

Como se puede ver, la mayoría calificada para resultar designado magistrado constitucional la obtuvo el señor Truyol y Serra. En esta ocasión, ninguno de los Grupos parlamentarios tomaría la palabra para justificar el sentido de su voto, no obstante, las votaciones mostraron que el acuerdo entre UCD y PSOE se mantenía inalterado respecto al de las primeras designaciones, en las cuales se alcanzaron niveles de votación entre los 248 y 255 votos. En cuanto a los quince votos alcanzados por el señor Vilaseca i Marcet, los mismos se explicarían por el apoyo del propio Grupo que lo propuso, a saber, la minoría catalana, que se integraba con nueve diputados, por lo que los seis votos restantes quizá vinieron de diputados catalanes de otro Grupo.

Por otro lado, los medios de comunicación darían algunas pistas para dilucidar el sentido de la votación de los restantes Grupos parlamentarios. De

⁴⁹¹ Véase “Antonio Truyol, candidato de UCD y PSOE para el Tribunal Constitucional”, en *El País*, 18 de diciembre de 1980; “El día 29, probable elección de Truyol para el Tribunal Constitucional”, en *El País*, 23 de diciembre de 1980.

⁴⁹² CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Elección de magistrado del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 141, I Legislatura, 29 de diciembre de 1980, pág. 9093.

esta manera cobrarían mayor explicación, por lo menos los votos en blanco emitidos y la falta de votación de aproximadamente 64 diputados. En este sentido, la prensa recogería que el Grupo vasco (que se integraba con siete diputados) había votado en blanco, y que los Grupos comunista y andalucista (que sumaban veintiocho diputados) no habían participado en la votación debido a la reiterada queja de no haberlos tomado en cuenta en la negociación⁴⁹³.

Como se puede observar, los Grupos comunista y andalucista que se habían quejado del modo en que las dos fuerzas políticas habían procedido a la designación inaugural, en esta ocasión ni siquiera emitieron el sufragio. Todo parece indicar, que nuevamente fueron excluidos de la negociación y pasaron su protesta del voto en blanco a la abstención. Objeción sin duda relevante, porque muestra por un lado, el desapego de los diversos Grupos minoritarios al procedimiento selectivo, y por otro, el reducido interés de las dos fuerzas mayoritarias para efectuar las designaciones con el mayor nivel de consenso posible.

Finalmente, en cuanto a los datos de formalización del cargo, se tiene que el señor Truyol y Serra fue nombrado mediante Real Decreto 52/1981, de 9 de enero, publicado en el BOE hasta el 14 del mismo mes⁴⁹⁴, esto es, casi cien días después de que la dimisión del Magistrado Aurelio Menéndez haya sido aceptada. Por cierto, en cuanto a este último, conviene llamar la atención en que no se expidió el correspondiente Real Decreto para acordar el cese formal de su nombramiento.

5.2.- La primera renovación (1983)

5.2.1.- La normativa prevista en el Reglamento del Congreso de 1982

El 10 de febrero de 1982, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó su primer Reglamento con carácter definitivo luego de promulgada la Constitución de 1978⁴⁹⁵. Este Reglamento (RCD), elaborado por la I Legislatura

⁴⁹³ Véase la parte atinente de la nota de DE LA CUADRA, Bonifacio: "El Congreso rechazó la modificación socialista a los Presupuestos del Estado. Antonio Truyol, nuevo magistrado del Tribunal Constitucional", en *El País*, 30 de diciembre de 1980.

⁴⁹⁴ El Real Decreto fue publicado en el BOE núm. 12, de 14 de enero de 1981.

⁴⁹⁵ Publicado en el BOE núm. 55, de 5 de marzo de 1982.

del Congreso de los Diputados, dedicó el Título XII para desarrollar los artículos 122.3 y 159.1 de la Constitución, previendo el procedimiento parlamentario para efectuar “las propuestas de nombramiento y de la designación de personas” (arts. 204, 205 y 206).

En el artículo 204, prácticamente se recogió la normativa prevista en la Resolución de Presidencia de 1980 para proceder a la designación de los magistrados del TC y vocales del CGPJ, salvo algunas modificaciones que más adelante se comentarán. En el artículo 205 se dispuso una cláusula de apertura para el uso de tal procedimiento en otros casos, concretamente, cuando se destine al Congreso la “propuesta, la aceptación o el nombramiento de personas por una mayoría cualificada”. El artículo 206, por su parte, dispuso unas reglas para los procedimientos selectivos de personas para los casos en que no se exija una mayoría calificada.

Fuera del Título XII, se mantuvieron otras disposiciones aplicables del procedimiento selectivo, como sería el artículo 87, en el cual se reiteró la votación secreta mediante papeletas en los supuestos de elección de personas, y se llevó al texto la logística que venía practicándose en las sesiones parlamentarias para emitir el sufragio, consistente en el llamamiento nominal por orden alfabético de cada diputado para depositar la papeleta en la urna.

De igual forma, podría considerarse en esta línea de legislación aplicable, la necesidad de la “previa distribución a todos los Diputados con derecho a participar en el Pleno o en la Comisión” de la documentación que haya de servir de base en el mismo, “al menos con cuarenta y ocho horas de antelación” (69 RCD). Una regla, que como ya se decía, aunque está dirigida a normar las fases de debate de los procedimientos parlamentarios, pudiera resultar aplicable a la designación de personas.

Volviendo con más detalle al artículo 204, como se decía anteriormente, básicamente fue traspuesta la Resolución de Presidencia, con algunas mejoras técnicas, aunque en el apartado segundo de dicho artículo se introdujo una regla muy importante en materia de designación, que no suele observarse en las experiencias constitucionales del entorno.

En efecto, el art. 204.2, además de que mantuvo tanto la proposición máxima de cuatro candidaturas para cada Grupo parlamentario, como la

facultad a los diputados de escribir hasta cuatro nombres en la papeleta, agregó nada menos que la posibilidad de que cada Grupo pudiese “intervenir al efecto por tiempo máximo de cinco minutos”. Con ello, evidentemente se vino a resolver la ambigüedad que en ese sentido venía expresándose por los parlamentarios, respecto de la posibilidad de pasar o no a tribuna a explicar el porqué de la propuesta.

Pero además esta regla supone la apertura de un espacio para que los Grupos puedan discutir en sede formal y parlamentaria, acerca de los criterios utilizados para la selección de los candidatos. Se trata desde luego, de una disposición con sus respectivas limitaciones, sobre todo por la brevedad del tiempo que se dispone para la intervención y el carácter único de ésta, lo cual difícilmente puede permitir un debate a conciencia, pero no deja de ser un precepto de la máxima importancia en materia de transparencia.

En el mismo artículo 204.4 del nuevo Reglamento, también se conservó la disposición que reputaba elegidos a los cuatro candidatos que más votos hayan obtenido, siempre que comporten la mayoría calificada, la cual ahora no se establecía en los 210 sufragios como había dispuesto la resolución elaborada por la Presidencia (regla cuarta), sino que lo fijó con una fórmula general más acertada, que era además la prevista en la Constitución, esto es, la mayoría de los “tres quintos de los votos de los miembros del Congreso”.

El resto de disposiciones de la normativa de Presidencia anterior, esto es, las reglas de balotaje y las medidas para superar los empates en la votación, serían reproducidas en los apartados quinto y sexto del nuevo artículo 204 del Reglamento, sin mayores modificaciones.

Como se puede ver, el nuevo RCD no cambió el modelo selectivo trazado desde las normas de Presidencia de 1980, y en esa medida, por ejemplo, no amplió el número de sujetos que podían presentar las candidaturas, tampoco previó más elementos de la etapa de instrucción del procedimiento, como pudiera ser una fase de proclamación de candidaturas, un examen del cumplimiento de los requisitos de acceso a la magistratura constitucional⁴⁹⁶, alguna etapa de consultas, comparecencias del candidato, o la valoración de méritos del mismo, entre otras.

⁴⁹⁶ Así también lo resaltó en su momento FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El procedimiento de elección de los magistrados constitucionales”, op. cit., pág. 165.

5.2.2.- La reelección de Truyol y Serra, Rubio Llorente, Tomás y Valiente, y Díez de Velasco

Las normas dispuestas en el Reglamento de 1982 tuvieron ocasión de aplicarse casi un año después. Ello fue así, porque el primer sorteo celebrado en 1983 previsto en la DT 9ª de la CE para activar la cadencia de renovaciones parciales, recayó en el grupo de magistrados designados por el Congreso. Luego de no pocas complicaciones, los magistrados que venían desempeñando el cargo fueron finalmente reelegidos. Esta reelección fue posible, porque como se recordará, de forma particular la DT 3.2 de la LOTC permitía la reelección inmediata de los magistrados que cesaran por el primer sorteo de la DT 9ª de la CE y de forma general, porque el art. 16.4 LOTC (ex art. 16.2) prevé la reelegibilidad de aquéllos magistrados que no hayan ocupado el cargo por más de tres años.

Esta renovación parcial sin embargo, se llevó a cabo desde un contexto político muy diferente al de las designaciones pasadas. Ello fue así, porque los resultados de las elecciones generales de octubre de 1982, dieron al PSOE la que ha venido a ser la más contundente victoria electoral que ha tenido desde la promulgación de la Constitución de 1978.

En efecto, el partido socialista consiguió la mayoría absoluta en las dos Cámaras de la II Legislatura (1982-1986). Registró en el Congreso 202 diputados, llevó al Gobierno a Felipe González, y colocó a la “Alianza Popular-Partido Demócrata Popular” (AP-PDP) en la segunda fuerza parlamentaria con 107 diputados⁴⁹⁷.

En este caso, las negociaciones entre los dos grandes partidos políticos para proveer las candidaturas fueron más complejas que las dos anteriores. Para entender estas dificultades, considérese primeramente que los Grupos mayoritarios tenían posturas encontradas: el Grupo socialista pretendía sólo la reelección de dos magistrados (Tomás y Valiente, y Díez de Velasco), y la sustitución de los otros (Rubio Llorente, y Truyol y Serra), mientras que el Grupo popular se decantaba por la sustitución del bloque completo o bien, por la reelección del mismo.

⁴⁹⁷ En el Congreso de los Diputados, el resto de Grupos parlamentarios se integró como sigue: CiU, 12; UCD, 11; el resto 18.

En segundo lugar, repárese en que el contexto del acuerdo estuvo marcado por al menos tres acontecimientos que encrespaban el clima político: la pendiente resolución del recurso presentado contra la Ley de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA); la expropiación del grupo “Rumasa” y el enfrentamiento entre populares y socialistas a raíz del recurso previo de inconstitucionalidad contra el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Elecciones Locales.

Luego del largo periodo en el que se desarrollaron tensas negociaciones, finalmente el Grupo socialista cedió en su postura y optó por la renovación del bloque de los cuatro magistrados constitucionales consiguiendo así el acuerdo con el Grupo popular⁴⁹⁸. Los nombres de los cuatro magistrados fueron presentados en la sesión plenaria del 27 de septiembre de 1983, indicando además como Grupo proponente a la minoría catalana⁴⁹⁹. Los resultados de la votación fueron los siguientes:

Candidato	Votación
Manuel Díez de Velasco-Vallejo	255
Antonio Truyol y Serra	255
Francisco Rubio Llorente	254
Francisco Tomás y Valiente	254

Como se puede observar, los magistrados fueron respaldados con un nivel de votación similar al conseguido en las designaciones de 1980, en que los nombramientos fueron acordados por las dos grandes fuerzas políticas. En esta ocasión, no obstante que ese acuerdo se mantuvo y que además se sumó el Grupo de la minoría catalana, no puede dejar de observarse cierta merma en

⁴⁹⁸ En el diario *El País*, un periodista recogía en cuanto al cambio de postura del Grupo socialista, que la “sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, desfavorable para el Gobierno y la mayoría socialista, hizo cambiar de criterio al PSOE, que entendió que de mantener sus propósitos de renovación parcial podría interpretarse como una forma de castigo a unos magistrados respecto a otros. Al menos, este es el argumento oficiosamente esgrimido sobre el cambio de actitud socialista, aunque la votación de los doce magistrados del Tribunal Constitucional fue unánime en lo que se refiere a la LOAPA”. Véase DE LA CUADRA, Bonifacio: “El Congreso reelige a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 28 de septiembre de 1983.

⁴⁹⁹ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Elección para formular propuesta a Su Majestad el Rey a fin de que sean elegidos magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 58, II Legislatura, 27 de septiembre de 1983, págs. 2734-2735.

la votación, producto muy probablemente de las fricciones de la compleja negociación entre los partidos. Ello es así, porque entre los tres Grupos llegaban a sumar 321 diputados, mientras que las votaciones rondaron los 254 y 255 votos, lo cual arroja que entre 67 y 66 parlamentarios, o no apoyaron el acuerdo, o no estuvieron en la sesión.

Por otro lado, no se indicó en la sesión plenaria si se habían registrado votos en blanco o nulos, ni los Grupos parlamentarios usaron el derecho de intervenir en tribuna amparado por el art. 204.2 del RCD. Por ello no puede saberse por esta vía cómo votaron el resto de minorías parlamentarias en el Congreso, aunque muy probablemente es que no hayan participado de la votación, tal como lo habían hecho en la sustitución de Aurelio Menéndez.

El largo y accidentado proceso de negociación por el que atravesó esta elección, dejaría por lo menos un par de precedentes negativos para el funcionamiento del TC. El primero de ellos, tiene que ver directamente con el comportamiento de las principales fuerzas políticas en el transcurso de las negociaciones y las motivaciones que se desprendieron para no reelegir a dos magistrados y a conservar a otros dos. El forcejeo entre las fuerzas políticas, recogido generalmente en los medios de comunicación, propaló en el ambiente, como bien lo expone Fernández Segado⁵⁰⁰, la idea de que la composición política del Congreso debía reflejarse en la composición del Tribunal Constitucional, de modo que las nuevas mayorías debían tener más influjo en la propuesta de los magistrados⁵⁰¹.

Ilustra lo anterior, la crónica que la prensa publicó sobre una de las reuniones de la Junta de Portavoces del Congreso, en la que el portavoz del Grupo socialista Javier Sáenz Cosculluela, se había expresado en el sentido de que la composición política de la Cámara debía reflejarse en la composición del Tribunal Constitucional⁵⁰². Una idea, sin duda, motivada por la contundente

⁵⁰⁰ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: "El procedimiento de elección de los magistrados constitucionales", op. cit., pág. 167.

⁵⁰¹ Esta postura además, fue respaldada por el Profesor DE ESTEBAN, Jorge: "La renovación del Tribunal Constitucional: una voz disidente", en *El País*, 20 de marzo de 1983; y en DE ESTEBAN, Jorge: "La renovación del Tribunal Constitucional: una voz disidente/ 2", en *El País*, 21 de marzo de 1983. La prensa hizo también eco de la situación: "El Congreso y el Tribunal Constitucional", en *El País*, 17 de septiembre de 1983.

⁵⁰² DE LA CUADRA, Bonifacio: "La oposición parlamentaria rechaza la sustitución de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Dificultades del PSOE para sustituir a Truyol y Rubio Llorente", en *El País*, 26 de enero de 1983.

mayoría que recién había obtenido el PSOE en la época y que los impulsaba a determinar tres de las cuatro plazas a cubrir.

Además de entender esa “titularidad” para determinar tres plazas, también se puede detectar cierto fenómeno muy propio de los procedimientos de reelección, como puede ser el de no confirmar en el cargo a los magistrados que se hayan mostrado menos proclives al seguidismo del grupo político designante. Quizá esto haya sido la base de la posición inicial del Grupo socialista, por la que se determinaba no apoyar la reelección de los Magistrados Rubio Llorente y Truyol y Serra.

Otra de las consecuencias de la elección de 1983 es sin duda, la relativa a la prolongada dilación en la que incurrió el Congreso de los Diputados para cubrir las cuatro plazas de magistrado constitucional. En efecto, desde el 15 de noviembre de 1982 que el sorteo efectuado en el TC determinó el cese de los magistrados, hasta los Reales Decretos de nombramiento que fueron publicados el 25 de octubre de 1983⁵⁰³, pasarían más de once meses (si bien, con un verano de por medio).

El bloqueo parlamentario derivado de la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas, ubicó a los cuatro magistrados salientes en una situación de interinidad impuesta desde fuera, en la cual se vio de gran utilidad el instituto de la “prorogatio”, contemplada en el art. 17.2 de la LOTC.

La prórroga de las funciones permitió a los magistrados cesantes continuar en el ejercicio del cargo, y desarrollar así el trabajo del Tribunal Constitucional en la resolución de asuntos trascendentes para el país, tales como los recursos previos de inconstitucionalidad promovidos contra la Ley de Elecciones Locales y contra la LOAPA. Ciertamente no era la posición más deseable, pues los magistrados ejercían el cargo mientras las fuerzas políticas perfilaban o no su reelección. Además, por desgracia, no será esta la primera vez en que se presenten dilaciones en la designación de los magistrados. Se retomará este problema más adelante.

5.2.3.- Sustitución de Díez de Velasco por Leguina Villa

⁵⁰³ Los magistrados fueron nombrados mediante los Reales Decretos 2709 a 2712/1983, todos de 24 de octubre, publicados en el BOE núm. 255, de 25/10/1983.

El 18 de octubre de 1985, el Magistrado Manuel Díez de Velasco hizo pública su intención de dimitir del cargo antes de febrero de 1986. El 4 de febrero de 1986 fue recibido en el Congreso el escrito del Presidente del Tribunal en el que comunicaba la renuncia del magistrado⁵⁰⁴.

En la Junta de Portavoces del 11 de febrero de 1986 se acordó colocar la elección del nuevo magistrado en la sesión plenaria del 13 de febrero, estableciendo un plazo para presentar candidaturas a las 14 horas de ese día, en la cual se informó que sólo se había presentado la candidatura del Grupo socialista, consistente en el Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá de Henares, Jesús Leguina Villa⁵⁰⁵.

Una vez en la sesión plenaria el Presidente del Congreso, el señor Peces-Barba ordenó que se leyera el escrito de presentación de la candidatura, enseguida indicó que la misma había sido calificada por unanimidad por la Mesa, y finalmente explicó la logística para efectuar la votación, resultando una de las indicaciones ciertamente polémica.

En efecto, el Presidente realizó una interpretación acerca del sentido que se daría a la votación que se emitiera “en blanco”, exponiendo que al tratarse de un solo candidato, los diputados que estuvieran conformes con esa propuesta incluirían el nombre del candidato y aquellos que no, “dejarán el voto en blanco”. Luego afirmaría que “el voto en blanco es una forma de votar que no se quiere al candidato que se propone”, y que votar “no” y “en blanco” es lo mismo.

Lo cierto es que esta interpretación no afectó finalmente el desarrollo de la votación, sin embargo resultaba un tanto innecesaria y contraria a las prácticas parlamentarias. En efecto, la normativa prevé la forma de manifestar el voto, pero no el comportamiento concreto para mostrar la inconformidad de la candidatura. El criterio del Presidente de entender el voto en blanco y el voto en contra como si fueran lo mismo, no parece el más acertado. Puede ser una interpretación, pero desde luego no es la única. Incluso, no parece que sea la más recurrida, pues regularmente el voto en blanco es una opción más

⁵⁰⁴ Dato obtenido del expediente 235/000002 abierto por el Congreso de los Diputados para proceder a la cobertura de la plaza dejada vacante por la dimisión del Magistrado Díez de Velasco. Disponible en la sección de “iniciativas” de www.congreso.es.

⁵⁰⁵ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Elección para formular propuesta de nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 270, II Legislatura, 13 de febrero de 1986, págs. 12182-12183.

aséptica que ha sido utilizada por los parlamentarios para objetar el procedimiento o por haber sido excluidos de las negociaciones, pero no para mostrar la disconformidad directa con los candidatos.

Los resultados del escrutinio arrojaron una emisión general de 255 sufragios, repartidos como sigue⁵⁰⁶:

Candidato	Votación
Jesús Leguina Villa	212
No o en blanco	40
Nulos	3

En la propia sesión se indicó que el Congreso estaba integrado por 346 diputados de modo que las tres quintas partes equivalían a 208 votos. Como se puede observar, el magistrado apenas consiguió la mayoría exigida por un margen de cuatro votos. Aunque ninguno de los Grupos parlamentarios tomaría la palabra en la sesión para exponer el sentido de su voto, se supo que la ceñida obtención de la mayoría calificada, era resultado de la falta de apoyo de Alianza Popular (AP). La mayoría calificada, fue sin embargo obtenida gracias al respaldo del Grupo socialista, que contaba con 202 parlamentarios y el resto de votos seguramente provinieron de la minoría catalana, el Grupo vasco, o el Grupo mixto.

Esta fue la primera elección en que el principal partido de la oposición no apoyó una propuesta de magistrado constitucional, lo que reflejó el inédito quiebre del consenso entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, que venía siendo conservado –aunque a veces con muchas dificultades- en las selecciones de magistrados constitucionales desde la creación del Tribunal Constitucional.

Esta sustitución, debe entenderse además insertada en la renovación de otros cinco magistrados: dos del CGPJ y dos del Gobierno, en virtud del segundo sorteo de la DT 9ª de la CE; y uno por el Senado, para cubrir la plaza dejada vacante por la dimisión de Manuel García-Pelayo, y donde tampoco

⁵⁰⁶ *Idem*, pág. 12183.

participó la segunda fuerza política del país. En general, los medios de comunicación reflejaron cómo todas las designaciones se harían siguiendo la lógica de que la mayoría parlamentaria del PSOE debía reflejarse en la composición del TC⁵⁰⁷.

5.2.4.- Sustitución de Truyol y Serra, por Gabaldón López

A principios de 1990 vino el cese anticipado del Magistrado Antonio Truyol y Serra por haber renunciado al cargo para jubilarse⁵⁰⁸. El Magistrado Truyol había sido designado magistrado constitucional en 1980 en sustitución de Aurelio Menéndez, con posterioridad, fue reelegido por el Congreso de los Diputados en 1983, de modo que su periodo ordinario de cargo debía finalizar hasta el 22 de febrero de 1992.

Desde que Truyol y Serra solicitó su cese (hacia el 29 de noviembre de 1989) y hasta que el Congreso designó a su sustituto (27 de junio de 1990), pasaron casi siete meses, en los cuales, los dos principales partidos políticos mantuvieron bloqueada la sucesión debido al distanciamiento que operaba en el momento que no permitía el acuerdo. El Presidente del TC, Francisco Tomás y Valiente, tuvo que enviar una segunda comunicación al Presidente del Congreso para instar la designación del sustituto del Magistrado Truyol⁵⁰⁹.

En aquella época, conviene recordar que se trataba de la IV Legislatura del Congreso (1989-1993), en la cual por tercera vez consecutiva el PSOE ganaba las elecciones, obteniendo en la Cámara baja 175 escaños, esto es, a un diputado de distancia para obtener la mayoría absoluta. Por su parte, el PP

⁵⁰⁷ Véase, por ejemplo, la nota de DE LA CUADRA, Bonifacio: "García-Mon y Jesús Leguina serán elegidos por el Parlamento magistrados del Tribunal Constitucional. Tomás y Valiente, firme candidato a presidir el alto órgano", en *El País*, 11 de febrero de 1986.

⁵⁰⁸ En una declaración a la prensa, Truyol y Serra justificó su renuncia declarando que "me quedan dos años, pero no quiero abusar de ese periodo debido a la edad que tengo (76 años), el enorme trabajo que supone ser magistrado del Tribunal Constitucional y mi deseo de dedicarme a labores científicas que tengo pendientes". PERAL, María: "Antonio Truyol presenta su renuncia irrevocable al Tribunal Constitucional", en *ABC*, 7 de diciembre de 1989, pág. 24.

⁵⁰⁹ El expediente 235/000001 abierto en el Congreso con motivo de la sustitución del Magistrado Truyol y Serra no recoge las aludidas comunicaciones, sino únicamente la fecha de presentación de la candidatura de D. José Gabaldón López por el Grupo parlamentario popular (presentado el 26/06/1990, calificado el 12/07/1990). La segunda misiva, sin embargo, se encuentra transcrita en la nota del periodista SÁNCHEZ, José Antonio: "Llamada de atención del Constitucional a Pons para que se sustituya a Truyol", en *ABC*, 25 de mayo de 1990, pág. 25. En dicha transcripción, Tomás y Valiente refiere que la primera comunicación se había enviado el 29 de noviembre de 1989. Según la nota de prensa, la segunda comunicación tenía fecha de 23 de mayo de 1990.

se constituía en la segunda fuerza parlamentaria con 107 diputados, después le seguirían CiU con 18, IU con 17, CDS con 14, Grupo vasco 5 y mixto 10⁵¹⁰.

Según la escasa información recogida por la prensa, la propuesta del sustituto correspondía al PP, sin embargo, el nombre no era aportado; de igual modo, se decía que si “los conservadores no aportaban un candidato, el PSOE establecería conversaciones con el Partido Nacionalista Vasco y con *Convergència i Unió*” para proceder a la designación⁵¹¹. Finalmente la propuesta del PP sería generada y apoyada por el PSOE.

En efecto, el Grupo parlamentario popular en el Congreso propuso la única candidatura que fue presentada en la persona de José Gabaldón López, quien algunos meses antes se había jubilado siendo el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional⁵¹², cargo al que llegaría luego de una larga carrera judicial. La autoría de la candidatura era “adjudicable” al PP, si consideramos que el señor Gabaldón López había sido ex Presidente de la APM y además era considerado un Magistrado con un perfil conservador.

La designación vino en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados del 27 de junio de 1990, y los resultados de la votación serían los siguientes⁵¹³:

Candidato	Votación
José Gabaldón López	274

En blanco	14
Nulos	2

Como se puede ver, Gabaldón López consiguió 274 votos (de 290 emitidos), una cantidad que hasta el momento no había obtenido ningún

⁵¹⁰ Datos obtenidos de la página de Internet del Congreso de los Diputados, en el apartado titulado “El Congreso entre 1977 y 2011”, www.congreso.es.

⁵¹¹ Así lo recogía la periodista Díez, Anabel: “Populares y socialistas negociarán modificar la ley electoral para ahorrar gastos de campaña. Los conservadores acceden a hablar de la sustitución de un miembro del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 6 de junio de 1990.

⁵¹² Real Decreto 395/1990, de 15 de febrero, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don José Gabaldón López, Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

⁵¹³ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Propuesta de designación de un magistrado del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 47, IV Legislatura, 27 de junio de 1990, pág. 2286.

magistrado elegido por el Congreso. El Grupo parlamentario popular se conformaba de 107 diputados, de modo que los votos restantes tuvieron que venir del PSOE, que disponía de 175 escaños. Con ello se puede apreciar hasta qué punto esta plaza estaba acordada o “reservada” para una propuesta del Grupo popular.

Lo anterior es, ciertamente lo que puede deducirse tomando en cuenta la composición de los Grupos parlamentarios y por los datos proporcionados en los medios de comunicación, pues en la sesión no se registró vicisitud alguna. En la misma, sencillamente se colocó la designación del magistrado en el punto VI del orden del día, se informó que se había presentado sólo una propuesta, se procedió a la votación y los Grupos no hicieron uso de la palabra. Finalmente, el Magistrado José Gabaldón López fue nombrado mediante Real Decreto 850/1990, de 28 de junio, publicado en el BOE, núm. 159, de 4 de julio.

5.3.- La segunda renovación (1992)

5.3.1.- Designación de Cruz Villalón, González Campos, Viver Pi-Sunyer, y de Mendizábal Allende

La segunda renovación grupal de magistrados a cargo del Congreso de los Diputados implicaba a cuatro magistrados con unas circunstancias muy diferentes, desde el punto de vista del periodo que habían ejercido el cargo. Se trataba en efecto, del Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, y el Vicepresidente, Francisco Rubio Llorente, que como se sabe eran magistrados fundadores del Tribunal, nombrados desde aquél gran acuerdo materializado el 30 de enero de 1980, publicado en el BOE el 22 de febrero siguiente, luego reelegidos en 1983, de modo que su periodo se extendió hasta el 22 de febrero de 1992, sumando un total de doce años en el cargo.

Del resto de magistrados, uno era Jesús Leguina Villa que el 13 de febrero de 1986 había sido designado por el Congreso para sustituir a Díez de Velasco, que renunció al TC, y el otro Magistrado era José Gabaldón López, quien fue designado por el Congreso el 27 de junio de 1990 para cubrir la renuncia del cargo efectuada por Truyol y Serra. El primero llevaba seis años en el cargo y el segundo un año y ocho meses, por lo que era el único

reelegible. Pese a la evidente disparidad en los periodos de cargo, a todos les expiraba el mandato el 22 de febrero de 1992. Esta era una de las primeras consecuencias prácticas que estaba arrojando la puesta en marcha del modelo de rígida renovación parcial y la excepción de la prohibición de la reelección inmediata del cargo.

La comunicación del Presidente del TC, Francisco Tomás y Valiente al Presidente del Congreso para instar la renovación del grupo de cuatro magistrados fue recibida en el Congreso el 11 de octubre de 1991 (calificado el 15 de octubre)⁵¹⁴ y la designación no vendría sino hasta la sesión plenaria del 25 de junio de 1992, es decir, más de ocho meses después de la comunicación y más de cuatro meses posteriores a la finalización del cargo de los magistrados cesantes.

En la sesión plenaria, luego de una intervención del Grupo popular que planteó la renuncia del Presidente de la Cámara en cuanto a su controvertida conducta de haber modificado la fecha límite para presentar las candidaturas⁵¹⁵, se utilizó por vez primera el espacio de intervenciones que incorporó el art. 204.2 del RCD, en el que cada Grupo proponente tendría la palabra hasta por cinco minutos. Gracias a la utilización de esta regla, en la ocasión se pudieron obtener de manera formal algunas claves importantes sobre las vicisitudes del procedimiento selectivo.

En este sentido, se puede observar que en la sesión se presentaron tres listas de candidatos:

IU-Iniciativa per Catalunya	PP	PSOE y CiU
Enrique Gimbernat Ordeig	Rafael de Mendizábal	Pedro Cruz Villalón

⁵¹⁴ Así consta en el expediente 235/000002 abierto por el Congreso de los Diputados para proceder a la designación de los cuatro magistrados.

⁵¹⁵ El diputado del Grupo popular Rodrigo de Rato Figaredo, reprochó y pidió la renuncia del Presidente de la Cámara, Félix Pons Irazazábal, por haber “ampliado” irregularmente la fecha límite de presentación de candidaturas, para que pudiera recibirse la lista que presentó el PSOE. La petición de renuncia, no tendría mayor repercusión y la sesión seguiría su desarrollo. El Presidente, por su parte, no entraría en discusión del asunto y rechazaría tajantemente las imputaciones que le fueron efectuadas. Véase CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Elección por el Pleno de la Cámara de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 203, IV Legislatura, 25 de junio de 1992, págs. 10006-10011. El incidente también fue recogido en la prensa: VALDECANTOS, Camilo; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, Juan: “El PP cree que Pons le engañó en los trámites para la renovación del Constitucional y pide que dimita”, en *El País*, 24 de junio de 1992; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, Juan: “Serra habló con el PP para lograr un acuerdo de última hora sobre la renovación del Constitucional. La descoordinación entre Gobierno y Grupo parlamentario retrasó la lista del PSOE”, en *El País*, 25 de junio de 1992.

	Allende	
Carlos de Cabo Martín	Clemente Auger Liñán	Carles Viver Pi-Sunyer
Miguel Ángel Aparicio Pérez	José Gabaldón López	José Gabaldón López
José Antonio Martín Pallín	Cándido Conde-Pumpido Tourón	Julio González Campos

Una había sido formulada por el Grupo de Izquierda Unida-*Iniciativa per Catalunya*, incluyendo a los Profesores Enrique Gimbernat, Carlos de Cabo, Miguel Ángel Aparicio y el Magistrado del TS José Antonio Martín Pallín, pero fue retirada antes de la votación con el argumento de facilitar el consenso⁵¹⁶.

Las otras dos listas, serían resultado de la falta de acuerdo y descalificaciones entre las dos grandes fuerzas políticas, por lo que cada una presentó la suya al Pleno para la votación, si bien la del PSOE venía asimismo respaldada por CiU. Antes de abordar los resultados que arrojó la votación, conviene observar la reconstrucción que los medios de comunicación hacían de las negociaciones entre los grupos políticos.

En primer término considérese que se trataba de la IV Legislatura, la misma que había designado a Gabaldón López en sustitución de Truyol y Serra, en la que el PSOE ya no contaba con la mayoría absoluta que había obtenido en las dos anteriores elecciones generales, pero seguía siendo el grupo mayoritario. Como ya se mencionó, el Grupo socialista contaba con 175 diputados, el popular con 107, *Convergència i Unió* con 18, Izquierda Unida 17, entre otros.

Según información facilitada por los medios de comunicación, para esta segunda renovación grupal, se hablaba de la existencia de un compromiso por parte del PSOE y PP para pactar los nombres de los cuatro nuevos magistrados constitucionales antes de que finalizara el periodo de funciones de los que habrían de cesar, es decir, antes del 22 de febrero de 1992. Se decía que los negociadores habían renunciado a la formación de cuotas por grupos parlamentarios en función del número de votos y habían acordado que todos los elegidos debían ser aceptables para una mayoría que superara con

⁵¹⁶ Así lo expondría el portavoz del propio Grupo parlamentario, el diputado Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias Bohórques. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: "Elección por el Pleno de la Cámara de magistrados del Tribunal Constitucional", en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 203, IV Legislatura, 25 de junio de 1992, págs. 10007-10008.

facilidad los tres quintos de la Cámara⁵¹⁷. Para ello, se planteaba inicialmente una lista con los nombres que sirvieran de base para la negociación de las candidaturas no solamente del Congreso, sino también, para cubrir la vacante que dejaba José Luis de los Mozos, quien había dimitido del cargo, correspondiendo la sustitución al Senado⁵¹⁸.

La lista de candidaturas “base”, sin embargo, no consiguió que las fuerzas políticas acordaran la designación en tiempo, retrasando la renovación del Tribunal durante cuatro meses. En ese periodo de negociaciones, llegaron a publicarse en la prensa declaraciones de los políticos de muy diverso sentido. En algunas ocasiones anunciaban haber llegado a un acuerdo y en otras lo contrario⁵¹⁹ aunque también llegaron a alegarse justificaciones para posponer la renovación de los magistrados constitucionales a la realización de los comicios autonómicos catalanes o a que pasara el debate sobre el estado de la nación, con la esperanza de que el ambiente político fuera más propicio para el acuerdo luego de pasados tales acontecimientos⁵²⁰.

⁵¹⁷ El periodista Javier RIVAS informaba que en “la entrevista que mantuvieron hace una semana el Presidente del Gobierno, Felipe González, y el líder del Partido Popular, José María Aznar, ambos acordaron renunciar al establecimiento de cuotas para proponer a nuevos magistrados de este alto tribunal”. “El PSOE afirma que negociará la renovación del Constitucional”, en *El País*, 23 de abril de 1992.

⁵¹⁸ Los integrantes de esa lista de negociación, según se informó, eran los Catedráticos de Derecho Constitucional Manuel Jiménez de Parga, Pedro Cruz Villalón, Pedro de Vega, Juan José Solozábal, Francisco Laporta San Miguel; los Catedráticos de Derecho Administrativo Fernando Garrido Falla, Lorenzo Martín Retortillo, Martín Bassols Coma, Luis Ortega; y finalmente, se contemplaba al Abogado y político Landelino Lavilla Alsina. Véase DE LA CUADRA, Bonifacio: “El PSOE comienza la negociación para renovar el Constitucional y renuncia a proponer presidente. Cinco constitucionalistas, cuatro administrativistas y un abogado para cuatro vacantes”, en *El País*, 30 de enero de 1992.

⁵¹⁹ En la prensa se llegó a informar, por ejemplo, de un punto de acuerdo entre Felipe González y José María Aznar sobre la disposición a elegir cuanto antes, a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar al Congreso y uno al Senado. El problema era que ese acuerdo no se ejecutaba en la práctica. Véanse las notas de los periodistas, RIVAS, Javier: “El PSOE afirma que negociará la renovación del Constitucional”, en *El País*, 23 de abril de 1992; IBÁÑEZ GONZÁLEZ, Juan: “Principio de acuerdo para elegir a los cinco magistrados por consenso y sin cuotas de partido”, en *El País*, 27 de febrero de 1992.

⁵²⁰ DE LA CUADRA, Bonifacio: “Los socialistas ‘olvidan’ que sigue pendiente renovar el Constitucional. Martín Toval afirma que las negociaciones están paradas”, en *El País*, 21 de marzo de 1992. Por otro lado, en la editorial del mismo periódico titulado “Sin enmienda”, del 19 de marzo de 1992, se expresaba lo siguiente: “El pretexto alegado ahora para prorrogar todavía más el tiempo de incumplimiento en la designación de los cinco magistrados del TC es el debate sobre el estado de la nación, señalado para el próximo martes. Los grupos parlamentarios parecen necesitar toda su energía para la preparación de dicho debate. Pero no hay razón alguna para considerar que ambas tareas son incompatibles. Tan fundamental es la función parlamentaria de control sobre la actividad del Gobierno como la de cumplimentar en tiempo y forma el nombramiento de los cargos institucionales”.

En la búsqueda de los nombres para la negociación, el PP acudió a las asociaciones profesionales de jueces y fiscales para que procedieran a proponer candidatos para el TC. Esta característica fue significativamente destacada por el diputado del Grupo popular que tomó la palabra en la sesión del Congreso en que se procedió a la designación de los magistrados, en la que además se dijo que era una lista “pensada para equilibrar estructuralmente el Tribunal Constitucional”, en cuanto a la proveniencia profesional de los candidatos⁵²¹.

La lista se conformó con los nombres del Magistrado constitucional José Gabaldón López (único reelegible de los que iban a sustituir), de quien fuera Presidente de la Audiencia Nacional, Rafael de Mendizábal Allende; quien fuera Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Clemente Auger Liñán; el ex Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido; y para la plaza que correspondía elegir al Senado, presentaron la candidatura del Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Alonso Olea⁵²².

Frente a esta proposición, los medios de comunicación referían que el portavoz socialista en el Congreso, Eduardo Martín Toval, manifestaba que su grupo no iba a propiciar una elección “en la que lo determinante sea el criterio de corporaciones o asociaciones”, y que “otros grupos; están más en la línea de conseguir esa lista de candidatos de consenso desde la propia autonomía del Parlamento”⁵²³.

Mientras el PP ofrecía ese elenco de candidatos, el PSOE negociaba otra lista con el Grupo parlamentario de CiU, con ciertos acercamientos a Izquierda Unida. Producto de ese acuerdo, presentaban al Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Pedro Cruz Villalón, al Catedrático de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid, Julio González Campos; incluían también para su reelección a José Gabaldón (comprendido en la propuesta del PP); de igual modo y producto de un acuerdo

⁵²¹ Se trató del diputado Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde. Véase CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Elección por el Pleno de la Cámara de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 203, IV Legislatura, 25 de junio de 1992, pág. 10008.

⁵²² *Idem*, págs. 10008-10009.

⁵²³ Véase la nota del periodista LÁZARO MARTÍNEZ, Julio: “El PP propone cinco juristas de prestigio para el Tribunal Constitucional. Castellano, de IU, considera la lista ‘perfectamente asumible’”, en *El País*, 30 de mayo de 1992.

con CiU, al Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, Carles Viver Pi-Sunyer⁵²⁴.

En la sesión plenaria del Congreso de los Diputados del 25 de junio de 1992, de las dos listas sometidas a votación, se emitieron 324 votos, de los cuales se tuvieron los resultados siguientes:

Candidato	Votación
Rafael de Mendizábal Allende	293
Pedro Cruz Villalón	222
Julio González Campos	222
Carles Viver Pi-Sunyer	221
José Gabaldón López	97
Clemente Auger Liñán	95
Cándido Conde-Pumpido	92
En blanco	4
Nulos	1

Como se puede observar, Pedro Cruz Villalón y Julio González Campos obtuvieron 222 votos, mientras que Carles Viver 221. Los votos de estos tres Catedráticos fueron aportados por el PSOE, *Convergència i Unió*, Izquierda Unida y varios integrantes del Grupo mixto. El Grupo popular votó sus propias candidaturas, y por lo mismo José Gabaldón, Clemente Auger y Cándido Conde-Pumpido, obtuvieron respectivamente 97, 95 y 92 votos. Situación distinta aconteció con Rafael de Mendizábal, quien resultó ser el único candidato que consiguió el mayor respaldo al obtener 293 votos. Ello fue así, porque el PSOE y CiU finalmente decidieron dar el apoyo a este candidato que

⁵²⁴ Véase la nota conjunta de los periodistas IBÁÑEZ GONZÁLEZ, Juan; VALDECANTOS, Camilo: "El PSOE ultima con centristas e IU una candidatura alternativa a la del PP para el Constitucional. La lista incluye a catedráticos de Madrid, Sevilla y Barcelona", en *El País*, 6 de junio de 1992. Además de las propuestas mencionadas, se manejaba también a Landelino Lavilla, ex Presidente del Congreso de los Diputados entre 1979 y 1982, y ex Presidente de UCD. VALDECANTOS, Camilo: "Landelino Lavilla, propuesto por el PSOE e Izquierda Unida como candidato para el Tribunal Constitucional. Irritación en el PP ante el acuerdo que los socialistas perfilan con grupos minoritarios", en *El País*, 17 de junio de 1992. Además, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: "Elección por el Pleno de la Cámara de magistrados del Tribunal Constitucional", en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 203, IV Legislatura, 25 de junio de 1992, pág. 10011.

venía de la lista propuesta por el Grupo popular, con el “afán de consenso”⁵²⁵, aunque el Grupo popular lo haya entendido como una cuota concedida por el PSOE⁵²⁶.

Respecto a la candidatura del Magistrado José Gabaldón López, que originariamente compartía lugar tanto en la lista del PSOE/CiU como en la del PP, finalmente fue propuesto por el Grupo parlamentario socialista en la designación que se realizaba de forma contemporánea en el Senado. Este acontecimiento ha configurado hasta el momento el único antecedente en donde la reelección inmediata de un magistrado en los términos del art. 16.4 de la LOTC, ha sido operada por un órgano diverso al que hizo la designación primigenia.

En el escrutinio también se registraron cuatro votos en blanco y uno nulo. Por otro lado, no se registró en el Diario de Sesiones, pero la prensa recogió que los diputados del Partido Nacionalista Vasco, Andalucista y Eusko Alkartasuna, se habían ausentado del hemiciclo durante la votación, según se dijo, para no “contribuir a legitimar ni siquiera con su presencia a los nuevos miembros del Constitucional”⁵²⁷.

Los magistrados designados fueron finalmente nombrados mediante los Reales Decretos 816 a 819/1992, de 2 de julio, publicados en el BOE el 6 del mismo mes. El día 8 de julio se llevó a cabo el acto de jura o promesa del cargo en el Palacio de la Zarzuela y la toma de posesión en la sede del Tribunal Constitucional. De esta manera se daba fin a una etapa complicada de negociación política que dejó una vez más en evidencia, la “incorregible tendencia de los partidos mayoritarios, PSOE y PP, a utilizar la designación parlamentaria de los miembros de importantes instituciones del Estado como moneda de cambio en sus transacciones políticas”⁵²⁸.

⁵²⁵ Eduardo Martín Toval, portavoz del Grupo parlamentario socialista en el Congreso. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Elección por el Pleno de la Cámara de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 203, IV Legislatura, 25 de junio de 1992, pág. 10010.

⁵²⁶ *Idem*, págs. 10008 y 10011 (se trataba del diputado Rodrigo de Rato).

⁵²⁷ La prensa hizo eco de la designación en IBÁÑEZ GONZÁLEZ, Juan; VALDECANTOS, Camilo: “Una elección polémica. El Congreso renueva el Constitucional con un retraso de cuatro meses al apoyar la lista del PSOE. González dice que la falta de consenso sobre los candidatos es ‘responsabilidad de todos’”, en *El País*, 26 de junio de 1992.

⁵²⁸ Así lo expresaba un duro comentario editorial del diario *El País*, titulado “Polémica renovación”, publicado el 23 de febrero de 1992.

El procedimiento selectivo, como se pudo constatar, comenzó con buenas intenciones por parte de las principales fuerzas políticas para proveer los magistrados por medio del consenso. Sin embargo, las complicaciones de la política finalmente hicieron que cada una presentara su lista en medio de un clima de crispación. Los magistrados designados no vendrían con el respaldo de las dos grandes fuerzas políticas, sino que por un lado el PP votaría a sus candidatos, y el PSOE haría lo mismo, pero consiguiendo la mayoría calificada con los votos de un partido minoritario (CiU)⁵²⁹. No cabe duda de que se estaba ya lejos del consenso que caracterizó la época constituyente.

De momento este es el único antecedente que hay en materia de designación parlamentaria de magistrados, en el cual cada uno de los principales partidos políticos ha llevado su propia lista de candidaturas al Pleno para someterlas a votación. En adelante, este tipo de listas solamente se presentarán a votación una vez que haya garantías de éxito, esto es, que se hayan consensuado previamente.

La designación además incumplió los plazos de renovación de los magistrados, lo que fue general y duramente criticado⁵³⁰. Baste para ello traer a cuento algunas palabras del discurso de despedida del Presidente del TC Francisco Tomás y Valiente pronunciado el 8 de julio de 1992 en la toma de posesión de los nuevos magistrados. Se trata ciertamente de unas palabras muy certeras dirigidas a los responsables de designar a los magistrados. Estas frases del discurso han sido objeto de reiteradas citas, como frecuentes han sido los retrasos: “las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace”, lo acontecido debe servir “para encontrar en el futuro mecanismos que impidan la repetición de un retraso que a nadie favorece y a todos perjudica”⁵³¹.

⁵²⁹ Sería precisamente esta posibilidad, en la que los dos partidos mayoritarios no necesariamente necesitan uno del otro para lograr la mayoría calificada, la que el Profesor Javier PÉREZ ROYO más adelante vería como la causante de los problemas en la designación de los magistrados. Ello es así porque el mapa electoral del país plantea un desequilibrio político que desnaturaliza el modelo previsto en la Constitución, en el que se esperaba en principio, la negociación entre derecha e izquierda. La despolitización del procedimiento, afirma PÉREZ ROYO, descansa “en la necesidad inexcusable de ponerse de acuerdo, porque no es posible actuar sin el otro”. PÉREZ ROYO, Javier: “A toro pasado”, en *El País*, 31 de julio de 1992.

⁵³⁰ Por ejemplo, PÉREZ ROYO, Javier: “Una mala noticia. La renovación del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 13 de marzo de 1992.

⁵³¹ TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: *Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional*, Madrid, CEC, 1993, pág. 227.

5.4.- La tercera renovación (2001)

5.4.1.- La normativa procedimental de la Resolución de Presidencia de 2000

El 25 de mayo de 2000, la Presidencia de la VII Legislatura del Congreso de los Diputados, con el parecer de la Mesa y la Junta de Portavoces, emitió una Resolución que vino a desarrollar con más detalle la normativa en materia de designación de Autoridades del Estado a cargo del Congreso⁵³². La propia motivación que acompaña a la misma, destacaría un aspecto del que aquí ya se ha tratado, como lo es la falta de regulación “de los trámites previos hasta ser alcanzado el necesario acuerdo” entre los Grupos políticos.

A tal efecto, la propia motivación destaca principalmente dos aspectos sustanciales de la Resolución, aunque ésta también ha modelado otros elementos de las fases iniciales del procedimiento selectivo, que venían realizándose más o menos de manera uniforme mediante acuerdos puntuales de la Junta de Portavoces.

En cuanto a los dos aspectos estelares de la Resolución, se encuentra por un lado, la creación de un “órgano parlamentario de naturaleza consultiva” integrado por representantes de los Grupos parlamentarios, al que le corresponde “informar al Pleno acerca de la idoneidad de las personas propuestas para acceder a los diferentes cargos”. Por otro lado, se subraya la facultad asignada a este nuevo órgano para celebrar con los candidatos una comparecencia personal, de forma previa a la conclusión del examen de la candidatura.

La regla segunda de la Resolución se ocupa de la fase inicial del procedimiento, dejando a la Mesa de la Cámara como la única instancia para “activar” el punto de partida del procedimiento en sede parlamentaria a través de la apertura del plazo para la presentación de candidaturas. Con ello se determina el órgano responsable de convocar a los Grupos parlamentarios y de fijar la fecha límite de presentación de candidaturas, superando así la

⁵³² CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 25 de mayo de 2000, relativa a la intervención de la Cámara en el nombramiento de Autoridades del Estado”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie D, núm. 20, VII Legislatura, 26 de mayo de 2000, págs. 2-3.

ambigüedad que se venía padeciendo en la que unas veces el plazo era acordado por la Junta de Portavoces o por el Presidente, causando no pocas complicaciones (recuérdese la controversia del Grupo popular con el Presidente de la Cámara en la segunda renovación de magistrados en 1992).

La nueva normativa, con buen criterio técnico, prescinde de la específica mención del número máximo de cuatro candidaturas que cada Grupo parlamentario podía presentar, para en su lugar contemplar la fórmula más general de presentar “tantos candidatos como puestos a designar” (regla 2.2).

Esta fórmula general, que permite cubrir en el mismo precepto los supuestos de renovaciones anticipadas, no se ha visto, sin embargo, trasladado a la letra del art. 204 del RCD, el cual sigue aludiendo a cantidades predeterminadas, como lo es tanto el límite máximo de presentación de “cuatro candidatos” por Grupo parlamentario, como el límite de “cuatro nombres” que cada diputado puede escribir en la papeleta (apartados dos y tres). Todo ello, sin olvidar que el posterior art. 205.1 del RCD cubre el propósito de dar cabida a los supuestos de renovación anticipada, al contemplar este procedimiento selectivo, adaptado a la “realidad” de los puestos a cubrir.

Es la primera vez que una disposición de carácter normativo en el Congreso fija las formalidades de la presentación de las candidaturas. A primera vista, pudieran parecer obvias y quizá por ello se haya guardado silencio durante tanto tiempo, pero bien entendidas, esas disposiciones resultan nucleares para la racionalización y justificación de la elección de las personas que serán sometidas al procedimiento selectivo.

En efecto, el tercer apartado de la regla segunda estableció que las “candidaturas se presentarán por escrito en el Registro General de la Cámara acompañadas de un *curriculum vitae* de cada candidato, en el que se especificarán sus méritos profesionales y académicos”. A renglón seguido, el mismo apartado dispone que deberán especificarse las “demás circunstancias que, en opinión del Grupo parlamentario proponente, manifiesten la idoneidad del candidato para el puesto”.

Es decir, por primera vez, se exige normativamente a los Grupos parlamentarios cierta motivación de la candidatura, lo que abre la puerta a que el mismo Grupo pueda explicar los criterios utilizados para optar por el

candidato, otra cosa evidentemente será el grado de detalle con el que sean expuestos o si la Mesa los tendrá por “acreditados”.

Sobre este último aspecto alusivo a la “acreditación” de la Mesa, merece la pena detenerse un momento. La Resolución de Presidencia ha dispuesto para esta fase, que “las candidaturas deberán acreditar, en la forma que establezca la Mesa de la Cámara, el cumplimiento por los candidatos de los requisitos establecidos por la Constitución y las leyes” (regla 2.3, segundo párrafo). Con ello, se recoge en la normativa una suerte de “trámite de admisión” de la candidatura, el cual se venía haciendo sin una consolidada línea de principio en la Mesa de la Cámara.

La definición de este trámite inicial a favor de la Mesa y en general, su “centralidad” en el impulso y desarrollo del procedimiento selectivo, parecen del todo congruentes con las funciones tradicionalmente previstas a la Mesa de calificar y tramitar todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como la declaración de admisibilidad o no de los mismos (31.1.4, 5 RCD).

El aludido “trámite de admisión” de la Mesa, tiene la posibilidad de no limitarse a una mera revisión documental, debido a que el propio precepto alude al cumplimiento de los requisitos de acceso al cargo “establecidos por la Constitución y las leyes”. Esta última indicación, ciertamente es una fórmula muy general, de la cual se puede interpretar que abarca los requisitos tanto objetivos como subjetivos de acceso a la magistratura constitucional, y por lo mismo, podría habilitar a la Mesa a realizar un control sobre las candidaturas con mayores márgenes de valoración.

Sin embargo, no parece que este control de la Mesa pueda llevarse demasiado lejos, por lo menos en lo que a verificación de requisitos subjetivos se refiere. Ello es así, por las dificultades que supone valorar la posesión de la calidad de “jurista de reconocida competencia” (159.1 CE) y la denominada “idoneidad” del candidato en una primera etapa, que es predominantemente documental. Y es aquí donde cobra pleno sentido la siguiente fase de valoración a cargo de la Comisión de Nombramientos que, como más adelante se verá, tiene facultades para realizar no solamente un examen del cumplimiento de los requisitos objetivos de las candidaturas, sino especialmente de los requisitos subjetivos, para poder informar al Pleno acerca de la idoneidad de los propuestos.

Nuevamente en las normas aplicables a la designación de magistrados constitucionales no se ha previsto la presentación de un escrito de aceptación de la candidatura firmado por el candidato, aunque es verdad que en la práctica suele recogerse una manifestación en ese sentido.

Tampoco se ha previsto nada para el caso en que no se presentasen las candidaturas en tiempo, por lo que no queda claro si la Mesa podría prorrogar el plazo o instar nuevamente a los Grupos parlamentarios. En cualquier caso, se entiende que este tipo de medidas podrían adoptarse con respaldo en la función general de la Mesa de “adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cámara” (31.1 RCD).

La Resolución en comento agota la regulación de esta periodo de presentación y admisión inicial de candidaturas, disponiendo que una vez cerrado el plazo dado para ello, la Mesa de la Cámara deberá ordenar su remisión al nuevo órgano asesor del Congreso en materia de designación de autoridades (regla 3). A partir de aquí, comienza a regular las fases a cargo de este órgano y hasta la presentación de las candidaturas al Pleno.

5.4.1.1.- La creación de la Comisión Consultiva de Nombramientos

El nuevo órgano previsto en la Resolución de Presidencia del año 2000 ha sido denominado como la “Comisión Consultiva de Nombramientos”. Pese a que la normativa le adjudica el carácter de “Comisión”, lo cierto es que su estructura no se integra de la forma en que suele disponerse para las Comisiones parlamentarias. Las Comisiones generalmente se componen por un número de miembros designados por los Grupos parlamentarios, en proporción a la importancia numérica de éstos (40.1 RCD), mientras que la Comisión de Nombramientos se integra por un diputado por cada Grupo parlamentario. Es verdad que así sucede también en otro tipo de Comisiones especiales, como la Comisión de Estatuto de los Diputados o la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, pero en la de Nombramientos, parece reproducir más bien a la Junta de Portavoces.

En efecto, la Comisión de Nombramientos, según la Resolución, estará encabezada por el Presidente del Congreso y asistida por el Secretario General

del mismo, y además, estará compuesta “por los Portavoces de los Grupos parlamentarios, quienes podrán hacerse representar por otros diputados de su propio Grupo” (regla 3.2). Este carácter sustituible de los integrantes de la Comisión de Nombramientos, es una nota orgánica muy positiva, porque permite que los Grupos coloquen en el mismo, al diputado más especializado, según el tipo de nombramiento que se vaya a efectuar.

Recuérdese al efecto que el Congreso tiene a su cargo la designación directa de otras autoridades públicas, como por ejemplo algunos miembros del Tribunal de Cuentas⁵³³, o del Consejo de Administración de RTVE⁵³⁴, o bien en otros casos, colabora en procedimientos de nombramiento de competencia del Poder Ejecutivo, mediante la comparecencia parlamentaria de los candidatos, según sucede con los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear⁵³⁵.

La diversidad de materias que las plazas públicas implican, supone que la Comisión de Nombramientos se encuentre integrada por diputados más cercanos al objeto funcional del cargo que se va a valorar. Tratándose de la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, se ha visto que los portavoces parlamentarios han dado su lugar a los miembros de la Comisión de Justicia, lo cual parece más acertado.

Se dispone además en la Resolución que se está comentando, que las decisiones de la Comisión de Nombramientos serán adoptadas en función del voto ponderado, esto es, siguiendo el mismo criterio utilizado en la Junta de Portavoces, por el cual, el voto de cada portavoz cuenta con un peso proporcional a la cantidad de integrantes de su Grupo en la Cámara (39.4 RCD). Teniendo en cuenta el voto ponderado, la aprobación de las resoluciones de la Comisión seguirán la regla general para la adopción de acuerdos, en el caso, se tratará del voto de la mayoría simple de los miembros presentes, pues no se dispone otra mayoría especial en las normas de la materia (79.1 RCD).

La Comisión de Nombramientos, por tanto, no es un órgano neutro o meramente institucional de la Cámara, sino que se ha configurado a medio camino entre un órgano de instrucción del trabajo parlamentario de la Cámara y

⁵³³ Art. 30.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

⁵³⁴ Art. 11 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.

⁵³⁵ Art. 5.2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.

un órgano de gobierno, partidista y de dirección política de la misma. Esta caracterización le ha llegado a merecer alguna atinada objeción en cuanto a la necesidad de haberse previsto vía reglamentaria, como sí que se hizo contemporáneamente en el Senado, y no con una Resolución supletoria de la materia, emitida por la Presidencia⁵³⁶ (si bien, hecha en los términos del art. 32.2 RCD).

En cualquier caso, el diseño de la Comisión de Nombramientos con las características aludidas, no hace más que significar la importancia de la facultad de designación de altas autoridades estatales y el interés que tienen los Grupos políticos en las mismas.

La Comisión de Nombramientos tiene una naturaleza consultiva. La propia Resolución de Presidencia la define como el “órgano asesor de la Cámara en esta materia” (regla 3.2). Como más adelante se detallará, sus resoluciones no son por tanto obligatorias, aunque en el caso de la valoración de requisitos objetivos de las candidaturas sí parecen serlo porque pueden rechazar las mismas, pero en el caso de requisitos subjetivos, especialmente en materia de idoneidad de candidatos, la resolución que se tome al respecto no lo es.

En efecto, en cuanto a la primera, una vez que la Mesa ha remitido las candidaturas a la Comisión Consultiva de Nombramientos, ésta debe proceder “al examen de las candidaturas presentadas”, con lo que se establece en el procedimiento un segundo filtro de verificación de los requisitos de acceso al cargo (el primero es el de la Mesa). En esta segunda revisión -conviene destacarlo- considérese que el propio precepto establece expresamente que se hace sobre el cumplimiento de los requisitos “objetivos”, previendo la posibilidad de rechazar las candidaturas que no cumplan con este tipo de requisitos establecidos en la Constitución o en las leyes (regla 3.3).

De la decisión de rechazo de la candidatura por incumplimiento de los requisitos objetivos deberá darse “cuenta al Grupo parlamentario proponente”, quien “podrá presentar nuevos candidatos, en sustitución de los rechazados, en el plazo que al efecto establezca la Mesa del Congreso” (regla 3.3). Como

⁵³⁶ En este sentido, SÁNCHEZ-BEATO JERÓNIMO, Estefanía: “La ‘Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados’. Algunas reflexiones a propósito de la Resolución de la Presidencia del Congreso de 25 de mayo de 2000”, en *Corts: Anuario de Derecho Parlamentario*, núm. 11, 2001, págs. 153-177.

se puede ver, existe la posibilidad material de que las candidaturas sean rechazadas por la Comisión.

En materia de valoración de los siempre más complejos requisitos subjetivos, la Resolución parece dejar este examen a la posterior realización de las comparecencias parlamentarias. Es de notar, sin embargo, que el articulado de la Resolución de Presidencia no especifica que esto deba ser así, pero es aceptable pensar que a través de estos instrumentos se puede tener un mayor acercamiento para “informar al Pleno acerca de la idoneidad de las personas propuestas para acceder a los diferentes cargos”, según lo dispone la suerte de “exposición de motivos” que acompaña la Resolución de Presidencia, así como su regla 4.1. Como ya se avanzaba, la resolución que pueda llegar a tomar la Comisión en esta materia no se plantea con efecto vinculante. Se hablará de ello en el siguiente epígrafe.

5.4.1.2.- La introducción de la comparecencia parlamentaria de los candidatos

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos objetivos para el nombramiento, la Resolución dispone la otra novedad del procedimiento, consistente en la posibilidad de que la Comisión Consultiva de Nombramientos pueda acordar la comparecencia personal de los candidatos ante ésta (regla 3.4). Bien que planteada originalmente como una competencia facultativa, ahora por mor de la reforma de 2007 a la LOTC se ha dispuesto como una fase preceptiva del procedimiento selectivo tanto en el Congreso como en el Senado⁵³⁷, aunque formalmente ni la Resolución de Presidencia ni el RCD se han modificado para adaptarse al contenido de la LOTC.

Quizá quepa mencionar en este punto, que originariamente la comparecencia parlamentaria estaba dispuesta también para las designaciones del Gobierno y el CGPJ, en la mencionada reforma a la LOTC en su fase de Proyecto. La comparecencia se planteaba para “los solos efectos de información pública, ante la Comisión correspondiente de la Cámara en los

⁵³⁷ Así previsto en el art. 16.2, en los términos dados por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC.

términos que prevea su Reglamento⁵³⁸. La disposición, no se mantuvo en el trámite parlamentario, e incluso fue objeto de cierta polémica. Por ejemplo el CGPJ informó que ello supondría una interferencia del poder legislativo en su procedimiento selectivo⁵³⁹, aunque también se llegó a estimar que ello podría abonar a la legitimidad democrática de los Magistrados⁵⁴⁰.

Ya se ha visto cómo el procedimiento selectivo tiene varios puntos de verificación de los requisitos de acceso al cargo, pero los mismos están dirigidos a la valoración de los requisitos objetivos. La comparecencia en cambio, puede resultar de gran utilidad para valorar los requisitos subjetivos del cargo, los cuales resultan más complejos y llenos de variables. La comparecencia además, favorece un conocimiento más personal del candidato y permite observar otros elementos que sin duda son valorados para complementar el perfil del candidato, como puede ser la orientación ideológica, los criterios jurídicos formados en torno a “casos difíciles”, habilidades de expresión oral, carácter, temple y el “procesamiento” de la presión pública.

A esos efectos, la comparecencia parlamentaria se presenta como un acto de la mayor importancia, y por eso cobra pleno sentido la regla de la Resolución de Presidencia que sanciona la inasistencia del candidato con nada menos que la exclusión del procedimiento selectivo (regla 4.7).

Igual de importante es la disposición que faculta a los miembros de la Comisión para solicitar al candidato las “aclaraciones sobre cualquier extremo relacionado con su trayectoria profesional o académica o sobre sus méritos

⁵³⁸ Art. 16.2 del Proyecto: “Previamente a la formalización de la propuesta, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial pondrán en conocimiento del Congreso de los Diputados el nombre de las personas que se pretenda sean objeto de aquella, a fin de que pueda disponer su comparecencia, a los solos efectos de información pública, ante la Comisión correspondiente de la Cámara en los términos que prevea su Reglamento”. Véase CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie a: proyectos de ley, núm. 60-1, VIII Legislatura, 25 de noviembre de 2005, págs. 4-5.

⁵³⁹ En el Informe (aprobado por mayoría de catorce contra siete votos disidentes) se sostenía lo siguiente: “Si se entiende que el papel de la Comisión [parlamentaria] consiste en emitir criterio acerca de la idoneidad de la persona que se va a proponer y del cumplimiento por la misma de los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes para desempeñar el cargo (ex art. 184.4 del Reglamento del Senado), las opiniones o juicios, ya sean positivos o negativos, que salgan de tal Comisión, suponen en todo caso una interferencia del Poder Legislativo en el procedimiento de selección de las personas a proponer por este Consejo, que tiene plena capacidad para discernir sobre la idoneidad de los candidatos y si cumplen con los requisitos para desempeñar el cargo” (pág. 27).

⁵⁴⁰ GÓMEZ FERNÁNDEZ, Itziar: “Una aproximación al Tribunal Constitucional español desde la teoría de la democracia deliberativa”, en *Revista General de Derecho Constitucional*, núm. 2, 2006, pág. 19.

profesionales”, velando por su puesto, los derechos del compareciente. De ahí que la Presidencia pueda inadmitir “aquellas preguntas que pudieran menoscabar o poner en cuestión indebidamente el honor o el derecho a la intimidad del candidato” (regla 3.5, segundo párrafo).

En este punto, conviene destacar que la Resolución no ha detallado la manera en que se llevará a cabo la comparecencia parlamentaria, de modo que ha tenido que ser la Presidencia de la Comisión (quizá en un principio habiendo desarrollado la idea en la Junta de Portavoces) la que en cada ocasión ha tenido que exponer la logística del acto, basándose en las directrices marcadas por los precedentes.

De este modo, en la tercera renovación a cargo del Congreso (2001), se estableció que cada candidato tendría una primera intervención de cinco minutos para exponer aquello que entienda “que pueda ser ilustrativo para los miembros de esta Comisión en aras a fijar su criterio de idoneidad”. A continuación, podrían intervenir los Grupos, en orden de menor a mayor, por otros cinco minutos cada uno, existiendo un turno de respuesta del compareciente. Tras esta respuesta, los Grupos podrían formular alguna manifestación, si lo estimasen conveniente. A continuación –concluía la Presidencia- los miembros de la Comisión “pondrán de manifiesto el criterio de idoneidad”⁵⁴¹.

En la cuarta renovación a cargo del Congreso (2012) se mantuvieron tales reglas, si acaso se aumentó a diez minutos el tiempo para que los comparecientes hicieran su presentación y, en general, se indicó que los plazos referidos para el uso de la palabra eran a “título indicativo”⁵⁴². Estas reglas, pues, parecen asentarse sin problemas en el Congreso, pero lo mismo sucede con las comparecencias del Senado.

Las comparecencias y las deliberaciones posteriores seguirán el régimen general de publicidad de las sesiones de las Comisiones de la Cámara. Esto significa que a diferencia de buena parte de las sesiones del

⁵⁴¹ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Comparecencia de cuatro candidatos para la elección de miembros del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 346, Comisiones, sesión núm. 3, VII Legislatura, 25 de octubre de 2001, págs. 11220 y 11226.

⁵⁴² CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Comparecencias de candidatos para la elección de: cuatro magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, X Legislatura, núm. 49, Comisión Consultiva de Nombramientos, 9 de julio de 2012, pág. 2.

Pleno, las sesiones de la Comisión Consultiva de Nombramientos no son públicas, aunque pueden asistir los “representantes debidamente acreditados de los medios de comunicación social” (64.1 RCD), excepto cuando la Comisión “acuerde su celebración a puerta cerrada” (regla 3.6).

Una vez celebradas las comparecencias y las respectivas deliberaciones, la Resolución dispone que la Comisión definirá su criterio sobre la idoneidad de los candidatos y lo “trasladará al Pleno” (regla 4.1), aunque siguiendo el curso práctico y administrativo del procedimiento, lo cierto es que “el criterio” (sin especificar si debe emitirse en forma de conclusiones, informe o dictamen) deberá entregarse a la Mesa de la Cámara, para que esta lo distribuya entre los diputados, a los efectos del artículo 69 del RCD, para la preparación de los debates en el Pleno.

Finalmente se establece que si “la Presidencia lo considerase oportuno a la vista de las deliberaciones en el seno de la Comisión y del tiempo transcurrido desde el inicio del procedimiento propondrá a la Mesa la apertura de sucesivos plazos de presentación de candidaturas. Las nuevas candidaturas se tramitarán conforme a lo establecido para las primeras” (regla 4.2).

Como se puede ver, esta regla parece constituir una facultad “general” para el Presidente para tratar de completar el procedimiento selectivo cuando en este estadio del procedimiento no sea suficiente el número de candidaturas en juego para completar el número total de plazas vacantes. Sin embargo el precepto está planteado en unos términos tan amplios, que puede resultar aplicable a varios casos, por ejemplo, cuando se hayan eliminado candidaturas por no asistir a la comparecencia o por el retiro sobrevenido de una candidatura.

Otro supuesto que también podría ser considerado es el de la reposición de candidaturas como resultado de que la Comisión determine que un candidato no es idóneo. El caso ciertamente plantea algunas dudas, en la medida que la naturaleza de la Comisión es finalmente de carácter consultivo, por lo que no parece que *motu proprio* pueda rechazar la candidatura y solicitar la ampliación del plazo para que sean presentadas otras por este concepto. Si el criterio fuese negativo, tal parece que la Comisión podría enviarlo igualmente al Pleno, pues este no está vinculado indefectiblemente a las determinaciones de la Comisión.

En cualquier caso, el sistema de voto ponderado en la Comisión, prefigura en los hechos la designación, de modo que si el criterio fuera desfavorable, lo más probable es que reponga la candidatura antes de elevarla al Pleno.

5.4.2.- Designación de García-Calvo, Delgado Barrio, Gay Montalvo y Pérez Vera

El cargo de los Magistrados Cruz Villalón, González Campos, Viver Pi-Sunyer y de Mendizábal Allende finalizó el 6 de julio de 2001, esto es nueve años después de la fecha de publicación de su nombramiento en el BOE, el cual había sido el 6 de julio de 1992. En términos del art. 17.1 de la LOTC, el Presidente del TC envió la comunicación correspondiente para instar el procedimiento de renovación al Congreso, justo un día antes de que se cumplieran “los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos”, esto es, el 5 de marzo de 2001 (calificada en la Cámara al día siguiente)⁵⁴³.

A partir de aquí comenzaría el procedimiento para la tercera renovación parcial de magistrados constitucionales, estrenándose la aplicación de las normas de Presidencia anteriormente reseñadas. Más allá de la reconstrucción que a continuación se hará de las negociaciones partidarias que acompañaron al procedimiento selectivo, se tiene noticia de que poco antes de que se activara éste, surgieron ciertas dudas en torno a la aplicación de la Resolución de Presidencia por parte de dos Grupos parlamentarios, lo que les llevaría a plantear una solicitud de aclaración. Según la propia información oficial que hizo pública el Congreso, la solicitud de aclaración fue tramitada “por completo sin requerir acuerdo o decisión”, sin referir nada de los contenidos⁵⁴⁴. Sin duda, resultaría de gran importancia averiguar cuáles fueron los puntos aclarados.

⁵⁴³ Así da cuenta de su recepción, el apartado de expedientes públicos de la página de Internet del Congreso, www.congreso.es.

⁵⁴⁴ El apartado de iniciativas (consulta de expedientes públicos) del Congreso la refiere como “Solicitud de aclaraciones en relación a la aplicación de la ‘Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados relativa a la intervención de la Cámara en el nombramiento de autoridades del Estado, de 25 de mayo de 2000’ a la inminente renovación total o parcial del Tribunal Constitucional (235/000002)”. Informa igualmente que fue presentado el 10 de julio de 2001 y calificado el 19 del mismo mes. Figuran como autores de la solicitud el Grupo parlamentario federal de Izquierda Unida y el Grupo parlamentario mixto.

Las normas de la Presidencia reseñadas tuvieron ocasión de aplicarse no solamente en la tercera renovación grupal de los magistrados constitucionales, sino también en las contemporáneas designaciones de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial y los seis consejeros del Tribunal Cuentas a cargo del mismo Congreso de los Diputados⁵⁴⁵.

Los partidos políticos operaron la selección de todos esos cargos institucionales con la reiterada práctica de someter la totalidad de las plazas a un “paquete” general del cual habría que consensuar los nombres que cada uno propondría a fin de que llegaran con el respaldo necesario al acto de su designación por el Pleno.

La amplitud del elevado número de cargos institucionales por designar, lejos de suponer que podría facilitar la negociación al encontrarse mayores márgenes de participación de las fuerzas políticas en la determinación de los nombramientos, en realidad, lo que hizo fue complicar las cosas.

La complicación de las negociaciones obedeció a las mayores posibilidades que había de vetar alguna de las tantas propuestas que estaban en juego. En efecto, la prensa hizo constar la elevada cantidad de veces en que las negociaciones políticas eran bloqueadas por el rechazo mutuo que se formulaban entre los partidos políticos a determinadas candidaturas⁵⁴⁶.

En este sentido, llegó a registrarse, por ejemplo, que el PP rechazaba las propuestas del PSOE sobre los candidatos para ocupar las plazas del Tribunal de Cuentas por estimar de profundo perfil “político socialista” a los candidatos⁵⁴⁷.

El veto relacionado con la designación del Tribunal de Cuentas, paralizaba también la negociación total sobre los nombramientos del CGPJ y por supuesto del Tribunal Constitucional. De igual forma, el veto de los socialistas a la propuesta presentada por el PP del Magistrado de la Sala de lo

⁵⁴⁵ En general, había 36 cargos de designación parlamentaria de diversos órganos constitucionales que habían coincidido con el final de sus respectivos mandatos. Se trataba de doce plazas del Tribunal de Cuentas, los veinte vocales del CGPJ y los cuatro magistrados del TC. Incluso había plazas para nombrar a consejeros del Banco de España que, aunque no sean de designación parlamentaria, sí que solían necesitar la anuencia de las fuerzas políticas.

⁵⁴⁶ Ver las notas de prensa siguientes: “Doble vara”, en *El País*, 20 de julio de 2001; Díez, Anabel: “El PP y el PSOE rompen hasta septiembre la renovación de cargos institucionales”, en *El País*, 25 de julio de 2001.

⁵⁴⁷ Díez, Anabel; CASQUEIRO BARREIRO, Javier: “PP y PSOE tensan al máximo la negociación política para renovar los cargos institucionales. Los populares también ponen trabas a los candidatos de los nacionalistas catalanes y vascos”, en *El País*, 18 de julio de 2001.

Penal del TS, Roberto García-Calvo y Montiel para magistrado constitucional, en atención a su pasado político y laboral en el régimen franquista, bloqueaba el resto de los nombramientos⁵⁴⁸.

Otro factor adicional que retrasaba el acuerdo para el nombramiento de los cargos públicos serían unas declaraciones de un Ministro del Gobierno vertidas en sede parlamentaria, sobre el proceso de negociación que no habían sido bien recibidas por el otro grupo político que hacía parte del acuerdo⁵⁴⁹.

En general, se pueden traer a cuento más incidentes de este tipo, pero lo que subyace en todos es la estrategia partidaria de tanteos y negociación. No cabe duda de que este caso, puede ser uno de los ejemplos más nítidos en que el comportamiento mostrado por las fuerzas políticas revela la visión patrimonialista de los cargos y de su repartición por cuotas.

Para entender la causa de las vicisitudes de la negociación, es necesario situarse en contexto. Para ello, recuérdese que se trataba de la VII Legislatura del Congreso en la cual el PP había confirmado su triunfo en las elecciones consiguiendo por primera vez la mayoría absoluta en las dos Cámaras. En el Congreso, el Grupo popular se integró de 183 diputados, mientras que el Grupo socialista lo hizo con 125, el Grupo catalán (CiU) con 15, el Grupo federal de IU con 8, el Grupo vasco con 6, Coalición Canaria con 7, y el mixto con 5⁵⁵⁰.

Habiendo el PP conseguido la mayoría absoluta en las elecciones, era comprensible que pretendiera reflejar esa intensidad numérica en las designaciones de los cargos en juego, tal y como lo había hecho el PSOE en la

⁵⁴⁸ DíEZ, Anabel; CASQUEIRO BARREIRO, Javier: “El rechazo socialista a un juez que ocupó cargos en el franquismo rompió el acuerdo con el PP. El PSOE no acepta a Roberto García Calvo como magistrado del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 20 de julio de 2001.

⁵⁴⁹ A este respecto pueden verse las repercusiones de la declaración en sede parlamentaria de quien fuera Ministro de Economía del Gobierno, Rodrigo de Rato, sobre los “chantajes” de los socialistas en el proceso de negociación para nombrar a determinados amigos del que fuera líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. Concretamente, Rato expresó que el PSOE estaba chantajeando al PP con la amenaza de no firmar los acuerdos si no se incluía a un amigo de Zapatero -Jaime González, ex candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León- en otro ámbito, ajeno al del pacto, cual es el Consejo Nacional de la Energía. El PSOE exigió una rectificación pública a Rato o bien su desautorización por el Gobierno para mantener el acuerdo de renovación de los 36 cargos institucionales pendientes. Véanse las notas de prensa siguientes: DíEZ, Anabel; CASQUEIRO BARREIRO, Javier: “El PSOE suspende el pacto para renovar 36 cargos hasta que Rato pida disculpas. El PP considera que las críticas parlamentarias del vicepresidente no afectan al acuerdo”, en *El País*, 5 de octubre de 2001; DíEZ, Anabel: “Zapatero descarta el pacto para renovar los cargos institucionales si Rato no se disculpa. El líder socialista advierte de que no pasará ‘por el aro’ de Rato”, en *El País*, 15 de octubre de 2001.

⁵⁵⁰ Datos obtenidos del portal de Internet del Congreso de los Diputados, en el apartado titulado “El Congreso entre 1977 y 2011”, www.congreso.es.

II Legislatura, cuando obtuvo la mayoría absoluta. Se trataba pues, de un comportamiento político habitual y desde luego común de los dos partidos.

Ahora bien, con independencia de la negociación global o en “paquete” de todos los cargos públicos a designar por el Congreso y sus correspondientes vicisitudes, el acuerdo concreto al que llegaron respecto a las designaciones del TC, fue la repartición de dos plazas para el PP, una para el PSOE y la cuarta plaza se pactaría por consenso.

A este respecto, el PP optaría por Javier Delgado Barrio, quien estaba finalizando su cargo como Presidente del CGPJ y del TS, y que a su vez ya había sido designado magistrado del TC por el CGPJ en 1995⁵⁵¹. El PP se decantaría también por el Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Roberto García-Calvo. Los socialistas se perfilaron por la Presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, Elisa Pérez Vera y el candidato por consenso resultó ser el Presidente del Consejo General de la Abogacía, Eugenio Gay Montalvo.

Siguiendo las disposiciones de la Resolución de Presidencia, las cuatro candidaturas fueron remitidas a la Comisión Consultiva de Nombramientos, la cual, luego de estimar el cumplimiento de los requisitos objetivos de acceso al cargo, convocó a los cuatro candidatos a la comparecencia parlamentaria que se celebró el 25 de octubre de 2001, tras la cual la Comisión determinó la idoneidad de los candidatos⁵⁵².

En el pleno del Congreso de los Diputados del día 30 de octubre de 2001, se procedió a la designación de los cuatro magistrados constitucionales (además de la elección de diez vocales del CGPJ y seis consejeros del Tribunal de Cuentas). En la sesión se emitieron 328 votos, los cuales se repartieron del modo siguiente⁵⁵³:

Candidato	Votación
-----------	----------

⁵⁵¹ Fue designado magistrado del Tribunal Constitucional en la 2ª renovación parcial a cargo de la tercera formación del CGPJ (1990-1996) en la sesión del 8 de febrero de 1995. Casi un año y medio después, el cuarto CGPJ (1996-2001) lo designó como su Presidente, por lo que para asumir el cargo, renunció a la magistratura constitucional el 24 de julio de 1996.

⁵⁵² CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Comparecencia de cuatro candidatos para la elección de miembros del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 346, Comisiones, sesión núm. 3, VII Legislatura, 25 de octubre de 2001, págs.11220-11248.

⁵⁵³ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 115, sesión plenaria núm. 110, VII Legislatura, 30 de octubre de 2001, pág. 5590.

Javier Delgado Barrio	299
Elisa Pérez Vera	297
Eugenio Gay Montalvo	295
Roberto García-Calvo y Montiel	279

En blanco	18
Nulos	12

En la votación para las plazas del Alto Tribunal, se confirmaron los temores expresados por algunos diputados sobre la posible emisión de un voto de castigo desde los escaños socialistas para el aspirante al Tribunal Constitucional promovido por el PP Roberto García-Calvo. En efecto, García-Calvo, cuya inclusión fue rechazada desde siempre por el PSOE, tuvo 279 sufragios, esto es, veinte votos menos que el candidato más votado, Javier Delgado Barrio, con 299 sufragios⁵⁵⁴.

En la sesión plenaria ningún Grupo haría uso de la tribuna para exponer alguna opinión sobre las candidaturas, pero servirían los registros de las comparecencias parlamentarias en la Comisión Consultiva de Nombramientos, para detectar por lo menos que entre los 18 votos en blanco o en los 12 nulos, se encontraron los diputados del Grupo parlamentario catalán (CiU), que no dejó de reprochar al PP y PSOE haberlos excluido de las negociaciones⁵⁵⁵.

Los magistrados fueron nombrados mediante los Reales Decretos 1218 a 1221/2001, todos de 6 de noviembre, publicados en el BOE al día siguiente. El 8 de noviembre efectuaron la jura o promesa del cargo y celebraron el acto de toma de posesión en las instalaciones del Tribunal Constitucional.

Nuevamente la forma en que se desarrollaron los pasos de la negociación y designación de candidatos por el Congreso repitió lamentables prácticas. Entre las que se pueden destacar, se encuentra la tradicional

⁵⁵⁴ Situación igualmente señalada en los medios de comunicación, véase por ejemplo la nota de Díez, Anabel; CASQUEIRO, Javier: “El Congreso elige magistrado del Constitucional a García Calvo con votos de castigo del PSOE”, en *El País*, 31 de octubre de 2001.

⁵⁵⁵ En voz del diputado del Grupo parlamentario catalán (CiU), José Manuel Silva i Sánchez (uno de los portavoces de la Comisión de Justicia e Interior). Véase CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Comparecencia de cuatro candidatos para la elección de miembros del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 346, Comisiones, sesión núm. 3, VII Legislatura, 25 de octubre de 2001, págs. 11222, 11229, 11237 y 11243.

exclusión en los procesos de negociación de determinados Grupos parlamentarios como fue el caso de CiU; de igual forma, se han reiterado las prácticas de distribución de plazas por cuotas de poder; la preferencia por los candidatos ha obedecido también a criterios de proximidad política y personal; la verdadera toma de decisiones sobre los candidatos elegidos se ha dado desde las direcciones de los principales partidos políticos sin que las autoridades del Congreso mostraran algún propósito de impedirlo, todo lo cual, parece haber dejado el procedimiento selectivo en el Congreso como un elemento formal de la designación.

Aunado a lo anterior, también resulta de especial gravedad, el reiterado incumplimiento de los plazos de renovación de los magistrados constitucionales. Si para esta renovación grupal se considera que los magistrados a relevar habían finalizado sus periodos de cargo el 8 de julio de 2001 y que fueron nombrados quienes habrían de sustituirlos hasta el 7 de noviembre (fecha de publicación del Real Decreto), el resultado es un retraso de cuatro meses (si bien, con el veraniego mes de agosto incluido)⁵⁵⁶.

Con ello, el Congreso viene a reiterar el problema del incumplimiento de los plazos en la designación de magistrados del TC. Primero con el retraso de ocho meses en la primera renovación (1983), luego el de cuatro meses en la segunda (1992), y ahora cuatro meses en esta última (2001). Sin duda alguna, todos estos datos deben generar algún planteamiento para evitar la situación. Se volverá sobre este problema, más adelante.

5.5.- La cuarta renovación (2010, efectuada en 2012)

5.5.1.- El contexto procedimental: referencia a las reglas introducidas a la LOTC (LO 6/2007, de 25 de mayo y LO 8/2010, de 4 de noviembre)

Antes de abordar la cuarta renovación de magistrados constitucionales a cargo del Congreso de los Diputados, conviene tener presente que en esta época el régimen del procedimiento selectivo se había visto modificado por un par de reformas a la LOTC, como lo fueron la LO 6/2007, de 25 de mayo, y LO 8/2010, de 4 de noviembre.

⁵⁵⁶ En esta ocasión, el retraso también sería predicable de la renovación de los seis consejeros del Tribunal de Cuentas cuyo periodo de cargo les había finalizado desde diciembre de 2000 y no fueron sustituidos sino hasta diez meses después.

En lo que aquí importa destacar (porque ambas serán objeto de estudio más adelante), considérese que la primera, entre otras cosas introdujo en el art. 16.2 de la LOTC que los “candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado deberán comparecer previamente ante las correspondientes Comisiones en los términos que dispongan los respectivos Reglamentos”, mientras que la segunda estableció en el 16.5 de la LOTC la sustracción del periodo ordinario del cargo, el tiempo de retraso en la designación, y la especificación de que las renovaciones individuales correrán a cargo de la propia autoridad que las designó, siendo el nuevo magistrado nombrado para completar el periodo de cargo del anterior.

En cuanto a ésta última regla, como ya se ha mencionado en este trabajo, repárese inmediatamente en que dicha disposición vino a formalizar en la ley la que ya se venía operando en la práctica. Por otro lado, la comparecencia parlamentaria, recuérdese que ya estaba prevista en la Resolución de Presidencia de 2000. Finalmente, la disposición que resta del periodo ordinario de cargo del magistrado, el tiempo de retraso en su renovación, será una norma que se estudiará en el último capítulo de este trabajo, pero que ya se puede decir desde ahora que su valoración no es positiva.

5.5.2.- La falta de cobertura de la plaza vacante de Roberto García-Calvo

El 18 de mayo de 2008 se registró el fallecimiento del Magistrado Roberto García-Calvo y Montiel, lo que motivó que la Presidencia del Tribunal Constitucional enviara al Congreso la respectiva comunicación para instar el procedimiento de designación de un magistrado para cubrir la plaza vacante. Dicha comunicación, fue recibida en el Congreso el 20 de mayo de 2008 y calificada el 27 del mismo mes⁵⁵⁷.

El procedimiento de sustitución permaneció en trámite hasta la disolución de la IX Legislatura, esto es hasta el 27 de septiembre de 2011, con lo cual se sumaron tres años y cuatro meses sin cubrir la plaza. El expediente

⁵⁵⁷ Fechas registradas en el expediente 235/000001, abierto en el Congreso con motivo de la comunicación para designar un nuevo magistrado, como consecuencia de la vacante por fallecimiento del Magistrado Roberto García-Calvo y Montiel. Véase el apartado de consulta de expedientes públicos (iniciativas) de la página de Internet del Congreso, www.congreso.es.

se trasladó a la X Legislatura⁵⁵⁸ y ahí tampoco se proveyó la designación individual, sino que se mantuvo vacante por once meses hasta la renovación total del grupo de designación que correspondía.

Tal inactividad, como bien se sabe, se debió a que la suerte de esta plaza se sujetó a la problemática que cundió en las renovaciones del Senado entre 2007 y 2010, así como a la reforma y los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la LOTC (LO 6/2007, de 25 de mayo) y al Estatuto catalán (LO 6/2006, de 19 de julio), según se detallará más adelante. En cualquier caso, podría decirse que nunca se cubrió la plaza que dejó el Magistrado García-Calvo, permaneciendo vacante desde el 18 de mayo de 2008 hasta el 17 de julio de 2012, sumando un total de cuatro años y dos meses.

5.5.3.- Designación de González Rivas, Ollero Tassara, Roca Trías, Valdés dal Re

El periodo de cargo de los magistrados salientes (Javier Delgado Barrio, Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay Montalvo) finalizó el 8 de noviembre de 2010, sin embargo fueron designados quienes habrían de sucederles hasta la sesión plenaria del Congreso de 17 de julio de 2012, es decir, veinte meses después.

La comunicación del Presidente del Tribunal Constitucional para instar el procedimiento de designación de los magistrados fue recibida el 30 de junio de 2010 (y calificada el 19 de julio) en el Congreso⁵⁵⁹. La renovación del Congreso “convivió” en el tiempo con la designación a cargo del Senado, debido al retraso en que éste venía incurriendo desde mediados de 2007. En un momento de esa coincidencia, se planteó entre las fuerzas políticas la negociación conjunta para designar en una misma tanda todas las plazas vacantes, pero por diversas circunstancias del “mundo de la política” esto no se consiguió.

La renovación senatorial se operó entre los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011, y las designaciones del Congreso se mantuvieron en trámite durante el tiempo que le restaba a la IX Legislatura del Congreso y el 28 de

⁵⁵⁸ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Relaciones de iniciativas caducadas y de iniciativas trasladadas a la Cámara que se constituya en la X Legislatura”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 648, serie d, general, 28 de octubre de 2011, pág. 859.

⁵⁵⁹ Fechas registradas en el expediente 235/000002, abierto en el Congreso con motivo de la comunicación para renovar a los magistrados. Véase el apartado de consulta de expedientes públicos (iniciativas), del portal de Internet del Congreso, www.congreso.es.

octubre de 2011 tuvo que trasladarse a la X Legislatura, formada con motivo de las elecciones de 20 de noviembre de 2011⁵⁶⁰.

Un poco antes, en junio de 2011, los tres magistrados que llevaban siete meses prorrogados en el cargo presentaron su renuncia⁵⁶¹. Las tres peticiones serían coincidentes en su motivación. Todas ponían de manifiesto el significativo incumplimiento de la Constitución que suponía la falta de renovación de los magistrados en tiempo. Especialmente, fundarían la renuncia en el art. 23.1 de la LOTC, que prevé como causal de cese del cargo, la “expiración del plazo de su nombramiento”.

El Presidente del TC sin embargo, no aceptó las renunciias⁵⁶². Lo hizo con fundamento en la facultad que tiene para ello prevista en el art. 23.1.1 de la LOTC. Básicamente el fundamento de la decisión fue la de “garantizar la continuidad y estabilidad” de la institución. En efecto, el Presidente tuvo en cuenta la “insustituible función institucional” del Tribunal, el volumen de procesos constitucionales pendientes y la necesaria presencia de dos tercios de sus miembros para el funcionamiento del Pleno (14 LOTC)⁵⁶³.

⁵⁶⁰ Véase CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Relaciones de iniciativas caducadas y de iniciativas trasladadas a la Cámara que se constituya en la X Legislatura”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 648, serie d, general, 28 de octubre de 2011, pág. 859.

⁵⁶¹ Las cartas de renuncia pueden encontrarse en la página de Internet del Senado, dentro del expediente 725/000003, documento 3. Aunque el procedimiento de renovación correspondía al Congreso, el documento también fue remitido al Senado, donde está disponible en los archivos electrónicos. La liga es la siguiente, www.senado.es/web/expedientdocblobervlet?legis=9&id=67522. El Magistrado Gay Montalvo, revelaría también en su escrito –el más extenso de los tres– los anteriores intentos que tuvo de efectuar la renuncia. Por otro lado, expresó una cierta defensa de la validez de las actuaciones jurisdiccionales en prórroga de las funciones, recordando lo asentado en el ATC 68/2010, de 23 de junio.

⁵⁶² Alfonso FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, ha visto en ello una oportunidad perdida para que en aquél contexto de incumplimiento de plazos de designación, el Tribunal, “en un acto legítimo de fuerza”, exigiese “la normalidad y reivindicase su dignidad institucional”, en “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, págs. 36-37.

⁵⁶³ El Decreto del Presidente del TC fue remitido a título informativo al Senado, en cuyos archivos electrónicos puede consultarse. Ver documento 4 del expediente 725/000003, en, www.senado.es/web/expedientdocblobervlet?legis=9&id=67525. El Decreto dispone lo siguiente: “La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé que la renuncia de los Magistrados de dicho Tribunal debe ser aceptada por su Presidente, así como que será éste quien decrete el cese o la vacante en el cargo que consiguientemente se produzcan (art. 23). Teniendo en cuenta que el funcionamiento del Tribunal en Pleno exige la presencia de dos tercios de sus Magistrados (art. 14 de la propia Ley) y dado el volumen de procesos constitucionales pendientes sometido a su conocimiento y, de modo principal, su insustituible función institucional como supremo intérprete de la Constitución y garante máximo de los derechos fundamentales y libertades públicas, y a fin de garantizar la continuidad y estabilidad de este órgano, RESUELVO no aceptar las renunciias presentadas por los Magistrados Excmos. Sres. Gay Montalvo, Vicepresidente, y Delgado Barrio y por la Magistrada Excmo.

Como ya se decía, el 20 de noviembre de 2011 se celebraron elecciones generales, de las cuales resultó un cambio en la mayoría política. Las nuevas Cortes Generales quedaron constituidas el 13 de diciembre de 2011. En los primeros meses de la X Legislatura del Congreso de los Diputados, el procedimiento de designación se mantuvo sin acción alguna. El siguiente impulso en la materia, tuvo que venir del Tribunal Constitucional, que en el Pleno del 22 de mayo de 2012, acordó emitir un comunicado público en el que insistió en la necesidad de renovar a los magistrados a tiempo, entre ellos, la plaza del magistrado fallecido. El TC subió inusitadamente de tono dejando advertido en la misma nota, que de prolongarse tales incumplimientos, adoptaría “las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean, para oponerse a esa situación”⁵⁶⁴.

Un mes después, la Mesa del Congreso finalmente accionó el procedimiento. Lo hizo en virtud de la solicitud presentada conjuntamente por 221 diputados de los Grupos popular y socialista, para que se celebrara una sesión extraordinaria de la Comisión Consultiva de Nombramientos para tramitar las designaciones de magistrados constitucionales y otros cargos públicos que estaban pendientes⁵⁶⁵.

Sra. Pérez Vera, sin perjuicio de hacer nuevamente presente, en este caso al Congreso de los Diputados, la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos. Este Decreto se comunicará a S.M. El Rey, al Pleno del Tribunal Constitucional y a los Presidentes del Gobierno, del Congreso de los Diputados, del Senado y del Consejo General del Poder Judicial. Madrid, a 13 de junio de 2011, Pascual Sala Sánchez”.

⁵⁶⁴ El acuerdo se hizo público mediante la Nota Informativa núm. 22/2012, de la oficina de prensa del Gabinete de la Presidencia del TC: “El Pleno del Tribunal Constitucional, en su reunión de esta mañana y por unanimidad, ha acordado la redacción de la siguiente nota de prensa: ‘La Constitución establece un Tribunal Constitucional compuesto por doce Magistrados, pero desde hace más de cuatro años son sólo once, porque el Congreso de los Diputados no cumple el deber de cubrir la vacante producida por el fallecimiento de don Roberto García-Calvo. Asimismo, la Constitución impone un mandato de nueve años para dichos Magistrados, pero tres de ellos llevan ya más de diez años y medio ejerciendo como tales, porque el Congreso de los Diputados no cumple el deber de renovar el tercio que le corresponde. Ante tan reiterados y duraderos incumplimientos, el Pleno del Tribunal Constitucional ve necesario recordar el respeto que se debe a la Constitución, advirtiéndole que, de prolongarse tales incumplimientos, adoptará las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean, para oponerse a esa indeseable situación’. Madrid, 22 de mayo de 2012”.

⁵⁶⁵ La solicitud fue presentada por Alonso Aranegui, Alfonso (GP) y 121 diputados y Madina Muñoz, Eduardo (GS) y 98 diputados. El documento está referido en el archivo electrónico de iniciativas en el portal de Internet del Congreso: “Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Consultiva de Nombramientos, a fin de que ejerza las funciones que se contemplan en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 25 de mayo de 2000, respecto a las candidaturas a Magistrados del Tribunal Constitucional, a Consejeros del Tribunal de Cuentas, así como a vocales Catedráticos de la Junta Electoral Central. (049/000044)”, presentado el 02/07/12 y calificado el 10/07/2012.

La Comisión de Nombramientos se reunió el 9 de julio de 2012 y ante ella comparecieron los cuatro candidatos a la magistratura constitucional que habían sido propuestos por los Grupos políticos mayoritarios. Al final de la sesión, y con el voto en contra del Grupo parlamentario de UPyD, se acordó la declaración de idoneidad de todos los candidatos⁵⁶⁶.

La propuesta fue elevada al Pleno del Congreso, que votó a favor de los candidatos en la sesión extraordinaria del 17 de julio de 2012, obteniendo cada uno los siguientes resultados⁵⁶⁷:

Encarna Roca Trías	289
Fernando Valdés Dal-Ré	282
Juan José González Rivas	270
Andrés Ollero Tassara	260

En blanco	10
Nulos	2

Antes de la votación, los Grupos parlamentarios utilizaron la tribuna para explicar el sentido del voto. De esta manera ha sido posible identificar claramente qué fuerzas políticas propusieron cada una de las candidaturas. En la ocasión, además de la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, se operaba también la del Defensor del Pueblo y los consejeros

⁵⁶⁶ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: "Comparecencias de candidatos para la elección de: cuatro magistrados del Tribunal Constitucional", en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, X Legislatura, núm. 49, Comisión Consultiva de Nombramientos, 9 de julio de 2012, págs. 2-27. Las comparecencias están disponibles en video en los archivos electrónicos de la página de Internet del Congreso: www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_133_5437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IT10&FMT=INTTXLSS.fmt&DOCS=1-26&DOCORDER=FIFO&QUERY=%28235%2F000003*.EXPE.%29. En esta sesión, además comparecieron los candidatos para las cinco vocalías de la Junta Electoral Central.

⁵⁶⁷ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: "Propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional", en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, X Legislatura, núm. 49, sesión plenaria núm. 47 (sesión extraordinaria), 17 de julio de 2012, pág. 18.

del Tribunal de Cuentas, de modo que la participación de cada portavoz englobó todas las designaciones.

En general, puede decirse que los Grupos minoritarios (PNV, UPyD, mixto e izquierda plural) fueron coincidentes en señalar que habían sido excluidos de la negociación, que las candidaturas se habían repartido en cuotas entre los dos grandes partidos y que por tanto, objetaban duramente el procedimiento selectivo, aunque muchos de ellos dejaron a salvo su buena consideración de los candidatos. El PNV por su parte, anunció que no iban a votar por ninguno, y de ahí se explican los 10 votos en blanco emitidos.

Los dos Grupos mayoritarios hicieron por otro lado, una defensa del procedimiento y afirmaron la idoneidad de los candidatos. Ambos justificaron de alguna manera el reparto de candidaturas “por cuotas”, con el argumento ciertamente discutible, de que la composición del TC debe tener una “lógica correspondencia con el propio poder legislativo”⁵⁶⁸. Quizá el tono más contundente de la intervención la daría el Grupo parlamentario popular, que remarcaría la gran mayoría de 301 diputados que formaban PP y PSOE, como fundamento suficiente para legitimar el procedimiento selectivo, frente a la reducida integración de los Grupos parlamentarios minoritarios, de los cuales también reprocharía no haber presentado ninguna candidatura⁵⁶⁹.

El único Grupo minoritario que formó parte de las negociaciones fue el de CiU (integrado por 16 diputados), que junto con el PSOE (110 diputados) propusieron la candidatura de Encarna Roca Trías, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona y Magistrada de la Sala Primera de lo Civil del TS. CiU sin embargo, reconoció que no se había tomado en cuenta a su Grupo en las negociaciones para la designación de los consejeros del Tribunal de Cuentas⁵⁷⁰.

⁵⁶⁸ Se trata del diputado Ramón Jáuregui Atondo. Véase CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, X Legislatura, núm. 49, sesión plenaria núm. 47 (sesión extraordinaria), 17 de julio de 2012, pág. 16.

⁵⁶⁹ Se trata del diputado Pedro Ramón Gómez de la Serna y Villacieros. Véase CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, X Legislatura, núm. 49, sesión plenaria núm. 47 (sesión extraordinaria), 17 de julio de 2012, pág. 17.

⁵⁷⁰ Diputado Jordi Jané i Guasch. Véase CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, X Legislatura, núm. 49, sesión plenaria núm. 47 (sesión extraordinaria), 17 de julio de 2012, págs. 14-15.

El Grupo parlamentario popular propuso dos candidaturas (186 diputados). Por un lado, la de Andrés Ollero Tassara, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos y ex diputado del PP (1986-2002); y por otro lado, la candidatura de Juan José González Rivas, que era Presidente de la Sección Séptima de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del TS.

El Grupo socialista, además de la candidatura “compartida” con CiU, propuso la de Fernando Valdés Dal-Ré, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

De los resultados de la votación se puede apreciar la diferencia de 29 votos menos del candidato Andrés Ollero respecto de la candidata más votada, Encarna Roca. La diferencia no responde sino al menor respaldo que dicha candidatura suscitó, especialmente en el Grupo socialista, el cual se había mostrado más crítico con él en las comparecencias y, sin embargo, como Grupo finalmente le apoyó. Ni qué duda cabe que esto es una clara muestra del reparto de las plazas en cuotas, pero con un elemento que parece adicional, consistente en la ausencia de vetos recíprocos entre los partidos, un dato por otro lado, que ya se había manifestado en la designación del Magistrado García-Calvo.

Los cuatro nuevos magistrados, fueron finalmente nombrados mediante los Reales Decretos 1115, 1116, 1117 y 1118/2012, de 20 de julio, publicados en el BOE el día siguiente. El 23 de julio de 2012 juraron o prometieron el cargo en el Palacio de la Zarzuela y luego como es habitual, tomaron posesión del cargo en una ceremonia llevada a cabo en la sede del Tribunal.

En estas designaciones, no solamente el Congreso incurrió en un retraso de veinte meses como ya se había referido, sino que “rompió otro récord”: el de no proceder a la sustitución de una plaza vacante por fallecimiento sino hasta cuatro años y dos meses después (mayo 2008-julio 2012).

CAPÍTULO VI

Las designaciones de magistrados constitucionales en el Senado

6.1.- La designación inaugural

6.1.1.- El procedimiento selectivo en las Normas de Presidencia de 1980

El Reglamento provisional del Senado, de 18 de octubre de 1977⁵⁷¹, no contempló provisiones específicas en materia de designación de autoridades, aunque naturalmente había disposiciones generales que resultaban de aplicación⁵⁷². En cualquier caso, tal y como se estaba haciendo al propio tiempo en el Congreso de los Diputados, la Presidencia del Senado procedió a la elaboración de unas Normas interpretativas “para la elección por el Senado de cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional”⁵⁷³, destinada a regir la primera designación de magistrados a cargo del Senado, y conseguir así la apremiante constitución del TC⁵⁷⁴.

⁵⁷¹ Reglamento provisional del Senado, aprobado el día 14 de octubre de 1977 (BOE núm. 256, de 26 de octubre de 1977).

⁵⁷² Por ejemplo, las facultades de ordenación e impulso del trabajo de la Cámara al Presidente, la Mesa y la Junta de Portavoces (arts. 28, 27, 18, 61.2), las reglas del uso de la palabra (arts. 72-75), la previsión de la votación por llamamiento y votación secreta por medio de papeleta cuando se trate de la designación de cargos (art. 81); el escrutinio de los votos, la proclamación de resultados, superación de empates y mayorías (arts. 82, 83.2 y 77), la necesidad de haber repartido a los senadores la documentación necesaria para la sesión con veinticuatro horas de antelación (art. 106), entre otras.

⁵⁷³ SENADO: “Normas para la elección por el Senado de cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie I*, núm.38, I Legislatura, 8 de febrero de 1980, págs. 712-713.

⁵⁷⁴ En la sesión extraordinaria del Pleno que procedió a la designación inaugural de los magistrados constitucionales, el Presidente de la Cámara dio lectura a la comunicación del Gobierno en que solicitaba la convocatoria de sesión extraordinaria por considerar de “la máxima urgencia la constitución definitiva” del Tribunal Constitucional. Véase SENADO: “Elección de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, que deben proponerse a S.M. el Rey

Las Normas interpretativas de la Presidencia, rigieron la designación inaugural de los magistrados constitucionales a cargo del Senado, la cual fue realizada en la sesión plenaria extraordinaria del 30 de enero de 1980⁵⁷⁵ (el mismo día que el Congreso también operó la designación de sus correspondientes cuatro magistrados). Las Normas, sin embargo, fueron publicadas una semana después, concretamente, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 8 de febrero de 1980. Procedimentalmente lo más adecuado era que las normas estuvieran publicadas previamente a su aplicación y no al contrario, sin embargo, en la ocasión, la falta de previsiones reglamentarias y la premura del tiempo para constituir el Tribunal, explicarían este suceso.

En términos generales, el contenido de la Resolución del Senado no dista mucho de la emitida por el Congreso. Si bien, algunas reglas del Senado fueron redactadas con más tino técnico, sobre todo las que hacen referencia abstracta al número de candidaturas a presentar y a la mayoría exigida para acordar su designación, y otras reglas han especificado con mayor detalle las fases de presentación de candidaturas, votación y comunicación del nombramiento; la Resolución del Congreso en cambio, se ha mostrado más técnica y acertada en materia de superación de empates y balotajes para los casos en que no se obtengan las mayorías exigidas, además de que la propia Resolución ha ampliado la utilización de tal procedimiento para los supuestos de renovación individual y para las designaciones de los vocales del CGPJ.

En términos concretos, las Reglas del Senado reconocen no solamente a cada Grupo parlamentario el derecho de presentar “tantos candidatos como puestos a cubrir”, sino que también dotaron de facultad de propuesta a un grupo de 25 senadores (regla primera). Las normas además precisaban que la presentación de las candidaturas, debía hacerse “ante la Presidencia al iniciarse el punto correspondiente del orden del día” (regla segunda).

La votación revestía carácter secreto. Cada senador debía ser llamado personalmente para que acudiera a la Presidencia para depositar la papeleta en la urna correspondiente. En la papeleta cada senador podría escribir hasta

por esta Cámara”, en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 39 (extraordinaria), 30 de enero de 1980, pág. 1725.

⁵⁷⁵ *Idem*, págs. 1725-1726.

cuatro nombres, no registrándose los que haya colocado de más (regla tercera).

Tras ello debía realizarse el escrutinio, para lo cual el Presidente debía extraer las papeletas de la urna, las cuales debían ser leídas en alta voz por uno de los secretarios (regla cuarta). Resultaban elegidos los cuatro candidatos que obtuviesen el respaldo de los tres quintos de los senadores que integren la Cámara (regla quinta).

En el supuesto de un empate para el cuarto puesto, se realizaría otra votación entre los candidatos empatados (regla sexta). Aquí como ya se avanzaba, se puede apreciar cierta deficiencia en materia de superación de los empates, pues la regla previene el exclusivo caso del cuarto puesto. En este punto, se coincide con Fernández Segado en que esta regla deberá aplicarse por analogía para “el supuesto de que el empate se produjese entre tres o más candidatos para el tercer y cuarto puesto”⁵⁷⁶, agregando por nuestra parte todavía un criterio más general, esto es, que sea aplicable para el puesto que sea.

Si no se obtuviese la “mayoría de tres quintos para alguno de los puestos”, se debía repetir la votación “entre aquellos dos candidatos que, sin alcanzar dicha mayoría, hayan obtenido mayor número de votos” (regla séptima). Igualmente en esta materia la regla plantea algunas cuestiones. ¿Y qué pasa si la mayoría cualificada no se consigue “para alguno de los puestos”, sino para dos, tres o todos los puestos? Como bien apunta Fernández Segado, es obvio que tendría que repetirse la votación, “pero ¿quiénes participarían como candidatos?”.

Fernández Segado ofrece la interpretación de que si para cubrir una plaza participan dos candidatos, “la regla a seguir bien pudiera ser la de que participe en cada supuesto un número de candidatos igual al duplo del de puestos a proveer, atendiendo al número de votos obtenidos en la primera votación”⁵⁷⁷.

Otra interpretación podría ser, que teniendo en cuenta que la regla somete a votación a los dos candidatos más votados para determinar una

⁵⁷⁶ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El procedimiento de elección de los magistrados constitucionales”, *op. cit.*, pág. 171.

⁵⁷⁷ *Idem.*

plaza, lo que podría aplicarse es que de esta manera se vayan cubriendo, de forma individual, plaza por plaza, metiendo como finalistas a los dos más votados que arroje una votación previa, entre los candidatos que no hayan sido designados. De esta manera, las plazas podrían ir cubriéndose en la medida que se concentre la votación sobre sólo dos candidatos.

En cualquier caso, y de tener virtualidad alguno de los supuestos aquí planteados, está claro que la resolución del mismo quedaría en manos del Presidente, en virtud de las facultades otorgadas por el propio Reglamento provisional para proceder a su interpretación (art. 28.8).

No obstante, no deja de echarse en falta la disposición que sí contempló la inicial normativa de selección del Congreso de los Diputados, correspondiente a la reducción progresiva del número de candidatos, para el caso de que en la primera votación no se cubrieran los cuatro puestos de magistrados⁵⁷⁸. De igual forma, llama la atención el silencio que se guarda con respecto a la secuencia de las votaciones, pues no se indica si éstas serán sucesivas e ininterrumpidas o bien, si habrán de hacerse en un plazo prudente establecido.

La regla octava preveía que en “los casos previstos en las dos normas anteriores, cada Senador dispondrá de igual número de votos al de vacantes que permanezcan sin elegir”. La regla novena finalmente establece que concluidas las votaciones, el Presidente deberá elevar la propuesta de nombramiento al Rey, por conducto del Presidente del Gobierno.

No puede dejar de notarse en esta última regla, el carácter provisional de la Resolución, dirigida sobre todo a la designación inaugural del TC. Ello es así, puesto que en las sucesivas renovaciones, el órgano proponente debía mandar primero las candidaturas designadas al propio TC para que el Pleno realice la verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la magistratura (2 g, 10 i, LOTC) y una vez agotado este trámite, entonces elevar la propuesta al Rey para su nombramiento, por conducto del Presidente de Gobierno. En esta ocasión sin embargo, cobra total sentido la disposición, al no existir, evidentemente el TC.

⁵⁷⁸ Así lo destaca también FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El procedimiento de elección de magistrados constitucionales”, *op. cit.*, pág. 172.

6.1.2.- La designación de Díez-Picazo, Begué Cantón, García-Pelayo y Latorre Segura

En la designación de los primeros diez magistrados, todas las plazas entraron en el “paquete” de negociación realizado entre el PSOE y UCD, para determinar los nombres de quienes habían de ocupar los cargos. Recuérdese que en la época, estas eran las dos fuerzas que conjuntamente conseguían sumar la mayoría calificada exigida constitucionalmente para operar las designaciones.

Como parte de ese acuerdo general, los partidos políticos también compartieron el criterio de elegir a los candidatos con un perfil políticamente independiente, ideológicamente demócrata y jurídicamente experto y experimentado.

Entre las primeras personas con ese bagaje doctrinal y práctico, la prensa ha dejado constancia de cómo en el panorama político del momento, comenzaron a aparecer nombres de candidatos que guardaban entre sí largas décadas de dedicación activa al Derecho. Se trataba, por ejemplo, de grandes juristas como Antonio Hernández Gil, Joaquín Ruiz-Giménez, Manuel García-Pelayo, entre otras personalidades⁵⁷⁹.

La constitución del TC apremiaba y por tanto, se llevó a cabo en el Senado una sesión plenaria extraordinaria el 30 de enero de 1980. El Presidente del Senado, Cecilio Valverde Mazuelas, una vez iniciada la sesión, explicó al Pleno que la sesión extraordinaria la había convocado a petición del Gobierno, quien la había solicitado en el ejercicio de la facultad que le reservaba el art. 73.2 de la CE. El objeto de la petición, era la celebración de la sesión extraordinaria para dar cumplimiento al art. 159.1 de la CE y proceder a la designación de los cuatro magistrados que correspondían al Senado⁵⁸⁰.

⁵⁷⁹ La prensa también recogía los nombres de Jerónimo Arozamena, Julio Calvillo, Manuel Díez de Velasco, Marcial Fernández Montes, Ángel Latorre, Manuel Olivencia, José Ramón Parada, Federico Sainz de Robles, Francisco Tomás y Valiente, entre otros. DE LA CUADRA, Bonifacio: “Ocho catedráticos, tres magistrados y un abogado, probables miembros del Tribunal Constitucional. UCD y PSOE negocian ‘en bloque’ los doce candidatos”, en *El País*, 16 de diciembre de 1979.

⁵⁸⁰ El oficio del Ministro de la Presidencia de 29 de enero de 1980, tenía el siguiente contenido: “Habiendo sido publicada en el ‘Boletín Oficial del Estado’, de 5 de octubre de 1979, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y cumplido el plazo para su entrada en vigor, el Gobierno, que considera de la máxima urgencia la constitución definitiva de dicho Tribunal, y teniendo en

Luego de ello, el Presidente dio lectura de los escritos de propuesta que habían sido presentados por los Grupos parlamentarios “Socialista Andaluz”, “*Catalunya, Democracia i Socialisme*”, socialista y UCD, coincidiendo todas ellas en el Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis Díez-Picazo y Ponce de León, en la Catedrática de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Salamanca, Gloria Begué Cantón, en el Profesor de Teoría Política y Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, ex encargado de la cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid antes de 1936, Manuel García-Pelayo y Alonso, y en el Catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Alcalá de Henares, Ángel Latorre Segura⁵⁸¹.

El escrito de propuesta del Grupo parlamentario de UCD, exponía literalmente que el Grupo adveraba “la disposición de los mencionados señores a ser designados candidatos y, consecuentemente, a ser propuestos para el nombramiento, caso de resultar elegidos”. En estas circunstancias, el Presidente solicitó al resto de portavoces de los grupos proponentes, que manifestaran si los candidatos presentados les habían dado la respectiva conformidad, a lo que todos respondieron que efectivamente se había recogido la misma.

Enseguida, se procedió a la votación, y mientras se hacía el reparto de las papeletas, se dio lectura a las normas interpretativas de la Presidencia que regularían el procedimiento. Una vez efectuado el escrutinio, los resultados fueron los siguientes:

Candidato	Votación
Gloria Begué Cantón	151

cuenta las previsiones que para la misma se establecen en la Disposición transitoria primera de la mencionada Ley Orgánica, acogiéndose a lo que establece el apartado 2 del artículo 73 de la Constitución, eleva a V. E. la petición de que se convoque sesión extraordinaria del Senado, en el plazo más breve posible, a efecto de que esa Cámara proponga a Su Majestad el Rey los nombramientos de Magistrados que constitucionalmente le corresponden. Lo que comunico a V. E. a los efectos oportunos”. La comunicación está contenida en el *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 39 (extraordinaria), 30 de enero de 1980, pág. 1726, y también está referida en la sección de “iniciativas parlamentarias”, expediente 725/000001, de la página de Internet del Senado, www.senado.es.

⁵⁸¹ SENADO: “Elección de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, que deben proponerse a S.M. el Rey por esta Cámara”, en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 39 (extraordinaria), 30 de enero de 1980, págs. 1724-1727.

Luis Díez-Picazo	151
Manuel García-Pelayo	151
Ángel Latorre Segura	151

En blanco	6
-----------	---

A la luz del procedimiento relatado, se pueden destacar algunos aspectos. En primer lugar, se ha mostrado muy bien cómo la praxis no ha dado oportunidad a poner a prueba la mayoría de las reglas comentadas de la Resolución de la Presidencia del Senado de 1980. En efecto, en este caso la negociación previa entre las direcciones centrales de las dos principales fuerzas políticas fue el mecanismo definidor de los candidatos, por lo que no podría entenderse en sentido estricto, que hayan sido los actores políticos del Senado, quienes de manera autónoma hayan procedido a la designación de los magistrados.

Otro elemento a tener en cuenta, es que a la luz de las contemporáneas designaciones que se efectuaban en el Congreso, en el Senado no se siguió el criterio de la Junta de Portavoces del Congreso que ocultaba la proveniencia de las candidaturas, antes al contrario, el Presidente del Senado dio lectura pública de los escritos de presentación de candidaturas elaboradas por cada uno de los Grupos parlamentarios.

Antes de arribar al terreno de la formalización del cargo, conviene llamar la atención sobre el escrito que los magistrados elegidos enviaron al Pleno del Senado, puesto que más allá de agradecer la designación, manifestaron el compromiso “de dimitir de todos los cargos o actividades incompatibles con la condición de Magistrado” antes de tomar posesión⁵⁸². Se trata en efecto, de un

⁵⁸² La comunicación fue enviada por cada uno de los cuatro magistrados propuestos con el mismo texto, el cual se dio lectura al final de la siguiente sesión plenaria del Senado. El escrito reproducido en la sesión fue el siguiente: “Tengo el honor de acusar recibo de su comunicación de 30 de enero por la que me informa del acuerdo del Senado proponiendo mi designación como Magistrado del Tribunal Constitucional. Al agradecer tal honor, adquiero formalmente ante Vuestra Excelencia el compromiso de dimitir de todos los cargos o actividades incompatibles con la condición de Magistrado del Tribunal Constitucional antes de tomar posesión de éste, de acuerdo con lo exigido por el artículo 19 de su Ley Orgánica. Le ruego señor Presidente, transmita al Senado mi agradecimiento y la seguridad de que intentaré estar a la altura de la confianza que en mí ha depositado”. Véase la última página del *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 40, I Legislatura, 5 de febrero de 1980, págs. 1781-1782.

encomiable compromiso realizado como muestra de apego institucional, aunque en estricto sentido, un escrito de esa naturaleza no está prescrito en las disposiciones de los arts. 159.4 de la CE y 19 de la LOTC, relativos a las incompatibilidades para la magistratura constitucional.

Finalmente, los magistrados fueron nombrados mediante los Reales Decretos 302, 304, 305 y 307, todos del día 14 de febrero de 1980, publicados en el BOE el 22 del mismo mes. Luego, junto con los cuatro magistrados designados por el Congreso y los dos por el Gobierno, tomaron posesión del cargo, y efectuaron toda la serie de actos preparativos para la posterior constitución del Tribunal (el 12 de julio de 1980), los cuales se han referido ya en este trabajo.

6.1.3.- El procedimiento selectivo en el Reglamento del Senado de 1982

El Reglamento que con carácter definitivo se daría el Senado vendría aprobado en la sesión del 26 de mayo de 1982. En dicho Reglamento (RS), se destinaría el Título IX para regular las “relaciones del Senado con otras instituciones constitucionales”, dedicando su capítulo primero al Tribunal Constitucional, y el artículo 184, a la designación de los magistrados⁵⁸³.

A diferencia de lo que sucedió en el Congreso, donde las normas de Presidencia fueron prácticamente vaciadas en su integridad al Reglamento de la Cámara, en el caso del Senado se pudieron apreciar algunos cambios respecto a las iniciales disposiciones de 1980.

En el primer apartado del art. 184 del RS, se mantuvieron los órganos habilitados para presentar las candidaturas, esto es, el Grupo parlamentario y un grupo de senadores, aunque ahora se redujo el número de veinticinco a diez, lo que representa evidentemente un rasgo para facilitar la formulación de las mismas. Siguiendo a Fernández Segado, se sugiere que la razón de la disminución pudo estar en el establecimiento de un número igual al mínimo suficiente para formar un Grupo parlamentario, que según el art. 27.1 del RS es el de diez senadores⁵⁸⁴.

⁵⁸³ Reglamento del Senado, aprobado el día 26 de mayo de 1982 (BOE núm. 155, de 30 de junio de 1982).

⁵⁸⁴ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El procedimiento de elección de magistrados constitucionales”, op. cit., pág. 174.

En cuanto a la presentación de candidaturas se dispuso que debería hacerse “no más tarde del inicio de la sesión en que se haya de efectuar la elección” (184.2 RS). Formulación que viene a dar al menos, un poco más de anticipación al momento límite en que deberán presentarse las candidaturas, pues en las normas anteriores se decía que podían presentarse “al iniciarse el punto correspondiente del orden del día”, abriendo con ello la posibilidad de acordar candidaturas *in situ*, al calor de las circunstancias y sin tiempo suficiente para su examen.

En cuanto a la fase de escrutinio, se deja atrás la especificación de que el Presidente debía extraer “las papeletas de la urna”, las cuales debían ser leídas “en alta voz por uno de los Secretarios”, por la mención general de que “la Mesa” debía hacer el escrutinio y proclamación de los candidatos que obtuviesen los “tres quintos del número de Senadores que en ese momento integren la Cámara” (184.3 RS).

Se mantiene la votación mediante papeleta, y en cuanto al número de candidatos por los que se puede votar en la misma, se establece la fórmula más técnica de hacerlo por “tantos nombres como puestos a cubrir” (184.3 RS), en vez de la redacción anteriormente utilizada de “hasta cuatro candidatos”, de manera que ahora queda incluido lógicamente el supuesto en que deban sustituirse menos de cuatro magistrados (fallecimiento, dimisión, etcétera).

Subsiste la previsión de que al no obtenerse la mayoría de tres quintos para “alguno de los puestos”, deberá repetirse la votación entre aquellos dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos (184.4 RS). Por lo que nuevamente se deja sin respaldo legal el supuesto en que sean más de uno los cargos que se hayan quedado sin obtener la mayoría requerida. Como se puede ver, no se contempla una probable reducción de candidatos o finalistas entre las votaciones subsecuentes al estilo del artículo 204.5 del RCD.

La nueva reglamentación aborda también con mayor amplitud el supuesto del empate en la votación, ya que la anterior preveía unas reglas de desempate para cuando se tratase exclusivamente de la “cuarta plaza”. En la nueva disposición, se prevé para cualquiera. El nuevo art. 184.5, en efecto, establece que de “producirse un empate, se repetirá la votación entre los que

hubieran obtenido igual número de votos y, en su caso, entre los que le sigan, en la medida necesaria para cubrir las cuatro vacantes”.

Finalmente, en el Reglamento se acogió casi íntegramente la disposición octava de las reglas interpretativas, que establecía que en los casos contemplados en los apartados anteriores, “cada Senador dispondrá de igual número de votos al de puestos que permanezcan sin elegir” (184.6 RS)⁵⁸⁵. Por otro lado, ya no se hizo alusión a que las propuestas de nombramiento debían elevarse al Rey, “por conducto del Presidente de Gobierno”. Ello seguramente, porque instalado el Tribunal, debían pasar antes por éste para el trámite de verificación de los requisitos de acceso y luego seguir con lo demás.

En términos generales, la nueva reglamentación ha adoptado algunas precisiones respecto de las normas interpretativas anteriores. Sin embargo, comparando con la regulación adoptada en el Reglamento del Congreso, presenta algunas lagunas importantes, sobre las cuales conviene hacer alguna breve mención.

Un primer punto podría ser la deficiente mención de reglas de balotaje para superar los casos donde no se consigan las mayorías calificadas. Un segundo punto sería la ausencia de unas disposiciones como en el Congreso, que habiliten un espacio en tribuna para que los Grupos tomen la palabra para exponer algún punto sobre las candidaturas presentadas o el procedimiento selectivo.

6.1.4.- Sustitución de García-Pelayo por García-Mon

El Presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García-Pelayo y Alonso, según declaraciones a los diarios, había comunicado al Pleno del TC desde el 10 de noviembre de 1985, su propósito de presentar la renuncia hacia el 15 de febrero de 1986, anticipando su marcha de la institución tres años antes de que concluyera su periodo ordinario de cargo como magistrado. García-Pelayo afirmó en una entrevista telefónica dada a la prensa, que “puesto que en febrero ha de renovarse legalmente una buena parte del

⁵⁸⁵ Siendo exactos, la modificación reglamentaria consistió en cambiar la palabra “puestos” por la que se tenía en las reglas interpretativas de “vacantes”.

tribunal, me ha parecido lógico que el conjunto de los magistrados elija a un presidente de su confianza”⁵⁸⁶.

El Magistrado se refería a la renovación parcial que motivó el segundo sorteo de la DT 9ª de la CE, que recayó en las designaciones a cargo del CGPJ y del Gobierno. A estas cuatro, había que agregar la dimisión del Magistrado Manuel Díez de Velasco al que correspondía sustituir al Congreso. Si a esta serie de designaciones sumamos la dimisión de García-Pelayo, tenemos que en este periodo el Tribunal se vería renovado con la mitad de sus miembros.

La sustitución de García-Pelayo se efectuó en la sesión plenaria del Senado del 11 de febrero de 1986. En el punto correspondiente del orden del día, se dio lectura al único escrito de proposición de candidatura para sustituir al magistrado. En el mismo documento de propuesta, se informó también que el oficio de la Presidencia del TC en que se comunicaba la renuncia, era de fecha del 6 de febrero de 1986⁵⁸⁷.

La única propuesta fue presentada por el Grupo parlamentario socialista, el cual, en aquella época (II Legislatura) contaba por sí solo con los votos necesarios para sacar adelante al candidato que se propusiera. En efecto, el Grupo socialista se integraba con 153 senadores y la mayoría de tres quintos exigida para la designación se traducía en 150 votos, dado que la II Legislatura del Senado, que ya estaba a unos meses de finalizar, se componía en aquéllos años de 250 senadores⁵⁸⁸.

No obstante la fuerza numérica del Grupo socialista, en la prensa se hizo eco de la intención de ese Grupo para conseguir un candidato de consenso con el Grupo popular, con el fin de respaldar no solamente la

⁵⁸⁶ Véase la nota del periodista VALDECANTOS, Camilo: “García Pelayo abandonará el Tribunal Constitucional en febrero, coincidiendo con la renovación de cinco magistrados. Su mandato, improrrogable, concluía el próximo 4 de julio”, en *El País*, 7 de enero de 1986.

⁵⁸⁷ SENADO: “Elección de un miembro del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 145, II Legislatura, 11 de febrero de 1986, págs. 6875-6876.

⁵⁸⁸ El Departamento de Archivo del Senado me ha facilitado un documento de trabajo donde se han confeccionando las integraciones concretas que han tenido los Grupos parlamentarios en el Senado durante todas las Legislaturas (incluyendo los senadores designados por los Parlamentos autonómicos). Sobre este documento se tomarán en adelante todos los datos sobre la composición de la Cámara. Hacia el final de la II Legislatura del Senado (23-04-1986), ésta se componía de la siguiente forma: Grupo socialista 153, popular 66, “Catalunya al Senat” 7, nacionalistas vascos 9, y mixto 15 (total 250). Véase además SENADO: “Elección de un miembro del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 145, II Legislatura, 11 de febrero de 1986, pág. 6876.

sustitución de García-Pelayo, sino también la de Díez de Velasco en el Congreso⁵⁸⁹. El acuerdo, sin embargo, no se logró en ninguna de las Cámaras, siendo los socialistas el único Grupo que presentó candidatura en cada una de las Asambleas.

Tratándose del Senado, la candidatura recayó en el abogado Fernando García-Mon y González-Regueral, quien se había desempeñado como vocal del CGPJ entre 1980-1985, designado en su momento por el Senado, para sustituir a Plácido Fernández Viagas, que como se recordará había dejado la vocalía del Consejo para asumir la magistratura constitucional en 1980. La candidatura obtuvo los siguientes resultados:

Candidato	Votación
Fernando García-Mon	160

En blanco	14
Nulos	36

Como puede verse, la candidatura superó la mayoría exigida de 150 votos, aunque ciertamente no lo hizo con holgura. El apoyo fundamental vino obviamente del Grupo socialista, aunque la prensa recogió también que el Grupo vasco había respaldado la candidatura (con 9 votos) así como algunos senadores del Grupo mixto (2 votos). Asimismo se indicó que los votos en blanco provendrían del Grupo catalán (9 votos) y del Grupo mixto (5 votos)⁵⁹⁰.

En cuanto a la votación nula, como puede verse, se registró el elevado número de 36 sufragios. Estos votos correspondieron al Grupo popular, como muestra de su objeción al procedimiento. En efecto, antes de comenzar la votación, en palabras de su portavoz, el señor Arespacochaga y Felipe, reprochó la premura con que se llevó a cabo el procedimiento y concretamente al Grupo socialista la forma repentina e impositiva en que comunicaron la candidatura: con una noche de anticipación y mediante telegrama. Lo que, a criterio del portavoz, iba “en contra de la dignidad de la Cámara y quizá de la

⁵⁸⁹ Según la nota de la agencia EUROPA PRESS: “El PSOE negociará con la oposición las vacantes del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 25 de enero de 1986.

⁵⁹⁰ Así lo informa la nota de GUNDÍN, J. A.: “Socialistas y vascos del Senado votaron juntos el vocal del Tribunal Constitucional”, en *ABC* (Sevilla), 12 de febrero de 1986, pág. 13.

credibilidad del Tribunal aludido”. El Grupo popular, por otro lado, aclaró que ello no debería entenderse como el rechazo a una persona⁵⁹¹.

La crítica del portavoz popular al procedimiento resulta muy acertada. En primer lugar, se puede convenir en que la proposición de la candidatura una noche antes de la sesión no permite siquiera repartir la documentación de la misma entre los parlamentarios para que estos puedan analizar la candidatura y preparar la sesión. Una conducta de ese tipo, no es sino indicativa de un quiebre en la negociación entre las dos principales fuerzas políticas totalmente alejado del espíritu del consenso, esto es, de lograr en torno a la candidatura el mayor número de apoyos posibles de los Grupos parlamentarios o por lo menos, el menor número de resistencias.

Sin embargo, en este suceso conviene hacer dos consideraciones que pueden dar razones para criticar las normas senatoriales en la materia. La primera es que, no obstante la abrupta comunicación de la candidatura al Grupo popular una noche antes, lo cierto es que la misma consiguió presentarse de conformidad a las reglas del Senado, esto es “no más tarde del inicio de la sesión en que se haya de efectuar la sesión” (184.2 RS). Ello no hace sino desaconsejar esa fórmula de redacción, que por cierto hoy ya no es vigente.

La segunda consideración es que en la sesión plenaria se concedió el uso de la palabra al portavoz del Grupo popular, cuando las reglas senatoriales no preveían expresamente turnos de participación en tribuna en estos procedimientos (como sí sucede en el Congreso). La actitud del Presidente para permitir esa manifestación, puede verse como una actitud encomiable y más apegada al espíritu deliberante que guardan muchas de las atribuciones

⁵⁹¹ La participación del portavoz popular fue la siguiente: “Agradecemos profundamente, señor Presidente, la delicadeza de darnos este turno que solicitamos por una cuestión de procedimiento. Se nos ha convocado a la Junta de Portavoces el sábado comunicándonos: uno, la dimisión del Presidente del Tribunal Constitucional; dos, el cambio del orden del día, cuando ya estaba impreso; tres, la elección de un miembro del citado Tribunal. Sólo ayer por la noche, unas cuarenta y dos horas antes de su elección y no todas hábiles, se nos comunicó por el Grupo Socialista el nombre del Vocal a nombrar. Agradecemos la transmisión de todas esas órdenes, aun en la brusca redacción de un telegrama, pero creemos que este no es el procedimiento, por lo que el voto de nuestro Grupo no deberá interpretarse en ningún caso como rechazo a una persona, sino como repulsa a un procedimiento de urgencia primero, de imposición después, que va en contra de la dignidad de la Cámara y quizá de la credibilidad del Tribunal aludido”. SENADO: “Elección de un miembro del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 145, II Legislatura, 11 de febrero de 1986, págs. 6875-6876.

del poder legislativo, sin embargo, parece oportuno que la participación parlamentaria esté prevista expresamente en el Reglamento, para evitar que esta materia se encuentre “a criterio” del Presidente en turno. Conviene además su previsión reglamentaria, porque hay razones para que este tipo de intervención del parlamentario pueda prohibirse, al tratarse de procedimientos electivos de personas que generalmente son realizados con ciertas reservas y donde el voto es secreto. Hoy por fortuna, el RS tampoco presenta esa deficiencia.

Finalmente y en cuanto a la formalización del cargo, el Magistrado Fernando García-Mon fue nombrado mediante Real Decreto 362/1986, de 21 de febrero, publicado en el BOE el día siguiente, junto con los restantes cinco magistrados que se designaron en el momento (las efectuadas por el CGPJ, el Gobierno y la sustitución individual del Congreso). El propio 21 de febrero, los seis magistrados juraron o prometieron el cargo y tomaron posesión del mismo en una ceremonia en la sede del Tribunal Constitucional⁵⁹².

De este periodo de designaciones, cabe destacar que las realizadas tanto en el Congreso como en el Senado se caracterizaron porque por primera vez no se harían con el respaldo de las dos principales fuerzas políticas. Con ello, puede decirse que el gran consenso que caracterizó la etapa constituyente, en materia de designación de magistrados constitucionales había llegado a su término.

6.2.- La primera renovación (1989)

6.2.1.- Designación de Gimeno Sendra, de los Mozos, Rodríguez Bereijo y García-Mon

El 22 de febrero de 1989 cesaron los cargos de Gloria Begué, Luis Díez-Picazo, Ángel Latorre y Fernando García-Mon, éste último, como se acaba de ver, designado en sustitución de Manuel García-Pelayo, por lo que su mandato se constreñía a completar el periodo que restaba a su antecesor.

La comunicación del Presidente del TC, Francisco Tomás y Valiente, para instar el procedimiento fue recibida en el Senado el 17 de octubre de 1988

⁵⁹² Así figura en la galería fotográfica del portal de Internet del Tribunal Constitucional, en el apartado dedicado a “renovaciones y tomas de posesión”, en www.tribunalconstitucional.es.

y calificada el día 24 siguiente⁵⁹³. La designación de los nuevos magistrados vino, de manera puntual en la sesión plenaria del Senado del 8 de febrero de 1989. En esta ocasión, no se leyó en el pleno el escrito de presentación de candidaturas, ni se especificaron los nombres que habían sido presentados por cada Grupo parlamentario. Por el contrario, en el Diario de Sesiones del Senado simplemente figura la indicación de los candidatos propuestos y los resultados de la votación⁵⁹⁴.

En los medios de comunicación social, sin embargo, se recogió la manera en que se habían acordado las candidaturas, siguiendo el discutible criterio de hacerlo predominantemente mediante el reparto de plazas entre el PP y el PSOE⁵⁹⁵. En ese acuerdo, sin embargo, fue el PSOE quien aplicó mayor influjo en las mismas, determinando por lo menos tres de las cuatro plazas (dos directamente y una por consenso), respaldado seguramente con la fuerza que le daba la posesión de la mayoría absoluta en la III Legislatura del Senado⁵⁹⁶.

La primera candidatura del PSOE fue la de Álvaro Rodríguez Bereijo, quien era Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, pero que en el momento de la designación era Consejero del Tribunal de Cuentas (habiendo sido propuesto por el PSOE en el Senado). La segunda fue la del Magistrado del propio TC Fernando García-Mon, quien por no llevar más de tres años en el cargo, resultaba elegible en virtud del entonces artículo 16.2 de la LOTC (ahora 16.4). El abogado García-Mon, aunque propuesto en su momento por el PSOE para cubrir la vacante de García-Pelayo, no se le consideraba especialmente incardinado con alguna tendencia política, en cualquier caso, sería en esta reelección propuesto fundamentalmente por el PSOE.

⁵⁹³ Datos disponibles del expediente 725/000001, abierto en el Senado con motivo de la renovación de magistrados para el Tribunal Constitucional.

⁵⁹⁴ SENADO: "Elección de cuatro miembros del Tribunal Constitucional que deben proponerse a S. M. el Rey por esta Cámara", en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 108, III Legislatura, 8 de febrero de 1989, pág. 5040.

⁵⁹⁵ Véanse al respecto las siguientes notas de prensa: DE LA CUADRA, Bonifacio: "El Senado elegirá hoy a Rodríguez Bereijo, Gimeno Sendra y De los Mozos magistrados del Constitucional", en *El País*, 8 de febrero de 1989. Así como la nota firmada con las iniciales S.G., titulada "El PSOE mantendrá la mayoría en el Tribunal Constitucional hasta 1995", en *ABC*, 27 de febrero de 1989, pág. 17.

⁵⁹⁶ La III Legislatura del Senado se conformó en sus inicios de la siguiente forma (15-07-1986): Grupo socialista 147, Coalición Popular 64, Centro Democrático y Social 10, Catalán de Convergència i Unió 11, nacionalistas vascos 10, y mixto 18 (total 260).

La candidatura de consenso recayó en José Vicente Gimeno Sendra, quien se desempeñaba como Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Autónoma de Madrid (antes en Alicante). Finalmente, la candidatura propuesta del PP fue la de José Luis de los Mozos y de los Mozos, que era Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid (antes en Oviedo y Salamanca), pero que en la época era senador del Grupo popular desde 1986.

Una vez efectuado el escrutinio, los resultados fueron los siguientes:

Candidato	Votación
Fernando García-Mon	178
José Vicente Gimeno	178
J. Luis de los Mozos	178
Álvaro Rodríguez	178

En blanco	20
-----------	----

En la sesión, se mencionó que la composición del Senado era de 253 miembros, por lo que la mayoría de tres quintos se obtendría con 152 votos. El acuerdo entre PSOE y PP conseguiría que todos los candidatos propuestos superaran sin problemas el listón de la mayoría calificada. Ningún Grupo tomó la palabra en la sesión, de modo que para encontrar la explicación de los votos en blanco, podría conjeturarse que vinieron de algunos diputados de los grupos minoritarios excluidos de la negociación, por ejemplo entre el Grupo mixto que tenía 18 senadores, el Centro Democrático y Social que tenía 10, *Convergencia i Unió* con 11, o los nacionalistas vascos con 10.

En otro orden de ideas, es necesario destacar dos aspectos sobre esta primera renovación senatorial. La primera es que si se considera que los cuatro magistrados fueron designados en la sesión del 8 de febrero, se reparará en que fueron designados catorce días antes de que finalizaran los cargos de los magistrados, los cuales cesaban el día 22.

Conviene destacar este elemento, porque esta sería hasta el momento, la única ocasión en que el Senado procedería a efectuar una renovación cumpliendo, incluso con anticipación, el grupo de magistrados que le

corresponde. Los magistrados, serían posteriormente nombrados mediante los Reales Decretos 176 a 179/1989, todos de 21 de febrero y publicados en el BOE al día siguiente. El 27 de febrero hicieron la promesa o juramento del cargo y tomaron posesión del mismo en la habitual ceremonia que se lleva a cabo en la sede del Tribunal Constitucional.

El segundo aspecto a destacar es todavía más significativo. En efecto, no deja de llamar la atención en este procedimiento, el hecho de que por primera vez en la corta historia del Tribunal se haya elegido como magistrado constitucional a una persona que se desempeñaba como senador (y portavoz adjunto) de uno de los Grupos proponentes⁵⁹⁷. El ingreso de exparlamentarios en el Tribunal Constitucional es un tema muy interesante que genera posiciones encontradas y que no nos ocuparemos aquí, más que de delinear algunas de las posiciones del debate.

Por un lado, se encuentra el planteamiento que destaca esa vinculación política con el riesgo de proyectar cierta falta de independencia del magistrado, así sea aparente, frente a la sociedad y frente a los grupos políticos oponentes. Una situación en definitiva que trae el riesgo de aumentar lo que se ha venido a denominar la “politización” del Tribunal.

La otra perspectiva es la que no se perfilaría en contra de la inserción al TC de exparlamentarios, al observar en ello la aportación al colegio de una perspectiva política que puede resultar útil dada la peculiar función del Tribunal Constitucional. Una función que, como en su momento lo dijera Gerhard Leibholz en su famoso Informe, es propia de una auténtica corporación judicial, pero que a la vez “ampliamente incursiona en el ámbito de lo político”⁵⁹⁸. Por ello, no debe sorprender que algunas experiencias constitucionales contemplen incluso entre los requisitos de acceso a la magistratura algún tipo de

⁵⁹⁷ Tras la proclamación de los candidatos, el Presidente del Senado dio la enhorabuena a José Luis de los Mozos: “Estoy seguro de que actuará en el Tribunal Constitucional en la excelente forma en que ha actuado en esta Cámara”. Enseguida, el senador De los Mozos, que al parecer estuvo presente en la sesión, tomó la palabra para agradecer la designación a sus compañeros senadores, no sin cierto toque de cordialidad. SENADO: “Elección de cuatro miembros del Tribunal Constitucional que deben proponerse a S. M. el Rey por esta Cámara”, en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 108, III Legislatura, 8 de febrero de 1989, págs. 5140-5041.

⁵⁹⁸ El informe que Gerhard LEIBHOLZ presentó en 1952 al pleno del TCF, acerca de la cuestión del estatus de la institución, en la estructura estatal diseñada por la Ley Fundamental de Bonn de 1949, está traducido al castellano en “El estatuto del Tribunal Constitucional Federal en Alemania”, en FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa*, México, IIJ, UNAM, 2012, pág. 702.

experiencia política (como en Bélgica⁵⁹⁹), o que otros tribunales tan reconocidos como el alemán hayan contado entre sus magistrados personas ligadas fuertemente a partidos políticos, aunque con una reconocida e inmensa preparación profesional.

En cualquier caso, no cabe duda que el TC debe estar dotado de una especial sensibilidad política, pero esto no debe llevar a ver al Tribunal como un órgano partidista⁶⁰⁰. El detalle que pone de relieve esta elección, no es ya que haya respondido al reparto de plazas en cuotas, sino a la ausencia de vetos recíprocos. Esta forma de elegir, abrirá las puertas para que por esta vía puedan acceder al Tribunal perfiles que se caractericen por su cercanía al partido político, y no tanto por su elevado grado de profesionalidad, este sí, un supuesto que sería verdaderamente decepcionante.

6.2.2.- Sustitución de De los Mozos por Gabaldón López

En la sesión plenaria del Senado de 30 de junio de 1992 se informó que el 11 de octubre de 1991, la Presidencia del Tribunal Constitucional había comunicado la renuncia del señor José Luis de los Mozos como Magistrado del Tribunal Constitucional. En el día de la sesión, el Presidente del Senado, Juan José Laborda Martín, indicó que se habían presentado dos propuestas con una única candidatura, la de José Gabaldón López, quien se desempeñaba en la época como Magistrado del propio TC.

Se debe recordar que el señor Gabaldón ya había sido designado por el Congreso de los Diputados para sustituir en 1990 a Antonio Truyol, por lo que el periodo de cargo se limitó a completar el periodo que le restaba, y como no superaba los tres años en el cargo, era por tanto reelegible.

En esta ocasión, no se indicó qué Grupos parlamentarios habían sido los autores de las propuestas, pero por el turno de intervenciones que tuvieron los portavoces parlamentarios antes de la votación, se puede desprender que se

⁵⁹⁹ Art. 34.1.2, Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour Constitutionnelle: "Pour pouvoir être nommé juge de la Cour constitutionnelle, le candidat doit être âgé de quarante ans accomplis et satisfaire à l'une des conditions suivantes: 2° avoir été pendant cinq ans au moins, membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou d'un parlement de communauté ou de région".

⁶⁰⁰ Una preocupación compartida por FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: "El procedimiento de elección de magistrados constitucionales", *op. cit.*, pág. 179.

trató del Grupo popular y del Grupo socialista junto con CiU. Una vez realizado el conteo de los sufragios los resultados fueron los siguientes⁶⁰¹:

Candidato	Votación
José Gabaldón López	219

En blanco	2
-----------	---

Según el Presidente del Senado, de acuerdo a la composición de la Cámara, los tres quintos necesarios para operar la designación del magistrado equivalían a 153 votos. Como se pudo ver, la candidatura sobrepasó con mucho ese número, pero ello no debe llevarnos a pensar que el procedimiento fue producto de un pacífico consenso entre las dos fuerzas políticas, sino más bien, de una coincidencia de voluntades en un clima de significativa polarización entre éstas.

Para explicar lo anterior, es necesario traer a cuento el contexto. Recuérdese que la sustitución senatorial del Magistrado José Luis de los Mozos fue prácticamente contemporánea con la renovación de cuatro magistrados del Congreso (tuvieron cinco días de diferencia), de modo que las cinco plazas a designar se insertaron en un “paquete general” de negociación entre los partidos políticos.

Como ya se ha visto en capítulo anterior, esa negociación fue muy compleja y accidentada, al punto que las dos grandes formaciones políticas llevaron por separado a sus propios candidatos. Inicialmente en las dos fuerzas se había planteado la reelección del Magistrado Gabaldón en el “cupó” del Congreso, pero como lo reflejó la prensa, el Grupo socialista prefirió respaldar esa candidatura en el Senado, y por tanto, la candidatura de Gabaldón sólo obtuvo los votos del Grupo popular en el Congreso, no obteniendo la designación.

Esta táctica, o como lo dijo quien fuera Presidente del TC en el discurso de la renovación de 1992, estos “misterios de la estrategia negociadora”⁶⁰²,

⁶⁰¹ SENADO: “Elección de un miembro del Tribunal Constitucional, que debe proponerse a S. M. el Rey por esta Cámara”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 122, IV Legislatura, 30 de junio de 1992, págs. 6608-6613.

encontraron cierta explicación en los medios de comunicación, exponiendo que el PSOE había trasladado la candidatura de José Gabaldón al Senado previendo que ahí tendría garantizada su reelección con los votos que disponía el PP, quien lo venía presentando frecuentemente como candidato⁶⁰³. Ello permitiría al PSOE acordar en las designaciones del Congreso al candidato propuesto por la minoría catalana, del cual se sabía que no contaba con el respaldo del PP, el señor Carles Viver.

Los movimientos estratégicos reseñados, tuvieron su correlato en la sesión misma de la elección de José Gabaldón en el Senado, en la que como ya se dijo, los portavoces tuvieron ocasión de pasar a tribuna. Particularmente enardecidas fueron las participaciones de los portavoces popular y socialista, de las cuales, en lo que aquí importa, quizá convenga resaltar el duro reproche del portavoz popular a la manera en que el Grupo socialista había procedido a las designaciones no solo de magistrados del TC sino de otros órganos estatales mediante el sistema de cuotas, causando “el desprestigio de las instituciones”⁶⁰⁴. Un reproche, como se puede ver, en el que han incurrido y siguen incurriendo los dos partidos, sin excepción.

La airada intervención del portavoz popular quizá tenga también como presupuesto la delicada situación en la que fueron colocados sus candidatos propuestos en las dos Cámaras. El Grupo popular había presentado al Magistrado constitucional José Gabaldón en el Congreso y para el Senado se proyectaba al Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid Manuel Alonso Olea, pero una vez que el primero no consiguió los votos suficientes en el Congreso, y que el Grupo socialista lo propusiera en el Senado, el PP estuvo en la incómoda disyuntiva de optar por

⁶⁰² TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: *Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional*, Madrid, CEC, 1993, pág. 230.

⁶⁰³ En el comienzo de la cuarta legislatura del Senado (21-11-1989), el PSOE tuvo la mayoría simple con 124 senadores, mientras que el Grupo popular tuvo 86, CiU 10, el Grupo vasco 10, CDS 11 y el Grupo mixto 5 (total 246).

⁶⁰⁴ El portavoz del Grupo popular, el senador Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, entre otras cosas, expresó lo siguiente: “Nuestro Grupo no puede reparar –bien que nos gustaría- ya el daño que ustedes han hecho al Tribunal Constitucional. Fue –lo recordamos todos- primero al Consejo General del Poder Judicial, fue después al Tribunal de Cuentas, fue después al Ministerio Fiscal, es hoy al Tribunal Constitucional...”. Luego sigue diciendo: “La peor herencia de esta década socialista va a ser el desprestigio de las instituciones clave del régimen constitucional ante la sociedad española”. Véase SENADO: “Elección de un miembro del Tribunal Constitucional, que debe proponerse a S. M. el Rey por esta Cámara”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 122, IV Legislatura, 30 de junio de 1992, págs. 6610-6611.

uno de sus dos candidatos para el Senado: por un lado, la reelección del Magistrado José Gabaldón que contaría con los votos socialistas, y por otro lado, el candidato que original y públicamente tenían de Manuel Alonso Olea.

Finalmente el curso de los acontecimientos mostró que el Catedrático Manuel Alonso Olea presentó su renuncia a la candidatura para ser magistrado del Tribunal Constitucional a fin de no obstaculizar el procedimiento, y desahogar así al Grupo popular de la situación, presentando éste únicamente la candidatura de José Gabaldón en el Senado⁶⁰⁵.

Volviendo al análisis de las votaciones, debe considerarse que al elevado respaldo de la candidatura de José Gabaldón, hay que sumar el respaldo del Grupo parlamentario de *Convèrgencia i Unió*, que en palabras de su portavoz, comunicó en la sesión que también lo habían presentado como candidato. Los dos votos en blanco, serían de los senadores de Izquierda Unida-*Iniciativa per Catalunya*, por estimar que su candidato propuesto en el Congreso (y no apoyado), “cubría un papel más completo” en cuanto al perfil de imparcialidad en su actuación⁶⁰⁶.

Finalmente, el Magistrado José Gabaldón fue nombrado mediante el Real Decreto 820/1992, de 2 de julio, publicado en el BOE núm. 161, el día 6 del mismo mes. El 8 de julio, junto con el resto de magistrados designados por el Congreso, prometió o juró el cargo de magistrado en el Palacio de la Zarzuela y tomó posesión del mismo en una ceremonia llevada al efecto en el Tribunal Constitucional.

6.3.- La segunda renovación (1998)

6.3.1.- Designación de Casas Baamonde, Martín de Hijas, Garrido Falla y Jiménez Sánchez

⁶⁰⁵ Véase la intervención del portavoz del Grupo popular, en SENADO: “Elección de un miembro del Tribunal Constitucional, que debe proponerse a S. M. el Rey por esta Cámara”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 122, IV Legislatura, 30 de junio de 1992, pág. 6610. La prensa hizo eco de este acontecimiento: Díez, Anabel: “El PP vota hoy en el Senado al candidato socialista al Tribunal Constitucional”, en *El País*, 30 de junio de 1992.

⁶⁰⁶ SENADO: “Elección de un miembro del Tribunal Constitucional, que debe proponerse a S. M. el Rey por esta Cámara”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 122, IV Legislatura, 30 de junio de 1992, págs. 6008-6009.

El 22 de febrero de 1998 expiraba el plazo de nombramiento de los Magistrados Álvaro Rodríguez Bereijo, Fernando García-Mon⁶⁰⁷, Vicente Gimeno Sendra y José Gabaldón López, lo que motivaba la segunda renovación a cargo del Senado. La comunicación enviada por el Presidente del TC Álvaro Rodríguez Bereijo para instar el procedimiento, fue recibida en el Senado el 20 de octubre de 1997 y calificada al día siguiente⁶⁰⁸.

Pese a que la comunicación anterior se haya hecho con la anticipación debida, el Presidente del TC tuvo que verse en la necesidad de enviar otra al Senado casi un año después, pero esta vez para remitir el acuerdo adoptado por el Pleno del TC, “en el que se señala la gravedad de la situación creada por la no iniciación del procedimiento para la propuesta de designación de los nuevos Magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo plazo expiró el día 22 de febrero de 1998”⁶⁰⁹.

Además, el Presidente del TC tuvo otras ocasiones para recordar al Senado la falta de sustitución de los magistrados, por ejemplo en el acto de toma de posesión del cargo del Magistrado Pablo Cachón Villar⁶¹⁰, o bien en diversas declaraciones dadas a los medios de comunicación⁶¹¹.

La designación de los magistrados, no vendría sino hasta la sesión plenaria del 14 de diciembre de 1998. Una vez comenzada la sesión y, como es habitual, aprobadas las actas de las sesiones anteriores, el Presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero Valverde, informó al Pleno el acuerdo aprobado

⁶⁰⁷ Se tiene registro de que unos años antes, el 19 de septiembre de 1994 Fernando García-Mon presentó su renuncia como Magistrado constitucional, aunque después notificó al Presidente del Tribunal Constitucional su deseo de continuar en el cargo hasta la extinción legal del mandato. Lo anterior, según la comunicación remitida por el Tribunal Constitucional al Senado el 25 de abril de 1996, archivado en el expediente 725/000001, consultable en la sección de “iniciativas parlamentarias” de la VI Legislatura, en la página de internet del Senado.

⁶⁰⁸ Documento 1 del expediente 725/000003 abierto por el Senado, con motivo de la designación de magistrados a cargo de esta Cámara.

⁶⁰⁹ Documento 2 del expediente 725/000003 abierto por el Senado, para la renovación de los magistrados constitucionales. Esta comunicación fue recibida en el Senado el 27 de octubre de 1998 y calificada el 3 de noviembre del mismo año.

⁶¹⁰ Discurso publicado en RODRÍGUEZ BEREIJO, Álvaro: “Sobre la renovación del Tribunal Constitucional”, en *Tribunales de justicia: Revista Española de Derecho Procesal*, núm. 12, 1998, pág. 1204.

⁶¹¹ Véanse al respecto las notas de prensa siguientes: DE LA CUADRA, Bonifacio: “Bereijo insta al Senado a acelerar la renovación del Constitucional. Cuatro magistrados deben ser sustituidos”, en *El País*, 13 de mayo de 1998; EUROPA PRESS: “Bereijo insta a los partidos a renovar las vacantes del Constitucional”, en *El País*, 22 de junio de 1998; “El presidente del Constitucional insta al Senado a renovar el tribunal”, en *El País*, 9 de octubre de 1998; y LÁZARO MARTÍNEZ, Julio: “El Constitucional recuerda al Senado su ‘deber’ de renovar cuatro magistrados”, en *El País*, 28 de octubre de 1998.

el mismo día por la Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, para solicitar la habilitación de esa sesión para la elección de los cuatro magistrados constitucionales, aprobándose dicha propuesta por asentimiento.

En la sesión, el Presidente se limitó a recordar las reglas para emitir la votación y a leer el escrito de presentación de candidaturas elaborado conjuntamente por el Grupo parlamentario popular y el Grupo parlamentario socialista en el Senado⁶¹². Una vez efectuada la votación los resultados serían los siguientes⁶¹³:

Candidato	Votación
María Emilia Casas Baamonde	204
Guillermo Jiménez Sánchez	203
Fernando Garrido Falla	202
Vicente Conde Martín de Hijas	202
En blanco	16
Nulos	3

En esta sesión, los Grupos parlamentarios no harían uso de la tribuna para defender o exponer consideraciones en torno a la designación de los magistrados. Cabe apreciar, no obstante, que el escaso respaldo de las candidaturas y el largo tiempo que pasaría para que el Senado acordara la designación, dan algunas pistas de que las negociaciones no fueron sencillas.

En primer lugar, la prensa hizo eco de las vicisitudes que tuvieron entre el PP y PSOE para definir a los candidatos. Se decía que el PP, hecho con el

⁶¹² El escrito de propuesta vendría redactado en los siguientes términos: “Los portavoces de los grupos parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente propuesta de nombramiento para la elección por el Senado de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional de las siguientes personas que se señalan a continuación y que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, acompañándose el correspondiente currículum de cada uno”. SENADO: “Elección de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que deben proponerse a S. M. el Rey por esta Cámara”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 111, VI Legislatura, 14 de diciembre de 1998, pág. 5128.

⁶¹³ SENADO: “Elección de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que deben proponerse a S. M. el Rey por esta Cámara”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 111, VI Legislatura, 14 de diciembre de 1998, pág. 5128.

Gobierno y la mayoría absoluta en el Senado, pretendía designar tres de las cuatro plazas en juego, dejando una para el PSOE⁶¹⁴. En cambio, los socialistas se negaban a pactar si no lograban la igualdad de dos puestos para cada uno⁶¹⁵.

Como se puede observar, se trataba de un abierto reparto de cargos por cuotas, en el que varias veces se llegó a decir que el acuerdo estaba casi cerrado, para afirmar lo contrario al día siguiente en medio de acusaciones mutuas sobre la intransigencia del otro. El espectáculo fue duramente criticado por la prensa y al final el acuerdo arrojó a dos candidatos propuestos por el PP, uno por el PSOE y uno solamente consensuado.

El acuerdo finalmente fue hecho público por los negociadores el 5 de diciembre de 1998, un día antes de las celebraciones del vigésimo aniversario de la Constitución. De los propuestos, la candidatura del PSOE recayó en la Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, María Emilia Casas Baamonde, quien fue además la que más votos tuvo (204).

Luego de los propuestos por el PP, serían el Magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Vicente Conde Martín de Hijas y el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Garrido Falla, obteniendo ambos la misma cantidad de votos (202). Finalmente, el candidato consensuado entre PP y PSOE, fue el Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla, Guillermo Jiménez Sánchez (203 votos).

De nuevo el espíritu de la Constitución se veía mermado, pues la exigencia de los tres quintos exigida implicaba la necesidad de que los magistrados fueran apoyados por el consenso entre el mayor número posible de Grupos parlamentarios, una suerte de acuerdo constituyente según lo recordaba Pérez Royo en la época⁶¹⁶. Sin embargo, otra vez, operó el sistema de repartición de cuotas, monopolizado por las dos grandes fuerzas, dejando

⁶¹⁴ Se trataba de la VI Legislatura del Senado, en la cual en sus inicios (09-04-1996) el Grupo popular se conformaba con 129 senadores, mientras que el Grupo socialista se integró con 89, CiU 11, el Grupo mixto 9 y el Grupo nacionalista vasco 10 (total 248).

⁶¹⁵ Así recogido por el periodista AIZPEOLEA, Luis R.: "Almunia condiciona su reunión con Aznar a preacuerdos sobre la justicia y el Constitucional. La entrevista, prevista para el próximo 18 de junio, queda postergada indefinidamente", en *El País*, 30 de mayo de 1998.

⁶¹⁶ PÉREZ ROYO, Javier: "De mal en peor", en *El País*, 10 de noviembre de 1998.

fuera de la negociación a los Grupos minoritarios⁶¹⁷, quienes en protesta, emitieron los 16 votos en blanco y probablemente se deba también a ellos los tres votos anulados.

Otro aspecto que merece la pena ser destacado, es cómo el transcurso de las negociaciones ha puesto cada vez más en evidencia que el universo de actores en la negociación política se reduce a un número muy limitado de personas. En un primer momento, entre el Presidente de Gobierno, José María Aznar y el Secretario General del PSOE, Joaquín Almunia. Luego entre el Vicepresidente de Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos y el propio Joaquín Almunia. Finalmente, las negociaciones fueron retomadas por los portavoces en el Senado, Pío García Escudero del PP y Juan José Laborda del PSOE.

Tan reducido grupo de personas en quienes recaía el efectivo peso de la negociación, mereció justamente que llegara a objetarse desde la doctrina el señalamiento de un “déficit democrático”, respecto a la norma constitucional que exige que los magistrados sean nombrados por una mayoría de tres quintos de los senadores⁶¹⁸.

Finalmente los cuatro magistrados fueron nombrados mediante los Reales Decretos 2713 a 2716/1998, todos del 16 de diciembre, publicados al día siguiente en el BOE. El 22 de diciembre siguiente, juraron o prometieron el cargo ante el Rey y tomaron posesión del cargo en la sede del Tribunal Constitucional. Desde el 22 de febrero de 1998 en que finalizó el periodo de cargo de los magistrados salientes y el 16 de diciembre en que se publicó en el BOE el nombramiento de los sustitutos, pasarían prácticamente diez meses, un tiempo bastante largo de retraso en la renovación parcial del Tribunal, lo que no deja de resultar preocupante⁶¹⁹.

6.3.2.- Las reglas procedimentales previstas en la reforma al Reglamento del Senado de 2000

⁶¹⁷ Así también lo recogería la prensa: PRADERA, Javier: “Manoseos partidistas”, en *El País*, 23 de diciembre de 1998.

⁶¹⁸ AJA FERNÁNDEZ, Eliseo: “La elección de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 17 de junio de 1998.

⁶¹⁹ Véase al respecto, la referencia que se hace de este retraso en el discurso del Presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón, con motivo del XX Aniversario del Tribunal, recogido en el anexo V de la Memoria del año 2000 del Tribunal Constitucional.

Mientras que en el Congreso de los Diputados se elaboraba la Resolución de Presidencia de 25 de mayo de 2000, en el Senado se preparaba unos días después una modificación similar, sólo que en esta Cámara el instrumento normativo fue, desde un primer momento, el que resultaba más adecuado para regular este tipo de contenidos, como lo es el Reglamento del Senado.

El trámite parlamentario de la reforma reglamentaria no tuvo complicaciones y se llevó a cabo en un periodo muy corto de tiempo. La iniciativa fue presentada conjuntamente por todos los Grupos parlamentarios que integraron la VII Legislatura del Senado el 6 de junio de 2000⁶²⁰ y el Pleno del Senado el día 14 siguiente lo aprobó con el respaldo de 207 votos, de los 209 emitidos⁶²¹.

En el procedimiento parlamentario de la reforma reglamentaria, no se presentaron propuestas alternativas, enmiendas, ni votos particulares; de igual forma, ni en la sesión de la Comisión de Reglamento ni en las del Pleno, se registraron intervenciones de ningún senador. Así las cosas, el texto originalmente presentado, se mantuvo en los mismos términos hasta su promulgación⁶²².

La exposición de motivos de la reforma fijó con bastante claridad el objeto de la misma: establecer un procedimiento parlamentario que permita examinar las candidaturas presentadas en las designaciones de cargos públicos de la Cámara. Con ese fin, se creó la Comisión de Nombramientos y se contempló la posibilidad de realizar ante ésta la comparecencia de los candidatos.

El contenido de la reforma reglamentaria es prácticamente el mismo que el de la Resolución de Presidencia del Congreso (publicada tres semanas antes)⁶²³. No obstante, conviene destacar las modificaciones puntuales que

⁶²⁰ SENADO: "Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican el artículo 49.2 y el Título Noveno", en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie III A: proposiciones de ley del Senado, núm. 2 (a), VII Legislatura, 7 de junio de 2000, págs. 1-4.

⁶²¹ SENADO: "Dictamen de la Comisión de Reglamento en relación con la propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican el artículo 49.2 y el Título Noveno", en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 9, VII Legislatura, 14 de junio de 2000, pág. 305.

⁶²² La reforma fue publicada en el BOE núm. 145, de 17 de junio de 2000.

⁶²³ Por lo que remitimos al análisis que se hizo de la misma en el capítulo anterior, incluyendo por supuesto el estudio y organización de la comparecencia parlamentaria y de la Comisión de Nombramientos que, aunque la del Senado no tiene el título de "consultiva", su estructura y funcionamiento no difiere a la del Congreso.

esta reforma trajo consigo, respecto a la anterior regulación de esta materia en el Senado, según el Reglamento de 1982.

En términos generales se puede decir, que esta reforma al Reglamento del Senado (que databa de junio de 1982), se aprovechó también para mejorar algunas de sus disposiciones u homologarlas con las del Congreso de los Diputados.

En este sentido, considérese que la reforma abordó de forma más clara las reglas de balotaje para superar los casos donde no se obtuvieran las mayorías calificadas (art. 186, apartados 3, 4 y 5, RS). Asimismo, se contemplaron unas disposiciones que en este trabajo se echaron en falta, como era la previsión específica de una etapa donde los senadores pudieran intervenir en tribuna para emitir alguna consideración acerca del procedimiento selectivo, tal y como estaba previsto en el Reglamento del Congreso (204.2 RCD).

En esta línea, el art. 186.1 del RS previó una etapa de deliberación en el Pleno, que se articularía con base en la presentación de un informe que debía hacer al Pleno un miembro de la Comisión de Nombramientos. Esa intervención no podría ser superior a diez minutos, y tras ella, vendría la intervención “de los Portavoces de los Grupos parlamentarios que lo deseen, por tiempo máximo de diez minutos cada uno”.

Como puede verse, la disposición senatorial fue más allá de los cinco minutos dispuestos en el Reglamento del Congreso para este tipo de intervención (204.2 RCD), dejando por el contrario un plazo de diez minutos. El plazo, no deja de resultar corto si se quiere ver en esta facultad un ejercicio de valoración de la candidatura, pero el hecho de que haya sido aumentado el tiempo de la participación no deja de resultar un gesto positivo.

La reforma reglamentaria también modificó los órganos habilitados para la presentación de candidaturas, dejando atrás el criterio característico de las normas senatoriales de facultar para ello a grupos de senadores (primero de veinticinco, luego de diez), para homologarse con el Congreso y fijar como único órgano proponente al Grupo parlamentario. La restricción es evidente, pues se complica la facultad propositiva de los parlamentarios considerados desde el punto de vista individual, por ejemplo, para el caso en que senadores de diversos Grupos consigan articularse en torno a una propuesta diversa a la

negociada por las cúpulas partidarias. En lugar de ello, se ha favorecido la actuación del Grupo parlamentario.

Otra modificación importante ha sido la de facultar a la Mesa del Senado para acordar la apertura de un plazo de presentación de candidaturas. Una precisión, sin duda, más atinada para la formalización y ordenación del procedimiento, que supera la alusión que se tenía anteriormente de permitir la presentación de candidaturas “no más tarde del inicio de sesión en que se haya de efectuar la elección” (ex art. 184.2 RS). La formalización de un plazo no necesariamente ligado al inicio de la sesión, además era del todo necesario para el propósito que se buscaba con la reforma de introducir un procedimiento de verificación de candidaturas. Difícilmente podría plantearse una fase previa de examen de las candidaturas, cuando estas podían presentarse antes de que comenzara la sesión.

6.3.3.- Sustitución de Garrido Falla por Rodríguez-Zapata Pérez

Casi dos años y medio después de haber entrado en vigor la reforma del Reglamento senatorial que acaba de reseñarse, la misma tuvo ocasión de ponerse en marcha con motivo de la renuncia por motivos de salud, del Magistrado Fernando Garrido Falla. El 9 de diciembre de 2002 fue recibida en el Senado la comunicación mediante la cual la Presidencia del TC, informaba de la renuncia e instaba el comienzo del procedimiento selectivo de un nuevo magistrado⁶²⁴. Garrido Falla había sido designado por el Senado el 14 de diciembre de 1998 por lo que correspondía a la propia Cámara alta proceder a la designación del sustituto.

En cuanto a la presentación de candidaturas, según los términos del nuevo art. 184.2 del RS, la Mesa acordó la apertura de un plazo de presentación de candidaturas, mismo que sería ampliado, a solicitud del Grupo parlamentario popular en el Senado⁶²⁵. El 17 de diciembre de 2002 se registró

⁶²⁴ Así recogido en el expediente 725/000002, abierto por el Senado con motivo de la sustitución del Magistrado Garrido Falla. El cese de funciones del magistrado por renuncia del cargo fue declarado mediante el Real Decreto 1316/2002, de 9 de diciembre, publicado en el BOE núm. 295, del día siguiente.

⁶²⁵ El escrito de solicitud de ampliación del plazo fue registrado con el número dos del expediente 725/000002 que obra en el Senado. La solicitud fue recibida el 12 de diciembre de 2002 y calificada el posterior día 17.

en el Senado un escrito firmado por los Grupos parlamentarios socialista, popular, *Entesa Catalana de Progrés*, de CiU y de Coalición Canaria, en el que propusieron la candidatura única de Jorge Rodríguez-Zapata Pérez⁶²⁶.

Al día siguiente, cumpliendo con las nuevas disposiciones del Reglamento senatorial, la Comisión de Nombramientos verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos a la candidatura y en una sesión que duró veinte minutos, llevó a cabo la comparecencia del candidato, y acordó por unanimidad informar al Pleno sobre la idoneidad del mismo⁶²⁷. De inmediato, comenzó la sesión plenaria en cuyo punto “tercero bis” del orden día, se insertó la designación del magistrado. Los resultados de la votación fueron los siguientes⁶²⁸:

Candidato	Votación
Jorge Rodríguez-Zapata Pérez	198
En blanco	8
Nulos	2

En la propia sesión se indicó que la mayoría de tres quintos equivalía a 155 votos, de modo que el candidato superó holgadamente dicha mayoría con 43 votos de más. Se registraron también 8 votos en blanco y 2 nulos, que muy probablemente vinieron de algunos senadores de los Grupos que no respaldaron la candidatura, esto es, el Grupo mixto y el Grupo nacionalista vasco.

En la sesión plenaria no intervino ningún Grupo parlamentario, y de las preguntas que los portavoces realizaron en la comparecencia del candidato no se desprende cuál fue el Grupo parlamentario que propuso al Magistrado Rodríguez-Zapata Pérez. Quizá al menos pueda entenderse que no provino del

⁶²⁶ Documento 3 del expediente 725/000002 abierto por el Senado.

⁶²⁷ SENADO: “Comparecencia del candidato a Magistrado del Tribunal Constitucional don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisiones, núm. 401, VII Legislatura, 18 de diciembre de 2002, págs. 1-5. El breve informe de idoneidad elaborado por la Comisión de Nombramientos está publicado en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie I Boletín General, núm. 564, VII Legislatura, 20 de diciembre de 2002, pág. 1.

⁶²⁸ SENADO: “Propuesta para el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 120, VII Legislatura, 18 de diciembre de 2002, pág. 7431.

Grupo socialista, cuyo portavoz preguntó al compareciente, no sin cierta insidia, cómo había llegado a ser candidato⁶²⁹.

Los medios de comunicación social develarían la autoría de la propuesta. Al respecto, se informó que el nombre del candidato había sido propuesto por el PP y aceptado sin problemas por el PSOE y otros Grupos parlamentarios. Además se dio cuenta de que la negociación entre tales fuerzas políticas no había estado cargada de grandes dificultades⁶³⁰.

Parece que el perfil del propuesto cumplía el objetivo de los Grupos parlamentarios para nombrar como magistrado constitucional a una persona especializada en Derecho Constitucional como lo era el candidato, ya que se trataba de un Profesor titular de Teoría del Estado y Derecho Constitucional. El perfil contemplaba además experiencia en labores de Gobierno, universitarias y jurisdiccionales, pues respecto a esta última en la época se desempeñaba como Magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo⁶³¹.

El candidato fue nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional mediante Real Decreto 1372/2002, de 18 de diciembre, publicado en el BOE al día siguiente. Como se puede ver, los Grupos parlamentarios, con inusitada rapidez consiguieron acordar el nombramiento apenas diez días después de comunicada la renuncia, por motivos de salud, del Magistrado Garrido Falla.

6.4.- La tercera renovación (2007, efectuada en 2010)

La tercera renovación de magistrados constitucionales a cargo del Senado hubiera debido de efectuarse antes del 22 de febrero de 2007, fecha en que expiraban los cargos de los magistrados nombrados nueve años antes (22/02/98), sin embargo, no llegó sino hasta el 1º de diciembre de 2010. La causa de tan alargado retraso descansa en una serie bastante amplia de circunstancias problemáticas de las que aquí se dará cuenta. Las vicisitudes

⁶²⁹ Idem, pág. 4.

⁶³⁰ Véase, por ejemplo, la nota de la periodista Díez, Anabel: "Rodríguez-Zapata, candidato de consenso para cubrir una vacante en el Constitucional", en *El País*, 17 de diciembre de 2002.

⁶³¹ Así se desprende de las intervenciones de los portavoces del Grupo socialista, Juan José Laborda Martín, y Grupo popular, Esteban González Pons, en la comparecencia del candidato en la Comisión de Nombramientos del Senado. SENADO: "Comparecencia del candidato a Magistrado del Tribunal Constitucional don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez", en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisiones, núm. 401, VII Legislatura, 18 de diciembre de 2002, págs. 3-4.

están relacionadas con la participación autonómica en la designación senatorial de magistrados, introducida a la LOTC mediante la reforma de 2007, así como sus respectivas objeciones de inconstitucionalidad ante el TC.

Asimismo, deben tomarse en cuenta para entender el inusitado retraso, las elecciones generales de marzo de 2008, la puesta en marcha del nuevo procedimiento selectivo en el Senado y el clima de crispación política generado en torno a la resolución del recurso de inconstitucionalidad promovido en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Para abordar todas estas vicisitudes, partamos en primer lugar de las novedades introducidas a la LOTC en virtud de la LO 6/2007, de 24 de mayo.

6.4.1.- Las modificaciones procedimentales introducidas en la LO 6/2007, de 24 de mayo

El 25 de mayo de 2007 fue publicada en el BOE la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que modificó la LOTC⁶³². Esta reforma, vino como corolario de un debate que se venía teniendo acerca de la necesidad de una profunda reforma a la LOTC que afrontase de manera integral, las dificultades de funcionamiento que las más de dos décadas de experiencia del Tribunal habían puesto de manifiesto.

Para mencionar algunos antecedentes de esta reforma, considérese por ejemplo, la comisión que se creó en el Tribunal Constitucional en la Presidencia de Álvaro Rodríguez Bereijo (95-98) que elaboró un “Borrador de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional” (mayo de 1998)⁶³³, los trabajos realizados en ese sentido en la Presidencia de Pedro Cruz Villalón (98-01) y luego con María Emilia Casas Baamonde (04-10).

Asimismo, desde el “Pacto para la reforma de la Justicia”, acordado por el PP y PSOE en 2001, ya se contemplaba una reforma en esta materia. La reforma también fue incluida en el programa del Gobierno surgido de las elecciones generales de 14 de marzo de 2004 que dieron la victoria al PSOE, la cual se tradujo en algunos trabajos para la elaboración del Anteproyecto (Ministerio de Justicia, versión 25 de agosto de 2005), sobre el cual se

⁶³² Publicada en el BOE núm. 125, págs. 22541–22547.

⁶³³ Publicado junto con otros documentos relacionados en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 4, 1999, págs. 395-435.

emitieron los informes preceptivos correspondientes (entre ellos, del CGPJ y el Consejo Fiscal⁶³⁴). Finalmente, el Anteproyecto fue aprobado como Proyecto de Ley en el Consejo de Ministros del 11 de noviembre de 2005 y enviado a las Cortes Generales para su trámite legislativo⁶³⁵.

Esta no sería, en efecto, la primera reforma a la LOTC, pues ya se habían realizado anteriormente cinco modificaciones, pero a diferencia de las otras, de esta se podía decir que fue la primera reforma generalizada al principal instrumento normativo que disciplina la jurisdicción constitucional española. Así fue reconocido también en la propia exposición de motivos de la reforma, declarando en efecto, que las anteriores modificaciones “no habían acometido hasta el momento una reforma que afrontase de manera conjunta las dificultades de funcionamiento del Tribunal Constitucional”⁶³⁶.

La reforma incidió en un elevado número de aspectos del Tribunal que son de mucha trascendencia⁶³⁷, que no es posible dar cuenta exhaustiva de cada una de ellos en este espacio. Sin embargo, desde una perspectiva muy general, podrían abarcarse el mayor número de modificaciones articulándolas en torno a cuatro ejes⁶³⁸.

⁶³⁴ CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: “Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, 13 de octubre de 2005 (disponible en www.poderjudicial.es); CONSEJO FISCAL: “Propuesta de Informe del Consejo Fiscal sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LO 2/1979 de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, 24 de octubre de 2005 (Documento facilitado por el Servicio de Biblioteca de la Fiscalía General del Estado, tras solicitarlo por escrito).

⁶³⁵ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie a: proyectos de ley, núm. 60-1, VIII Legislatura, 25 de noviembre de 2005, págs. 1-11. El camino parlamentario de la LOTC pude verse en la siguiente página del Congreso:

www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW18&PIECE=IW18&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28TRIBUNAL+CONSTITUCIONAL%29.ALL.

⁶³⁶ Apartado II, de la exposición de motivos.

⁶³⁷ La Ley Orgánica 6/2007 ha afectado 32 artículos de la LOTC. Además hay que agregar las modificaciones a la Disposición adicional primera y las Disposiciones transitorias y finales de la propia Ley Orgánica 6/2007. Entre éstas últimas, en la Disposición final primera, se previó una nueva redacción al art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que amplió los supuestos de procedencia del incidente de nulidad de actuaciones en la jurisdicción ordinaria, vinculándolos a los casos de vulneración de un derecho fundamental, de los referidos en el art. 53.2 de la CE.

⁶³⁸ Además de los ejes que se mencionarán, pueden referirse las modificaciones que están relacionadas con el valor de la jurisprudencia del TC, sobre las medidas cautelares que puede adoptar; sobre la desconcentración y la habilitación de formaciones internas en el Tribunal, esto es, las “Secciones”, para reordenar y agilizar el ejercicio de la función jurisdiccional; se dio también cobertura legal a una serie de disposiciones del régimen del personal al servicio del

El primero y el que más apremiaba al Tribunal, era sin duda la reforma del recurso de amparo, debido al alarmante crecimiento del número de demandas que se presentaban, llegando al punto de ocupar casi todo el tiempo y los medios materiales y personales del Tribunal. Ello además, provocaba una preocupante lentitud en la resolución de los procesos constitucionales de los que conocía⁶³⁹.

En segundo término, se encuentran también las reformas relativas al reforzamiento de la posición institucional del TC (arts. 4 y 92). Se trató de una especie de “*blindaje*” que se recogió para evitar episodios de “fricción” que se habían presentado entre el TC y el Tribunal Supremo⁶⁴⁰.

Un tercer eje está relacionado con las modificaciones de otros procesos constitucionales. Tal fue el caso del escasamente utilizado “conflicto entre órganos constitucionales del Estado”⁶⁴¹ y la “cuestión de inconstitucionalidad”, entre cuyas modificaciones, merece ser especialmente subrayada la posibilidad que se ha dado a las partes en el proceso judicial de que puedan personarse ante el TC para presentar alegaciones en el procedimiento constitucional, una vez publicada la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad⁶⁴².

Finalmente podríamos destacar en un cuarto eje, las reformas que en este trabajo más nos interesan, como son las efectuadas en materia del procedimiento de designación de los magistrados constitucionales. La primera

TC, que habían estado resueltas provisionalmente a través de normativa reglamentaria, introduciendo a la vez, reformas a las mismas.

⁶³⁹ La modificación, como se sabe, recayó en los criterios de admisión del amparo. Esto es, frente al sistema que se tenía anteriormente de causas de inadmisión tasadas, ahora se trata de un sistema en el que el recurrente tiene la carga de “alegar y acreditar que el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitucional”, la cual deberá ser entendida por el Tribunal, de acuerdo a los siguientes criterios: atendiendo a “su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales” (50.1 b, LOTC).

⁶⁴⁰ Entre esos casos, se encuentra principalmente el de la Sentencia de la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo, de 23 de enero de 2004, que enjuició una resolución del TC de inadmisión de un amparo por no estar, según se argumentaba en la sentencia, fundada en Derecho, por lo que estimó que once magistrados del Tribunal habían incurrido en responsabilidad civil llegando a la insólita situación de condenarlos a indemnizar al demandante de amparo (caso Mazón).

⁶⁴¹ Se introdujo el plazo de un mes para plantear el conflicto ante el Tribunal, en el caso de que resultara frustrado el requerimiento al órgano correspondiente para que revoque la decisión objeto de la controversia.

⁶⁴² Ello, con el objetivo de adecuarse a la interpretación dada en la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 23 de junio de 1993 (caso Ruiz Mateos contra España), en la que se entendió que al no haber dado la oportunidad de intervenir al recurrente en el procedimiento constitucional, se había vulnerado el derecho a un juicio justo.

de ellas, aunque su incidencia primordial redundaría en la organización interna del Tribunal, tiene relación con la designación de magistrados, porque liga la renovación de la Presidencia y la Vicepresidencia del Tribunal a la fecha en que se produzcan las renovaciones parciales de los magistrados. Establece para ello, la prórroga automática del mandato de tales cargos, hasta que se produzca la designación grupal de los magistrados y la toma de posesión.

Artículo 16.3 de la LOTC:

“La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se hará por nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres. A partir de ese momento se producirá la elección del Presidente y Vicepresidente de acuerdo con lo previsto en el artículo 9. Si el mandato de tres años para el que fueron designados como Presidente y Vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos Magistrados”.

La segunda de las modificaciones consiste en la previsión del trámite de comparecencia parlamentaria de los candidatos a magistrados propuestos tanto por el Congreso como del Senado. Esta disposición, como ya lo hemos mencionado, no hace más que llevar a la LOTC la comparecencia parlamentaria que ya estaba prevista en las disposiciones normativas de las Cámaras: a través del Reglamento en el caso del Senado, y a través de las normas interpretativas de la Presidencia, en el caso del Congreso de los Diputados.

Artículo 16.2 de la LOTC:

“Los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado deberán comparecer previamente ante las correspondientes Comisiones en los términos que dispongan los respectivos Reglamentos”.

La tercera modificación y la más significativa para efectos de este apartado, es la participación de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas en las designaciones de magistrados constitucionales a cargo del Senado (sin que se haya dicho nada respecto a la intervención de las Asambleas de Ceuta y Melilla). Esta disposición, que vino a configurar el nuevo contenido del art. 16.1 de la LOTC, no dispuso de mayores detalles de esta nueva versión del procedimiento selectivo, sino que lo constriñó a los “términos que determine el Reglamento de la Cámara”. Veamos el literalmente el apartado modificado:

“Los Magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara”.

Cabe señalar que las tres referidas modificaciones no figuraban originalmente en el proyecto de reforma de la LOTC presentado por el Gobierno, sino que fueron introducidas en el trámite parlamentario, no sin cierta polémica y dudas de su constitucionalidad.

En efecto, dos de esos preceptos –la prórroga del mandato de la Presidencia y la participación autonómica en la designación senatorial de magistrados- no fueron respaldados por la segunda fuerza política del país, lo que fue muy señalado en la doctrina⁶⁴³. Esta fuerza política, los recurrió ante el Tribunal Constitucional y fueron resueltos mediante la STC 49/2008, de 9 de abril. Todo ello será analizado a fondo más adelante, en el capítulo VII que contiene el estudio de la participación autonómica en la designación de los magistrados constitucionales.

6.4.2.- Las reglas procedimentales previstas en la reforma del Reglamento del Senado de 2007

⁶⁴³ REQUEJO PAGÉS, Juan Luis: “Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo cuatrimestre de 2007”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 81, 2007, págs. 221-224; TORRES MURO, Ignacio: “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del Reglamento del Senado, puesta a prueba (SSTC 49/2008, de 9 de abril y 101/2008, de 24 de julio)”, en *Revista General de Derecho Constitucional*, núm. 6, 2008, pág. 1.

Dado que la reforma de la LOTC en materia de elección de magistrados a cargo del Senado dejaba su desarrollo en manos del Reglamento parlamentario, esta Cámara procedió a efectuar la correspondiente modificación.

La iniciativa fue presentada y respaldada por todos los Grupos parlamentarios de la VIII Legislatura del Senado, a excepción del Grupo parlamentario popular, segunda fuerza política en el país que se opuso durante todo el *iter* legislativo, al punto de recurrir también esta reforma ante el Tribunal Constitucional, quien la desestimó mediante la STC 101/2008, de 24 de julio. Más adelante se analizará la sentencia aludida, pero por ahora nos dedicaremos a estudiar el contenido de la reforma reglamentaria.

La reforma reglamentaria del Senado consistió en la adición de un séptimo apartado al artículo 184 en el que se concretó el régimen jurídico de la participación de las Asambleas autonómicas en el procedimiento de elección senatorial de los magistrados constitucionales. El apartado reglamentario en comento es el siguiente:

Artículo 184.7. del RS:

La elección por el Senado de los cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo nombramiento ha de proponerse al Rey, según lo previsto en el artículo 159 de la Constitución, seguirá el procedimiento previsto en este Capítulo con las siguientes especialidades:

a) El Presidente del Senado comunicará a los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas la apertura del plazo para la presentación de las candidaturas. Cada Asamblea Legislativa podrá, en ese plazo, presentar hasta dos candidatos, resultando aplicable lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo⁶⁴⁴.

⁶⁴⁴ Los apartados aludidos son los siguientes: “3. Las candidaturas deberán acreditar, de forma indubitada, que los candidatos cumplen los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes para desempeñar el cargo. Se presentarán acompañadas de una relación de los méritos profesionales y demás circunstancias que, en opinión del Grupo parlamentario, manifiesten la idoneidad del candidato para el puesto; 4. La Mesa podrá solicitar a la Comisión criterio acerca

b) La Comisión de Nombramientos elevará al Pleno de la Cámara una propuesta con tantos candidatos como puestos a cubrir, que deberán haber comparecido previamente en la Comisión. Si no se hubieran presentado en plazo candidaturas suficientes, la propuesta que se eleve al Pleno podrá incluir otros candidatos.

Como se puede observar, la reforma introduce varias novedades al procedimiento selectivo que son de la mayor importancia. En primer lugar, y una vez que el Presidente del TC ha enviado al Senado la comunicación para instar el procedimiento de renovación, se establece la facultad de que el Presidente del Senado “active” la primera parte del procedimiento selectivo, constituido ahora por una fase de propuesta a cargo de los Parlamentos autonómicos.

Para ello, la disposición reglamentaria prevé que el “Presidente del Senado comunicará a los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas la apertura del plazo para la presentación de las candidaturas” (184.7 a, RS). El plazo, como se puede ver, está aludido de forma general, por lo que se entiende que quedará a criterio del Presidente la fijación previa del mismo.

Cada Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de proponer en dicho plazo hasta dos candidatos, de modo que podrían presentarse un límite máximo de 34 candidaturas, en el supuesto de que las 17 Comunidades Autónomas enviaran sus respectivas propuestas⁶⁴⁵. Considérese que se ha hecho alusión al término máximo de 34 “candidaturas” y no de “candidatos”, debido a que los Parlamentos autonómicos podrían coincidir en las personas que llegaran a presentar y reducir con ello la lista de candidatos, una situación

del cumplimiento por el candidato o candidatos propuestos de los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes para desempeñar el cargo. Oída la Comisión, la Mesa decidirá sobre la admisión a trámite de la candidatura. En caso de inadmisión, se dará cuenta al Grupo parlamentario autor de la propuesta, que podrá presentar nuevo candidato en el plazo que al efecto establezca la Mesa del Senado”.

⁶⁴⁵ Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR planteó que se hubiera exigido al menos la presentación de un candidato por la mayoría y otro por la minoría mayoritaria, pues ello evitaría que la imagen de los propuestos apareciera –salvo en los casos de consenso– como los candidatos del partido mayoritario. “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, pág. 72.

por cierto, plenamente factible, según lo mostró la primera puesta en marcha de este procedimiento.

En esta fase de presentación autonómica de candidaturas, el Reglamento dice que serán aplicables los apartados 3 y 4 del propio artículo 184, en el que se regula el trámite de admisión de las candidaturas. Este trámite, como se recordará, por un lado implica la carga a los órganos proponentes de presentar la documentación que acredite que el candidato cumple con los requisitos de acceso al cargo y que es idóneo para el mismo (relación de méritos profesionales y demás circunstancias). Y por otro lado, la facultad de la Mesa para proveer el trámite de admisión de las candidaturas, pudiendo pedir criterio a la Comisión de Nombramientos. En el caso de inadmitir alguna candidatura, la Mesa emplazará al órgano proponente para que presente una nueva.

Posteriormente, y como ya lo disponían los preceptos reglamentarios introducidos en la reforma de 2000, la Mesa remitirá las candidaturas admitidas a la Comisión de Nombramientos del Senado a la que le corresponderá celebrar la comparecencia de los candidatos y examinar específicamente su idoneidad, a fin de elevar al Pleno “una propuesta con tantos candidatos como puestos a cubrir” (184.7 b, RS).

Finalmente, la reforma establece expresamente que si “no se hubieran presentado en plazo candidaturas suficientes, la propuesta que se eleve al Pleno podrá incluir otros candidatos”. En principio, la literalidad del precepto hace entender que la posibilidad de introducir “otros candidatos”, esto es, más allá de los presentados por las autonomías, sólo cabe en el supuesto en que no se hayan presentado un “número” suficiente de candidaturas, pero, como más adelante se verá, el TC ha interpretado este precepto de una forma más amplia, al punto de permitir nuevas candidaturas cuando las autonómicas no superen el juicio de idoneidad efectuado libremente por la Comisión de Nombramientos del Senado.

6.4.3.- Designación de Asúa Batarrita, Ortega Álvarez, Pérez de los Cobos Orihuel y Hernando Santiago

La tercera renovación grupal de magistrados constitucionales a cargo del Senado ha sido la designación parcial de magistrados más accidentada de

la historia constitucional del país. Las complicaciones han obedecido a muy diversos factores de los que no puede darse exhaustiva cuenta en este trabajo, pero todos tendrían un origen político común, como lo es la falta de consenso entre los dos principales partidos políticos para acordar decisiones estatales de trascendencia.

Los problemas políticos subyacentes han tenido diversas manifestaciones desde la perspectiva jurídico-constitucional y desde esa línea pasaremos a describir las vicisitudes por las que atravesó el procedimiento selectivo del Senado. El elevado número de incidencias, nos obligan a estructurar cronológicamente este tema en algunos apartados.

6.4.3.1.- La puesta en marcha del procedimiento

Poco después de haber modificado la LOTC, el día 17 de diciembre de 2007 finalizaban los periodos de cargo de la Presidenta del TC, María Emilia Casas Baamonde; del Vicepresidente del TC, Vicente Conde Martín de Hijas; y el de los Magistrados Guillermo Jiménez Sánchez y Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. Tal y como indica la LOTC, la Presidenta del TC envió la comunicación al Senado para instar el procedimiento selectivo, la cual fue recibida el 27 de julio de 2007 y calificada por la Mesa después del verano, el 4 de septiembre del mismo año⁶⁴⁶.

En los meses siguientes no se registra actividad parlamentaria tendente a la designación de los magistrados, pero sí a la ya comentada reforma del Reglamento del Senado para adaptarlo a la disposición de la LOTC que preveía la participación autonómica en el procedimiento. Así, el 21 de noviembre de 2007 el Pleno del Senado aprobó la reforma reglamentaria, y en esa misma fecha, la Mesa acordó la apertura de un plazo de presentación de candidaturas por las CC. AA. hasta el 15 de diciembre, a las 14 horas, que luego sería suspendido por la propia Mesa en su reunión de 4 de diciembre, a solicitud de diversos Parlamentos autonómicos en tal sentido.

⁶⁴⁶ Según se hizo constar en el expediente 725/000002, creado por el Senado para renovar los cargos que habían expirado por cumplimiento del periodo ordinario de cargo. El expediente puede verse en la sección de iniciativas de la página de Internet del Senado: www.senado.es.

Cabe mencionar que mientras dicho plazo se mantuvo vigente, muy pocas Asambleas parlamentarias atendieron a la comunicación para activar el procedimiento selectivo⁶⁴⁷. En algunas otras, los Grupos parlamentarios mayoritarios directamente habían pronunciado públicamente la negativa a efectuar las propuestas y tampoco se observaban avances en cuanto a la modificación del propio Reglamento del Parlamento autonómico para asimilar la nueva facultad propositiva⁶⁴⁸. El ambiente político, sin duda no era pacífico, y se mostraban ciertas resistencias a la modificación reglamentaria, sobre todo porque ya se tenía anunciada la promoción de un recurso de inconstitucionalidad contra la misma por parte del Grupo popular en el Senado.

El recurso fue finalmente planteado en el mes de enero de 2008, el cual sería desestimado mediante la STC 101/2008, de 24 de julio, publicada en el BOE el 19 de agosto⁶⁴⁹. Entre los meses que transcurrieron hasta la resolución del recurso, vinieron otros acontecimientos que coadyuvaron a mantener el procedimiento selectivo varado. Fue el caso de las campañas políticas y elecciones generales de marzo de 2008 y la posterior constitución de la IX Legislatura el 1º de abril.

El expediente de la renovación de magistrados sería trasladado a la nueva Legislatura (novena), al no resultar afectado por la caducidad prevista en la Disposición adicional primera del Reglamento del Senado⁶⁵⁰. El mismo sería calificado por la nueva Mesa constituida el 8 de abril y el 31 de julio la Presidencia de la Cámara comunicaría a las CC. AA. el levantamiento de la suspensión del plazo para la presentación de candidaturas y la fijación del término para el 29 de septiembre de 2008, a las 14 horas, que luego sería ampliado hasta las 20 horas, a solicitud del Parlamento de la Rioja⁶⁵¹.

⁶⁴⁷ Entre ellas, Canarias, Galicia, Navarra y Cataluña.

⁶⁴⁸ Véase al respecto la nota del periodista XIMÉNEZ DE SANDOVAL, Pablo: “El Senado no llegará a tiempo para elegir a los jueces del Constitucional. El PP boicotea la renovación del tribunal y el PSOE renuncia a dar la batalla”, en *El País*, 4 de diciembre de 2007.

⁶⁴⁹ BOE núm. 200 (suplemento), de 19 de agosto de 2008.

⁶⁵⁰ El asunto toma ahora el número de expediente 725/000001.

⁶⁵¹ La ampliación del horario de recepción de las candidaturas sería acordado en la reunión de la Mesa del Senado del día 23 de septiembre de 2008. Véanse los detalles de la tramitación parlamentaria en el apartado de antecedentes en, SECRETARÍA GENERAL DEL SENADO: “Informe sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Constitución, las leyes y el Reglamento del Senado por las candidaturas de magistrados del Tribunal Constitucional presentadas por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas”, en *Revista de las Cortes Generales*, núm. 82, 2011, págs. 468-469. La prensa también haría eco de la noticia: XIMÉNEZ DE SANDOVAL, Pablo; ALTOZANO, Manuel: “El Senado inicia la renovación del Constitucional. Los

En este plazo todas las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas enviaron sus candidatos, con las excepciones de los Parlamentos de las *Illes Balears*, que comunicó la declinación de la presentación de candidaturas debido a que los Grupos parlamentarios de la Cámara no presentaron “propuesta alguna al efecto”⁶⁵², y del Principado de Asturias, del que no llegó a recibirse escrito alguno. Concretamente, las candidaturas se comunicaron al Senado en los últimos días del plazo, es decir entre el 24 y 29 de septiembre de 2008⁶⁵³.

En total fueron presentadas treinta candidaturas, de las cuales veintitrés recayeron en personas distintas, pues varios Parlamentos autonómicos coincidieron en la presentación de candidatos⁶⁵⁴. Concretamente, los dos candidatos que fueron presentados en más de un Parlamento autonómico fueron, por un lado, quien había sido portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López López, que fue presentado por los Parlamentos autonómicos de Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Madrid. El otro candidato fue el ex Presidente del TS, Francisco José Hernando Santiago, que fue propuesto por los Parlamentos de Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

La presentación de los dos aludidos candidatos en varias Asambleas autonómicas no responde, desde luego a una mera coincidencia, sino a una clara estrategia del Partido Popular de promover a los dos candidatos que venía sosteniendo de forma más clara en las negociaciones “a nivel nacional”. Dicho respaldo fue proyectado en todas las Comunidades Autónomas en que tuvo la oportunidad de hacerlo, en unas con la contundencia que le daba la

Parlamentos autónomos tienen dos meses para elegir sus candidatos”, en *El País*, 1 de agosto de 2008.

⁶⁵² El Comunicado de la Presidencia del *Parlament de les Illes Balears* al Senado, de fecha 25 de septiembre de 2008, puede consultarse en el expediente 725/000001, en la sección de iniciativas en www.senado.es.

⁶⁵³ Los Parlamentos autonómicos celebraron las sesiones de designación de candidatos en las siguientes fechas: el 22 de septiembre de 2008 en Galicia; el 23 de septiembre en Madrid; el 24 de septiembre en Canarias, Castilla y León, Murcia, Cantabria, Andalucía y Comunidad Valenciana; el 25 de septiembre en Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra; el 26 de septiembre en Aragón, Cataluña y País Vasco; y el 29 de septiembre en La Rioja.

⁶⁵⁴ Las certificaciones de las candidaturas seleccionadas por los Parlamentos autonómicos enviadas al Senado, pueden consultarse en la siguiente página: www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/documentos/index.html?legis=9&id1=725&id2=000001. Por otro lado, los acuerdos plenarios de los Parlamentos autonómicos sobre la designación de las candidaturas fueron publicados en su correspondiente Boletín Oficial o Diario de Sesiones. Los datos de referencia de cada una de estas publicaciones se encuentran en el apartado de documentación en la parte final de este trabajo.

mayoría política que tenía, o en otras por el acuerdo con el resto de fuerzas políticas para definir una de las dos candidaturas.

Una conducta, ciertamente inspirada en el rechazo que siempre había mostrado a la participación autonómica en la designación senatorial de magistrados constitucionales, aunque bien es cierto que a la postre tergiversó en alguna medida el sentido de la reforma, consistente en dotar un espacio de participación en la designación a cargo de las autonomías.

Cuadro 8.- Propuestas autonómicas para el procedimiento senatorial de designación de magistrados

CC. AA.	PROPUESTA	PROPUESTA
ANDALUCÍA	Juan Carlos Campo Moreno/sustituido por Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala PSOE	María del Carmen Catalán Martínez IU
ARAGÓN	Francisco José Hernando Santiago PP	Jesús Delgado Echevarría PSOE y PAR
ASTURIAS	No propone	No propone
BALEARES	Declina a efectuar propuestas	Declina a efectuar propuestas
CANARIAS	Óscar Bosch Benítez PSOE	Óscar González González CC
CANTABRIA	Luis Martín Rebollo PP, PRC y PSOE	Enrique López López PP, PRC y PSOE
C.-LA MANCHA	Francisco José Hernando Santiago PP y PSOE	Luís Ignacio Ortega Álvarez PP y PSOE
C. Y LEÓN	Enrique López López PP	Marcos Sacristán Represa PSOE
CATALUÑA	Encarna Roca Trías PSC, ICV, ERC, CiU	Antoni Rovira PSC, ICV, ERC, CiU
C. VALENCIANA	Francisco José Hernando Santiago PP	Manuel Ortells Ramos PSOE
EXTREMADURA	Ángel Juanes Peces PSOE	Enrique López López PP
GALICIA	Josefa Otero Seivane PSdeG	Nemesio Barxa Álvarez BNG
LA RIOJA	Enrique López López PP	Ignacio Espinosa Casares PSOE
MADRID	Enrique López López PP	Fernando Valdés Dal-Re PSOE
MURCIA	Francisco José Hernando Santiago PP y PSOE	Nicolás Maurandi Gillén PP y PSOE
NAVARRA	Manuel Pulido Quecedo UPN-CDN	José Francisco Cobo Sáenz PSN
PAÍS VASCO	José Luis Aurtenetxe Goiriena PNV	Adela Asúa Batarrita PSE

Una vez agotado el plazo, la Mesa del Senado debía decidir acerca de la calificación y admisión a trámite de las candidaturas, pero antes de ello y dado el volumen de documentación presentada, en la reunión del 30 de septiembre de 2008, se acordó dejar pendiente esa fase y solicitar a la Secretaría General del Senado la elaboración de un informe sobre el cumplimiento de los requisitos de acceso a la magistratura constitucional exigidos por la Constitución, las leyes y el Reglamento del Senado.

6.4.3.2.- El Informe y las aclaraciones de la Mesa del Senado

El Informe fue elaborado el 13 de octubre de 2008, y en el mismo se da cuenta, en lo que interesa, que las candidaturas presentadas por las Asambleas autonómicas ciertamente acompañan los escritos de presentación con el *curriculum vitae* del candidato, pero con ello no alcanza a deducirse “con claridad y con la precisión suficiente, en la mayor parte de los casos, qué periodos son de ejercicio activo de la función pública o de ejercicio profesional efectivo de la abogacía y cuáles no lo son”, por lo que el Informe deja abierta la posibilidad para que la Mesa del Senado solicite a los Parlamentos autonómicos la respectiva aclaración⁶⁵⁵.

Lo anterior, constituye un dato importante, a efecto de establecer si los candidatos cumplen con el requisito de contar “con más de quince años de ejercicio profesional” o “en activo en la respectiva función” (159.2 CE, 18 LOTC). Y es que en dicho Informe, comienza a perfilarse el criterio de que, para tener por acreditado los quince años de ejercicio profesional o en la respectiva función, sólo pueden computarse los años “efectivos” de trabajo o de desempeño “activo” en la función, excluyendo por tanto, los periodos que pudieran haber transcurrido en situaciones administrativas como la excedencia o los servicios especiales.

La Mesa del Senado, acogió el planteamiento del Informe de la Secretaría y el 21 de octubre de 2008 acordó solicitar a determinados

⁶⁵⁵ Véase SECRETARÍA GENERAL DEL SENADO: “Informe sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Constitución, las leyes y el Reglamento del Senado por las candidaturas de magistrados del Tribunal Constitucional presentadas por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas”, en *Revista de las Cortes Generales*, núm. 82, 2011, págs. 468-469.

Parlamentos que aclarasen los años de ejercicio activo o en función efectiva de los candidatos propuestos en los que no había datos suficientes, abriendo para ello un plazo de presentación hasta las 14 horas del 31 de octubre de 2008. Los Parlamentos requeridos atendieron la solicitud y remitieron dentro del plazo las certificaciones correspondientes⁶⁵⁶.

En efecto, los Parlamentos autonómicos que propusieron la candidatura de Enrique López fueron coincidentes en proponer un certificado emitido por el Jefe del Servicio de Personal Judicial del CGPJ, en el cual se hacían constar los diversos servicios prestados por el candidato en la carrera judicial y el periodo de tiempo en que cada uno fue desempeñado⁶⁵⁷. La Asamblea de Madrid presentó también la documentación relativa a los años de servicio de su segunda candidatura, la del Catedrático Fernando Valdés Dal-Re⁶⁵⁸.

Por otro lado, el Parlamento de Andalucía, que propuso la candidatura de Juan Carlos Campo Moreno, presentó un certificado que contenía los periodos en que el candidato ejerció la docencia en un centro educativo⁶⁵⁹. Finalmente, el Parlamento Vasco, acompañó diversa documentación de José Luis Aurtenetxe Goiriena, en la que se acredita, entre otros servicios, los prestados a las Juntas Generales de Biskaia y al Gobierno Vasco⁶⁶⁰.

⁶⁵⁶ En general, se solicitaron a los Parlamentos autonómicos proponentes las aclaraciones de los años de servicio activo de las candidaturas de Enrique López (Asambleas de Madrid y Extremadura, Cortes de Castilla y León, y Parlamentos de Cantabria y La Rioja), Fernando Valdés Dal-Re (Asamblea de Madrid), Juan Carlos Campo Moreno (Parlamento de Andalucía) y José Luis Aurtenetxe Goiriena (Parlamento Vasco). Todos atendieron la comunicación, remitiendo las certificaciones respectivas entre los días 28 y 31 de octubre de 2008. Véase al respecto, los documentos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, del expediente 725/000001, abierto por el Senado con motivo del procedimiento selectivo, los cuales están disponibles en, www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/documentos/index.html?legis=9&id1=725&id2=000001.

⁶⁵⁷ En dicho documento se certifican: cinco meses de “funcionario de prácticas” (16-01-89 al 22-06-89); un año y cinco días en la carrera judicial de Juez (15-07-89 al 29-07-90); siete años y nueve meses de Magistrado (30-07-90 al 04-05-98); tres años y seis meses de Letrado del CGPJ “servicios especiales” (05-05-98 al 06-11-01); seis años y diez meses de vocal del CGPJ “servicios especiales” (07-11-01 al 23-09-08), y finalmente, un día de Magistrado de la Audiencia Nacional (24-09-08).

⁶⁵⁸ Además de la documentación informativa de los años de servicio del candidato, presentaron también el *curriculum vitae*. En el ejercicio profesional destacan sus veintiún años y siete meses de Catedrático de Universidad.

⁶⁵⁹ El certificado, emitido por la secretaria de la sección de Cádiz del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, respaldaba que el candidato había sido profesor en las siguientes materias: Derecho Penal, parte especial, (seis años); y Derecho Penitenciario (un año).

⁶⁶⁰ Concretamente, se acompañó 1) la certificación de los servicios prestados como asesor jurídico de la entidad de previsión voluntaria “Lagun-Aro EPSV” (un año, cuatro meses); 2) la certificación de los servicios prestados en calidad de letrado y letrado mayor (diez años, ocho meses) en las Juntas Generales de Biskaia; 3) la certificación de los servicios prestados en

El 4 de noviembre de 2008 la Mesa acordó incorporar al expediente la nueva documentación aportada, quedando pendiente la decisión respecto a la admisión a trámite de las candidaturas. Desde esta fecha, no se registra otra actuación del procedimiento selectivo en el Senado sino hasta un año y medio después, esto es, en la reunión de la Junta de Portavoces de 25 de mayo de 2010.

La razón central que mantenía este *impasse* en el procedimiento parlamentario, no era otra que el clima de irreconciliables posiciones que mantenían las dos fuerzas políticas mayoritarias que no conseguían el acuerdo para designar a los magistrados constitucionales. Por una parte, el PP sostenía a los dos candidatos que había conseguido presentar en las CC. AA., sin embargo, en un primer momento ninguno de estos era respaldado por el PSOE⁶⁶¹.

Una de las razones difundidas en la prensa para explicar la falta de respaldo socialista a los propuestos por el PP, estaba relacionada con el historial laboral de tales candidatos en su paso por el CGPJ, uno como Presidente y el otro como vocal y portavoz. Los negociadores del PSOE sostenían que durante su paso por la judicatura, se habían caracterizado por mostrar una actitud combativa sobre una serie de leyes promovidas y de especial interés para el Gobierno socialista⁶⁶². Tales pronunciamientos eran tan contundentes y sistemáticos, que consiguieron la desafección del PSOE hacia éstos, considerándolos muy alejados de su línea ideológica⁶⁶³.

distintos departamentos del Gobierno Vasco (once años, siete meses), acompañando además copia de los Decretos de nombramiento publicados en el Boletín Oficial del País Vasco; y finalmente se presentó el historial de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social (veintinueve años, cinco meses cotizados).

⁶⁶¹ Puede darse una idea de la intensidad del desacuerdo político entre los dos grandes partidos políticos, en SENADO: "Pregunta de D^a. María Dolores de Cospedal García, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la razón por la que ha habido un cambio de criterio del Gobierno en relación con la renovación del Tribunal Constitucional", en *Diario de Sesiones del Senado*, IX Legislatura, núm. 76, sesión del Pleno, 27 de abril de 2010, págs. 4030-4031. La prensa, por otro lado, recogió también las irreconciliables posturas políticas: GAREA BARAGAÑO, Fernando; JIMÉNEZ DE SANDOVAL, Pablo: "De Cospedal: No hay alternativas a Hernando y López", en *El País*, 9 de octubre de 2008; AIZPEOLEA, Luis R.; CUÉ, Carlos: "Zapatero pedirá a Rajoy que reconsidere sus candidatos al Tribunal Constitucional", en *El País*, 14 de octubre de 2008.

⁶⁶² Por ejemplo, contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña o con la denominada "Ley del matrimonio homosexual".

⁶⁶³ Véanse, en este sentido, las notas de los periodistas XIMÉNEZ DE SANDOVAL, Pablo; GAREA, Fernando: "El Senado planea descartar en el primer filtro a López y Hernando. Socialistas y nacionalistas rechazan a los dos candidatos del PP al Constitucional", en *El País*, 26 de

Se sabía, por otro lado, que en el plano formal del procedimiento, tanto la mayoría de la Mesa como de la Junta de Portavoces del Senado, habían solicitado al Presidente del mismo la paralización del procedimiento, hasta que no se tuviese un acuerdo que garantizase la votación necesaria para elegir a los magistrados⁶⁶⁴.

Otro aspecto que parecía explicar el bloqueo –al menos de hecho- al procedimiento selectivo por todo ese tiempo, era la pendiente resolución que se mantenía del recurso de inconstitucionalidad promovido en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Al respecto, resultan esclarecedoras las declaraciones que se llegaron a hacer tanto de una y otra parte de los dos grandes partidos políticos.

Por un lado, están las palabras del portavoz del Grupo popular en el Senado en la Comisión de Justicia, Agustín Conde, en la comparecencia del Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cuando finalizó su intervención diciendo: “Y que sigamos poniéndonos de acuerdo. Y ahora nos toca lo del Tribunal Constitucional, a ver si también en esto damos un buen paso y cuando los señores magistrados del Tribunal Constitucional hayan dictado la sentencia en el Estatuto de Cataluña podemos iniciar las conversaciones para renovar a los cuatro magistrados que le toca a esta Cámara”⁶⁶⁵.

De igual forma, en las crónicas periodísticas llegó a reflejarse cómo el Gobierno, y los líderes del PSOE y PP se pronunciaban sutilmente en contra de la renovación, para permitir la resolución del recurso contra el EAC, dado el avanzado estado en que se encontraban las deliberaciones entre los magistrados que integraban el Tribunal. Se trataba pues, de un dato

septiembre de 2008, y “Alonso: Hay que elegir juristas imparciales”, en *El País*, 9 de octubre de 2008.

⁶⁶⁴ Así lo reconoció el Presidente del Senado, Javier Rojo, en una entrevista dada al periodista Pablo XIMÉNEZ DE SANDOVAL, en *El País*, en la edición del 2 de junio de 2010. La prensa por otro lado, hacía constantemente alusión a dicho criterio adoptado por la Mesa del Senado y su Presidente. En este sentido, GAREA BARAGANO, Fernando; XIMÉNEZ DE SANDOVAL, Pablo: “El PSOE y el PP aparcen sin fecha la renovación del Constitucional”, en *El País*, 17 de noviembre de 2008. De los mismos periodistas, el “PP y PSOE dejan pudrir el Constitucional”, en *El País*, 16 de marzo de 2009.

⁶⁶⁵ SENADO: “Comparecencia de D. Mariano Fernández Bermejo, Ministro de Justicia”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión de Justicia, IX Legislatura, núm. 49, 25 de septiembre de 2008, pág. 29. Según la prensa, esta declaración también lo haría la misma persona en un encuentro organizado por el “Club Siglo XXI”. Véase CUÉ, Carlos E.: “El PP presume de mantener al Constitucional prorrogado”, en *El País*, 29 de abril de 2010.

ciertamente razonable en tanto que la designación de cuatro nuevos magistrados suponía retrasar aún más el dictado de la sentencia, en lo que tales magistrados estudiaban y deliberaban el asunto⁶⁶⁶.

El recurso contra el EAC fue finalmente resuelto el 28 de junio de 2010⁶⁶⁷ y todo parece indicar, que en efecto, al pronunciarse esta sentencia, se reanudó de forma efectiva el procedimiento selectivo. Si bien, durante todo ese tiempo no faltaron pronunciamientos muy críticos para impulsar la consecución del procedimiento⁶⁶⁸, e incluso unos meses antes de dictar la sentencia contra el EAC ya se habían registrado otros intentos desde diversos frentes parlamentarios, que tuvieron cierto éxito, en cuanto a que fueron presionando la renovación según se venía venir la esperada sentencia.

Valga a este respecto traer a cuento la Resolución del Parlamento de Cataluña de 29 de abril de 2010 en la que se instaba a los órganos proponentes a la “urgente e inexcusable necesidad” de desbloquear el procedimiento de designación en el Senado “pendiente desde hace más de dos años”⁶⁶⁹. Esta iniciativa, que venía impulsada por el propio *President* de la *Generalitat de Catalunya*, José Montilla, desencadenó una serie de actos de respaldo⁶⁷⁰, que incluso lo llevarían a entrevistarse con el Presidente del

⁶⁶⁶ Véase en este sentido, en cuanto a las posturas del PP: CuÉ, Carlos E.: “El PP mantiene sus nombres y ‘no impedirá’ el bloqueo”, en *El País*, 25 de mayo de 2010. En esta nota, se recoge la declaración de María Dolores de Cospedal, Secretaria General del PP, sosteniendo que su partido no quiere que un tribunal renovado sentencie la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña porque “hay un principio clave en democracia, que es el del juez predeterminado por ley. No se puede hacer tribunales *ad hoc*”.

⁶⁶⁷ STC 31/2010, de 28 de junio (BOE núm. 172, de 16 de julio de 2010).

⁶⁶⁸ Al respecto, PÉREZ ROYO, Javier: “Operación cuasi constituyente”, en *El País*, 22 de noviembre de 2008.

⁶⁶⁹ El punto dos de dicha Resolución establece que “*El Parlament de Catalunya s’adreça als presidents del Congrés dels Diputats i del Senat per tal que traslladin als grups parlamentaris d’ambdues cambres la urgent i inexcusable necessitat de designar el magistrat o magistrada que correspon designar al Congrés dels Diputats després de la vacant produïda per la defunció d’un dels membres del Tribunal Constitucional elegit per aquesta cambra legislativa i de desbloquejar el procediment de designació dels quatre magistrats que ha de designar el Senat, de conformitat amb l’article 159.1 de la Constitució espanyola i 17.1 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, que es troba pendent des de fa més de dos anys*”. PARLAMENTO DE CATALUÑA: “Resolució 678/VIII del Parlament de Catalunya sobre la constitucionalitat de l’Estatut i la renovació del Tribunal Constitucional”, en *Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya*, VIII Legislatura, núm. 693, 3 de maig de 2010, pág. 8. En la Resolución también se insta a proponer acciones para conseguir que el TC se declare incompetente para dictar la sentencia del *Estatut* y se promueve además una reforma a la LOTC que no permita a los magistrados con el mandato caducado permanecer en el cargo.

⁶⁷⁰ Podría en este sentido, recordarse la interpelación efectuada por el senador Jordi Guilot Miravet, del Grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés, el 11 de mayo de 2010, mediante la cual compelm al Gobierno a explicar sus actuaciones para “favorecer la consecución de un acuerdo que permita la renovación del Tribunal Constitucional”. SENADO:

Senado⁶⁷¹ y después a comparecer –a petición propia- en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la misma Cámara, en la que pediría “a este Senado que reactive con carácter de urgencia el procedimiento de designación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde a esta Cámara y que está en suspenso, a pesar de que las comunidades autónomas hayan presentado sus propuestas”⁶⁷².

Las actuaciones anteriores, sin embargo, vienen enmarcadas dentro de una estrategia más general que puede verse al menos desde dos puntos de vista: como una medida para defender públicamente la constitucionalidad del *Estatut*, y desde otra perspectiva, tales actuaciones podían verse como una medida para presionar o erosionar la legitimidad del Tribunal Constitucional, ante la eminente resolución del recurso, del que se esperaba declarase la inconstitucionalidad de disposiciones importantes del mismo, según las deliberaciones que lamentablemente se habían filtrado a la prensa.

En cualquier caso, la reanudación del procedimiento selectivo finalmente se vino a plantear en la reunión de la Junta de Portavoces del Senado el 25 de mayo de 2010. Quizá, los principales Grupos políticos accedieron a impulsar este tema, a raíz de la petición formulada en ese sentido por el Presidente de la Generalidad de Cataluña, quien un día antes había comparecido en la Comisión General de las CC. AA. del Senado.

6.4.3.3.- La reanudación del procedimiento: la Mesa inadmite dos candidaturas

“Interpelación de D. Jordi Guilot Miravet, del Grupo Parlamentario *Entesa Catalana de Progrés*, sobre las actuaciones que, en el ámbito de sus competencias, va a impulsar el Gobierno para favorecer la consecución de un acuerdo que permita la renovación del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, IX Legislatura, núm. 78, sesión del Pleno, 11 de mayo de 2010, págs. 4152-4157. Asimismo, puede verse el respaldo que se hizo a la Resolución del Parlamento catalán, por parte del Pleno del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona), en su sesión celebrada el día 17 de mayo de 2010, enviando al Senado la respectiva certificación. Véase documento 1, presentado el 1º de junio de 2010, dentro del expediente 810/000791, disponible en, www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=9&id=42870.

⁶⁷¹ Los medios de comunicación refirieron esta reunión: XIMÉNEZ DE SANDOVAL, Pablo: “Montilla exige a Rojo que inicie la renovación del Constitucional”, en *El País*, 11 de mayo de 2010.

⁶⁷² SENADO: “Debate para valorar los efectos para las Comunidades Autónomas de la situación actual de las propuestas de candidaturas a magistrados del Tribunal Constitucional presentadas por las respectivas asambleas legislativas”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión General de las Comunidades Autónomas, IX Legislatura, núm. 350, 24 de mayo de 2010, pág. 9.

Como se decía, desde que el Senado recibió los documentos aclaratorios requeridos a algunos Parlamentos autonómicos (4 de noviembre de 2008), no se había registrado otra actuación del procedimiento selectivo, sino hasta la reunión de la Junta de Portavoces de 25 de mayo de 2010. En esta reunión se encargó a la Secretaria General para que, previo a la reanudación del procedimiento selectivo, elaborara un Informe sobre si procedía dirigirse a los Parlamentos autonómicos “para que ratifiquen o mantengan los candidatos propuestos”, debido “al tiempo transcurrido desde que realizaron las propuestas (29 de septiembre de 2008); y en el caso concreto de los Parlamento Vasco y de Galicia que se informara sobre si procede que realicen una nueva propuesta por haber cambiado su composición tras la celebración de elecciones”⁶⁷³.

En dicho Informe, se concluyó que no debía efectuarse ninguna consulta a los Parlamentos autonómicos debido a que la misma no tenía base constitucional ni legal en el procedimiento selectivo. Se sostuvo, que el procedimiento se ha venido desarrollando con sujeción plena a la normativa prevista, por lo que apartarse del mismo “puede suponer incurrir en arbitrariedad”. Determinó además, que las propuestas presentadas por los Parlamentos autonómicos gozan “de presunción de validez y pueden considerarse firmes”. Finalmente se argumentó que la presentación de nuevos candidatos en supuestos distintos a los previstos legalmente, “podrían vulnerar el derecho fundamental de los candidatos sustituidos al acceso a los cargos públicos regulado en el artículo 23.2 CE”.

Una vez entregado el Informe, la Mesa del Senado reactivó el procedimiento proveyendo el trámite de admisión de las candidaturas, que había quedado pendiente desde la fecha de terminación del plazo de recepción de las mismas (el 29 de septiembre de 2008). Para ello la Mesa emitió el

⁶⁷³ El Informe tiene origen en una iniciativa del portavoz del Grupo popular, la cual fue respaldada por el resto de portavoces. En efecto en dicha reunión, el portavoz del Grupo parlamentario socialista, propuso la reactivación del procedimiento selectivo de magistrados, en atención a las demandas presentadas un día antes por el Presidente de la Generalidad de Cataluña. Al hilo de lo anterior, el portavoz del Grupo parlamentario popular planteó la conveniencia de que, antes de retomar el procedimiento, la Secretaría General lleve a cabo el Informe aludido. Véase, SECRETARÍA GENERAL DEL SENADO: “Informe sobre si procede que el Senado se dirija a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en relación con las propuestas de candidatos de magistrados del Tribunal Constitucional al reanudarse el proceso de elección”, 31 de mayo de 2010.

Acuerdo de 1 de junio de 2010, en el cual se admitieron a trámite y remitieron a la Comisión de Nombramientos 21 propuestas de candidatos, pero por otro lado, se dio una acción sin precedente alguno en materia de elección de magistrados del TC. Se trata de la inadmisión de dos candidaturas, por no cumplir el requisito de contar con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función, previsto en los artículos 159.2 de la CE y 18 de la LOTC.

El Acuerdo de 1º de junio no lo dice, pero la base de esa decisión, descansa en el criterio de la Mesa del Senado por el cual determina que en los periodos en que los candidatos se hallaron en situación de “servicios especiales” no se podía computar como de ejercicio profesional efectivo o en activo en la respectiva función, siguiendo en este sentido, la directiva del Informe de la Secretaría General del Senado de 13 de octubre de 2008. Con este criterio, una de las candidaturas inadmitidas fue la del Parlamento de Andalucía en la persona de Juan Carlos Campo Moreno. La otra candidatura que no superó el trámite de admisión fue la presentada por las Asambleas de Madrid y Extremadura, Cortes de Castilla y León, y Parlamentos de Cantabria y La Rioja, que recayeron en Enrique López López, éste último como se ha mencionado, de marcado y generalizado respaldo del Partido Popular.

En la propia resolución de la Mesa del Senado, se acordó abrir el plazo de hasta el 29 de junio de 2010 para que los Parlamentos autonómicos afectados por las candidaturas inadmitidas presentaran nuevas propuestas. En la mayoría de los casos, las reacciones a este acuerdo senatorial no fueron las de su pacífico cumplimiento, pues de los seis Parlamentos autonómicos afectados, la mitad ratificó la candidatura inadmitida y dos no presentaron una nueva, además de que el Grupo parlamentario popular en el Senado recurrió el referido Acuerdo.

En efecto, primeramente la Mesa del Parlamento de Cantabria acordó “no efectuar nueva propuesta”⁶⁷⁴, luego la Mesa de la Asamblea de Extremadura no sustituyó la candidatura⁶⁷⁵, después el 21 de junio, las Mesas

⁶⁷⁴ La Mesa del Parlamento de Cantabria en su sesión del 11 de junio de 2010 acordó “no efectuar nueva propuesta”. La comunicación de esta decisión al Senado, figura en el documento 27 del expediente 725/000001, abierto en el Senado.

⁶⁷⁵ En su lugar remitió al Senado el acuerdo aprobado por mayoría, de no aceptar la ratificación del candidato que había hecho el Grupo parlamentario popular en la propia Cámara

del Parlamento de La Rioja, de las Cortes de Castilla y León, y de la Asamblea de Madrid, ratificaron la candidatura de Enrique López⁶⁷⁶, a la vez que el Grupo parlamentario popular en el Senado presentaba un recurso contra el Acuerdo de la Mesa del Senado de 1º de junio de 2010⁶⁷⁷.

El único Parlamento que atendió los términos del Acuerdo senatorial de 1º de junio fue el de Andalucía, que en la sesión plenaria del 23 de junio de 2010, sustituyó la candidatura inadmitida de Juan Carlos Campo con la designación de un nuevo candidato en la persona de Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala⁶⁷⁸.

Entre las mencionadas ratificaciones autonómicas de la candidatura de Enrique López, destacan las efectuadas por el Parlamento de La Rioja y la Asamblea de Madrid, porque sostuvieron respectivamente, que el Acuerdo de la Mesa del Senado de 1º de junio de 2010 no estaba motivado. El Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid (aprobado por mayoría: 4 a favor, 2 en contra y 1 abstención), incluso fue más allá, pues solicitó directamente a la Mesa del Senado una “reconsideración” de su Acuerdo.

En efecto, en su escrito de reconsideración, la Asamblea de Madrid entendió que dicho Acuerdo presentaba al menos tres vulneraciones a sus derechos. La primera es la ya mencionada falta de motivación, la segunda es la ausencia de un trámite de alegaciones y la tercera es que el contenido de tal Acuerdo suponía una quiebra de su normativa en materia de presentación de candidatos al Senado para la magistratura constitucional⁶⁷⁹.

autonómica (este fue el Grupo que la propuso y al que se le instó a cambiarla). ASAMBLEA DE EXTREMADURA: “Designación de candidato para la elección, por el Senado, de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones de la Asamblea de Extremadura*, núm. 74-P, VII Legislatura, sesión plenaria núm. 64, 17 de junio de 2010, págs. 3575-3576.

⁶⁷⁶ Respectivamente, documentos 33, 32 y 30, del expediente 725/000001, en el Senado.

⁶⁷⁷ Una vez dictado el Acuerdo de la Mesa de 1 de junio de 2010, el Grupo popular en el Senado lo recurrió para que se modificase un error en la cita del fundamento legal señalado en el mismo (se había citado el artículo 158.2 de la CE, cuando debió referirse al 159.2). La corrección del error fue efectuada el 8 de junio de 2010.

⁶⁷⁸ PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: “Designación de D. Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala como magistrado del Tribunal Constitucional, a proponer por el Senado”, en *Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía*, núm. 88, VIII Legislatura, sesión plenaria núm. 49, 23 de junio de 2010, págs. 8-9.

⁶⁷⁹ El argumento de la “quiebra” de la normatividad autonómica resulta ciertamente discutible. Esta objeción tiene sustento en el carácter grupal de la candidatura con que la Resolución de Presidencia de 11 de septiembre de 2008 ha confeccionado la misma. Es decir, que la candidatura está formada por dos nombres, presentados conjuntamente y votados en bloque. De ahí, la Mesa de la Asamblea de Madrid entiende que “las consecuencias correspondientes” de la inadmisión de una de las propuestas “deberán aplicarse a todos los nombres en ella incluidos, ya que de lo contrario se estarán alterando los acuerdos internos que han llevado a la

Como ya se decía, también el Grupo parlamentario popular en el Senado recurrió el acuerdo de la Mesa de 1º de junio. Del escrito presentado, se pueden destacar al menos dos pretensiones básicas. La primera es la anulación del Acuerdo de no admitir la candidatura de Enrique López, solicitando que se dicte otro en el que se declare apto, al encontrarse suficientemente acreditado los años de servicio profesional exigidos. En este sentido, en el recurso se sostiene que la función de “servicios especiales” desarrollada por el candidato como letrado y vocal del CGPJ, en el ámbito de la función judicial, deben contabilizarse como servicio activo, “al existir una plena homologación legal” entre ambas. Se estima a este respecto, que en la función de gobierno judicial “no se ejerce jurisdicción, pero se lleva a cabo una función totalmente asimilable a la misma”.

El otro aspecto que se reclama en el recurso, tiene cierto sentido contradictorio con la objeción anterior, ya que luego de pedir la admisión de la candidatura, luego se solicita iniciar un nuevo proceso de presentación de propuestas a los Parlamentos autonómicos. Según los recurrentes, el nuevo procedimiento debía venir, porque el anterior ya no respondía a las circunstancias actuales⁶⁸⁰. En el caso, al haber estado el mismo durante dos años bloqueado, el hecho de que hayan cambiado las mayorías políticas de un par de Asambleas autonómicas, debiera dar lugar a una nueva proposición de candidaturas, porque el sujeto no es el mismo y la voluntad podría ser otra. Además, el resto de CC. AA. debía estar en posibilidad de “actualizar” sus propuestas, porque el paso del tiempo puede haber modificado la voluntad de las Cámaras.

Para abonar a la posibilidad de que tal procedimiento pudiera reiniciarse, los recurrentes sostenían que “la naturaleza profundamente política” del procedimiento, no debía permitir la aplicación formal y “reglamentista” de sus normas como si de un procedimiento administrativo se tratara. El carácter político del procedimiento, debía hacer por tanto, que este resultase más “susceptible de adecuación a las circunstancias del proceso”.

aprobación de la lista concreta”. Este argumento no puede compartirse, debido a que no puede afectarse al candidato que ha superado el trámite de admisión, por el hecho de que haya provenido de una lista cerrada. Lo contrario sería una abierta violación al derecho de participación a la función pública en condiciones de igualdad.

⁶⁸⁰ Conclusión número siete del recurso presentado por el Grupo parlamentario popular en el Senado. El escrito está disponible en el expediente 725/000001, documento 28, en el Senado.

Para estar en condiciones de proveer el mencionado recurso y continuar con el procedimiento, la Mesa del Senado encargó otro informe a la Secretaría General de la Cámara, el cual fue entregado el 29 de junio de 2010⁶⁸¹. Este Informe subraya igualmente el carácter contradictorio de las dos pretensiones del recurso (conclusión primera). En cuanto a la legitimación para promover el mismo, entiende que esta debiera residir en los Parlamentos autonómicos que formularon las propuestas, y no en el Grupo parlamentario popular del Senado, que fue el que presentó el recurso. Si acaso, el Informe plantea la posibilidad de reconocer cierta legitimidad al Grupo parlamentario, siempre que se entienda en un sentido muy amplio el concepto de “afectación directa”, a fin de comprender en este, el interés legítimo e indirecto del que pudiera ser titular el Grupo parlamentario (conclusión tercera).

El Informe sostiene la conformidad a Derecho del Acuerdo senatorial impugnado, al margen de interpretaciones políticas y sin lesionar derechos subjetivos (conclusión cuarta). Remarca que el procedimiento es de tipo jurídico y vinculante para todos los sujetos que intervienen en el mismo, “de carácter no disponible en función de circunstancias políticas o del mero transcurso del tiempo” (conclusión sexta). Por otro lado, afirma que la Mesa ha fundamentado jurídicamente de forma suficiente la inadmisión de la candidatura, “al no reunir más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función, dado que la situación de servicios especiales, según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no es asimilable en modo alguno a la situación de servicio activo, y que resulta evidente que la función que desarrollan el Consejo General del Poder Judicial y sus Vocales no es asimilable, en absoluto, a la función jurisdiccional ejercida en exclusiva por jueces y magistrados” (conclusión quinta).

La Mesa del Senado, en su reunión del 6 de julio de 2010, adoptó por mayoría de sus miembros (cuatro votos a tres), desestimar tanto la solicitud de reconsideración formulada por la Mesa de la Asamblea de Madrid como el recurso presentado por el Grupo parlamentario popular en el Senado; ratificar

⁶⁸¹ SECRETARÍA GENERAL DE LA CÁMARA: “Informe de la Secretaría General de la Cámara sobre el recurso presentado por el Grupo parlamentario popular en el Senado contra el Acuerdo de la Mesa del Senado de 1º de junio de 2010 (número de registro de entrada 42598) sobre admisión a trámite de las propuestas de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional” (disponible en www.aelpa.org).

su Acuerdo de 1º de junio, y por tanto, no admitir a trámite la ratificación que habían presentado los Parlamentos autonómicos de la candidatura de Enrique López, y dar por concluido el trámite de proposición de nuevo candidato por haber transcurrido el plazo otorgado para ello.

La Mesa razonaba su determinación, sosteniendo en línea con los Informes, que no se habían reunido más de “quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función, dado que la situación de servicios especiales, según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no es asimilable a la situación de servicio activo, ni la función que desarrollan el Consejo General del Poder Judicial y sus Vocales es asimilable a la función jurisdiccional de Jueces y Magistrados”⁶⁸².

En este Acuerdo además, se admitió la nueva candidatura presentada por el Parlamento de Andalucía, por lo que se remitieron en total de veintidós candidaturas a la Comisión de Nombramientos del Senado, sin embargo, sólo veinte prosiguieron el procedimiento, porque dos candidatos renunciaron⁶⁸³.

6.4.3.4.- El trámite en la Comisión de Nombramientos

Una vez que la Diputación Permanente habilitara el mes de julio para la tramitación del procedimiento⁶⁸⁴, este prosiguió con la comparecencia de los veinte candidatos en la Comisión de Nombramientos el día 15 de julio, en una sesión que duró casi seis horas⁶⁸⁵. Luego la Comisión de Nombramientos debía formular una propuesta al Pleno con “tantos candidatos como puestos a cubrir”, sin embargo no existía un acuerdo entre los dos grandes partidos para

⁶⁸² Este acuerdo de la Mesa del Senado no está publicado, pero pueden verse las referencias que del mismo se hacen en los antecedentes de los AATC 192/2010 y 193/2010, ambos de 1 de diciembre (antecedente dos, inciso “d” y “f”, respectivamente).

⁶⁸³ José Luis Aurtenetxe Goiriena comunicó que no iba a asistir a la comparecencia parlamentaria, mientras que Marcos Sacristán Represa hizo llegar su renuncia al haber sido designado Rector de la Universidad de Valladolid. Documento 37 del expediente 725/000001 del Senado.

⁶⁸⁴ SENADO: “Habilitación del mes de julio de 2010 para la tramitación, en Comisión y en Pleno, del procedimiento de designación por el Senado de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Diputación Permanente, IX Legislatura, núm. 3, 7 de julio de 2010, pág. 2.

⁶⁸⁵ SENADO: “Comparecencia de los candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión de Nombramientos, núm. 392, IX Legislatura, 15 de julio de 2010, págs.1-45.

ello⁶⁸⁶, razón por la cual la Comisión aplazó hasta en tres ocasiones la sesión para tal efecto⁶⁸⁷.

En el plano político, las negociaciones tuvieron que llegar hasta los interlocutores de más alto nivel de cada uno de los partidos para conseguir un acuerdo⁶⁸⁸. En este sentido, los medios de comunicación se hicieron eco de que el Presidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición Mariano Rajoy Brey, habían acordado promover la candidatura de Enrique López en las designaciones del Congreso que estaban muy próximas y en su lugar presentar en el Senado la candidatura de Francisco Pérez de los Cobos Orihuel⁶⁸⁹.

En el plano procedimental y una vez conseguido el acuerdo político, la Comisión de Nombramientos pudo reunirse el 28 de septiembre de 2010, y en una sesión de veinte minutos se desarrolló lo siguiente. Primero se informó que la propuesta acordada entre el Grupo popular y el socialista abarcaba solamente a tres personas, faltando en consecuencia una plaza. Por lo tanto, se acordó someter a votación la propuesta de los tres candidatos y fijar como plazo al 1º de octubre para que los Grupos parlamentarios presentaran una nueva propuesta⁶⁹⁰. Como puede verse, esta nueva propuesta era posible según la interpretación que se había dado en la STC 101/2008, de 24 de julio,

⁶⁸⁶ Según trascendió en algunos medios de comunicación, el bloqueo de las negociaciones obedeció a una estrategia promovida por un sector del PP para posponer la renovación del Tribunal Constitucional, debido a que la integración personal del mismo le daba mayores posibilidades a que la resolución del recurso de inconstitucionalidad promovido en contra de la denominada “ley del aborto”, fuera más cercana a los postulados del partido. Si bien, el PP también justificaba su negativa a la negociación con el argumento de que los candidatos debían venir exclusivamente de los Parlamentos autonómicos. En este sentido, GAREA BARAGANO, Fernando: “Artimaña del PP para anular la ley”, en *El País*, 3 de septiembre de 2013; GAREA BARAGANO, Fernando: “El PP admite que impedirá en el Senado la renovación del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 4 de septiembre de 2013.

⁶⁸⁷ La sesión estaba originalmente agendada para el 7 de septiembre, sin embargo se aplazó al 15, al 22 y finalmente al 28 de septiembre de 2010. Documentos 38, 39, 40 y 41, del expediente 725/000001 del Senado.

⁶⁸⁸ Habían sido varios los interlocutores entre las dos principales fuerzas políticas. Entre ellos, los portavoces del PP y PSOE en el Senado (María del Carmen Silva Rego y Pío García-Escudero Márquez); el Ministro de Justicia (Francisco Caamaño Domínguez) y el Coordinador de Justicia y Libertades Públicas del Comité Ejecutivo Nacional del PP (Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde).

⁶⁸⁹ Así lo reflejan los siguientes periodistas: GAREA BARAGANO, Fernando: “La renovación del TC, en manos de Rajoy y Zapatero”, en *El País*, 14 de septiembre de 2010; GAREA BARAGANO, Fernando; CUÉ, Carlos E.: “PSOE y PP pactan que López pueda ir al Constitucional por el Congreso”, en *El País*, 30 de septiembre de 2010.

⁶⁹⁰ SENADO: “Formular propuesta al Pleno de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión de Nombramientos, núm. 402, IX Legislatura, 28 de septiembre de 2010, págs.1-4.

para el caso en que no se completaran las candidaturas de entre las presentadas por los Parlamentos autonómicos.

En esta misma sesión, el portavoz del Grupo parlamentario popular avanzó que presentarían la candidatura de Francisco Pérez de los Cobos, lo que vino a constatar en sede formal el acuerdo político adoptado⁶⁹¹. La candidatura, fue en efecto presentada el 29 de septiembre de 2010⁶⁹² y no se presentó otra más. Fue admitida por la Mesa el 5 de octubre y al día siguiente, en una sesión de treinta y cinco minutos, la Comisión de Nombramientos efectuó la comparecencia del candidato, lo votó y lo estimó idóneo⁶⁹³.

Con ello, la Comisión de Nombramientos finalmente tendría completa la lista de candidatos a proponer al Pleno para la magistratura constitucional, por lo que procedió en el mismo día a elaborar el correspondiente Informe de idoneidad de los cuatro candidatos, sin apenas esgrimir la suficiente motivación⁶⁹⁴. El procedimiento, sin embargo, quedaría otra vez paralizado cerca de dos meses, para atender un par de circunstancias prácticas que el excesivo retraso había provocado y por los recursos de amparo promovidos por unos Parlamentos autonómicos.

La primera circunstancia práctica era la alteración del modelo de renovación parcial del TC. En efecto, el excesivo retraso con el que venía la designación senatorial de magistrados afectaría al diseño constitucional de renovación parcial del TC, por el cual cada tres años corresponde designar cuatro magistrados a distintos órganos del Estado. La designación de los

⁶⁹¹ *Idem*, pág. 4.

⁶⁹² Documento 42, del expediente 725/000001 del Senado.

⁶⁹³ SENADO: "Comparecencia del candidato a Magistrado del Tribunal Constitucional, D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel; Formular propuesta al Pleno de candidato a Magistrado del Tribunal Constitucional", en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión de Nombramientos, núm. 408, IX Legislatura, 6 de octubre de 2010, págs. 1-6.

⁶⁹⁴ Se trata en cambio, de una suerte de comunicación estereotipada, que se limita a dar noticia de los candidatos que se han acordado para proponer al Pleno. La transcripción es esclarecedora: "Los días 28 de septiembre y 6 de octubre de 2010 la Comisión de Nombramientos se ha reunido para sustanciar la comparecencia de los candidatos propuestos para cubrir los cuatro puestos de Magistrados del Tribunal Constitucional que, de acuerdo con el artículo 159.1 de la Constitución y 16.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, debe elegir el Senado. La Comisión, en las sesiones indicadas, ha acordado, según lo previsto en el artículo 184.7 b) del Reglamento del Senado, elevar al Pleno de la Cámara la siguiente propuesta de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional: D.ª Adela Asúa Batarrita, D. Francisco José Hernando Santiago, D. Luis Ignacio Ortega Álvarez, D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel. Palacio del Senado, 6 de octubre de 2010". SENADO: "Informe emitido por la Comisión de Nombramientos sobre los candidatos propuestos para Magistrados del Tribunal Constitucional", en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 529, serie I, Boletín general, IX Legislatura, 11 de octubre de 2010, pág. 1.

magistrados del Senado con el retraso de los tres años, conseguiría que siguiendo la cadencia ordinaria de renovaciones (2013 CGPJ y Gobierno; 2016 Senado; 2019 Congreso, y así sucesivamente), el Senado no podría renovar el turno que le corresponde por que los magistrados no tendrían el cargo caducado (llevarían seis de los nueve años), de modo que las designaciones tendrían que empatarse con las del Congreso hasta 2019.

La solución práctica que se dio a tal situación fue la de hacer que los magistrados designados por el Senado fueran nombrados para un periodo de cargo de seis años, para conseguir que las próximas renovaciones senatoriales fueran en 2016, restaurando así el sistema de renovación escalonado. Lo hicieron a través de una reforma a la LOTC que estableció con carácter general que se restaría del periodo ordinario del cargo, el tiempo de retraso en la designación del magistrado. Como se puede ver, quizá la reforma haya sido una medida útil para superar la situación, sin embargo, su constitucionalidad e idoneidad resulta a mi modo de ver muy cuestionada. Se volverá sobre este tema más adelante.

La segunda circunstancia que se presentaba era el práctico empalme de dos ocasiones para renovar la Presidencia y la Vicepresidencia del TC. Lo anterior era así, porque la LOTC ligaba la renovación de dichas autoridades a la designación parcial de magistrados. Si los nombramientos del Senado se operaban en ese momento (primera quincena de octubre de 2010), se estaría en el supuesto de una designación de las autoridades del TC de tipo provisional o por lo menos de muy poca duración, debido a que en el mes siguiente debían efectuarse las designaciones por el turno del Congreso, provocando en consecuencia, otra renovación presidencial. De ahí que se optara por mantener suspendida la designación senatorial para acompañarla a la del Congreso y así proceder a una única designación en la Presidencia del TC. Más adelante, los acontecimientos políticos mostrarían que este objetivo no se conseguiría, puesto que las designaciones del Congreso también se retrasaron.

En cuanto a los recursos de amparo, los mismos fueron promovidos por el Parlamento de la Rioja y la Asamblea de la Comunidad de Madrid, el 4 y 11 de octubre respectivamente, contra los Acuerdos de la Mesa del Senado de 1º de junio de 2010, por el que no se admitió a trámite la propuesta de Enrique

López y el de 6 de julio de 2010, por el que no se admitió la ratificación de dicha candidatura. El 1º de diciembre de 2010 los recursos no fueron admitidos a trámite mediante los AATC 192/2010 y 193/2010, por estimar que sus promotores carecían de legitimación para interponerlos⁶⁹⁵. Justo en esa fecha, y después de tantas vicisitudes, se introduciría en el último punto del orden del día de la sesión plenaria del Senado la votación definitiva de los magistrados.

En el terreno de los recursos de amparo promovidos por los Parlamentos autonómicos, los argumentos en su escrito de demanda, radicaban en la vulneración del derecho de acceso al cargo público en condiciones de igualdad. El Pleno del Tribunal Constitucional por su parte, sostuvo que la Asamblea Legislativa carecía tanto de la titularidad como del interés legítimo respecto al derecho fundamental supuestamente vulnerado.

La titularidad de tal derecho -sostiene el TC- corresponde individualmente a cada Diputado, y aunque se ha llegado a reconocer capacidad procesal a entidades que representan los intereses de éstos (por ejemplo, el Grupo parlamentario), en el caso y para efectos de procedencia del amparo, la Asamblea no puede subsumirse en esta categoría. La Asamblea cuenta con competencias y facultades públicas, pero no tiene conferida la representación institucional de los Diputados que forman la Cámara en el ejercicio de su cargo representativo⁶⁹⁶.

6.4.3.5.- La designación de los magistrados por el Pleno

En la sesión, el Presidente del Senado, presentó la propuesta elevada por la Comisión de Nombramientos, indicó las reglas de votación, aclarando – como no suele ser común- cómo se entenderán los votos en blanco, los nulos y alguna instrucción importante acerca de los votos válidos⁶⁹⁷.

En este sentido, expresó que serían votos nulos los “emitidos en papeletas que contengan nombres no incluidos en las propuestas de la Comisión de Nombramientos o comentarios que no vengan a cuento”. Serán

⁶⁹⁵ Un comentario de los mismos en SANZ PÉREZ, Ángel Luis: “El Parlamento sin derechos. ¿Una nueva forma de indefensión?”, en *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 1, 2011 (en línea en el portal Thomson-Aranzadi).

⁶⁹⁶ AATC 192/2010 y 193/2010, ambos de 1º de diciembre, localizables en el buscador de jurisprudencia del portal del Internet del Tribunal Constitucional, www.tribunalconstitucional.es.

⁶⁹⁷ SENADO: “Propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 103, IX Legislatura, 1 de diciembre de 2010, pág. 5634.

votos en blanco aquéllos donde no se ponga ningún nombre en la papeleta o los que la tachen toda. En cuanto a los votos válidos, indicó que lo serían aquéllos emitidos en papeletas que contengan un número inferior de nombres al número de puesto a cubrir.

Una vez realizadas tales indicaciones, se llamó a los senadores a votar resultando finalmente elegidos los cuatro magistrados del TC, obteniendo los siguientes resultados:

Candidato (a)	Votación
Adela Asúa Batarrita	226
Luis Ignacio Ortega Álvarez	223
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel	221
Francisco José Hernando Santiago	204
En blanco	14
Nulos	5

Como se puede observar, los cuatro candidatos designados obtuvieron sobradamente la mayoría exigida por la normativa de los tres quintos, traducida en el caso en 158 votos, según lo declaró el propio Presidente en la sesión. Los Grupos parlamentarios que respaldaron las candidaturas fueron el Grupo popular y el socialista, fundamentalmente, pero también el Grupo mixto y de forma significativa el de los nacionalistas vascos, que regularmente suelen votar en blanco o no votar como medio de protesta. Todos estos Grupos parlamentarios sumaban conjuntamente en la IX Legislatura 240 votos, lo que explica las altas cuotas de votación recibidas por los candidatos.

Las cuatro candidaturas se repartieron por mitad entre el Grupo socialista y el popular. El primero apoyó a la candidata presentada por el Parlamento del País Vasco, a Adela Asúa Batarrita, quien se desempeñaba como Catedrática de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, y al candidato presentado por el Parlamento de Castilla-La Mancha, Luis Ignacio Ortega Álvarez, Catedrático de Derecho Administrativo de la propia Universidad autonómica. El Grupo popular como ya se dijo, sostuvo la candidatura de

Francisco José Hernando Santiago, propuesto por los Parlamentos autonómicos de Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia, quien se había desempeñado como Presidente del TS y del CGPJ (2001-2009). La otra candidatura promovida por el Grupo popular fue la de Francisco Pérez de los Cobos, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid.

Entre los candidatos designados, puede verse que una de las candidaturas tuvo entre 17 y 22 votos menos respecto a los obtenidos por los tres restantes. Lo más probable es que esa falta de respaldo proviniera de senadores del Grupo socialista, el cual venía mostrando cierta desafección a dicha candidatura. Los catorce votos en blanco serían del Grupo parlamentario de *Entesa Catalana de Progrés* y los cinco votos nulos del Grupo de CiU, pues así lo habían anunciado sus respectivos portavoces en las sesiones de la Comisión de Nombramientos, pues en la sesión plenaria, ningún portavoz subió a la tribuna para explicar el voto.

En efecto, en la Comisión de Nombramientos, el portavoz del Grupo parlamentario de *Entesa Catalana de Progrés* había justificado su abstención diciendo que quería dejar “una puerta abierta” para seguir con las negociaciones que se estaban realizando respecto a otros nombramientos con el Gobierno catalán (en especial con el nombramiento del Congreso), dejando a salvo la posibilidad de presentar en las subsiguientes fases del procedimiento selectivo algún candidato⁶⁹⁸.

Por otro lado, el portavoz del Grupo parlamentario catalán de *Convergència i Unió* había explicado la votación en contra por parte de su Grupo, básicamente por no haberse elegido como magistrado a uno de los candidatos propuestos por el Parlamento de Cataluña⁶⁹⁹. En unos términos más generales, no dejaron de lamentar el hecho de que se haya perdido el objeto de la reforma a la LOTC, que era la participación de los Parlamentos autonómicos en la designación de magistrados del TC. Una propuesta de la

⁶⁹⁸ Senador Bonet i Revés. SENADO: “Formular propuesta al Pleno de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión de Nombramientos, núm. 402, IX Legislatura, 28 de septiembre de 2010, págs. 2-3.

⁶⁹⁹ Idem, pág. 3 (senador Vilajoana i Rovira).

que su propio Grupo había sido autor y que ahora había quedado en cierta forma desdibujada⁷⁰⁰.

El 7 de diciembre el TC, en ejercicio de la competencia prevista en los arts. 2.1.g) y 10.1.i) de la LOTC, declaró el cumplimiento de los requisitos exigidos para la magistratura constitucional de los cuatro designados⁷⁰¹. Los magistrados fueron nombrados mediante los Reales Decretos 1784, 1785, 1786 y 1787/2010, de 29 de diciembre, publicados en el BOE el 10 de enero de 2011. Como se puede observar, desde la verificación de requisitos efectuada por el TC y hasta la publicación de los Reales Decretos de nombramiento pasaría un mes, un periodo de tiempo ciertamente largo, que no se había visto en la materia, y que incluso derivó en una denuncia de prevaricación administrativa contra el Gobierno, que la Segunda Sala del Tribunal Supremo archivó al considerar que tales hechos no eran constitutivos de ilícito penal⁷⁰².

El 12 de enero juraron o prometieron el cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, luego se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta en la sede del TC. En ella, la Presidenta saliente del Tribunal Constitucional pronunció un discurso muy crítico, en el que destacó el “notorio retraso de más de tres años, el mayor de la historia” en la renovación de este Tribunal. Subrayó además el retraso en que estaba incurriendo el Congreso, lo que provocaba que por primera vez, el Tribunal recién renovado quedase “constituido por once magistrados, a pesar de que la Constitución dispone que sean doce”⁷⁰³. En la misma línea, el nuevo Presidente de edad, al declarar

⁷⁰⁰ Senador Vilajoana i Rovira. SENADO: “Comparecencia del candidato a Magistrado del Tribunal Constitucional, D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel; Formular propuesta al Pleno de candidato a Magistrado del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión de Nombramientos, núm. 408, IX Legislatura, 6 de octubre de 2010, págs. 5-6.

⁷⁰¹ La comunicación del acuerdo del TC está disponible en el expediente del Senado número 725/000001, documento 45.

⁷⁰² ATS 5980-2011, de 8 de marzo de 2011. La denuncia fue formulada contra el “actual Gobierno de la Nación”, por retener la orden de publicación de los nombramientos en el BOE. La Sala Segunda Penal del TS archivó las actuaciones porque los hechos denunciados no constituían delito alguno. La orden de publicación al BOE corresponde al Presidente del Senado, de modo que no se trata de una actuación administrativa, sino legislativa. Además, la Sala no consideró arbitrario que los nombramientos se publicaran en el BOE un mes más tarde, al haber mediado las festividades del año viejo, nuevo y Reyes.

⁷⁰³ El discurso pronunciado en el acto de la novena renovación parcial del Tribunal Constitucional por la Presidenta María Emilia Casas Baamonde, se encuentra en el anexo V de la Memoria 2010 del Tribunal Constitucional. La Presidenta además dijo: “Sin atribuir culpas ni repartir responsabilidades, tarea que no me corresponde, sí me veo obligada a recordar que el incumplimiento de los plazos para que las Cámaras procedan a la renovación del Tribunal no es bueno para nadie (como tuvieron que recordarlo los Presidentes Tomás y Valiente en 1992

constituido el nuevo Tribunal, dejó constancia de la “anómala situación” en que se encontraba la integración del mismo⁷⁰⁴.

Las declaraciones anteriores, resultan ciertamente justificadas. Recuérdese que en la época, además del retraso senatorial de más de tres años, se sumaba el de las designaciones del Congreso, entre ellas, la plaza del Magistrado Roberto García-Calvo, fallecido el 18 de mayo de 2008. El Congreso debía haber operado la renovación desde el pasado mes de noviembre de 2010, pero ésta llegó veinte meses después, el 17 de julio de 2012.

Al final, desde que la Presidenta del Tribunal Constitucional enviara al Senado la comunicación para instar el procedimiento de renovación previsto en el art. 17 LOTC (julio de 2007), y hasta que tomaran posesión los nuevos magistrados (enero de 2011) pasarían poco más de 41 meses, esto es, tres años y cinco meses.

y Álvaro Rodríguez Bereijo en 1998). No hacerlo así supone un incumplimiento grave de la Constitución, que perjudica la calidad de nuestra democracia”.

⁷⁰⁴ Palabras de clausura pronunciadas por el Magistrado Javier Delgado Barrio, recogidas en la siguiente nota: LÁZARO MARTÍNEZ, Julio: “La presidenta del Constitucional critica al Parlamento por la tardía renovación del Tribunal”, en *El País*, 12 de enero de 2011.

CAPÍTULO VII

La participación autonómica en la designación de magistrados constitucionales

El modelo de composición del Tribunal Constitucional establecido en la Norma Fundamental de 1978 no ha sido ajeno a la serie de tensiones que suelen desplegar los partidos políticos sobre este tipo de órganos. Una de las manifestaciones de dicha presión se ha reflejado en los repetidos intentos más o menos contundentes de las fuerzas nacionalistas para modificar el modelo de composición del TC, introduciendo algún mecanismo por el que las Comunidades Autónomas pudieran tener un rol más activo en el procedimiento selectivo de los magistrados.

Dicha pretensión es originada por un contexto bastante peculiar del Estado español como lo es su modelo territorial y la acción de las Comunidades Autónomas, en especial aquéllas que se han caracterizado por una mayor sensibilidad nacionalista. Como se sabe, el orden territorial del Estado no fue establecido detalladamente por el constituyente, motivo por el cual, en la práctica, ha sido y sigue siendo, en buena medida, paulatinamente configurado a impulso de sentencias del Tribunal Constitucional que definen el contenido y alcance de cada competencia distribuida entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

Este proceso de construcción del “Estado de las autonomías” se entiende que no ha concluido pese a que han pasado treinta y cinco años de su puesta en marcha y quizás esté condenado a ser un proceso inacabable “en

tanto no se resuelva la cuestión que está en su verdadero fondo, que no es otra que la de la definición del ser de España”⁷⁰⁵.

Aunado a esta característica, se encuentra el tradicional interés de las Comunidades Autónomas por asumir cada vez más competencias del Estado central e igualmente vuelven a suscitarse las pretensiones de autogobierno de los nacionalismos vasco y catalán, fundamentalmente. Tales dinámicas se mantienen e incluso, actualmente, comienza a vislumbrarse una nueva fase de las mismas, las cuales tienen su expresión en la serie de reformas de los Estatutos de las CC. AA, en la Declaración de soberanía y la aspiración a un referendo de autodeterminación de Cataluña, o en los planteamientos políticos respecto a una reforma constitucional en clave federal.

En ese contexto de efusiva participación autonómica, el modelo de composición del Tribunal Constitucional, como ya se decía, no ha pasado inadvertido y se ha intentado modificar para dar cabida a la participación autonómica en el procedimiento selectivo de magistrados constitucionales. A lo largo del tiempo ha habido varios intentos en este sentido, aunque el más reciente y quizá también el que más contundencia ha tenido, fueron algunas reformas a los Estatutos de Autonomía, la aprobación de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Reforma del Reglamento del Senado.

Si bien la instauración de dichas normas no transcurrió de manera pacífica puesto que fueron recurridas, lo cierto es que se ha logrado, así sea tíbicamente, un principio mínimo de participación de las CC. AA. en la selección de los magistrados. Ello ha sido así producto de la interpretación que ha realizado el TC sobre este mecanismo y, sobre todo, por el modo en que se ha llevado a la práctica en la última designación a cargo del Senado. A detallar tales acontecimientos, se dedicarán las siguientes páginas.

7.1.- Algunos modelos de participación territorial en la designación de magistrados constitucionales

⁷⁰⁵ REQUEJO PAGÉS, Juan Luis: “El Tribunal Constitucional”, en DEL CAMPO, Salustiano; TEZANOS, José Félix (dirs.): *La España del Siglo XXI*, vol. II: *La política*, Madrid, Instituto de España y Fundación Sistema, 2008, pág. 41 de la versión en texto electrónico facilitado por el autor.

El establecimiento de un cauce de participación a las entidades territoriales que componen un Estado es ciertamente un objetivo compartido por un gran número de experiencias constitucionales. El interés tan extendido por articular esta colaboración ofrece una amplia gama de modelos, a los que se puede acudir para hacerse con algunas ideas para el caso propio.

Las alternativas que se verán, ciertamente no son todas las posibles, pero intentan abarcar al menos las principales. El abanico de opciones que se verán, no son totalmente extrañas al constitucionalismo español, pues algunas se han ensayado o planteado en algún punto del devenir histórico.

El marco de variedades de participación territorial se puede abordar desde los modelos de mayor intervención hasta los que van difuminando la misma.

(i) En esta escala, el modelo “más fuerte” es quizá aquél inspirado en la estructuración de los tribunales internacionales, en los que cada parte o entidad territorial designa directamente un juez⁷⁰⁶. Este modelo sería uno de los rasgos introducidos en la composición del Tribunal de Garantías Constitucionales, en donde cada Región designaba un vocal “representante”, recogido igualmente en la propuesta planteada en unas enmiendas en los trabajos constituyentes de 1978⁷⁰⁷.

(ii) Siguiendo a Jorg Lüther, el siguiente modelo podría ser el de la “participación orgánica”⁷⁰⁸, esto es, aquél rol activo en la designación de los magistrados a cargo de instituciones que representan a nivel estatal el interés de las autonomías territoriales, como podría ser el Senado.

La participación orgánica del Senado, más allá de la diversa forma en que éste pueda configurarse, puede mostrar múltiples variables, según se ha visto ya en el primer capítulo. Podrá tomar la opción de articularse como un acto de designación directa de una parte del total de magistrados (Alemania) o

⁷⁰⁶ Aunque en estos casos, el principio de “*one state one judge*” también responde al hecho de dotar al tribunal internacional no solamente de participación de las entidades soberanas integrantes, sino de dar cauce a un pluralismo de “culturas jurídicas” al interior del colegio.

⁷⁰⁷ Enmiendas 64 y 682, presentadas en el Congreso de los Diputados por Francisco Letamendia Belzunce del Grupo parlamentario mixto y el Grupo parlamentario vasco, respectivamente.

⁷⁰⁸ LUTHER, Jörg: “La composizione dei tribunali costituzionali e le autonomie territoriali: esperienze straniere”, en ANZON, A.; AZZARITI, G.; LUCIANI, M. (a cura di): *La composizione della Corte Costituzionale. Situazione italiana ed esperienze straniere. Atti del Seminario di Roma del 14 marzo 2003*, Torino, G. Giappichelli, Quaderni della Rivista di Diritto Costituzionale, núm. 3, 2004, pág. 96.

como un acto compuesto de designación, donde la voluntad senatorial concurrirá con la de otro órgano para adoptar la designación (EE. UU., México).

En el acto compuesto, la intervención del Senado a su vez puede materializarse de varias formas: en un sentido activo, puede proponer una candidatura vinculante para otro órgano (Austria), o en un sentido pasivo, puede elegir de entre una terna presentada por otra institución (México, Colombia), una lista de dos (Bélgica), una propuesta única (EE. UU.) o como se pretendía originalmente en la reforma a la LOTC 6/2007, que el Senado eligiera exclusivamente “entre” los candidatos presentados por los Parlamentos autonómicos si bien, todo ello en los “términos que determine el Reglamento”, y con independencia de si hubiera incidido o no el factor territorial, según se comentará más adelante.

En este punto, también se han planteado otras propuestas en España. Por ejemplo, que el Senado eligiera de entre las ternas elaboradas por la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (Coprepa)⁷⁰⁹, o el modelo previsto para designar un concreto número de plazas de Magistrado en los Tribunales Superiores de Justicia (una de cada tres plazas), por la cual el CGPJ designa de entre una terna de juristas de reconocido prestigio, que le es presentada por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma que se trate (330.4 LOPJ)⁷¹⁰.

(iii) Otra opción es aquélla que se enmarca igualmente en la participación orgánica, pero en cuyo procedimiento interno, tiene especial protagonismo una comisión o formación senatorial, cuya manera de integración o sus competencias le calificarían de mejor manera para dar la impronta autonómica a la designación. Como muestra más ilustrativa de lo anterior, estaría el grupo de trabajo *ad hoc* que se forma en el *Bundesrat* para elegir a los magistrados del TCF, el cual está compuesto por los Ministros de Justicia de los Gobiernos de los *Länder*.

⁷⁰⁹ Propuesta que ha sido meramente referida en el Informe 2006 del Consejo de Estado sobre modificaciones a la Constitución, pág. 272.

⁷¹⁰ Una opción por cierto, que no ha estado exenta de problemas. Véase AUZMENDI DEL SOLAR, Montserrat: “Rechazo por parte del Consejo General del Poder Judicial de la terna de juristas propuesta por el Parlamento Vasco para el nombramiento de un magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV (artículo 330.4 de la LOPJ): ¿cuestión de discrecionalidad?”, en *Corts: Anuario de Derecho Parlamentario*, núm. 16, 2005, págs. 153-168.

Una iniciativa similar, aunque combinando también un elemento consultivo, lo muestran las ya mencionadas propuestas del Parlamento de Cataluña y de CiU de 2002 y 2004, respectivamente. Como recordaremos, estas propuestas planteaban que las designaciones senatoriales debían hacerse a elección de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, previa consulta a las Asambleas Legislativas de las CC. AA., o de haber alguna disuelta, “al órgano colegiado de gobierno, de acuerdo con lo que establezca la Ley propia de cada Comunidad”⁷¹¹.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas, como se sabe, es una Comisión introducida en la reforma al RS a comienzos de 1994 con el propósito general de potenciar la función territorial del Senado. La Comisión está compuesta por el doble del número de senadores que las restantes Comisiones, esto es de 62 miembros, y en ella tienen el derecho de asistencia y de hacer uso de la palabra los senadores designados por las CC. AA. Igualmente pueden intervenir los Presidentes de las Comunidades o miembros del órgano de Gobierno de las mismas designados para ello (51.3, 56 bis 1, 56 bis 2, RS).

Se trata de una Comisión de tipo legislativo, pero que no reduce su función formal a esta encomienda, sino que también tiene un funcionamiento sustancial y específico en materias autonómicas, puesto que está encargada de “promover el estudio, tramitar, debatir, informar y dictaminar, en cada caso, sobre cuantos asuntos de interés autonómico hayan de conocer las Cortes Generales”⁷¹², y en la que pueden participar el Gobierno y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas (55-56 bis, RS)⁷¹³.

⁷¹¹ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Proposición de ley del Parlamento de Cataluña, Sexta modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, a fin de que los magistrados nombrados a propuesta del Senado lo sean en representación de las Comunidades Autónomas (Orgánica)”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie b, núm. 267-1, VII Legislatura, 19 de julio de 2002, págs. 1-3; SENADO: “Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en el Senado de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la elección de magistrados a propuesta de las Comunidades Autónomas”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie III A, núm. 2 (a), VIII Legislatura, 22 de abril de 2004, págs. 1-3.

⁷¹² Exposición de motivos, reforma del Reglamento del Senado de 11 de enero de 1994, en lo que atiene a la potenciación de su función territorial (BOE núm. 16, de 19 de enero de 1994).

⁷¹³ Algunos tempranos estudios sobre dicha Comisión en GARCÍA-ESCUADERO MÁRQUEZ, Piedad: “La Comisión General de las Comunidades Autónomas (Reforma del Reglamento del Senado)”, en *Revista de Administración Pública*, núm. 133, 1994, págs. 485-500; RIPOLLÉS SERRANO, María Rosa: “La participación del Gobierno y de los Consejos de Gobierno de las Comunidades

(iv) Otra de las modalidades observadas es la participación territorial en un plano consultivo en el marco del procedimiento de designación, el cual puede ser preceptivo o no. Esta colaboración se diferencia del modelo de acto compuesto en que la propuesta de la entidad territorial no es vinculante para el órgano encargado de realizar la designación, sino que éste determinará en definitiva si se decanta o no por las opciones ofrecidas. En este terreno, se encuentra el modelo selectivo ruso donde están facultadas ciertas entidades territoriales para presentar propuestas consultivas al Presidente de la Federación, quien luego formula las propuestas y las presenta al consentimiento del Senado.

También podría colocarse en este rubro el caso de la participación autonómica del 16.1 de la LOTC, luego de la interpretación dada por la STC 101/2008 y la práctica que ha operado en el Senado. En este sentido, los candidatos presentados por las autonomías se configuran en la práctica como propuestas consultivas porque el Senado puede descartarlas y proponer otras de su seno, como sucedió con la elección del Magistrado Francisco Pérez de los Cobos.

(v) También pueden encontrarse medidas de intervención territorial de tipo directo que podrían tener una manifestación en el diseño orgánico del Tribunal Constitucional. En esta línea, igualmente las posibilidades se desdoblan, pero podrían aludirse al menos unos cuantos modelos. Por ejemplo, aquéllas que están establecidas directamente en el régimen de los requisitos de acceso a la magistratura constitucional. Entre las modalidades observadas, se encuentra la disposición de que un determinado número de jueces deba provenir o no de un específico territorio o bien, que deba ser extraído de diversos contextos culturales o lingüísticos del país, lo que suele traducirse finalmente en diversidad territorial.

Entre los primeros, recuérdense los casos de Austria donde tres miembros titulares y dos suplentes deben tener su residencia permanente fuera de la capital Viena (donde reside el TC), o el de Canadá, donde al menos tres jueces de la Corte Suprema deben provenir de la magistratura o la abogacía de

Autónomas en el funcionamiento de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado”, en *Corts: Anuario de Derecho Parlamentario*, núm. 1, 1995, págs. 11-30.

la Provincia de Quebec⁷¹⁴. Entre los segundos casos, donde se exige la proveniencia cultural o lingüística de los magistrados, están las experiencias de Bélgica o Suiza, donde deben acceder magistrados que hablen los distintos idiomas oficiales del país.

Otro de los casos, aunque quizá planteado de una forma menos intensa, sería aquel donde la cuota se aplica en la fase de instrucción o proposición de candidaturas y no al acto final de designación. Así sucede en Serbia, donde de cada diez propuestas presentadas por los órganos competentes para su designación, al menos una debe proceder del territorio de las “provincias autónomas”, según lo dispone expresamente la Constitución (art. 172)⁷¹⁵.

Otra de las modalidades es la que presenta el territorio en disputa de Kosovo. En este caso, en el modelo de designación de los jueces del Tribunal Constitucional se establece que de dos de los nueve jueces constitucionales deben designarse por la mayoría simple de los miembros presentes de la Asamblea, siempre que la misma venga apoyada por la mayoría de los escaños reservados para los Grupos representativos de las comunidades minoritarias (114.3 C)⁷¹⁶.

⁷¹⁴ En la práctica, además suele observarse la costumbre según la cual, otros tres jueces provienen de Ontario, otros dos de las provincias occidentales y uno de las provincias atlánticas. Véase PASSAGLIA, Paolo: “Giustizia Costituzionale in Canada”, en LUTHER, Jörg; ROMBOLI, Roberto; TARCHI, Rolando: *Esperienze di Giustizia Costituzionale*, tomo I, Torino, G. Giappichelli, 2000, pág. 89.

⁷¹⁵ Las provincias autónomas son una de las entidades territoriales que componen la República de Serbia. Esta organización ha sido resultado de las profundas divisiones étnicas y regionales que tiene este país, lo que ha implicado no pocos problemas. Jurídicamente las dos provincias autónomas son Vojvodina, y Kosovo y Metohija (182 C), y ambas están dotadas de autogobierno. Sin embargo, sobre la Provincia Autónoma de Kosovo el Gobierno de Serbia actualmente no ejerce el control, pues luego de los conflictos bélicos y la declaración unilateral de independencia el 17 de febrero de 2008, la provincia se ostenta como una república independiente, la cual ha sido reconocida por algunos países importantes y muchas de sus instituciones se encuentran bajo tutela de la misión de la ONU para Kosovo, la denominada UNMIK.

⁷¹⁶ Según el Acuerdo sobre el Estatuto de Kosovo y la posteriormente elaborada Constitución, se han reservado veinte escaños para ser asignados a los partidos políticos, coaliciones, movimientos ciudadanos o candidatos independientes que se hayan declarado representantes de las Comunidades, siendo los escaños repartidos en las siguientes proporciones: diez para el grupo serbio, tres para el bosnio, dos al turco, uno al gorani; uno al rumano, uno al ashkali, uno al egipcio, y uno más para el que de éstos últimos tres tengan más votos. Los escaños, después de la segunda elección general, serán plazas reservadas mínimas, esto es, que si obtienen mayor votación, podrán lógicamente ocupar más diputaciones. Véase UNITED NATIONS, SECURITY COUNCIL: “Letter dated 26 March 2007 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council: addendum: Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement” (S/2007/168/Add.1), 26 March 2007, págs.13-14; art. 64.2, Constitution of the Republic of Kosovo.

En la práctica, no solamente son designados los magistrados con este tipo de respaldo, sino que los propios Grupos minoritarios son los que formulan las candidaturas. En el momento de llevar a cabo la votación, las candidaturas primero se someten al sufragio de los Grupos parlamentarios comunitarios y si la mayoría necesaria es obtenida, entonces se pasa al escrutinio con todos los miembros de la Asamblea que se encuentren presentes en la sesión⁷¹⁷.

Esta técnica parece incluso consolidarse cada vez más para permitir cierta participación de las comunidades minoritarias en los países multiétnicos. Ello es así, puesto que la fórmula ya ha sido utilizada en otras experiencias como en Macedonia, cuya reforma constitucional de 2001 introdujo que tres de los nueve jueces constitucionales debían ser designados por la mayoría de diputados, siempre que vengan apoyados por la mayoría de los representantes de las comunidades no mayoritarias de la población (109.2 C).

7.2.- La participación autonómica en la composición del TC: una añeja y dificultosa aspiración

La participación de las Comunidades Autónomas en los procedimientos de selección de los magistrados constitucionales ha sido un elemento echado en falta desde muy pronto y no ha dejado de señalarse por algún sector de la

⁷¹⁷ ASAMBLEA: Legislatura III, Acta de sesión plenaria P-69, de 15 de mayo de 2009.

doctrina la necesidad de su incorporación⁷¹⁸, aunque por supuesto el anhelo no ha sido unánime⁷¹⁹.

Ha constituido además una vieja aspiración de las fuerzas políticas nacionalistas en España, que en algún momento de la historia constitucional tuvo cierta materialización en el diseño del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República. Un Tribunal, como ya se ha recordado, que se integró por más de una veintena de miembros de muy diversa extracción, entre los cuales debía haber “un representante por cada una de las Regiones españolas”⁷²⁰.

La pretendida participación autonómica haría también su incursión en los trabajos preparatorios de la Constitución de 1978 a través de unas enmiendas al artículo que preveía el modelo de composición del TC, por las que se proponía incorporar a las Comunidades Autónomas en el procedimiento de designación de los magistrados constitucionales, o bien otras enmiendas que propugnaban por la exclusiva designación de magistrados por el Congreso de los Diputados y el Senado, entendiendo que las de éste último, debido a su carácter de cámara territorial, podrían reflejar la voluntad autonómica (enmiendas 682, 64 y 697 presentadas en el Congreso de los Diputados)⁷²¹. En

⁷¹⁸ AGUILÓ LUCÍA, Lluís: “La presencia de las nacionalidades y regiones en el Tribunal Constitucional”, en *El Tribunal Constitucional (Jornadas de la Dirección General de lo Contencioso del Estado)*, vol. I, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1981, págs. 349-367; TENORIO SÁNCHEZ, Pedro Julio: “El Tribunal Constitucional”, en *Revista de Derecho Político*, núm. 37, 1992, pág. 292; PÉREZ TREMP, Pablo: “Las perspectivas del sistema de justicia constitucional en España”, en *Foro Constitucional Iberoamericano*, núm. 5, marzo 2004, pág. 17; CRESPO BARQUERO, Pedro; JANÉ I GUASCH, Jordi; VIVER PI-SUNYER, Carles: “Respuestas a la Encuesta”, en ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, et al.: *La reforma de la justicia constitucional*, Navarra, Thomson-Aranzadi, Centro de Estudios Jurídicos, 2006, págs. 142, 144, 147, 178 y 190; GARCÍA ROCA, Javier: “La experiencia de veinticinco años de jurisdicción constitucional en España”, en PÉREZ TREMP, Pablo (coord.): *La Reforma del Tribunal Constitucional. Actas del V Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, págs. 17-120; SÁNCHEZ BARRILAO, Juan Francisco: “Sobre el interés de las Comunidades Autónomas en la composición del Tribunal Constitucional”, en GARCÍA HERRERA, Miguel Ángel; VIDAL BELTRÁN, José María (coords.): *El estado autonómico: integración, solidaridad, diversidad*, vol. I, Madrid, Colex, Instituto Nacional de Administración Pública, 2005, págs. 155-182; SÁNCHEZ BARRILAO, Juan Francisco: “La participación de las Comunidades Autónomas en la elección por el Senado de los magistrados constitucionales”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 23, 2009, págs. 387-424.

⁷¹⁹ GIMENO SENDRA, Vicente: “Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 4, 1999, pág. 88. Aunque luego de la reforma 6/2007 en la materia, le ha parecido correcta “habida cuenta de la vocación del Senado como Cámara de representación territorial”, en “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, pág. 65.

⁷²⁰ Artículo 122 de la Constitución de 1931.

⁷²¹ Enmienda 64 del Sr. Letamendia Belzunce; enmienda 682 del Grupo parlamentario vasco y enmienda 697 del Grupo parlamentario comunista.

la tramitación posterior en el Senado, fueron formuladas sobre este mismo apartado cinco enmiendas⁷²², que finalmente no prosperarían, de modo que permaneció el texto inalterado hasta su promulgación⁷²³.

El carácter de “Cámara de representación territorial” adjudicado al Senado por la Constitución no ha sido, sin embargo, el esperado. La doctrina de manera general reconoce que, en realidad, la composición, las funciones y el comportamiento de los integrantes del Senado no suelen responder a esa teórica naturaleza, motivo por el cual, en el transcurso de los años, se ha llegado a estimar que la singularidad propia que podría imprimir esta Cámara no se está reflejando en su actividad institucional, incluyendo en ella los nombramientos de los magistrados constitucionales que corresponde elegir al Senado⁷²⁴.

Tales reflexiones vienen siendo reiteradamente utilizadas, tanto en sede parlamentaria como doctrinal, como argumento básico para sugerir una reforma del Senado⁷²⁵, aunque también, en su defecto, se ha llegado a plantear por un sector de la doctrina una reforma a la LOTC, que “articulase algún cauce particular por el que la opinión de las Comunidades Autónomas hubiese de ser tenida especialmente en cuenta a la hora de la propuesta senatorial de Magistrados constitucionales”⁷²⁶.

⁷²² Las cinco enmiendas fueron la número 92 del PSI (Progresistas y Socialistas Independientes); la enmienda 189 de D. Antonio Pedrol Rius; la enmienda 316 de D. Juan María Bandrés Molet; la enmienda 639 de la Agrupación Independiente y la enmienda 963 de D. Luis Angulo Montes.

⁷²³ SENADO: “Modificaciones propuestas por el Pleno del Senado al texto del proyecto de Constitución aprobado por el Congreso de los Diputados”, en *Boletín Oficial de las Cortes, Senado*, núm. 161, 13 de octubre de 1978, págs. 3559-3577.

⁷²⁴ CRUZ VILLALÓN, Pedro: “Discurso pronunciado por el Presidente del Tribunal Constitucional, con ocasión de la renovación parcial del Tribunal”, en *Memoria 2001*, Madrid, Tribunal Constitucional.

⁷²⁵ Resulta verdaderamente prolijo el número de obras que se pronuncian en el mismo sentido, por lo que, de manera orientativa, se refieren las siguientes: PAUNER CHULVI, Cristina: *La designación parlamentaria de cargos públicos*, Madrid, Congreso de los Diputados, 2003, pág. 168; FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “Artículo 159”, en ALZAGA VILLAAMIL, Óscar (dir.): *Comentarios a la Constitución española de 1978*, tomo XII, Madrid, Cortes Generales, Edersa, 1999, pág. 89; VV. AA.: *Ante el futuro del Senado. Seminario sobre la reforma constitucional del Senado*, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis Autònoms, 1996; AJA FERNÁNDEZ, Eliseo; ALBERTÍ ROVIRA, Enoch; RUIZ RUIZ, Juan José: *La reforma constitucional del Senado*, Madrid, CEPC, 2005; ÁLVAREZ JUNCO, José; RUBIO LLORENTE, Francisco (eds. lits.): *El informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional: texto del informe y debates académicos*, Madrid, CEPC, Consejo de Estado, 2006; VV. AA.: *Teoría y Realidad Constitucional*, edición monográfica sobre el Senado, núm. 17, 2006.

⁷²⁶ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “Artículo 159”, *op. cit.*, págs. 89-90.

Las fuerzas políticas nacionalistas, por su parte, han mantenido a lo largo del tiempo el impulso de la participación autonómica en los procedimientos de integración del TC. Lo han hecho desde diversos frentes y en distintos momentos. Desde el plano de la acción política pueden traerse a colación la serie de acuerdos entre algunas fuerzas nacionalistas de Galicia, País Vasco y Cataluña, conocidos como la “Declaración de Barcelona”, la cual, entre otras cosas, propugnaba una reforma del modelo de designación y composición del TC, que tuviera en cuenta la “pluralidad nacional, cultural y lingüística del Estado”⁷²⁷.

Desde el plano parlamentario los esfuerzos también han sido notables, bien a través de los procedimientos de control e impulso político⁷²⁸, bien a través del procedimiento legislativo. Sobre esta última vertiente, las acciones se han proyectado en la modificación de la LOTC pero también en la de los Estatutos de Autonomía,⁷²⁹ dando lugar a las reformas a los Estatutos de Autonomía de Cataluña, Andalucía, Aragón o Castilla y León.

También se pueden atender otros antecedentes importantes, tales como la propuesta de ley para reformar el artículo 16.1 de la LOTC, a fin de

⁷²⁷ El segundo punto del acuerdo establece lo siguiente: “Reforma del Tribunal Constitucional de forma que su designación y composición, garantizando su imparcialidad, tenga presente la pluralidad nacional, cultural y lingüística del Estado”. Disponible en el portal de Internet del Partido Nacionalista Vasco en, www.eaj-pnv.eu/documentos/documentos/170.htm#2.

⁷²⁸ Véase por ejemplo, la Resolución acordada por unanimidad por el Parlamento de Galicia (a iniciativa del BNG), mediante la cual se insta a la Junta de Galicia a impulsar la modificación de los mecanismos de nombramiento de los magistrados del TC para garantizar algún instrumento de participación de las Comunidades Autónomas en los mismos. PARLAMENTO DE GALICIA: “Resolución relativa á modificación dos mecanismos de nomeamento dos membros do Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial do Parlamento de Galicia*, núm. 221, VI Legislatura, 30 de octubre de 2002, pág. 10976.

⁷²⁹ La reforma del Estatuto del País Vasco, el denominado “Plan Ibarretxe”, no llegó a prosperar. Véase, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Propuesta de reforma de Estatuto político de la Comunidad de Euskadi”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 149-1, serie b proposiciones de ley, VIII Legislatura, 21 de enero de 2005, págs. 1-21. En la propuesta, entre otras cosas, se planteaba la creación de una sala especial del Tribunal Constitucional, “que se constituirá en el Tribunal de Conflictos Euskadi-Estado...” (art. 16.1), que debía estar integrado por seis magistrados, de los cuales tres serían miembros del tribunal ya designados, pero seleccionados por el Pleno del TC a propuesta del Senado; y los otros tres serían de nuevo nombramiento, propuestos por el Parlamento Vasco y nombrados por la Corona. (art. 16.2). El Proyecto de Reforma de Estatuto fue finalmente rechazado en el Congreso de los Diputados en la Toma de Consideración, en la sesión del 1 de febrero de 2005. Toda la documentación está organizada monográficamente y disponible en el portal de Internet del Parlamento Vasco en, www.parlamento.euskadi.net/c_temas_monograficos_1.html. Véase además, Roura Gómez, Santiago A.: “La composición del Tribunal Constitucional y su función de órgano de solución de las controversias territoriales (A propósito de las previsiones del llamado “Plan Ibarretxe” en relación con la justicia constitucional territorial)”, en *Civitas Europa: revista jurídica sobre la evolución de la nación y del estado en Europa*, núm. 12, 2004, págs. 125-158.

implementar un cauce de participación de las CC. AA. en el procedimiento de designación de los magistrados constitucionales. Esta propuesta de ley pretendía adicionar un párrafo por el que se preveía que los magistrados nombrados a propuesta del Senado, lo fueran en representación de las Comunidades Autónomas. La propuesta de ley, inicialmente presentada por el Parlamento de Cataluña en 2002 ante el Congreso de los Diputados y dos años más tarde, por los senadores del Grupo parlamentario catalán de *Convergència i Unió* en el Senado, dispuso que la designación senatorial de los cuatro magistrados debía ser a propuesta de la Comisión General de las Autonomías, previa consulta a las Asambleas Legislativas de las CC. AA. o, de haber alguna disuelta, “al órgano colegiado de gobierno, de acuerdo con lo que establezca la Ley propia de cada Comunidad”⁷³⁰.

En la exposición de motivos se aludió al hecho de que los magistrados constitucionales de nómina senatorial eran “designados en función de la representatividad de los distintos grupos políticos, pero no de las distintas comunidades autónomas”, lo que hacía necesaria la reforma, sin embargo en los respectivos trámites legislativos, ambas propuestas fueron rechazadas.

El debate realizado en el Pleno del Congreso de los Diputados con motivo de la propuesta de ley presentada por el Parlamento de Cataluña en 2002, puso en evidencia el apoyo que mostraron a ésta todos los Grupos parlamentarios con excepción del Partido Popular.

Los partidos nacionalistas esencialmente respaldaron la propuesta entendiendo que era necesario involucrar en el procedimiento de designación de los magistrados constitucionales a las CC. AA., puesto que el TC, en su calidad de órgano de resolución de conflictos de competencias entre el Estado y las CC. AA., debía contar con una sensibilidad “autonómica” más acorde a un Estado compuesto como el español; de igual forma y en términos generales, se reconocía que por medio de la propuesta se daba un primer paso a la

⁷³⁰ Respectivamente, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Proposición de ley del Parlamento de Cataluña, Sexta modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, a fin de que los magistrados nombrados a propuesta del Senado lo sean en representación de las Comunidades Autónomas (Orgánica)”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie b, núm. 267-1, VII Legislatura, 19 de julio de 2002, págs.1-3; SENADO: “Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en el Senado de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la elección de magistrados a propuesta de las Comunidades Autónomas”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie III A, núm. 2 (a), VIII Legislatura, 22 de abril de 2004, págs. 1-3.

consecución del Senado como Cámara territorial, propósito este último suscrito por el Grupo parlamentario socialista, pero precisando la negativa a considerar a los magistrados como “representantes” de las CC. AA., afirmando acertadamente el carácter independiente de los mismos.

Por su parte, el PP se opuso argumentando la desnaturalización del procedimiento de elección al adicionar condicionamientos procedimentales que no estaban previstos en la CE; también este partido consideró inadecuado establecer mecanismos de vinculación entre los órganos territoriales del Estado y las competencias del TC; finalmente sostuvo que la propuesta rebasaba el ámbito de la Ley Orgánica ya que incidiría en terrenos que le correspondían al Reglamento del Senado. La propuesta de ley fue finalmente rechazada con 125 votos a favor y 147 en contra⁷³¹.

Los términos de la propuesta de ley presentada en el Senado por el Grupo parlamentario catalán de *Convergència i Unió* en 2004 fueron similares a la del Parlamento catalán, sólo que algunos argumentos fueron más acogidos que en la ocasión pasada. Tal es el caso de la inadecuada vía procedimental utilizada para realizar la reforma, pues se estimaba que la manera idónea era a través de la modificación del Reglamento del Senado y no de la LOTC; de igual forma, se acentuó la consideración de eliminar el carácter “representativo” que pretendía adjudicarse a los magistrados constitucionales en relación con las CC. AA. En esta ocasión, además de la tradicional oposición del Grupo popular a este proyecto de ley, no se contó con el respaldo del Grupo socialista y de *Entesa Catalana de Progrés*, lo que explica que fuera apoyada sólo con 19 votos y con 221 en contra⁷³².

⁷³¹ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Toma en consideración de Propositiones de Ley de Comunidades Autónomas, Del Parlamento de Cataluña, de sexta modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, a fin de que los magistrados nombrados a propuesta del Senado lo sean en representación de las Comunidades Autónomas (Orgánica)”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, Pleno y Diputación Permanente, núm. 248, VII Legislatura, 6 de mayo de 2003, págs. 12745-12756.

⁷³² SENADO: “Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado: Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la elección de magistrados a propuesta de las comunidades autónomas”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 20, VIII Legislatura, 16 de noviembre de 2004, págs. 905-913. Unas primeras reflexiones tendientes a desaconsejar la participación autonómica a través de la Comisión General de Autonomías, pueden verse en PULIDO QUECEDO, Manuel: “¿Magistrados constitucionales de designación autonómica?”, en *Aranzadi Tribunal Constitucional*, núm. 3, 2004, págs. 2925-2927.

La idea de implantar un cauce de participación de las CC. AA. en el procedimiento selectivo de los magistrados constitucionales de nómina senatorial volvió de nueva cuenta a debate parlamentario con motivo de la presentación de proyectos de reforma a algunos Estatutos de Autonomía. En las reformas estatutarias se planteaba, entre otras cosas, una mayor participación de los gobiernos autonómicos en la formación de las instituciones y en procedimientos de toma de decisiones estatales.

Concretamente y a la vanguardia en la materia, vino la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña (presentado el 5 de octubre de 2005) y luego en la misma línea, el de Andalucía (5 de mayo de 2006), que expresamente refirieron la participación en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional⁷³³. Luego vinieron las propuestas de reforma estatutaria de Aragón (26 de junio de 2006) y de Castilla y León (5 de diciembre de 2006), en un sentido similar, pero utilizando una fórmula más general que no incluyó específicamente la designación de magistrados constitucionales, pero que aludió a la participación en la designación de miembros de instituciones u organismos del Estado, de acuerdo a lo que dispusiera la legislación estatal⁷³⁴.

En este contexto, luego de presentada la propuesta de reforma al Estatuto catalán, el Gobierno, por su parte, presentó un mes y medio después el proyecto de reforma de la LOTC (18 de noviembre de 2005), la cual convivió en la tramitación parlamentaria con el resto. El texto primigenio de la reforma a la LOTC no tenía ninguna previsión relativa a la participación de las autonomías en la designación senatorial de magistrados⁷³⁵, pero en el

⁷³³ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: "Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña", en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 210-1, serie b: proposiciones de ley, VIII Legislatura, 21 de octubre de 2005, pág. 48 (art. 180); CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: "Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía", en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 246-1, serie b: proposiciones de ley, VIII Legislatura, 12 de mayo de 2006, pág. 42 (art. 220.2).

⁷³⁴ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: "Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón", en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 253-1, serie b: proposiciones de ley, VIII Legislatura, 8 de septiembre de 2006, pág. 18 (art. 89.4); CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: "Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León", en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 268-1, serie b: proposiciones de ley, VIII Legislatura, 15 de diciembre de 2006, pág. 16 (art. 88.2 d).

⁷³⁵ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: "Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional", en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie a: proyectos de ley, núm. 60-1, VIII Legislatura, 25 de noviembre de 2005, págs. 1-11.

procedimiento legislativo algunas fuerzas políticas vascas y catalanas presentaron unas enmiendas para incluir este tema en la reforma⁷³⁶.

Las enmiendas venían redactadas en los términos que ya habían sido planteados sin éxito en las ocasiones ya reseñadas, esto es, con la designación de la Comisión General de las Autonomías, previa consulta con los Parlamentos autonómicos. Las enmiendas del EAJ-PNV y ERC insistirían en el carácter “representativo-autonómico” de los magistrados elegidos, mientras que CiU no aludiría a esa calidad⁷³⁷.

Aunque las enmiendas no fueron adoptadas en sus términos, lo cierto es que por primera vez se conseguiría llevar a la LOTC un cauce de participación de las CC. AA. en el procedimiento selectivo del Senado. Lo fue, en efecto, a través de una fórmula diversa ideada fundamentalmente por el Grupo socialista, pero con un consenso importante de los Grupos nacionalistas, y que fue acogida finalmente en el informe de la Ponencia del Congreso⁷³⁸, en unos términos que se mantuvieron hasta la publicación de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo⁷³⁹. Todo ello, por supuesto, no sin polémica alguna durante el trámite legislativo y una vez promulgada la ley, pues en esta materia, nunca

⁷³⁶ En este contexto cronológico, quizá entonces la participación autonómica y la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña no fue algo “sobrevenido” en la tramitación de la LOTC, según lo calificara Fernández Farreres, sino algo más bien convergente. Véase FERNÁNDEZ FARRERES, Germán José: “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, (Comentario a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo)”, en CARRILLO, Marc, (coord.): *Hacia una nueva jurisdicción constitucional, Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo de reforma de la LOTC*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, pág. 175.

⁷³⁷ Enmienda 17 de EAJ-PNV: “Los magistrados propuestos por el Senado serán designados en representación de las Comunidades Autónomas, a propuesta de la Comisión General de las Autonomías, previa consulta a las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas”. Enmienda 44 de ERC: “Los magistrados propuestos por el Senado serán designados en representación de las comunidades autónomas, a propuesta de la Comisión General de las Autonomías, previa consulta a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o, de haber alguna disuelta, al órgano colegiado de gobierno, de acuerdo con lo que establezca la Ley propia de cada Comunidad”. Enmienda 90 de CiU: “Los magistrados propuestos por el Senado serán designados con participación de las Comunidades Autónomas, a propuesta de la Comisión General de las Autonomías previa consulta a las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o, de haber alguna disuelta, al órgano colegiado de gobierno, de acuerdo con lo que establezca la Ley propia de cada Comunidad”. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Enmiendas e índice de enmiendas al articulado, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie a, núm. 60-7, VIII Legislatura, 23 de febrero de 2006, págs. 28, 40, y 55-56.

⁷³⁸ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Informe de la ponencia, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie a, núm. 60-9, VIII Legislatura, 5 de diciembre de 2006, págs. 71 y 73.

⁷³⁹ Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE núm. 125, del 25 de mayo de 2007).

estuvo de acuerdo la principal fuerza de la oposición, esto es, el Partido Popular.

Como ya lo hemos referido anteriormente, el precepto finalmente aprobado del art. 16.1 de la LOTC fue del siguiente tenor: “Los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara”.

La fórmula recogida parece una razonable solución de compromiso entre al menos dos posturas planteadas, en la cual se eliminaron los aspectos que resultaban más discutibles. En este sentido, se descartó la pretendida “representatividad autonómica” de los magistrados de designación senatorial y se retiró la intención de depositar el acto final de designación en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, como repetidamente se venía intentando por las fuerzas nacionalistas, residenciando este poder final de designación en el Senado, órgano facultado constitucionalmente para ello.

Se recogió, por otro lado, la idea subyacente en todas las propuestas, de introducir un canal de participación autonómico en el procedimiento de designación senatorial de magistrados constitucionales. Las propuestas planteaban al respecto la modificación de la estructura del acto selectivo, cambiando el original modelo de designación directa por uno de acto compuesto.

Este modelo de designación de acto compuesto se proponía de dos modos diversos. Por un lado, la designación *final* de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y la “consulta previa” a los *Parlamentos* autonómicos, según las enmiendas de los grupos nacionalistas. Por otro lado, la designación final del Senado y la “propuesta” de los *Gobiernos* autonómicos, según las disposiciones aprobadas en las reformas a los Estatutos de Autonomía, de Cataluña y Andalucía, en un primer momento, luego de Aragón y de Castilla y León⁷⁴⁰.

⁷⁴⁰ Al final los Estatutos aprobaron las siguientes disposiciones: art. 180: “la *Generalitat* participa en los procesos de designación de Magistrados del Tribunal Constitucional” (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, publicada en el BOE núm. 172, de 20 de julio de 2006); art. 224: la “Junta de Andalucía participa en los procesos de designación de los órganos constitucionales en los términos que dispongan las leyes o, en su caso, el ordenamiento parlamentario” (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, publicada en el BOE núm. 68, de 20 de

Como se puede conjeturar, las dos opciones fueron tomadas en cuenta para formular una tercera que fue la que finalmente se aprobó. Se tomó de las enmiendas de los Grupos nacionalistas la intervención de los Parlamentos autonómicos en el acto compuesto de designación (y no los “Gobiernos autonómicos” planteados en los Estatutos), y se dejó el acto final de designación al Senado como lo planteaban los Estatutos (y no la Comisión General de las Comunidades Autónomas planteadas en las enmiendas). Por otro lado, ya no se mantuvo el nivel de la participación autonómica bajo la fórmula de la “consulta previa”, sino que se optó por la formalización de una etapa de “presentación directa” de candidaturas a cargo de todos los Parlamentos autonómicos, si bien dejando los detalles para el Reglamento senatorial.

Al margen de la fórmula adoptada y las repercusiones que ésta ha tenido en la práctica, quizá convenga mencionar desde ahora la encendida crítica que se formuló, desde una parte de la doctrina, a la influencia que tuvo en la tramitación parlamentaria de la LOTC el contenido aprobado en los Estatutos de Autonomía de Cataluña y Andalucía⁷⁴¹. Se vio en ello, una suerte de ilegítimo condicionamiento sobre la tramitación de la LOTC⁷⁴². Quizá, llegados a tales extremos, convenga considerar que todas esas leyes orgánicas convivieron en buena parte de su tramitación en el Parlamento, y que

marzo de 2007); art. 89.4: “La Comunidad Autónoma participará en los procesos de designación de los miembros de las instituciones, organismos y empresas públicas del Estado con el alcance y en los términos establecidos por la legislación estatal” (Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, publicada en el BOE núm. 97, de 23 de abril de 2007); art. 58.2d: “La Comunidad, de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y en la legislación estatal, participará en los organismos y procedimientos de toma de decisiones del Estado que afecten a sus competencias y, en particular, en los siguientes ámbitos: d) Designación de los miembros de las instituciones, organismos y empresas públicas del Estado, en los términos establecidos en la legislación estatal” (Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, publicada en el BOE núm. 288, de 1 de diciembre de 2007).

⁷⁴¹ Influencia que se puede ver en las palabras de algunos diputados del Grupo socialista al justificar la fórmula de participación autonómica en el debate parlamentario. Se dijo en efecto, que con ello se abría “la participación de todas las comunidades autónomas, no solo de aquellas dos que ya lo tienen en sus estatutos de autonomía”. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, Comisiones, núm. 769, VIII Legislatura, 5 de marzo de 2007, pág. 19.

⁷⁴² SANZ PÉREZ, Ángel: “Comentario a la STC 49/2008: Las fuentes del Derecho parlamentario y el Senado”, en *Aranzadi Tribunal Constitucional*, núm. 9, septiembre, 2008, págs. 13-14: la “reforma ha venido propiciada (cuando no forzada) por la aprobación de las últimas reformas de los Estatutos de Autonomía”.

de alguna manera la participación autonómica en la designación senatorial de magistrados fue un acuerdo político significativo que se proyectó de forma transversal en las mismas. Desde esta perspectiva, no se trataría de un condicionamiento de una ley sobre otra, sino una común motivación legislativa sobre una pretensión que había estado aguardando por bastante tiempo⁷⁴³.

Volviendo al procedimiento legislativo de la reforma a la LOTC, quedan por mencionar las razones expuestas por la mayoría parlamentaria, respecto al nuevo párrafo aprobado al artículo 16.1. En este sentido, se estimó que esta fórmula era congruente con la naturaleza del TC, con el modelo autonómico, con el papel institucional del Senado y con los Estatutos de Autonomía aprobados. Se dijo que era, en efecto, una manera de reforzar el propio modelo autonómico español, lo cual “no cambia el modelo de Estado y, desde luego, ni fractura ni confederaliza nuestro tribunal ni mucho menos nuestro país. Es sencillamente la consecuencia más lógica de un modelo autonómico que quiere creer que las autonomías también son Estado”⁷⁴⁴.

Por otro lado, el Grupo popular se oponía a la reforma básicamente con las razones que venía sosteniendo en los anteriores proyectos de reforma de la LOTC, esto es, que se impondría al Senado un límite a la capacidad electiva de magistrados que no estaba prevista en la Norma Suprema. Como se puede ver, en términos generales, el debate parlamentario suscitado en torno a la idea de la participación autonómica ha sido muy similar a lo largo del tiempo. En esta ocasión, el hecho de que la reforma llegara a aprobarse, dio motivo para que el Partido Popular la objetara de inconstitucional ante el TC y así lo anunció desde el trámite parlamentario⁷⁴⁵.

7.2.1.- La STC 49/2008, de 9 de abril

⁷⁴³ Otros lo han expresado en términos de “coherencia legislativa”. Véase, URÍAS, Joaquín: “El Tribunal Constitucional ante la participación autonómica en el nombramiento de sus miembros”, en *Revista d’ Estudis Autònoms i Federals*, núm. 10, abril, 2010, pág. 210.

⁷⁴⁴ Diputado Jáuregui Atondo, en CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, Comisiones, núm. 769, VIII Legislatura, 5 de marzo de 2007, pág. 17.

⁷⁴⁵ CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas, Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, Pleno y Diputación Permanente, núm. 240, VIII Legislatura, 15 de marzo de 2007, pág. 12140.

Dos meses después de la publicación de la reforma a la LOTC, el 27 de julio de 2007, fue presentado el recurso de inconstitucionalidad (núm. 6729/2007) que había sido anunciado en los trabajos parlamentarios por los diputados del Grupo parlamentario popular en el Congreso⁷⁴⁶. La tramitación del recurso estuvo envuelta en un ambiente verdaderamente áspero de incidencias procesales, donde hoy no son pocos los que consideran que el TC fue objeto de una feroz contienda entre algunas fuerzas políticas por hacer prevalecer sus pretensiones.

En primer término, considérese que, como nunca se había visto, dos magistrados solicitaron la dimisión de la Presidenta y del Vicepresidente del Tribunal⁷⁴⁷, luego la tramitación del recurso padeció las abstenciones de quienes ostentaban dichos cargos, al impugnarse un precepto que les afectaba

⁷⁴⁶ En la fórmula habitual de la sentencia, se alude a que el recurso fue presentado por “más de cincuenta Diputados”, número mínimo que habilita para la presentación del recurso en términos legales (32.1c LOTC). Sin embargo, para ser exactos, el escrito fue respaldado por 68 diputados del Grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados.

⁷⁴⁷ Un extracto de la carta se publicó en el diario *El País*, en su edición del 24 de septiembre de 2007. Se transcribe con el fin de reflejar el alto grado de tensión que esta materia despertó en el seno del TC: “Como ya manifestamos en su despacho el pasado 13 de junio, en presencia del Vicepresidente de este Tribunal, Excmo. Sr. D. Guillermo Jiménez Sánchez, cuando fuimos convocados (...) para darnos cuenta del resultado de las gestiones realizadas con líderes políticos respecto a la modificación de nuestra Ley Orgánica operada por la LO de 24 de mayo de 2007, dejamos constancia de nuevo en este escrito de nuestra más profunda discrepancia tanto con la forma como con el contenido de la explicación que se nos ofreció y con el resultado de la reforma en el punto relativo a la prórroga del mandato actual con Presidenta y Vicepresidente del tribunal, respectivamente. Esta situación deslegitima -en nuestra opinión- la permanencia en los cargos referidos de Presidenta y Vicepresidente a partir del día 16 de junio de 2007, fecha en que correspondía renovarlos dada la terminación del mandato el día precedente, según los términos del artículo 160 de la C. E. La irregularidad se acrecienta al no haber tomado el Pleno de este Tribunal en tiempo adecuado decisión alguna al respecto, como único órgano competente para proceder sobre tal extremo, según el ya citado precepto del Texto Constitucional, dado que se continúa en el ejercicio de funciones como Presidenta y Vicepresidente. La LO 6/2007 de 24 de mayo (de reforma de la LO 2/1979 del TC) no ofrece cobertura para ello. Además de entrar en vigor inmediatamente, sin periodo de *vacatio legis*, tampoco se refiere en su Exposición de Motivos ni expresa ni tácitamente -como hace pormenorizadamente con el resto de las modificaciones operadas- a la reforma introducida en el párrafo 3º del artículo 16 [se reproduce en la carta] en el extremo que ahora interesa. A nuestro entender, se propicia así una situación que nos obliga, en conciencia, a solicitar la dimisión de VV. EE. que fundamos en las siguientes razones: 1.- Si se aplica en este caso, la norma carecería de vocación de generalidad porque fácticamente operaría sobre la actual situación. 2.- Puesto que el artículo 160 de la Carta Magna atribuye con absoluta exclusividad al Pleno del Tribunal la elección de su Presidente por un concreto mandato de tres años, en este caso se ha generado una situación que carece precedentes en los Tribunales Constitucionales de nuestro entorno e incluso en este mismo órgano, dado que los supuestos en que ha habido prórroga del mandato de algunos de los presidentes del Tribunal (...) fue el Pleno quien la acordó, como no podía ni puede ser de otra manera y a virtud de los preceptuado en el referido artículo 160, en relación con el art. 9.3. de la LOTC, incluso en su versión reformada”.

como era el de la prórroga automática prevista en el nuevo artículo 16.3 de la LOTC (ATC 387/2007, de 16 de octubre).

De igual forma, se presentaron un total de cinco recusaciones: primero una recusación conjunta promovida por el Gobierno contra dos magistrados (Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata) y luego otra igualmente conjunta promovida por los recurrentes (más de cincuenta diputados del Grupo popular) contra otros tres magistrados como “reacción” a la primera (Pascual Sala Sánchez, Manuel Aragón Reyes y Pablo Pérez Tremps).

En las recusaciones se llega a apreciar que “la pérdida de imparcialidad no se predicaba de cada concreto Magistrado, sino de dos grupos aglutinados alrededor de una división ideológica o partidista”⁷⁴⁸. El Tribunal, por otro lado, no resolvió por orden de presentación tales recusaciones: primero inadmitió a trámite las planteadas por los recurrentes contra tres magistrados (ATC 443/2007, de 27 de noviembre) y luego estimó las promovidas por el Gobierno contra dos magistrados (ATC 81/2008, de 12 de marzo)⁷⁴⁹.

Todo ello dejó cierta sensación de que los recusantes habían intervenido en la autonomía del TC con fines manipulativos usando indebidamente los instrumentos procesales; también se echó en falta una reacción del Tribunal más contundente para impedirlo.

Con la abstención de la Presidenta y del Vicepresidente, y la recusación de dos magistrados, el colegio de magistrados que resolvió el recurso se redujo a ocho integrantes, de los cuales cinco lograron la mayoría para desestimar el recurso mediante la STC 49/2008, de 9 de abril. Se registraron además tres votos particulares de los magistrados Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado Barrio y Ramón Rodríguez Arribas. Que un recurso de inconstitucionalidad contra una reforma tan importante y polémica a la LOTC se

⁷⁴⁸ REQUEJO PAGÉS, Juan Luis: “Doctrina del Tribunal Constitucional durante el tercer cuatrimestre de 2007”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 82, 2008, pág. 278. Véase igualmente en el número 83 de esa Revista, la crónica de doctrina constitucional durante el primer cuatrimestre de 2008, en las págs. 209-211.

⁷⁴⁹ Una breve crónica sobre tales incidencias procesales y demás circunstancias contextuales en URÍAS, Joaquín: “El Tribunal Constitucional ante la participación autonómica en el nombramiento de sus miembros”, en *Revista d’ Estudis Autonòmics i Federals*, núm. 10, 2010, págs. 211-214. Otros estudios más específicos de la materia: DELGADO DEL RINCÓN, Luis Esteban: “La recusación de los Magistrados del Tribunal Constitucional (Comentario al ATC 26/2007, de 5 de febrero)”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 28, 2008, págs. 383-392; y CALVO SÁNCHEZ, María del Carmen: “La recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional: auto de 27 de noviembre de 2007”, en *Justicia: Revista de Derecho Procesal*, núm. 1-2, 2008, págs. 53-126.

decidiera por cinco magistrados de los doce que ordinariamente integran el TC, es una de las notas más críticas que algún sector de la doctrina ha subrayado de esta sentencia⁷⁵⁰.

Los recurrentes, en lo que aquí interesa, tacharon de inconstitucional el multicitado nuevo párrafo del artículo 16.1 de la LOTC, que previó la participación autonómica en la designación senatorial de magistrados, remitiendo a la correspondiente fuente reglamentaria para su desarrollo.

Ante ese párrafo, los recurrentes adujeron en términos generales, que producía un desapoderamiento de las competencias del Senado, haciendo de su intervención en la designación de los magistrados un acto meramente formal y debido, ya que la Cámara se vería sometida a las propuestas que hubieran hecho las CC. AA.

Sin embargo, tal planteamiento es rechazado en la sentencia y, por el contrario, se argumenta que la sustantividad de la designación final queda residenciada en el Senado, aunque se prevean las propuestas autonómicas. Se plantea que tal y como estaba redactado el párrafo impugnado, no puede en ese momento deducirse que la intervención autonómica suplantaría la facultad senatorial porque había que esperar a los términos que detallara el Reglamento del Senado.

En efecto, en la sentencia se hace la distinción entre dos momentos de la elección de magistrados: una primera de presentación de candidatos por parte de los Parlamentos autonómicos y una segunda consistente en la elección final de los mismos por el Senado, aunque deba realizarse “entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas”, lo cual, según se destaca en la sentencia, será en “los términos que determine el Reglamento de la Cámara”.

En la sentencia se destaca significativamente esta última remisión al Reglamento parlamentario debido a que precisamente sobre ella el Tribunal apoyará la interpretación que lo llevará a declarar la constitucionalidad del precepto impugnado. Para los magistrados de la mayoría, la remisión íntegra al Reglamento del Senado constituye el rasgo más destacado que contempla la

⁷⁵⁰ Para REQUEJO PAGÉS es la “peor crítica que cabe hacer”: “Doctrina del Tribunal Constitucional durante el primer cuatrimestre de 2008”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 83, 2008, pág. 211.

nueva regulación porque introduce una importante “nota de apertura” en el régimen jurídico de la elección senatorial de magistrados constitucionales, que permite abrir “necesariamente las puertas a múltiples desarrollos”, con lo cual se otorgan al Senado posibles márgenes de maniobra (FJ 9).

La nota de apertura, según se argumenta, no es sólo predicable de la primera fase (presentación de candidatos), sino también, de la segunda, esto es, de la elección definitiva de los magistrados por parte del Senado, ya que el precepto lo que exige es que la designación se realice “entre” los candidatos presentados por los Parlamentos autonómicos, pero de nuevo está presente la remisión expresa a que se hará en “los términos que determine el Reglamento de la Cámara”.

La remisión al Reglamento parlamentario permite también múltiples desarrollos, pues deja abiertas cuestiones tales como “si es posible la presentación de nuevos candidatos si los presentados no son suficientes, no se presentan en tiempo y forma, o si se considera que no cumplen los requisitos exigidos constitucionalmente para integrar el Tribunal Constitucional”. Por lo tanto, concluye el Tribunal, que “la expresión ‘entre los candidatos’ no tiene, pues, que ser interpretada necesariamente en un sentido que excluya cualquier posible margen de maniobra por parte del Senado”, además, aunque se entendiese en sentido restringido, la misma presupone la existencia de diversos candidatos y por tanto, la posibilidad de elegir a unos y descartar a otros.

Como se puede observar, para el TC el precepto impugnado admite otras lecturas que salvan su constitucionalidad, por lo tanto, no estima el recurso, pues de lo contrario, el control de la constitucionalidad que del mismo haría, hubiera sido preventivo, situación que, por tratarse del control de su propia Ley Orgánica, debía extremarse, pues el control de ésta, expresa la sentencia, “nos obliga a reservar tales pronunciamientos a las infracciones evidentes e insalvables del texto constitucional” (FJ 9).

Más allá de la interpretación extensiva que finalmente salvó la constitucionalidad del precepto impugnado, en la sentencia se abordan además una serie de planteamientos de índole material que tienen que ver con la concreta opción tomada por el legislador en la configuración del precepto. Esto es, se analiza y pregunta si la participación autonómica en el procedimiento

selectivo de magistrados constitucionales está constitucionalmente prohibida, si tiene fundamento constitucional legítimo y si resulta compatible con el modelo de jurisdicción constitucional que se deriva de la Constitución.

Sobre si tiene fundamento constitucional la introducción de la participación autonómica, entiende que ningún precepto constitucional impide una previsión de ese tenor, además, recuerda su doctrina consolidada sobre la Constitución, la cual considera como un ámbito normativo interrelacionado que no se limita a ser un conjunto de normas que deban ser ejecutadas o un programa a desarrollar, “sino un marco de coincidencias lo suficientemente amplio como para que dentro del mismo quepan opciones políticas de diverso signo”⁷⁵¹, por lo que con estas razones, no puede deducirse que exista una prohibición constitucional absoluta para integrar otro mecanismo de participación de las CC. AA (FJ 12).

Sobre el fundamento constitucional legítimo de la reforma, en la sentencia se alude al carácter que la CE adjudica al Senado de “Cámara de representación territorial”, lo cual puede expresarse y desarrollarse no sólo en las funciones del propio Senado, sino en el ejercicio de sus facultades, en las relaciones con el resto de órganos constitucionales y, concretamente, en la elección de los miembros del TC que le corresponden (FJ 13)⁷⁵².

Con respecto a la compatibilidad con el modelo de jurisdicción constitucional, la mayoría destaca cómo el modelo resulta inalterado pues la facultad de nombramiento del Senado no se pone en cuestión, la participación autonómica se limita a una fase de presentación de candidatos, pero sigue siendo el Senado el órgano titular que decide sobre la elección (FJ 14).

Algunas otras tachas de inconstitucionalidad de los recurrentes tuvieron relación con el sistema de fuentes entendiendo que la introducción de la participación autonómica mediante una reforma a la LOTC, violaba la reserva

⁷⁵¹ Doctrina que, según refiere el propio TC, ha sido sustentada en las SSTC 11/1981 de 11 de abril, FJ 7; 194/1989 de 16 de noviembre, FJ 2; 197/1996, 28 de diciembre, FJ 8; 236/2007, 7 de noviembre, entre otras.

⁷⁵² Para REQUEJO PAGÉS el argumento de la legitimidad del fin perseguido no le parece convincente, porque el fin perseguido no puede justificar un medio contrario a la Constitución. La Constitución ha fijado específicamente al Senado para que designe cuatro magistrados en términos de libertad, y la reforma, que viene a restringir esa libertad, no puede justificarse, en aras de hacer casar el carácter territorial de la Cámara. Un carácter territorial que, ciertamente, la Constitución no ha sido enteramente consecuente en la modelación del Senado. Véase REQUEJO PAGÉS, Juan Luis: “Doctrina del Tribunal Constitucional...”, op. cit., pág. 214.

del Reglamento parlamentario. En la sentencia, sin embargo, el TC considera que la vía de la reforma legal fue la correcta, e incluso especifica que “únicamente la LOTC y no cualquier otra ley pueden desarrollar la institución del Tribunal Constitucional en todos sus ámbitos en que quepa tal desarrollo, bien por requerirlo la Constitución, bien porque no esté constitucionalmente impedido” (FJ 16).

Asentado lo anterior, no obstante el TC reconoce que efectivamente la norma impugnada afecta al modo de ejercicio de una facultad del Senado y que ésta debiera regularse por el Reglamento de la Cámara, pero enseguida razona que a la luz del concreto contenido de la reforma, se declara que no se vulnera la reserva parlamentaria (72.1 CE), porque ésta excede claramente de la vida interna del Senado al dar entrada a los Parlamentos autonómicos en el ejercicio de la presentación de propuestas de magistrados constitucionales (FJ 15), es decir, no se trata de un supuesto de los llamados actos “*interna corporis*”.

Rechazados los motivos principales de inconstitucionalidad esgrimidos por los recurrentes, consecuentemente también lo fueron las tachas de inconstitucionalidad conexas que se presentaron tales como la pretendida vulneración del principio de representación nacional, la discriminación del Senado respecto del Congreso de los Diputados, la alteración del sistema de distribución de competencias entre el Estado y las CC. AA. y el estatuto constitucional de los senadores.

Por otro lado, es necesario destacar los votos particulares de los magistrados disidentes porque presentan argumentaciones muy interesantes⁷⁵³. El elemento común de los magistrados disidentes es esencialmente la consideración de que, claramente, del texto de la reforma y de su sentido lógico, lo que se produce es el desapoderamiento, o al menos una grave restricción, de la función electiva de los magistrados constitucionales atribuida al Senado.

⁷⁵³ Para Marc CARRILLO, sin embargo, en los tres votos disidentes predomina “un especial apego a la interpretación literal de la CE”. “Comentario a la STC 49/2008, de 9 de abril, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 6729/2007, interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, contra el artículo único, apartados seis y siete, de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en CARRILLO, Marc (coord.): *Hacia una nueva jurisdicción constitucional. Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo de reforma de la LOTC*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, pág. 287.

Los magistrados parten a grandes rasgos de la base de que el artículo 159.1 de la CE relativo a la composición, facultades de los órganos a los que se atribuye la competencia para el nombramiento de los magistrados del TC y las respectivas condiciones de elegibilidad de los candidatos, son suficientemente detalladas y exhaustivas y no cabe desarrollo legal alguno, por lo que son materias cerradas a la disponibilidad del legislador. Si el legislador orgánico dispone que el Senado deberá elegir a los magistrados “entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas” se introduce una restricción inadmisibles a la capacidad electiva del Senado y se cercena su margen de actuación.

Para los magistrados disidentes, lo que en realidad la mayoría ha hecho en la sentencia es “hacer decir a la reforma legal lo que, evidentemente, no dice” (VP de Ramón Rodríguez Arribas, apartado 1); es “salvar la constitucionalidad del precepto impugnado, a base de difuminar el sentido claro de lo que dice, convirtiéndolo en la interpretación de la Sentencia en un precepto distinto, irreconocible en su prístino sentido” (VP de Vicente Conde Martín de Hijas, apartado 5).

7.2.2.- La STC 101/2008, de 24 de julio

A fin de articular la nueva disposición de la LOTC, que disponía la participación autonómica en la designación de los magistrados constitucionales a cargo del Senado, tuvo que operarse una modificación en el Reglamento del mismo, el cual fue aprobado con el voto en contra del PP. Esta reforma fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Grupo parlamentario popular en el Senado que finalmente fue desestimado por el TC en la STC 101/2008, de 24 de julio.

En el recurso fueron presentados reproches de inconstitucionalidad similares a los aducidos en el recurso resuelto por la STC 49/2008, de 9 de abril, los cuales, al guardar relación directa con la doctrina asentada en ésta, fueron desechados.

Ahora bien, con respecto a las tachas de inconstitucionalidad que incidieron específicamente sobre la reforma del RS, la más contundente consistió básicamente en el desapoderamiento del Senado de una de sus

funciones constitucionales como es la selección de los magistrados constitucionales, pues en opinión de los recurrentes, el precepto impugnado impedía al Senado descartar a los candidatos presentados por los Parlamentos autonómicos que no reunieran los requisitos constitucional y legalmente establecidos para ser nombrados magistrados del TC, con lo que el contenido del acto decisor, se trasladaba del Senado a los Parlamentos autonómicos.

A esta tacha de inconstitucionalidad el Tribunal declaró que no existía tal desapoderamiento “pues el propio precepto impugnado claramente deja en manos de la Cámara Alta la facultad de controlar que los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas cumplen los requisitos exigidos” (FJ 4). Para apoyar lo anterior, en la sentencia se realiza un análisis del concreto contenido del precepto impugnado poniéndolo en relación con el resto de disposiciones reglamentarias que norman la elección o selección de personas para ocupar cargos públicos en órganos constitucionales y otros órganos estatales, previsto en el apartado correspondiente del RS.

La proposición inicial de candidatos por parte de las CC. AA. no garantiza la elección en las subsiguientes fases del procedimiento de designación. El Tribunal para ello, señala que corresponde a la propia Mesa de la Cámara el control inicial de las candidaturas en el momento de la admisión a trámite y posteriormente corresponderá a la Comisión de Nombramientos del Senado examinar la idoneidad de las candidaturas admitidas a efecto de elevar al Pleno la propuesta correspondiente. La definitiva fase de selección vendrá con la participación del Pleno del Senado, en la que los senadores, libremente y con voto secreto decidirán sobre la designación de los magistrados.

En el transcurso del procedimiento selectivo –se señala en la sentencia-, corresponderá la valoración de las mismas a los órganos del Senado (Mesa, Comisión de Nombramientos, Pleno), de acuerdo al procedimiento que la misma Cámara ha previsto a través de su Reglamento. En esa valoración, no sólo se examinará el cumplimiento de los requisitos objetivos de los candidatos presentados por las CC. AA. para ser nombrados magistrados del TC, sino también los requisitos subjetivos que concurren con un juicio de valor que corresponde hacer al Senado mismo y que lo constriñe a elegir a los cuatro concretos candidatos bajo su entera discrecionalidad política.

Teniendo presente las anteriores consideraciones en torno a la posibilidad de que los diversos órganos del Senado puedan estimar que ciertos candidatos no superan los exámenes de valoración y, por tanto, la posibilidad de rechazar la respectiva candidatura, en la sentencia se acude a un sugerente ejercicio de interpretación, tomando como base un apartado de la reforma reglamentaria que prevé una situación excepcional como sería aquella en que la propuesta que se elevase al Pleno pudiera incluir otros candidatos si “no se hubieran presentado en plazo candidaturas suficientes”.

Aunque de la formulación literal de éste último precepto viene referido al caso de que no se hubieran presentado en plazo candidaturas suficientes por parte de las CC. AA. (supuesto además poco probable), la sentencia estima, en línea con las alegaciones presentadas en el recurso por el propio Senado, que la palabra “suficientes” deberá entenderse no sólo en un sentido cuantitativo, sino que también tendrá que considerarse su aspecto cualitativo o de mérito. Es decir, no sólo se refiere a la presentación de candidatos en número bastante en relación con los puestos a cubrir, sino que también habrá que atender a si los candidatos resultaban aptos e idóneos para el cargo a juicio de los órganos del Senado⁷⁵⁴.

De esta manera, la insuficiencia de candidatos, no sólo sería la falta numérica de éstos, sino también, la derivada de la no aceptación de las candidaturas por la Comisión de Nombramientos y en última instancia, por el Pleno del Senado. Con esa interpretación, la sentencia intenta poner de manifiesto que los órganos del Senado tienen la entera facultad de rechazar las candidaturas presentadas por las CC. AA. e introducir a otros candidatos de acuerdo a su particular criterio, con lo que la libertad institucional del Senado en el procedimiento de selección queda garantizada, por eso, ninguna objeción cabe a que, en principio, sean presentadas candidaturas por las CC. AA.⁷⁵⁵.

⁷⁵⁴ Con ello, como bien lo resume PULIDO QUECEDO, el TC sostuvo “el derecho de propuesta de los parlamentarios de las CC. AA., pero reservaba el fondo de poder constituido del Senado para elegir a candidatos no propuestos por las CC. AA. y salvar así la dicción literal del artículo 159 CE”. PULIDO QUECEDO, Manuel: “La Reforma del Reglamento del Senado y el nombramiento de Magistrados constitucionales”, en *Aranzadi del Tribunal Constitucional*, núm. 16, 2008, págs. 9-10.

⁷⁵⁵ TORRES MUÑOZ comenta al respecto que en el fondo lo que el TC ha hecho, fue configurar una válvula de seguridad para darle una salida a una situación que amenazaba con complicarse en supuestos límite al interpretar, en el apartado relativo a la posibilidad de elevar al Pleno candidatos distintos a los presentados por los Parlamentos autonómicos cuando no se hubieran presentado en plazo “candidaturas suficientes”, entendiendo por “suficientes” también

La sentencia de igual forma, mereció el voto particular de dos de los magistrados que en STC 49/2008 lo habían emitido, a saber, Vicente Conde Martín de Hijas y a Javier Delgado Barrio, sumándose en esta ocasión, el Magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien como se recordará, fue recusado en el anterior proceso. En los votos disidentes se pueden apreciar diversos pronunciamientos de sentida relevancia porque enriquecen el debate jurídico sobre temas muy sensibles de la jurisdicción constitucional, por lo que resulta aconsejable su lectura.

Para referir algunos de los comentarios críticos presentes en los votos particulares, puede mencionarse el duro señalamiento que se hace con respecto a la forma manipulativa con que la mayoría ha interpretado el precepto recurrido a fin de salvar su constitucionalidad. Por ejemplo, en el tratamiento sobre las “candidaturas suficientes”, los disidentes destacan que en el contexto normativo en el que se encuentra ese precepto, está referido inequívocamente al número de candidaturas presentadas por las CC. AA., sin embargo es interpretado de una manera que logran amparar en él una facultad de rechazo contrario a la idea de la participación autonómica en la designación de magistrados prevista por el art. 16.1 de la LOTC.

En general, para estos magistrados no se han respetado los límites que la propia doctrina del Tribunal ha ido asentando con respecto a la interpretación conforme de los preceptos tachados de inconstitucionales; subrayan también que en los trabajos parlamentarios quedó de manifiesto cómo se desechó una frase que permitía a la Comisión de Nombramientos presentar otros candidatos cuando a su juicio los propuestos por las autonomías no reunieran los requisitos exigidos. Con ello, la intención del legislador de no contemplar ese supuesto resultaba muy clara, sin embargo, ésta *voluntas legislatoris* ha sido minimizada con la interpretación realizada por la mayoría⁷⁵⁶.

aquellos supuestos en que se estimasen que no fueren aptos e idóneos los candidatos, para “descafeinar relativamente la exigencia de que las propuestas del Senado deban partir de las sugerencias autonómicas”. TORRES MURO, Ignacio: “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del Reglamento del Senado, puesta a prueba (SSTC 49/2008, de 9 de abril y 101/2008, de 24 de julio)”, en *Revista General de Derecho Constitucional*, núm. 6, 2008, pág. 20.

⁷⁵⁶ En el voto particular del Magistrado Conde se refiere el Diario de Sesiones de la Comisión de Reglamento del Senado de 13 de noviembre de 2007, donde se aprobó la enmienda que descartó precisamente la interpretación dada al precepto por la mayoría, esto es, la posibilidad de que el Senado designe candidatos distintos a los presentados por los Parlamentos autonómicos, cuando “los candidatos presentados no reunieran, a juicio de la Comisión, los

7.2.3.- El procedimiento selectivo adoptado en la normativa parlamentaria autonómica

Antes de pasar a valorar el novedoso cauce de participación autonómica que finalmente se ha conseguido en la designación de magistrados del TC, conviene tener presente -al menos de manera panorámica- la forma en que los Parlamentos autonómicos normaron los procedimientos de proposición de candidaturas al Senado. Para ello, partiremos de la clasificación inicial de la normativa autonómica realizada en su momento por Blanca Cid Villagrasa⁷⁵⁷, y luego se describirán los procedimientos de forma general.

(i) Cid Villagrasa distingue, por un lado, a las Comunidades que han previsto de forma concreta el procedimiento acudiendo a las facultades interpretativas que se reconocen a los órganos que presiden las Cámaras. Por otro lado, se encuentran las Comunidades que no han utilizado este tipo de normativa, sino que han llevado a cabo el procedimiento de acuerdo a las disposiciones aplicables de sus Reglamentos parlamentarios, en especial, en los apartados atinentes a la elección o designación de personas a cargo de la Cámara.

Las Asambleas Legislativas autonómicas que se han decantado por la elaboración de una normativa específica del procedimiento constituyen la mayoría. Se trata, en efecto de doce Parlamentos autonómicos⁷⁵⁸, algunos de los cuales los han hecho por Acuerdo de la Mesa y otros por Resolución de la Presidencia. Los que se han decantado por atender al Reglamento de la Cámara, son los Parlamentos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura y Asturias.

Más allá de esa primera clasificación, se debe mencionar que hubo dos Parlamentos autonómicos que en la primera puesta en práctica del

requisitos exigidos". La enmienda referida en el voto particular, fue la planteada por el señor Jorquera Caselas, del *Bloque Nacionalista Galego*, y fue aprobada con trece votos a favor y doce en contra. SENADO: "Dictaminar la Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 184", en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión de Reglamento, núm. 531, VIII Legislatura, 13 de noviembre de 2007, págs. 2-5.

⁷⁵⁷ CID VILLAGRASA, Blanca: "La normativa seguida por los Parlamentos autonómicos para presentar candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional ante el Senado", en *Asamblea, Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, núm. 9, diciembre 2008, págs. 397-422.

⁷⁵⁸ Se trata de los siguientes: Parlamento de Andalucía, Cortes de Aragón, Parlamento de Canarias, Cortes de Castilla-La Mancha, Cortes de Castilla y León, Parlamento de Galicia, Parlamento de la Rioja, Asamblea de Madrid, Asamblea Regional de Murcia, Parlamento de Navarra, el Parlamento Vasco y el Parlamento de las Islas Baleares.

procedimiento finalmente no elevaron al Senado propuesta alguna de candidatos. Uno fue el Parlamento de las Islas Baleares, pese a que había elaborado una normativa de Presidencia al respecto⁷⁵⁹, y otro fue la Junta General del Principado de Asturias, que ni elaboró normativa especial ni propuso candidatos, sino que directamente comunicó que no los presentaría.

En las exposiciones de motivos que han sustentado la elaboración de las normativas por parte de la Presidencia, las dos ideas principales que se han expresado son la consideración de ese tipo de designaciones de especial relevancia y la constatación de carecer de una norma reguladora de la materia.

En términos generales, se puede decir que quienes han optado por la regulación específica del procedimiento, generalmente han detallado en mayor medida los rasgos del mismo, si se compara con aquéllas que han acudido a sus Reglamentos, los cuales en materia de elección o nombramiento de cargos públicos suelen contar con disposiciones breves, de reenvío o desarrollo⁷⁶⁰ y reglas que pueden resultar aplicables que están dispersas por todo el Reglamento (por ejemplo, las disposiciones de Cantabria y Asturias, que son además, similares). Tres significativas excepciones caben a lo anterior. Se trata de los Reglamentos del Parlamento de Cataluña, de las Cortes Valencianas, y de la Asamblea de Extremadura, que contienen preceptos iguales o más detallados que muchas resoluciones de Presidencia⁷⁶¹.

(ii) Dicho lo anterior, procederemos ahora a mencionar de forma transversal los procedimientos previstos en la normativa autonómica en la materia, destacando los aspectos más importantes. En general, se puede decir que el trámite legislativo no ha diferido de la línea general marcada por las Cámaras nacionales, aunque es verdad que pueden encontrarse algunas particularidades, a las cuales se hará una breve mención.

⁷⁵⁹ Se trata de las “Normes reguladores del procediment per a la designació de candidats a magistrats del Tribunal Constitucional” (publicadas en el *Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears*, núm. 51, VII Legislatura, 12 de setembre del 2008, pág. 1563).

⁷⁶⁰ Por ejemplo, en los Reglamentos de Asturias (art. 225.3) y Cantabria (art. 192.3) se prevé que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, dictará las disposiciones complementarias a que pudiera haber lugar, esto es, se previene la facultad interpretativa de la Mesa para llenar las lagunas o interpretar las disposiciones del Reglamento. Además de que se deja a la propia Mesa establecer la fórmula de sufragio restringido en función del número de nombramientos a efectuar y de la composición de la Cámara.

⁷⁶¹ Art. 178 del Reglamento de las Cortes Valencianas; el art. 157 del Parlamento de Cataluña; y los arts. 251 y 252 de la Asamblea de Extremadura.

Naturalmente, no todos los ordenamientos disponen del mismo grado de concreción procedimental. Como ya se decía, algunas normativas especiales han resultado más detalladas que el propio Reglamento, pero en otras ocasiones ha sido al revés. En cualquier caso, se entiende que el recurso de acudir a la Presidencia (oída la Junta de Portavoces) para regular aspectos de detalle, quedará siempre disponible.

Entre quienes han proveído la normativa específica en la materia mediante Resolución de Presidencia o de la Mesa, conviene aclarar que unos pocos la han realizado para el caso concreto (Canarias, La Rioja, Región de Murcia)⁷⁶², mientras que la mayoría ha optado por elaborar unas disposiciones con un marcado carácter general.

Todos los procedimientos dan inicio con la apertura de un plazo de presentación de candidaturas, aunque no todas las normativas autonómicas lo dispongan expresamente o al menos de forma directa, pues resultarán de aplicación los fijados para llevar el curso de otros procedimientos.

El plazo debe ser fijado e informado por la Mesa de la Cámara (Aragón, Galicia, Navarra, País Vasco, Extremadura) o su Presidente (Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Comunidad Valenciana). Para algunos, la confección del plazo queda al libre criterio del órgano convocante (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana, Extremadura), o bien se establecen algunas directivas para el mismo, como puede ser el establecimiento de plazos máximos (Andalucía no superior a diez días) o plazos predeterminados (en Cataluña quince días antes del inicio de la sesión).

⁷⁶² La normativa del Parlamento de Canarias directamente fijó que “la presentación de candidatos podrá hacerse hasta las diez horas del día 12 de diciembre de 2007” (regla primera del “Procedimiento para la designación de candidatos a magistrados”, publicada en el *Boletín Oficial del Parlamento de Canarias*, núm. 94, VII Legislatura, 30 de noviembre de 2007, págs. 1-2). En el caso de La Rioja, se fijó en la Resolución de Presidencia el plazo de presentación de candidatos el día 25 de septiembre de 2008 a las 10:00 horas (regla primera de la “Resolución de la Presidencia estableciendo las normas reguladoras del procedimiento de designación de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional”, publicada en el *Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja*, núm. 35, serie a, VII Legislatura, 19 de septiembre de 2008, pág. 784). En la Región de Murcia directamente se previno que las reglas serían aplicables “para esta concreta ocasión” (regla primera de la “Resolución de la Presidencia, reguladora del procedimiento para la designación de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional”, publicada en el *Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia*, núm. 41, VII Legislatura, 29 de septiembre de 2008, pág. 1885). La normativa balear fijó entre sus considerandos el plazo dado por el Senado para la presentación de las candidaturas, esto es el 29 de septiembre de 2008.

En el caso de la Asamblea de la Región de Murcia, nada se previó en su normativa de Presidencia acerca del plazo ni el órgano responsable de fijarlo⁷⁶³, mientras que en las Islas Baleares la normativa deja tales extremos (y otros) al arbitrio de “la Mesa, de conformidad con la Junta de Portavoces”⁷⁶⁴, al igual que los Reglamentos de Asturias y Cantabria.

Los órganos facultados para presentar las candidaturas en todos los casos son los Grupos parlamentarios, ya sea en forma individual, conjunta o contemplando la posibilidad de acordar entre todos una única candidatura (Castilla-La Mancha, La Rioja, Islas Baleares)⁷⁶⁵. La excepción a esta regla se observa en la normativa de Navarra, la cual faculta además a la “Agrupación de Parlamentarios Forales”, una institución dirigida a los parlamentarios de una misma formación política que estén integrados en el Grupo mixto, para que puedan constituirse en una figura a la que se le reconocen los mismos derechos que a los Grupos parlamentarios⁷⁶⁶.

En unos casos, se habilita a los Grupos para presentar una sola candidatura (Aragón, Canarias), en otras se limita el número máximo a dos (Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco). Otras han optado por fórmulas más generales, como es el caso de la Comunidad Valenciana donde se alude a “un número máximo de candidatos” que corresponda al de puestos a cubrir (178.1 R), o Cataluña, que

⁷⁶³ Véase la “Resolución de la Presidencia, reguladora del procedimiento para la designación de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional” (publicada en el *Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia*, núm. 41, VII Legislatura, 29 de septiembre de 2008, pág. 1885).

⁷⁶⁴ Normes reguladores del procediment per a la designació de candidats a magistrats del Tribunal Constitucional (*Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears*, núm. 51, VII Legislatura, 12 de setembre del 2008, pág. 1563).

⁷⁶⁵ Regla cuarta de la normativa de Castilla-La Mancha, regla tercera en La Rioja y en las Islas Baleares. Véanse respectivamente: Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, de 14 de abril de 2008, por el que se aprueban las normas reguladoras del procedimiento para la designación por el Pleno de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional (*Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha*, núm. 43, VII Legislatura, 18 de abril de 2008, pág. 926); Resolución de la Presidencia estableciendo las normas reguladoras del procedimiento de designación de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional (*Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja*, núm. 35, serie a, VII Legislatura, 19 de septiembre de 2008, pág. 785); Normes reguladores del procediment per a la designació de candidats a magistrats del Tribunal Constitucional (*Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears*, núm. 51, VII Legislatura, 12 de setembre del 2008, pág. 1563).

⁷⁶⁶ Regla segunda de las “Normas para la designación de los dos candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde presentar al Parlamento de Navarra ante el Senado” (*Boletín Oficial del Parlamento de Navarra*, núm. 40, VII Legislatura, 17 de diciembre de 2007, pág. 11). La Agrupación de Parlamentarios Forales se encuentra normada en la “Resolución de la Presidencia, de 22 de junio de 2007, regulando el funcionamiento y organización del Grupo Parlamentario Mixto” (*Boletín Oficial del Parlamento de Navarra*, núm. 1, VII Legislatura, 25 de junio de 2007, pág. 4).

refiere un número de candidatos de “conformidad con las condiciones que cada ley establece” (157.1 R), mientras que en las Islas Baleares no se ha especificado nada al respecto.

De forma única y ciertamente discutible, el Reglamento parlamentario extremeño fija la presentación de candidaturas a favor de los Grupos parlamentarios “en proporción al número de sus miembros” (252.1 a, R). Esta norma se complementa con aquélla que deposita el poder de sustituir los cargos de terminación anticipada, al Grupo parlamentario que propuso la candidatura (252.1 e, R). Esto es, se trata de una perspectiva que no deja de suscitar, por un lado, la formalización de cierta lógica de identificación de la plaza con la fuerza política que la propuso y, por otro, fomenta la visión del procedimiento selectivo bajo la óptica del reparto de plazas por cuotas de acuerdo a la fuerza política del Grupo, cuando, por el contrario, de lo que se trataría es de ofrecer un candidato idóneo de consenso, más allá de la fuerza numérica de los Grupos parlamentarios.

Por otro lado, en Madrid y en Murcia, se ha entendido que “una candidatura” podría comprender hasta dos nombres, y en esos términos ha establecido que cada Grupo parlamentario pueda proponer una candidatura⁷⁶⁷.

En todos los casos se prevén las formalidades para la presentación de candidaturas imponiendo la obligación a los Grupos proponentes de hacerlas por escrito. Casi todas las Comunidades han señalado específicamente qué tipo de documentación debe acompañarse a la candidatura, refiriendo en este sentido, que deberá ser toda aquélla necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la magistratura, la idoneidad del candidato y su aceptación al cargo en caso de producirse la designación (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Cataluña). En las normativas gallega, valenciana, extremeña, asturiana, cántabra y balear, la documentación que debe aportarse se ha referido de forma mucho más genérica.

⁷⁶⁷ Regla segunda en Madrid y Murcia. Véanse respectivamente: Resolución de la Presidencia de la Asamblea, reguladora del procedimiento para la designación de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional (*Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 84, VIII Legislatura, 11 de septiembre de 2008, pág. 8087); Resolución de la Presidencia, reguladora del procedimiento para la designación de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (*Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia*, núm. 41, VII Legislatura, 29 de septiembre de 2008, pág. 1885).

En unos casos, se especifica que el escrito de presentación de la candidatura debe venir con la firma del portavoz del Grupo (Aragón, Galicia, La Rioja, Murcia) y en otras no se precisa este punto (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid, Islas Baleares, Cataluña, Extremadura, Asturias, Cantabria). El Reglamento valenciano no dispone expresamente que la propuesta deba venir firmada por el portavoz, pero en sentido similar establece que “los representantes de los grupos parlamentarios deben proponer los candidatos” (art. 178.2).

En la inmensa mayoría de normativas autonómicas se dispone que las candidaturas deben presentarse ante la Mesa de la Cámara. En Cataluña, se especifica además, que la presentación formal de la candidatura debe hacerse en el Registro General del Parlamento (art. 157.1). Cuando se ha definido que a la Mesa deben hacerse llegar las candidaturas, se ha dispuesto un primer control a cargo de ésta acerca del cumplimiento de los requisitos de la candidatura, sin embargo la gran mayoría no disponen de un trámite de subsanación para los casos de defecto⁷⁶⁸.

Entre las pocas normativas autonómicas que cuentan con el trámite de subsanación, la andaluza prevé el plazo de cinco días para que los Grupos parlamentarios presenten un nuevo candidato (regla tercera), mientras que la catalana deja el plazo a criterio de la Mesa (157.3 R).

Entre las peculiaridades que se pueden encontrar en esta etapa, destaca la normativa andaluza que impone en las reglas de formulación de candidaturas el respeto al principio de “presencia equilibrada de hombres y mujeres”, según los términos de la Resolución de Presidencia en la materia⁷⁶⁹. Se trata de una disposición que debe respetarse tanto de manera individual como en el conjunto de las candidaturas presentadas por todos los Grupos parlamentarios.

Las normativas no suelen recoger los requisitos de acceso a la magistratura constitucional, aunque alguna regulación autonómica las ha

⁷⁶⁸ No se dispone expresamente de trámite de subsanación en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana, Extremadura, Asturias, Cantabria e Islas Baleares.

⁷⁶⁹ Véase la “Resolución de la Presidencia, de 28 de marzo de 2007, sobre adecuación de los nombramientos y designaciones que efectúe el Parlamento de Andalucía al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres” (*Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía*, núm. 634, VII Legislatura, 30 de marzo de 2007, págs. 35071-35072).

llegado a mencionar de forma genérica, reenviando adicionalmente a la normativa en la materia (Castilla y León, La Rioja, por ejemplo).

A excepción de Cataluña, ninguna normativa autonómica prevé mecanismos para examinar y valorar las candidaturas al estilo de las realizadas en las Cámaras nacionales, en las que se cita al candidato a comparecer en una Comisión parlamentaria de la Cámara. El Reglamento parlamentario catalán, por su parte, establece la posibilidad de llamar a comparecer a los candidatos ante la comisión o subcomisión que se determine al efecto⁷⁷⁰.

El Reglamento catalán define con cierto detalle este tipo de comparecencia. En este sentido, establece que “en ningún caso puede exceder de una hora para cada candidato o candidata”. Dispone además, que los miembros de la comisión pueden solicitar las oportunas explicaciones sobre cualquier aspecto relacionado con su formación académica, trayectoria profesional o méritos alegados, pero en ningún caso se pueden “formular preguntas relativas a la situación personal de quien comparece o a cualquier otra cuestión que no tenga relación con su trayectoria profesional y académica” (art. 157.4).

Para el cumplimiento de lo anterior, se faculta a la Presidencia de la comisión o subcomisión para velar por los derechos del compareciente, rechazando las preguntas “que puedan significar una subestimación del honor o la intimidad del candidato o candidata o que vulneren algún derecho fundamental” (art. 157.5). Finalmente fija que las comparecencias deberán ser públicas (art. 157.6), que quedarán excluidos del procedimiento selectivo quienes no se presenten en el día indicado (art. 157.7), y que los Grupos parlamentarios, en el plazo de dos días después de la comparecencia, pueden “formular observaciones, no vinculantes, sobre la idoneidad de los candidatos propuestos en lo que a la naturaleza del cargo se refiere, el currículum profesional y los proyectos de actuación que cada persona propone para el ejercicio del cargo” (art. 157.8).

⁷⁷⁰ Art. 157.2: Siempre que una ley lo prevea, o si una tercera parte de los diputados o tres grupos parlamentarios solicitan la comparecencia de todos o de alguno de los candidatos, la Mesa del Parlamento admite a trámite la solicitud y, oída la Junta de Portavoces, determina la comisión o subcomisión competente en la cual han de comparecer.

Una vez que la Mesa ha calificado las candidaturas (o la Comisión tratándose de Cataluña), el paso siguiente vendría a ser una suerte de proclamación de las mismas. Para esta fase, sin embargo, no es común que se recoja una específica declaración formal en ese sentido (a excepción de La Rioja⁷⁷¹, Navarra⁷⁷² y la Comunidad Valenciana), sino que suele comprenderse o derivarse de las disposiciones que ordenan el envío de las candidaturas al Pleno para su elección.

En este aspecto, quizá resulte de interés formular una observación a la regla cuarta de la Resolución de Presidencia de la Asamblea de Madrid, mediante la cual indica que la Mesa debe “elevar” a la Junta de Portavoces, las candidaturas calificadas “para su inclusión en una próxima sesión plenaria”⁷⁷³. El término “elevar” en este contexto no parece el más adecuado desde el punto de vista orgánico, porque hace entender erróneamente que la Junta de Portavoces se encuentra jerárquicamente por encima de la Mesa de la Cámara.

En todas las normativas, la facultad electiva de los candidatos descansa en el Pleno, aunque en la primera proposición de candidaturas a cargo de las autonomías, en Cataluña la designación la efectuó directamente la *Comissió d’Afers Institucionals*, sin pasar por el Pleno. Por otro lado, en todos los casos las votaciones son secretas y se emiten mediante papeleta. La normativa andaluza ha fijado con cierto detalle la estructura de la papeleta, pero en el resto de CC. AA. no se ha especificado este extremo.

Unas comunidades han fijado el derecho de los parlamentarios a emitir un solo voto (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Islas Baleares), mientras que otras han determinado la posibilidad de emitirlo a favor de dos personas (Castilla y León, La Rioja, País Vasco). En Navarra y en la Comunidad Valenciana, se ha preferido la fórmula de que los parlamentarios podrán incluir “tantos nombres como puestos a designar”⁷⁷⁴ o a cubrir (Comunidad Valenciana). En Madrid y Murcia, como ya se dijo, se vota por

⁷⁷¹ La regla dos dispone que, una vez que se ha verificado que los candidatos cumplen con los requisitos, “la Mesa procederá a la proclamación de candidatos”.

⁷⁷² La regla seis contempla la “proclamación de las candidaturas”.

⁷⁷³ Resolución de la Presidencia de la Asamblea, reguladora del procedimiento para la designación de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional (*Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 84, VIII Legislatura, 11 de septiembre de 2008, pág. 8087).

⁷⁷⁴ Regla sexta de la normativa navarra.

candidaturas completas, por lo que éstas pueden constar de una o dos personas⁷⁷⁵. Navarra es la única que ha especificado en las reglas de votación que la designación de los dos candidatos se hará de forma simultánea⁷⁷⁶.

Solo el Parlamento de Andalucía ha tenido el acierto de especificar en las reglas la forma de entender la votación “nula” y en “blanco”, situación que no suele ser común. Así se ha previsto que serán nulas “las papeletas con tachaduras, así como aquellas en las que se hubieran señalado más de un nombre o se hubieran incluido nombres distintos a los propuestos por los grupos parlamentarios”; mientras que se dispone para la votación en blanco, “la papeleta que no contenga indicación a favor de ningún candidato o candidata” (regla quinta). En esta misma línea, solo se ha acercado la normativa valenciana, que ha definido singularmente la votación nula como aquéllas “papeletas que lleven alguna tachadura o consignen nombres no propuestos como candidatos por los grupos parlamentarios” (178.3 R).

Todos los ordenamientos exigen para la elección de los candidatos que se propondrán al Senado, el voto favorable de la mayoría simple del Pleno de la Cámara autonómica. En La Rioja y en las Islas Baleares además, llega a consentirse la aprobación por asentimiento, en los casos en que los Grupos parlamentarios acuerden la presentación de una candidatura conjunta (regla tres, en ambos casos).

En esta fase electiva, la normativa andaluza plantea otra vez una significativa novedad. Se trata de una disposición en materia de equidad de género, mediante la cual se establece que en “el caso de que ambos candidatos fueran del mismo sexo, la segunda propuesta recaerá en la siguiente persona más votada de sexo distinto a quien hubiera resultado designada en primer lugar” (regla quinta).

No todas han estipulado reglas para superar casos de empate en la votación (no lo ha hecho Andalucía, Castilla y León, La Rioja, Islas Baleares). Entre las que sí lo han hecho, Asturias (225.5 R) y Cantabria (192.5 R) han resuelto el empate desde la primera votación a favor “del candidato propuesto por el Grupo parlamentario más numeroso o, en su caso, por el de la fuerza política que haya obtenido más votos en las elecciones autonómicas”.

⁷⁷⁵ Véase la regla quinta en los dos ordenamientos citados de Madrid y Murcia.

⁷⁷⁶ Regla sexta de la normativa navarra.

La mayoría de Parlamentos autonómicos, por otro lado, han optado por ordenar una nueva votación entre los empatados (Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, aunque con una redacción algo más confusa⁷⁷⁷, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Extremadura⁷⁷⁸). El Parlamento gallego es el único que ha especificado que esta segunda votación sería “la última” y que debe llevarse a cabo en la misma sesión plenaria (regla tercera).

Para los casos de persistencia del empate en una segunda votación, es todavía menos frecuente que cuenten con normativa al respecto (sí lo tiene Aragón, Navarra, País Vasco, Cataluña y Extremadura). Entre las pocas CC. AA. que lo han hecho, está Aragón, en la que ha seguido la regla de dar por designados a “los candidatos presentados por los Grupos parlamentarios que cuenten con mayor número de Diputados en la Cámara” (regla sexta)⁷⁷⁹ o Navarra que ha preferido la celebración de sucesivas votaciones entre los igualados en votos hasta que el empate sea dirimido⁷⁸⁰, y Extremadura que directamente manda tramitar “sucesivas propuestas por el mismo procedimiento” (252.2 c, R).

Otra fórmula es la que ha sido diseñada por los legisladores autonómicos vasco y valenciano, la cual consiste en prever de forma adicional, una tercera y cuarta votación, tras las cuales, de persistir el empate “se considerarán rechazados todos los candidatos implicados en el empate” (norma vasca)⁷⁸¹ o “se deberá iniciar de nuevo el procedimiento establecido en

⁷⁷⁷ La norma tercera, tras fijar la adjudicación de las candidaturas a quienes obtengan la mayoría simple, refiere que “de no obtenerse esta mayoría, se realizará una segunda y última votación en la misma sesión plenaria”. Lo más claro hubiera sido aludir directamente a los casos de empate, pues es el único supuesto en donde no podría alcanzarse una mayoría “simple”. Véase la “Resolución relativa á modificación dos mecanismos de nomeamento dos membros do Tribunal Constitucional” (*Boletín Oficial do Parlamento de Galicia*, núm. 221, VI Legislatura, 30 de octubre de 2002, pág. 10976).

⁷⁷⁸ Aunque en esta Comunidad, los empates que puedan producirse en los supuestos de elección de un solo cargo, se resuelven “a favor del candidato propuesto por el grupo con mayor número de diputados o, en su caso, por el de la fuerza política que haya obtenido más votos en las elecciones autonómicas” (252.3 R).

⁷⁷⁹ Normas reguladoras del procedimiento para la designación por el Pleno de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional a presentar ante el Senado (*Boletín Oficial de las Cortes de Aragón*, núm. 76, VII Legislatura, 10 de septiembre de 2008, págs. 4397-4398).

⁷⁸⁰ Regla octava de la normativa navarra.

⁷⁸¹ Regla segunda, apartado dos de las “Normas reguladoras del procedimiento para la presentación ante el Senado de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional” (*Boletín Oficial del Parlamento Vasco*, núm. 172, VIII Legislatura, 3 de octubre de 2008, pág. 28799).

este artículo” (norma valenciana)⁷⁸². En el caso catalán, se fija solamente una tercera votación de desempate, y si no se supera el mismo, se entenderá rechazada la proposición de que se trate (art. 91)⁷⁸³.

Pocas disposiciones autonómicas prohíben expresamente que en materia de elección de personas se pueda abrir un debate en la sesión del Pleno (así lo hace al menos, Asturias, Cantabria y Extremadura). Lo anterior, como ya se señalaba en otro lugar de este trabajo, no resulta un elemento positivo para transparentar y permitir un control ciudadano más efectivo sobre las opciones tomadas por sus representantes políticos.

De forma totalmente singular, la normativa de Castilla y León contiene una disposición aplicable al caso en que deban proponerse candidaturas mientras se encuentren disueltas las Cortes o el mandato parlamentario. Al respecto, la norma sexta dispone que las competencias atribuidas “al Pleno, a la Mesa y al Presidente de la Cámara serán ejercidas por la Diputación Permanente, la Mesa y el Presidente de la misma, respectivamente”.

Finalmente, la gran mayoría de las disposiciones prevén la remisión de las candidaturas elegidas a cargo del Presidente de la Cámara autonómica a su homólogo del Senado. Dicha remisión, debe acompañarse con los documentos que avalen las candidaturas y que fueron utilizados en el procedimiento selectivo en el Parlamento autonómico. Otros no lo prevén expresamente, aunque bien es verdad que son acciones que se desprenden lógicamente del ordenamiento y del curso lógico del procedimiento parlamentario.

⁷⁸² Artículo 178.8 del Reglamento de las Cortes Valencianas. Un dato a resaltar es que la normativa valenciana prevé que antes de la tercera votación, la Presidencia podrá, “si las circunstancias lo aconsejan, interrumpir por un plazo prudencial el curso de éstas” (178.6). Como se puede ver, se trata de un precepto que nos recuerda en sus términos al originalmente previsto en la regla quinta de las Normas de Presidencia del Congreso elaboradas en 1980.

⁷⁸³ El reglamento catalán advierte que en “las votaciones de una comisión, se entiende que no hay empate cuando, siendo idéntico el sentido en que han votado los miembros presentes de un mismo grupo parlamentario, la igualdad de votos puede dirimirse ponderando el número de votos que cada grupo dispone en el Pleno” (art. 91.2).

7.3.- La “pretendida” participación autonómica en el procedimiento selectivo de magistrados en el Senado

Con lo que se ha visto hasta este punto, ni qué duda cabe, de que la introducción de la participación autonómica en el procedimiento de designación senatorial de magistrados constitucionales ha resultado muy polémica. Lo ha sido así, desde las diversas ocasiones en que esta pretensión se ha intentado a lo largo del tiempo, y una vez acogida, las dificultades se han proyectado también sobre su tramitación parlamentaria, sobre el control constitucional dispensado a la LOTC y al RS, y la primera experiencia práctica del procedimiento. La doctrina por supuesto, no solamente no ha sido ajena a estos acontecimientos sino que se ha involucrado en el debate prolijamente, en diversos sentidos y con el apasionamiento propio que un tema como éste suscita.

En cuanto a la introducción legal de la participación autonómica se han señalado críticamente varias cosas, por ejemplo, se ha estimado la arbitrariedad de la reforma porque el legislador no la ha motivado en el preámbulo o en la exposición de motivos⁷⁸⁴. En el control constitucional, se ha criticado al TC por algunas disquisiciones no planteadas en el recurso sobre la posibilidad y alcance del control que podía efectuar sobre su propia LO⁷⁸⁵. De igual forma, por haber tenido muchas contemplaciones para defender la constitucionalidad de las reformas, entre ellas haber interpretado el art. 159 no desde la Constitución sino desde las Leyes⁷⁸⁶ y efectuar una interpretación conforme, con la inseguridad jurídica que esa técnica suele acarrear⁷⁸⁷. Sin embargo, en cuanto a los elementos centrales del debate, podría observarse el siguiente panorama:

⁷⁸⁴ Una cuestión señalada además por los recurrentes. El punto es comentado por FERNÁNDEZ-CARNICERO GONZÁLEZ, Claro José: “La STC 49/2008, una sentencia desfalleciente”, en *Aranzadi del Tribunal Constitucional*, núm. 10, 2008, (disponible en línea en el portal Thompson-Aranzadi); TORRES MURO, Ignacio: “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional...”, *op. cit.*, núm. 6, 2008, págs. 6-7.

⁷⁸⁵ URÍAS, Joaquín: “El Tribunal Constitucional ante la participación autonómica en el nombramiento de sus miembros”, *op. cit.*, págs. 215-221.

⁷⁸⁶ En este sentido, PULIDO QUECEDO, Manuel: “El juicio del Tribunal sobre su ley orgánica (Entre la oportunidad y la constitucionalidad)”, en *Aranzadi Tribunal Constitucional*, núm. 6, 2008, págs. 9-11; SANZ PÉREZ, Ángel Luis: “STC 101/2008. La nueva relación entre el Senado y los Parlamentos Autonómicos”, en *Aranzadi Tribunal Constitucional*, núm. 13, 2008, pág. 30.

⁷⁸⁷ REQUEJO PAGÉS, Juan Luis: “Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo cuatrimestre de 2008”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 84, 2008, pág. 226.

Por un lado, se puede apreciar que para algunos autores la opción tomada por el legislador es positiva porque en mayor o menor medida contribuye a dar sustantividad, reforzar o articular el carácter de “Cámara de representación territorial” que por imperativo constitucional se le asigna y ha de tener el Senado⁷⁸⁸. Por otro lado, muchos de estos autores se han mostrado muy críticos con las sentencias aludidas, no solamente por la postura guardada en torno a la participación autonómica, sino por la estructura y composición argumental de las mismas⁷⁸⁹.

Por otro lado, se encuentran quienes consideran que la opción tomada por el legislador ha sido un tanto arriesgada y que carece de base, por lo que la estiman inconstitucional⁷⁹⁰. Algunos lo entienden así sin ningún paliativo⁷⁹¹; en algunos otros casos, pareciera que subyace un planteamiento contrario al principio de la colaboración autonómica y de ahí que incluso sus reflexiones lleguen a coincidir con casi la totalidad de los motivos de inconstitucionalidad planteados por los recurrentes⁷⁹².

De este modo, se estima además que la medida afecta el derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 de la CE (derecho a ejercer cargos

⁷⁸⁸ CARRILLO, Marc: “Comentario a la STC 49/2008, de 9 de abril, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 6729/2007, interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, contra el artículo único, apartados seis y siete, de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en CARRILLO, Marc (coord.): *Hacia una nueva jurisdicción constitucional...*, op. cit., págs. 261-292, también en “El Senado de las autonomías”, en *El País*, 17 de julio de 2008; BALAGUER CALLEJÓN, Francisco (coord.): *La nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*, Madrid, Tecnos, 2008, pág. 47; SORIANO HERNÁNDEZ, Enrique: “Los Magistrados de las CC. AA. y del Senado: Comentario a la STC 101/2008, de 24 de julio. Apostillas a la STC 49/2008”, en *Aranzadi Tribunal Constitucional*, núm. 16, 2008, págs. 29-30; ÁLVAREZ VÉLEZ, M^a. Isabel; ALCÓN YUSTAS, M^a. Fuencisla: “Reflexiones en torno a las modificaciones de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en *Icade. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales*, núm. 72, 2007, pág. 174; SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso: “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, págs. 71-72.

⁷⁸⁹ Especialmente crítico se muestra, URÍAS, Joaquín: “El Tribunal Constitucional ante la participación autonómica en el nombramiento de sus miembros”, op. cit., págs. 207-244.

⁷⁹⁰ TORRES MURO, Ignacio: “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional...”, op. cit., págs. 17-19; PUNSET BLANCO, Ramón: “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, págs. 66-67.

⁷⁹¹ FERNÁNDEZ-CARNICERO GONZÁLEZ, Claro José: “La STC 49/2008, una sentencia desfalleciente”, op. cit., págs. 14-16; FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso: “Encuesta. Orientación actual del Derecho Constitucional”, op. cit., pág. 54.

⁷⁹² GARCÍA MARTÍNEZ, María Asunción: “La Ley Orgánica 6/2007 y el juez de la ley”, en *Asamblea: Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, núm. 17, 2007, págs. 38-39; muy crítico se muestra, BELDA PÉREZ-PEDRERO, Enrique: “Las Comunidades Autónomas en el Tribunal Constitucional a través del Senado. Dudas razonables de constitucionalidad y eficacia política para Castilla-La Mancha”, en *Parlamento y Constitución. Anuario*, núm. 11, 2008, págs. 276-284.

públicos) porque recorta a los parlamentarios el derecho de proponer candidaturas a través de sus Grupos parlamentarios. Se argumenta también que se suprime a los Grupos parlamentarios del derecho de propuesta y en general, que se condiciona claramente la voluntad del Senado.

En este terreno, hay quienes de forma especial han lamentado que la autonomía parlamentaria de la Cámara se haya visto limitada indirectamente a través de la LOTC, puesto que el instrumento jurídico de expresión de voluntad institucional es el Reglamento del Senado, donde hubiera debido hacerse la modificación⁷⁹³.

Otros en cambio, se colocan en un nivel intermedio reconociendo la necesidad de la medida o bien mostrando cierta satisfacción por la fórmula de participación o matizándola, pero que al mismo tiempo estiman la inconstitucionalidad de la misma, puesto que su introducción ameritaba inexorablemente una reforma a la Constitución⁷⁹⁴.

Tomando partido en el debate, lo primero que habría que decir es que la participación autonómica en la designación de los magistrados es una aspiración legítima y suele ser común en los Estados descentralizados. Resulta

⁷⁹³ Para RODRÍGUEZ-PATRÓN la autonomía reglamentaria de los órganos constitucionales puede tener cierta manifestación *ad extra*, en este caso, a los Parlamentos autonómicos, “siempre que la regulación contenida en los mismos se refiera al ejercicio de sus funciones”, y que la colaboración autonómica se establezca “en términos de posibilidad”, RODRÍGUEZ-PATRÓN, Patricia: “El Tribunal Constitucional ante la reciente reforma de los artículos 16 de su Ley Orgánica y 184 del Reglamento del Senado”, en *Revista de Derecho Político*, núm. 77, 2010, pág. 118. En el mismo sentido, el voto particular del Magistrado Conde en la STC 49/2008, quien no observa dificultad para que desde el Reglamento se pueda abrir una vía de colaboración de las CC. AA., siempre que no se haga en términos que anulen la plena libertad de elección del Senado. Para REQUEJO PAGÉS, la vía adecuada era la reforma al Reglamento del Senado debido a la autonomía institucional de esa Cámara, puesto que una LO, aprobada con el concurso del Congreso, no es expresión de la singular voluntad del Senado. REQUEJO PAGÉS, Juan Luis: “Doctrina del Tribunal Constitucional durante el primer cuatrimestre de 2008”, *op. cit.*, pág. 213. También, FERNÁNDEZ-CARNICERO GONZÁLEZ, Claro José: “La STC 49/2008, una sentencia desfalleciente”, *op. cit.*, págs. 13-16.

⁷⁹⁴ FERNÁNDEZ SEGADO entendió que la intermediación de los Parlamentos autonómicos, con independencia del juicio que pueda merecer, “aun cuando se pudiera considerar una fórmula satisfactoria, supone un cambio tan trascendental en el sistema de integración del Tribunal Constitucional que exige, de modo inexcusable, ser contemplado por la Constitución”, por lo que cree estar ante una reforma claramente inconstitucional. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: *La reforma del régimen jurídico-procesal del recurso de Amparo*, Madrid, Dykinson, 2007, pág. 41; Además, SANZ PÉREZ, Ángel: “Comentario a la STC 49/2008: Las fuentes del Derecho parlamentario y el Senado”, en *Aranzadi Tribunal Constitucional*, núm. 9, 2008, págs. 27-28; RODRÍGUEZ-PATRÓN, Patricia: “Sobre el significado de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español operada en virtud de la LO 6/2007, del 24 de mayo”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo (coords.): *La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho*, tomo II, *Tribunales constitucionales y democracia*, México, UNAM, IMDPC, Marcial Pons, 2008, pág. 537.

una opción válida para configurar la composición de un órgano cumbre de la arquitectura estatal, sobre todo cuando el mismo tiene una facultad arbitral en la resolución de conflictos entre las autonomías y el Estado central.

Más importante es aún esta intervención de las entidades descentralizadas en los procedimientos selectivos de magistrados, cuando el Tribunal del que van a formar parte elabora la doctrina que definirá la evolución y concreción del Estado de las autonomías⁷⁹⁵. Una doctrina que vendrá marcada ciertamente por las peculiaridades de la interpretación de la Constitución, textos, como se sabe, breves, llenos de principios generales, indefiniciones y fórmulas de apertura para dar cabida a las diversas opciones políticas, cuya interpretación impone mayores márgenes de apreciación que los planteados para los textos legales, y que además cobran mayor relevancia por cuanto resultan la clave de bóveda de un sistema jurídico.

Por otro lado, ya se ha mencionado en este trabajo que la arquitectura de las instituciones estatales, y entre ellas la de los tribunales constitucionales, está habitualmente en correspondencia con el contexto y particularidades del país, si bien es verdad que esto no se puede predicar de todos los Estados⁷⁹⁶. Entre los que se puede observar tal correspondencia, por ejemplo, está el caso de determinados países multilingües como Bélgica o Suiza que han integrado su órgano de justicia constitucional (Corte Constitucional en el primero y Tribunal Federal en el segundo), precisamente con criterios de lengua, o bien Kosovo, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, o Bolivia que las integren con cierta presencia de las minorías étnicas presentes en el Estado.

Esto nos lleva razonablemente a pensar que las particularidades de un Estado regularmente son proyectadas en la conformación de sus instituciones, y, en esa medida, el TC no queda excluido. De esta suerte, que la organización territorial del Estado tenga cierta proyección sobre el modelo de nombramiento

⁷⁹⁵ De ahí que no se comparta la opinión de FERNÁNDEZ-CARNICERO, que al hilo de los comentarios a la STC 49/2008, se refiera a las reformas estatutarias que incluyeron la participación autonómica como los “los ansiosos desiderata”, a los cuales no merecen eficacia alguna porque tales previsiones chocan con el modelo contenido en la misma Constitución. FERNÁNDEZ-CARNICERO GONZÁLEZ, Claro José: “La STC 49/2008, una sentencia desfalleciente”, *op. cit.*, pág. 14.

⁷⁹⁶ Por ejemplo en Italia, que está descentralizada en regiones y que algunas de ellas presentan ciertas particularidades territoriales, no se ha visto proyectado en su modelo de designación de magistrados un determinado margen de intervención territorial, aunque como lo vimos en el capítulo II, ha habido intentos de potenciar este tipo de participación, sobre todo en los últimos proyectos de reforma a la Constitución italiana.

de una institución central como es el TC, no parece una idea que por sí misma resulte disfuncional.

Quizá en el caso que se está comentando, uno de los elementos problemáticos haya sido el concreto mecanismo para introducir la participación de las autonomías en el procedimiento selectivo de magistrados a cargo del Senado. La reforma debió operarse no solamente sobre la LOTC y el RS, sino primeramente sobre la CE. La falta de reforma del modelo selectivo de magistrados desde la Constitución, quizá desde un principio vaticinaba las dificultades de la propuesta para ser introducida en el orden jurídico. Ello es así, porque el texto constitucional es lo suficientemente claro para definir la integración del Tribunal en el artículo 159, que difícilmente deja márgenes tan amplios para permitir su modificación por otras vías.

El artículo 159 de la CE difícilmente se presta a confusión. Es un artículo orgánico que establece los elementos esenciales de la configuración del Tribunal Constitucional que no parece albergar diversos sentidos interpretativos en la definición de los órganos que deben proceder a la designación de los magistrados. El dispositivo constitucional no prevé condicionamientos adicionales al respecto y tampoco los deja para que sean desarrollados por las leyes.

No se trata de una postura que defienda una interpretación de tipo literal de la Constitución, pues no es desconocida la reflexión aquélla que realiza el TC, de que la naturaleza del modelo de composición del TC previsto por el constituyente, también encuentra su definición en el resto de disposiciones constitucionales que configuran al Estado español, el modelo adoptado de Tribunal Constitucional y los principios constitucionales que se proyectan sobre el mismo. Sin embargo, esa interpretación debe también llevarse con cuidado, y, en el caso concreto, parece que la claridad del artículo daba poco margen para realizar una interpretación como la desarrollada en las sentencias estudiadas.

Pero la realidad ha sido otra y el hecho es que no se optó por la reforma constitucional, sino por la modificación legal y reglamentaria. Tal vez en este punto, cobren especial sentido las palabras expresadas por el Grupo mayoritario que respaldó la reforma en su tramitación legislativa, que afirmaba que mientras no se aborde la reforma del Senado (y por consiguiente la

Constitución, aquí agregaríamos) “hay que ir adaptando las leyes a la realidad autonómica del Estado”⁷⁹⁷.

Los preceptos reformados fueron recurridos, y frente a ellos, el Tribunal tenía ante sí, cuando menos, dos opciones. Una era como bien apunta Torres Muro, “una valiente declaración de inconstitucionalidad, que se hubiera llevado por delante una reforma que gozaba de ciertos apoyos, no unánimes desde luego”⁷⁹⁸. La otra opción era realizar una interpretación lo suficientemente amplia como para mantenerlos en el sistema jurídico, modulando su efecto práctico, a fin de que éste no llegase a contrariar el sentido del precepto constitucional, pero sin desechar completamente la legítima pretensión de la colaboración autonómica, que, con las posibilidades que se tuvieron al alcance, se introdujo mediante la reforma legal, siendo conscientes de las serias dificultades que presenta, en la práctica y en la tradición, la reforma constitucional en el contexto español.

El Tribunal Constitucional, como se ha visto a lo largo de todo el acontecer parlamentario y jurisprudencial, ha optado por la segunda de las opciones. De este modo, ha declarado la constitucionalidad de la intervención autonómica en el procedimiento senatorial de magistrados, siempre que el Senado no quede por completo vinculado a ésta. Esta fue, como dice Aragón Reyes, una salvedad importante, adelantada “en la STC 49/2008 y confirmada de manera clara y conclusiva en la STC 101/2008”⁷⁹⁹.

El TC no solamente ha configurado la falta de vinculación de las propuestas autonómicas al Senado del 16.1 de la LOTC, sino que desde el punto de vista de los Estatutos de Autonomía, en especial y con motivo de la impugnación al Estatuto catalán, también ha manifestado que las disposiciones contenidas en ellos en la materia no contienen mandatos al legislador, sino “un propósito de colaboración”. En efecto, en la STC 31/2010 se declaró la constitucionalidad del art. 180 del EAC, en tanto se entendiera que su

⁷⁹⁷ Diputada Batet Lamaña, en CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, Comisiones, núm. 769, VIII Legislatura, 5 de marzo de 2007, pág. 19.

⁷⁹⁸ TORRES MURO, Ignacio: “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional...”, *op. cit.*, pág. 20.

⁷⁹⁹ ARAGÓN REYES, Manuel: “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 85, 2009, pág. 17.

contenido “no afecta a la libertad del legislador estatal para hacer o no efectiva la voluntad de participación expresada” y que tampoco perjudica a la competencia del Estado para articular el modo en que dicha participación deba confeccionarse en los procesos de designación (FJ 113).

Con todo ello, la participación autonómica ha quedado en una mera pretensión, limitando el potencial de las mismas a una sugerencia, que puede ser o no tomada en cuenta en las negociaciones de las principales fuerzas políticas en el Senado. Ciertamente ese no era el modelo articulado por el legislador orgánico, que iba más por la vía del acto compuesto o, como también se la ha dicho, una fórmula de “participación especialmente decisoria”⁸⁰⁰ en un marco más general de bilateralidad.

El Tribunal -se puede concluir desde una perspectiva más amable- hizo lo que pudo para mantener ese cierto grado de vinculación autonómica a sabiendas que desde una perspectiva general no es contraria a los postulados constitucionales. Quizá la labor no fue suficiente, pero tampoco el Tribunal es un legislador y la tarea de incorporar claramente a las autonomías a la integración del Tribunal Constitucional le corresponde al poder reformador de la Constitución.

Trasladando ahora las reflexiones a la práctica seguida en este procedimiento de colaboración autonómica, se puede decir, en primer término, que no parece que haya complicado más de lo habitual el procedimiento selectivo de los magistrados como algunos se temían⁸⁰¹. Recuérdesse que en los primeros momentos de la confección de este mecanismo, los pronósticos que se formaron no le deparaban un futuro muy halagüeño. En este sentido, se llegó a estimar que la implicación de los Parlamentos autonómicos podía dar lugar a fricciones institucionales, por eventuales descortesías por falta de interés de las CC. AA. o por “negativas senatoriales percibidas por aquéllas como un agravio”⁸⁰², y que los órganos territoriales harían del procedimiento

⁸⁰⁰ ROIG I MOLÉS, Eduard: “La regulació de les relacions de la Generalitat amb l'Estat en el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya”, en *Activitat Parlamentària*, núm. 15, 2008, pág. 70.

⁸⁰¹ GABALDÓN LÓPEZ, José: “El Tribunal Constitucional. Sobre su independencia”, en *Diario La Ley*, núm. 7317, 11 de enero de 2010, (en línea, portal Wolters Kluwer).

⁸⁰² REQUEJO PAGÉS, Juan Luis: “Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo cuatrimestre de 2008”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 84, 2008, pág. 226.

selectivo un “campo de batalla de intereses políticos parciales por tener una presencia activa en el TC”⁸⁰³, entre otras conjeturas.

En segundo término, la puesta en marcha del procedimiento, según lo hemos visto ya en un capítulo anterior, ciertamente no fue ejemplar y tampoco era la que se esperaba en cuanto al propósito de las reformas, pero sí que podrían destacarse algunos puntos positivos.

En este sentido, es verdad que el PP siempre promovió a alguno de sus dos candidatos en todas las CC. AA. que pudo, haciendo prevalecer en alguna medida el criterio central del partido y no el de las autonomías. Sin embargo, también hay que decir que no en todas fue así y no lo fue especialmente en las Comunidades nacionalistas (Cataluña, País Vasco, Galicia) y en las que han llegado a mostrar un especial apego regional (Navarra, Baleares, Canarias o Andalucía).

Por otra parte, no se escapa que la fuerza determinante para acordar a los magistrados fueron las directivas de los dos partidos políticos más potentes en España⁸⁰⁴. Sin embargo, no debería desdeñarse el aporte autonómico de candidaturas en cuanto a que suponen una primera base del procedimiento, sobre el cual podría articularse algún criterio o práctica que tome en cuenta especialmente las candidaturas presentadas por algunos Parlamentos autonómicos sensibles en esta materia, como por ejemplo ha sucedido en esta ocasión, recayendo el acuerdo sobre una de las candidaturas presentadas por el Parlamento Vasco.

Para un sector de la doctrina, finalmente, la reforma no ha potenciado realmente la participación autonómica, e incluso se han visto más inconvenientes que ventajas⁸⁰⁵. Sin embargo, parece oportuno dejar que el tiempo dé más perspectiva y que el procedimiento siga desarrollándose para valorar su comportamiento. Quizá, como opina Sanz Pérez, es un sistema bilateral al que no está acostumbrado el sistema constitucional español⁸⁰⁶.

⁸⁰³ GARCÍA MARTÍNEZ, María Asunción: “¿Quis custodiet custodes? El Tribunal Constitucional y la garantía del orden constitucional”, en *Revista para el Análisis del Derecho InDret*, núm. 4, 2008, págs.13-14.

⁸⁰⁴ Como algunos ya lo vaticinaban, TORRES MURO, Ignacio: “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional...”, *op. cit.*, págs. 24-25.

⁸⁰⁵ FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso: “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, *op. cit.*, pág. 63.

⁸⁰⁶ SANZ PÉREZ, Ángel Luis: “Comentario a la STC 49/2008: Las fuentes del Derecho parlamentario y el Senado”, *op. cit.*, núm. 9, 2008, págs. 27-28.

Al final, desde una perspectiva más positiva, la moraleja de todo este entramado es considerar que el Tribunal esté relanzando un nuevo tipo de relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas que permita aminorar en alguna medida el déficit de representación territorial de la Cámara Alta⁸⁰⁷. Se trataría en todo caso, de un nuevo principio de participación de índole “cooperativa”⁸⁰⁸, que no tiene por qué casar mal en sí mismo con el modelo estatal español.

Este sistema cooperativo, se puede entender además como un punto de apertura, publicidad y pluralidad del procedimiento selectivo, tan tradicionalmente cargado de elementos de opacidad y oportunidad. Podría verse también como un nuevo elemento de promoción e implicación del procedimiento en el resto de autoridades autonómicas que constituyen el Estado español. Una nota del todo necesaria que había estado por mucho tiempo sin la debida consideración.

Llegados a este punto, y con la perspectiva de tener este cauce de participación autonómica como un modelo de cooperación, quizá convenga plantear la conveniencia de buscar el modo de impulsarlo y hacerlo más efectivo. Aquí sugeriremos una propuesta en ese sentido, pero antes de presentarla y someterla a discusión es menester hacer un par de consideraciones previas.

7.4.- Consideraciones previas en torno a una propuesta

7.4.1.- El influjo autonómico por el funcionamiento de un Senado “territorial”. Un matiz

Es una idea recurrente en la doctrina, que la ideal canalización de la “sensibilidad autonómica” en la designación de magistrados constitucionales debe venir por el funcionamiento ordinario del Senado, definido éste como la Cámara “de representación territorial” del Estado. Es como se puede ver, una postura de participación de tipo “orgánica” que tiene mucho sentido. Sin embargo, es ampliamente reconocido que tal institución no funciona en la práctica de esa manera y por ello se mantiene la intención de efectuar una

⁸⁰⁷ SORIANO HERNÁNDEZ, Enrique: “Los Magistrados de las CC AA y del Senado...”, *op. cit.*, (en línea portal Thomson-Aranzadi).

⁸⁰⁸ SANZ PÉREZ, Ángel Luis: “STC 101/2008. La nueva relación entre el Senado y los Parlamentos Autonómicos”, *op. cit.*, págs. 30-31.

reforma a “fondo” del Senado para conseguirlo⁸⁰⁹. Se trata en cualquier caso, de una reforma muy esperada, planteada en diversos momentos, que ha tenido ciertas manifestaciones a través de algunas reformas puntuales, pero que todavía no se ha emprendido con contundencia y exhaustividad.

La falta de “funcionamiento territorial” del Senado tiene causa en varios factores, los cuales no es el propósito estudiarlos aquí, pero al menos podrían referirse algunos. Uno de ellos es la forma de elección de la mayoría de los senadores, esto es, a través de un predominante sistema electivo de representación política de la ciudadanía (es decir, no de los Gobiernos o Parlamentos autonómicos, aunque haya algunos senadores que son designados por estos últimos), con circunscripciones provinciales (como para el Congreso) y cuyas candidaturas quedan a la exclusiva confección de los partidos políticos.

Este sistema deliberadamente concebido desde la elaboración de la Constitución para reforzar a los partidos políticos, ha dado a los directorios centrales de los dos más votados en España un papel protagonista en la conformación personal del Senado.

El comportamiento de un Senado estructurado de esa manera, casi podría decirse que “duplica” o se “asimila” en materia de composición al Congreso, por lo que no dará como resultado que sea la genuina expresión de las “necesidades territoriales” porque el poder central de los partidos políticos nacionales en buena medida va a prevalecer⁸¹⁰. Para llegar a este entendimiento, basta con reparar con un dato del todo práctico como lo es que el senador que quiera mantener una carrera política encontrará mayores incentivos para ello atendiendo a las directivas centrales y férreas disciplinas de voto de los partidos, que a las necesidades del territorio que en teoría representa.

⁸⁰⁹ Por ejemplo, ESPÍN TEMPLADO, Eduardo: “Artículo 16”, en REQUEJO PAGÉS, Juan Luis (coord.): *Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*, Madrid, TC, BOE, 2001, pág. 297; BALLESTER CARDELL, María: “Justicia constitucional y autonomía política. La participación de las Comunidades Autónomas en la composición del Tribunal Constitucional”, en PÉREZ TREMP, Pablo (coord.): *La Reforma del Tribunal Constitucional. Actas del V Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, págs. 975-995.

⁸¹⁰ En este sentido, SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso: “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, op. cit., pág. 72.

Con independencia del intenso debate y de los encomiables esfuerzos que se han hecho en la materia para potenciar la función territorial del Senado, la observación que aquí se quiere poner de relieve, es que la estructuración y funcionamiento de un Senado territorial, en materia de nombramientos, no se traducirá automáticamente en la satisfacción de las pretensiones que las entidades territoriales desean. Ya sea a nivel de la participación en el procedimiento, en la fuerza de negociación o, sobre todo, en el poder final de colocación efectiva de los magistrados de su preferencia.

Vale decir lo anterior, porque muchas veces, en línea de principio se plantea la estructuración de un Senado territorial o de la reforma a fondo del mismo como la panacea a este tipo de problemas. Valga a título de ejemplo, el Informe de 2006 del Consejo de Estado sobre modificaciones de la CE, que en la consulta que se le hizo sobre esta materia, con cierta prudencia en efecto, no entró a detallar el procedimiento que habría de utilizar el Senado para la designación de los magistrados constitucionales, pero advirtió que “la pretendida insuficiencia de participación de las Comunidades Autónomas quedaría superada con un Senado más acorde con su naturaleza de Cámara de representación territorial”, si bien todo ello, con el mecanismo que en el RS se considere más adecuado y transparente⁸¹¹.

Sin embargo, conviene tener presente, a menos a título orientativo, que tampoco parece que los Senados “verdaderamente” territoriales impriman, en todo caso y por su natural funcionamiento, este tipo de influjo territorial en sus designaciones de magistrados. Ello es así, por una serie de variables que no son para nada desconocidas en el contexto español, por ejemplo, porque no hay un número suficiente de plazas que satisfaga las pretensiones de todas las entidades descentralizadas, pero especialmente porque las designaciones requieren elevadas mayorías parlamentarias y por tanto las candidaturas entran necesariamente en el “juego” de la negociación entre las fuerzas políticas, hasta conseguir el nombre en torno al cual puedan articularse los votos necesarios para aprobar el nombramiento.

⁸¹¹ CONSEJO DE ESTADO: *Informe sobre modificaciones de la Constitución Española*, Madrid, febrero 2006, pág. 272. En esta línea, PAUNER CHULVI, Cristina: “La reforma constitucional del Senado en su función de Cámara designante”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 17, 2006, págs. 280-281.

Se afirma además lo anterior, porque en algunos países descentralizados cuya Cámara alta suele apreciarse de mejor manera su estructura y función territorial, no se han caracterizado significativamente sus designaciones por dejar una impronta de esa índole. El criterio por el contrario que parece primar es la “lógica” del acuerdo político partidario, debido predominantemente a lo que ya se señalaba: a la necesidad de conseguir las elevadas mayorías que se exigen para operar las designaciones.

Por ejemplo, en las selecciones de jueces del Tribunal Supremo de EE. UU. efectuadas conjuntamente entre el Presidente y la poderosa institución del Senado, bien es verdad que en los primeros años (1789-1894) se llegó a detectar un cierto criterio territorial en la designación de las plazas⁸¹². Sin embargo, actualmente esta preocupación parece absorbida por el interés de preservar fundamentalmente un equilibrio ideológico de los candidatos o que no se aparten del “*mainstream*”, esto es, de lo que se considera en la opinión pública o el electorado como “aceptable” del pacto constitucional y de los temas más polémicos del país. Si bien, en los *hearings* del Senado no deja de tener un peso importante la opinión que guarde el candidato en materia de federalismo⁸¹³.

En Suiza, en las designaciones de magistrados al Tribunal Federal efectuadas por la Asamblea Federal, se puede observar un criterio de pluralidad territorial en la designación de magistrados que se deriva por la diversidad lingüística que obliga la Constitución (art. 188.4), pero no parece obedecer a un criterio deliberado de integrar al Tribunal bajo un criterio de diversa proveniencia cantonal de los magistrados. Todo ello además, condicionado también por la negociación entre los partidos políticos más fuertes⁸¹⁴.

⁸¹² Desde los primeros años (1789 y ss.) podía observarse cierta reserva de una plaza del Tribunal Supremo para alguien de *New England* o bien hasta 1894 un “*New York site*”. Véase TRIBE, L.: *God save this Honourable Court*, New York, 1985, págs. 95 y ss., y 128.

⁸¹³ PERRY, Barbara. A.: *A “Representative” Supreme Court? The impact of race, religion, and gender on appointments*, New York, Greenwood Press, 1991, págs.7-8. En España de forma reciente, las designaciones de jueces del Tribunal Supremo estadounidense, y en especial, los *hearings* parlamentarios, han sido estudiados por HERNANDO MASDEU, Javier: *La designación parlamentaria de magistrados del Tribunal Constitucional*, Tesis para obtener el Grado de Doctor, Departamento de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid, presentada en julio de 2013.

⁸¹⁴ LUTHER, Jörg: “La composizione dei tribunali costituzionali e le autonomie territoriali: esperienze straniere”, *op. cit.*, págs. 75-76.

En Alemania, cuyo *Bundesrat* está compuesto por integrantes de los Gobiernos de cada uno de los dieciséis estados federados, en la práctica el criterio que parece prevalecer no es el de la extracción territorial de un *Land* o del equilibrio geográfico de los magistrados, sino la concertación entre los partidos políticos a nivel nacional para conseguir los 46 votos necesarios para operar la designación⁸¹⁵. En esas condiciones, los *Länder* no siempre ven materializada su influencia en la designación, de ahí que alguna vez el Estado Libre de Baviera se llegara a arrojar una suerte de “derecho de propuesta”⁸¹⁶.

Dicho lo anterior con carácter general, debe decirse que en todo caso no resultan desconocidas las potencialidades que tiene el *Bundesrat* para reflejar en sus funciones una sustantividad territorial. Y es que el hecho de que su integración recaiga en miembros de los gobiernos territoriales y que las designaciones sean efectuadas en la práctica por una Comisión *ad hoc* integrada por los Ministros de Justicia de los *Länder*, supone el mantenimiento de cierto “poder de designación” en su favor. Ello da mayores condiciones para que se genere un fenómeno de equilibrio entre el partido a nivel federal y las direcciones estatales de los partidos políticos que hacen Gobierno en el *Länder*, o por lo menos, para que la dirección partidaria federal no se imponga o “desdoble” fácilmente sobre el resto.

7.4.2.- La participación autonómica como designación de “sus representantes”

Otra cuestión a considerar y que incluso podría predicarse con carácter general, es que la “participación” en la designación de magistrados constitucionales que suelen exigir las entidades territoriales no se reduce a una mera habilitación formal para colaborar en el procedimiento selectivo. La intención que en realidad subyace, es la de ejercer un acto de poder, como lo es escoger a los integrantes de un importante órgano del Estado, bajo un perfil de determinados criterios jurídico-ideológicos que se espera correspondan con los del grupo político que hace la propuesta.

⁸¹⁵ Idem, pág. 82 y en el mismo sentido se pronuncia la autorizada doctrina alemana que se cita en la nota 32.

⁸¹⁶ El caso lo refiere, LUTHER, Jörg: “La composizione dei tribunali costituzionali e le autonomie territoriali: esperienze straniere”, *op. cit.*, pág. 82.

Esta sería la idea básica, aunque muchas veces inconfesable, que latiría en la denominada “participación autonómica” o en las designaciones con “sensibilidad autonómica” en la mayoría de modelos de participación de las entidades territoriales, incluyendo el de la participación orgánica a través del Senado. El influjo será mayor o menor dependiendo de la configuración del modelo, del sistema de partidos o las prácticas políticas consolidadas, pero, en buena parte de los casos, hay una conducta general por parte de las entidades territoriales que quizá sea muy difícil evitar. Lo anterior, no es otra cosa que el cierto sentido de “representación de parte” que se intenta dar a las designaciones.

La designación de magistrados efectuada como un mandato de representación territorial no casa bien con el funcionamiento de un órgano jurisdiccional y de garantía como es el TC. Ello es así, porque dichos rasgos son más propios de un órgano político, lo cual aplicado al Tribunal, puede presentar al colegio de magistrados como una pequeña asamblea “para-parlamentaria” autonómica. El Tribunal requiere para el ejercicio de sus competencias, perfiles de alta preparación jurídica, sin que ello implique ausencia de ideología (que además no es posible), pero que ésta no sea el punto determinante para tomar las decisiones jurídicas, es decir, que el magistrado pueda colocarse en una situación de imparcialidad.

Algunas fuerzas políticas, sin embargo, han querido insertar esta lógica propia de la representación territorial en el modelo actual. En efecto, como bien dice Aguiar de Luque, “así es como buena parte de los Parlamentos autonómicos han interpretado la nueva facultad que la reforma legal les otorgaba, lógicas que no se adecúan a la misión que la Constitución encomienda al TC”⁸¹⁷.

Para ilustrar lo anterior, recuérdense las declaraciones del portavoz del Grupo parlamentario catalán de *Convergència i Unió*, al explicar el voto en contra dado por su Grupo a las candidaturas presentadas por la Comisión de Nombramientos del Senado en las designaciones de 2010. El voto en contra

⁸¹⁷ AGUIAR DE LUQUE, Luis: “Magistrados Constitucionales”, en ARAGÓN REYES, Manuel (dir.); AGUADO RENEDO, César (codir.): *Temas básicos de Derecho Constitucional. Organización general y territorial del Estado*, tomo II, Navarra, Civitas, Thomson Reuters, 2011, pág. 307; asimismo en “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, pág. 59.

básicamente obedeció al hecho de no haberse elegido como magistrado a uno de los candidatos propuestos por el Parlamento de Cataluña⁸¹⁸. En unos términos más generales, este Grupo no dejó de lamentar que se hubiera perdido el objeto de la reforma a la LOTC, que era la participación de los Parlamentos autonómicos en la designación de magistrados del TC. Una propuesta de la que su propio Grupo había sido autor y que ahora había quedado en cierta forma desdibujada⁸¹⁹.

Pero como se ha llegado a sostener tajantemente, en el Tribunal Constitucional, “los Magistrados no representan a nada ni a nadie salvo a ellos mismos y el entendimiento de lo que es y debe ser una función jurisdiccional”⁸²⁰.

Una consideración adicional. Ya se ha dicho que en las últimas designaciones del Senado, al final uno de los principales partidos políticos impuso a dos concretos candidatos en todas las CC. AA. donde pudo, pero aún y cuando esto no hubiera sucedido, y en el supuesto ideal de que cada autonomía hubiera presentado candidaturas “acordes” a su sensibilidad territorial, quizá al final hubiese quedado cierta desazón en el procedimiento, si no se hubiera designado a ningún magistrado de entre las propuestas presentadas por los Parlamentos autonómicos dominados por los partidos nacionalistas.

Y es que este es otro factor a considerar, pues, entre las pretensiones de participar en el acto selectivo, parece que no todas las Comunidades Autónomas concurren con la misma intensidad en la participación. Es claro, que donde los partidos nacionalistas son mayoría (Cataluña, País Vasco) o sin serlo, los hay con cierto respaldo (Galicia, Navarra), o incluso con partidos regionalistas (Canarias), el influjo intentará proyectarse de forma más contundente. Esta perspectiva, en cualquier caso, no es novedosa⁸²¹, pero

⁸¹⁸ El senador Vilajoana i Rovira dijo en ese sentido: “nos habría gustado que hubiera habido un representante del Parlamento de Cataluña”. Véase SENADO: “Formular propuesta al Pleno de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión de Nombramientos, núm. 402, IX Legislatura, 28 de septiembre de 2010, pág. 3.

⁸¹⁹ *Idem*, págs. 5-6.

⁸²⁰ RODRÍGUEZ BEREJO, Álvaro: “Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 4, 1999, pág. 30. En el mismo sentido, TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: “El Tribunal Constitucional español: diez años de funcionamiento”, en *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 31, 1991, págs. 19-36.

⁸²¹ Ya lo advertían, entre otros, PULIDO QUECEDO, Manuel: “El fin de un conflicto: El Senado elige a los magistrados constitucionales y los parlamentos territoriales proponen”, en *Aranzadi*

sirve tenerla en cuenta para subrayar de nuevo la visión de “representante de parte”, que se viene aludiendo.

7.4.3.- La propuesta: la experiencia profesional autonómica como requisito concurrente para designar a dos magistrados de nómina senatorial

La propuesta que se va a plantear, tiene por objeto reforzar el cauce de participación autonómica vigente, teniendo en cuenta las consideraciones que se han hecho. Es decir, se tratará de una medida que pretende hacer menos “visible” esa relación directa entre la participación de la entidad territorial y la designación del magistrado, que en ocasiones hace ver a la misma como la designación de un representante ante el TC, como si de un órgano político o tribunal internacional se tratara.

Por el contrario, la intención es acercarse a un criterio selectivo que puede ser más neutral, transversal y formal, como puede ser la técnica del establecimiento de una “cuota” específica, entre los requisitos de acceso a la magistratura constitucional.

La cuota que podría plantearse, estaría encaminada a favorecer una candidatura que tuviera alguna vinculación de tipo geográfico con las diversas entidades descentralizadas del Estado; sin embargo, fijar un criterio de esa naturaleza ciertamente no es nada fácil de definir. Seguramente cualquier intento que se haga para fijar alguna vinculación territorial en el electorado pasivo será una línea enteramente discutible.

En cualquier caso, parece que las opciones en principio más descartables son las del lugar de nacimiento y el lugar de residencia del candidato, ya que éstas pueden estar condicionadas por la movilidad laboral o de otra índole de las personas. Así, por mencionar un ejemplo, estarían los jueces, que tienen que mudar su residencia al sitio donde se encuentre el órgano jurisdiccional en el que les hayan asignado la plaza o los profesores universitarios que se trasladarán a la Universidad donde hayan opositado y obtenido el cargo.

En este resbaladizo terreno de la vinculación territorial, quizá la nota que podría resultar más útil sea la de la experiencia profesional del candidato. Pero no se trataría de cualquier tipo de experiencia profesional relacionada con las carreras jurídicas constitucionalmente previstas para dar potencial acceso al cargo, sino especialmente de una experiencia profesional obtenida en el “circuito jurídico autonómico” en algún momento del historial profesional del candidato.

Esta directiva podría dirigir en alguna medida el arco de candidaturas a juristas que hayan tenido experiencia profesional en las instituciones autonómicas. Por ejemplo, candidatos que en algún momento de su desarrollo profesional hayan tenido experiencia como titulares o letrados en los Gobiernos o Parlamentos autonómicos, miembros de los Consejos Consultivos o Defensorías autonómicas del Pueblo. Incluso podría tratarse de magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia o de abogados con arraigo regional. Ciertamente debe tratarse de juristas de reconocida competencia y cumplir con el resto de requisitos de acceso al cargo, por lo que la experiencia profesional autonómica sería una exigencia adicional.

De las candidaturas que hayan contado con una experiencia profesional autonómica, quizá se pueda esperar una perspectiva más nítida de los problemas jurídicos y políticos del ámbito y desde la perspectiva autonómica, que podrían ser útiles en la deliberación general del Pleno. Se trata de una nota de experiencia y habilitación profesional que pone el acento en el perfil del candidato y no sobre la visión institucional de representante de parte.

La adicional exigencia de la experiencia profesional autonómica no parecería una nota discriminatoria ni tampoco excesivamente invasiva de la *potestad eligendi* del órgano encargado de la designación, porque se configuraría como una disposición transversal y orgánica del régimen de integración del Tribunal. En otras palabras, se trataría de una suerte de mérito del candidato valorable especialmente para alguna de las plazas de magistrado.

Un acercamiento al enunciado legal de esta idea, podría ser la introducción de que, al menos dos magistrados, debieran contar previamente con un determinado número de años de experiencia profesional autonómica.

Este criterio, podría estar dirigido a todos los órganos proponentes y no solamente al Senado. La razón de ello podría estar en la consideración de que las entidades territoriales, como parte misma del Estado español, no deberían restringir su participación en el procedimiento selectivo de magistrados a los cauces que el funcionamiento senatorial les permita. El TC es un órgano del Estado, y estatal también es la intervención y la función de las Comunidades Autónomas. Ciertamente el Senado, quizá podría en la práctica liderar ese influjo, pero no debería ser el único. En esta línea, Cruz Villalón alguna vez sugirió que el sentido de las designaciones del Gobierno de la Nación, también podrían reorientarse en esta dirección, en el “contexto de la estructura territorial del Estado”⁸²².

Sin embargo, el diseño de esta directiva con un marcado carácter general al régimen del estatuto y designación de los magistrados, implicaría seguramente una reforma a la Constitución, lo que haría decaer fácilmente esta propuesta, atendiendo a las complicaciones de la reforma constitucional en España y cierta tradición que se viene observando para no reformarla. Quizá por ello convenga reducirla a la participación del Senado, lo que conllevaría adoptarla mediante el propio Reglamento de la Cámara, lo que en la práctica puede resultar más factible.

La modificación podría introducir en el artículo reglamentario del Senado que fija las especialidades del procedimiento selectivo de magistrados (184.7 RS), un inciso adicional que estableciese que dos de los magistrados que el Pleno eleve al Rey para su nombramiento deberán contar con experiencia profesional autonómica.

Quizá resulte conveniente que los magistrados que se elijan por este concepto se “distribuyan” en las formaciones internas del Tribunal. Esta tarea, necesariamente quedaría a cargo del Pleno, que como se sabe, le corresponde la integración de las Salas (10.1 j, LOTC). Se trataría de una labor de distribución de perfiles entre las dos Salas, dinámica que, por otro lado, se ha llegado a observar por conseguir una composición lo más equilibrada posible en éstas, tratándose por ejemplo, de la distribución de los Magistrados

⁸²² CRUZ VILLALÓN, Pedro: “Discurso pronunciado por el Presidente del Tribunal Constitucional, con ocasión de la renovación parcial del Tribunal”, en *Memoria 2001*, Madrid, Tribunal Constitucional.

provenientes del Tribunal Supremo o los magistrados designados por el Senado en cada una de las Secciones del TC⁸²³.

En la propuesta que se ha venido esbozando se ha hecho una alusión general a la experiencia profesional autonómica, sin establecer un determinado número de años para dar por cumplido ese requisito. No es el propósito incursionar en este discutible aspecto de determinación de periodos, pero quizá podría resultar de orientación el previsto para la designación de magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia por el turno de juristas de reconocido prestigio. Estas plazas, que como se sabe, designa el CGPJ dentro de la terna presentada por el Parlamento autonómico donde resida el Tribunal, se exige que los candidatos posean “más de diez años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma” (330.4 LOPJ). En materia de designación de magistrados, podría utilizarse esa cifra o una menor, considerando que no sería excesiva porque la misma contabilizaría para la cobertura general de los quince años de experiencia profesional constitucionalmente exigidos.

En términos generales, con esta propuesta no se intenta decir que el TC ha carecido de perfiles con experiencia y sensibilidad autonómica, situación que por otro lado, no ha faltado nunca en el Tribunal. Así lo ha reconocido en alguna ocasión su Presidente⁸²⁴ y también lo hemos advertido aquí en algunas de las designaciones hechas, no por el Senado que sería lo deseable, sino por el Congreso. Recuérdese en este sentido, cuando el PSOE tomó en cuenta a uno de los grupos nacionalistas (CiU) para designar con este claro perfil autonómico al Magistrado Carles Viver en 1992 y a la Magistrada Encarna Roca en 2012.

Tampoco se quiere insinuar que la sensibilidad autonómica únicamente puede extraerse de quien ha trabajado en las instituciones autonómicas. No es desconocido que contar o no con esa sensibilidad autonómica (sin que pueda detenerme aquí a explicar su prístino sentido), es una cuestión más cercana al

⁸²³ Así lo ha identificado Pablo SANTOLAYA MACHETTI, por ejemplo en el Acuerdo de 22 de diciembre de 1998, donde se distribuyeron los cuatro Magistrados del Tribunal Supremo que forman parte del TC en cada una de las Secciones o en la 2ª renovación del Senado, los cuatro nuevos magistrados fueron repartidos en cada una de las Secciones, lo cual “no puede sino merecer un juicio marcadamente positivo”. SANTOLAYA MACHETTI, Pablo: “Artículo 10”, en REQUEJO PAGÉS, Juan Luis (coord.): *Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*, Madrid, TC, BOE, 2001, pág. 239, nota 11.

⁸²⁴ RODRÍGUEZ BEREJO, Álvaro: “Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, *op. cit.*, pág. 30.

criterio jurídico del candidato y la visión que tenga de los problemas autonómicos que a la territorial procedencia profesional. Quizá en este sentido la sensibilidad autonómica pueda derivarse del examen curricular de la persona o de lo que este pueda expresar en la comparecencia parlamentaria, con independencia de la institución o Comunidad Autónoma donde haya laborado.

En cualquier caso, la intención de la propuesta es crear un cauce más de participación de las CC. AA. en los procedimientos selectivos de magistrados en el Senado. Es sin duda, una nota muy mesurada, de “mínimos”, y que puede reforzarse con otras medidas para tener más efecto, pero que en el plano de la negociación política, puede dar un mayor peso al influjo de las fuerzas políticas regionales en la elección de determinados perfiles, frente a la visión central de los dos partidos más votados en el país.

El efecto de la propuesta tiene por tanto la vista puesta en dos aspectos: por un lado, en favorecer la pluralidad de experiencias profesionales en el Pleno y, por otro, fijar unas pautas para el comportamiento político. Este último un elemento que, aunque se ubique en el terreno de la política, no debe resultar ajeno a la reflexión constitucional⁸²⁵.

⁸²⁵ Ya Francisco TOMÁS Y VALIENTE reflexionaba sobre la necesidad de la potencialización, desde el plano de la negociación política, de las relaciones entre los partidos grandes, pequeños y nacionalistas, como una suerte de leal pauta de comportamiento político entre ellos, que correspondería al sentido original del consenso diseñado por la CE exigiendo la mayoría de tres quintos. En “El Tribunal Constitucional español: diez años de funcionamiento”, *op. cit.*, pág. 31.

Capítulo VIII

El problema del incumplimiento parlamentario en los plazos de renovación

Como ya se ha mostrado en los anteriores capítulos de este trabajo, en el historial de las renovaciones de los magistrados del Tribunal Constitucional ha habido bastantes casos en que los órganos facultados constitucionalmente para designarlos no han concluido en tiempo el procedimiento selectivo. Como muestra más reciente de lo anterior, recuérdese la designación de magistrados constitucionales realizada por el Senado en 2010 con un retraso nunca antes visto de casi tres años y la última renovación efectuada por el Congreso de los Diputados en 2012 con un retraso de veinte meses.

Estos no han sido, sin embargo, los únicos órganos proponentes de magistrados constitucionales que han incurrido en dilaciones de esta naturaleza, sino que todos los órganos llamados a seleccionarlos, en alguna medida, las han llegado a generar. No obstante, deben destacarse significativamente los retrasos ocasionados por los órganos legislativos, porque son los que con mayor frecuencia y prolongación los han padecido, lo que sin duda alguna, está constituyendo uno de los principales problemas en materia de la composición del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional no es tampoco el único órgano en España que se ha visto afectado por los retrasos parlamentarios en la designación de sus miembros, puesto que existen precedentes importantes en la designación de los integrantes del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo, entre otros⁸²⁶.

⁸²⁶ Sobre el retraso de medio año en la designación de diez vocales del CGPJ, ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto: “La renovación del Consejo General del Poder Judicial”, en *El País*, 5 de noviembre de 2001. En cuanto a la falta de designación del Defensor del Pueblo desde la expiración del

Por otro lado, es necesario considerar que el retraso de las Cámaras parlamentarias para designar a los magistrados constitucionales no es un problema que ocurra únicamente en España, sino que existen manifestaciones de esta índole más o menos frecuentes en otros países que cuentan con un tribunal constitucional o bien otro órgano especializado de jurisdicción constitucional. Entre esos casos, más adelante se repasará especialmente el problema en Italia y Alemania, pero también puede verse el padecimiento de este problema en un gran número de experiencias constitucionales, entre las cuales se encuentran los casos de República Checa, Ucrania, Bélgica, Portugal, Rusia⁸²⁷, Georgia, Macedonia, Eslovenia, Hungría, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay⁸²⁸.

cargo de Enrique Múgica Herzog el 30 de junio de 2010, puede verse una breve referencia a la interinidad de su titular en el Informe Anual a las Cortes Generales 2010, pág. 4. En este caso, el Defensor del Pueblo fue finalmente designado en la sesión del Congreso de 17 de julio de 2012, recayendo el cargo en Soledad Becerril. La prensa, por otro lado, en su momento recogió el retraso de diez meses en la designación de seis consejeros del Tribunal de Cuentas. Véase a título de ejemplo, las notas de los periodistas Díez, Anabel; CASQUEIRO, Javier, publicadas en *El País*, el 31 de octubre de 2001.

⁸²⁷ El Tribunal ruso, reactivado en la Constitución de 12 de diciembre de 1993 y disciplinado en su Ley de 21 de julio de 1994, solo pudo entrar en funciones en el mes de febrero de 1995, en que quedaron finalmente designados todos los integrantes. Si bien se trata de un periodo inmediatamente posterior a la denominada “crisis constitucional de 1993”, que enfrentó al Presidente y al Parlamento hasta la intervención militar, algunas de las vicisitudes políticas de la época se mantuvieron, al punto de tener cierto reflejo en el procedimiento selectivo de los magistrados. Al respecto, se tiene referencia de que existieron varios problemas en la designación debido a que el Consejo de la Federación no aprobaba sistemáticamente las candidaturas presentadas por el Presidente Borís Yeltsin. Incluso en enero de 1995, su portavoz anunció que éste no propondría a nominación a más magistrados hasta que el Consejo no colaborara más en las mismas. El dato es referido en MAZZA, Mauro: *La giustizia Costituzionale in Europa orientale*, Padova, Cedam, 1999, pág. 195.

⁸²⁸ Véase, por ejemplo, SERVICIO DE ESTUDIO, BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: “Modelos de renovación personal de Tribunales Constitucionales”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 61, 2001, págs. 209-237. Otros trabajos que hacen relación a diversos países: CONSTITUTIONAL COURT OF GEORGIA: “The Guarantees of the independence of the Constitutional Court”, en 2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice *Separation of Powers and Independence of Constitutional Courts and Equivalent Bodies*, Council of Europe, Venice Commission, Rio de Janeiro, Brazil, 2011, pág. 5; SPIROVSKI, Igor: “The independence of the Constitutional Court of the Republic of Macedonia: Guarantees and Challenges”, en 2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice *Separation of Powers and Independence of Constitutional Courts and Equivalent Bodies*, Council of Europe, Venice Commission, Rio de Janeiro, Brazil, 2011, págs. 3-4; KÜHN, Zdenek; KYSELA, Jan: “Nomination of constitutional justices in post-communist countries...”, op. cit., págs. 198 y ss.; PINARDI, Roberto: “Il problema dei ritardi parlamentari nell’elezione dei giudici costituzionali...”, op. cit., págs. 1819-1854; ALVERGUE, Pablo Mauricio: “El estatus del juez constitucional en El Salvador”, op. cit., págs. 472-473; GECK, Karl: “Nombramiento y ‘status’ de los Magistrados del Tribunal Constitucional Federal de Alemania”, op. cit., págs. 175-220; CANEPA, Aristide: “Modalità strutturali ed organizzative dell’organo di giurisdizione costituzionale come elementi di tutela della sua indipendenza: osservazioni sul caso portoghese”, en COSTANZO, Pasquale (coord.): *L’organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale*: atti del Convegno, Imperia, 12-13 maggio 1995, Torino, G. Giappichelli, 1996, págs. 540-605;

Los datos anteriores, dan buena cuenta del grado de generalidad con el que se presenta este problema en la práctica, por lo que se plantea la necesidad de su atención y estudio. En este sentido, también se ha pronunciado la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en el marco del informe que realizó hace unos años acerca de la composición de los tribunales constitucionales, concluyendo en la necesidad de adoptar medidas para preservar las funciones de los tribunales constitucionales, precisamente en los casos de inacción en la nominación de los jueces por la autoridad correspondiente⁸²⁹.

El retraso en la designación de magistrados constitucionales es un delicado problema para el Tribunal, porque constituye una interferencia a su funcionamiento ordinario que le viene impuesta desde fuera, que no sólo afecta a su capacidad laboral, sino que también menoscaba la legitimidad y el reconocimiento social de sus delicados cometidos institucionales. La situación de interinidad de los magistrados prorrogados no los coloca en la mejor posición institucional para asumir y resolver los delicados procesos constitucionales que tienen a su cargo⁸³⁰.

El retraso en la designación de magistrados constitucionales implica necesariamente una flagrante violación a la Constitución. No se trata de un mero incumplimiento formal de plazos que pueda banalizarse, sino que estamos en presencia de una actitud más grave, calculada y reiterada que trastoca directamente las trazas del modelo de Tribunal Constitucional previsto en la Constitución, como lo es, cuando menos, el sistema de nombramiento, la composición del Tribunal, la duración del cargo y la renovación de los magistrados constitucionales.

LANDA, César: "La elección del juez constitucional", en *Revista Latinoamericana de Derecho*, núm. 2, 2004, págs. 127-162; MAZZA, Mauro: *La giustizia Costituzionale in Europa orientale*, op. cit., p. 195; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.): *Crónica de Tribunales Constitucionales en Iberoamérica*, Buenos Aires, Marcial Pons, UNAM, 2009; FIX-ZAMUDIO, Héctor; ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa. Libro en homenaje al doctor Jorge Carpizo*, México, IIJ, UNAM, 2012.

⁸²⁹ VENICE COMMISSION: *Rapport révisé sur la composition des Cours constitutionnelles* (CDL-JU(1997)010fin), Strasbourg, 1997.

⁸³⁰ El retraso parlamentario, de igual forma, afecta también al periodo de duración ordinaria de tres años previstos por el art. 9.3 de la LOTC para los cargos de Presidente y Vicepresidente del Tribunal Constitucional. Al respecto puede citarse el caso de la Presidencia de Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, que duró menos de tres años (dos años, ocho meses y tres semanas). Véase SANTOLAYA MACHETTI, Pablo: "Artículo 9", en REQUEJO PAGÉS, Juan Luis (coord.): *Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*, Madrid, TC, BOE, 2001, pág. 225, nota 11.

La conducta dilatoria, al incumplir los mandatos constitucionales, provoca lo que desde diversos frentes doctrinales se ha calificado como una “deslealtad institucional” o “deslealtad a la Constitución” o bien una “crisis” de valores constitucionales.

Con todo ello, no resulta extraño el pronunciamiento crítico cada vez más generalizado de la opinión pública, de las asociaciones de juristas, y en general, de todos los operadores jurídicos, contra la conducta dilatoria de las fuerzas políticas para efectuar la designación. De igual forma, la doctrina comienza a profundizar en este debate, aunque ciertamente el estudio sereno y especializado en este tema sigue siendo una tarea pendiente⁸³¹.

⁸³¹ Entre los trabajos que pueden destacarse en la materia, se encuentran los de FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “La estructura orgánica del Tribunal Constitucional”, en TRUJILLO, Gumersindo; LÓPEZ GUERRA, Luis María; GONZÁLEZ-TREVIJANO, Pedro José (dirs.): *La experiencia constitucional (1978-2000)*, Madrid, CEPC, 2000, pág. 446; PARADA VÁZQUEZ, Ramón: “Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 4, 1999, pág. 28; PAUNER CHULVI, Cristina: *La designación parlamentaria de cargos públicos*, Madrid, Congreso de los Diputados, 2003, pág. 187; SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso: “La *prorogatio* de los órganos constitucionales. Apuntes mínimos sobre un tema que no lo es”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 84, 2008, págs. 20-24; AGUIAR DE LUQUE, Luis: “Una nueva reflexión sobre la *prorogatio* de los órganos constitucionales. Una discrepancia y algunas puntualizaciones a J. A. Santamaría”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 85, 2009, pág. 93; CRUZ VILLALÓN, Pedro: “El estado del Tribunal Constitucional”, en BOGDANDY, Armin von; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MORALES ANTONIAZZI, Mariela (coords.): *La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un *ius constitutionale commune* en América Latina?*, t. I, México, IIJ, UNAM, Max-Planck-Institut, IIDPC, 2010, págs. 713-730 (también en *Claves de Razón Práctica*, núm. 191, 2009, págs. 4-12); PAJARES MONTOLÍO, Emilio (coord.); SANTAOLALLA LÓPEZ, Fernando; PAUNER CHULVI, Cristina: *Procedimientos de designación parlamentaria de cargos públicos*, Madrid, CEPC, 2010; LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo María: “Las mayorías reforzadas y la formación de los órganos constitucionales (comentarios sobre la actualidad)”, en *Anuario “Parlamento y Constitución”*, núm. 13, 2010, págs. 123-142; ALZAGA VILLAAMIL, Óscar: *Del consenso constituyente al conflicto permanente*, Madrid, Trotta, 2011; VV. AA.: “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, págs. 15-90; COELLO DE PORTUGAL, José María: “Nota crítica sobre la situación actual del Tribunal Constitucional”, en *Foro*, nueva época, núm. 13, 2011, págs. 229-232; SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio: “Los retrasos y los sesgos de la composición del Tribunal Constitucional”, en VV. AA.: *Informe sobre la democracia en España 2011*, Madrid, Fundación Alternativas, 2011, págs. 283-293; OUBIÑA BARBOLLA, Sabela: “Verdades y mentiras sobre la composición y renovación del Tribunal Constitucional”, en *Diario La Ley*, núm. 7900, sección doctrina, 12 de julio de 2012, año XXXIII, editorial La Ley (7552/2012), también en *El Tribunal Constitucional: pasado, presente y futuro*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, págs. 81-97; GARCÍA ROCA, Javier: “La selección de los magistrados constitucionales, su estatuto y la necesaria regeneración de las instituciones”, en *Revista General de Derecho Constitucional*, núm. 15, 2012, págs. 1-42; BORRAJO INIESTA, Ignacio: “Renovarse o morir: el ritmo de las renovaciones del Tribunal Constitucional español”, en *Revista General de Derecho Constitucional*, núm. 16, 2013, págs. 1-65; SIMÓN YARZA, Fernando: “La composición de la justicia constitucional en perspectiva comparada (en especial, con relación a Estados Unidos)”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 31, 2013, págs. 357-390; AGUADO RENEDO, César: “Renovación del Tribunal Constitucional y sentido de estado”, en *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 813, 2011, (en línea portal Thomson-Aranzadi).

8.1.- El contexto: la “politización” de las designaciones

El artículo 159.1 de la CE exige que el acuerdo de designación por parte del Congreso y el Senado cuente con el voto favorable de la mayoría de tres quintos de sus miembros. Como ya se ha comentado, esta mayoría resulta muy elevada, incluso se trata de la misma que se exige para realizar inicialmente las reformas constitucionales por el procedimiento ordinario (167.1 CE). El establecimiento de esta elevada mayoría obliga en la práctica a que la decisión deba ser acordada entre al menos dos de las principales fuerzas políticas representadas en el Parlamento para poder alcanzarla, con lo cual, se garantiza que la designación no venga monopolizada por el partido político mayoritario.

Este acuerdo parlamentario de designación de magistrados puede generarse de, al menos, dos formas: una primera y la más apegada al espíritu del constituyente es la del consenso, es decir la del convencimiento y adición de la mayor cantidad de voluntades políticas en torno a la persona que pretende seleccionarse, o bien podría ser mediante un sistema que se ha denominado “de cuotas” o “consenso previo”, el cual, resulta un método no escrito en el que los partidos políticos ejercen una suerte de “derechos de representación”⁸³², y se hacen un reparto de cargos atendiendo a su intensidad numérica.

Según el repaso que hemos efectuado de todas las designaciones parlamentarias de magistrados, podemos concluir que el mecanismo que se ha impuesto en la práctica es éste último. En este sentido, cuando se ha presentado la oportunidad de cubrir las vacantes de un periodo de renovación en el TC a cargo de las Cámaras parlamentarias, las cúpulas de los dos grandes partidos políticos son las que proceden a la negociación del reparto de las plazas para cada uno y los nombres de las personas en quienes recaerá el cargo, “una vez logrado el acuerdo, los dirigentes de cada Grupo transmiten las oportunas instrucciones a sus parlamentarios, que se limitan a ratificar formalmente el acuerdo logrado en sede extraparlamentaria”⁸³³. En tales

⁸³² WEBER, Albrecht: “La jurisdicción constitucional en Europa occidental: una comparación”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 17, 1986, pág. 53.

⁸³³ FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “La estructura orgánica del Tribunal Constitucional”, *op. cit.*, pág. 442.

circunstancias, el consenso se ha entendido como una “negociación y reparto de puestos a cubrir en el que no ha importado tanto el perfil de los propuestos como conseguir la aceptación de los propios a cambio de transigir en el nombramiento de los candidatos presentados por otro/s grupo/s parlamentario/s”⁸³⁴.

En el reparto de propuestas, suele adjudicarse dos de los cuatro puestos vacantes al partido que se ha hecho con la mayoría, uno de los puestos más se otorga al principal partido de la oposición y la plaza restante podría resultar de un ejercicio de tanteos y consenso entre las diversas fuerzas políticas parlamentarias, que en ocasiones se ha traducido en una concesión a los partidos nacionalistas. En alguna ocasión, cuando los dos partidos mayoritarios han conseguido el acuerdo bilateral, no sólo no han incluido a los candidatos que pudieran presentar los grupos minoritarios, sino que han prescindido abiertamente de ellos en el proceso mismo de negociación⁸³⁵. Otras veces los partidos mayoritarios no han logrado el acuerdo entre ellos, por lo que acuden a la negociación con los partidos minoritarios y entonces ambas formaciones mayoritarias presentan listas confrontadas a la votación plenaria⁸³⁶.

La designación de magistrados constitucionales por el sistema de cuotas, como lo expresa Espín Templado, presenta el inconveniente de que “al trascender a la opinión pública las propuestas iniciales de cada partido los candidatos elegidos pueden resultar en cierto modo marcados para algunos ciudadanos, con el consiguiente riesgo de aparente politización”⁸³⁷. O bien, como lo estima Alzaga Villaamil, “dicho método conduce a que tanto en el mundillo de los profesionales del Derecho como, con frecuencia, entre los meros lectores de la prensa diaria, se convierte en *vox populi*, en cada

⁸³⁴ PAUNER CHULVI, Cristina: *La designación parlamentaria de cargos públicos*, Madrid, Congreso de los Diputados, 2003, pág. 146. En la misma línea, PRESNO LINERA, Miguel Ángel: “‘Cuotas de partido’, ‘sistemas de botín’ y ‘clientelismo político’”, en *Revista Jurídica de Asturias*, núm. 23, 1999, págs. 131-148.

⁸³⁵ Por ejemplo, en el caso de la tercera renovación de magistrados constitucionales a cargo del Congreso de los Diputados en 2001, las fuerzas mayoritarias excluyeron de la negociación al Grupo parlamentario catalán de *Convergència i Unió*. Al menos, en ese sentido fueron las manifestaciones expresadas por el portavoz de dicho grupo. Véase CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Comparecencia de cuatro candidatos para la elección de miembros del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 346, Comisiones, sesión núm. 3, VII Legislatura, 25 de octubre de 2001, pág. 11229.

⁸³⁶ Véase la segunda renovación del Congreso, en la cual se dio cuenta de que el PSOE y *Convergència i Unió*, presentaron una lista y por otro lado, el PP confeccionó una diversa.

⁸³⁷ ESPÍN TEMPLADO, Eduardo: “Artículo 16”, *op. cit.*, pág. 297.

renovación, qué magistrados lo son a propuesta del PP, quiénes a propuesta del PSOE, y cuál ha sido laboriosamente consensuado. Este etiquetado público de los Jueces constitucionales, aún antes de que hayan tomado posesión, como conservadores o progresistas es un flaco servicio que se le hace a la imagen de independencia frente a los partidos políticos, deseable en todo magistrado, y es un factor que en nada contribuye al necesario prestigio del Tribunal Constitucional a la hora de desempeñar sus delicadas funciones”⁸³⁸.

En cualquier caso, no es infrecuente que desde varios sectores de la doctrina e incluso ex magistrados constitucionales expresen que la calificación de progresista o conservador de determinados magistrados, además de injusta en ocasiones, no es exacta. Si bien reconocen que algunos son más mediáticos que otros⁸³⁹. Con ello, en principio, el planteamiento de un probable riesgo de politización del TC por ésta causa podría difuminarse⁸⁴⁰, aunque es verdad, que lo deseable sería que la forma de tomar el acuerdo parlamentario, según se desprende de la voluntad del constituyente, fuera la del consenso entre las fuerzas políticas⁸⁴¹.

El consenso previo para repartir las propuestas entre las fuerzas parlamentarias parece una práctica bastante difundida en el Parlamento. En efecto, todo parece indicar que “hoy, nadie convence a nadie en una interlocución pública y ritual”⁸⁴², sino que las decisiones son prefijadas de antemano por el reducido grupo de líderes de las principales fuerzas políticas y luego son transmitidas a los parlamentarios mediante reglas disciplinarias de partido y finalmente son trasladadas a la sede parlamentaria, para dar

⁸³⁸ ALZAGA VILLAAMIL, Óscar: “Sobre la composición del Tribunal Constitucional”, *op. cit.*, pág. 179.

⁸³⁹ En este sentido, JIMÉNEZ DE PARGA, Manuel; FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso: “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, págs. 89 y 34.

⁸⁴⁰ Incluso ESPÍN TEMPLADO considera que probablemente la experiencia apunta a que el riesgo de politización sea más “teórico que real”. “Artículo 16”, *op. cit.*, pág. 298.

⁸⁴¹ Al respecto, el constituyente ALZAGA VILLAAMIL, refiere lo siguiente: “Ciertamente, cuando se redactó la Constitución, se presentó en los debates constituyentes tal dispositivo de mayoría cualificada de tres quintos como la principal garantía de que los miembros del Tribunal, lejos de ser mero reflejo o trasunto del color del gobierno de turno, serían juristas de singular prestigio en torno a cuyo peso específico se cuajaría un amplio consenso, al menos, entre los dos principales partidos políticos. Y esta perspectiva es aún hoy recogida como una garantía operativa de la constitución apolítica del Tribunal en no pocos manuales y tratados de nuestra Disciplina”. ALZAGA VILLAAMIL, Óscar: “Sobre la composición del Tribunal Constitucional”, *op. cit.*, pág. 174.

⁸⁴² LÓPEZ AGUILAR, Juan Fernando: *Minoría y oposición en el parlamentarismo: una aproximación comparativa*, Madrid, Congreso de los Diputados, 1991, pág. 239.

cumplimiento formal al trámite. Esta misma tendencia parece también avalada de forma general por el Derecho comparado.

Finalmente, conviene considerar que ese reducido grupo de personas en quienes recae el efectivo peso de la negociación, como ha llegado a plantear Aja Fernández, ciertamente implica un “déficit democrático” respecto a la norma constitucional que exige el acuerdo de tres quintas partes de los parlamentarios⁸⁴³. Con ello además, se desarticula en alguna medida la idea de la legitimación democrática y pluralidad que intenta verse en las designaciones del poder legislativo.

8.2.- La frecuencia y magnitud de los retrasos en las designaciones

El proceso de negociación política no sólo se ha convertido la mayoría de las veces en un espectáculo poco edificante sino que también se ha prolongado más allá del tiempo en que debía ejecutarse la designación de los nuevos magistrados constitucionales. Los medios de comunicación han reflejado cómo las fuerzas políticas llegan a anunciar que el acuerdo está casi cerrado, para informar lo contrario al día siguiente en medio de un clima de acusaciones mutuas sobre la intransigencia del otro.

Los partidos políticos no han mostrado reparos en posponer la renovación de los magistrados constitucionales a la realización de comicios autonómicos, al debate sobre el estado de la nación, a resoluciones de recursos de inconstitucionalidad, a la petición de disculpas públicas de algún alto funcionario por sus declaraciones, o a la espera de que se genere un “ambiente político más propicio para el acuerdo”, entre otras justificaciones.

Las dilaciones que los órganos parlamentarios han generado son, cuando menos, preocupantes. Para apreciar la magnitud de las dilaciones referidas, considérese que todos los procedimientos de renovación grupal de magistrados constitucionales a cargo del Congreso de los Diputados se han realizado con retrasos importantes.

⁸⁴³ AJA FERNÁNDEZ, Eliseo: “La elección de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 17 de junio de 1998.

Cuadro 9.- Periodo de tiempo que ha ocupado el Congreso de los Diputados en designar a los magistrados constitucionales⁸⁴⁴

Legislatura y tipo de designación		Magistrado	Expiración del cargo Antecesor	Elección	Días de retraso
I (79-82)	Designación Inaugural	Fco. Rubio Llorente Manuel Díez de Velasco-Vallejo Fco. Tomás y Valiente Aurelio Menéndez y Menéndez	-----	30/1/80	-----
	Sustitución individual	Antonio Truyol y Serra, por Aurelio Menéndez	8/10/80 (aceptación renuncia)	29/12/80	82 (3 meses)
II (82-86)	1ª Renovación sorteo: 15/11/82	Reelección	22/2/83	27/09/83	218 (7 meses)
	Sustitución individual	Jesús Leguina Villa, por Díez de Velasco	4/2/86 (recepción renuncia)	13/2/86	9
IV (89-93)	Sustitución individual	José Gabaldón López, por Truyol y Serra	29/11/89 (recepción renuncia)	27/6/90	210 (7 meses)
	2ª Renovación	Rafael de Mendizábal Allende Pedro Cruz Villalón Julio González Campos Carles Viver Pi-Sunyer	22/2/92	25/6/92	124 (4 meses)

⁸⁴⁴ El periodo de tiempo de retraso se calcula con la diferencia de días naturales que hay entre la fecha de expiración del nombramiento del antecesor y la fecha de la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados en que se procedió a la designación. En la consideración de la fecha de expiración del nombramiento deben distinguirse dos supuestos: a) tratándose de sustituciones individuales, se pueden tomar como referencia varias fechas, según los datos que se han tenido disponibles y que se indicarán en cada caso. Puede tratarse de la fecha del fallecimiento, la de la aceptación de la renuncia por el Presidente o la de recepción en el Congreso de la carta del Presidente del TC instando el procedimiento de sustitución; b) tratándose de renovaciones por tercios, se toma como referencia la fecha de publicación en el BOE del Real Decreto de nombramiento de los antecesores, tras haber transcurrido los nueve años del periodo de cargo. Excepción hecha de la primera renovación que vino a los tres años, por resultar afectado por el primer sorteo previsto en la DT 9ª de la CE y la DT 3ª de la LOTC. Los días de retraso, como ya se dijo, son naturales y no se distinguen festivos o periodos estivales. Las cifras en meses que se acompañan en paréntesis son cifras redondeadas, calculando los meses a razón de treinta días.

VII (00-04)	3ª Renovación	Javier Delgado Barrio Eugenio Gay Montalvo Elisa Pérez Vera Roberto García-Calvo	8/7/01	30/10/01	114 (4 meses)
IX (08-11)	Sustitución individual	No sustituyó a García- Calvo	18/5/08 (deceso)	-----	-----
	Renovación grupal	No efectuó 4ª renovación	8/11/10	-----	-----
X (11-)	4ª Renovación	Encarna Roca Trías Fernando Valdés Dal-Ré Juan José González Rivas Andrés Ollero Tassara	8/11/10	17/7/12	616 (20 meses: 11 de la IX, 9 de la X) -Vacante de García-Calvo: 4 años, 2 meses

Según se muestra en el cuadro, en la primera renovación (1983), la reelección de los Magistrados Rubio Llorente, Díez de Velasco, Tomás y Valiente, y Truyol y Serra, se realizó siete meses después de haber expirado su primer nombramiento; en la segunda renovación (1992), la designación de Mendizábal Allende, Cruz Villalón, González Campos y Viver Pi-Sunyer, tuvo lugar con cuatro meses de retraso; en la tercera renovación grupal (2001), la elección de Delgado Barrio, Gay Montalvo, Pérez Vera y García-Calvo, se efectuó casi cuatro meses después de la fecha en que había finalizado el mandato de los magistrados cesantes, finalmente, la cuarta renovación (2012), acumuló un retraso de veinte meses, siendo este el mayor en la historia de la Cámara.

El incumplimiento del Congreso de los Diputados en la designación de los magistrados constitucionales en tiempo no varía mucho de lo que ha sucedido en el Senado. Esta Cámara Alta efectivamente en su primera renovación grupal (1989), proveyó de manera puntual sus cuotas de magistrados, incluso lo efectuó con algunos días de anticipación. Sin embargo, en la segunda renovación (1998), la elección de Casas Baamonde, Jiménez Sánchez, Garrido Falla y Conde Martín de Hijas, tuvo un retraso alarmante de casi diez meses, y la tercera renovación (2010), definitivamente sobrepasó con mucho, todos los precedentes, al efectuarse con tres años de retraso.

Cuadro 10.- Periodo de tiempo que ha ocupado el Senado en designar a los magistrados constitucionales⁸⁴⁵

Legislatura y tipo de designación		Magistrado	Expiración del cargo antecesor	Elección	Días de retraso
I (79-82)	Designación inaugural	Gloria Begué Cantón Luis Díez-Picazo Manuel García-Pelayo Ángel Latorre Segura	-----	30/1/80	-----
II (82-86)	Sustitución individual	Fernando García-Mon, por García-Pelayo	6/2/86 (Recepción renuncia)	11/2/86	5
III (86-89)	1ª Renovación	Fernando García-Mon José Vicente Gimeno José Luis de los Mozos Álvaro Rodríguez Bereijo	22/2/89	8/2/89	A tiempo
IV (89-93)	Sustitución individual	José Gabaldón López, por De los Mozos	11/10/91 (Recepción Senado renuncia)	30/6/92	263 (9 meses)
VI (96-00)	2ª Renovación	María Emilia Casas Guillermo Jiménez Sánchez Fernando Garrido Falla Vicente Conde	22/2/98	14/12/98	295 (10 meses)
VII (00-04)	Sustitución individual	Jorge Rodríguez-Zapata, por Garrido Falla	9/12/02 (Recepción renuncia)	18/12/02	9
VIII (04-08)	Renovación grupal	No efectuó la 3ª renovación	17/12/07	-----	-----
IX (08-11)	3ª Renovación	Adela Asúa Batarrita Luis Ignacio Ortega Fco. Pérez de los Cobos Francisco José Hernando	17/12/07	1/12/10	1079 (casi 3 años)

⁸⁴⁵ El periodo de tiempo de retraso se calcula con la diferencia de días naturales que hay entre la fecha de expiración del nombramiento del antecesor y la fecha de la sesión del Pleno del Senado en que se procedió a la designación. En la consideración de la fecha de expiración del nombramiento deben distinguirse dos supuestos: a) tratándose de sustituciones individuales, se toma como referencia la fecha de recepción en el Senado de la carta del Presidente del TC comunicando la renuncia e instando el procedimiento de sustitución; b) tratándose de renovaciones por tercios, se toma como referencia la fecha de publicación en el BOE del Real Decreto de nombramiento de los antecesores, tras haber transcurrido los nueve años del periodo de cargo. Los días de retraso, como ya se dijo, son naturales y no se distinguen festivos o periodos estivales. Las cifras en meses y años que se acompañan en paréntesis son cifras redondeadas, calculando los meses a razón de treinta días.

Si se repasan las designaciones de magistrados en los casos de cobertura de vacantes producidas por causas distintas a la de la expiración del mandato, se verá que las Cámaras no han procedido con inmediatez a la designación del sustituto, ocupando en algunos casos, un periodo quizá más allá de lo necesario.

En este sentido, obsérvese que en el Congreso de los Diputados, la sustitución de Menéndez y Menéndez en 1980, se llevó a cabo casi tres meses después de que dimitiera; en 1990, la sustitución de Truyol y Serra vino siete meses después de aceptada la renuncia. En el Senado, la sustitución del Magistrado De los Mozos vino nueve meses después que le fuera aceptada la renuncia.

Todos estos periodos quizá pudieran matizarse si consideramos el tiempo ordinario de instrucción que conlleva naturalmente el procedimiento, y también porque generalmente este tipo de renovaciones no suponen el grado de anticipación como el previsto de cuatro meses para las renovaciones parciales. Además, muchas veces las sustituciones individuales se retrasan porque se insertan en las negociaciones de otras plazas a cargo de diversos órganos proponentes, corriendo la suerte de éstas. En este caso, las fuerzas políticas colocan la vacante con el resto, a modo de un “paquete”, y luego se designan todas.

Sin embargo, estas contemplaciones no se pueden tener con la falta de sustitución del Magistrado García-Calvo, la cual no vino sino hasta la designación del grupo de renovación al que pertenecía, dejando sin cubrir la plaza durante cuatro años y dos meses. Ciertamente se ha tratado de un caso inusitado, que atravesó por un contexto excepcional, pero que no deja de representar el peor antecedente registrado en la materia.

Hasta ahora, se han destacado los incumplimientos del plazo de designación a cargo de las Cámaras parlamentarias porque han sido éstas las que con mayor frecuencia y prolongación han incurrido en esta conducta. Sin embargo, como se adelantaba en un principio, también el resto de órganos designantes alguna vez se han colocado en esta situación, aunque ciertamente sin llegar a los extremos ocurridos en las Cámaras.

Si se repasan las designaciones del Consejo y del Gobierno que, como se sabe, para efectos de renovación parcial están comprendidos en un mismo

grupo, se verá que aunque en las tablas de datos que hemos elaborado se ponga en evidencia algunas situaciones de incumplimiento, sobre todo para el Gobierno, lo cierto es que generalmente no han constituido problemas graves, ya sea porque han tenido alguna justificación o porque no resultan frecuentes.

Cuadro 11.- Periodo de tiempo que ha ocupado el Gobierno en designar a los magistrados constitucionales⁸⁴⁶

Pdte. de Gobierno y tipo de designación		Magistrado	Expiración del cargo antecesor	Elección	Días de retraso
Adolfo Suárez UCD I Leg (79-81)	Designación Inaugural	Jerónimo Arozamena Sierra Rafael Gómez-Ferrer Morant	-----	25/1/80	-----
Felipe González PSOE II Leg (82-86)	1ª Renovación sorteo: 30/10/85	Miguel Rodríguez-Piñero Luis María López Guerra	22/2/86	21/2/86	A tiempo
Felipe González PSOE V Leg (93-96)	2ª Renovación	Manuel Jiménez de Parga Tomás Salvador Vives Antón	22/2/95	31/3/95	37
José Luis Rodríguez Zapatero PSOE VIII Leg (04-08)	3ª Renovación	Manuel Aragón Reyes Pablo Pérez Tremps	8/4/04	4/6/04	57 (atravesó gob. en funciones)
Mariano Rajoy Brey PP X Leg (11-)	4ª Renovación	Pedro José Glez. Trevijano Enrique López López	9/6/13	7/6/13	A tiempo

Por ejemplo, en la primera renovación, el Consejo y el Gobierno no incumplieron el plazo de renovación de los magistrados, si bien el Consejo lo hizo con mayor anticipación (tres semanas). Esta primera renovación vino

⁸⁴⁶ El periodo de tiempo de retraso se calcula con la diferencia de días naturales que hay entre la fecha de expiración del nombramiento del antecesor y la fecha de la sesión del Consejo de Ministros en la que se procedió a la designación. La expiración del nombramiento tiene base en la fecha de publicación en el BOE del Real Decreto de nombramiento de los antecesores, tras haber transcurridos los nueve años del periodo de cargo, a excepción de la primera renovación que vino a los seis, por resultar afectado por el segundo sorteo previsto en la DT 9ª de la CE. Los días de retraso, como ya se dijo, son naturales y no se distinguen festivos o periodos estivales, si acaso en la 3ª renovación se precisa que transcurrió un periodo de Gobierno en funciones al pasar de la VII a la VIII Legislatura.

activada porque el segundo sorteo previsto en la DT 9ª de la CE recayó en el grupo electivo de estos órganos. Atendiendo a la DT 3.1 de la LOTC, fijó como punto de referencia para entender “finalizados” los cargos que debían renovarse en este segundo sorteo, los seis años en que se produjera la inicial designación de magistrados.

En el caso, la designación inaugural se publicó en el BOE el 22 de febrero del 1980, por lo que el cese de los magistrados a renovar quedaría para el 22 de febrero de 1986, aunque como se sabe, las primeras designaciones del Consejo vinieron meses después, una vez que se constituyó y procedió a las designaciones, las cuales fueron publicadas en el BOE el 19 de noviembre de 1980. Como se muestra en los cuadros, el Consejo designó a los nuevos magistrados el 29 de enero de 1986, mientras que el Gobierno lo hizo el 21 de febrero de 1986, un día antes del vencimiento aludido por la DT 3.1 de la LOTC.

Cuadro 12.- Periodo de tiempo que ha ocupado el CGPJ en designar a los magistrados constitucionales⁸⁴⁷

Formación del CGPJ y tipo de designación		Magistrado	Expiración del cargo antecesor	Elección	Días de retraso
Primer Consejo (80-85)	Designación Inaugural	Ángel Escudero del Corral Plácido Fernández Viagas	-----	7/11/80	-----
	Sustitución individual	Francisco Pera Verdaguer, por Fernández Viagas	9/12/82 (deceso)	30/12/82	21

⁸⁴⁷ El periodo de tiempo de retraso se calcula con la diferencia de días naturales que hay entre la fecha de expiración del nombramiento del antecesor y la fecha de la sesión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en que se procedió a la designación. En la consideración de la fecha de expiración del nombramiento deben distinguirse dos supuestos: a) tratándose de sustituciones individuales, se pueden tomar como referencia dos tipos de fechas, según los datos que se tuvieron disponibles y que en cada caso se precisará. En un par de ocasiones se refiere la fecha del fallecimiento y en una más la fecha de la aceptación de la renuncia por el Presidente del TC; b) tratándose de renovaciones por tercios, se toma como referencia la fecha de publicación en el BOE del Real Decreto de nombramiento de los antecesores, tras haber transcurrido los nueve años del periodo de cargo, a excepción de la primera renovación que vino a los seis, por resultar afectado por el segundo sorteo previsto en la DT 9ª de la CE. Los días de retraso, como ya se dijo, son naturales y no se distinguen festivos o periodos estivales. La cifra en meses que se acompaña en paréntesis, son número redondos, considerando los meses en treinta días.

Segundo Consejo (85-90)	1ª Renovación sorteo: 30/10/85	Carlos de la Vega Benayas Eugenio Díaz Eimil	22/2/86	29/1/86	A tiempo
Tercer Consejo (90-96)	2ª Renovación	Enrique Ruiz Vadillo Javier Delgado Barrio	22/2/95	8/2/95	A tiempo
Cuarto Consejo (96-01)	Sustitución individual	Pablo García Manzano, por Delgado Barrio	24/07/96 (aceptación renuncia)	11/9/96	49
	Sustitución individual	Pablo Cachón Villar, por Ruiz Vadillo	16/05/98 (deceso)	30/9/98	137 (4.5 meses)
Quinto Consejo (01-08)	3ª Renovación	Ramón Rodríguez Arribas Pascual Sala Sánchez	8/4/04	14/4/04	6
Sexto Consejo (08-13)	4ª Renovación	Juan Antonio Xiol Ríos Santiago Martínez-Vares García	9/6/13	7/6/13	A tiempo

En las segundas renovaciones, los dos órganos designantes tuvieron la anticipación del 17.1 de la LOTC, pero sólo el Consejo lo hizo a tiempo, incluso con catorce días de anticipación, pero el Gobierno se retrasó 37 días. Situación similar aconteció en las terceras renovaciones, donde el Consejo lo hizo prácticamente a tiempo (seis días de retraso), y el Gobierno en cambio ocupó dos meses, si bien, hay que recordar que en el *interim*, se produjo un cambio de Legislatura (de la VII a la VIII). Las dos últimas renovaciones parciales se efectuaron a tiempo, incluso por primera vez, el mismo día, pues siempre había elegido semanas antes el Consejo y luego el Gobierno, en las habituales sesiones del Consejo de Ministros de los viernes.

El Gobierno no se ha enfrentado todavía a supuestos de terminación anticipada del cargo y en cambio el Consejo ha atravesado por tres, pero en ninguno de ellos se ha apreciado un problema importante. Si bien, en la sustitución de Delgado Barrio y de Ruiz Vadillo ocupó 49 y 137 días respectivamente, en ambos se cruzó un verano entremedio, además de que, por supuesto, no hubo plazo previo de conformidad con el 17.1 de la LOTC.

8.3.- La causa del incumplimiento de los plazos

Retomando las observaciones generales que se hacían respecto a los retrasos en que han incurrido los órganos parlamentarios en la designación de los magistrados constitucionales, es necesario apuntar la causa que parece estar detrás de todo esto y que se ha venido identificando en el historial de las designaciones estudiadas. No se trata de otra cosa más que del reconocimiento del cálculo que realizan los partidos políticos, sobre todo los dos con mayor representación, para ver en qué momento y qué designación, les resultan más convenientes.

De lo que se ha observado, puede decirse que el cálculo político para retrasar la designación está en función de, al menos, dos factores: por un lado, de la conveniencia de mantener una composición del Pleno favorable a sus posiciones para la resolución de un asunto, y por otro, de las expectativas de llegar a ser Gobierno, de ser mayoría en las Cámaras o de controlar el CGPJ para buscar una mayor influencia en la designación⁸⁴⁸.

Todo ello se facilita, porque precisamente las renovaciones parciales del Tribunal se acercan demasiado a estos momentos propicios para el cálculo. Como bien dice Cruz Villalón, la renovación trienal “recuerda demasiado a las legislaturas siendo estos momentos aptos a dar lugar a cambios de mayoría, que pueden reforzar a su vez la tentación de sabotaje por parte de quienes temen perderla, proyectando esa lógica en la designación de los magistrados⁸⁴⁹”.

Por otra parte, considérese que la conducta dilatoria o táctica de los partidos políticos suele desarrollarse sin que las autoridades de las Cámaras parlamentarias hayan mostrado algún propósito encomiable para impedirla, a través del ejercicio de sus facultades de gobierno, administración, disciplina, de observancia del Reglamento, de la cortesía y de los usos parlamentarios que rigen institucionalmente en el interior del órgano.

⁸⁴⁸ Así lo reconoce acertadamente FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso: “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, op. cit., pág. 33.

⁸⁴⁹ CRUZ VILLALÓN, Pedro: “El estado del Tribunal Constitucional”, en BOGDANDY, Armin von; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MORALES ANTONIAZZI, Mariela (coords.): *La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un ius constitutionale commune en América Latina?*, México, IIJ, UNAM, Max-Planck-Institut, IIDPC, 2010, t. I, págs. 723-724.

Evidentemente no existe un instrumento jurídico al alcance de las Cámaras parlamentarias o de otro órgano del Estado, que pueda ponerse en marcha para motivar eficazmente la designación de los magistrados constitucionales en tiempo y revertir la situación de bloqueo. El mismo TC, como en su día lo dijo su Presidente, “está inerme e indefenso, pues carece de toda competencia en lo que a su integración se refiere, y no puede actuar más allá de sus límites, excepto para reclamar de los órganos constitucionales directamente concernidos en la renovación y cobertura de las vacantes pendientes, su atención ante una situación que por su amplitud y duración prolongada, es especialmente dañosa y perjudicial para la posición y función de este órgano del Estado en los términos que la Constitución le asigna”⁸⁵⁰.

Como lo muestra la cita anterior, han sido los Presidentes del Tribunal Constitucional los que a través de sus discursos, memorias o comunicaciones a las Cámaras, han recordado a los órganos proponentes la falta de renovación de los magistrados⁸⁵¹. Lo mismo ha sucedido cuando el Pleno del Tribunal ha acordado la redacción de “Notas de Prensa”, un elemento poco frecuente, pero que se han llegado a utilizar para recordar a los órganos competentes, la necesidad de cumplir con los plazos de designación. En este sentido, el Pleno llegó a formular una suerte de apercibimiento, en el cual advertía que de prolongarse el retraso, adoptaría “las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean, para oponerse a esa situación”⁸⁵².

Todas estas acciones, sin embargo, por útiles que parezcan, no han resultado eficaces para impulsar a los partidos políticos a la provisión de los magistrados constitucionales.

Este comportamiento dilatorio de las fuerzas políticas no parece incorregible. Es verdad que resultaría complicado conducir el comportamiento de las fuerzas políticas por una senda predeterminada, pero tampoco eso es lo

⁸⁵⁰ Palabras del Presidente del TC en el acto de toma de posesión del Magistrado Pablo Cachón Villar, el 8 de octubre de 1998. RODRÍGUEZ BEREJO, Álvaro: “Sobre la renovación del Tribunal Constitucional”, en *Tribunales de justicia: Revista Española de Derecho Procesal*, núm. 12, 1998, pág. 1204.

⁸⁵¹ Entre los referidos documentos, resultan de especial interés los contenidos en la Memoria anual del Tribunal Constitucional. Específicamente los elaborados por la Presidencia con motivo de la presentación de la obra o como anexo en los discursos con ocasión de la renovación parcial de magistrados. Véanse al respecto, las Memorias de 2000 a 2002, y de 2008 a 2013.

⁸⁵² Acuerdo hecho público mediante la Nota Informativa núm. 22/2012, de la oficina de prensa del Gabinete de la Presidencia del TC. Madrid, 22 de mayo de 2012.

que se pretende. Sí estimamos que podría idearse una modulación de su conducta a través del diseño de un sistema institucional de renovación de los magistrados que sancione el incumplimiento de los plazos de renovación y que prevea de salidas alternativas al sistema de resultar bloqueado por los partidos políticos. En este capítulo se pretende someter a discusión una propuesta para evitar el prolongado retraso en la designación de los magistrados constitucionales en el caso español.

8.4.- El desfase de las renovaciones parciales y la “solución” adoptada por la LO 8/2010, de 4 de noviembre

La conducta dilatoria en la renovación de magistrados trae también aparejada una evidente alteración del modelo de composición del TC ideado por el constituyente y el legislador, ya que el ordinario procedimiento de renovación escalonado es interrumpido o desfasado por razones ajenas a la justicia constitucional. En efecto, si las designaciones se realizan con retraso, se genera una tensión entre el precepto constitucional que fija los nueve años de duración del cargo de magistrado con el que prevé la renovación trienal del TC por terceras partes, debido a que no pueden respetarse ambos al mismo tiempo.

Como bien lo explica Rubio Llorente, cuando la renovación de los magistrados cesantes se retrasa, los que vengán a sustituirlos, a veces muchos meses después del momento en que debió hacerse, verán su mandato acortado si la cadencia trienal se mantiene rigurosamente, de manera que su propia sustitución se haga exactamente en nueve años contados a partir de la fecha en que teóricamente debieron ser nombrados; en cambio, si para preservar su completo periodo de nueve años, el mismo se empieza a contar desde la fecha en que efectivamente tomaron posesión, la renovación del TC no podría ser trienal⁸⁵³.

Esta evidente tensión entre ambos preceptos provocada por los retrasos en la renovación de magistrados no es reconciliable: o se atiende a la exacta renovación trienal disminuyendo el periodo de nueve años de los magistrados

⁸⁵³ RUBIO LLORENTE, Francisco: “El Tribunal Constitucional”, en *La forma del poder. Estudios sobre la Constitución*, 3ª ed., vol. III, Madrid, CEPC, 2012, pág. 1397.

elegidos o bien se atiende a los nueve años completos del periodo de duración sacrificando el exacto cumplimiento de la renovación trienal⁸⁵⁴.

Una solución que se ha intentado dar desde la práctica para afrontar esta encrucijada ha venido del propio Presidente del Tribunal Constitucional, quien es el encargado de instar a los órganos designantes a que inicien el procedimiento de renovación cuatro meses antes de la expiración del cargo de los magistrados (17.1 LOTC).

Anteriormente, el Presidente del TC empezaba a computar el periodo de mandato de los magistrados que habrían de renovarse, a partir del momento en que debieron ser designados (tomando como punto de referencia el cómputo estricto del plazo de tres años desde los primeros efectuados en 1980 y de acuerdo a la fecha de publicación en el BOE, esto es, el 22 de febrero de 1980) y no en el que efectivamente fueron nombrados, de manera que el tiempo que dilataban en efectuar su designación, a la postre, era el mismo que perdían en el disfrute del periodo ordinario del cargo.

Pero en las renovaciones congresuales que tuvieron lugar en 2001, el Presidente del TC, Pedro Cruz Villalón, decidió cambiar de criterio y prefirió computar el plazo de funciones de los magistrados a partir de la fecha en que efectivamente fueron nombrados⁸⁵⁵ y respetar en lo posible el disfrute del completo periodo del cargo, alargando consecuentemente, la renovación trienal en algunos meses.

¿Cuál de estos métodos ser el más adecuado? Sin intentar agotar aquí este debate, se puede mencionar que buena parte de la doctrina más autorizada se ha pronunciado a favor de mecanismos que privilegien la duración completa del periodo de nueve años de funciones de los magistrados,

⁸⁵⁴ Desde los primeros momentos del TC, GARRIDO FALLA ya de alguna manera advertía esta tensión, cuando refería que los dos preceptos (periodo de cargo y renovación trienal) eran irreconciliables frente a la primera renovación del Tribunal, que debía hacerse a los tres años de haberse configurado (DT 9ª CE). Más recientemente el propio autor pondría nuevamente de relieve tal tensión, por el incumplimiento de los plazos de designación por parte de los órganos proponentes, una situación que incluso experimentó en su propia designación (el Senado la efectuó con un retraso de diez meses). GARRIDO FALLA, Fernando: "Artículo 159", en *Comentarios a la Constitución*, 3ª ed., Madrid, Civitas, 2001, pág. 2657, y del mismo autor, "Disposición transitoria novena", pág. 2796, nota 1.

⁸⁵⁵ Tomando como base la fecha de publicación en el BOE de los Reales Decretos de nombramiento.

por lo respetuoso que pudieran resultar del principio cardinal de la duración igual de los mandatos⁸⁵⁶.

Por mi parte, me adhiero al criterio de preferir la duración completa del periodo de cargo porque es una norma que resulta más protectora de la función, posición e independencia del juez constitucional, por cuanto favorece la certeza y tranquilidad en la plaza, condiciones éstas necesarias para el mejor ejercicio de la labor jurisdiccional del magistrado. Sin embargo, esta postura no ha sido compartida por el legislador. En efecto, la reciente reforma de la Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre, añadió un apartado 5º al artículo 16 de la LOTC, en la que estableció, en lo que aquí interesa destacar, la sustracción del periodo de cargo el tiempo de retraso en la renovación por tercios.

La reforma en este sentido, viene a formalizar la primera de las opciones mencionadas, esto es, pone como punto de referencia para calcular los cuatro meses previos que tiene la Presidencia del TC para solicitar la activación del procedimiento de renovación a los órganos proponentes, la fecha en que debieron ser renovados los magistrados.

Como se puede observar, el legislador no ha intentado siquiera cohonestar los preceptos constitucionales de la duración del mandato y la renovación por tercios, sino que directamente desfavoreció la disposición que impone la duración del periodo de cargo de magistrado en nueve años. La reforma por el contrario, resulta sumamente deferente con la regla constitucional de la cadencia parcial de renovaciones.

Subyace en la reforma una designación de tipo “estructural” que responde a un criterio formal de confección temporal de la plaza, dejando, a mi

⁸⁵⁶ RUBIO LLORENTE, Francisco: “El Tribunal Constitucional”, *op. cit.*, págs. 1398-1399, también en “Los males del Constitucional”, en *El País*, 1 de agosto de 2012; PÉREZ TREMPs, Pablo: “¿Reforma del Título IX de la Constitución? El Tribunal Constitucional: organización y funcionamiento”, en *Revista de Derecho Político*, núm. 37, 1992, pág. 281, también en “El Tribunal Constitucional (I)”, en LÓPEZ GUERRA, Luis, *et al.*: *Derecho Constitucional, vol. I, Los poderes del Estado. La organización territorial del Estado*, 9ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pág. 220; AGUIAR DE LUQUE, Luis: “Composición y organización del Tribunal Constitucional”, en AGUIAR DE LUQUE, Luis; PÉREZ TREMPs, Pablo (dirs.): *Veinte años de jurisdicción constitucional en España*, Valencia, Tirant lo Blanch, Instituto de Derecho Público Comparado, Universidad Carlos III de Madrid, 2002, pág. 34; CASCAJO CASTRO, José Luis: “Respuestas a la Encuesta”, en ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, *et al.*: *La reforma de la justicia constitucional*, Navarra, Thomson-Aranzadi, Centro de Estudios Jurídicos, 2006, págs. 141-142; CRUZ VILLALÓN, Pedro: “El estado del Tribunal Constitucional”, *op. cit.*, pág. 723; FERNÁNDEZ FARRERES, Germán: “Reflexiones sobre el futuro de la justicia constitucional española”, en *El futuro de la justicia constitucional*, Actas de las XII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, Madrid, TC, CEPC, 2007, pág. 59.

parecer, en un desacertado segundo plano la posición institucional del juez constitucional.

Los trabajos parlamentarios resultan muy ilustrativos de la situación descrita, pues en las deliberaciones, se argumentó que los nueve años “se refieren a la plaza que debe designarse, no al derecho subjetivo del designado; es decir, es un plazo del puesto, no es un plazo de quien lo ocupa”⁸⁵⁷. Sin embargo, esta interpretación no me parece susceptible de ser asumida, debido a que el art. 159.3 de la CE establece el periodo de cargo en relación a los “miembros” del TC y en esa tónica de índole personal, regula demás disposiciones relacionadas con el status del magistrado constitucional. En este sentido, la Constitución hace expresa referencia a los titulares de la función jurisdiccional del órgano constitucional del Estado y no a las trazas generales de la configuración administrativa del cargo.

Tanto el precepto de la duración del periodo de cargo como el de la renovación trienal son parte estructural del modelo de TC diseñado en la CE, sin embargo, la duración del cargo es un precepto que resulta más favorable al status del magistrado constitucional y en cambio, el de la renovación escalonada es una norma cuyo efecto consigue reforzar una facultad de los órganos proponentes. Con estas reflexiones es dable pensar que quizá el legislador, ante la disyuntiva de dos preceptos en conflicto con igual rango constitucional, la opción que prefirió, con independencia de su regularidad constitucional⁸⁵⁸, no fue la más afortunada⁸⁵⁹. El legislador orgánico primó una

⁸⁵⁷ Se trata de María Rosa Vindel López del Grupo parlamentario popular en el Senado. Véase SENADO: “Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Se tramita por el procedimiento de urgencia”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 97, IX Legislatura, 20 de octubre de 2010, pág. 5320.

⁸⁵⁸ Véase al respecto, DE ESTEBAN, Jorge; GIMBERNAT, Enrique: “Un crimen perfecto”, en *El Mundo*, el 22 de octubre de 2010; en el que opinan que la reforma es inconstitucional. De igual forma, ASENSIO MELLADO, José María: “Un nuevo atentado al Tribunal Constitucional. La LO 8/2010”, en *Práctica de Tribunales*, La Ley, núm. 78, enero 2011; FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela: “Sobre la reforma de la LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, efectuada mediante la LO 8/2010, de 4 de noviembre”, en *Constitución y democracia: ayer y hoy. Libro homenaje a Antonio Torres del Moral*, vol. III, Madrid, Universitas, 2012, págs. 2713-2731. Para Alfonso FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, es inconstitucional, no en lo que tiene de solución puntual, sino de regla general, en “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, op. cit., pág. 64.

⁸⁵⁹ Tampoco ha recibido un juicio favorable por parte de la doctrina. En este sentido, AGUIAR DE LUQUE, Luis; Díez Revorio, Francisco Javier; GIMENO SENDRA, Vicente; PÉREZ ROYO, Javier: “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, op. cit., págs. 81-83. Aunque tampoco el juicio desfavorable ha sido unánime: PUNSET BLANCO, Ramón y SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, en la propia encuesta, págs. 83 y 86.

norma de mayor repercusión formal en detrimento de la que resultaba más garantista de la función y posición del juez constitucional, según el modelo general esbozado en la Ley Fundamental española.

Por otro lado, considerando esta reforma a la luz del problema del retraso parlamentario en la designación de magistrados, la misma no parece augurar los mejores resultados. En efecto, esta suerte de “legalización” del retraso en la designación de magistrados no resulta un especial incentivo para que las fuerzas políticas procedan a efectuar la elección en tiempo, al contrario, la norma allana el camino para producirlo. La legalización del retraso otorga un generoso margen de maniobra a los órganos proponentes para confeccionar el nombramiento de los magistrados constitucionales. Dicho margen, permitirá a los partidos políticos mantener bloqueada la negociación hasta una mejor oportunidad de promover al candidato de su conveniencia, sin importar cuánto tiempo tarde en llegar ese momento, y sin que pueda sancionarse su conducta.

8.5.- El incumplimiento de los plazos de renovación en Alemania e Italia

Como ya se ha mencionado, este problema no es exclusivo del contexto español sino que puede decirse que es un problema generalizado en el Derecho comparado. Veamos a continuación cómo se ha manifestado en los dos países que venimos haciendo especial referencia en este trabajo, puesto que serán de gran ayuda para analizar el caso propio.

8.5.1.- Alemania

En la práctica seguida en la experiencia alemana, tanto el *Bundesrat* como la Comisión del *Bundestag*, han experimentado retrasos importantes al momento de realizar las selecciones de los magistrados constitucionales⁸⁶⁰. Las causas de lo anterior, no son para nada novedosas, sino que resultan coincidentes con las acontecidas en España.

⁸⁶⁰ ROMANO, Barbara: “L’organizzazione e il funzionamento del Bundesverfassungsgericht”, en Costanzo, Pasquale (coord.): L’organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale: atti del Convegno, Imperia, 12-13 maggio 1995, Torino, G. Giappichelli, 1996, pág. 718.

En este sentido, la doctrina germana refiere que se han debido a los “oportunistas de los partidos políticos”⁸⁶¹, quienes “reclaman para sí rígidamente, también públicamente sin pudor, las sillas de jueces constitucionales”⁸⁶², lo que, agregado a la mayoría de dos tercios exigida para la selección de los magistrados, arroja que todo sea negociado antes, en un sentido “*do ut des*”, en el secreto de las direcciones centrales de los partidos políticos⁸⁶³. El desenlace de la negociación no suele coincidir con la finalización del periodo de cargo del magistrado cesante y la sustitución por tanto, se retrasa, mientras quien ha concluido su periodo, se ve prorrogado de manera automática en sus funciones⁸⁶⁴.

La mayor parte de las designaciones de magistrados han tenido lugar con varios meses de retraso, en este sentido, puede ilustrar el hecho que de los veintinueve magistrados designados entre 1956 y 1984, sólo seis fueron seleccionados antes de la terminación del mandato de sus antecesores, es decir, los veintitrés magistrados restantes lo han sido con retraso, sin embargo uno de los casos más extremos ha sido ocasionado por el *Bundestag*, en que el retraso se prolongó por dos años⁸⁶⁵.

En aquella ocasión, la renovación de un magistrado constitucional se prolongó por ese tiempo debido a que ninguna fuerza política representada en la Comisión del *Bundestag*, quería aceptar un candidato del que se esperaba fuera a tomar una posición en su contra, en la disputa político-constitucional sobre el ejército. El retraso fue duramente criticado por la prensa e incluso el

⁸⁶¹ GECK, Karl: “Nombramiento y ‘status’ de los Magistrados del Tribunal Constitucional Federal de Alemania”, op. cit., pág. 186.

⁸⁶² HÄBERLE, Peter: “La jurisdicción constitucional en la fase actual de desarrollo del Estado constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 14, 2004, pág. 171.

⁸⁶³ Con respecto a este práctica seguida en Alemania, merece la pena destacar la propuesta de Häberle consistente en la conveniencia de que se celebren “*public hearings*” en el *Bundestag* y en el *Bundesrat* con carácter previo al nombramiento de los magistrados constitucionales a fin de que se aumente la transparencia y reduzca el reparto partidista de los cargos entre los grandes partidos políticos. Véase HÄBERLE, Peter: “La jurisdicción constitucional en la fase actual de desarrollo del Estado constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 14, 2004, pág. 172. En el mismo sentido de la propuesta se pronuncia además, SIMON, Helmut: “La Jurisdicción Constitucional”, en BENDA, Ernest; MAIHOFFER, Werner; VOGEL, Juan Joaquín; HESSE, Konrad; HEYDE, Wolfgang: *Manual de Derecho Constitucional*, 2ª ed. Castellano (Antonio López Pina, trad.), Barcelona, Marcial Pons, 2001, pág. 844.

⁸⁶⁴ LUTHER, Jörg: “Giustizia costituzionale nella Repubblica Federale di Germania”, en LUTHER, Jörg; ROMBOLI, Roberto; TARCHI, Rolando: *Esperienze di Giustizia Costituzionale*, tomo I, Torino, G. Giappichelli, 2000, pág. 163.

⁸⁶⁵ HENNING, Frank: “Die Mitwirkung des Verfassungsgerichts an den Richterausschliessung”, en Festschrift Hans-Joachim Faller, 1984, pág. 37, citado por GECK, Karl: “Nombramiento y ‘status’ de los magistrados...”, op. cit., pág. 186, nota 18.

TCF se vio en la necesidad de recordarle al órgano de elección el cumplimiento de su deber. A pesar de ello, el puesto fue ocupado en 1954, dos años después de que hubiera terminado el mandato del antecesor y también después de realizada la reforma constitucional a favor de la facultad de creación de un ejército federal⁸⁶⁶.

Como se puede observar, en el caso “extremo” referido, los grupos políticos presentes en la Comisión del *Bundestag*, al no contar como consecuencia de su actitud omisa en la designación del magistrado constitucional una sanción institucional, retrasaron el proceso de designación de manera estratégica teniendo como base de su conducta la oportunidad política. Dicho caso extremo orienta sobre una de las principales razones por las cuales suele generarse todos los retrasos parlamentarios en la designación de los magistrados constitucionales en Alemania, esto es, la manipulación oportuna y no sancionada de las fuerzas políticas sobre la composición del Tribunal Constitucional Federal.

En Alemania, luego de esta experiencia “límite”, se realizaron intentos para evitar futuras situaciones de esta naturaleza que concretaron finalmente en una reforma a la LTCF. En dicha reforma, en primer lugar, se redujo la mayoría inicialmente prevista a la Comisión del *Bundestag* y al Pleno del *Bundesrat* de tres cuartos para seleccionar a los magistrados constitucionales a la actualmente vigente de dos tercios⁸⁶⁷. En segundo lugar, se estableció la posibilidad de que el Pleno del TCF formulase propuestas de candidatos de carácter consultivo⁸⁶⁸, después de que dentro de los dos meses siguientes a la terminación del mandato del magistrado o de la terminación anticipada de su cargo, los órganos proponentes no hubieren designado sucesor y siempre que el más antiguo de los compromisarios de la Comisión del *Bundestag* o el Presidente del *Bundesrat*, le hubieren invitado a hacerlo (7a LTCF).

La reforma realizada, sin embargo, no ha dado los mejores resultados. Ya desde sus orígenes se vislumbraba la incapacidad de las mismas para

⁸⁶⁶ GECK, Karl, “Nombramiento y ‘status’ de los magistrados...”, *op. cit.*, pág. 181.

⁸⁶⁷ La reducción de la mayoría exigida para tomar el acuerdo, en principio pretendía reducirse a la mayoría simple, sin embargo se planteó el peligro de que el TCF fuera politizado en correspondencia con la dirección dominante del momento por los órganos de designación, por lo tanto, ante la crítica generalizada, finalmente se optó por la mayoría de dos tercios.

⁸⁶⁸ SCHLAICH, Klaus: “El Tribunal Constitucional Federal Alemán”, en FAVOREU, Louis; LUCHAIRE, François; *et al: Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales*, Madrid, CEC, 1984, pág. 145.

impedir una eventual situación de retraso o bloqueo, que es corroborada por los hechos, ya que ni el más antiguo de los compromisarios, ni el Presidente del *Bundesrat*, han tenido prisa en invitar al TCF a realizar las propuestas. El Tribunal, en 31 años (1956-1987) ha hecho en cinco ocasiones este tipo de sugerencias y los órganos proponentes “sólo las han seguido ocasionalmente”⁸⁶⁹. No obstante, a nivel doctrinal se ha pensado, que la presencia del TCF en la realización de las propuestas podría representar una “advertencia a los órganos de designación que no puede ser pasada por alto”⁸⁷⁰ o bien se ha pensado que podría el TCF hacer valer el peso de su autoridad o por lo menos orientar de alguna manera el acuerdo⁸⁷¹.

8.5.2.- Italia

En Italia, de todos los órganos que participan en la designación de los jueces de la Corte Constitucional, es el Parlamento el que ha sido responsable del mayor número de jueces electos con retraso y a las mayores dilaciones en el mismo, llegando incluso a los dos años. Las magistraturas y el Presidente de la República, por su parte, también han incurrido alguna vez en la conducta dilatoria, pero las mismas han sido puntuales⁸⁷². Este problema ha marcado a la CC desde sus comienzos. En efecto, desde la primera designación de magistrados, la tanda de designación parlamentaria se completó en el transcurso de dos años⁸⁷³.

Con posterioridad, ciertamente la conducta dilatoria no se evitó, aunque se mantuvo en márgenes aceptables debido a una convención

⁸⁶⁹ SERVICIO DE ESTUDIO, BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: “Modelos de renovación personal de Tribunales Constitucionales”, *op. cit.*, pág. 227.

⁸⁷⁰ GECK, Karl: “Nombramiento y ‘status’ de los magistrados...”, *op. cit.*, pág. 182.

⁸⁷¹ ROMANO, Barbara: “L’organizzazione e il funzionamento del Bundesverfassungsgericht”, *op. cit.*, pág. 719.

⁸⁷¹ GECK, Karl: “Nombramiento y ‘status’ de los magistrados...”, *op. cit.*, pág. 186.

⁸⁷² Las magistraturas solo incurrieron en retrasos en la primera tanda de elección de jueces en 1956, y desde esa fecha no han vuelto a ocasionar retrasos. El Presidente de la República se tiene el registro de haber incurrido en retraso, si bien superando por un día el plazo de un mes establecido para efectuar la designación, en 1966 bajo el Presidente Saragat. Luego con el Presidente Francesco Cossiga en 1986 se retrasó por unos días la sustitución de Livio Paladin, luego en 1987 la sustitución de Giuseppe Ferrari y Antonio La Pergola se retrasó por cuatro meses. Véase FERRARI, Giuseppe: “La travagliata gestazione della Corte costituzionale...”, *op. cit.*, págs. 105-106; MALFATTI, Elena; PANIZZA, Saulle; ROMBOLI, Roberto: *Giustizia Costituzionale*, *op. cit.*, pág. 49.

⁸⁷³ El acontecimiento es narrado por FERRARI, Giuseppe: “La travagliata gestazione della Corte costituzionale...”, *op. cit.*, págs. 96-99.

parlamentaria efectiva sustancialmente hasta 1992, por medio de la cual, entre los principales partidos políticos se reconocía mutuamente una especie de “cuota” o “derecho de propuesta”. Así a la Democracia Cristiana le correspondía nombrar a dos jueces constitucionales, al Partido Comunista se le asignaba un nombramiento, al Partido Socialista otro y una plaza más era adjudicada a los partidos laicos menores por turno⁸⁷⁴. Sin embargo, a partir de 1992 y hasta la fecha, esta convención entre las fuerzas políticas se ha estado tornando cada vez más complicada, produciendo mayor dificultad a los parlamentarios italianos para lograr un acuerdo de designación con las mayorías previstas en la normativa, lo que ha desembocado en la práctica en el principal inconveniente para la formación de la CC, esto es, el retraso en el proceso de renovación de sus miembros.

El retraso parlamentario en el proceso de renovación de jueces constitucionales ha llegado a tal punto que, el 26 de marzo de 2002, se registró el primer caso en que la Corte Constitucional, por falta del *quorum* funcional de once jueces, se vio en la necesidad de aplazar la discusión de un asunto. El *quorum* en aquella ocasión no se logró debido a la falta de renovación de dos jueces constitucionales que el Parlamento llevaba casi un año y medio sin operar, a lo que se agregó el legítimo impedimento de otros tres: dos por motivos familiares y de salud, y otro declarado incompetente por resultar pariente de una de las partes en el proceso constitucional⁸⁷⁵. “Éste es el primer caso y espero el último en que la Corte se ve obligada a no poder funcionar”, expresó en aquella ocasión, quien fuera Presidente de la Corte, el Juez Cesare Rupert⁸⁷⁶. En efecto, era la primera vez que la Corte se veía impedida a actuar⁸⁷⁷, sin embargo, el historial de retrasos en el nombramiento parlamentario de jueces venía de tiempo atrás.

⁸⁷⁴ PIZZORUSSO, Alessandro: “La Justicia Constitucional en Italia”, *op. cit.*, pág. 158; MALFATTI, Elena; PANIZZA, Saulle; ROMBOLI, Roberto: *Giustizia Costituzionale*, *op. cit.*, pág. 49.

⁸⁷⁵ PANIZZA, Saulle: “Composizione, organizzazione e funzionamento della Corte Costituzionale”, en ROMBOLI, Roberto (a cura di): *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004)*, Torino, G. Giappichelli, 2005, pág. 3; TORRISI, Mimmo: “La Consulta senza numero legale per la prima volta in quarantasei anni”, *op. cit.*, 6 aprile 2002.

⁸⁷⁶ PANIZZA, Saulle: “Composizione, organizzazione e funzionamento della Corte Costituzionale”, *op. cit.*, pág. 4.

⁸⁷⁷ En la República Checa se registró un caso similar en 2003, cuando la Corte Constitucional no consiguió el *quorum* de doce jueces para poder conocer sobre los procesos de inconstitucionalidad de leyes, y se mantuvo así casi seis meses. Todo ello, por falta de designación de los jueces constitucionales más la ausencia temporal de otros. Véase KÜHN,

Para ilustrar lo anterior, considérese que entre 1959 y 1991, de los diecisiete jueces constitucionales que le correspondió elegir al Parlamento, siete fueron elegidos en un tiempo mayor al mes de plazo, acumulando entre todos estos un retraso aproximado de treinta y siete meses. Por otro lado, de 1992 a 2003, el retraso sumado entre los cinco jueces electos en ese periodo, fue de setenta y cuatro meses. Es decir, el retraso medio va en aumento, pasando de poco más de dos meses para los primeros diecisiete jueces, a los casi quince meses para los sucesivos, llegando a un extremo de casi veinte meses en el caso de la sustitución del Juez Caianiello, hasta que designaron a Marini el 18 de junio de 1997⁸⁷⁸.

¿Por qué se incrementaron los meses de retraso acumulado?, ¿por qué en 1992 la convención entre las fuerzas políticas ya no resultó operativa para la regularidad de los nombramientos? Roberto Pinardi menciona entre las causas, que en ese año, la mencionada regla convencional -selección por cuotas- a la que se debió anteriormente la cierta regularidad de las designaciones parlamentarias entró en crisis; el contexto ya no fue el mismo a partir del escándalo de corrupción político-institucional conocido como

Zdenek; KYSELA, Jan: "Nomination of constitutional justices in post-communist countries: trial, error, conflict in the Czech Republic", en *European Constitutional Law Review*, vol. 2, issue 2, june 2006, pág. 198. Por otro lado, en Ucrania, por falta de nominación parlamentaria de los jueces y la jura de otros en 2006, de los dieciocho que integraban la Corte, solo cinco estaban en el cargo, dejándola inoperativa. Ver al respecto la Declaración del Comité de Vigilancia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), adoptado el 15 de diciembre de 2005, titulado "la justicia constitucional en Ucrania 'rehenes de intereses políticos'". De forma similar, en Ecuador se registró un retraso de tres años en la sustitución parlamentaria de los magistrados constitucionales y pese a la *prorogatio* contemplada en el modelo ecuatoriano, provocó que en una ocasión no se alcanzara el *quorum* necesario al renunciar algunos magistrados prorrogados a continuar en el cargo. Véase SERVICIO DE ESTUDIO, BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: "Modelos de renovación personal de Tribunales Constitucionales", en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 61, 2001, pág. 224.

⁸⁷⁸ Aunque se pueden mostrar otros casos significativos, por ejemplo el retraso de once meses en la sustitución de los Jueces Casavola y Spagnoli (25/02/1995-24/01/1996); diecisiete meses para la sustitución de Guizzi y Mirabelli (21/11/2000-24/04/2002); dieciocho meses para la sustitución del Prof. Romano Vaccarella, quien renunció los primeros días del mes de mayo de 2007 y fue designado en su lugar Giuseppe Frigo el 21/10/2008. Véase PINARDI, Roberto: "Il problema dei ritardi parlamentari nell'elezione dei giudici costituzionali tra regole convenzionali e rimedi de iure condendo", en *Giurisprudenza Costituzionale*, núm. 48.3, 2003, págs.1823-1824; VIZIOLI, Nicola: "L'elezione dei membri della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura da parte del Parlamento in seduta comune", en *Il rispetto delle regole. Iscritti degli allievi in onore di Alessandro Pizzorusso*, Torino, G. Giappichelli, 2005, pág. 251; PUGIOTTO, Andrea: "Se non così, come? E se non ora, quando?: sulla persistente mancata elezione parlamentare di un giudice costituzionale", en DESANTI, Lucetta; FERRETTI, Paolo; MANFREDINI, Arrigo D. (a cura di): *Il 70 compleanno di Pierpaolo Zamorani: scritti offerti dagli amici e dai colleghi di facoltà*, Milano, Giuffrè, 2009, págs. 339-354.

“*tangentopoli*”⁸⁷⁹ y también, por la reforma al sistema electoral que pasó de ser proporcional a uno predominantemente mayoritario⁸⁸⁰.

Tales circunstancias mutaron las fuerzas que cada partido político tenía, pues antes de la crisis, la dinámica que permitía el reparto de puestos en “cuotas” venía operada sobre la base de una cierta “predeterminación” del rol que desempeñaban los dos principales partidos políticos, en el cual uno se hacía con el gobierno y el otro con la oposición⁸⁸¹.

En esa medida, la convención por la que se repartían las fuerzas políticas las designaciones de los jueces constitucionales adquiría mayores dosis de estabilidad, lo que permitía, por ejemplo, que el partido en el gobierno votara la propuesta de la oposición a sabiendas de que ésta haría lo mismo con las que correspondieran al partido en el gobierno. Pero ese equilibrio basado en el “*do ut des*”, se alteró y ha dejado inoperante la vieja convención. También hay que considerar que los antiguos y grandes partidos se han descompuesto y se han creado nuevos, articulándose en coaliciones muy poco estables, por lo que se experimentan mayores dificultades para conseguir la mayoría requerida y los incumplimientos de los plazos de renovación son una de sus consecuencias.

Ahora bien, entendidas las causas que acabaron con aquella convención, Nicola Vizioli explica otro de los motivos que incide en los constantes retrasos, que no es otro que el carácter individual de las renovaciones de los jueces constitucionales. En efecto, en la práctica, cuando finaliza el periodo de mandato de un juez constitucional, las fuerzas políticas no proceden de inmediato a su sustitución, sino que mantienen la plaza vacante, hasta en tanto no finalice el periodo de mandato de otro juez, a fin de que los cargos a cubrir sean dos.

Habiendo dos plazas para cubrir, la negociación entre los principales partidos políticos se torna más segura, porque en el mismo momento de la designación de ambas, se garantiza en el acto que cada fuerza nombre a uno.

⁸⁷⁹ A grandes rasgos, es el término con que se conoce a una compleja red de investigaciones, incriminaciones y procesos relativos a los casos de corrupción, concusión y violación de la normativa con relación a la financiación pública de los partidos políticos que provocó una crisis institucional y política en Italia.

⁸⁸⁰ Así también lo destaca PINARDI, Roberto: “Il problema dei ritardi parlamentari...”, *op. cit.*, pág. 1823.

⁸⁸¹ VIZIOLI, Nicola: “L’elezione dei membri della Corte Costituzionale...”, *op. cit.*, pág. 253.

De lo contrario, al haber sólo una plaza por cubrir, el partido político no tiene la certeza de que en la siguiente designación, la fuerza política contraria vaya a apoyar a su candidato. El retraso parlamentario en la designación del juez constitucional vendría a consecuencia de mantener la plaza vacante hasta que se generase otra para que las fuerzas políticas se repartieran la designación de un cargo para cada una⁸⁸².

La parálisis funcional de la Corte Constitucional anteriormente mencionada ha sido, si se quiere, un caso “límite”, sin embargo, no debe perderse de vista que han existido muchas otras ocasiones en donde la Corte se ha quedado incompleta debido a los múltiples puestos vacantes que no renueva el Parlamento, aunque no hayan llegado éstas al extremo de paralizarla funcionalmente debido a que al final se ha reunido el *quorum*; pero el mismo hecho de dejarla incompleta, ha menoscabado su capacidad laboral y en definitiva, ha puesto en juego la confianza de la sociedad en la institución, al dejarla resolver procesos constitucionales de sentida relevancia política sin la debida integración y comunión de perfiles de todos los jueces constitucionales. De todos modos, no debe olvidarse que la frecuente existencia de los retrasos, somete a la Corte Constitucional a mayores probabilidades de que se repita el caso extremo de su parálisis que, como lo advierte Pizzorusso, significan una potencial amenaza para su independencia⁸⁸³.

Ante este panorama, llama la atención que no se haya generado por el momento una respuesta normativa para evitar el problema. Si bien el 9 de mayo de 1996, a iniciativa del diputado Franco Corleone, se presentó una propuesta de Ley Constitucional para sustituir el segundo párrafo del artículo 5 de la l. cost. n. 2/1967, por otro en el que se pretendía introducir el término de dos meses para que los órganos proponentes proveyeran a la sustitución de los jueces constitucionales cuyo periodo de mandato hubiera finalizado. Si terminado el plazo, los órganos no proveyesen a la designación de los nuevos jueces, procedería por cooptación la Corte Constitucional a la elección de los

⁸⁸² *Idem*, pág. 252.

⁸⁸³ PIZZORUSSO, Alessandro: “La Justicia Constitucional en Italia”, *op. cit.*, pág. 159.

nuevos jueces, por mayoría absoluta de sus miembros, dentro de los quince días posteriores al cumplimiento de los dos meses⁸⁸⁴.

La propuesta de ley, con motivo del debate que se inició en Italia en 1997 a fin de revisar la parte II de la Constitución⁸⁸⁵, fue enviada a la “*Commissione bicamerale per le riforme costituzionali*”, en la que no resultaría adoptada. En la misma dinámica de la reforma constitucional italiana, en sede parlamentaria (XIV Legislatura) se plantearían otras propuestas que tocaban puntos concernientes a la composición de la Corte, a la duración del mandato de los jueces y a los órganos que los proponen⁸⁸⁶, pero ya no habría más propuestas concernientes a la previsión de una que incidiera en la resolución del problema del retraso en la designación de los jueces constitucionales.

El Presidente de la República ha sido una de las instituciones que de alguna manera ha intentado dar una solución al problema, inspirado seguramente en su rol constitucional de “poder neutro” o de equilibrio de las instituciones. Está el caso del Presidente Cossiga que en 1991 ante el *impasse* parlamentario para designar magistrados hizo público un mensaje en el que llegó a insinuar como salida del problema la disolución anticipada de la legislatura, o bien el Presidente Scalfaro en su mensaje de fin de año a los italianos en 1995.

Buena parte de la doctrina italiana también se ha ocupado del problema, a este respecto se puede citar a Ruggeri y a Spadaro, quienes dejan apuntada la idea de que en el caso de que el Parlamento prolongue el retraso en la designación de los jueces constitucionales al punto de no permitir la conformación del *quorum* funcional de la Corte, se justificaría la intervención

⁸⁸⁴ CAMERA DEI DIPUTATI: “Proposta di Legge Costituzionale. Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, concernente la sostituzione dei giudici della Corte costituzionale cessati dalla carica”, en *Atti Parlamentari*, núm. 167, XIII Legislatura, 9 de mayo de 1996, págs. 1-5.

⁸⁸⁵ Es la que recoge la parte orgánica de la Constitución (arts. 55 a 139).

⁸⁸⁶ En efecto, los supuestos con respecto al número de jueces giraron entre los diez y veintiuno, sobre el periodo de cargo se propuso para cinco años con posibilidad de reelección y sobre los órganos proponentes se propuso que cinco fueran nominados por el Presidente, cinco por las supremas magistraturas, tres por la Cámara de Diputados y seis por el que se denominaría “Senado Federal de la República”. También se plantearon nuevas disposiciones sobre las mayorías para la elección de jueces en las Cámaras (ya no el Parlamento en sesión conjunta), la adición de previsiones al régimen de incompatibilidad después de finalizado el periodo de funciones, modificación de la composición integrada de la Corte, entre otras. Véase Malfatti, Elena; Panizza, Saulle; Romboli, Roberto: *Giustizia Costituzionale*, op. cit., pág. 65. Los proyectos de reformas constitucionales se presentaron en 2004 a la Cámara de Diputados, en 2005 pasaron al Senado y en 2006 fueron rechazados por referéndum.

sancionadora del Presidente de la República para la disolución de las Cámaras, la intervención vendría justificada por un principio de cooperación de parte del Jefe del Estado a favor de la Corte, configurándose como el órgano “garante del garante”⁸⁸⁷.

De igual forma, abordando el tema de una forma más directa, está Roberto Pinardi, quien luego de ofrecer un amplio abanico de soluciones hipotéticas a esta problemática, ha planteado para el caso italiano, la transmisión de la facultad de nombramiento de los jueces constitucionales al Presidente de la República, luego de que el Parlamento no proceda a la designación de los nuevos jueces en el mes de plazo que tiene para hacerlo⁸⁸⁸.

De manera similar se ha pronunciado Nicola Vizioli, para quien queda claro que el nombramiento de los jueces en el caso de un retraso parlamentario prolongado debe adjudicarse a otro órgano alejado de la lógica “mayorías-oposición”. Dicho órgano podría ser la propia Corte Constitucional o bien el Jefe del Estado, sin embargo, la exitosa experiencia concreta en las designaciones presidenciales hacen a este último el más oportuno para subrogar al Parlamento⁸⁸⁹.

Finalmente se encuentran Jörg Luther, quien refiere la propuesta del llamado “Gruppo di Milano”, y Gianfranco Miglio. Ellos introducen una propuesta en la que si transcurridos tres meses de la finalización del periodo de mandato del juez constitucional, el órgano proponente no ha proveído a la designación del sucesor, será la Corte misma, dentro de los diez días siguientes, la que se encargará de ejecutar la designación, en sesión plenaria. Según Miglio, la propuesta sería utilizable solamente en el caso que por el retraso parlamentario en la designación de los jueces constitucionales, la Corte no pudiese alcanzar el *quorum* funcional⁸⁹⁰.

⁸⁸⁷ La participación auxiliar del Presidente de la República en este caso, viene a su vez influida por hipótesis de Calamandrei y Mortati, planteadas en los trabajos constituyentes. Véase RUGGERI, Antonio; SPADARO, Antonino: *Lineamenti di Giustizia Costituzionale*, op. cit., pág. 60.

⁸⁸⁸ PINARDI, Roberto: “Il problema dei ritardi parlamentari...”, op. cit., págs. 1819-1854.

⁸⁸⁹ VIZIOLI, Nicola: “L’elezione dei membri della Corte Costituzionale...”, op. cit., págs. 254-255.

⁸⁹⁰ LUTHER, Jörg: “I giudici costituzionali sono giudici naturali?”, en *Giurisprudenza Costituzionale*, 1991, págs. 2478-2503; MIGLIO, Gianfranco: *Una Costituzione per i prossimi trent’ anni. Intervista sulla Terza Repubblica a cura di Marcello Staglieno*, 3ª ed., Roma, Laterza, 1991, págs. 88-89.

8.6.- Construyendo una propuesta de solución

8.6.1.- La *prorogatio* y la vacancia del cargo

De lo visto, se aprecia que el problema de las dilaciones excesivas en la designación parlamentaria de magistrados constitucionales no se padece exclusivamente en España. El problema es común, porque similar es el comportamiento de los partidos políticos de supeditar a sus intereses el deber constitucional de nombrar en tiempo a los magistrados constitucionales.

Para el concreto caso español, existe sin embargo desde mi perspectiva un elemento estructural que coadyuva a fomentar tan reprochables prácticas, esto es, la propia articulación de la *prorogatio*. En efecto, el funcionamiento de este instituto jurídico, en el marco del sistema general de renovación de los magistrados, está siendo utilizado, en ocasiones, para fines ajenos para los que fue pensado y se requiere por tanto, la inserción de un ajuste al sistema en el que interactúa.

La prórroga de las funciones es una nota que no ha sido prevista en la Constitución, sino que fue introducida mediante la LOTC, en una fórmula cuyo art. 17.2 la dispuso en estos términos: “los Magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles”.

El precepto no contiene más características de tal institución, por lo que se entiende que la prórroga de las funciones de los magistrados constitucionales salientes no necesita mayor procedimiento formal sino que opera de manera automática, que no cuenta con un límite temporal preestablecido y tampoco prevé sistemas alternativos o “de cierre” en caso de que sea mal utilizada.

La *prorogatio* comenzará con la fecha exacta en que el periodo del cargo de los magistrados salientes se ha agotado y finalizará hasta el momento en que materialmente tomen posesión quienes hubieren de sucederles, es decir, el límite temporal de la prórroga se deja en manos del órgano al que corresponda renovar a los magistrados. Esto en la práctica, les viene a otorgar un poder determinante porque pueden manipularla, de una forma que les permita deliberadamente retrasar o bloquear la renovación de los magistrados

para mantener una composición del TC que estimen más conveniente a sus intereses, por ejemplo, de cara a la resolución de un determinado proceso constitucional.

Si se considera además que la prórroga presupone que el órgano proponente no ha cumplido su deber constitucional de seleccionar a tiempo a los magistrados que le corresponde y que a este incumplimiento la ley no prevé una sanción, se podrá concluir que el diseño de la *prorogatio*, llega a consentir e incluso a estimular tan negligente comportamiento. Por ello, su diseño no es el más adecuado para evitar el retraso ya que no genera una presión efectiva en el sistema institucional para impulsar al órgano proponente a realizar la designación.

La prórroga, además, como señala Santamaría Pastor⁸⁹¹, es una técnica que por su naturalidad y aparente bajo coste, invita a su empleo sistemático; en un determinado caso, los partidos políticos pueden sostener en la negociación a sus candidatos afines y si el acuerdo no fuese conseguido, a la postre, no se plantearía problema en cuanto al funcionamiento del órgano ya que éste no se interrumpiría. La prórroga indebidamente utilizada puede de igual forma, constituirse como un factor de deslegitimación del órgano prorrogado y de la totalidad de decisiones que adopta, dañando significativamente la institución.

La prórroga podría generar además una sensación de interinidad que podría repercutir en el ánimo y funcionamiento de quienes se encuentran en dicha situación. En este sentido, parecen tomar relevancia las declaraciones que en su momento realizó a la prensa el Presidente del TC, Francisco Tomás y Valiente, en medio del clima del retraso en la segunda renovación de magistrados a cargo del Congreso en 1992, cuando aseguraba que aunque el Tribunal estuviera funcionando al 100 por ciento, la actividad "no es enteramente normal porque actuamos sin programación"⁸⁹². Quizás por todo

⁸⁹¹ SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso: "La *prorogatio* de los órganos constitucionales...", op. cit., págs. 20-24. También se han pronunciado por eliminar la *prorogatio*, Díez Revorio, Francisco Javier y Punset Blanco, Ramón: "Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional", op. cit., págs. 87-88.

⁸⁹² Las declaraciones fueron recogidas por el periodista Martín, Carmelo: "Tomás y Valiente propone una fórmula de autorrenovación del Constitucional", en *El País*, 31 de mayo de 1992.

ello, Santamaría Pastor sugiere la supresión de la *prorogatio* o, cuando menos, “un empleo limitadísimo de la misma”⁸⁹³.

Ahora bien, en tales circunstancias cabría plantearse si sería útil prescindir del instituto de la *prorogatio* para evitar el retraso parlamentario en la designación de los magistrados constitucionales. Al respecto, Santamaría Pastor considera que su eliminación sería conveniente porque el eventual riesgo de paralización del Tribunal por falta de renovación de los magistrados, sería una situación mediáticamente tan escandalosa que podría resultar políticamente perjudicial a los Grupos parlamentarios, lo que les constreñiría a conseguir un acuerdo para designar a los magistrados constitucionales dentro de los plazos⁸⁹⁴. Sin embargo, a esa tesis habría que considerar que una eventual paralización del Tribunal constituye verdaderamente un supuesto muy lejano, ya que el *quorum* funcional del Pleno y las Salas es el de dos tercios de los miembros “que en cada momento las compongan” (14 LOTC)⁸⁹⁵.

Además, como bien apunta Aguiar de Luque, no parece que la situación mediáticamente escandalosa que pudiera generarse vaya a impulsar a las fuerzas políticas, puesto que “siempre hay grupos que obtienen un mayor beneficio que otros con el mantenimiento del *statu quo* y con la actitud de bloqueo”⁸⁹⁶. En efecto, baste recordar los episodios de selección de magistrados, para comprobar que en ocasiones los grupos bloquean la designación para mantener una composición del pleno que estiman más conveniente y además, tampoco parece que importe demasiado el desgaste político puesto que siempre culpan de los problemas a la fuerza contraria.

⁸⁹³ SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso: “La *prorogatio* de los órganos constitucionales...”, *op. cit.*, pág. 19.

⁸⁹⁴ *Idem*, pág. 25. En este sentido, Javier GARCÍA ROCA opina que los partidos “deberían asumir su responsabilidad política ante la opinión pública por bloquear la institución”. “La experiencia de veinticinco años de jurisdicción constitucional en España”, en PÉREZ TREMPES, Pablo (coord.): *La Reforma del Tribunal Constitucional. Actas del V Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pág. 49.

⁸⁹⁵ Por lo menos en el funcionamiento del Pleno y las Salas, al parecer no cabría fácilmente una eventual parálisis debido a que el art. 14 de la LOTC, prevé la posibilidad de “adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan”. Esto es, el *quorum* no toma como referencia la completa integración de los doce miembros del Tribunal, si no que parece atender a la composición que efectivamente se verifique en la época de celebración de las sesiones. Quizá donde se podría plantear con mayor probabilidad una parálisis funcional sería en las Secciones, en las cuales el mismo artículo exige la presencia de dos miembros.

⁸⁹⁶ AGUIAR DE LUQUE, Luis: “Una nueva reflexión sobre la *prorogatio*...”, *op. cit.*, pág. 90.

Mientras tanto, el criterio que prevalece es usar el nombramiento como moneda de cambio para realizar las transacciones políticas más convenientes.

Frente a la tesis de Santamaría Pastor de una generalizada supresión de la *prorogatio*, Aguiar de Luque la considera aventurada, pero la estima viable, si se implementase con otras medidas que tomaran en cuenta las particularidades del TC, por ejemplo la regulación de las funciones que podría desempeñar en la situación que excepcionalmente se colocaría con ocho de sus miembros; de antemano considera que “no tendrían por qué descartarse que las tareas habitualmente encomendadas a las Salas pudieran seguir siendo desempeñadas, incluso –si fuera necesario- rebajando el *quorum* actual para la constitución de éstas”. Sí cree en cambio, que el Tribunal reducido debería tener vedado la resolución de recursos de inconstitucionalidad para sentar nueva doctrina o conflictos de competencia⁸⁹⁷.

Ahora bien, al hilo de las anteriores consideraciones, en mi opinión, no parece aconsejable la eliminación de la *prorogatio*, puesto que reporta mayores ventajas su conservación, frente a las que podría traer su eliminación. Ventajas que pueden expresarse en un principio que favorece el mantenimiento de la composición y las funciones del órgano ante los esperables incumplimientos de los órganos parlamentarios encargados de la designación.

Para ello resulta de orientación el caso italiano, en el cual, no se contempla dicha institución y cuya experiencia no parece aportar los mejores resultados. En efecto, el párrafo cuarto del artículo 135 de la Constitución italiana, fue modificado por el art. 1 de la l. cost. n. 2/1967, para establecer que a la finalización del periodo de nombramiento “el juez constitucional cesa del cargo y del ejercicio de las funciones”, con lo cual se excluyó directamente el instituto de la *prorogatio*, opción que no dejó de causar cierta perplejidad en alguna parte de la doctrina italiana⁸⁹⁸.

Como ya se recordó, en una ocasión, por falta de renovación parlamentaria de los jueces más la confluencia de legítimos impedimentos de otros, la Corte tuvo tantas ausencias que se vio obligada a no poder funcionar

⁸⁹⁷ *Idem*, pág. 93.

⁸⁹⁸ D'ORAZIO, Giustino: “Commento alla proposta di legge costituzionale per la modificazione dell'art. 135 della Costituzione”, en *Giurisprudenza Costituzionale*, núm. 1-2, 1967, págs. 569-580.

debido a la imposibilidad de lograr el *quorum* de once miembros⁸⁹⁹. Es verdad que se había tratado de un caso extremo, sin embargo, Roberto Pinardi ha reflejado bastante bien cómo desde 1959 a 2003, se han presentado numerosos casos en que se ha retrasado la selección de los jueces constitucionales manteniendo a la Corte sin sus quince miembros y arriesgándola cada vez más a eventuales parálisis⁹⁰⁰. De ahí que incluso la misma doctrina italiana se haya planteado, la previsión de la *prorogatio* a fin de mantener completa la Corte. No obstante, también han reconocido algunos de los riesgos a los que ya se ha aludido en este trabajo sobre el uso de la prórroga, es decir, la posibilidad de que a través de ella se “dé vida a retrasos instrumentales, dirigidos a influir, en alguna medida, sobre la actividad decisoria del juez de las leyes”⁹⁰¹.

El TC español, como ya se ha mencionado, está conformado por doce magistrados que se renuevan en grupos de cuatro cada tres años, lo que supondría que en el caso de que se genere un retraso parlamentario en la designación de los nuevos magistrados, la regla italiana de la supresión de la *prorogatio* y la vacancia del puesto provocaría que el Tribunal estuviera fatalmente expuesto a quedarse sin cuatro integrantes por lo menos en cada ocasión que le toque a los órganos parlamentarios elegir, lo que podría plantear en un caso extremo, una situación de inestabilidad que no parece óptima para el TC: ante la falta de sustitución de los cuatro miembros podrían unirse supuestos de fallecimiento, recusación o legítimo impedimento de los magistrados, que colocarían al Tribunal en una situación quizás no de parálisis funcional como sucedió en Italia, pero sí en una posición endeble para resolver los procesos constitucionales sin la completa integración de los titulares de la jurisdicción constitucional.

Como se puede ver, las situaciones italianas reseñadas son en gran medida trasladables al modelo español. Por todo ello, podría concluirse que el planteamiento de la eliminación de la *prorogatio* y la consecuente vacancia del puesto es desaconsejable.

⁸⁹⁹ MALFATTI, Elena; PANIZZA, Saulle; ROMBOLI, Roberto: *Giustizia Costituzionale*, op. cit., págs. 51-52.

⁹⁰⁰ PINARDI, Roberto: “Il problema dei ritardi parlamentari...”, en *Giurisprudenza Costituzionale*, núm. 48.3, 2003, págs. 1823-1824.

⁹⁰¹ *Idem*, pág. 1847.

En España, si bien la forma en que está configurada la *prorogatio* ha generado sus problemas, lo cierto es que la misma ha logrado garantizar una cierta tendencia a mantener la integración del TC, lo que resulta más deseable a la eventual disminución alarmante de los miembros del Tribunal, mermando la legitimidad de sus resoluciones. Quizás por el camino donde debería transitarse, sería el de la modificación del modelo español de la *prorogatio* adicionando un elemento que aleje su periodo de finalización de la entera disponibilidad de los órganos proponentes.

8.6.2.- Plazo predeterminado para el nombramiento

Conscientes de las ventajas que conlleva la previsión de la *prorogatio* en el sistema de renovación de los magistrados constitucionales en España, cabría entonces averiguar el mecanismo que debería introducirse en la articulación del procedimiento de renovación y el instituto de la *prorogatio* para que no se haga mal uso de ésta. El componente alternativo utilizable para evitar que sea la *prorogatio* prolongada excesivamente en el tiempo, ¿podría ser el establecimiento de un plazo predeterminado al órgano proponente para que proceda a designar a los magistrados constitucionales?

Este planteamiento ha tenido varias manifestaciones en sede parlamentaria, entre las más recientes, se pueden referir por lo menos tres propuestas de modificación al artículo 17 de la LOTC. Las tres tuvieron por objeto imponer un límite temporal a la prórroga introduciendo el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de expiración de los nombramientos de los magistrados cesantes, previendo además la finalización inmediata y automática de sus cargos, dejando por tanto, las plazas vacantes.

Según las propuestas, el plazo de seis meses, sería el periodo de tiempo prudencial para que se acordara el nombramiento. La cantidad concreta de seis meses vendría justificada porque en ocasiones la expiración del mandato podría coincidir con una renovación de los propios órganos proponentes. La idea de que las plazas quedaran vacantes tenía como objetivo que las fuerzas políticas se motivaran a designar a los nuevos magistrados al no contar con el instrumento que les permitiera manipular la composición del

tribunal con prórrogas de los magistrados según qué sentencia deba dictar el Tribunal⁹⁰².

Las propuestas, sin embargo, no llegaron a modificar la ley, puesto que dos caducaron como consecuencia de la disolución de la IX Legislatura⁹⁰³ y una fue rechazada⁹⁰⁴. Prácticamente las justificaciones del rechazo fueron por un lado, el riesgo de colapsar el Tribunal, al dejarlo sin magistrados suficientes en el caso de no conseguir el acuerdo para designar a los nuevos magistrados, y por otro lado, la innecesaria previsión de los plazos de nombramiento y la vacancia de las plazas, al tratarse de cuestiones que se resuelven con voluntad y consenso de los partidos políticos.

En cualquier caso, la intención de tales proposiciones de modificación de la LOTC, por más sugerentes que se hayan presentado, en realidad me parece

⁹⁰² Así lo explica el diputado Jané I Guasch. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Toma de consideración de Propositiones de Ley, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 254, Pleno y Diputación permanente, IX Legislatura, sesión plenaria núm. 242, de 21 de junio de 2011, pág. 14.

⁹⁰³ Una de las propuestas que caducó fue la formulada en el Congreso de los Diputados por el Grupo parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, visible en, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y la Ley Orgánica 8/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 244-1, serie b, proposiciones de ley, IX Legislatura, 30 de abril de 2010, págs. 1-2. La otra propuesta que caducó fue la elaborada en el Senado por el Grupo parlamentario *Entesa Catalana de Progrés y Convergència i Unió*. Véase SENADO: “Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 20 (a), serie III a, proposiciones de Ley del Senado, IX Legislatura, 27 de mayo de 2010, pág. 4591. Esta propuesta fue tomada en consideración por el Senado. Véase SENADO: “Toma de consideración de proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 85, IX Legislatura, sesión plenaria de 23 de junio de 2010, págs. 4579-4591. Se remitió al Congreso, en el que se estuvo prorrogando el plazo de presentación de enmiendas por poco más de un año (15/09/2010-21/09/2011), hasta que finalmente caducó. La caducidad de ambas proposiciones de ley, puede verse publicada en CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Relación de iniciativas caducadas y de iniciativas trasladadas a la Cámara que se constituya en la X Legislatura”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. d-648, serie d, general, IX Legislatura, 28 de octubre de 2011, págs. 18 y 22, respectivamente.

⁹⁰⁴ Se trata de la propuesta formulada en el Congreso de los Diputados por el Grupo parlamentario catalán *Convergència i Unió*. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 253-1, serie b, proposiciones de ley, IX Legislatura, 4 de junio de 2010, págs. 1-4. La discusión se encuentra en, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Toma de consideración de Propositiones de Ley, del Grupo Parlamentario Catalán (*Convergència i Unió*), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 254, Pleno y Diputación permanente, IX Legislatura, sesión plenaria núm. 242, de 21 de junio de 2011, págs. 13 y ss., y 44. La propuesta fue ampliamente rechazada con 311 votos y sólo tuvo a favor 26.

que poco podían resolver el problema de fondo, esto es, evitar o inhibir de forma eficaz la conducta dilatoria de las fuerzas políticas.

Es verdad que la implementación de un plazo y la posterior vacancia del cargo resultaría útil para que los partidos perdieran el incentivo de mantener una cierta composición del Tribunal frente a la resolución de un recurso, pero ello no hace considerar otras causas por las que pueden dilatarse, como puede ser, esencialmente, la táctica y negociación estratégica para “colocar” como magistrados constitucionales a sus candidatos preferidos con cierta determinación o intransigencia. Todo ello, sin importar el tiempo que pudiera dejarse al Tribunal con plazas vacantes y sin que a los causantes del incumplimiento de los plazos constitucionales se les impute alguna responsabilidad.

Por otro lado, fijando la atención únicamente en el establecimiento de un plazo específico para proceder a la designación de magistrados, se puede decir, que del mismo no puede esperarse que impida los retrasos. Quizá, los plazos son útiles porque en principio, motivan a pensar en algunas ventajas, como puede ser el intento de objetivar el término de la prórroga de los magistrados cesantes prevista por el 17.2 de la LOTC, imponiendo un límite temporal a la misma, lo que en un sentido más amplio vendría a dotar al procedimiento de renovación de mayores índices de certeza jurídica. La finalización de la prórroga ya no estaría en manos de las Cámaras parlamentarias o mejor dicho, hasta el momento en que estas consiguiesen el acuerdo, sino que el término de la misma vendría con el natural paso del tiempo.

Ahora bien, dicho lo anterior, apreciemos cómo la experiencia muestra que el establecimiento de plazos no evita los retrasos, y para ello, resulta particularmente revelador el caso del artículo 17.1 de la LOTC. En efecto, se trata del plazo de cuatro meses previos a la terminación del cargo de los magistrados constitucionales salientes, para que la Presidencia del TC comunique a los órganos proponentes que inicien el procedimiento de selección de los nuevos. En la práctica, ese plazo ha finalizado y los órganos legislativos frecuentemente no han conseguido elegir a los sucesores e incluso han ocupado mucho más tiempo demorando en exceso la renovación de los magistrados.

Esa misma tendencia de incumplimiento de plazos parece ser confirmada en otras experiencias constitucionales. Puede acudirse de nueva cuenta al caso italiano, en donde el modelo de renovación de jueces constitucionales establece el plazo ordinario y no perentorio de un mes para que los órganos proponentes procedan a la designación de los jueces constitucionales (5.2 l. cost. n. 2/1967), sin embargo, como ya lo hemos mencionado, el mismo ha sido reiteradamente desatendido en la práctica por el Parlamento. Recordemos que su incumplimiento es tan habitual, que su sentido literal se ha desvanecido en la práctica hasta interpretarlo como un plazo mínimo, para al menos, comenzar el procedimiento y efectuar un primer escrutinio⁹⁰⁵.

La razón esencial del poco respeto al plazo resulta coincidente con la realidad española, esto es, que no ha constituido un verdadero estímulo a las fuerzas políticas para que realicen el nombramiento en ese tiempo. No parece pues, la opción más eficaz. Quizá para que los plazos tuvieran mayores resultados, deberían venir acompañados de una disposición que sancione su incumplimiento.

8.6.3.- Facultad de propuesta al TC

Retomando la idea de la previsión de un plazo predeterminado para que los órganos proponentes procedan a la designación de los magistrados constitucionales, pero adicionalmente contemplando una sanción a su incumplimiento con la finalidad de dotar de mayor eficacia al plazo, se puede plantear la posibilidad de que una de las sanciones o consecuencias de dicho incumplimiento sea la creación eventual de una facultad de propuesta de los magistrados constitucionales a cargo del TC, a fin de apurar el procedimiento selectivo.

Una propuesta del género está contemplada en la experiencia alemana de justicia constitucional, en donde ya vimos que el Pleno del TCF puede formular propuestas de candidatos, de carácter consultivo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: primero que hayan pasado dos meses

⁹⁰⁵ Así lo refiere BIAGETTI, Francesca: "Il procedimento parlamentare di elezione dei giudici costituzionali: spunti problematici", *op. cit.*, pág. 12.

desde la conclusión del cargo sin que los órganos competentes hayan procedido a la designación; segundo, que el más antiguo de los integrantes de la Comisión electoral del *Bundestag* o el Presidente del *Bundesrat* le hayan invitado a hacerlo (7a LTCF). El Pleno del Tribunal confecciona estas propuestas por mayoría simple. Debe proponer una terna, en los casos en que deba renovarse una plaza, pero si se renuevan más de forma simultánea, entonces debe proponer un número doble al de plazas a cubrir (7a, 2 LTCF).

Sin embargo, como ya se ha señalado, en Alemania este mecanismo no ha evitado las dilaciones prolongadas en la selección parlamentaria de magistrados constitucionales y tampoco parece que haya sido completamente efectiva su intervención para desbloquear el *impasse*. Con estos antecedentes, la formulación de esta propuesta para el caso español no se antoja operativa, aunque es verdad que en un sector de la doctrina suele mostrar simpatía por la misma⁹⁰⁶. Sin embargo, la propuesta supone algunas reflexiones que pueden mejorarla. Una de ellas, está referida al medio por el cual se activa la posibilidad de que el Tribunal formule la propuesta y la otra tiene relación con la fuerza vinculante que pudiese tener la misma.

En la primera de ellas se atiende a que el Tribunal necesita de la “invitación” del órgano proponente moroso como condición *sine qua non* para formular la propuesta. Esta característica plantea la curiosa situación de que la facultad de invitación a la formulación de propuestas recae precisamente en quienes son los responsables de no proveer en tiempo a la designación de los magistrados, lo cual hace augurar sus pocas probabilidades de éxito. Sin embargo, suponiendo que efectivamente las fuerzas políticas procediesen a invitar al TC a su formulación, el carácter consultivo de las mismas no las haría determinantes para impulsar la designación de los magistrados sin mayor retraso.

En apoyo de lo anterior, pudiera recordarse una situación similar acaecida en España en la segunda renovación grupal de magistrados constitucionales a cargo del Congreso de los Diputados en 1992, en la cual, ante la falta de consenso para designar en tiempo a los magistrados, el Partido

⁹⁰⁶ Por ejemplo, FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso: “Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional”, op. cit., págs. 64 y 88, aunque observa que quizá la prisa en seleccionar a los magistrados que imprimiría esta medida pueda ayudar poco a la mejor elección de los magistrados.

Popular invitó a las asociaciones profesionales de jueces y fiscales para que formularan propuestas de candidatos para el TC; en aquella ocasión el PP asumió esa lista de propuestos, sin embargo las mismas no lograron ser consensuadas con el PSOE y cada partido político llevó por separado sus listas a votación por el Pleno⁹⁰⁷.

Guardando las diferencias de los casos, esta podría ser la misma suerte de las propuestas presentadas por el TC. Como se puede observar, la posibilidad de que se acuda a otras corporaciones para la formulación de propuestas no parece que genere mayores dificultades debido a que las mismas pueden presentarse, pero al final, no aprobarse y mantener la designación bloqueada. Por ello, el elemento relevante de una facultad de propuesta tiene que ver con la fuerza vinculante que esta pudiera tener.

Probablemente la propuesta a cargo del TC sería más eficaz si no fuese accionada mediante invitación, sino que se articulara con la fuerza de una facultad de nombramiento establecida legalmente, con plenos efectos electivos y no, como se ha formulado en Alemania, con efectos consultivos. Podría tratarse de una facultad de nombramiento del Tribunal para seleccionar definitivamente a los miembros faltantes luego que el Parlamento no la ejerciese en determinado tiempo, todo ello sería al estilo del Tribunal Constitucional portugués, que coopta directamente a tres de sus miembros. Veamos esta modalidad con más detalle.

8.6.4.- La cooptación por el TC

Como se vio en el primer capítulo de este trabajo, de los trece miembros del Tribunal Constitucional portugués diez son designados por la Asamblea de la República y luego los diez jueces constitucionales elegidos cooptan a los tres restantes. Esta fórmula de composición fue criticada en sus inicios por una parte de la doctrina lusa, pero actualmente la tendencia general es el reconocimiento positivo de la institución, en gran parte debido al desempeño prudente y de calidad de los jueces constitucionales que han sido elegidos. No

⁹⁰⁷ Véase al respecto la participación del diputado Trillo-Figueroa: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Elección por el Pleno de la Cámara de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 203, IV Legislatura, 25 de junio de 1992, págs. 10008 y ss.

obstante, se conservan algunos sectores minoritarios críticos en la forma de composición del Tribunal que la estiman “partidizada” lo que le impide –según los críticos- un grado de independencia equiparable a la de los “verdaderos” tribunales⁹⁰⁸.

Al margen de dicho debate, el desarrollo en la práctica del modelo de composición ha dejado ver las dificultades del consenso parlamentario para designar a los diez jueces constitucionales revelando retrasos en los procesos de designación; por el contrario, en la designación de los tres jueces cooptados, se destaca la mayor facilidad para lograr el consenso entre los miembros del TC para elegir a sus compañeros. Asimismo, se presenta entre las ventajas de la cooptación “un cierto distanciamiento a una intervención exclusiva de los directorios de los partidos políticos en la selección de los jueces”⁹⁰⁹, porque tal y como ya se vio, el procedimiento de cooptación luso se desarrolla en un ámbito dominado por el colegio de los diez jueces constitucionales del Tribunal.

Con las referidas ventajas expresadas por algunos representantes de la doctrina portuguesa, valdría la pena preguntarse si este elemento del sistema de composición portugués podría trasladarse a la experiencia española para utilizarlo en la medida de desbloqueo que venimos confeccionando. Al respecto, quizá resulte conveniente tomar en cuenta las siguientes consideraciones.

En primer lugar, el funcionamiento del modelo de cooptación adoptado por el Tribunal Constitucional luso resulta de interés. Se trata concretamente de un modelo que, atendiendo a la clasificación elaborada de la institución en general por Loewenstein⁹¹⁰, se conoce como un sistema de “cooptación electiva directa”, consistente en un procedimiento a través del cual a una persona le es confiada una carga o una función por parte de un reducido grupo de electores.

⁹⁰⁸ DE ARAÚJO, António; TELES PEREIRA, J. A.: “A justiça constitucional nos 30 anos da constituição portuguesa: Notas para uma aproximação ibérica”, en TAJADURA TEJADA, Javier (coord.): *La Constitución portuguesa de 1976. Un estudio académico treinta años después*, Madrid, CEPC, 2006, págs. 209 y 214.

⁹⁰⁹ MOREIRA CARDOSO DA COSTA, José Manuel: “Tópicos sobre competencias e integración del Tribunal Constitucional en Portugal”, en *Ius et Praxis*, núm. 1, 2002, pág. 331.

⁹¹⁰ LOEWENSTEIN, Karl: *Le forme della cooptazione. I processi autonomi di riproduzione dei gruppi privilegiati*, Milano, Giuffrè, 1990, pág. 266.

El funcionamiento mismo de este procedimiento electivo permite presumir una elección más pacífica y la eliminación de interferencias ajenas al órgano que elige. La cooptación electiva directa es un importante elemento del proceso potestativo que se desarrolla en el interior de las organizaciones; asimismo, constituye un medio para mantener a los miembros de un grupo que ya existe y que el mismo decide los criterios de quienes pasarán a formar parte de él.

En segundo lugar, el funcionamiento de la cooptación aplicada a la elección de los magistrados alejaría del TC español de la lógica de mayorías y minorías presente en las designaciones parlamentarias de los magistrados constitucionales, por lo que podría bloquear los intereses particulares que están detrás de los partidos políticos y en su lugar, vendría a privilegiar el interés de la composición integral de la institución por los sujetos que principalmente están interesados en su conservación, es decir, sus propios miembros⁹¹¹.

La cooptación a cargo del TC no supondría un proceso de elección ciego, sino que presentaría bastantes posibilidades de que los cooptantes se informasen sobre la capacidad de las funciones del candidato, prestigio, especialización profesional, etcétera, pudiendo con ello garantizar el perfil que se exige legalmente de los miembros del Alto Tribunal. La cooptación podría representar, además, un medio para dar acceso a miembros expertos en determinadas materias que estime necesarios el colegio, teniendo la posibilidad incluso aquellas personalidades que no tendrían oportunidad alguna de acceso a través de elecciones necesariamente dominadas por los partidos políticos.

8.6.5.- La propuesta: el traslado de la facultad de selección de magistrados al Pleno del TC, como medida para desbloquear la designación de las Cámaras

Con las consideraciones anteriores, podemos someter a discusión la propuesta consistente en la introducción de un plazo predeterminado y perentorio de tres meses, para que las Cámaras parlamentarias procedan a la selección de los magistrados constitucionales; si luego de transcurrido este plazo no se hubiese provisto la selección, a efectos de una “sanción institucional”, la Cámara proponente perderá por esa ocasión la facultad de

⁹¹¹ *Idem*, pág. 242.

nombramiento y ésta pasará al TC, el cual, en corto plazo, proveerá a la designación mediante acuerdo del Pleno.

Sostengo esta propuesta porque considero que la eventual pérdida de la facultad de nombramiento de las Cámaras parlamentarias, podría representar un efectivo impulso para que las fuerzas políticas presentes en éstas, procedan a realizar la designación de los magistrados en tiempo. La pérdida de un derecho o una facultad en virtud de no ejercerla en el tiempo otorgado para ello es una regla aplicada en el ámbito del Derecho Procesal bastante difundida que podría servir de orientación para este caso. La pérdida de un derecho por no ejercerlo en determinado plazo tiene por objeto dar certeza jurídica y además constituye un mecanismo que garantiza el desarrollo y la consecución de los pasos de un proceso jurisdiccional o administrativo hasta su finalización.

Con esta medida podría garantizarse la continuidad ordinaria del procedimiento de renovación de los magistrados constitucionales hasta su toma de posesión en el cargo. Seguramente esta sanción no solucione el problema político inmerso en el retraso parlamentario, sin embargo, sí que impediría que sus manifestaciones afectasen o interfiriesen lo menos posible en la composición del Tribunal Constitucional en momento límite.

En principio, la propuesta no alteraría el modelo actual de composición y renovación de los magistrados constitucionales y no se prescindiría de la participación de los órganos parlamentarios, sino que se establece una medida subsidiaria para desbloquear este tipo de incidencias extremas en el procedimiento selectivo y garantizar la completa integración del Tribunal, así como su ordinario funcionamiento.

El plazo de tres meses que se propone para proveer el nombramiento, constituye una nota prudente e importante para ordenar la ejecución de actos procesales y pretende objetivar el límite del periodo en que los magistrados cesantes pueden permanecer prorrogados. Este plazo se formula considerando los cuatro meses de anticipación con los que el Presidente del TC insta a los órganos proponentes a proveer los nombramientos (17.1 LOTC), un plazo que ya hemos dicho, se da en unos términos de información, de modo que el órgano encargado de la designación puede comenzar los procedimientos selectivos mucho tiempo antes. En cualquier caso, el nuevo plazo de tres

meses, vendría a ser sólo un tiempo más de “gracia” o de transición entre las sustituciones de los magistrados constitucionales.

En rigor, la suma de los plazos, tanto de la comunicación presidencial como la del periodo de gracia, arrojaría un periodo general de siete meses para efectuar la designación del magistrado, el cual se presenta lo suficientemente amplio como para que sea efectuado dentro de los periodos de trabajo parlamentario de la respectiva Cámara, con el correspondiente periodo deliberativo que puede esperarse de los procedimientos de designación de altos cargos públicos.

La prórroga del ejercicio de los cargos se mantendría en los mismos términos, esto es, hasta que hubieran tomado posesión quienes hubiesen de sucederles. La diferencia es que la prórroga no se prolongaría en exceso, sino que estaría constreñida a los tres meses del periodo de gracia a la Cámaras y si éstas no consiguen acordar el nombramiento, se prolongará un poco más, durante el tiempo que ocupe el Pleno del TC para proveer los nombramientos.

Por otro lado, como complemento de la propuesta, se introduciría el establecimiento de un plazo para que el Pleno del TC procediese a la designación de los magistrados faltantes. La duración del plazo tendría que ser necesariamente corta, quizá entre los diez -como en Portugal- o quince días hábiles. El periodo, en términos reales, podría traducirse en cerca de veintidós días, los cuales resultarían adecuados para que los magistrados confeccionasen delicadamente sus propuestas de candidatos, que el Presidente del TC procediera a convocar al Pleno, fueran deliberadas en una o varias sesiones y finalmente decididas con el acuerdo favorable del Pleno.

El acuerdo plenario debería verificarse de acuerdo al *quorum* funcional del artículo 14 de la LOTC, esto es la presencia de al menos dos tercios de los miembros que en cada momento compongan el Pleno, y además se regiría por la regla de votación del art. 9.2 de la LOTC prevista para la elección del Presidente y Vicepresidente del Tribunal, únicamente en lo relativo a la necesidad de la mayoría absoluta para la primera votación y de mayoría de votos para la segunda. Con relación al procedimiento para que el Pleno realice la cooptación, podría resultar orientativo el estipulado en los artículos 17 a 19 de la ley que regula al Tribunal Constitucional portugués, en cuanto a que previene detalladamente la presentación de las propuestas, la discusión, el

procedimiento y rondas de votación, el escrutinio, el acuerdo de designación y la formalización del cargo⁹¹².

El procedimiento de elección a cargo del Tribunal supone una mayor distancia del influjo que pudieran introducir los partidos políticos en el proceso selectivo y deja al Tribunal mayores márgenes para defender el desarrollo ordinario de sus competencias y su completa integración. La cooptación ha dado buenos resultados en Portugal y por eso, creo que podría ser de recibo en España.

Servirían de apoyo a esta propuesta, las iniciales recomendaciones que Kelsen formuló para la conformación de los tribunales constitucionales⁹¹³. En efecto, dentro de una serie de ellas, consideró la posibilidad de que se dejase al propio Tribunal el derecho a elegir a algunos magistrados. Esta posibilidad podría descansar en la consideración de que el TC estaría en las mejores condiciones de evitar interferencias o retrasos en el proceso de renovación o sustitución de sus miembros, a lo cual podría incluso proveer dentro del nutrido

⁹¹² Por su interés, se transcriben dichos artículos: Artigo 17.- (Reunião para cooptação) 1. Ocorrendo vagas de juízes cooptados, são as mesmas preenchidas pelos juízes eleitos pela Assembleia da República em reunião a realizar no prazo de 10 dias. 2. Cabe ao juiz mais idoso marcar o dia, hora e local da reunião e dirigir os trabalhos e ao mais novo servir de secretário. 3. Ocorrendo vagas de juízes eleitos pela Assembleia da República e de juízes cooptados, são aquelas preenchidas em primeiro lugar; Artigo 18 (Relação nominal dos indigitados) 1. Após discussão prévia, cada juiz eleito pela Assembleia da República indica em boletim, que introduz na urna, o nome de um juiz dos restantes tribunais ou de um jurista, devendo o presidente da reunião, findo o escrutínio, organizar a relação nominal dos indigitados. 2. A relação deve conter nomes em número igual ou superior ao das vagas a preencher, incluindo os de juízes dos restantes tribunais em número pelo menos suficiente para preenchimento da quota de lugares a estes reservada e ainda não completada, repetindo-se a operação as vezes necessárias para aquele efeito; Artigo 19 (Votação e designação) 1. A cada juiz cooptante é distribuído um boletim de voto do qual constem, por ordem alfabética, os nomes de todos os indigitados. 2. À frente de cada nome figura um quadrado em branco destinado a ser assinalado com a escolha do cooptante. 3. Cada cooptante assinala com uma cruz os quadrados correspondentes aos indigitados em que vota, não podendo votar num número de indigitados superior ao das vagas a preencher, nem num número de indigitados que não sejam juízes dos restantes tribunais que afecte a quota de lugares a estes reservada, sob pena de inutilização do respectivo boletim. 4. Considera-se designado o indigitado que obtiver um mínimo de 7 votos na mesma votação e que aceitar a designação. 5. Se após 5 votações não tiverem sido preenchidas todas as vagas, organiza-se nova relação nominal para preenchimento das restantes, observando-se o disposto no artigo anterior e nos nºs 1 a 4 do presente artigo. 6. Feita a votação, o presidente da reunião comunica aos juízes que tiverem obtido o número de votos previstos no nº 4 para que declarem por escrito, no prazo de 5 dias, se aceitam a designação. 7. Em caso de recusa, repete-se, para preenchimento da respectiva vaga, o processo previsto nos números e artigos anteriores. 8. A cooptação de cada indigitado só se considera definitiva depois de preenchidas todas as vagas. 9. A lista dos cooptados é publicado na 1ª Série-A do Diário da República, sob forma de declaração assinada pelo juiz que tiver dirigido a reunião, no dia seguinte ao da cooptação.

⁹¹³ KELSEN, Hans: "La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle)", en *Revue de Droit Public et de la Science Politique en France et à l'Étranger*, t. XLV, 1928, pág. 227.

personal al servicio jurídico del mismo Tribunal, lo que garantizaría el personal de experiencia en la materia necesario para el funcionamiento de la institución.

El debate en torno al tema por supuesto no está para nada cerrado. En la doctrina se pueden valorar otro tipo de propuestas de muy heterogéneo sentido, como por ejemplo, la de reducir en su caso las mayoría calificada exigida al Parlamento para la designación⁹¹⁴, o darle cierta intervención al Rey para designar entre una terna⁹¹⁵. La propuesta que aquí se plantea, no pretende más que inscribirse en este debate general.

8.6.6.- Algunas críticas

La propuesta, sin embargo, puede plantear algunos problemas. Para ello, es conveniente traer a colación algunas observaciones que se han realizado a esta idea, con motivo de su formulación anterior por quien fuera Presidente del TC en 1992, Francisco Tomás y Valiente, en el marco de un periodo crítico de retraso en la renovación de magistrados a cargo del Congreso⁹¹⁶.

Entre los problemas que se pueden presentar, se puede destacar el relativo a una cierta pérdida o menoscabo de la necesaria legitimidad democrática o la reproducción de un consenso similar al constituyente, que tiene que acompañar el acto selectivo de magistrados constitucionales, el cual sólo puede venir impreso a través de la participación del Parlamento. Siguiendo esta línea crítica, se diría que esta propuesta favorecería, por otro lado, una

⁹¹⁴ Más recientemente, SIMÓN YARZA, Fernando: “La composición de la justicia constitucional en perspectiva comparada (en especial, con relación a Estados Unidos)”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 31, 2013, pág. 375. Aunque también por una línea cercana iba la enmienda 963 presentada en el Senado por Luis Angulo Montes en los debates constituyentes: “Si no se alcanzase el quórum expresado, se procederá a una segunda votación, entre los candidatos que hubiesen obtenido las mayores votaciones, para designar entre ellos, por mayoría simple, los que deban ser propuestos”.

⁹¹⁵ Susana GARCÍA COUSO propone que de “no proveerse la vacante en el plazo de tres meses desde el cese, el Rey procederá directamente a su designación entre una terna de Magistrados de carrera con más de veinte años de ejercicio profesional presentados por el Consejo General del Poder Judicial en Pleno en la forma que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial. El plazo se interrumpirá para las Cámaras por el tiempo correspondiente a los periodos intercesiones”. En “Cómo superar la lógica del estado de partidos en el Tribunal Constitucional: la reforma del artículo 159 CE”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 29, 2012, pág. 433.

⁹¹⁶ En la época, la prensa recogió su declaración sobre la conveniencia de introducir un procedimiento para que la renovación de los magistrados del TC dejara de corresponder, pasado un mes de plazo sin cumplimentarla, al Parlamento y recayera en el propio Tribunal. Ver la ya citada nota de MARTÍN, Carmelo: “Tomás y Valiente propone una fórmula de autorrenovación del Constitucional”, en *El País*, 31 de mayo de 1992.

práctica que potenciaría el fenómeno corporativista o endogámico en la designación de los magistrados constitucionales⁹¹⁷.

Las posturas reseñadas poseen, en efecto, cierta contundencia, sin embargo, podrían matizarse de alguna manera, si se considera en primer lugar, que la apuesta principal de la propuesta es de tipo disuasoria. No pretende eliminar a las Cámaras como órganos designantes, sino de darle una salida alternativa al sistema, cuando los órganos más representativos del pueblo incumplen de forma excesiva los plazos claramente determinados en la Constitución.

La propuesta tiene un claro objetivo: fijar unos límites a las pautas de comportamiento político entre los partidos, sobre todo entre las direcciones centrales de los dos más grandes, absolutos protagonistas de los procedimientos de designación. En este sentido, no pretende fomentar el corporativismo a través de la cooptación del TC, sino de habilitarlo para ejecutar una medida de desbloqueo. Por otro lado, quizá también resulte de interés para alejar esta señalada imagen endogámica de las designaciones del Tribunal, cohonestándola con el respaldo democrático indirecto que acarrea la participación de los órganos parlamentarios, podría ser que el TC cooptara a los magistrados de entre las propuestas presentadas en sede parlamentaria. A lo mejor, entre los candidatos que se vieran más respaldados en las votaciones, aunque como se sabe, esto no sucede porque las candidaturas no suelen presentarse a votación sino hasta haber conseguido el respaldo político previamente en las fases de negociación.

En este punto quizá resulte de utilidad la elaboración previa de unas listas de candidatos habilitados. Así sucede en Alemania con las listas que prepara el Ministerio Fiscal, pero en el caso español se ha planteado que estén a cargo de los propios Grupos parlamentarios o una Comisión de las Cámaras, aunque por supuesto, la medida está pensada para los supuestos de renovación parlamentaria ordinaria y no para el caso excepcional que estamos

⁹¹⁷ Véase al respecto, FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: "La estructura orgánica del Tribunal Constitucional", op. cit., pág. 446; GARCÍA ROCA, Javier: "La experiencia de veinticinco años de jurisdicción constitucional en España", op. cit., pág. 48. Además, muy críticos, COBO DEL ROSAL, Manuel: "La enfermedad y su remedio anticonstitucional. Sobre la renovación de magistrados del Tribunal Constitucional", en *El País*, 10 de junio de 1992; PÉREZ ROYO, Javier: "Evitar los disparates", en *El País*, 17 de junio de 1992, y del mismo autor, "De mal en peor", en *El País*, 10 de noviembre de 1998.

comentando⁹¹⁸, pero bien podríamos traerla a cuento. Con ello, se matizaría el carácter sustantivo que la designación del Tribunal pudiera tener, para privilegiar en cambio una perspectiva más procesal o ejecutiva de su actuación.

Es de reconocer que la propuesta podría también presentar el riesgo de que el TC fuera expuesto a violentas críticas a raíz de las opciones tomadas en sus designaciones o bien que el conflicto parlamentario pudiera trasladarse al interior del Tribunal. Respecto a la primera posibilidad, habría que tener en cuenta que el propio acto selectivo de magistrados es objeto de valoración pública con independencia del órgano que lo ejecute, de ahí, precisamente, la exigencia de que el procedimiento sea realizado con todo cuidado.

Respecto a la probable traslación del debate político a la sede plenaria del Tribunal podría decirse que, en efecto, dicho riesgo existe y la intensidad que pudiera adoptar dependería de lo dividido que estuviera el Tribunal. La división del Pleno mostrada en la STC 31/2010 o en la verificación de los requisitos de acceso al Tribunal de Enrique López son una muestra orientativa de lo anterior. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que el número reducido de integrantes del colegio, su perfil, la forma de adoptar los acuerdos y el funcionamiento de la institución, hacen poco probable vislumbrar un problema en la designación de magistrados con las magnitudes creadas por los partidos políticos en el Parlamento.

Por otro lado, confiaría en la resolución del problema apelando a la moderación y prudencia con la que suelen obrar los miembros del Alto Tribunal ante los delicados problemas que les plantean en los procesos constitucionales de los que son competentes.

Finalmente, cabe abordar, así sea de forma muy general, sobre la implementación de la propuesta en el sistema de fuentes. En primer término, se puede advertir que no podría ser generada a través de una reforma a los Reglamentos de las Cámaras parlamentarias en virtud de que al contemplar la participación del Tribunal Constitucional en la cooptación de los magistrados, se rebasa el ámbito de acción de la vía reglamentaria al no constituir el propio TC un *interna corporis* de la Cámara.

⁹¹⁸ Véase, por ejemplo, GABALDÓN LÓPEZ, José y FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso: "Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional", *op. cit.*, págs. 17 y 55; RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, Jorge: *Teoría y práctica del Derecho Constitucional*, 2ª ed., Madrid, Tecnos, 2011, pág. 279.

Tampoco se considera que la LOTC pudiera ser la vía idónea, ya que el modelo de composición del TC viene establecido *ipso iure* de la Constitución de forma clara y no parece que la previsión del artículo 165 constitucional que prevé que una “ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones”, pueda abarcar la medida de desbloqueo que se propone por esta vía.

Luego la propuesta supondría la necesidad de tramitar una reforma del artículo 159.1 de la Constitución que establece el modelo de composición. La necesidad de la reforma constitucional, sin duda alguna, dificulta las posibilidades de éxito de la propuesta en un futuro previsible dada la complicada tramitación de la reforma constitucional, a la preeminencia que tiene en este momento la resolución de la crisis económica, y en general, en la poca atención que permanentemente han mostrado las principales fuerzas políticas en el tema.

Por lo que de momento, queda el permanente recurso de acudir a la activa participación ciudadana, a fin de exigir a los partidos políticos su responsabilidad de Estado para dar una mayor importancia al cuidado del Tribunal Constitucional tal y como les ha sido confiado por la Constitución.

CONCLUSIONES

1ª.- La exploración de cuarenta y nueve modos de designación de magistrados constitucionales nos ha permitido diseñar una clasificación de los mismos desde el punto de vista de la forma en que se articula el acto de selección. Así, y salvando múltiples matices que se han señalado en el trabajo, por un lado tenemos los modelos de acto compuesto, entendidos como aquéllos cuyo acto de selección se requiere de la participación de dos o más órganos; por otro lado están los modelos de designación directa, donde el órgano no necesita de la confluencia de otro órgano; y finalmente están los modelos mixtos, que son una mezcla de los dos anteriores.

No se puede afirmar con rotundidad que un modelo sea más habitual que otro, si acaso se puede identificar que el modelo de designación directa, en especial cuando la facultad de nombramiento está distribuida entre varios órganos, es el más habitual entre los más consolidados tribunales constitucionales de Europa central. Por otro lado, se puede advertir que aquéllos tribunales supremos que han evolucionado en su funcionamiento hacia un tribunal constitucional, bien en pleno, bien en sala especializada, suelen tener el modelo selectivo de acto compuesto.

2ª.- Con independencia del tipo de modelo selectivo que se observe, el papel protagónico de los órganos que participan en la designación de magistrados lo tiene el poder legislativo. Este dato es ciertamente comprensible y natural del constitucionalismo moderno, en tanto que este es el órgano representativo del pueblo, asiento y origen del poder público del Estado. La intervención de este poder se justifica entonces por la impronta de legitimidad democrática (indirecta) que proyectará sobre la confección del órgano de justicia constitucional.

A lado de la influyente acción parlamentaria en el procedimiento selectivo de magistrados constitucionales, se encuentra la de otras altas instituciones del Estado, como pueden ser los poderes ejecutivos y judiciales,

pero también otros órganos estatales o corporaciones especiales. Todos ellos interviniendo de diversa manera y produciendo diferentes efectos, pero cuya participación busca evitar el monopolio en el poder de designación y en la toma de decisiones, o bien dotar de una visión institucional plural en la conformación de tan importante órgano del Estado.

3ª.- No existe, desde luego, un modelo que esté libre de problemas. Las experiencias más o menos exitosas e influyentes pueden verse tanto en uno como en otro lado de la clasificación que se ha presentado. Ciertamente el nivel de satisfacción, en términos de si se consigue un modelo más favorable a la independencia del órgano o a la calidad técnica de sus miembros, dependerá de factores políticos, sociológicos, culturales, pero ni qué duda cabe de que también pueden contribuir las normas que diseñen la composición del órgano. Se volverá sobre esta última reflexión más adelante.

No se puede *a priori* ni en abstracto afirmar la ventaja comparativa de un modelo sobre otro, aunque sí que hay rasgos que pueden ser más o menos desaconsejables. La panorámica que se ha presentado en el primer capítulo por lo menos pone de manifiesto algunos riesgos que traen aparejadas ciertas trazas orgánicas.

Sin ánimo de ser exhaustivos, pueden considerarse elementos críticos: la no exigencia de mayorías calificadas para el acto de designación, porque la decisión puede ser monopolizada por la mayoría gobernante; la incompleta definición normativa del modelo selectivo y del estatuto de los magistrados, porque deja la definición de muchos de esos detalles al variable criterio de las autoridades del órgano proponente; la no previsión de fases de valoración de candidaturas ni medidas de transparencia y de publicidad, porque aumenta las posibilidades de politización de la designaciones; el no establecer alternativas para desbloquear los acuerdos de designación, porque desfavorece la renovación puntual de los magistrados, dejando la composición del Tribunal más susceptible a manipulaciones ajenas al objeto de la institución.

4ª.- En materia de designación de magistrados se impone una peculiaridad que conviene tener en cuenta. Bien es verdad que se puede predicar el carácter general de muchos de los problemas en la designación de los magistrados de los tribunales constitucionales y más en general de la elección de otras altas instituciones del Estado, sin embargo, cierto es que la

singularidad de los modelos y de las circunstancias políticas que le rodean, impone la descripción y análisis de los casos concretos “país a país”.

Ello facilita una mejor comprensión y, sobre todo, coloca en mejor perspectiva para proponer modificaciones de ingeniería constitucional en la materia. La experiencia comparada ciertamente resulta muy útil porque da la visión de conjunto que ayuda a formar ideas o evitar excesos, pero la importación o al menos el planteamiento de rasgos de los modelos selectivos de tribunales extranjeros debe pasar por el tamiz de la concreta dinámica político-constitucional de cada Estado.

A partir de la experiencia estudiada de las designaciones del Tribunal Constitucional español, pueden asumirse las siguientes reflexiones conclusivas, que podrían ciertamente resultar de aplicación a más de una experiencia constitucional, que sin embargo aquí se harán con el más modesto propósito del caso propio.

5ª.- Lo primero que cabe apreciar es que el modelo de designación del Tribunal Constitucional español es aceptable, aunque no por ello deja de ser – como todos- un modelo con sus problemas y, por lo mismo, mejorable. Es un modelo que en circunstancias ordinarias funciona bien, e incluso ha llegado a tener manifestaciones ejemplares, como fue en su momento la conformación inaugural. El modelo tiene la suficiente potencialidad estructural para funcionar de manera óptima y deseable, pero para ello evidentemente debe estar alineada en la misma dirección la voluntad de los líderes de los principales partidos políticos.

6ª.- Las designaciones del Tribunal Constitucional tuvieron un buen comienzo al ser definidas por el espíritu del gran consenso constituyente, el cual se prolongó en esta materia -aunque con resistencias- a la renovación congresual de 1983, donde se reeligieron los cuatro magistrados que cesaron por el sorteo de la DT 9ª de la CE. Luego se observaron los primeros desencuentros entre las dos principales fuerzas políticas en las sustituciones individuales de Díez de Velasco (Congreso) y García-Pelayo (Senado) en 1986, para agravarse clara y definitivamente en la renovación congresual de 1992, donde el PP y PSOE presentaron listas confrontadas de candidatos.

En las siguientes renovaciones (Senado 1998, Congreso 2001), se perfilaron más claramente las cuotas entre los dos partidos como medida para

acordar las designaciones, y en las más recientes renovaciones (Senado 2010, Congreso 2012) también primó el reparto de cuotas, y se complicaron excesivamente los procedimientos básicamente por la repercusión que tuvo el conflicto entre el PP y PSOE por uno de los grandes problemas que todavía no se solucionan en España y que no es otro que la definición político-territorial del país.

6.1.- La designación por cuotas no es la fórmula constitucional, no es la práctica deseable ni ejemplar, pero es la que ha sido posible. La intervención de las Cámaras legislativas, en una democracia de partidos, que es además la única posible, produce como consecuencia a que las designaciones recaigan en las direcciones centrales de los partidos políticos más votados, en especial de la mayoría gobernante, pero también en el primer partido de la oposición, sobre todo cuando las mayorías que se exigen son calificadas.

El poder partidario se refuerza además por algunas características del régimen electoral español. Se trata, como se sabe, de un modelo favorable a la consolidación de los partidos políticos a través de la gran capacidad que tienen para definir a los candidatos, conformar las Cámaras, y operar una disciplina partidaria en los Grupos parlamentarios.

El protagónico papel partidario en la designación de los magistrados también se hace posible por el diseño normativo que se ha dado al modelo de elección y renovación de los miembros del Tribunal Constitucional. Se trata de un modelo que, según se mostró en este trabajo, puede dar lugar a ciertos problemas, como el de afectar el curso normal de las renovaciones del tribunal, muchas veces con propósitos muy alejados a los cometidos institucionales del Tribunal.

6.2.- El reparto de las plazas de magistrado en cuotas produce al menos tres consecuencias íntimamente relacionadas: La primera es que si el poder de designación se reduce a la negociación y al acuerdo de unos cuantos actores políticos, no solamente se prescinde de la participación de las fuerzas minoritarias, sino que desde el terreno normativo se vacían en cierta forma los procedimientos de designación, reduciéndolos a una suerte de actos formales y debidos.

6.3.- La segunda consecuencia es la denominada politización de las designaciones. Un rasgo que se puede definir como la adjudicada relación que

se produce entre el candidato y la fuerza política que lo propuso, que de alguna forma marca al magistrado. Se trata de una etiquetación ideológica, a la que se espera o que al menos se aparenta, que el magistrado puede responder u orientar sus funciones de acuerdo a los criterios señalados por el partido político.

Desde luego, no en todos los órganos proponentes se predica con la misma intensidad. En el nivel más alto estaría el Gobierno, que no negocia las candidaturas con otras fuerzas políticas, siendo los perfiles elegidos especialmente próximos a ellos en las concepciones básicas de carácter político y constitucional. Le seguirían muy de cerca las designaciones parlamentarias, donde generalmente las designaciones se reparten equitativamente entre las dos principales fuerzas, aunque en ocasiones una de ellas acuerde y conceda una plaza a un grupo minoritario.

En un tercer escalafón estarían las designaciones del CGPJ, las cuales, aunque no en un marco directamente partidario como las parlamentarias, están también marcadas por la politización, además de que han sido plenamente corporativas. Esta politización de tipo “indirecto” vendría por la propia forma de designación parlamentaria del CGPJ y por la acción de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, verdaderas agrupaciones de poder que en buena medida dan las claves que orientan el gobierno del poder judicial.

6.4.- La última consecuencia que destacaremos es que al final, quizá no sea tanto más peligrosa la *lottizzazione* como la ausencia de vetos recíprocos. En este terreno, el derecho de propuesta se convertiría en una suerte de facultad libérrima de designación que dé vía libre para acometer excesos o defectos en las designaciones, no haciendo llegar al Tribunal a los más idóneos. Este sería un supuesto verdaderamente decepcionante.

7ª.- Seguramente los problemas y vicisitudes anotadas se encuentran en el “estado de partidos” o en la “lógica de la política”, y en esos mismos terrenos es donde debieran resolverse. Parece que los problemas están bien diagnosticados y también parece que no hay solución enteramente satisfactoria. Las apelaciones a la responsabilidad, al sentido institucional, a la cultura política, a la lealtad constitucional de los partidos son sin duda muy importantes, pero con todo, en este trabajo tenemos el planteamiento que

desde el plano orgánico-normativo algunas acciones pueden matizar los problemas.

En este sentido, se puede incidir sobre el modelo de composición y renovación de los magistrados constitucionales, modificando unos rasgos para favorecer la posición institucional del juez constitucional y la del propio Tribunal Constitucional. A lo largo del trabajo propusimos las siguientes:

7.1.- Convendría plantearse la idea de diseñar la magistratura constitucional como la cima y el honorífico cierre de una madurada carrera profesional. Para ello, podrían exigirse las más altas categorías de las profesiones jurídicas que dan potencial acceso al cargo y elevar el número de años de experiencia profesional actualmente exigidos.

7.2.- El cargo del juez constitucional no debe estar sometido excesivamente a la irrestricta manipulación de las fuerzas políticas más influyentes, por lo que algunas limitaciones tendremos que contemplar. Por ejemplo, no debería permitirse la manipulación que supone para la composición del Tribunal el hecho de que se produzcan dilaciones excesivas en la designación de magistrados. Debe imponerse en este sentido un plazo perentorio para hacerlo y transcurrido este sin éxito, se debe implementar una medida para superar los bloqueos o las omisiones.

Aquí hemos propuesto que transcurridos tres meses sin que el órgano haya designado a los magistrados, el poder electivo debe pasar eventualmente al Pleno del Tribunal Constitucional para que este coopte a los magistrados libremente, o si se quiere matizar esta facultad, entre las propuestas planteadas por los Grupos parlamentarios o entra las candidaturas contempladas en listas previas.

7.3.- El magistrado que haya accedido al cargo, con independencia de cuál haya sido la causa, debe disfrutarlo sin condicionamientos adicionales a los previstos en su estatuto jurídico. Esto es, debería ser nombrado para el periodo constitucionalmente previsto de nueve años. Con el paso del tiempo ello llevará a un sistema de renovación individualizado como sucede en Italia, pero si se desea mantener el sistema de renovación grupal y escalonado del modelo español, entonces debería preverse la figura del magistrado suplente, que sea nombrado desde el principio con esa calidad y que venga a completar

las series de renovación, en los casos de sustitución anticipada de algún magistrado.

Al hilo de lo anterior, no debería conservarse la medida que se introdujo en la LO 8/2010 de 4 de noviembre, por la que se sustrae del periodo de cargo el tiempo de retraso en la renovación parcial del Tribunal (16.5 LOTC). Esta norma favorece un precepto constitucional que resulta más orgánico y deferente con la facultad electiva de los órganos proponentes, como lo es la cadencia trienal de las renovaciones parciales, frente a otro precepto de mismo rango constitucional que es más sustantivo y garantista del estatuto del magistrado, pues establece el periodo de disfrute del cargo en nueve años (159.3 CE).

Por otro lado, el establecimiento del completo disfrute del periodo de cargo y la previsión de la figura del magistrado suplente, haría innecesaria la excepción que actualmente se contempla a la prohibición de la reelección inmediata, esto es, la posibilidad de ser renovado en el cargo si no se ha ocupado el mismo más de tres años (16.4 LOTC). Con ello se evitarían entre los magistrados las desproporciones que se han observado en el disfrute del cargo (la mayoría nueve años, unos hasta doce y otros, como mucho, seis) y la delicada situación en la que queda el magistrado reelegible durante el tiempo que su confirmación se debate en el órgano designante.

7.4.- No debe eliminarse la institución de la *prorogatio*. La prórroga de las funciones garantiza la integración y la continuidad funcional del órgano, valores estos más favorables a la institución que la eventual reducción del colegio. No sería mal utilizada si en el propio sistema se incluyese la medida de desbloqueo para los casos de prolongada inacción en las designaciones.

7.5.- Con todo ello, se incide en tres aspectos de gran importancia institucional para el Tribunal Constitucional: 1) se refuerza la garantía de que el acceso al cargo recaiga en perfiles de máxima experiencia y preparación técnica; 2) se fortalece la independencia del magistrado al hacerlo disfrutar completamente de su cargo y alejarle de condicionamientos adicionales respecto a las fuerzas políticas que debaten su reelección inmediata o frente al futuro laboral del magistrado una vez finalizado el cargo; y en general, 3) se favorece la autonomía funcional del Tribunal al apartarlo de la manipulación excesiva derivada de la “lógica de los partidos”.

8ª.- Otro rasgo que ha quedado de manifiesto en el historial de designaciones de magistrados son las pocas medidas institucionales de transparencia y publicidad que tienen los procedimientos selectivos. De ahí que en este tema el papel de los medios de comunicación social sea significativamente relevante, porque es donde puede obtenerse más información. Sucede a menudo que por indiscreción o por otras vías, los medios de comunicación social tienen conocimiento de causa y publican los nombres de los posibles candidatos, los términos de las negociaciones políticas y las vicisitudes de la designación producidas en las sesiones de los órganos designantes, aunque estas sean reservadas.

Los procedimientos deberían contemplar formalmente elementos de transparencia y de publicidad, no solamente para que los ciudadanos controlen la acción política de sus representantes sino también, para despolitizar el procedimiento. Ciertamente ello no debe llevar al extremo de configurar las designaciones a imagen de los más detallados procedimientos administrativos de elección del personal funcional como el concurso o la oposición, pero sí que al menos las etapas iniciales o aquéllas donde se valore la idoneidad de los candidatos deberían ser menos reservadas. Esta reflexión se deja solamente anotada, pues como se ha visto, en el trabajo nos enfocamos al análisis de otros problemas.

9ª.- La participación autonómica en la designación de los magistrados es una aspiración legítima y suele ser común en los Estados descentralizados (ciertamente no en todos), máxime allá donde las entidades territoriales tienen un especial interés en dicho propósito. Resulta una opción válida para configurar la composición de un órgano cumbre de la arquitectura estatal, sobre todo cuando el mismo tiene una facultad arbitral en la resolución de conflictos entre las autonomías y el Estado central, y además cuando será el encargado de elaborar la doctrina que definirá la evolución del Estado de las autonomías.

No hay evidencia contundente de que alguna de las modalidades de participación autonómica consiga plenamente satisfacer dicha intervención, si acaso la designación directa de un magistrado por cada territorio, aunque por supuesto ese rasgo ni es propio de un tribunal constitucional, ni es operativo en el caso español. La generalidad de las experiencias constitucionales y la

doctrina se orienta a perfilar este influjo autonómico de forma orgánica, a través de la acción de la Cámara de representación territorial.

9.1.- El Senado español, como es ampliamente reconocido, necesita una reforma constitucional integral para potenciar esa función territorial. A la espera de ésta, se han acometido otro tipo de modificaciones parciales por vía de la reforma reglamentaria o de la LOTC, como sucedió con la polémica introducción de las propuestas de los Parlamentos autonómicos en las designaciones senatoriales de magistrados constitucionales. Se trata de unas propuestas que, aunque no vinculan completamente al Senado, son una base importante para motivar un modelo “cooperativo” de designación, que todavía está puesto a prueba.

9.2.- Para dotar de un mayor impulso a ese modelo cooperativo en este trabajo planteamos la introducción de la experiencia profesional autonómica dentro de la serie de requisitos exigidos para que al menos dos magistrados de nómina senatorial accedan a la magistratura constitucional. Sería un requisito implantado mediante una reforma al Reglamento parlamentario, que vendría a sumarse a los demás. Ciertamente es un rasgo muy matizado, pero que al menos, puede dar unas pautas de comportamiento político para optar por este tipo de perfiles.

10ª.- La mayoría de modificaciones aquí planteadas requieren de la reforma del Título IX de la Constitución. Esta circunstancia quizá sea la principal causa que dificulte la aplicación de las mismas en un futuro previsible, dadas las complicaciones del procedimiento de reforma constitucional, pero también a la tradición que hay en España de no reformar la Constitución.

Lo más probable es que en el terreno de la práctica política, las propuestas que aquí se han presentado no justificarían que se accione una reforma constitucional, si se consideran de forma singular. Quizá tuvieran que acompañarse en un marco más amplio de “política constitucional”, donde se insertaran en el debate sobre otros temas que se han planteado para llevar a cabo una reforma significativa de la Constitución española de 1978.

Mientras tanto, nos seguirá quedando el permanente recurso de acudir a la activa participación ciudadana, a fin de exigir a los partidos políticos su responsabilidad de Estado para dar una mayor importancia al cuidado del Tribunal Constitucional tal y como les ha sido confiado por la Constitución.

CONCLUSIONI

1^a.- Lo studio di quarantanove modalità di nomina dei giudici costituzionali ci ha permesso di proporre una classificazione dal punto di vista relativo a come l'atto di selezione si articola. Così, da un lato, abbiamo i modelli di "atto composito", definiti come quei modelli in cui l'atto di selezione prevede la partecipazione di due o più organi; ci sono d'altra parte sono modelli di "nomina diretta", dove l'istituzione non ha bisogno del concorso un altro corpo; e infine troviamo modelli misti.

Non si può dire categoricamente che un modello sia più comune di un altro, si può invece affermare che il modello di nomina diretta, soprattutto quando il potere di nomina è distribuito tra vari organi, è quello più comune tra le corti costituzionali più note dell'Europa centrale. D'altra parte, si può notare come quei tribunali supremi che si sono evoluti fino a funzionare come una corte costituzionale, sia in camera di consiglio o in camera specializzata, di solito hanno seguito il modello di atto composito.

2^a.- Qualunque sia il tipo di modello di designazione, l'organo che sempre interviene nella nomina dei giudici è il potere legislativo. Questo dato è certamente comprensibile, frutto naturale del costituzionalismo moderno dal momento che questo è l'organo che rappresenta il popolo, la sede e l'origine dell'autorità dello Stato. L'intervento di tale potere viene poi giustificato dalla legittimazione democratica (indiretta) proiettata sulla formazione dell'organo di giustizia costituzionale.

Oltre all'intervento parlamentare nella procedura di designazione, esistono altre istituzioni dello Stato in grado di intervenire, come il potere esecutivo e quello giudiziario, ma anche altri organi speciali. Essi intervengono in modi diversi e producono effetti diversi, ma la loro partecipazione cerca di evitare il monopolio sul potere di nomina e di decisione, o fornire una visione istituzionale plurale nella composizione della Corte Costituzionale.

3^a.- Non esiste un modello privo di problemi. Esperienze più o meno imitate e di successo possono essere trovate su entrambi i lati della classificazione presentata. Di certo il livello di soddisfazione, in termini di se il modello è in grado di garantire l'indipendenza dell'organo o di favorire la qualità tecnica dei suoi membri, dipende da fattori politici, culturali, sociologici, ma non v'è dubbio che possono contribuire anche le regole sulla composizione dell'organo. Torneremo su questo punto più avanti.

Non si può stabilire a priori il vantaggio comparativo di un modello rispetto ad un altro, anche se ci sono caratteristiche che possono essere più o meno sconsigliabili. L'analisi condotta nel primo capitolo mostra alcuni dei rischi.

Senza pretesa di esaustività sono considerati elementi di criticità: non prevedere l'obbligo di maggioranze qualificate per l'atto di designazione, dal momento che la decisione può essere monopolizzata dalla maggioranza di governo; la definizione normativa incompleta del modello di selezione e dello status dei giudici, perché lascia la definizione di molti di questi dettagli alla variabilità del giudizio dell'organismo proponente; non prevedere fasi di valutazione dei candidati o misure di trasparenza e pubblicità, perché così aumentano le possibilità di politicizzazione delle nomine; non prevedere soluzioni alternative per sbloccare gli accordi relativi alla designazione perché questo non favorisce il rinnovo puntuale dei giudici, lasciando esposta la composizione a manipolazioni esterne di tipo politico.

4^a.- Per quanto riguarda la nomina dei giudici vale la pena sottolineare una particolarità che deve essere presa in considerazione. È vero che si può sostenere il carattere generale di molti dei problemi relativi alla nomina dei giudici delle corti costituzionali e, più in generale, alla elezione di altre istituzioni dello Stato, appare tuttavia certo che l'unicità dei modelli e delle circostanze politiche che li circondano impongono la descrizione e l'analisi di specifici casi "Paese per Paese".

Questo facilita una migliore comprensione e, soprattutto, offre una prospettiva migliore per proporre emendamenti costituzionali. La comparazione è certamente utile perché dà una panoramica che aiuta a formare idee o ad evitare eccessi, ma l'importazione o almeno l'approccio a modelli stranieri devono essere testati nelle dinamiche politiche e costituzionali di ciascuno

Stato. Il caso spagnolo suggerisce alcune riflessioni che potrebbero certamente essere applicabili a più di una esperienza costituzionale, anche se in questa sede tali riflessioni non hanno simile pretesa.

5ª.- La prima cosa da apprezzare è che il modello di nomina della Corte costituzionale spagnola è un modello accettabile, ma non è certo privo di problemi ed è, di conseguenza, come tutti, migliorabile. È un modello che funziona bene in circostanze ordinarie, ed ha anche dato luogo a manifestazioni esemplari, come fu in occasione della formazione di apertura. Il modello strutturale ha abbastanza potenziale per funzionare in modo ottimale, purché ovviamente nella stessa direzione vada la volontà dei leader dei principali partiti politici.

6ª.- Le designazioni della Corte Costituzionale ebbero un felice inizio essendo definite dallo spirito del grande consenso costituente, che si mantenne su questo aspetto –sia pure con qualche resistenza- fino al rinnovo del Congresso del 1983 (dove sono stati rieletti quattro giudici). Dopo si sono avuti i primi scontri tra le due principali forze politiche nelle sostituzioni di Díez de Velasco (Congresso) e di Garcia-Pelayo (Senato) nel 1986, per poi aggravarsi in modo definitivo per in occasione della elezione dei giudici da parte del Congresso nel 1992, quando il PP e PSOE presentarono liste di candidati contrapposte.

Alle elezioni successive dei giudici (Senato 1998, Congresso 2001), si delinearono più chiaramente le quote tra i due partiti come misura per accordarsi sulla nomina, e nella più recente designazione dei giudici (Senato 2010, Congresso 2012) ha prevalso la condivisione delle quote, ma in questa occasione la procedura è diventata troppo complicata, fondamentalmente per le ripercussioni del conflitto tra PP e PSOE su uno dei maggiori problemi non ancora risolti in Spagna, ossia la definizione politico-territoriale del Paese.

6.1.- L'elezione dei giudici attraverso il sistema di assegnazione delle quote non è la formula costituzionale, non risponde ad un modello auspicabile o da imitare, ma è il modo in cui è stato possibile effettuare la scelta. L'intervento delle Camere legislative, in una democrazia di partiti, lascia l'elezione dei giudici nelle mani delle direzioni centrali dei partiti politici più votati, in particolare della maggioranza di governo, ma anche in quelle del primo partito della opposizione, in particolare quando le maggioranze richieste sono qualificate.

La partitocrazia è ulteriormente rafforzata da alcune caratteristiche del sistema elettorale spagnolo. Si tratta, come si sa, di un modello che favorisce il consolidamento dei partiti politici attraverso la grande capacità che hanno di definire candidati, di modellare le Camere, di gestire una disciplina di partito nei gruppi parlamentari.

Il ruolo di primo piano dei partiti politici nelle elezioni dei giudici è anche reso possibile dal disegno normativo che è stato dato al modello di scelta e di rinnovo dei membri della Corte Costituzionale. Si tratta di un modello che, come si è cercato di dimostrare in questo lavoro, può portare alcuni problemi, tali da pregiudicare il normale svolgimento delle procedure sulla composizione del Tribunale, molte volte probabilmente con scopi diversi rispetto a quelli propri della giustizia costituzionale.

6.2.- L'elezione dei giudici attraverso il sistema di assegnazione delle quote produce almeno tre conseguenze strettamente correlate: la prima è che, se il potere di nomina è ridotto al negoziato e all'accordo di alcuni attori politici, non soltanto si prescinde dalla partecipazione delle forze minoritarie, ma anche che dal lato normativo in qualche modo si svuotano le procedure di nomina, riducendole a meri atti formali e dovuti.

6.3.- La seconda conseguenza è la cosiddetta politicizzazione delle nomine. Una caratteristica che potrebbe essere definita come il rapporto che si crea tra il candidato e il partito politico che lo ha proposto, che in qualche modo segna il magistrato. Si tratta di una etichettatura ideologica, che potrebbe far pensare, o almeno dare l'impressione, che il magistrato risponda o orienti le sue funzioni secondo i criteri indicati dal partito politico.

Naturalmente questo rapporto non si presenta con la stessa intensità in tutti gli organi competenti alla designazione. Al livello più alto starebbe il Governo che non abbisogna del consenso di altre forze politiche, e che pertanto si orienta su profili molto vicini alla sua prospettiva ideologica. Ad un secondo livello troviamo il Parlamento, in cui le elezioni sono generalmente divise equamente tra le due forze principali, ma a volte una delle due concede un posto a un gruppo minoritario. In una terza posizione si troverebbe il CGPJ, rispetto al quale si osserva un fenomeno endogamico e anche una politicizzazione di tipo "indiretto", originata dalla stessa forma di composizione del CGPJ (nomina parlamentare), in conseguenza dell'azione delle associazioni

professionali dei giudici, autentici gruppi di potere che orientano il governo della magistratura.

6.4.- L'ultima conseguenza da notare, è che forse non è molto più pericolosa delle altre, è la lottizzazione delle nomine, come assenza di veti reciproci tra i partiti politici. In questo caso, il potere di scegliere i giudici sarebbe diventato una sorta di "mano libera" che può condurre ad eccessi o a difetti nelle nomine.

7.- Sicuramente i problemi indicati si collocano nella "logica della politica", che poi è lo stesso campo dove dovrebbero essere risolti. Sembra che i problemi siano ben diagnosticati e anche che non sembra esserci una soluzione del tutto soddisfacente. Gli appelli alla responsabilità, al senso istituzionale, alla cultura politica, alla lealtà costituzionale sono certamente elementi molto importanti per trovare una soluzione, ma l'intento di questo lavoro è quello di fare una proposta nel campo di applicazione delle norme giuridiche.

In questo senso, si può influenzare il modello di composizione e di rinnovo della Corte costituzionale modificando alcune caratteristiche per favorire la posizione istituzionale del giudice costituzionale e della Corte stessa. All'esito di tutto il lavoro abbiamo proposto quanto segue:

7.1.- Si dovrebbe prendere in considerazione l'idea di progettare la magistratura costituzionale come la parte superiore e la chiusura onorifica di una carriera professionale. Per fare questo potrebbero essere richieste più alte categorie delle professioni legali che danno potenziale accesso alla carica e aumentare il numero di anni di esperienza professionale attualmente richiesto.

7.2.- La carica del giudice costituzionale non deve essere eccessivamente sottoposto alla manipolazione illimitata delle forze politiche più influenti, quindi dovremo prendere in considerazione alcune limitazioni. Ad esempio, non dovrebbero essere consentiti ritardi eccessivi nella nomina dei giudici. Dovrebbe essere imposto a questo proposito un termine specifico, e alla sua scadenza, è necessario prevedere una misura per superare blocchi o omissioni.

Qui abbiamo proposto uno spostamento del potere di nomina dal Parlamento inadempiente (tre mesi alla scadenza della carica) ad un altro

organo come sarebbe il Plenum della Corte Costituzionale. La Corte potrebbe fare una rapida designazione dei nuovi giudici liberamente, o se si vuole sfumare questa capacità, potrebbe scegliere tra le proposte formulate dai Gruppi parlamentari o tra sotto elenchi preparati in precedenza.

7.3.- Un giudice che ha accesso alla carica, indipendentemente da chi è come lo ha designato, dovrebbe, adempiervi per tutti i nove anni senza alcun condizionamento. Col passare del tempo si procederebbe ad un rinnovamento individualizzato come accade in Italia, ma se si vuole mantenere il gruppo di sistema e il rinnovo scaglionato del modello spagnolo, allora la figura di un giudice sostituto deve essere introdotta.

In linea con quanto sopra esposto, non dovrebbero essere mantenuta la misura prevista dalla LO 8/2010 del 4 novembre, con la quale viene sottratto al giudice il periodo di ritardo della sua elezione nel rinnovo parziale del Tribunale (art. 16.5 LOTC). Questa regola favorisce una disposizione costituzionale che risulta più organica e deferente al potere elettivo degli organi proponenti, come è il termine di tre anni per il rinnovo parziale della Corte, rispetto ad un'altra disposizione dello stesso livello costituzionale che è più sostanziale e garante dello status del magistrato, cioè il periodo di godimento della carica di nove anni (art. 159.3 CE).

7.4.- La prorogatio deve essere mantenuta. L'estensione delle funzioni garantisce l'integrazione e la continuità funzionale dell'organo, valori questi più favorevoli all'istituzione che qualsiasi riduzione del collegio. Non sarebbe sbagliato inoltre prevedere un sistema di sblocco nel caso di prolungata inerzia nelle designazioni.

7.5.- Con tutto questo si finisce con l'incidere su tre aspetti di grande importanza istituzionale per la Corte Costituzionale: 1) garantire l'accesso di profili con alta esperienza e formazione tecnica; 2) garantire l'indipendenza del giudice; 3) rafforzare l'autonomia funzionale del Tribunale.

8.- Un'altra caratteristica che è emersa dalla storia delle nomine dei giudici sono le poche misure istituzionali di trasparenza e di pubblicità che hanno le procedure selettive. Quindi su questo argomento il ruolo dei mezzi di comunicazione (specie dei social media) è notevolmente importante perché diventa il luogo dove è possibile reperire maggiori informazioni. Accade spesso

che i giornali siano in possesso di indiscrezioni sui nomi dei potenziali candidati come anche sui termini dei negoziati politici.

9.- La partecipazione delle regioni nella nomina dei giudici costituzionali è una preoccupazione legittima e di solito è comune negli Stati decentrati (certo non in tutti), in particolare laddove le autorità locali hanno un particolare interesse a tale scopo. È una opzione spesso considerata per strutturare la composizione di un organo di vertice dello Stato, soprattutto quando questo è poi chiamato a svolgere un'importante funzione arbitrale nella risoluzione dei conflitti tra le regioni e il governo centrale, specie in considerazione dell'importanza che la sua giurisprudenza riveste nella evoluzione del sistema delle autonomie. Queste influenza regionale è di solito canalizzata attraverso l'azione della Camera di rappresentanza territoriale.

9.1.- Il Senato spagnolo, come è ampiamente riconosciuto, richiede una riforma costituzionale complessiva per rafforzare questa funzione territoriale. In attesa di questo, sono state introdotte altre modifiche parziali attraverso la riforma dei regolamenti e della LOTC, come è avvenuto in occasione della criticata introduzione delle proposte dei parlamenti regionali nelle designazioni senatoriali dei giudici costituzionali. Si tratta di proposte che, anche se non vincolano completamente al Senato, sono una base importante per spingere verso un modello "cooperativo".

9.2.- Col proposito di rafforzare questa visione cooperativa, in questo lavoro proponiamo l'introduzione dell'esperienza professionale "regionale" all'interno della gamma di condizioni per essere eletto giudice costituzionale, quanto meno per due dei giudici di nomina senatoriale. Si tratta senza dubbio di una misura moderata, ma almeno potrebbe orientare il comportamento politico per la scelta di questo profilo.

10ª.- La maggior parte delle modifiche qui suggerite richiede la riforma del Titolo IX della Costituzione. Questa circostanza potrebbe essere la causa principale per ostacolare l'attuazione della stessa nel prossimo futuro, date le complicazioni della procedura di riforma costituzionale, ma anche per la tradizione esistente in Spagna di non modificare la Costituzione.

È anche probabile che nel campo della pratica politica, le proposte che sono state presentate qui non giustificherebbero un emendamento costituzionale, se considerate singolarmente. Forse dovevano essere

accompagnate da un più ampio disegno di "politica costituzionale", inserendole in una più ampia discussione su altre questioni emerse intorno ad una riforma significativa della Costituzione spagnola del 1978.

Nel frattempo, bisogna guardare ad una cittadinanza attiva, per richiedere ai partiti politici maggiore responsabilità e per dare maggiore importanza alla cura della Corte Costituzionale così come è stato voluto dalla Costituzione.

1.- BIBLIOGRAFÍA

ABAT I NINET, Antoni: *El estatuto jurídico de los Magistrados del Tribunal Constitucional español. Estudio y análisis comparado*, Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2012.

AGUADO RENEDO, César: “Renovación del Tribunal Constitucional y sentido de estado”, en *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 813/2011, [en línea portal Thomson-Aranzadi].

AGUDO ZAMORA, Miguel Jesús: “El modelo institucional europeo de justicia constitucional”, en PÉREZ TREMPs, Pablo (coord.), *La Reforma del Tribunal Constitucional: actas del V Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, págs. 219-242.

AGUIAR DE LUQUE, Luis: “Balance estadístico de cinco años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 50, 1986, págs. 253-274.

----- PAJARES MONTOLÍO, Emilio: “Artículo 160”, en ALZAGA VILLAAMIL, Óscar, (dir.): *Comentarios a la Constitución española de 1978*, tomo XII, Madrid, Cortes Generales, Edersa, 1999, págs. 173-187.

----- “Composición y organización del Tribunal Constitucional”, en AGUIAR DE LUQUE, Luis; PÉREZ TREMPs, Pablo (dirs.): *Veinte años de jurisdicción constitucional en España*, Valencia, Tirant lo Blanch, Instituto de Derecho Público Comparado, Universidad Carlos III de Madrid, 2002, págs. 31-38.

----- “Una nueva reflexión sobre la *prorogatio* de los órganos constitucionales. Una discrepancia y algunas puntualizaciones a J. A. Santamaría”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 85, 2009, págs. 83-98.

----- “Magistrados Constitucionales”, en ARAGÓN REYES, Manuel (dir.); AGUADO RENEDO, César (codir.): *Temas básicos de Derecho Constitucional. Organización general y territorial del Estado*, tomo II, Navarra, Civitas, Thomson Reuters, 2011, págs. 304-307.

AGUILÓ LUCÍA, Lluís: “La presencia de las nacionalidades y regiones en el Tribunal Constitucional”, en *El Tribunal Constitucional (Jornadas de la Dirección General de lo Contencioso del Estado)*, vol. I, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1981, págs. 349-367.

AILTON GARCIA, José: “Supremo Tribunal Federal brasileiro: análise da forma de escolha de seus ministros”, en *Revista de Direito Constitucional e Internacional*, vol. 61, ano 15, julho-agosto, 2007, págs. 123-136.

AJA FERNÁNDEZ, Eliseo; ALBERTÍ ROVIRA, Enoch; RUIZ RUIZ, Juan José: *La reforma constitucional del Senado*, Madrid, CEPC, 2005.

- ALCALÁ NOGUEIRA, Humberto: “La integración y estatuto jurídico de los magistrados de los tribunales constitucionales de Latinoamérica”, en *Estudios Constitucionales*, año 6, núm. 1, 2008, págs. 281-299.
- “El estatuto de los jueces constitucionales en Chile”, en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 14, 2010, págs. 279-322.
- ALMAGRO NOSETE, José: *Justicia Constitucional (Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)*, 2ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 1989.
- ALONSO, Diego Andrés: “¿El nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue siendo un acto institucional? A propósito del dictado del decreto PEN 222/03 y sus derivaciones respecto al control del procedimiento de designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en *El Derecho Administrativo* (Buenos Aires), 2 de octubre de 2006, [disponible en http://www.ebullo.com.ar/pdf/330/330_esp.pdf?PHPSESSID=92e49efce440d4d0cf6ace68b43795bc].
- ÁLVAREZ CONDE, Enrique; TUR AUSINA, Rosario: *Derecho Constitucional*, 3ª ed. Madrid, Tecnos, 2013.
- ÁLVAREZ JUNCO, José; RUBIO LLORENTE, Francisco (eds. lits.): *El informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional: texto del informe y debates académicos*, Madrid, CEPC, Consejo de Estado, 2006.
- ÁLVAREZ VÉLEZ, Mª Isabel; ALCÓN YUSTAS, Mª. Fuencisla: “Reflexiones en torno a las modificaciones de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en *Icade. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales*, núm. 72, septiembre-diciembre, 2007. págs. 159-175.
- ALZAGA VILLAAMIL, Óscar: *Comentario sistemático a la constitución española de 1978*, Madrid, Ediciones del Foro, 1978.
- (dir.): *Comentarios a la Constitución española de 1978*, tomo XII, Madrid, Cortes Generales, Edersa, 1999.
- “Sobre la composición del Tribunal Constitucional”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 10-1, 2003, págs. 149-180.
- *Del consenso constituyente al conflicto permanente*, Madrid, Trotta, 2011.
- ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto: “La renovación del Consejo General del Poder Judicial”, en *Jueces para la Democracia*, núm. 26, julio, 1996, págs. 8-11.
- ANZON, A.; AZZARITI, G.; LUCIANI, M. (a cura di): *La composizione della Corte Costituzionale. Situazione italiana ed esperienze straniere. Atti del Seminario di Roma del 14 marzo 2003*, Torino, G. Giappichelli, Quaderni della Rivista di Diritto Costituzionale, núm. 3, 2004.
- ARAGÓN REYES, Manuel: “Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 64, 2002, págs. 289-296.

- “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 85, enero-abril, 2009, págs.11-43.
- “Semblanza de Manuel García-Pelayo”, en *Revista de Derecho Político*, núms. 75-76, mayo-diciembre, 2009, págs. 23-34.
- “El Tribunal Constitucional: significado composición y competencias”, en *Estudios de Derecho Constitucional*, 3ª ed., Madrid, CEPC, 2013, págs. 327-335.
- ASENCIO MELLADO, José María: “Un nuevo atentado al Tribunal Constitucional. La LO 8/2010”, en *Práctica de Tribunales*, La Ley, núm. 78, enero 2011, [en línea, portal Wolters Kluwer].
- ASTUDILLO REYES, César: “La justicia constitucional local en México. Presupuestos, sistemas y problemas”, en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 115, enero-abril, 2006, págs. 9-56.
- AUZMENDI DEL SOLAR, Montserrat: “Rechazo por parte del Consejo General del Poder Judicial de la terna de juristas propuesta por el Parlamento Vasco para el nombramiento de un magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV (artículo 330.4 de la LOPJ): ¿cuestión de discrecionalidad?”, en *Corts: Anuario de Derecho Parlamentario*, núm. 16, 2005, págs. 153-168.
- BACHMAIER WINTER, Lorena: *Imparcialidad judicial y libertad de expresión de jueces y magistrados. Las recusaciones de Magistrados del Tribunal Constitucional*, Navarra, Thomson Aranzadi, 2008.
- BADINTER, Robert: “Une exception française: les anciens présidents au Conseil constitutionnel”, en *Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu*, París, Dalloz, 2007, págs. 513-522.
- “Une longue marche: Du Conseil à la Cour constitutionnelle”, en *Cahiers du Conseil constitutionnel*, núm. 25 (Dossier: 50ème anniversaire), août 2009, [en línea, portal Conseil constitutionnel].
- BAGNI, Silvia: “Stato autonómico e composizione degli organi di giustizia costituzionale”, en *Istituzioni del federalismo: Rivista di Studi Giuridici di Giustizia Costituzionale*, núm. 2, 2002, págs. 375-393.
- BALAGUER CALLEJÓN, Francisco (coord.); CÁMARA VILLAR, Gregorio; MEDINA REY, Luis Felipe: *La nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*, Madrid, Tecnos, 2008.
- BALDIVIESO GUZMÁN, René: “Composición y atribuciones del Tribunal Constitucional de Bolivia”, en *Ius et Praxis*, vol. 8, núm. 1 (Talca, Chile), 2002, págs. 319-326.
- BASSOLS COMA, Martín: *El Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República*, Madrid, CEPC, BOE, 2010.

- BAUDOIN, Marie-Elisabeth: “La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie vue par un juriste français”, en *Cahiers du Conseil constitutionnel*, núm. 28 (Dossier: Russie), juillet 2010, [en línea, portal Conseil constitutionnel].
- BAZÁN, Víctor: “¿La Corte Suprema de Justicia argentina se reinventa, presentándose como un Tribunal Constitucional?”, en *Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, núm. 20, enero-junio, 2009, págs. 3-63.
- BELDA CALVO, Pedro Javier: “Designación de los miembros del Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial. Derecho comparado con referencia al actual modelo rumano”, en *Diario La Ley*, núm. 7850, sección tribuna, 3 de mayo de 2012, [en línea, portal Wolters Kluwer].
- BELDA PÉREZ-PEDRERO, Enrique: “Las Comunidades Autónomas en el Tribunal Constitucional a través del Senado. Dudas razonables de constitucionalidad y eficacia política para Castilla-La Mancha”, en *Parlamento y Constitución. Anuario*, núm. 11, 2008, págs. 276-284.
- BERCHOLC, Jorge O.: “Aportes para una selección coherente y congruente de los jueces de un Tribunal Constitucional: el caso de la Corte Suprema de Argentina y sus recientes modificaciones”, en *Revista Aragonesa de Administración Pública*, núm. 30, 2007, págs. 479-538.
- BIAGETTI, Francesca: “Il procedimento parlamentare di elezione dei giudici costituzionali: spunti problematici”, en *Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati* (Serie delle verifiche di professionalità dei consiglieri parlamentari 8), Roma, Camera dei Deputati, Ufficio atti e pubblicazioni, 1998, págs.3-32.
- BICKEL, Alexander: *The least dangerous branch: the Supreme Court at the bar of politics*, 2ª ed., New Haven, Yale University Press, 1986.
- BIN, Roberto; PITRUZZELLA, Giovanni: *Diritto Costituzionale*, 6ª ed., Torino, G. Giappichelli, 2005.
- “Dal versante del Parlamento”, en REVENGA SÁNCHEZ, Miguel; PAJARES MONTOLÍO, Emilio; RODRÍGUEZ-DRINCOURT, Juan (coords.): *50 años de Corte Constitucional italiana, 25 años de Tribunal Constitucional español, IV Jornadas italo-españolas de Justicia Constitucional*, Madrid, Ministerio de Justicia, 2007, págs. 43-56.
- BLANCO VALDÉS, Roberto Luis: “La política y el Derecho: veinte años de justicia constitucional y democracia en España (apuntes para un balance)”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 4, 1999, págs. 241-272.
- BON, Pierre: “Le Conseil Constitutionnel français et le modèle des Cours Constitutionnelles européennes”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 32, 1991, págs. 45-72.

- BORRAJO INIESTA, Ignacio: “Renovarse o morir: el ritmo de las renovaciones del Tribunal Constitucional español”, en *Revista General de Derecho Constitucional*, núm. 16, 2013, págs. 1-65.
- BOSSUYT, Marc; LEYSEN, Riet: “La justice constitutionnelle: fonctions et relations avec les autres autorités publiques”, en *Rapport national pour le XVème Congrès de la Conférence des Cours constitutionnelles européennes, présenté par la Cour constitutionnelle de Belgique*, 22-29 mai 2011.
- BRAGE CAMAZANO, Joaquín: “Estudio introductorio. El Tribunal Constitucional federal y la jurisdicción constitucional en Alemania, con particular referencia al pensamiento de Peter Häberle y Konrad Hesse”, en HESSE, Konrad; HÄBERLE, Peter: *Estudios sobre la jurisdicción constitucional, con especial referencia al Tribunal Constitucional alemán* (J. Brage Camazano, trad.), México, Porrúa, IMDPC, págs. 1-62.
- BREWER-CARÍAS, Allan R.: “La participación ciudadana en la designación de los titulares de los órganos no electos de los poderes públicos en Venezuela y sus vicisitudes políticas”, en *III Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo sobre participación ciudadana y administración* (Homenaje al Rector José Luis Meilán), La Coruña, Pazo de Mariñán, 6-9 de octubre de 2004, [en línea, www.brewercarias.com].
- “Sobre el nombramiento irregular por la Asamblea Nacional de los titulares de los órganos del Poder ciudadano en 2007”, en *Revista de Derecho Público*, núm. 113 (Caracas), enero-marzo, 2008, págs. 85-88.
- “El rol del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, en el marco de la ausencia de separación de poderes, producto del régimen autoritario”, en *Segundo Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional*, 15 de marzo de 2011, [en línea, www.brewercarias.com].
- BUQUICCHIO, Michele: “L’elezione dei giudici costituzionali da parte delle supreme magistrature, tra norma e prassi”, en *Diritto Pubblico*, 1998, págs. 201-222.
- BUSTILLOS, Julio: *El juez constitucional en el mundo. Perfil, carrera judicial, nombramiento, remuneración, desempeño y costos*, México, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional núm. 48, IMDPC, 2011.
- CALVO SÁNCHEZ, María del Carmen: “La recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional: auto de 27 de noviembre de 2007”, en *Justicia: Revista de Derecho Procesal*, núm. 1-2, 2008, págs. 53-126.
- CAPPELLETTI, Mauro: “El ‘formidable problema’ del control judicial y la contribución del análisis comparado”, en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 13, 1980, págs. 61-103.
- CARRILLO, Marc (coord.): *Hacia una nueva jurisdicción constitucional. Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo de reforma de la LOTC*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008.

- CASAS BAAMONDE, María Emilia; RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, Miguel (dirs.): *Comentarios a la Constitución Española. XXX aniversario*, Madrid, Fundación Wolters Kluwer, 2008.
- “Discurso en el acto de la novena renovación parcial del Tribunal Constitucional”, en *Memoria 2010* (anexo V), Madrid, Tribunal Constitucional.
- CEA EGAÑA, José Luis: “Perfil axiológico, independencia y responsabilidad del juez constitucional”, en *Ius et Praxis*, año 9, núm. 2, 2003, [disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122003000200006&lng=en&nrm=iso&tlng=es].
- CID VILLAGRASA, Blanca: “La normativa seguida por los Parlamentos autonómicos para presentar candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional ante el Senado”, en *Asamblea, Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, núm. 9, diciembre 2008, págs. 397-422.
- CLÉRICO, Laura; CARDINAUX, Nancy: “La redefinición de los roles de los actores en el nuevo proceso de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia”, en *Direito público e integracao. Revista Jurídica* (Sergipe, Brasil), núm. 3, 2010/1, [disponible en <http://www.jfse.jus.br/revista2011/03.html>].
- COELLO DE PORTUGAL, José María: “Nota crítica sobre la situación actual del Tribunal Constitucional”, en *Foro*, nueva época, núm. 13/2011, págs. 229-232.
- COLLIARD, Jean-Claude: “Un nouveau Conseil constitutionnel?”, en *Pouvoirs: Revue française d'études constitutionnelles et politiques*, núm. 137, 2011 (Ejemplar dedicado a: La Question prioritaire de constitutionnalité), págs. 155-167.
- COSTANZO, Pasquale (coord.): *L'organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale: atti del Convegno, Imperia, 12-13 maggio 1995*, Torino, G. Giappichelli, 1996.
- COURTOY, Claude: “La formation et le renouvellement de la Cour d'arbitrage en Belgique”, en *CDPK (Publiekrechtelijke Kronieken-Chroniques de Droit Public)*, sección de crónicas, 2000, págs. 538-542.
- CRUZ VILLALÓN, Pedro: *La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939)*, Madrid, CEPC, 1987.
- “Discurso con motivo del XX Aniversario del Tribunal”, en *Memoria 2000* (anexo V), Madrid, Tribunal Constitucional.
- “Discurso pronunciado por el Presidente del Tribunal Constitucional con ocasión de la renovación parcial del Tribunal”, en *Memoria 2001* (anexo V), Madrid, Tribunal Constitucional.
- “El estado del Tribunal Constitucional”, en *Claves de Razón Práctica*, núm. 191, 2009, págs. 4-13.

- CUAREZMA TERÁN, Sergio; MORENO CASTILLO, María Asunción: “La justicia constitucional en Nicaragua”, en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 1, 1997, págs. 255-274.
- DALLA VIA, Alberto Ricardo: “La justicia constitucional en Argentina”, en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 1, 1997, págs. 35-48.
- D’ORAZIO, Giustino: “Commento alla proposta di legge costituzionale per la modificazione dell’art. 135 della Costituzione”, en *Giurisprudenza Costituzionale*, núm. 1-2, 1967, págs. 569-580.
- “Elezione di giudici da parte del Parlamento; Verifica dei titoli da parte della Corte costituzionale”, en *Giurisprudenza Costituzionale*, núm. 13, 1968, págs. 167-170.
- “Corte Costituzionale. Cronaca (1968-1974)”, en *Giurisprudenza Costituzionale*, núm. 1, 1974, págs. 2838-2852.
- “Magistrati della giurisdizione superiore ordinaria ed esercizio di funzioni non giudiziarie”, en *Giurisprudenza Costituzionale*, núm. 8, 1977, págs. 1401-1409.
- *La genesi della Corte costituzionale, Ideologia, politica, dibattito dottrinale: un saggio di storia delle istituzioni*, Milano, Edizioni di Comunità, 1980.
- DE ARAÚJO, António; TELES PEREIRA, J. A.: “A justiça constitucional nos 30 anos da constituição portuguesa: Notas para uma aproximação ibérica”, en TAJADURA TEJADA, Javier (coord.): *La Constitución portuguesa de 1976. Un estudio académico treinta años después*, Madrid, CEPC, 2006, págs. 207-228.
- DEL CASTILLO VERA, Pilar: “Notas para el estudio del comportamiento judicial. El caso del Tribunal Constitucional”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 20, 1987, págs. 177-191.
- DELGADO DEL RINCÓN, Luis Esteban: “La recusación de los Magistrados del Tribunal Constitucional (Comentario al ATC 26/2007, de 5 de febrero)”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 28, 2008, págs. 347-394.
- DELPREE, Francis: “Table ronde: les juges constitutionnels-Belgique”, en *Annuaire International de Justice Constitutionnelle*, vol. 4, 1988, págs. 101-115.
- DESDENTADO DAROCA, Eva: “Los problemas del control de la discrecionalidad en los nombramientos de altos cargos judiciales por el Consejo General del Poder Judicial: un análisis crítico”, en *Revista Española de Derecho Administrativo*, núm. 139, 2008, págs. 555-574.
- DÍEZ PICAZO, Luis María; ELVIRA PERALES, Ascensión: *La Constitución de 1978*, Colección “Las Constituciones Españolas”, t. IX, Madrid, Iustel, 2008.

- EGUIGUREN PRAELI, Francisco José: “Los tribunales constitucionales en la región andina: una visión comparativa”, en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 4, 2000, págs. 43-92.
- EISENMANN, Charles: *La justice constitutionnelle et la Haute Cour Constitutionnelle d’Autriche (édition de 1928)*, París, Economica, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1986.
- ESPÍN TEMPLADO, Eduardo: “Crisis de Gobierno y confianza presidencial en la II República”, en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 17, septiembre-octubre, 1980, págs. 87-115.
- FERNÁNDEZ FARRERES, Germán; CRUZ VILLALÓN, Pedro: *La reforma de la justicia constitucional*, Navarra, Thomson-Aranzadi, Centro de Estudios Jurídicos, 2006.
- FAVOREU, Louis: *Los tribunales constitucionales* (V. Villacampa, trad.), Barcelona, Ariel, 1994.
- “La Corte Constitucional de Bosnia-Herzegovina y el modelo europeo de justicia constitucional”, en VEGA GÓMEZ, Juan; CORZO SOSA, Edgar (coords.): *Tribunales y justicia constitucional, Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional*, México, UNAM, IIJ, 2002, págs. 193-199.
- MASTOR, Wanda: *Les cours constitutionnelles*, París, Dalloz, 2011.
- FEDE, Fabio: *La giurisdizione costituzionale nelle repubbliche europee della ex Unione Sovietica*, Padova, Cedam, 2001.
- FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: “El procedimiento de elección de los magistrados constitucionales”, en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, núm. 77, 1991, págs. 145- 193.
- “La estructura orgánica del Tribunal Constitucional”, en TRUJILLO, Gumersindo; LÓPEZ GUERRA, Luis María; GONZÁLEZ-TREVIJANO, Pedro José (dirs.): *La experiencia constitucional (1978-2000)*, Madrid, CEPC, 2000, págs. 429-457.
- *La reforma del régimen jurídico-procesal del recurso de Amparo*, Madrid, Dykinson, 2007.
- *La Justicia Constitucional: una visión de Derecho Comparado*, tomo III, La Justicia Constitucional en América Latina y en España, Madrid, Dykinson, 2009.
- FERNÁNDEZ FARRERES, Germán José: “Reflexiones sobre el futuro de la justicia constitucional española”, en *El futuro de la justicia constitucional, Actas de las XII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional*, Madrid, TC, CEPC, 2007, págs. 31-68.
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio: *La justicia constitucional europea ante el siglo XXI*, Madrid, Tecnos, 2007.

- FERNÁNDEZ-CARNICERO GONZÁLEZ, Claro José: "La STC 49/2008, una sentencia desfalleciente", en *Aranzadi del Tribunal Constitucional*, núm. 10, 2008, págs. 13-16.
- FERRARI, Giuseppe: "La travagliata gestazione della Corte costituzionale ed i problemi dei termini in Costituzione rigida e della compatibilità fra le cariche di giudice costituzionale e senatore vitalizio", en *Scritti in memoria di Antonino De Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990, págs. 87-109.
- FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.): *Crónica de Tribunales Constitucionales en Iberoamérica*, Buenos Aires, Marcial Pons, UNAM, 2009.
- FERRERES COMELLA, Víctor: *Justicia constitucional y democracia*, 2ª ed., Madrid, CEPC.
- *Una defensa del modelo europeo de control de constitucionalidad*, Madrid, Marcial Pons, 2011.
- FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela: "Sobre la reforma de la LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, efectuada mediante la LO 8/2010, de 4 de noviembre", en *Constitución y democracia: ayer y hoy. Libro homenaje a Antonio Torres del Moral*, vol. III, Madrid, Universitas, 2012, págs. 2713-2731.
- FIX-ZAMUDIO, Héctor: "Ley sobre la organización, funciones y procedimiento del Tribunal Constitucional portugués", en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 52, 1985, págs. 145-161.
- ASTUDILLO, César (coords.): *Estatuto jurídico del juez constitucional en América Latina y Europa. Libro en homenaje al doctor Jorge Carpizo*, México, IIJ, UNAM, 2012.
- FLORES JUBERÍAS, Carlos; TORRES PÉREZ, Mercedes: "Los tribunales constitucionales y su papel en la protección de los derechos fundamentales en las nuevas democracias de la Europa central y oriental", en *Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, núm. 5, julio-diciembre 2001, págs. 89-143.
- FREUND, Paul A.; ACKERMAN, Bruce A.; CARTER, Stephen; MONAGHAN, Henry Paul; TOTENBERG, Nina: "Essays on the Supreme Court appointment process", en *Harvard Law Review*, vol. 101, núm. 6, 1988, págs. 1146-1230.
- FRIEDMAN, Barry: "The birth of an academic obsession: the history of the countermajoritarian difficulty, part five", en *Yale Law Journal*, núm. 112, 2002, págs. 153-259.
- FROMONT, Michel: "Allemagne Federale", en *Annuaire International de Justice Constitutionnelle*, vol. IV, 1988, págs. 81-89.

- “La Justice Constitutionnelle en France ou l’exception française”, en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 8, 2004, págs. 171-187.
- GABALDÓN LÓPEZ, José: “El Tribunal Constitucional. Sobre su independencia”, en *Diario La Ley*, núm. 7317, 11 de enero de 2010, [en línea, portal Wolters Kluwer].
- GARCÍA COSTA, Francisco Manuel: “La elección de magistraturas por los preparlamentos”, en *Anales de Derecho*, núm. 26, 2008, págs. 13-50.
- “Consideraciones sobre el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial”, en *Anales de Derecho*, núm. 26, 2008, págs. 429-444.
- *La función electoral del Parlamento*, Barcelona, Atelier, 2009.
- GARCÍA COUSO, Susana: “Cómo superar la lógica del estado de partidos en el Tribunal Constitucional: la reforma del artículo 159 CE”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 29, 2012, págs. 433-456.
- GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional*, 3ª ed., Madrid, Civitas, 2001.
- GARCÍA MARTÍNEZ, María Asunción: “La Ley Orgánica 6/2007 y el juez de la ley”, en *Asamblea: Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, núm. 17, 2007, págs. 23-43.
- “¿*Quis custodiet custodes?* El Tribunal Constitucional y la garantía del orden constitucional”, en *Revista para el Análisis del Derecho InDret*, núm. 4, 2008, págs. 2-21.
- “El Tribunal Constitucional. De la legitimidad de origen a la legitimidad de ejercicio”, en *Asamblea: Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, núm. 21, 2009, págs. 107-143.
- GARCÍA ROCA, Javier: “La selección de los magistrados constitucionales, su estatuto y la necesaria regeneración de las instituciones”, en *Revista General de Derecho Constitucional*, núm. 15, 2012, págs. 1-42.
- GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, Piedad: “La Comisión General de las Comunidades Autónomas (Reforma del Reglamento del Senado)”, en *Revista de Administración Pública*, núm. 133, 1994, págs. 485-500.
- GARCÍA-PELAYO, Manuel: “El ‘status’ del Tribunal Constitucional”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 1, 1981, págs. 11-34.
- GAROUPA, Nuno; GÓMEZ-POMAR, Fernando; GREMBI, Veronica: “Judging under political pressure: an empirical analysis of constitutional review voting in the spanish Constitutional Court”, en *The Journal of Law, Economics, and Organization*, vol. 29, núm. 3, 2013, págs. 513-534.
- GARRIDO FALLA, Fernando, *et al.*: *Comentarios a la Constitución*, 3ª ed., Madrid, Civitas, 2001.

- GECK, Wilhelm Karl: "Nombramiento y 'status' de los Magistrados del Tribunal Constitucional Federal de Alemania" (J. Puente Egido, trad.), en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 22, 1988, págs.175-220.
- GÓMEZ FERNÁNDEZ, Itziar: "Una aproximación al Tribunal Constitucional español desde la teoría de la democracia deliberativa", en *Revista General de Derecho Constitucional*, núm. 2, 2006, págs.1-42.
- GÓMEZ-FERRER MORANT, Rafael: "La reforma del Tribunal Constitucional", en *Revista de Administración Pública*, núm. 174, 2007, págs. 75-111.
- GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda: "El Tribunal de Cuentas (Art. 136)", en *Revista de Derecho Político*, núm. 36, 1992, págs. 291-300.
- GONZÁLEZ BEILFUSS, Markus: "Los tribunales constitucionales de los länder alemanes", en *Autonomies: Revista Catalana de Derecho Público*, núm. 21, 1996, págs. 225-266.
- GONZÁLEZ-DELEITO DOMINGO, Nicolás: *Tribunales Constitucionales. Organización y funcionamiento*, Madrid, Tecnos, 1980.
- GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: *Derecho Procesal Constitucional*, Madrid, Civitas, 1980.
- GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, Pedro José: *El Tribunal Constitucional*, Navarra, Aranzadi, 2000.
- GREWE, Constance: "Le statut du Conseil Constitutionnel à la lumière des enseignements du Droit comparé", en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 8, 2004, págs. 189-201.
- GUAJARDO PÉREZ, M^a. Isabel: "Afiliación política de los Magistrados del Tribunal Constitucional: inadmisión de la recusación promovida contra su Presidente por el Parlamento y la Generalitat de Cataluña (artículo 219 LOPJ núms. 9 y 10)", en *Diario La Ley*, núm. 8198, 2013, [en línea, portal Wolters Kluwer].
- GUTIÉRREZ DE COLMENARES, Carmen María: "Sistemas de elección y remoción de los magistrados de las Salas y Tribunales Constitucionales en Centroamérica, evaluación crítica", en *Estudios Constitucionales*, año 4, núm. 2, noviembre 2006, págs. 631-659.
- HAAS, Evelyn: "La posición de los Magistrados de la Corte Constitucional Federal alemana y su significado para la vida jurídica y la sociedad", en *Ius et Praxis*, vol. 10, núm. 1, 2004, págs. 309-358, [disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122004000100008].

- HÄBERLE, Peter: "La jurisdicción constitucional institucionalizada en el Estado constitucional" (J. Brague Camazano, trad.), en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 5, 2001, págs. 169-182.
- "La jurisdicción constitucional en la fase actual de desarrollo del Estado constitucional" (J. Brague Camazano, trad.), en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 14, 2º semestre, 2004, págs. 153-176.
- "El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una jurisdicción constitucional autónoma", en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 9, 2005, págs. 113-139.
- "Funciones y significados de los Tribunales Constitucionales en perspectiva comparada -y comentarios a los 60 años del Tribunal Constitucional", en *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, núm. 17, 2012, págs. 501-528.
- HERNÁNDEZ, Antonio María: "El caso 'Fayt' y sus implicancias constitucionales", en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 5, 2001, págs. 453-516.
- HERNANDO MASDEU, Javier: *La designación parlamentaria de magistrados del Tribunal Constitucional*, Tesis para obtener el Grado de Doctor, en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, presentada en julio de 2013.
- ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ, Diego: *El fracaso del autogobierno judicial*, Navarra, Civitas, 2008.
- JELLINEK, Georg: *Una Corte costituzionale per l'Austria*, Torino, G. Giappichelli, 2013.
- KARAKAMISHEVA-JOVANOVSKA, Tanja: "Different Models for Protection of Constitutionality, Legality and Independence of Constitutional Court of the Republic of Macedonia", en *2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice, Separation of Powers and Independence of Constitutional Courts and Equivalent Bodies*, Council of Europe, Venice Commission, Rio de Janeiro, Brazil, 2011.
- KELEMEN, Katalin: "Appointment of Constitutional Judges in a Comparative Perspective - with a proposal for a new model for Hungary", en *Acta Juridica Hungarica*, vol. 54, núm. 1, 2013, págs. 5-23.
- KELSEN, Hans: "La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle)", en *Revue de Droit Public et de la Science Politique en France et à l'Étranger*, t. XLV, avril-mai-juin 1928, págs. 197-257.
- GERACI, Carmelo (a cura di): *La giustizia costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1981.
- KISCHEL, Uwe: "Party, pope, and politics? The election of German Constitutional Court Justices in comparative perspective", en *International Journal of Constitutional Law*, vol. 11, núm. 4, 2013, págs. 962-980.

- KÜHN, Zdenek; KYSELA, Jan: "Nomination of constitutional justices in post-communist countries: trial, error, conflict in the Czech Republic", en *European Constitutional Law Review*, vol. 2, issue 2, june 2006, págs.183-208.
- LAGI, Sara: "Hans Kelsen and the Austrian Constitutional Court" (1918-1929)", en *Co-herencia* (Medellín, Colombia), vol. 9, núm. 16, enero-junio, 2012, págs. 273-295, [disponible en <http://www.scielo.org.co/pdf/cohe/v9n16/v9n16a10.pdf>].
- LAMPREA MONTEALEGRE, Everardo: "When accountability meets judicial independence: a case-study of 2008 civil society transparency observation of the colombian Constitutional Court's nominations", California, Stanford Law School, abril, 2009, [disponible en <http://www.law.stanford.edu/sites/default/files/biblio/108/139734/doc/slspublic/EveraldoLampreaMontealegre-tft2009.pdf>].
- LANDA ARROYO, César: "La elección del juez constitucional", en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 6, 2002, págs. 245-272.
- "La elección del juez constitucional", en *Revista Latinoamericana de Derecho*, núm. 2, julio-diciembre, 2004, págs. 127-162.
- LATORRE SEGURA, Ángel: "El tribunal constitucional (Derecho y Política)", en *Anuario de la Facultad de Derecho* (Universidad de Alcalá), núm. 1, 1991-1992, págs. 303-314.
- LEIBHOLZ, Gerhard: "El Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana y el problema de la apreciación judicial del política", en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 146, 1966, págs. 89-100.
- LESAGE, Michel: "Présentation de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie", en *Cahiers du Conseil constitutionnel*, núm. 1 (Dossier: Russie), décembre 1996, [en línea, portal del Conseil constitutionnel].
- LLANOS, Mariana; FIGUEROA SCHIBBER, Constanza: "Prestando acuerdo: El Senado frente a los nombramientos del Poder Judicial en la Argentina democrática (1983-2006)", en *Working papers of German Institute of Global and Area Studies* (GIGA), núm. 54, Hamburgo, julio de 2007, [disponible en www.giga-hamburg.de/workingpapers].
- LOEWENSTEIN, Karl: *Le forme della cooptazione. I processi autonomi di riproduzione dei gruppi privilegiati*, Milano, Giuffrè, 1990.
- LÓPEZ AGUILAR, Juan Fernando: *Minoría y oposición en el parlamentarismo: una aproximación comparativa*, Madrid, Congreso de los Diputados, 1991.
- LÓPEZ GUERRA, Luis: "La organización y la posición institucional de la justicia constitucional en Europa", en *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, 2004, págs. 85-100.

- LÖSING, Norbert: *La Jurisdicción Constitucional en Latinoamérica*, Madrid, Dykinson, Fundación Konrad Adenauer, 2002.
- LOZANO MIRALLES, Jorge; SACCOMANNO, Albino: *El Tribunal Constitucional. Composición y principios jurídico-organizativos (el aspecto funcional)*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000.
- LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo María: “A vueltas con el Consejo General del Poder Judicial”, en *Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas*, núm. 5, 2009, págs. 77-96, [disponible en, http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/anuario/articulos/descargas/anuario_n5_2009/05_EST_02_MURILLO.pdf].
- “Las mayorías reforzadas y la formación de los órganos constitucionales (comentarios sobre la actualidad)”, en *Anuario “Parlamento y Constitución”*, núm. 13, 2010, págs. 123-142.
- LUCHAIRE, François: “Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre”, en *Cahiers du Conseil constitutionnel*, núm. 8 (Dossier: Principautés européennes), juillet 2000, [en línea, portal Conseil constitutionnel].
- LUTHER, Jörg: “I giudici costituzionali sono giudici naturali?”, *Giurisprudenza Costituzionale*, núm. 3, mayo-junio, 1991, págs. 2478-2503.
- ROMBOLI, Roberto; TARCHI, Rolando: *Esperienze di Giustizia Costituzionale*, 2 tomos, Torino, G. Giappichelli, 2000.
- LÜBBE-WOLF, Gertrude; MELLINGHOFF, Rudolf; GAIER, Reinhard: “Constitutional Justice: functions and relationship with the other public authorities”, en National report prepared for the XVth Congress of the Conference of European Constitutional Courts by The Federal Constitutional Court of Germany, 23-25 may 2011, Bucharest, Romania.
- MALFATTI, Elena; PANIZZA, Saulle; ROMBOLI, Roberto: *Giustizia Costituzionale*, Torino, G. Giappichelli, 2003.
- *Giustizia Costituzionale*, 3ª ed., 2 tomos, Torino, G. Giappichelli, 2011.
- MARÍN GÁMEZ, José Ángel: *Naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional*, Barcelona, Ariel, 1998.
- MARJAN MAVČIČ, Arne: *La justicia constitucional en Eslovenia*, México, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, núm. 39, 2011.
- MAYER-SERRA, Carlos Elizondo; MAGALONI, Ana Laura: “La forma es fondo: cómo se nombran y deciden los ministros de la Suprema Corte de Justicia”, en *Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, núm. 23, julio-diciembre 2010, págs. 27-60.
- MAZIAU, Nicolas: “Présentation de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine”, en *Cahiers du Conseil constitutionnel*, núm. 11 (Dossier:

Bosnie-Herzégovine), décembre 2001, [en línea, portal del Conseil constitutionnel].

MAZZA, Mauro: *La giustizia Costituzionale in Europa orientale*, Padova, Cedam, 1999.

MIGLIO, Gianfranco: *Una Costituzione per i prossimi trent'anni. Intervista sulla Terza Repubblica a cura di Marcello Staglieno*, 3ª ed., Roma, Laterza, 1991.

MIKLASHEVICH, Petr. P.: "Constitutional justice: functions and relationship with the other public authorities", en *National report prepared for the XVth Congress by The Constitutional Court of the Republic of Belarus*, 23-25 may 2011, Bucharest, Romania.

MIRANDA, Jorge: *Manual de Direito Constitucional*, vol. I, 4ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1990.

----- *Manual de Direito Constitucional*, vol. II, 3ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1996.

MOREIRA CARDOSO DA COSTA, José Manuel: "El Tribunal Constitucional portugués: origen histórico", en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 60-61, 1988, págs. 831-840.

----- "Tópicos sobre competencias e integración del Tribunal Constitucional en Portugal", en *Ius et Praxis*, núm.1, 2002, págs. 327-332.

NIETO, Alejandro: *El desgobierno judicial*, Madrid, Trotta, 2005.

NÚÑEZ, Manuel Antonio: "Sobre la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional chileno", en *Revista Chilena de Derecho*, núm. especial, 1998, págs. 211-215.

NÚÑEZ RIVERO, Cayetano; MONTESINOS GIRALT, Manuel: "La Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador: concepto y composición", en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 14, 2004, págs. 359-374.

OLLERO, Carlos: *Derecho y teoría política en el proceso constituyente español*, Madrid, CEC, 1986.

OUBIÑA BARBOLLA, Sabela: *El Tribunal Constitucional: pasado, presente y futuro*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012.

----- "Verdades y mentiras sobre la composición y renovación del Tribunal Constitucional", en *Diario La Ley*, núm. 7900, sección doctrina, 12 de julio de 2012, [en línea, portal Wolters Kluwer].

PAJARES MONTOLÍO, Emilio (coord.); SANTAOLALLA LÓPEZ, Fernando; PAUNER CHULVI, Cristina: *Procedimientos de designación parlamentaria de cargos públicos*, Madrid, CEPC, 2010.

- PALADIN, Livio: "Sulla natura del Parlamento in seduta comune", en *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, vol. 10, núm. 2-3, 1960, págs. 388-418.
- PANIZZA, Saulle: "Composizione, organizzazione e funzionamento della Corte Costituzionale", en ROMBOLI, Roberto (a cura di): *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1990-1992)*, Torino, G. Giappichelli, 1993, págs. 3-26.
- "La composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale", en ROMBOLI, Roberto (a cura di): *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995)*, Torino, G. Giappichelli, 1996, págs. 1-49.
- "La composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale", en ROMBOLI, Roberto (a cura di): *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1999-2001)*, Torino, G. Giappichelli, 2002, págs. 1-33.
- "Composizione, organizzazione e funzionamento della Corte Costituzionale", en ROMBOLI, Roberto (a cura di): *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004)*, Torino, G. Giappichelli, 2005, págs. 1-35.
- "Composizione, organizzazione e funzionamento della Corte Costituzionale", en ROMBOLI, Roberto (a cura di): *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010)*, Torino, G. Giappichelli, 2011, págs. 1-29.
- PAUNER CHULVI, Cristina: *La designación parlamentaria de cargos públicos*, Madrid, Congreso de los Diputados, 2003.
- "La reforma constitucional del Senado en su función de Cámara designante", en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 17, 2006, págs. 261-284.
- PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio: *La Constitución española de 1978. Un estudio de Derecho y Política*, 2ª ed., Valencia, Fernando Torres Editor, 1984.
- PEDRAZ PENALVA, Ernesto (coord.): *El gobierno de la justicia. El Consejo General del Poder Judicial*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996.
- PÉREZ CALVO, Alberto (coord.): *La participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones del Estado*, II Jornadas de Pamplona sobre el Estado Autonómico, Madrid, Tecnos, 1997.
- PÉREZ ROYO, Javier: *Tribunal Constitucional y división de poderes*, Madrid, Tecnos, 1988.
- , *Curso de Derecho Constitucional*, 9ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2003.
- PÉREZ TREMPs, Pablo: "La justicia constitucional", en DE ESTEBAN, Jorge; LÓPEZ GUERRA, Luis, et al.: *El régimen constitucional español*, vol. I, Barcelona, Editorial Labor, 1980, págs. 248-286.

- “¿Reforma del Título IX de la Constitución? El Tribunal Constitucional: organización y funcionamiento”, en *Revista de Derecho Político*, núm. 37, 1992, págs. 275-287.
 - “La justicia constitucional en Nicaragua”, en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 106, 1999, págs. 9-27.
 - “Las perspectivas del sistema de justicia constitucional en España”, en *Foro Constitucional Iberoamericano*, núm. 5, marzo 2004, [disponible en <http://www.idpc.es/archivo/1212655936a5PPT.pdf>].
 - (coord.): *La Reforma del Tribunal Constitucional. Actas del V Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007.
 - “El Tribunal Constitucional (I)”, en LÓPEZ GUERRA, Luis, et. al.: en *Derecho Constitucional, vol. II, Los poderes del Estado, La organización territorial del Estado*, 9ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, págs. 216-226.
- PERRY, Barbara. A.: *A “Representative” Supreme Court? The impact of race, religion, and gender on appointments*, New York, Greenwood Press, 1991.
- PESOLE, Luciana: “La composición pluralista y no representativa de la Corte Constitucional italiana” (Andrés Bordalí, trad.), en *Revista de Derecho* (Valdivia, Chile), núm. 17, 2004, págs. 185-211.
- PINARDI, Roberto: “Il problema dei ritardi parlamentari nell’elezione dei giudici costituzionali tra regole convenzionali e rimedi de iure condendo”, en *Giurisprudenza Costituzionale*, núm. 48.3, 2003, págs. 1819-1854.
- PIZZORRUSO, Alessandro: “Art. 135”, en BRANCA, Giuseppe (a cura di): *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. Ed. del Foro Italiano, 1981, págs. 144-174.
- *La Costituzione. I valori da conservare, le regole da cambiare*, Torino, Einaudi, 1996.
 - “La Justicia Constitucional en Italia” (J. M. Castellà, trad.), en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 4, 2000, págs. 151-177.
- POLI, Maria Daniela: *Bundesverfassungsgericht e Landesverfassungsgerichte: un modello “policentrico” di giustizia costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2012.
- PRESNO LINERA, Miguel Ángel: “‘Cuotas de partido’, ‘sistemas de botín’ y ‘clientelismo político’”, en *Revista Jurídica de Asturias*, núm. 23, 1999, págs. 131-148.
- PUGIOTTO, Andrea: “Se non così, come? E se non ora, quando?: sulla persistente mancata elezione parlamentare di un giudice costituzionale”, en DESANTI, Lucetta; FERRETTI, Paolo; MANFREDINI, Arrigo D. (a cura di): *Il 70 compleanno di Pierpaolo Zamorani: scritti offerti dagli amici e dai colleghi di facoltà*, Milano, Giuffrè, 2009, págs. 339-354, [disponible en http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0075_pugiotto.pdf].

- PULIDO QUECEDO, Manuel: “¿Magistrados constitucionales de designación autonómica?”, en *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional*, núm. 3, 2004, págs. 2925-2927.
- “Sede vacante”, en *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional*, núm. 5, 2008, págs. 9-10.
- “El juicio del Tribunal sobre su ley orgánica (Entre la oportunidad y la constitucionalidad)”, en *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional*, núm. 6, 2008, págs. 9-11.
- “El fin de un conflicto: El Senado elige a los magistrados constitucionales y los parlamentos territoriales proponen”, en *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional*, núm. 11, 2008, págs. 9-10.
- “La Reforma del Reglamento del Senado y el nombramiento de Magistrados constitucionales”, en *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional*, núm. 16, 2008, págs. 9-11.
- “Renovación de órganos constitucionales”, en *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 758, 11 de septiembre de 2008, págs. 2-4.
- REQUEJO PAGÉS, Juan Luis (coord.): *Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*, Madrid, TC, BOE, 2001.
- “El Tribunal Constitucional”, en DEL CAMPO, Salustiano; TEZANOS, José Félix (dirs.): *La España del Siglo XXI*, vol. II: *La política* (JIMÉNEZ DE PARGA, Manuel; VALLESPÍN, Fernando, eds.), Madrid, Instituto de España y Fundación Sistema, 2008, págs. 245-282, [versión electrónica facilitada por el autor].
- RINELLA, Angelo; TOBIA, Mario: “I giudici costituzionali nei sistemi federali”, en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 8, 2004, págs. 403-438.
- RÍOS ÁLVAREZ, Lautaro: “La generación del Tribunal Constitucional”, en *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, 2004, págs. 75-84.
- RIPOLLÉS SERRANO, María Rosa: “La participación del Gobierno y de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas en el funcionamiento de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado”, en *Corts: Anuario de Derecho Parlamentario*, núm. 1, 1995, págs. 11-30.
- RIVERA SANTIVÁÑEZ, José Antonio: “La evolución político-institucional en Bolivia entre 1975 a 2005”, en *Estudios Constitucionales*, año 6, núm. 2 (Talca, Chile), 2008, págs. 173-210.
- “Sistemas de nombramiento del juez constitucional”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MOLINA SUÁREZ, César de Jesús (coords.): *El juez constitucional en el siglo XXI*, t. II, México, UNAM, IIJ, SCJN, 2009, págs. 113-141.
- ROBERT, Jacques: “Nature juridique de la décision de nomination des membres du Conseil constitutionnel: à propos de l’arrêt Dame Ba du Conseil d’État”, en *Cahiers du Conseil constitutionnel*, núm. 7, décembre, 1999, [en línea, portal Conseil constitutionnel].

- RODRÍGUEZ BEREIJO, Álvaro: "Sobre la renovación del Tribunal Constitucional", en *Tribunales de justicia: Revista Española de Derecho Procesal*, núm. 12, 1998, págs. 1203-1204.
- RODRÍGUEZ-PATRÓN, Patricia: "Sobre el significado de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español operada en virtud de la LO 6/2007, del 24 de mayo", en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo (coords.): *La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho*, t. II, Tribunales constitucionales y democracia, México, UNAM, IMDPC, Marcial Pons, 2008, págs. 523-544.
- "El Tribunal Constitucional ante la reciente reforma de los artículos 16 de su Ley Orgánica y 184 del Reglamento del Senado", en *Revista de Derecho Político*, núm. 77, 2010, págs. 107-140.
- RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel; et al.: *La jurisdicción constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994 (Coloquio internacional. Madrid, 13 y 14 de octubre de 1994)*, Madrid, CEPC, 1995.
- RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, Jorge: *Teoría y práctica del Derecho Constitucional: estado, constitución, fuentes del derecho según la realidad de la Unión Europea: contenido y garantías de los derechos fundamentales, instituciones básicas, Comunidades Autónomas*, 2ª ed., Madrid, Tecnos, 2011.
- ROIG I MOLÉS, Eduard: "La regulació de les relacions de la Generalitat amb l'Estat en el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya", en *Activitat Parlamentària*, núm. 15, 2008, págs. 63-77.
- ROLLA, Giancarlo: *Indirizzo politico e tribunale costituzionale in Spagna*, Napoli, Casa editrice Dott. Eugenio Jovene, Università di Cagliari, pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Istituto di Diritto Pubblico, vol. 36, 1986.
- ROMANO, Antonio Augusto: *La prorogatio negli organi costituzionali*, Milano, Giuffrè, Pubblicazioni a cura della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Palermo, 1967.
- ROSSI, Emanuele: "Il Presidente della Repubblica e la mancata elezione dei giudici costituzionali", en *Forum di Quaderni costituzionali*, 20 de noviembre de 2001, [disponible en www.forumcostituzionale.it].
- VUOTO, Salvatore: "I giudici della Corte costituzionale di nomina delle supreme magistrature", en CIARLO, Pietro; PITRUZZELLA, Giovanni; TARCHI, Rolando (a cura di): *Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale: atti del convegno di Cagliari, 24-25 maggio 1996*, Torino, G. Giappichelli, 1997, págs. 343-368.

- ROURA GÓMEZ, Santiago A.: “La composición del Tribunal Constitucional y su función de órgano de solución de las controversias territoriales (A propósito de las previsiones del llamado “Plan Ibarretxe” en relación con la justicia constitucional territorial)”, en *Civitas Europa: revista jurídica sobre la evolución de la nación y del estado en Europa*, núm. 12, 2004, págs. 125-158.
- ROUSSEAU, Dominique: *La justicia constitucional en Europa* (Isabel Ortiz Pica, trad.), Estudio preliminar de Teresa Freixes Sanjuán, Madrid, CEPC, 2002.
- “Per un Conseil constitutionnel diverso”, en *Rivista di Diritto Costituzionale*, núm. 2008, págs. 194-202.
- ROUSSILLON, Henry: *Le Conseil constitutionnel*, 6ª ed., París, Dalloz, 2008.
- RUBIO LLORENTE, Francisco: “Del Tribunal de Garantías al Tribunal Constitucional”, en *Revista de Derecho Político*, núm. 16, 1982-1983, págs. 27-37.
- Aragón Reyes, Manuel: “La jurisdicción constitucional”, en PREDIERI, Alberto; GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (dirs.): *La Constitución Española de 1978. Estudio sistemático*, 2ª ed., Madrid, Civitas, 1988, págs. 831-886.
- “Seis tesis sobre la jurisdicción constitucional en Europa”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 35, 1992, págs. 9-39.
- “El Tribunal Constitucional”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 71, 2004, págs. 11-33.
- “El Tribunal Constitucional”, en *La forma del poder. Estudios sobre la Constitución*, 3ª ed., vol. III, Madrid, CEPC, 2012, págs. 1395-1415.
- RUGGERI, Antonio; SPADARO, Antonino: *Lineamenti di Giustizia Costituzionale*, 2ª ed., Torino, G. Giappichelli, 2001.
- RUIZ LAPEÑA, Rosa María: *El Tribunal de Garantías Constitucionales en la II República española*, Barcelona, Bosch, 1982.
- SALA SÁNCHEZ, Pascual: “Discurso con motivo de la XI renovación del Tribunal Constitucional, Madrid, 13 de junio de 2013, [en línea, <http://www.tribunalconstitucional.es/es/actividades/Documents/DISCURSO%20RENOVACI%C3%93N-2013.pdf>].
- SAINZ MORENO, Fernando (ed.): *Consejo General del Poder Judicial: trabajos parlamentarios*, Madrid, Cortes Generales, Servicio de Estudios y Publicaciones, 1980.
- SÁNCHEZ AGESTA, Luis: *Sistema Político de la Constitución Española de 1978. Ensayo de un sistema*, 5ª ed., Madrid, Edersa, 1989.
- SÁNCHEZ BARRILAO, Juan Francisco: “Sobre el interés de las Comunidades Autónomas en la composición del Tribunal Constitucional”, en GARCÍA HERRERA, Miguel Ángel; VIDAL BELTRÁN, José María (coords.): *El estado autonómico: integración, solidaridad, diversidad*, vol. I, Madrid, Colex, Instituto Nacional de Administración Pública, 2005, págs. 155-182.

- “La participación de las Comunidades Autónomas en la elección por el Senado de los magistrados constitucionales”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 23, 2009, págs. 387-424.
- SÁNCHEZ BARRIOS, M^a. Inmaculada: *La elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial español y de sus homólogos europeos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009.
- SÁNCHEZ-BEATO JERÓNIMO, Estefanía: “La ‘Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados’. Algunas reflexiones a propósito de la Resolución de la Presidencia del Congreso de 25 de mayo de 2000”, en *Corts: Anuario de Derecho Parlamentario*, núm. 11, 2001, págs. 153-177.
- SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio: “Los retrasos y los sesgos de la composición del Tribunal Constitucional”, en *Informe sobre la democracia en España 2011*, Madrid, Fundación Alternativas, 2011, págs. 283-293.
- SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ángel: “Semblanza de la andadura vital de D. José Luis de los Mozos: un hombre de ciencia y conciencia”, en *Anales de Derecho*, núm. 26, 2008, págs. 457-462.
- SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, (ed.): *Tribunal Constitucional, Trabajos parlamentarios*, Madrid, Cortes Generales, 1980.
- “La *prorogatio* de los órganos constitucionales. Apuntes mínimos sobre un tema que no lo es”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 84, 2008, págs. 11-26.
- SANTAOLALLA LÓPEZ, Fernando: “El voto de calidad del Presidente del Tribunal Constitucional”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 85, enero-abril, 2009, págs. 201-211.
- “El problema de la renovación de los órganos constitucionales”, en *Revista de Derecho Político*, núm. 77, enero-abril, 2010, págs. 73-103.
- *Derecho Parlamentario Español*, Madrid, Dykinson, 2013.
- SANZ PÉREZ, Ángel Luis: “Comentario a la STC 49/2008: Las fuentes del Derecho parlamentario y el Senado”, en *Aranzadi Tribunal Constitucional*, núm. 9, 2008, págs. 13-28.
- “STC 101/2008. La nueva relación entre el Senado y los Parlamentos Autonómicos”, en *Aranzadi Tribunal Constitucional*, núm. 13, 2008, págs. 13-31.
- “El Parlamento sin derechos. ¿Una nueva forma de indefensión?”, en *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 1, 2011, [en línea portal Thomson-Aranzadi].
- SCARDACCIONE, Eduardo: “La Cassazione discute il suo ruolo e si apre al confronto: quattro documenti di grande rilievo e due assemblee generali”, en *Cassazione penale*, 1999, págs. 2051-2054.

- SCHEFOLD, Dian: “Los tribunales constitucionales en los Estados federales y regionales”, en *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, núm. 18, 2012, págs. 43-54.
- SCHLAICH, Klaus: “El Tribunal Constitucional Federal Alemán”, en FAVOREU, Louis; LUCHAIRE, François, *et al.*: *Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales* (L. Aguiar de Luque; M. G. Rubio de Casas, trads.), Madrid, CEC, 1984, págs. 133-232.
- SCHMITT, Carl; Kelsen, Hans: *La polémica Schmitt/Kelsen sobre la justicia constitucional: El defensor de la Constitución versus ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?*, Madrid, Tecnos, 2009.
- SCHNAPPER, Dominique: *Une sociologie au Conseil Constitutionnel*, Paris, Gallimard, 2010.
- SCHOLZ, Rupert: “Alemania: cincuenta años de Corte Constitucional Federal” (Renate G. Hoffmann, trad.), en *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, 2002, págs. 57-73.
- SERRA CRISTÓBAL, Rosario: *La selección de jueces en Estados Unidos, Navarra*, Civitas Thomson Reuters, 2011.
- SERVICIO DE ESTUDIO, BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: “Modelos de renovación personal de Tribunales Constitucionales”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 61, 2001, págs. 209-237.
- SIEYÈS, Emmanuel: *Escritos y discursos de la Revolución*, Madrid, CEPC, 2007.
- SIMÓN YARZA, Fernando: “La democracia parlamentaria y el Tribunal de Karlsruhe: la crisis de la Eurozona, el sistema electoral y el nombramiento de jueces constitucionales”, en *Revista General de Derecho Constitucional*, núm. 15, 2012, págs. 1-37.
- “La composición de la justicia constitucional en perspectiva comparada (en especial, con relación a Estados Unidos), en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 31, 2013, págs. 357-390.
- SIMON, Helmut: “La Jurisdicción Constitucional”, en BENDA, Ernest; MAIHOFFER, Werner; VOGEL, Juan Joaquín; HESSE, Konrad; HEYDE, Wolfgang: *Manual de Derecho Constitucional*, 2ª ed. (A. López Pina, trad.), Barcelona, Marcial Pons, 2001, págs. 823-860.
- SMITH, Craig: “An american’s view of the Federal Constitutional Court: Karlsruhe’s justices”, en *German Law Journal*, núm. 2, 2001, [disponible en <http://www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=11&artID=17>].
- SORIANO HERNÁNDEZ, Enrique: “Los Magistrados de las CC. AA y del Senado: Comentario a la STC 101/2008, de 24 de julio. Apostillas a la STC

49/2008”, en *Aranzadi Tribunal Constitucional*, núm. 16, 2008, págs. 13-30.

SOSA WAGNER, Francisco: *Maestros alemanes del Derecho Público*, 2ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2005.

SPIROVSKI, Igor: “The independence of the Constitutional Court of the Republic of Macedonia: Guarantees and Challenges”, en *2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice, Separation of Powers and Independence of Constitutional Courts and Equivalent Bodies*, Council of Europe, Venice Commission, Rio de Janeiro, Brazil, 2011.

STAIANO, Sandro: “Intervención en seminario”, en ROMBOLI, Roberto; ROSSI, Emanuele; TARCHI, Rolando: *La Corte costituzionale nei lavori della Commissione bicamerale, Atti del Seminario di Pisa del 26 settembre 1997*, Torino, G. Giappichelli, 1998, págs. 23-27.

STERN, Klaus: *Jurisdicción constitucional y legislador*, Madrid, Dykinson, 2009.

STRAUSS, David A.; SUNSTEIN, Cass R.: “The Senate, the Constitution, and the confirmation Process”, en *The Yale Law Journal*, vol. 101, 1991-1992, págs. 1491-1524.

TAVARES FILHO, Newton: *Democratização do processo de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa*, 2006.

TENORIO SÁNCHEZ, Pedro Julio: “El Tribunal Constitucional”, en *Revista de Derecho Político*, núm. 37, 1992, págs. 289-300.

TEROL BECERRA, Manuel José: *El Consejo General del Poder Judicial*, Madrid, CEC, 1990.

TOMÁS VILLARROYA, Joaquín: “El Tribunal Constitucional en el Anteproyecto de Constitución”, en *Estudios sobre el Proyecto de Constitución*, Madrid, CEC, 1978, págs. 199- 216.

TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: “El Tribunal Constitucional español: diez años de funcionamiento”, en *Revista Vasca de Administración Pública-Herri-Ardulararitzako Euskal Aldizkaria*, núm. 31, 1991, págs. 19-36.

----- *Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional*, Madrid, CEC, 1993.

TORRES DEL MORAL, Antonio: *Principios de Derecho Constitucional Español*, vol. II, Madrid, Servicio de Publicaciones, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 2004.

TORRES MURO, Ignacio: “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del Reglamento del Senado, puesta a prueba (SSTC 49/2008, de 9 de abril y 101/2008, de 24 de julio)”, en *Revista General de Derecho Constitucional*, núm. 6, 2008, págs. 1-26.

- “Refrendo y Monarquía”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 87, 2009, págs. 43-70.
- TORRISI, Mimmo: “La Consulta senza numero legale per la prima volta in quarantasei anni”, en *Diritto e Giustizia*, núm. 13, 6 aprile 2002.
- TRIBE, Laurence H.: *God save this honourable Court. How the choice of Supreme Court Justices shapes our history*, New York, A Mentor Book, 1985.
- URÍAS, Joaquín: “El Tribunal Constitucional ante la participación autonómica en el nombramiento de sus miembros”, en *Revista d’Estudis Autonòmics i Federals*, núm. 10, abril, 2010, págs. 207-244.
- VALIÑO DEL RÍO, Emilio: “Jueces constitucionales, ¿de reconocida competencia?”, en *Revista internauta de práctica jurídica*, núm. 15, 2005, [en línea, http://www.ripj.com/art_jcos/artjuridicos/art15/jueces%20constitucionales.htm].
- VACAS GARCÍA-ALÓS, Luis; MARTÍN MARTÍN, Gervasio: *Comentarios a la Ley Orgánica del Poder Judicial*, 2 vols., Navarra, Aranzadi, 2008.
- VASILESCU, Florin Bucur: “Roumanie”, en *Annuaire International de Justice Constitutionnelle* XI, 1995, págs. 983-1007.
- VERDUSSEN, Marc: *La Justice Constitutionnelle en Europe Centrale*, Bruxelles, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1997.
- *Les douze juges, la légitimité de la Cour constitutionnelle*, Bruxelles, Labor, 2004.
- VERPEAUX, Michel; SPONCHIADO, Lucie: “Le contrôle des nominations présidentielles devant le Conseil constitutionnel. Deux décisions a minima pour une réforme importante”, en *Semaine juridique*, núm. 35, 2010, págs. 1549-1552.
- VIZIOLI, Nicola: “L’elezione dei membri della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura da parte del Parlamento in seduta comune”, en *Il rispetto delle regole. Iscritti degli allievi in onore di Alessandro Pizzorusso*, Torino, G. Giappichelli, 2005, págs. 247-255.
- VOLPE, Carmine: “Fuori ruolo ed elettorato attivo nell’elezione dei giudici della Corte Costituzionale da parte delle Supreme magistrature: la prima volta del giudice amministrativo (nota a Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 luglio 2002, n. 6285)”, en *Il Foro Amministrativo*, vol. 78, núm. 7-8, 2002, págs. 2470-2493.
- “Fuori ruolo, elettorato attivo e Corte costituzionale: il Consiglio di Stato individua una consuetudine ‘di rilievo costituzionale’ (Nota a Cons. St. Sez. IV, 14 novembre 2003, n. 7279)”, en *Il Foro Amministrativo C.D.S.*, vol. III, núm. 2, febbraio, 2004, págs. 414-434.

- BOGDANDY, Armin Von; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MORALES ANTONIAZZI, Mariela (coords.): *La justicia constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un ius constitutionale commune en América Latina?*, t. I, México, IJ, UNAM, Max-Planck-Institut, IIDPC, 2010.
- VV.AA.: *Ante el futuro del Senado. Seminario sobre la reforma constitucional del Senado*, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis Autònoms, 1996.
- VV.AA.: "Borrador de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional", en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 4, 1999, págs. 395-435.
- VV.AA.: *Cuadernos de Derecho Público* (monográfico dedicado a la reforma de la Constitución francesa, coordinado por AGUIAR DE LUQUE, Luis), núm. 34-35, mayo-diciembre, 2008.
- VV.AA.: "Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional", en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 4, 1999, págs. 13-89.
- VV.AA.: "Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo cuatrimestre de 2007", en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 81, 2007, págs. 221-242.
- VV.AA.: "Doctrina del Tribunal Constitucional durante el tercer cuatrimestre de 2007", en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 82, 2008, págs. 277-317.
- VV.AA.: "Doctrina del Tribunal Constitucional durante el primer cuatrimestre de 2008", en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 83, 2008, págs. 209-242.
- VV.AA.: "Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo cuatrimestre de 2008", en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 84, 2008, págs. 225-250.
- VV.AA.: "Encuesta. Orientación actual del Derecho Constitucional", en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 21, 2008, págs. 17-70.
- VV.AA.: "Encuesta de renovación del Tribunal Constitucional", en *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, págs. 15-90.
- VV.AA.: "Las Actas de la Ponencia Constitucional", en *Revista de las Cortes Generales*, núm. 2, 1984, págs. 251-419, [disponible en <http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/actas/actas.pdf>].
- VV.AA.: "Mesa de debate: sistemas de nombramiento del juez constitucional", en *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, núm. 13, enero-junio 2010, págs. 453-461.

VV.AA.: *Revista Catalana de Dret Públic* (monográfico dedicado a “Els guardians de l'autonomia), núm. 39, 2009.

VV.AA.: *Teoría y Realidad Constitucional* (monográfico sobre el Senado), núm. 17, 2006.

WEBER, Albrecht: “La jurisdicción constitucional en Europa occidental: una comparación”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 17, 1986, págs. 47-83.

----- “La jurisdicción constitucional de la República Federal de Alemania”, en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, núm. 7, 2003, págs. 495-538.

ZAGREBELSKY, Gustavo: *La giustizia costituzionale*, Padova, Il Mulino, 1988.

----- *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, Torino, Giulio Einaudi, 2005.

----- “Jueces constitucionales”, en *Jueces para la democracia*, núm. 58, marzo, 2007, págs. 3-12.

ZAMPAGNI, Gabriele: “La Corte Costituzionale: funzioni, composizione e propositi di riforma”, en *Il Diritto di Tutti*, Giuffrè, [disponible en http://dirittoditutti.giuffre.it/psixsite/Archivio/Articoli%20gi_%20pubblicati/Rubriche/Opinioni%20a%20confronto/default.aspx?id=245].

2.- Documentación

2.1.- España

a) Congreso de los Diputados

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: “Lista de enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados al Anteproyecto de Constitución española de 1978”, [en línea, <http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/enmiendas/enmcongreso.pdf>].

----- “Anteproyecto de Constitución”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 44, 5 de enero de 1978, págs. 669-797.

----- “Anteproyecto de Constitución”, en *Boletín Oficial de las Cortes*, núm. 82, 17 de abril de 1978, págs. 1519-1617.

----- “Formulación de propuestas para el nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 60 (extraordinaria), 30 de enero de 1980, págs. 4091-4117.

----- “Resolución de la Presidencia, Procedimiento de propuesta y elección por el Congreso de los Diputados de vocales o miembros de órganos o instituciones, exigida por disposiciones constitucionales o legales”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie h, núm. 28-I, I Legislatura, 9 de febrero de 1980, págs. 131-132.

- “Elección de magistrado del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 140, I Legislatura, 18 de diciembre de 1980, pág. 9081.
- “Elección de magistrado del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 141, I Legislatura, 29 de diciembre de 1980, págs. 9092-9093.
- “Elección para formular propuesta a Su Majestad el Rey a fin de que sean elegidos magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 58, II Legislatura, 27 de septiembre de 1983, págs. 2734-2735.
- “Elección para formular propuesta de nombramiento a S.M. el Rey a fin de que designe miembros del Consejo General del Poder Judicial”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 233, II Legislatura, 2 de octubre de 1985, págs. 10602-10603.
- “Elección para formular propuesta de nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 270, II Legislatura, 13 de febrero de 1986, págs. 12182-12183.
- “Propuesta de designación de un magistrado del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 47, IV Legislatura, 27 de junio de 1990, pág. 2286.
- “Elección por el Pleno de la Cámara de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 203, IV Legislatura, 25 de junio de 1992, págs. 10006-10011.
- “Propuesta de nombramiento de Vocales del Consejo General del Poder Judicial”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, sesión plenaria núm. 18 (extraordinaria), VI Legislatura, 23 de julio de 1996, págs. 804-805.
- “Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 25 de mayo de 2000, relativa a la intervención de la Cámara en el nombramiento de Autoridades del Estado”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie d, núm. 20, VII Legislatura, 26 de mayo de 2000, págs. 2-3.
- “Comparecencia de cuatro candidatos para la elección de miembros del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 346, comisiones, sesión núm. 3, VII Legislatura, 25 de octubre de 2001, págs. 11220-11248.
- “Propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 115, sesión plenaria núm. 110, VII Legislatura, 30 de octubre de 2001, pág. 5590.
- “Proposición de ley del Parlamento de Cataluña, Sexta modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, a fin de que los magistrados nombrados a propuesta del Senado lo sean en representación de las Comunidades Autónomas (Orgánica)”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie b, núm. 267-1, VII Legislatura, 19 de julio de 2002, págs. 1-3.
- “Toma en consideración de Propositiones de Ley de Comunidades Autónomas, Del Parlamento de Cataluña, de sexta modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, a fin de que los magistrados nombrados a propuesta del Senado lo sean en

- representación de las Comunidades Autónomas (Orgánica)”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, Pleno y Diputación Permanente, núm. 248, VII Legislatura, 6 de mayo de 2003, págs. 12745-12756.
- “Propuesta de reforma de Estatuto político de la Comunidad de Euskadi”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 149-1, serie b: proposiciones de ley, VIII Legislatura, 21 de enero de 2005, págs. 1-21.
 - “Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 210-1, serie b: proposiciones de ley, VIII Legislatura, 21 de octubre de 2005, págs. 1- 60.
 - “Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie a: proyectos de ley, núm. 60-1, VIII Legislatura, 25 de noviembre de 2005, págs. 1-11.
 - “Enmiendas e índice de enmiendas al articulado, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie a, núm. 60-7, VIII Legislatura, 23 de febrero de 2006, págs. 23-65.
 - “Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 246-1, serie b: proposiciones de ley, VIII Legislatura, 12 de mayo de 2006, págs. 1- 47.
 - “Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 253-1, serie b: proposiciones de ley, VIII Legislatura, 8 de septiembre de 2006, págs. 1- 25.
 - “Informe de la ponencia, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, serie a, núm. 60-9, VIII Legislatura, 5 de diciembre de 2006, págs. 71-77.
 - “Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 268-1, serie b: proposiciones de ley, VIII Legislatura, 15 de diciembre de 2006, págs. 1- 26.
 - “Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, comisiones, núm. 769, VIII Legislatura, 5 de marzo de 2007, págs. 1-26.
 - “Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas, Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, Pleno y Diputación Permanente, núm. 240, VIII Legislatura, 15 de marzo de 2007, pág. 12140.
 - “Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 253-1, serie b, proposiciones de ley, IX Legislatura, 4 de junio de 2010, págs. 1-4.
 - “Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y la Ley Orgánica 8/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 244-1, serie b, proposiciones de ley, IX Legislatura, 30 de abril de 2010, págs. 1-2.

- “Toma de consideración de Propositiones de Ley, del Grupo Parlamentario Catalán (*Convergència i Unió*), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, núm. 254, Pleno y Diputación permanente, IX Legislatura, sesión plenaria núm. 242, de 21 de junio de 2011, págs. 1-45.
- “Relación de iniciativas caducadas y de iniciativas trasladadas a la Cámara que se constituya en la X Legislatura”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. d-648, serie d, general, IX Legislatura, 28 de octubre de 2011, págs. 1-860.
- “Comparecencias de candidatos para la elección de: cuatro magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, X Legislatura, núm. 49, Comisión Consultiva de Nombramientos, 9 de julio de 2012, págs. 2-27.
- “Propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, X Legislatura, núm. 49, sesión plenaria núm. 47 (sesión extraordinaria), 17 de julio de 2012, pág. 18.

ALONSO ARANEGUI, Alfonso (GP) y 121 diputados y MADINA MUÑOZ, Eduardo (GS) y 98 diputados: “Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Consultiva de Nombramientos, a fin de que ejerza las funciones que se contemplan en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 25 de mayo de 2000, respecto a las candidaturas a Magistrados del Tribunal Constitucional, a Consejeros del Tribunal de Cuentas, así como a vocales Catedráticos de la Junta Electoral Central. (049/000044)”, Congreso de los Diputados, presentado el 02/07/12 y calificado el 10/07/2012, [en línea, http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLIST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28235%2F000003*.EXP O.%29].

b) Senado

- SENADO: “Lista de enmiendas presentadas en el Senado al Proyecto de Constitución española de 1978”, [en línea, www.congreso.es/constitucion/ficheros/enmiendas/enmsenado.pdf].
- “Modificaciones propuestas por el Pleno del Senado al texto del proyecto de Constitución aprobado por el Congreso de los Diputados”, en *Boletín Oficial de las Cortes, Senado*, núm. 161, 13 de octubre de 1978, págs. 3559-3577.
 - “Elección de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, que debe proponerse a S.M. el Rey por esta Cámara”, en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 39 (extraordinaria), 30 de enero de 1980, págs. 1724-1727.
 - *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 40, I Legislatura, 5 de febrero de 1980, págs. 1781-1782.

- “Normas para la elección por el Senado de cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie I*, núm.38, I Legislatura, 8 de febrero de 1980, págs. 712-713.
- “Elección de cuatro miembros que deben ser propuestos por el Senado para integrarse en el Consejo General del Poder Judicial”, en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 73, I Legislatura, 24 de septiembre de 1980, págs. 3606-3607.
- “Nueva votación para elegir los cuatro miembros que deben ser propuestos por la Cámara para formar parte del Consejo General del Poder Judicial”, en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 74, I Legislatura, 25 de septiembre de 1980, págs. 3680-3681.
- “Elección de un miembro del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 145, II Legislatura, 11 de febrero de 1986, págs. 6875-6876.
- “Elección de cuatro miembros del Tribunal Constitucional que deben proponerse a S. M. el Rey por esta Cámara”, en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión plenaria núm. 108, III Legislatura, 8 de febrero de 1989, págs. 5040-5041.
- “Elección de un miembro del Tribunal Constitucional, que debe proponerse a S. M. el Rey por esta Cámara”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 122, IV Legislatura, 30 de junio de 1992, págs. 6608-6613.
- “Elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial”, en *Diario de Sesiones del Senado*, sesión del Pleno, núm. 7, VI Legislatura, 23 de julio de 1996, págs. 234-235.
- “Elección de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que deben proponerse a S. M. el Rey por esta Cámara”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 111, VI Legislatura, 14 de diciembre de 1998, pág. 5128.
- “Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican el artículo 49.2 y el Título Noveno”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie III a: proposiciones de ley del Senado*, núm. 2 (a), VII Legislatura, 7 de junio de 2000, págs. 1-4.
- “Dictamen de la Comisión de Reglamento en relación con la propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican el artículo 49.2 y el Título Noveno”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 9, VII Legislatura, 14 de junio de 2000, pág. 305.
- “Comparecencia del candidato a Magistrado del Tribunal Constitucional don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez”, en *Diario de Sesiones del Senado*, comisiones, núm. 401, VII Legislatura, 18 de diciembre de 2002, págs. 1-5.
- “Propuesta para el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 120, VII Legislatura, 18 de diciembre de 2002, pág. 7431.
- “Informe emitido por la Comisión de Nombramientos sobre el candidato propuesto para integrar el Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie I, boletín general*, núm. 564, VII Legislatura, 20 de diciembre de 2002, pág. 1.
- “Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en el Senado de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la elección de magistrados a propuesta de las Comunidades Autónomas”, en *Boletín Oficial de las*

Cortes Generales, serie III a, núm. 2 (a), VIII Legislatura, 22 de abril de 2004, págs. 1-3.

- “Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado: Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la elección de magistrados a propuesta de las comunidades autónomas”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 20, VIII Legislatura, 16 de noviembre de 2004, págs. 905-913.
- “Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 184”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 53 (a), serie III a, proposiciones de ley del Senado, VIII Legislatura, 20 de septiembre de 2007, págs. 1-2.
- “Dictaminar la Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 184”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión de Reglamento, núm. 531, VIII Legislatura, 13 de noviembre de 2007, págs. 1-5.
- “Comparecencia de D. Mariano Fernández Bermejo, Ministro de Justicia”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión de Justicia, IX Legislatura, núm. 49, 25 de septiembre de 2008, pág. 29.
- “Pregunta de D^a. María Dolores de Cospedal García, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la razón por la que ha habido un cambio de criterio del Gobierno en relación con la renovación del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, IX Legislatura, núm. 76, sesión del Pleno, 27 de abril de 2010, págs. 4030-4031.
- “Interpelación de D. Jordi Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario *Entesa Catalana de Progrés*, sobre las actuaciones que, en el ámbito de sus competencias, va a impulsar el Gobierno para favorecer la consecución de un acuerdo que permita la renovación del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, IX Legislatura, núm. 78, sesión del Pleno, 11 de mayo de 2010, págs. 4152-4157.
- “Debate para valorar los efectos para las Comunidades Autónomas de la situación actual de las propuestas de candidaturas a magistrados del Tribunal Constitucional presentadas por las respectivas asambleas legislativas”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión General de las Comunidades Autónomas, IX Legislatura, núm. 350, 24 de mayo de 2010, págs. 1-63.
- “Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 20 (a), serie III A, proposiciones de ley del Senado, IX Legislatura, 27 de mayo de 2010, págs. 1-5.
- “Toma de consideración de proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 85, IX Legislatura, sesión plenaria de 23 de junio de 2010, págs. 4579-4591.
- “Habilitación del mes de julio de 2010 para la tramitación, en Comisión y en Pleno, del procedimiento de designación por el Senado de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Diputación Permanente, IX Legislatura, núm. 3, 7 de julio de 2010, pág. 2.

- “Comparecencia de los candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión de Nombramientos, núm. 392, IX Legislatura, 15 de julio de 2010, págs. 1-45.
- “Formular propuesta al Pleno de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión de Nombramientos, núm. 402, IX Legislatura, 28 de septiembre de 2010, págs.1-4.
- “Comparecencia del candidato a Magistrado del Tribunal Constitucional, D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel; Formular propuesta al Pleno de candidato a Magistrado del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, Comisión de Nombramientos, núm. 408, IX Legislatura, 6 de octubre de 2010, págs.1-6.
- “Informe emitido por la Comisión de Nombramientos sobre los candidatos propuestos para Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 529, serie I, boletín general, IX Legislatura, 11 de octubre de 2010, pág. 1.
- “Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Se tramita por el procedimiento de urgencia”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 97, IX Legislatura, 20 de octubre de 2010, págs. 5316-5320.
- “Propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Senado*, núm. 103, IX Legislatura, 1 de diciembre de 2010, pág. 5634.
- “Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”, en *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, núm. 189, X Legislatura, 16 de mayo de 2013, págs. 74-103.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO: “Recurso contra el acuerdo adoptado por la Mesa del Senado, en su reunión del día 1 de junio de 2010, en relación con las propuestas de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional”, Senado, Expediente 725/000001, documento 28, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=9&id=44596].

- “Presentación de la candidatura de D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel para su elección como Magistrado del Tribunal Constitucional”, Senado, Expediente 725/000001, documento 42, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=9&id=50633].

SECRETARÍA GENERAL DEL SENADO: “Informe sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Constitución, las leyes y el Reglamento del Senado por las candidaturas de magistrados del Tribunal Constitucional presentadas por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas”, en *Revista de las Cortes Generales*, núm. 82, 2011, págs. 465-478.

- “Informe sobre si procede que el Senado se dirija a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en relación con las propuestas de candidatos de magistrados del Tribunal Constitucional al reanudarse el proceso de elección”, 31 de mayo de 2010, [en línea,

[http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2010/6/1/1275427951562Informe letradosSenado renovacionTC consultasCCAA.pdf](http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2010/6/1/1275427951562Informe%20letradosSenado%20renovacionTC%20consultasCCAA.pdf)].

- “Informe sobre el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado contra el Acuerdo de la Mesa del Senado de 1 de junio de 2010 (Número de registro de entrada 42598) sobre admisión a trámite de las propuestas de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional”, [disponible en, https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CFMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.aelpa.org%2Factualidad%2Fjulio2010%2FInforme%2520Letrados%2520Idoneidad%2520CandidatoTC.doc&ei=azlkUtubEYeS0QW_oGIDQ&usg=AFQjCNHw40CO6EB55uzESKPZngMxeYy0PA&bvm=bv.54934254,d.d2k].

SACRISTÁN REPRESA, Marcos: “Comunicación de renuncia como candidato para su elección como Magistrado del Tribunal Constitucional”, Senado, Expediente 725/000001, núm. de documento 37, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=9&id=46649].

VV. AA.: “Composición por Grupos Parlamentarios del Senado”. Documento de trabajo facilitado el 23 de octubre de 2013, por el Departamento de Archivo del Senado (D^a. Ángela Pérez Samperio).

c) Parlamentos autonómicos

ASAMBLEA DE EXTREMADURA: “Acuerdo del Pleno de la Cámara por el que se designa a D. Ángel Juanes Peces y a D. Enrique López López como candidatos, para su elección por el Senado, como Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura*, núm. 139, VII Legislatura, 26 de septiembre de 2008, pág. 4.

- “Aclaración en relación con la documentación referente a D. Enrique López y López, designado por la Asamblea de Extremadura como candidato para su elección como Magistrado del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 184.7 a) del Reglamento del Senado y en el artículo 16.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo”, Senado, Expediente 725/000001, documento 25, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=9&id=12676].

- “Designación de candidato para la elección, por el Senado, de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones de la Asamblea de Extremadura*, núm. 74-P, VII Legislatura, sesión plenaria núm. 64, 17 de junio de 2010, págs. 3575-3576.

ASAMBLEA DE MADRID: “Acuerdo del Pleno de la Asamblea de Madrid, de fecha 23 de septiembre de 2008, por el que se procede a la designación de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 27, VIII Legislatura, 25 de septiembre de 2008, págs. 8255-8256.

- “Aclaración en relación con la documentación referente a D. Enrique López y López y D. Fernando Valdés Dal-Re, designados por la Asamblea de Madrid como candidatos para su elección como Magistrados del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 184.7 a) del Reglamento del Senado y en el artículo 16.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo”, Senado, Expediente 725/000001, documento 23, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=9&id=12613].
- “Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de la Asamblea de Madrid, en su reunión del día 21 de junio de 2010, de reiteración de la candidatura presentada a Magistrados del Tribunal Constitucional, y solicitud de reconsideración del acuerdo de la Mesa del Senado de 1 de junio de 2010”, Senado, Expediente 725/000001, documento 30, disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=9&id=45199].

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA: “Propuesta de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia*, núm. 45, VII Legislatura, 28 de octubre de 2008, págs. 1936-1937.

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: “Acuerdo del Pleno del Parlamento de Andalucía designando a don Juan Carlos Campo Moreno y a doña María del Carmen Catalán Martínez candidatos a Magistrado y Magistrada del Tribunal Constitucional a proponer por el Senado”, en *Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía*, núm. 84, VIII Legislatura, 29 de septiembre de 2008, pág. 43.

- “Aclaración en relación con la documentación referente a D. Juan Carlos Campo Moreno, designado por el Parlamento de Andalucía como candidato para su elección como Magistrado del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 184.7 a) del Reglamento del Senado y en el artículo 16.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo”, Senado, Expediente 725/000001, documento 20, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=9&id=12230].

- “Designación de D. Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala como magistrado del Tribunal Constitucional, a proponer por el Senado”, en *Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía*, núm. 88, VIII Legislatura, sesión plenaria núm. 49, 23 de junio de 2010, págs. 8-9.

PARLAMENTO DE CANARIAS: “Elección de candidatos a magistrados a proponer al Senado”, en *Boletín Oficial del Parlamento de Canarias*, núm. 169, VII Legislatura, 26 de septiembre de 2008, pág. 1.

PARLAMENTO DE GALICIA: “Designación de dous candidatos ou candidatas a maxistrado ou maxistrada do Tribunal Constitucional para lle presentar ao Senado”, en *Diario de Sesións do Parlamento de Galicia*, núm. 138, serie pleno, VII Lexislatura, 23 de setembro de 2008, págs. 7-8.

PARLAMENTO DE LA RIOJA: “Propuesta de designación de dos vocales del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Parlamento de La Rioja*, núm. 23, VII Legislatura, sesión plenaria núm. 19, 29 de septiembre de 2008, págs. 888-891.

----- “Aclaración en relación con la documentación referente a D. Enrique López y López, designado por el Parlamento de La Rioja como candidato para su elección como Magistrado del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 184.7 a) del Reglamento del Senado y en el artículo 16.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo”, Senado, Expediente 725/000001, documento 21, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=9&id=12426].

----- “Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento de La Rioja, en su reunión del día 21 de junio de 2010, de ratificación de la candidatura de D. Enrique López y López a Magistrado del Tribunal Constitucional”, Senado, Expediente 725/000001, documento 33, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=9&id=45485].

PARLAMENTO DE CANTABRIA: “Designación de candidaturas a Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones del Parlamento de Cantabria*, núm. 40.2, VII Legislatura, 24 de septiembre de 2008, pág. 1108.

----- “Aclaración en relación con la documentación referente a D. Enrique López y López, designado por el Parlamento de Cantabria como candidato para su elección como Magistrado del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 184.7 a) del Reglamento del Senado y en el artículo 16.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo”, Senado, Expediente 725/000001, documento 22, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=9&id=12464].

----- “Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento de Cantabria, en su reunión del día 11 de junio de 2010, de no realización de una nueva propuesta de candidato a Magistrado del Tribunal Constitucional”, Senado, Expediente 725/000001, documento 27, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=9&id=44436].

PARLAMENTO DE NAVARRA: “Designación de dos candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial del Parlamento de Navarra*, núm. 83, VII Legislatura, 2 de octubre de 2008, pág. 10.

PARLAMENTO DE CATALUÑA: “Designació de candidats per a poder ser elegits pel Senat magistrats del Tribunal Constitucional”, en *Diari de Sessions del Parlament de Catalunya*, Comissió d’ Afers Institucionals, VIII Legislatura, sèrie c, núm. 379, sessió núm. 32, 26 de setembre de 2008, págs. 4- 5.

----- “Proposta de resolució sobre la constitucionalitat de l’Estatut i la renovació del Tribunal Constitucional (Tram. 250-02821/08)”, en *Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya*, VIII Legislatura, núm. 691, 28 de abril de 2010, págs. 3-4.

----- “Resolució 678/VIII del Parlament de Catalunya sobre la constitucionalitat de l'Estatut i la renovació del Tribunal Constitucional (Tram. 250-02821/08)”, en *Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya*, VIII Legislatura, núm. 693, 3 de mayo de 2010, págs. 1-8.

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS: “Comunicado de la Presidencia al Senado, de fecha 25 de septiembre de 2008, por el que se declina a presentar candidaturas de magistrados constitucionales, al no haber presentado propuestas los grupos parlamentarios autonómicos”, Senado, expediente 725/000001, [disponible en la sección de iniciativas en www.senado.es].

PARLAMENTO VASCO: “Normas reguladoras del procedimiento para la presentación ante el Senado de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial del Parlamento Vasco*, núm. 172, VIII Legislatura, 3 de octubre de 2008, págs. 28798-28799.

CORTES DE ARAGÓN: “Designación de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional a presentar en el Senado”, (Jesús Delgado Echeverría y Francisco José Hernando Santiago), en *Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón*, núm. 25, VII Legislatura, 24, 25 y 26 de septiembre de 2008, pág. 1810.

CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA: “Designación por el Pleno de las Cortes de candidatos a Magistrado del Tribunal Constitucional a remitir al Senado”, en *Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha*, núm. 68, VII Legislatura, 26 de septiembre de 2008, pág. 2401.

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN: “Designación de D. Enrique López López y D. Marcos Sacristán Represa a candidatos a Magistrado del Tribunal Constitucional”, en *Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León*, núm. 118, VII Legislatura, 26 de septiembre de 2008, pág. 7246.

----- “Aclaración en relación con la documentación referente a D. Enrique López y López, designado por las Cortes de Castilla y León como candidato para su elección como Magistrado del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 184.7 a) del Reglamento del Senado y en el artículo 16.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo”, Senado, Expediente 725/000001, documento 19, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=9&id=12223].

----- “Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 21 de junio de 2010, de ratificación de la candidatura de D. Enrique López y López a Magistrado del Tribunal Constitucional”, Senado, Expediente 725/000001, documento 32, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=9&id=45376].

CORTES VALENCIANAS: “Designació de candidats a magistrats del Tribunal Constitucional”, en *Diario de Sesiones*, núm. 50, VII Legislatura, 24 de septiembre de 2008, pág. 1590.

d) Tribunal Constitucional

PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Acuerdo de 14 de julio de 1980, por el que se fija la fecha en que comenzará a ejercer sus competencias (BOE núm. 168, 14 de julio de 1980, pág. 16037).

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: “Comunicación de la expiración, el día 8 de noviembre de 2010, del mandato de los Magistrados del Tribunal Constitucional propuestos por el Congreso de los Diputados y de la solicitud realizada a esa Cámara para que se dé inicio al procedimiento de designación de nuevos Magistrados, así como a la cobertura de la vacante por fallecimiento de D. Roberto García-Calvo y Montiel; y de la situación pendiente en la que se encuentra la renovación parcial que corresponde proponer al Senado”, Senado, Expediente 725/000003, documento 1, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobservelet?legis=9&id=45519].

----- “Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno del Tribunal Constitucional por el que se declara que las propuestas de nombramiento de D^a. Adela Asúa Batarrita, D. Francisco José Hernando Santiago, D. Luis Ignacio Ortega Álvarez y D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel como Magistrados de dicho Tribunal reúnen los requisitos exigidos por los artículos 159.2 de la Constitución y 18 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, Senado, Expediente 725/000001, documento 45, recibido el 7 de diciembre de 2010, [disponible en www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/documentos/index.html?legis=9&id1=725&id2=000001].

----- “Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno del Tribunal Constitucional, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2010, por el que se reclama el cumplimiento de los plazos establecidos en la Constitución para la renovación de todos los Magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato haya expirado, incluida la vacante por fallecimiento de D. Roberto García-Calvo y Montiel”, Senado, Expediente 725/000003, documento 2, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobservelet?legis=9&id=55143].

----- “Comunicación y cartas de renuncia de los Magistrados propuestos por el Congreso de los Diputados, D. Eugenio Gay Montalvo, D. Javier Delgado Barrio y D^a. Elisa Pérez Vera”, Senado, Expediente 725/000003, documento 3, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobservelet?legis=9&id=67522].

----- “Comunicación del Decreto del Presidente del Tribunal Constitucional por el que resuelve no aceptar las renunciaciones de los Magistrados propuestos por el Congreso de los Diputados, D. Eugenio Gay Montalvo, D. Javier Delgado Barrio y D^a. Elisa Pérez Vera”, Expediente 725/000003, documento 4, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobservelet?legis=9&id=67525].

----- “Comunicación de que la propuesta del Gobierno para el nombramiento de D. Pedro José González-Trevijano Sánchez y D. Enrique López y López, así como la del Consejo General del Poder Judicial para el nombramiento de D. Juan Antonio Xiol Ríos y D. Santiago Martínez-Vares García como Magistrados, todos ellos, del Tribunal Constitucional, reúnen los requisitos

exigidos por la Constitución y la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, Senado, Expediente 725/000002, documento 2, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=10&id=45128].

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: *Discursos de sus Presidentes (1980-2005): 25 aniversario*, Madrid, Tribunal Constitucional, 2006.

----- *Memoria 1999*, Madrid, Tribunal Constitucional, 2000.

----- *Memoria 2001*, Madrid, Tribunal Constitucional, 2002.

----- *Memoria 2002*, Madrid, Tribunal Constitucional, 2003.

----- *Memoria 2004*, Madrid, Tribunal Constitucional, 2005.

----- *Memoria 2008*, Madrid, Tribunal Constitucional, 2009.

----- *Memoria 2009*, Madrid, Tribunal Constitucional, 2010.

----- *Memoria 2010*, Madrid, Tribunal Constitucional, 2011.

----- *Memoria 2011*, Madrid, Tribunal Constitucional, 2012.

----- *Memoria 2012*, Madrid, Tribunal Constitucional, 2013.

----- “Nota Informativa núm. 22/2012”, Gabinete de la Presidenta, Oficina de prensa, 22 de mayo de 2012, [disponible en <http://ep00.epimg.net/descargables/2012/05/22/bcd6eb29077d34d314b399557ab7c162.pdf>].

----- “Nota Informativa núm. 43/2013”, Gabinete del Presidente, Oficina de prensa, 18 de julio de 2013, [disponible en <http://www.tribunalconstitucional.es/Documents/NOTAINFORMATIVANUMERO432013.pdf>].

e) Consejo General del Poder Judicial

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: Acuerdo del Pleno, “Reglas para la elección de dos magistrados del Tribunal Constitucional por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial”, sesión de 29 de enero de 1986, [facilitado por el Secretario General del CGPJ].

----- Acuerdos del Pleno, adoptados el 14 de abril de 2004.

----- Acuerdo del Pleno, adoptado el 9 de febrero de 2005, por el que se aprueba por unanimidad la constitución de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la judicatura, que tendrá por objeto el impulso y coordinación de los trabajos dirigidos al desarrollo de las conclusiones alcanzadas en el Seminario Internacional celebrado en Roma del 13 al 5 de diciembre de 2004 relativas al “Programa sobre la participación equilibrada de la mujer y del hombre en el proceso de toma de decisiones”.

----- Acuerdo del Pleno, “Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, 13 de octubre de 2005, [disponible en www.poderjudicial.es].

----- Acuerdo del Pleno, adoptado el 22 de junio de 2005.

----- Acuerdo del Pleno, adoptado el 26 de febrero de 2009 por el que se solicita se cumpla, en la mayor medida posible, en la composición de los Tribunales calificadores el principio de paridad entre mujeres y hombres.

----- Acuerdo del Pleno, adoptado el 27 de enero de 2011.

- Acuerdo de la Comisión de Igualdad, adoptado el 16 de junio de 2009, denominado “Normas mínimas para evitar la discriminación de la mujer en el lenguaje administrativo del CGPJ”.
- Comunicado núm. 3036, “El CGPJ informa Ramón Rodríguez Arribas y Pascual Sala Sánchez, magistrados del Tribunal Constitucional”, 14 de abril de 2004.
- Orden del día del Pleno del CGPJ convocado para el 16 de mayo de 2013, [disponible en www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/En_Portada/Orden_del_dia_del_Pleno_del_CGPJ_convocado_para_el_16_de_mayo].
- Comunicado de apertura del procedimiento selectivo de magistrados, 15 de marzo de 2012, [disponible en www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/En_Portada/Apertura_del_procedimiento_para_formular_las_candidaturas_que_corresponden_al_CG_PJ_en_la_renovacion_del_Tribunal_Constitucional].
- Comunicado por el que se informa la designación de Juan Antonio Xiol Ríos y Santiago Martínez-Vares García, como magistrados del Tribunal Constitucional, 7 de junio de 2013, [disponible en www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/En_Portada/ci.Los_magistrados_del_Tribunal_Supremo_Juan_Antonio_Xiol_Rios_y_Santiago_Martinez_Vares_Garcia_nuevos_miembros_del_Tribunal_Constitucional.formato3].

f) Otras instituciones

Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona), en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2010, sobre la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la renovación del Tribunal Constitucional, [disponible en www.senado.es/web/expedientdocblobServlet?legis=9&id=42870].

CONSEJO DE ESTADO: *Informe sobre modificaciones de la Constitución Española*, febrero, 2006, [disponible en www.consejo-estado.es/pdf/MODIFICACIONES%20CONSTITUCION%20ESP.pdf].

CONSEJO FISCAL: “Propuesta de Informe del Consejo Fiscal sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LO 2/1979 de 3 octubre, del Tribunal Constitucional”, 24 de octubre de 2005.

“Declaración de Barcelona”, documento de 28 de enero de 2000, [disponible en www.eaj-pnv.eu/documentos/documentos/170.htm#2].

DEFENSOR DEL PUEBLO: Informe Anual a las Cortes Generales, Madrid, 2010.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL: Acuerdo de 13 de julio de 1993, por el que se ordena la publicación del resumen de los resultados de las elecciones para el Congreso de los Diputados y el Senado convocadas por Real Decreto 534/1993, de 12 de abril, y celebradas el 6 de junio de 1993, según los datos que figuran en las actas de escrutinio general remitidas por cada una de las Juntas Electorales Provinciales (BOE núm. 169, de 16 de julio de 1993).

----- Acuerdos de 25 de marzo y de 22 de abril de 2004, por los que se ordena la publicación del resumen de los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 100/2004, de 19 de enero, y celebradas el 14 de marzo de 2004, conforme a las actas de escrutinio general y de proclamación de electos remitidas por las distintas Juntas Electorales Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla (BOE núm. 109, de 5 de mayo de 2004).

----- Acuerdo de 7 de diciembre de 2011, por el que se publica el resumen de los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, y celebradas el 20 de noviembre de 2011, conforme a las actas de escrutinio general y de proclamación de electos remitidas por las correspondientes Juntas Electorales Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla (BOE núm. 297, de 10 de diciembre de 2011).

Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito el 28 de mayo de 2001 por el PP y el PSOE.

2.2.- Documentación de otros países

A) Alemania

BUNDESRAT: Stenografischer Bericht, sitzung 814, 23 september 2005, pág. 321 (D), [disponible en, www.bundesrat.de/cln_236/nn_6906/SharedDocs/Downloads/DE/Plenarprotokolle/2005/Plenarprotokoll-814,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Plenarprotokoll-814.pdf].

----- Stenografischer Bericht, sitzung 843, 25 april 2008, pág. 99, [disponible en www.bundesrat.de/cln_236/nn_6906/SharedDocs/Downloads/DE/Plenarprotokolle/2008/Plenarprotokoll-843,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Plenarprotokoll-843.pdf].

----- Stenografischer Bericht, sitzung 878, 17 dezember 2010, pág. 487 (B).

----- Stenografischer Bericht, sitzung 890, 25 november 2011, pág. 526 (B), [disponible en www.bundesrat.de/cln_330/nn_6906/SharedDocs/Downloads/DE/Plenarprotokolle/2011/Plenarprotokoll-890,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Plenarprotokoll-890.pdf].

----- Nota de 17 de diciembre de 2009, donde se dan a conocer los candidatos propuestos por los partidos políticos para conformar la Comisión Electoral

de la 17^a Legislatura, [disponible en www.bundestag.de/presse/hib/2009_12/2009_317/08.html].

- Nota del Comité Electoral de fecha 11 de noviembre de 2010, donde se informa la designación conjunta de los magistrados Susanne Baer, Peter Michael Huber y Monika Hermanns, [disponible en www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2010/32175816_kw45_wahlausschuss/index.html].

B) Bolivia

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL: Memoria anual 2011.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL: Convocatoria al proceso electoral de elección de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, Resolución núm. 79/2011, de 13 de mayo, del Tribunal Supremo Electoral.

- Acta de cómputo nacional de la elección de autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo Electoral, [disponible en www.oep.org.bo].

C) Estonia

SUPREME COURT OF ESTONIA: "Separation of Powers and Independence of Constitutional Courts and Equivalent Bodies", en *2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice*, Council of Europe, Venice Commission, Rio de Janeiro, Brazil, 2011.

- *The Supreme Court of Estonia. Ius est ars boni et acqui*, Tartu, 2011, [disponible en www.riigikohus.ee/vfs/1264/Riigikohus_broz2011_ENG_www.pdf].

D) Francia

CONSEIL CONSTITUTIONNEL: "Compositions successives et liste des membres du Conseil constitutionnel depuis l'origine", en *Les Cahiers du Conseil Constitutionnel*, núm. 25, 2008, (Ejemplar dedicado a: Dossier 50ème anniversaire), págs. 74-87.

SENAT: "Proposition de Loi Constitutionnelle relative au statut des anciens présidents de la République française", en *Travaux parlementaires, Projets et propositions de loi*, session ordinaire de 2004-2005, texte n° 163, de M. Patrice Gélard et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat et annexe au procès-verbal de la séance du 27 janvier 2005, [disponible en www.senat.fr].

- "Audition du candidat Hubert Haenel proposé par le Président du Sénat à la nomination au Conseil constitutionnel", en *Les comptes rendus de la commission des lois*, mercredi 24 février 2010.

- "Audition du candidat proposé par le Président du Sénat à la nomination au Conseil constitutionnel", en *Travaux parlementaires, Comptes rendus de la Commission des Lois*, mercredi 24 février 2010.

E) Georgia

CONSTITUTIONAL COURT OF GEORGIA: "The Guarantees of the independence of the Constitutional Court", en *2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice, Separation of Powers and Independence of Constitutional Courts and Equivalent Bodies*, Council of Europe, Venice Commission, Rio de Janeiro, Brazil, 2011.

F) Italia

ASSEMBLEA COSTITUENTE: 2ª sc., 2ª sez., 13 gennaio 1947, VIII.

----- 2ª sc., 2ª sez., 14 gennaio 1947, VIII.

----- 2ª sc., 2ª sez., 15 gennaio 1947, VIII.

----- Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana, 31 gennaio 1947.

----- 7 marzo 1947, I.

----- pom. 28 novembre 1947, V.

----- ant. 29 novembre 1947, V.

----- ant. 3 dicembre 1947, V.

CAMERA DEI DIPUTATI: "Proposta di Legge Costituzionale. Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, concernente la sostituzione dei giudici della Corte costituzionale cessati dalla carica", en *Atti Parlamentari*, núm. 167, XIII Legislatura, 9 de mayo de 1996, págs. 1-5, [disponibile en http://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk0500/frontesp/0167.htm].

"Appello di parlamentari ai presidenti di Camera e Senato su Corte Costituzionale e Commissione di Vigilanza RAI", promovida por el grupo político radical, en apoyo a la iniciativa de Marco Pannella, apoyada por 506 parlamentarios, [disponibile en <http://old.radicali.it/view.php?id=130226>].

DOCUMENTI PREPARATORI AL PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: 2ª sc., *Relazione del deputato Piero Calamandrei sul potere giudiziario e sulla Suprema Corte Costituzionale*, [disponibile en http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/II_Sottocommissione/37nc.pdf].

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA: *Il sistema giudiziario italiano*, [disponibile en www.csm.it/documenti%20pdf/SistemaGiudiziarioItaliano.pdf].

G) República Dominicana

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA: Actas de sesiones, [disponibile en www.suprema.gov.do/portada/proceso_eleccionario_cnm.aspx].

H) República de Kosovo

ASAMBLEA: Acta de sesión plenaria P-69, Legislatura III, 15 de mayo de 2009, [disponible en www.kuvendikosoves.org/common/docs/proc/proc_s_2009_05_15_10_al.pdf].

----- Acta de sesión plenaria P-62, Legislatura IV, 31 de mayo de 2012, [disponible en www.assembly-kosova.org/common/docs/proc/proc_s_2012_05_31_10_4265_al.pdf].

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Anuncio de jura y nominación de magistrados constitucionales, 12 de junio de 2009, [disponible en www.president-ksgov.net/?page=2,6,398].

----- Anuncio de la jura y nominación de magistrados constitucionales, 25 de junio de 2012, [disponible en www.president-ksgov.net/?page=2,6,2406].

2.3.- Otra documentación

COMISIÓN EUROPEA: Albania 2011 progress report (SEC(2011) 1205 final), Bruselas, 2011, [disponible en http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/al_report_2011_en.pdf].

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, doc. 4 (OEA/Ser.L/V/II.118), 24 octubre 2003, [disponible en www.cidh.org/countryrep/Venezuela2003sp/indice.htm].

----- Democracia y derechos humanos en Venezuela, doc. 54 (OEA/Ser.L/V/II), 30 de diciembre de 2009, [disponible en www.cidh.org/pdf%20files/VENEZUELA.2009.ESP.pdf].

CONSEJO DE EUROPA: Declaración del Comité de Vigilancia de la Asamblea Parlamentaria (PACE) adoptado el 15 de diciembre de 2005, sobre “la justicia constitucional en Ucrania ‘rehenes de intereses políticos’”, [disponible en <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=948569&Site=COE>].

HUMAN RIGHTS WATCH: Manipulando el Estado de Derecho. Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela, junio de 2004, vol. 16, núm. 3 (B), [disponible en www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0604sp_0.pdf].

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS: Informe de la Misión de Observación Electoral sobre elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia [celebradas el] 16 de octubre de 2011, OEA, Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Observaciones electorales, serie Américas, núm. 74.

RED DE PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA: Veeduría ciudadana al proceso de postulación y preselección de magistrados. Bolivia 2011, 2011, [disponible en

www.participacionyjusticia.net/rpj/images/stories/PDF/veeduriasciudadanas.pdf].

UNITED NATIONS, SECURITY COUNCIL: "Letter dated 26 March 2007 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council: addendum: Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement (S/2007/168/Add.1)", 26 March 2007, [disponible en www.unhcr.org/refworld/docid/4a54bc360.html].

VENICE COMMISSION: *Rapport révisé sur la composition des Cours constitutionnelles* (CDL-JU(1997)010fin), Strasbourg, 1997.

- Opinion 227/2002, on the amendments to the Constitution of Liechtenstein proposed by the Princely House of Liechtenstein (CDL-AD(2002)32), on the basis of comments by Henrik Zahle, Pieter Van Dijk, Jean-Claude Scholsem, adopted at its 53^a plenary session, 13-14, december 2002, Strasbourg, 2002.
- Opinion 405/2006, on the Constitution of Serbia (CDL-AD(2007)004), adopted by the Commission at its 70 plenary session, Venice, 17-18 march 2007, on the basis of comments by C. Grabenwarter, J. Jowell, H. Sushocka, K. Tuori y J. Velaers, Strasbourg, 2007.
- Opinion 392/2006, on the Constitution of Montenegro (CDL-AD(2007)047), adopted by the Venice Commission at its 73 Plenary Session, Venice, 14-15 december 2007, on the basis of comments by Anthony Bradley, Asbjørn Eide, Guido Neppi Modona y Kaarlo Tuori, Strasbourg, 2007.
- Opinion 479/2008, Comments on the draft Law on the Constitutional Court of Montenegro by Aivars Endzins (CDL(2008)074), Strasbourg, 2008.
- Opinion 479/2008, Comments on the draft Law on the Constitutional Court of Montenegro by Harry Gstöhl (CDL(2008)075), Strasbourg, 2008.
- , Opinion 479/2008, Comments on the draft Law on the Constitutional Court of Montenegro by Christoph Grabenwarter (CDL(2008)076), Strasbourg, 2008.
- Opinion 479/2008, on the draft Law on the Constitutional Court of Montenegro (CDL-AD(2008)030), adopted by the Venice Commission at its 76 Plenary Session, Venice, 17-18 october 2008, on the basis of comments by Aivars Endzins, Christoph Grabenwarter, Harry Gstöhl y Jasna Omejec, Strasbourg, 2008.
- Opinion 626/2011, on the draft amendments to the Constitution of Montenegro, as well as on the draft amendments to the Law on Courts, the Law on the State Prosecutor's office and the Law on the Judicial Council of Montenegro (CDL-AD(2011)010), adopted by the Venice Commission at its 87 Plenary Session, Venice, 17-18 june 2011, on the basis of comments by James Hamilton, Guido Neppi Modona y Kaarlo Tuori, Strasbourg, 2011.
- Opinion 647/2011, on the draft amendments and additions to the Law on the Constitutional Court of Serbia (CDL-AD(2011)050corr), adopted by the Venice Commission at its 89 plenary session, Venice, 16-17 december 2011, on the basis of comments by Christoph Grabenwarter, Wolfgang Hoffmann-Riem, Jan Velaers, Strasbourg, 2012.

3.- Disposiciones normativas

3.1.- España

Constitución de 1931.

Constitución española de 1978.

Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales (14/06/1933).

Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial (BOE núm. 11, de 12 de enero de 1980).

Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado (BOE núm. 100, de 25 de abril de 1980. Texto consolidado al 12 de marzo de 2011).

Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (BOE núm. 121, de 10 de junio de 1982).

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 157, de 2 de julio de 1985. Texto consolidado al 12 de abril de 2013).

Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, sobre composición del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial (BOE núm. 155, de 29 de junio de 2001).

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 2001).

Ley Orgánica 2/2004, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004).

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (BOE núm. 172, de 20 de julio de 2006).

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (BOE núm. 68, de 20 de marzo de 2007).

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007).

Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón (BOE núm. 97, de 23 de abril de 2007).

Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE núm. 125, del 25 de mayo de 2007).

Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (BOE núm. 288, de 1 de diciembre de 2007).

Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica Tribunal Constitucional (BOE núm. 268, de 5 noviembre de 2010).

Ley Orgánica 1/2013, de 11 de abril, sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 88, de 12 de abril de 2013).

Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 155, de 29 de junio de 2013).

- Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear (BOE núm. 100, de 25 de abril de 1980. Texto consolidado al 8 de noviembre de 2007).
- Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (BOE núm. 11, de 13 de enero de 1982. Texto consolidado al 11 de marzo de 2010).
- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (BOE núm. 285, de 28 de noviembre de 1997. Texto consolidado al 14 de octubre de 2003).
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE núm. 167, de 14 de julio de 1998. Texto consolidado al 10 de diciembre de 2013).
- Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (BOE núm. 134, de 6 de junio de 2006. Texto consolidado hasta al 21 de abril de 2012).
- Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales (BOE núm. 260, de 31 de octubre de 2006. Texto consolidado al 7 de julio de 2012).
- Reglamento provisional del Congreso de los Diputados, aprobado el día 13 de octubre de 1977 (BOE núm. 256, de 26 de octubre de 1977).
- Reglamento provisional del Senado, aprobado el día 14 de octubre de 1977 (BOE núm. 256, de 26 de octubre de 1977).
- Reglamento del Congreso de los Diputados, aprobado el día 10 de febrero de 1982 (BOE núm. 55, de 5 de marzo de 1982).
- Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, aprobado por acuerdo de 6 de octubre de 1982 (BOE núm. 282, de 24 de noviembre de 1982).
- Reglamento del Senado, aprobado el día 26 de mayo de 1982 (BOE núm. 155, de 30 de junio de 1982).
- Reforma del Reglamento del Senado, de 11 de enero de 1994, en lo que atiende a la potenciación de su función territorial (BOE núm. 16, de 19 de enero de 1994).
- Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican el artículo 49.2 y el Título Noveno (BOE núm. 145, de 17 de junio de 2000).
- Reglamento de organización y personal del Tribunal Constitucional (Texto consolidado con los Acuerdos realizados hasta el 19 de noviembre de 2012).
- Reglamento del Parlamento de Cantabria (Texto consolidado al 11 de junio de 2012).
- Reglamento de Les Corts (Valencianas) (Texto consolidado al 1 de marzo de 2013).
- Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias (Texto consolidado al 5 de enero de 2012).
- Reglamento de la Asamblea de Extremadura (Texto consolidado al 7 de agosto de 2013).
- Reglamento del Parlamento de Cataluña (Texto consolidado al 19 de enero de 2011).
- Resolución de la Presidencia, de 28 de marzo de 2007, sobre adecuación de los nombramientos y designaciones que efectúe el Parlamento de Andalucía al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres

(*Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía*, núm. 634, VII Legislatura, 30 de marzo de 2007, págs. 35071-35072).

Disposiciones complementarias sobre presentación por el Parlamento de Andalucía de candidatos a Magistrado o Magistrada del Tribunal Constitucional a proponer por el Senado (*Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía*, núm. 72, VIII Legislatura, 11 de septiembre de 2008, págs. 11-12).

Normas reguladoras del procedimiento para la designación por el Pleno de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional a presentar ante el Senado (*Boletín Oficial de las Cortes de Aragón*, núm. 76, VII Legislatura, 10 de septiembre de 2008, págs. 4397-4398).

Procedimiento para la designación de candidatos a magistrados (*Boletín Oficial del Parlamento de Canarias*, núm. 94, VII Legislatura, 30 de noviembre de 2007, págs. 1-2).

Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, de 14 de abril de 2008, por el que se aprueban las normas reguladoras del procedimiento para la designación por el Pleno de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional (*Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha*, núm. 43, VII Legislatura, 18 de abril de 2008, págs. 925-926).

Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León por la que se dictan normas sobre el procedimiento a seguir para la presentación de candidatos a Magistrado del Tribunal Constitucional por las Cortes de Castilla y León para su elección por el Senado (*Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León*, núm. 115, VII Legislatura, 19 de septiembre de 2008, págs. 7140-7141).

Resolución relativa á modificación dos mecanismos de nomeamento dos membros do Tribunal Constitucional (*Boletín Oficial do Parlamento de Galicia*, núm. 221, VI Legislatura, 30 de octubre de 2002, pág. 10976).

Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 29 de novembro de 2007, polo que se aproban as Normas reguladoras do procedemento de designación de candidatos ou candidatas a maxistrado ou maxistrada do Tribunal Constitucional para lle presentar ao Senado (*Boletín Oficial do Parlamento de Galicia*, núm. 463, VII Legislatura, 3 de decembro de 2007 (fascículo 1), págs. 70233-70234).

Resolución de la Presidencia estableciendo las normas reguladoras del procedimiento de designación de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional (*Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja*, núm. 35, serie a, VII Legislatura, 19 de septiembre de 2008, págs. 784-785).

Resolución de la Presidencia de la Asamblea, reguladora del procedimiento para la designación de candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional (*Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid*, núm. 84, VIII Legislatura, 11 de septiembre de 2008, págs. 8087-8088).

Resolución de la Presidencia, reguladora del procedimiento para la designación de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (*Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia*, núm. 41, VII Legislatura, 29 de septiembre de 2008, pág. 1885).

Normas para la designación de los dos candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde presentar al Parlamento de Navarra ante el Senado (*Boletín Oficial del Parlamento de Navarra*, núm. 40, VII Legislatura, 17 de diciembre de 2007, pág. 11).

- Resolución de la Presidencia, de 22 de junio de 2007, regulando el funcionamiento y organización del Grupo Parlamentario Mixto (*Boletín Oficial del Parlamento de Navarra*, núm. 1, VII Legislatura, 25 de junio de 2007, pág. 4).
- Normes reguladores del procediment per a la designació de candidats a magistrats del Tribunal Constitucional (*Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears*, núm. 51, VII Legislatura, 12 de setembre del 2008, pág. 1563).
- Real Decreto 301/1980, de 14 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Jerónimo Arozamena Sierra (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1980).
- Real Decreto 302/1980, de 14 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a doña Gloria Begué Cantón (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1980).
- Real Decreto 303/1980, de 14 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Manuel Díez de Velasco-Vallejo (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1980).
- Real Decreto 304/1980, de 14 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Luis Díez Picazo y Ponce de León (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1980).
- Real Decreto 305/1980, de 14 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Manuel García-Pelayo y Alonso (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1980).
- Real Decreto 306/1980, de 14 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Rafael Gómez-Ferrer Morant (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1980).
- Real Decreto 307/1980, de 14 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Ángel Latorre Segura (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1980).
- Real Decreto 308/1980, de 14 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Aurelio Menéndez Menéndez (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1980).
- Real Decreto 309/1980, de 14 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Francisco Rubio Llorente (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1980).
- Real Decreto 310/1980, de 14 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Francisco Tomás y Valiente (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1980).
- Real Decreto 2514/1980, de 7 de noviembre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Ángel Escudero del Corral (BOE núm. 278, de 19 de noviembre de 1980).
- Real Decreto 2515/1980, de 7 de noviembre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Plácido Fernández Viagas (BOE núm. 278, de 19 de noviembre de 1980).
- Real Decreto 52/1981, de 9 de enero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Antonio Truyol y Serra (BOE núm. 12, de 14 de enero de 1981).

- Real Decreto 59/1983, de 15 de enero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Francisco Pera Verdaguer (BOE núm. 14, de 17 de enero de 1983).
- Real Decreto 2709/1983, de 24 de octubre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Manuel Díez de Velasco Vallejo (BOE, núm. 255, de 25 de octubre de 1983).
- Real Decreto 2710/1983, de 24 de octubre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Francisco Rubio Llorente (BOE, núm. 255, de 25 de octubre de 1983).
- Real Decreto 2711/1983, de 24 de octubre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Francisco Tomás y Valiente (BOE, núm. 255, de 25 de octubre de 1983).
- Real Decreto 2712/1983, de 24 de octubre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Antonio Truyol y Serra (BOE, núm. 255, de 25 de octubre de 1983).
- Real Decreto 361/1986, de 21 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Jesús Leguina Villa (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1986).
- Real Decreto 362/1986, de 21 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Fernando García-Mon y González-Regueral (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1986).
- Real Decreto 363/1986, de 21 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Luis María López Guerra (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1986).
- Real Decreto 364/1986, de 21 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1986).
- Real Decreto 365/1986, de 21 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Carlos de la Vega Benayas (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1986).
- Real Decreto 366/1986, de 21 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Eugenio Díaz Eimil (BOE núm. 46, de 22 de febrero de 1986).
- Real Decreto 176/1989, de 21 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Fernando García-Mon y González Regueral (BOE núm. 45, de 22 de febrero de 1989).
- Real Decreto 177/1989, de 21 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don José Luis de los Mozos y de los Mozos (BOE núm. 45, de 22 de febrero de 1989).
- Real Decreto 178/1989, de 21 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don José Vicente Gimeno Sendra (BOE núm. 45, de 22 de febrero de 1989).
- Real Decreto 179/1989, de 21 de febrero, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Álvaro Rodríguez Bereijo (BOE núm. 45, de 22 de febrero de 1989).
- Real Decreto 395/1990, de 15 de febrero, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don José Gabaldón López, Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (BOE núm. 71, de 23 de marzo de 1990).

- Real Decreto 850/1990, de 28 de junio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don José Gabaldón López (BOE núm. 159, de 4 de julio de 1990).
- Real Decreto 816/1992, de 2 de julio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Pedro Cruz Villalón (BOE núm 161, de 6 de julio de 1992).
- Real Decreto 817/1992, de 2 de julio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Julio González Campos (BOE núm 161, de 6 de julio de 1992).
- Real Decreto 818/1992, de 2 de julio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Rafael de Mendizábal Allende (BOE núm 161, de 6 de julio de 1992).
- Real Decreto 819/1992, de 2 de julio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Carles Viver Pi-Sunyer (BOE núm 161, de 6 de julio de 1992).
- Real Decreto 820/1992, de 2 de julio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don José Gabaldón López (BOE núm. 161, de 6 de julio de 1992).
- Real Decreto 528/1995, de 7 de abril, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera (BOE núm. 84, de 8 de abril de 1995).
- Real Decreto 529/1995, de 7 de abril, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Tomás Vives Antón (BOE núm. 84, de 8 de abril de 1995).
- Real Decreto 530/1995, de 7 de abril, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Francisco Javier Delgado Barrio (BOE núm. 84, de 8 de abril de 1995).
- Real Decreto 531/1995, de 7 de abril, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Enrique Ruiz Vadillo (BOE núm. 84, de 8 de abril de 1995).
- Real Decreto 1839/1996, de 24 de julio, por el que se declara el cese de don Francisco Javier Delgado Barrio en sus funciones como Magistrado del Tribunal Constitucional (BOE núm. 179, de 25 de julio de 1996).
- Real Decreto 1840/1996, de 24 de julio, por el que se nombra Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a don Francisco Javier Delgado Barrio (BOE núm. 179, de 25 de julio de 1996).
- Real Decreto 2064/1996, de 13 de septiembre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Pablo García Manzano (BOE núm. 224, de 16 de septiembre de 1996).
- Real Decreto 2166/1998, de 6 de octubre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Pablo Manuel Cachón Villar (BOE núm. 241, de 8 de octubre de 1998).
- Real Decreto 2713/1998, de 16 de diciembre, por el que se nombra Magistrada del Tribunal Constitucional a doña María Emilia Casas Baamonde (BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 1998).
- Real Decreto 2714/1998, de 16 de diciembre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Vicente Conde Martín de Hijas (BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 1998).

- Real Decreto 2715/1998, de 16 de diciembre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Fernando Garrido Falla (BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 1998).
- Real Decreto 2716/1998, de 16 de diciembre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Guillermo Jiménez Sánchez (BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 1998).
- Real Decreto 1218/2001, de 6 de noviembre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Javier Delgado Barrio (BOE núm. 267, de 7 de noviembre de 2001).
- Real Decreto 1219/2001, de 6 de noviembre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Roberto García Calvo (BOE núm. 267, de 7 de noviembre de 2001).
- Real Decreto 1220/2001, de 6 de noviembre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Eugenio Gay Montalvo (BOE núm. 267, de 7 de noviembre de 2001).
- Real Decreto 1221/2001, de 6 de noviembre, por el que se nombra Magistrada del Tribunal Constitucional a doña Elisa Pérez Vera (BOE núm. 267, de 7 de noviembre de 2001).
- Real Decreto 326/2002, de 5 de abril, sobre régimen de nombramiento de los miembros sustitutos del Ministerio Fiscal (BOE núm. 83, de 6 de abril de 2002).
- Real Decreto 1316/2002, de 9 de diciembre, por el que se declara el cese de don Fernando Garrido Falla en sus funciones como Magistrado del Tribunal Constitucional (BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2002).
- Real Decreto 1372/2002, de 18 de diciembre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (BOE núm. 303, de 19 de diciembre de 2002).
- Real Decreto 552/2004, de 16 de abril, por el que se nombra Presidente del Gobierno a don José Luis Rodríguez Zapatero (BOE núm. 93, de 17 de abril de 2004).
- Real Decreto 1404/2004, de 8 de junio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Manuel Aragón Reyes (BOE núm. 139, de 9 de junio de 2004).
- Real Decreto 1405/2004, de 8 de junio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Pablo Pérez Tremps (BOE núm. 139, de 9 de junio de 2004).
- Real Decreto 1406/2004, de 8 de junio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Ramón Rodríguez Arribas (BOE núm. 139, de 9 de junio de 2004).
- Real Decreto 1407/2004, de 8 de junio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Pascual Sala Sánchez (BOE núm. 139, de 9 de junio de 2004).
- Real Decreto 1784/2010, de 29 de diciembre, por el que se nombra Magistrada del Tribunal Constitucional a doña Adela Asúa Batarrita (BOE núm. 8, de 10 de enero de 2011).
- Real Decreto 1785/2010, de 29 de diciembre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Francisco José Hernando Santiago (BOE núm. 8, de 10 de enero de 2011).

- Real Decreto 1786/2010, de 29 de diciembre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Luis Ignacio Ortega Álvarez (BOE núm. 8, de 10 de enero de 2011).
- Real Decreto 1787/2010, de 29 de diciembre, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (BOE núm. 8, de 10 de enero de 2011).
- Real Decreto 58/2011, de 21 de enero, por el que se nombra Presidente del Tribunal Constitucional a don Pascual Sala Sánchez (BOE núm. 20, de 24 de enero de 2011).
- Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Juan José González Rivas (BOE núm. 174, de 21 de julio de 2012).
- Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Andrés Ollero Tassara (BOE núm. 174, de 21 de julio de 2012).
- Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Magistrada del Tribunal Constitucional a doña Encarnación Roca Trías (BOE núm. 174, de 21 de julio de 2012).
- Real Decreto 1118/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Fernando Valdés Dal-Re (BOE núm. 174, de 21 de julio de 2012).
- Real Decreto 1139/2012, de 24 de julio, por el que se nombra Vicepresidente del Tribunal Constitucional a don Ramón Rodríguez Arribas (BOE núm. 177, de 25 de julio de 2012).
- Real Decreto 421/2013, de 12 de junio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Pedro José González-Trevijano Sánchez (BOE núm. 141, de 13 de junio de 2013).
- Real Decreto 422/2013, de 12 de junio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Enrique López y López (BOE núm. 141, de 13 de junio de 2013).
- Real Decreto 423/2013, de 12 de junio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Juan Antonio Xiol Ríos (BOE núm. 141, de 13 de junio de 2013).
- Real Decreto 424/2013, de 12 de junio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Santiago Martínez-Vares García (BOE núm. 141, de 13 de junio de 2013).
- Real Decreto 930/2013, de 29 de noviembre, por el que se nombran Vocales del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Congreso de los Diputados (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 2013).
- Real Decreto 931/2013, de 29 de noviembre, por el que se nombran Vocales del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Senado (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 2013).

3.2.- Otros países

Andorra

Constitución del principado de Andorra de 1993.

Ley Cualificada del Tribunal Constitucional de 1993.

Albania

Constitución de la República de Albania de 1998.

Ley núm. 8577, de 10 de febrero de 2000, sobre la “Organización y Funcionamiento de la Corte Constitucional de la República de Albania”.

Reglamento de la Asamblea de la República de Albania (Texto consolidado al 2011).

Alemania

Ley Fundamental para la República Federal de Alemania de 1949 (Texto consolidado al 2006).

Federal Constitutional Court Act (Texto consolidado a 1998).

Rules of procedure of the Bundesrat (Texto consolidado a 2007).

Rules of procedure of the german Bundestag (Texto consolidado a 2008).

Argentina

Constitución de la Nación Argentina de 1994.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Nación.

Ley 23.774 de 1990. Conformación de la Corte Suprema de Justicia.

Ley 20.581. Procedimiento para la designación de jueces subrogantes.

Ley 26.183. Reducción del número de Jueces que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.

Acordada 17/12/1952. Reglamento para la Justicia Nacional.

Decreto 222/2003, “Procedimiento para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de la Nación Argentina le confiere al Presidente de la Nación para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Marco normativo para la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes”, en *Boletín Oficial de la República Argentina*, núm. 30.175, 20 de junio de 2003, pág. 2, [disponible en www.boletinoficial.gov.ar].

Armenia

Constitución de la República de Armenia de 1995 (Texto consolidado al 27 de noviembre de 2005).

Loi de la République d’Arménie sur la Cour Constitutionnelle (Texto consolidado al 1 de junio de 2006).

Austria

Ley Constitucional Federal de 1920 (B-VG) (Texto consolidado al 2013).

Ley de 25 de enero de 1919, Staatsgesetzblatt (StGBI) núm. 48, [disponible en <http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=sgb&datum=19190004&seite=00000078>].

Ley de 3 de abril de 1919.

Ley Federal del Tribunal Constitucional de 13 de julio de 1921.

Ley del Tribunal Constitucional de 1953 (VfGG) (Texto consolidado a 2013).

Bélgica

Constitution Belge 1994 (Texto consolidado a agosto de 2012)

Loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour Constitutionnelle (Texto consolidado al 6 de enero de 2014).

Bielorusia

Constitution of the Republic of Belarus of the 1994 (Texto consolidado al 2004).

Law of the Republic of Belarus on the Constitutional Court (Texto consolidado a junio de 2009).

Code of the Republic of Belarus on Judicial System and Status of Judges, of June 29, 2006 (Texto consolidado al 2009).

Bolivia

Constitución Política del Estado de 1967.

Constitución Política del Estado de 2009.

Ley núm. 1836, de 1 de abril de 1998, del Tribunal Constitucional.

Ley núm. 3, de 13 de febrero de 2010, de necesidad de transición a los nuevos entes del Órgano Judicial y Ministerio Público.

Ley núm. 18, de 16 de junio de 2010, del Órgano Electoral Plurinacional.

Ley núm. 26, de 30 de junio de 2010, del Régimen Electoral.

Ley núm. 27, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Ley núm. 40, de 1 septiembre de 2010, de adecuación de plazos para la conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Ley núm. 125, de 27 de mayo de 2011, que modificó la Ley del Régimen Electoral.

Ley núm. 212, de 23 de diciembre de 2011, de transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Reglamento interno de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (Resolución núm. 04/2011, de 6 de mayo de 2011, de la Asamblea Legislativa Plurinacional).

Reglamento del régimen especial de propaganda para el proceso de elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (Resolución núm. 127/2011, de 30 de junio, del Tribunal Supremo Electoral).

Reglamento de elecciones de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (Resolución núm. 151/2011, de 15 de julio, del Tribunal Supremo Electoral).

Bosnia-Herzegovina

Constitution of Bosnia and Herzegovina 1995 (Texto consolidado al 2009).

Brasil

Constitución Federal de 1988.

Reglamento Interno del Supremo Tribunal Federal.

Bulgaria

Constitución de la República de Bulgaria de 1991 (Texto consolidado al 6 de febrero de 2007).

Constitutional Court Act (Texto consolidado al 7 de marzo de 2006).

Regulations on the Organization of the Activities of the Constitutional Court (Texto consolidado al 26 de enero de 2001).

Chile

Constitución Política de la República de Chile de 1980 (Texto consolidado al 2011).

Ley de Reforma Constitucional, núm. 20.050.

Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, núm. 17.997 (Texto consolidado al 10 de agosto de 2010).

Código Orgánico de Tribunales.

Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia, de 24 de marzo de 2006.

Auto Acordado del Tribunal Constitucional que regula la postulación y la formación de nóminas de suplentes de Ministro del Tribunal Constitucional, de 4 de noviembre de 2009.

Colombia

Constitución Política de Colombia de 1991.

Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 7/03/1996).

Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes (Ley 5 de 17/06/1992).

Código Contencioso Administrativo de Colombia (Decreto 1 de 2/01/1984).

Reglamento Interno de la Corte Constitucional de Colombia (Acuerdo 5 de 15/10/1992).

Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia (Acuerdo 6 de 12/12/2002).

Costa Rica

Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949 (Texto consolidado al 2003).

Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley núm. 7135 de 11 de octubre de 1989).

Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley núm. 7333 del 5 de mayo de 1993).

Reglamento de la Asamblea Legislativa (Acuerdo núm. 2883 de 9 de marzo de 1994, versión actualizada al 3.01.2011).

Reglamento para la Selección de Magistrados y Magistradas Suplentes en las Salas de la Corte Suprema de Justicia (Aprobado por la Corte Plena en sesión núm. 5-12, celebrada el 13 de febrero de 2012).

Croacia

Constitución de Croacia de 1990 (Texto consolidado a mayo de 2004).
The Constitutional Act on the Constitutional Court of the Republic of Croatia (Texto consolidado a mayo de 2002).

Ecuador

Constitución de la República del Ecuador de 2008 (Texto consolidado al 13 de julio de 2011).
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Reglamento para el proceso de conformación de la Comisión Calificadora que seleccionará y designará a las y los miembros de la Primera Corte Constitucional (Resolución núm. 02-149-CPCCS-2011).
Reglamento para la calificación y designación de Juezas y Jueces que integrarán la Primera Corte Constitucional (Resolución núm. 01-183-2012-CPCCS).

Eslovaquia

Constitución de la República Eslovaca de 1992 (Texto consolidado al 2002).
Act 38/1993 on the Organisation of the Constitutional Court of the Slovak Republic, on the Proceedings before the Constitutional Court and the status of its Judges (Texto consolidado al 2004).
Reglas de Procedimiento del Consejo Nacional de la República Eslovaca (Resolución 350/1996).
Reglamento Electoral sobre elección de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional de la República Eslovaca (Resolución 1737/2006).

Eslovenia

Constitución de Eslovenia de 1991 (Texto consolidado al 2006).
Ley de la Corte Constitucional (Texto consolidado al 2007).

Estados Unidos de América

The Constitution of the United States of America 1787.
Judiciary Act, de 24 de septiembre de 1789.

Estonia

Constitución de la República de Estonia de 1992.
Courts Act, 19 June 2002.
Riigikogu Rules of Procedure and Internal Rules Act (Texto consolidado al 2011).

Reglamento interno del Tribunal Supremo (Texto consolidado al 2009).

El Salvador

Constitución de la República de El Salvador de 1983 (Texto consolidado al 2003).

Ley del Consejo Nacional de la Judicatura (Texto consolidado al 2006).

Ley Orgánica Judicial (Texto consolidado al 2009).

Ley de Procedimientos Constitucionales (Texto consolidado a 1997).

Francia

Constitution du 4 octobre 1958 (Texto consolidado al 2008).

Ordonnance n. 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (Texto consolidado al 20 de abril de 2011).

Loi constitutionnelle n. 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V République.

Loi n. 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Loi organique n. 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Décret n. 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel.

Georgia

Constitution of Georgia of 1995, (Texto consolidado al 27 de diciembre de 2006).

Organic Law of Georgia on the Constitutional Court of Georgia (Texto consolidado al 7 de noviembre de 2008).

Guatemala

Constitución Política de la República de Guatemala de 1985.

Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad de 1986.

Honduras

Constitución Política de Honduras de 1982 (Texto consolidado al 2001).

Ley Orgánica de la Junta Nominadora para la elección de candidatos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 2001.

Ley de organización y atribuciones de los tribunales de 1988.

Ley sobre Justicia Constitucional de 2004.

Reglamento interno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Texto consolidado al 2008).

Hungría

Fundamental Law of Hungary of 2011.

Act CLI of 2011 on the Constitutional Court.

Italia

Costituzione della Repubblica Italiana de 1947.

Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale.

Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

Legge Costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, Modificazione dell'art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.

Legge 11 marzo 1953, n. 87, Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale.

Legge 25 gennaio 1962, n. 20, Norme sui procedimenti e giudizi di accusa.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 1.

Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale (7 ottobre 2008).

Regolamento generale della Corte Costituzionale (10 gennaio 1966 e successive modificazioni).

Reglamento de la Cámara de Diputados (texto originalmente aprobado por la Cámara el 18 de febrero de 1971).

Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario.

Kosovo

Constitución de la República de Kosovo de 2008.

Law n. 03/L-121, on the Constitutional Court of the Republic of Kosovo.

Letonia

Constitución de la República de Letonia de 1996 (Texto consolidado al 8 de abril de 2009).

Constitutional Court Law (Texto consolidado al 1 de diciembre de 2011).

Liechtenstein

Constitution of the Principality of Liechtenstein of 5 October 1921.

Law of 27 november 2003 on the Constitutional Court, (Texto consolidado al 2004).

Macedonia

Constitution of the Republic of Macedonia.

Rules of Procedure of the Assembly.

México

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (Texto consolidado a 2013).

Decreto que reforma los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, primera sección, 31 de diciembre de 1994.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (texto consolidado al 10 de enero de 2014).

Reglamento del Senado de la República (texto consolidado al 5 de marzo de 2013).

Moldavia

Constitución de la República de Moldavia de 1994.

Ley núm. 317-XIII, de 13 de diciembre de 1994 sobre la Corte Constitucional.

Código de Jurisdicción Constitucional núm. 502-XIII, de 16 de junio de 1995.

Montenegro

Constitución de Montenegro de 2007.

Ley de la Corte Constitucional de Montenegro de 2008.

Nicaragua

Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987 (Texto consolidado al 2008).

Ley Orgánica del Poder Legislativo de 2007.

Ley Orgánica del Poder Judicial de 2001.

Ley de Carrera Judicial (Texto consolidado al 2005).

Panamá

Constitución Política de la República de Panamá de 1972 (Texto consolidado al 2004).

Código Judicial de la República de Panamá.

Resolución de Gabinete, núm. 121, de 18 de septiembre de 2009, modificada por la Resolución de Gabinete, núm. 133, de 13 de octubre de 2009.

Resolución de Gabinete, núm. 67, de 19 de abril de 2011.

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional de 1984 (Texto consolidado al 2010).

Perú

Constitución Política de Perú de 1993.

Ley núm. 28301, Orgánica del Tribunal Constitucional (Texto consolidado al 7 de junio de 2012).

Reglamento del Congreso de la República (Texto consolidado a agosto de 2012).

Polonia

Constitución de la República de Polonia de 1997 (Texto consolidado al 2009).

The Constitutional Tribunal Act of 1997 (Texto consolidado al 2011).

Portugal

Constituição da República Portuguesa 1976 (Texto consolidado al 12 de agosto de 2005).

Lei de Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional (Texto consolidado al 2011).

República Dominicana

Constitución de la República Dominicana de 2010.

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (Texto consolidado al 2011).

Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (Texto consolidado al 2011).

Reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura de 2011.

Rumania

Constitución de Rumania de 1991 (Texto consolidado a octubre de 2003).

Law núm. 47 of 1992, on the Organisation and Operation of the Constitutional Court (Texto consolidado a diciembre de 2010).

Rusia

Constitución de la Federación Rusa de 1993 (Texto consolidado al 30 de diciembre de 2008).

Ley Constitucional Federal del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa de 1994 (Texto consolidado al 5 de abril de 2013).

República Checa

Constitución de la República Checa de 1992.

Constitutional Court Act, of 16 June 1993.

Serbia

Constitución de la República de Serbia de 2006.

Law on the Constitutional Court of Serbia.

Rules of procedure of the National Assembly of the Republic of Serbia (Texto consolidado al 2010).

The Law on the National Assembly.

Rules of procedure of the Constitutional Court (Texto de 2008).

Reglamento de organización y funcionamiento de la Corte Suprema de Casación de la República de Serbia (Texto de 2008).

Ucrania

Constitución de Ucrania de 1996.

Law of Ukraine “On the Constitutional Court of Ukraine (Texto consolidado al 10 de octubre de 2010).

Uruguay

Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1967 (Texto consolidado al 31 de octubre de 2004).

Ley núm. 15.750, Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales de 1985.

Reglamento de la Asamblea General Legislativa de la República Oriental del Uruguay de 1999.

Venezuela

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010.

Ley Orgánica del Poder Ciudadano de 2001.

Normas que contiene la estructura organizativa y funcional del Consejo Moral Republicano de 2003.

4.- Tribunas de periódico

AJA FERNÁNDEZ, Eliseo: “La elección de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 17 de junio de 1998.

ÁLVAREZ CONDE, Enrique: “La inocentada navideña del TC”, en *ABC*, 3 de enero de 2008.

ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto: “La renovación del Consejo General del Poder Judicial”, en *El País*, 5 de noviembre de 2001.

ASPAS ASPAS, José Manuel: “La composición del Tribunal Constitucional”, en *El Heraldo de Aragón*, 30 de julio de 2011.

BANACLOCHE PALAO, Julio: “El TC y la filiación política”, en *ABC*, 19 de julio de 2013.

CARRILLO, Marc: “El Senado de las autonomías”, en *El País*, 17 de julio de 2008.

COBO DEL ROSAL, Manuel: “La enfermedad y su remedio anticonstitucional. Sobre la renovación de magistrados del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 10 de junio de 1992.

CODERCH, Pablo Salvador: “Cinco propuestas para el Tribunal Constitucional”, en *El País*, 12 de julio de 2012.

DE ESTEBAN, Jorge: “La renovación del Tribunal Constitucional: una voz disidente”, en *El País*, 20 de marzo de 1983.

- “La renovación del Tribunal Constitucional: una voz disidente/2”, en *El País*, 21 de marzo de 1983.
- GIMBERNAT, Enrique: “Un crimen perfecto”, en *El Mundo*, el 22 de octubre de 2010.
- GONZÁLEZ CASANOVA, José Antonio: “Un catalán en la corte constitucional”, en *El País*, 21 de octubre de 2008.
- NAVARRO VALLS, Rafael: “Un sainete judicial. El caso del magistrado español Andrés Ollero”, en *Zenit*, 24 de agosto de 2012, [disponible en, www.zenit.org/es/articles/un-sainete-judicial].
- OLLERO TASSARA, Andrés: “Religiones razonables”, en *ABC*, 16 de agosto de 2012.
- PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio: “La organización del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 22 de agosto de 1980.
- PÉREZ ROYO, Javier: “A toro pasado”, en *El País*, 31 de julio de 1992.
- “De mal en peor”, en *El País*, 10 de noviembre de 1998.
- “Evitar los disparates”, en *El País*, 17 de junio de 1992.
- “Una mala noticia. La renovación del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 13 de marzo de 1992.
- “Operación cuasi constituyente”, en *El País*, 22 de noviembre de 2008.
- “Fatiga de los materiales”, en *El País*, 2 de octubre de 2010.
- “¿Debe un parlamentario ser magistrado del Constitucional?”, en *El País*, 17 de agosto de 2012.
- “Contra el sentido común”, en *El País*, 19 de julio de 2013.
- RUBIO LLORENTE, Francisco: “La feria de San Miguel”, en *El País*, 29 de septiembre de 2001.
- “Los males del Constitucional”, en *El País*, 1 de agosto de 2012.
- RUIZ ROBLEDO, Agustín: “El complejo de Clausewitz”, en *El País*, 25 de julio de 2013.
- SOLAZÁBAL, Juan José: “Una renovación crucial”, en *El País*, 19 de octubre de 2010.
- SOSA WAGNER, Francisco: “El Tribunal Constitucional y Haydn”, en *El Mundo*, 19 de febrero de 2007.
- “Política y Tribunal Constitucional”, en *El Mundo*, 24 de julio de 2013.
- TORRES MURO, Ignacio: “Magistrados militantes”, en *El Confidencial*, 25 de julio de 2013.

5.- Notas periodísticas

“Antonio Truyol, candidato de UCD y PSOE para el Tribunal Constitucional”, en *El País*, 18 de diciembre de 1980.

AIZPEOLEA, Luis R.: “Almunia condiciona su reunión con Aznar a preacuerdos sobre la justicia y el Constitucional. La entrevista, prevista para el próximo 18 de junio, queda postergada indefinidamente”, en *El País*, 30 de mayo de 1998.

----- CUE. E., Carlos: “Zapatero pedirá a Rajoy que reconsidere sus candidatos al Tribunal Constitucional”, en *El País*, 14 de octubre de 2008.

“Aurelio Menéndez dimite como miembro del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 8 de octubre de 1980.

“Cascos acusa a Felipe González de aferrarse al poder con las designaciones”, en *ABC* (Sevilla), 1 de abril de 1995, pág. 20.

CUÉ, Carlos E.: “El PP presume de mantener al Constitucional prorrogado”, en *El País*, 29 de abril de 2010.

----- “El PP mantiene sus nombres y ‘no impedirá’ el bloqueo”, en *El País*, 25 de mayo de 2010.

DE LA CUADRA, Bonifacio: “Ocho catedráticos, tres magistrados y un abogado, probables miembros del Tribunal Constitucional. UCD y PSOE negocian ‘en bloque’ los doce candidatos”, en *El País*, 16 de diciembre de 1979.

----- “¿Imagen bipartidista?”, en *El País*, 26 de enero de 1980.

----- “El acuerdo UCD-PSOE facilitó la elección de los candidatos al Tribunal Constitucional”, en *El País*, 31 de enero de 1980.

----- “Los diez primeros magistrados constitucionales, fruto del consenso UCD-PSOE”, en *El País*, 12 de julio de 1980.

----- “Aurelio Menéndez: ‘Mi continuación no sería buena para mí ni para el Tribunal’”, en *El País*, 9 de octubre de 1980.

----- “El Congreso no pudo elegir al último magistrado del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 19 de diciembre de 1980.

----- “El Congreso rechazó la modificación socialista a los Presupuestos del Estado. Antonio Truyol, nuevo magistrado del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 30 de diciembre de 1980.

----- “Gimbernat y Rodríguez Aguilera, probables sustitutos de Rubio Llorente y Truyol en el Tribunal Constitucional. La renovación o ratificación de cuatro magistrados del alto órgano jurídico se retrasará hasta febrero”, en *El País*, 25 de enero de 1983.

----- “La oposición parlamentaria rechaza la sustitución de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Dificultades del PSOE para sustituir a Truyol y Rubio Llorente”, en *El País*, 26 de enero de 1983.

----- “El Congreso reelige a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 28 de septiembre de 1983.

----- “El relevo de los conservadores Pera y Escudero pondrá a prueba al Consejo del Poder Judicial”, en *El País*, 31 de octubre de 1985.

----- “El poder judicial elige hoy dos magistrados del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 29 de enero de 1986.

- “De la Vega y Díaz Eimil, nuevos miembros del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 30 de enero de 1986.
- “García-Mon y Jesús Leguina serán elegidos por el Parlamento magistrados del Tribunal Constitucional. Tomás y Valiente, firme candidato a presidir el alto órgano”, en *El País*, 11 de febrero de 1986.
- “El Senado elegirá hoy a Rodríguez Bereijo, Gimeno Sendra y De los Mozos magistrados del Constitucional”, en *El País*, 8 de febrero de 1989.
- “El PSOE comienza la negociación para renovar el Constitucional y renuncia a proponer presidente. Cinco constitucionalistas, cuatro administrativistas y un abogado para cuatro vacantes”, en *El País*, 30 de enero de 1992.
- “Los socialistas ‘olvidan’ que sigue pendiente renovar el Constitucional. Martín Toval afirma que las negociaciones están paradas”, en *El País*, 21 de marzo de 1992.
- “Ruiz-Vadillo es el más firme candidato del Poder Judicial al Constitucional”, en *El País*, 5 de febrero de 1995.
- “Desacuerdos en el CGPJ para elegir un juez del Constitucional”, en *El País*, 8 de febrero de 1995.
- “Ruiz-Vadillo y Delgado Barrio, nuevos magistrados del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 9 de febrero de 1995.
- “El Gobierno piensa en Tomás Vives y Luciano Parejo para renovar el Constitucional, con un mes de retraso”, en *El País*, 21 de marzo de 1995.
- “El Gobierno nombra a Jiménez de Parga y Vives jueces del Constitucional. Álvarez Cascos arremete contra la elección de ambos magistrados”, en *El País*, 1 de abril de 1995.
- DíEZ, Anabel: “El PP y el PSOE dicen que en el Poder Judicial pactado prima la calidad sobre la ideología”, en *El País*, 17 de julio de 1996.
- DíEZ, Anabel: “Una lista de 15 hombres y cinco mujeres”, en *El País*, 17 de julio de 1996.
- “El Poder Judicial elige hoy a García Manzano para el Constitucional”, en *El País*, 11 de septiembre de 1996.
- “Bereijo insta al Senado a acelerar la renovación del Constitucional. Cuatro magistrados deben ser sustituidos”, en *El País*, 13 de mayo de 1998.
- “La minoría del Poder Judicial lleva a Pascual Sala al Constitucional. El Consejo también elige hoy al candidato conservador Rodríguez Arribas”, en *El País*, 14 de abril de 2004.
- “Rodríguez Arribas y Pascual Sala, elegidos para el Constitucional”, en *El País*, 15 de abril de 2004.
- “El Gobierno designa a Pérez Tremps y a Aragón para renovar el Constitucional”, en *El País*, 5 de junio de 2004.

- DíEZ, Anabel: “Populares y socialistas negociarán modificar la ley electoral para ahorrar gastos de campaña. Los conservadores acceden a hablar de la sustitución de un miembro del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 6 de junio de 1990.
- “El PP vota hoy en el Senado al candidato socialista al Tribunal Constitucional”, en *El País*, 30 de junio de 1992.
- CASQUEIRO BARREIRO, Javier: “PP y PSOE tensan al máximo la negociación política para renovar los cargos institucionales. Los populares también

ponen trabas a los candidatos de los nacionalistas catalanes y vascos”, en *El País*, 18 de julio de 2001.

- CASQUEIRO BARREIRO, Javier: “El rechazo socialista a un juez que ocupó cargos en el franquismo rompió el acuerdo con el PP. El PSOE no acepta a Roberto García Calvo como magistrado del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 20 de julio de 2001.
- “El PP y el PSOE rompen hasta septiembre la renovación de cargos institucionales”, en *El País*, 25 de julio de 2001.
- CASQUEIRO BARREIRO, Javier: “El PSOE suspende el pacto para renovar 36 cargos hasta que Rato pida disculpas. El PP considera que las críticas parlamentarias del vicepresidente no afectan al acuerdo”, en *El País*, 5 de octubre de 2001.
- “Zapatero descarta el pacto para renovar los cargos institucionales si Rato no se disculpa. El líder socialista advierte de que no pasará ‘por el aro’ de Rato”, en *El País*, 15 de octubre de 2001.
- CASQUEIRO BARREIRO, Javier: “El Congreso elige magistrado del Constitucional a García Calvo con votos de castigo del PSOE”, en *El País*, 31 de octubre de 2001.
- “Rodríguez-Zapata, candidato de consenso para cubrir una vacante en el Constitucional”, en *El País*, 17 de diciembre de 2002.

EDITORIAL: “El mal consenso”, en *El País*, 1 de febrero de 1980.

- “Los diez candidatos al Tribunal Constitucional, con Suárez”, en *El País*, 5 de febrero de 1980.
- “El Congreso y el Tribunal Constitucional”, en *El País*, 17 de septiembre de 1983.
- “Polémica renovación”, en *El País*, 23 de febrero de 1992.
- “Sin enmienda”, en *El País*, 19 de marzo de 1992.
- “Nueva etapa del TC”, en *El País*, 4 de abril de 1995.
- “Doble vara”, en *El País*, 20 de julio de 2001.

“Escudero del Corral y Fernández Viagas, propuestos para el Tribunal Constitucional”, en *El País*, 8 de noviembre de 1980.

“El día 29, probable elección de Truyol para el Tribunal Constitucional”, en *El País*, 23 de diciembre de 1980.

“El Poder Judicial rechazó a un candidato del Gobierno”, en *ABC*, 30 de enero de 1986.

“Enrique Ruiz Vadillo, firme candidato para ser elegido hoy magistrado del Tribunal Constitucional”, en *ABC*, 8 de febrero de 1995.

“El Poder Judicial aplaza su decisión sobre el ‘caso Moreiras’”, en *El País*, 12 de septiembre de 1996.

“El presidente del Constitucional insta al Senado a renovar el tribunal”, en *El País*, 9 de octubre de 1998.

“El Gobierno nombra a los catedráticos Aragón y Pérez Tremps miembros del TC”, en *ABC*, 5 de junio de 2004.

“El PSOE denuncia el perfil ‘sectario y partidista’ de Enrique López para el TC”, en *ABC*, 7 de junio de 2013.

“El eterno candidato del PP”, en *El Mundo*, 11 de junio de 2013.

“El voto de calidad del presidente del TC ‘salva’ la idoneidad de Enrique López”, en *ABC*, en 11 de junio de 2013.

EUROPA PRESS: “El PSOE negociará con la oposición las vacantes del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 25 de enero de 1986.

----- “Bereijo insta a los partidos a renovar las vacantes del Constitucional”, en *El País*, 22 de junio de 1998.

----- “No logra el consenso necesario. La falta de acuerdo en el CGPJ obliga a posponer ‘sine die’ la renovación de magistrados del TC”, en *La Vanguardia*, 16 de mayo de 2013.

Extracto de la carta donde los magistrados Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, exigen la dimisión de la Presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, en *El País*, 24 de septiembre de 2007.

FABRA, María: “Los cuatro nuevos magistrados del Constitucional inician su mandato”, en *El País*, 13 de junio de 2013.

“Francisco Pera sustituirá a Fernández Viagas en el Tribunal Constitucional”, en *El País*, 31 de diciembre de 1982.

GAREA BARAGAÑO, Fernando; XIMÉNEZ DE SANDOVAL, Pablo: “Alonso: Hay que elegir juristas imparciales”, en *El País*, 9 de octubre de 2008.

----- XIMÉNEZ DE SANDOVAL, Pablo: “De Cospedal: No hay alternativas a Hernando y López”, en *El País*, 9 de octubre de 2008.

----- XIMÉNEZ DE SANDOVAL, Pablo: “El PSOE y el PP aparcen sin fecha la renovación del Constitucional”, en *El País*, 17 de noviembre de 2008.

----- XIMÉNEZ DE SANDOVAL, Pablo: “PP y PSOE dejan pudrir el Constitucional”, en *El País*, 16 de marzo de 2009.

----- “Artimaña del PP para anular la ley”, en *El País*, 3 de septiembre de 2010.

----- “El PP admite que impedirá en el Senado la renovación del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 4 de septiembre de 2010.

----- “La renovación del TC, en manos de Rajoy y Zapatero”, en *El País*, 14 de septiembre de 2010.

----- CuÉ, Carlos E.: “PSOE y PP pactan que López pueda ir al Constitucional por el Congreso”, en *El País*, 30 de septiembre de 2010.

----- “Rajoy tiene listo el vuelco de la mayoría en el Tribunal Constitucional”, en *El País*, 11 de marzo de 2013.

----- “El Poder Judicial abre la vía para el giro conservador en el Constitucional”, en *El País*, 16 de mayo de 2013.

----- “Enrique López, recompensa al juez vinculado al PP”, en *El País*, 7 de junio de 2013.

- FABRA, María: “El voto del progresista Sala aupó al conservador López al Constitucional”, en *El País*, 11 de junio de 2013.
- GUNDÍN, J. A.: “El PSOE sacrificó su progresismo en aras del consenso con la oposición”, en *ABC*, 2 de octubre de 1985.
- “Socialistas y vascos del Senado votaron juntos el vocal del Tribunal Constitucional”, en *ABC* (Sevilla), 12 de febrero de 1986, pág. 13.
- HERNÁNDEZ, José Antonio: “El Poder Judicial reabre su batalla por el Constitucional”, en *El País*, 11 de marzo de 2013.
- “Reuniones, negociaciones y amiguismo”, en *El País*, 7 de junio de 2013.
- GAREA BARAGAÑO, Fernando: “El Poder Judicial designa a Vares y Xiol para el Tribunal Constitucional”, en *El País*, 7 de junio de 2013.
- IBÁÑEZ GONZÁLEZ, Juan: “Principio de acuerdo para elegir a los cinco magistrados por consenso y sin cuotas de partido”, en *El País*, 27 de febrero de 1992.
- VALDECANTOS, Camilo: “El PSOE ultima con centristas e IU una candidatura alternativa a la del PP para el Constitucional. La lista incluye a catedráticos de Madrid, Sevilla y Barcelona”, en *El País*, 6 de junio de 1992.
- “Serra habló con el PP para lograr un acuerdo de última hora sobre la renovación del Constitucional. La descoordinación entre Gobierno y grupo parlamentario retrasó la lista del PSOE”, en *El País*, 25 de junio de 1992.
- VALDECANTOS, Camilo: “Una elección polémica. El Congreso renueva el Constitucional con un retraso de cuatro meses al apoyar la lista del PSOE. González dice que la falta de consenso sobre los candidatos es ‘responsabilidad de todos’”, en *El País*, 26 de junio de 1992.
- “Las candidaturas andaluzas”, en *ABC* (Sevilla), 10 de mayo de 1977, pág. 9.
- “La renovación del Tribunal Constitucional. El Gobierno se decidió por dos catedráticos progresistas”, en *ABC* (Sevilla), 1 de abril de 1995, pág. 20.
- “La falta de acuerdo en el Poder Judicial aplaza la renovación del Constitucional”, en *El País*, 16 de mayo de 2013.
- LÁZARO MARTÍNEZ, Julio: “La presidenta del Constitucional critica al Parlamento por la tardía renovación del Tribunal”, en *El País*, 12 de enero de 1992.
- “El PP propone cinco juristas de prestigio para el Tribunal Constitucional. Castellano, de IU, considera la lista ‘perfectamente asumible’”, en *El País*, 30 de mayo de 1992.
- “Pablo Cachón se perfila como nuevo magistrado del Constitucional por el CGPJ. El juez conservador sustituirá a Ruiz Vadillo”, en *El País*, 30 de septiembre de 1998.
- “El Poder Judicial designa a Pablo Cachón para el Constitucional”, en *El País*, 1 de octubre de 1998.
- MARTÍN, Carmelo: “Tomás y Valiente propone una fórmula de autorrenovación del Constitucional”, en *El País*, 31 de mayo de 1992.

- “El CGPJ propondrá hoy a Rodríguez Arribas y Sala como nuevos magistrados del TC”, en *ABC*, 14 de abril de 2004.
- “El CGPJ, de forma casi unánime, elige a Arribas y Sala nuevos jueces del TC”, en *ABC*, 15 de abril de 2004.

PERAL, María: “Antonio Truyol presenta su renuncia irrevocable al Tribunal Constitucional”, en *ABC*, 7 de diciembre de 1989.

- “Los magistrados designados por el Gobierno monopolizan los cargos del Constitucional”, en *ABC*, 16 de julio de 1992.
- “Ruiz Vadillo y Javier Delgado, nuevos magistrados del TC”, en *ABC*, 9 de febrero de 1995.
- “García Manzano, elegido por mayoría del CGPJ nuevo magistrado del Constitucional”, en *ABC*, 12 de septiembre de 1996.
- “El CGPJ se adelanta a Gobierno y oposición en cubrir las vacantes en el Tribunal Constitucional”, en *ABC*, 1 de octubre de 1998.

PRADERA, Javier: “Manoseos partidistas”, en *El País*, 23 de diciembre de 1998.

“Próxima renovación del tercio del Tribunal Constitucional elegido por el Congreso”, en *El País*, 17 de noviembre de 1982.

RIVAS, Javier: “El PSOE afirma que negociará la renovación del Constitucional”, en *El País*, 23 de abril de 1992.

S.G.: “El PSOE mantendrá la mayoría en el Tribunal Constitucional hasta 1995”, en *ABC*, 27 de febrero de 1989, pág. 17.

SÁNCHEZ, José Antonio: “Llamada de atención del Constitucional a Pons para que se sustituya a Truyol”, en *ABC*, 25 de mayo de 1990, pág. 25.

“Un conservador de autoridad intelectual indiscutida”, en *El País*, 25 de julio de 1996.

VALDECANTOS, Camilo: “El Consejo del Poder Judicial designará el día 15 dos magistrados del Tribunal Constitucional”, en *El País*, 9 de enero de 1986.

- “García Pelayo abandonará el Tribunal Constitucional en febrero, coincidiendo con la renovación de cinco magistrados. Su mandato, improrrogable, concluía el próximo 4 de julio”, en *El País*, 7 de enero de 1986.
- “Landelino Lavilla, propuesto por el PSOE e Izquierda Unida como candidato para el Tribunal Constitucional. Irritación en el PP ante el acuerdo que los socialistas perfilan con grupos minoritarios”, en *El País*, 17 de junio de 1992.
- IBÁÑEZ GONZÁLEZ, Juan: “El PP cree que Pons le engañó en los trámites para la renovación del Constitucional y pide que dimita”, en *El País*, 24 de junio de 1992.

VILLANUEVA, Nati: “El Gobierno nombra a López y González Trevijano para un TC de mayoría conservadora”, en *ABC*, 7 de junio de 2013.

XIMÉNEZ DE SANDOVAL, Pablo: “El Senado no llegará a tiempo para elegir a los jueces del Constitucional. El PP boicotea la renovación del tribunal y el PSOE renuncia a dar la batalla”, en *El País*, 4 de diciembre de 2007.

----- ALTOZANO, Manuel: “El Senado inicia la renovación del Constitucional. Los Parlamentos autónomos tienen dos meses para elegir sus candidatos”, en *El País*, 1 de agosto de 2008.

----- GAREA BARAGAÑO, Fernando: “El Senado planea descartar en el primer filtro a López y Hernando. Socialistas y nacionalistas rechazan a los dos candidatos del PP al Constitucional”, en *El País*, 26 de septiembre de 2008.

----- GAREA BARAGAÑO, Fernando: “La renovación de las instituciones. ‘Deben respetar al Constitucional’. Los juristas candidatos al Tribunal urgen a los partidos a un acuerdo, pero asumen que será después de la sentencia del Estatuto de Cataluña”, en *El País*, 11 de enero de 2009.

----- “Montilla exige a Rojo que inicie la renovación del Constitucional”, en *El País*, 11 de mayo de 2010.

----- “Entrevista: Javier Rojo, Presidente del Senado ‘Ahora queda lo más difícil, la cocina’”, en *El País*, 2 de junio de 2010.

“Xiol y Enríquez, favoritos para entrar en el Tribunal Constitucional”, en *ABC*, 17 de abril de 2013.

YOLDI, José: “Los vocales del Poder Judicial acatan el pacto de los partidos y eligen presidente a Delgado”, en *El País*, 25 de julio de 1996.

6.- Portales de Internet de Salas, Cortes, Tribunales Constitucionales y órganos similares

Albania	www.gjk.gov.al
Alemania	www.bverfg.de
Andorra	www.tribunalconstitucional.ad
Argentina	www.csjn.gov.ar
Armenia	www.concourt.am
Austria	www.vfgh.gv.at
Bélgica	www.const-court.be
Bielorrusia	www.kc.gov.by
Bolivia	www.tcpbolivia.bo
Bosnia-Herzegovina	www.ccbh.ba
Brasil	www.stf.jus.br
Bulgaria	www.constcourt.bg
Chile	www.tribunalconstitucional.cl
Colombia	www.corteconstitucional.gov.co
Costa Rica	http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/
Croacia	www.usud.hr
Ecuador	www.corteconstitucional.gob.ec
EE. UU.	www.supremecourt.gov
El Salvador	www.csj.gob.sv/salaconstitucional.html
Eslovaquia	http://portal.concourt.sk
Eslovenia	www.us-rs.si/en
Estonia	www.riigikohus.ee
Estonia	www.riigikohus.ee
Francia	www.conseil-constitutionnel.fr
Georgia	www.constcourt.ge
Guatemala	www.cc.gob.gt/
Honduras	www.poderjudicial.gob.hn
Hungría	http://mkab.hu
Italia	www.cortecostituzionale.it
Kosovo	www.gjk-ks.org
Letonia	www.satv.tiesa.gov.lv
Liechtenstein	www.stgh.li
Macedonia	www.constitutionalcourt.mk
México	www.scjn.gob.mx
Moldavia	www.constcourt.md
Montenegro	www.ustavnisudcg.co.me
Nicaragua	www.poderjudicial.gob.ni/scons/default.asp
Panamá	www.organojudicial.gob.pa
Perú	www.tc.gob.pe
Polonia	www.trybunal.gov.pl
Portugal	www.tribunalconstitucional.pt
República Checa	www.concourt.cz
República Dominicana	www.tribunalconstitucional.gob.do/
Rumania	www.ccr.ro
Rusia	www.ksrf.ru
Serbia	www.ustavni.sud.rs/page/home/en-GB

Ucrania
Uruguay
Venezuela

www.ccu.gov.ua
www.poderjudicial.gub.uy
www.tsj.gov.ve

7.- Otras direcciones electrónicas

Alianza Ciudadana Pro Justicia (Panamá)	www.alianzaprojusticia.org.pa
Allan R. Brewer Carías, portal personal	www.brewercarias.com
Asamblea de Kosovo	www.assembly-kosova.org
Asociación Española de Letrados Parlamentarios	www.aelpa.org
Asociación por los Derechos Civiles (Argentina)	http://www.adc.org.ar/
Asociación Profesional de la Magistratura	www.magistratura.es
Biblioteca del Congreso, memoria americana (EE. UU)	http://memory.loc.gov
Biblioteca electrónica del Parlamento eslovaco	www.nrsr.sk
Biblioteca Jurídica Virtual, IIJ de la UNAM (México)	www.bibliojuridica.org
<i>Boletín Oficial de la República Argentina</i>	www.boletinoficial.gov.ar
Bundesrat	www.bundesrat.de
Bundestag	www.bundestag.de
Casa de Su Majestad el Rey	www.casareal.es
Centro de Estudios Constitucionales, U. de Talca (Chile)	www.cecuch.cl
Comisión Interamericana de Derechos Humanos	www.cidh.org
Conference European Con Courts	www.confeuconstco.org
Congreso de los Diputados	www.congreso.es
Consejo de Participación Ciudadana (Ecuador):	www.participacionycontrolsocial.gob.ec
Consejo General del Poder Judicial	www.poderjudicial.es
Consejo Nacional de la Magistratura (Rep. Dominicana)	www.suprema.gov.do
Consiglio di Stato (Italia)	www.giustizia-amministrativa.it/
Consiglio Superiore Della Magistratura	www.csm.it/
Diario El País	www.elpais.com
Diario La Razón	www.larazon.com
Diario Oficial de la Federación (México)	www.dof.gob.mx
Forum di Quaderni Costituzionali	www.forumcostituzionale.it
German Law Journal	www.germanlawjournal.com
Gobierno de España	www.lamoncloa.gob.es
Hemeroteca del Diario ABC	www.hemeroteca.abc.es
Human Rights Watch	www.hrw.org
Junta de Andalucía (XXV aniversario):	
www.juntadeandalucia.es/html/especiales/25AniversarioJdA/AJ-25AInicio/index.html	
Junta Electoral Central (España)	www.juntaelectoralcentral.es
Organización Alianza Ciudadana Pro Justicia (Panamá)	www.alianzaprojusticia.org.pa
Parlamento de la República (Serbia)	www.parlament.gov.rs
Parlamento italiano (sección histórica)	http://storia.camera.it/#nav
Parlamento Vasco	www.parlamento.euskadi.net
Partido Nacionalista Vasco	www.eaj-pnv.eu
Portal interinstitucional para consulta de normas (Italia)	www.normattiva.it
Presidencia de la República (Eslovaquia)	www.prezident.sk
Presidencia de la República (Kosovo)	www.president-ksgov.net
Revista Federalismi	www.federalismi.it
Revista para el Análisis del Derecho InDret	www.indret.com
Senado español	www.senado.es
Sénat (Francia)	www.senat.fr
Sistema de Información Jurídica del Gobierno (Austria)	www.ris.bka.gv.at
Tribunal Supremo Electoral (Bolivia):	www.oep.org.bo
United Nations, Security Council	www.unhcr.org